

ORLANDO PLAZA
Coordinador

CAMBIO SOCIAL EN EL PERÚ 1968-2008

Homenaje a Denis Sulmont

Segunda edición



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

CAMBIOS SOCIALES EN EL PERÚ
1968-2008

ORLANDO PLAZA
Coordinador

CAMBIOS SOCIALES EN EL PERÚ 1968-2008

HOMENAJE A DENIS SULMONT

Rolando Ames	Orlando Plaza
Juan Ansion	Diego Ponce de León
Carlos Arámbulo	Gonzalo Portocarrero
Carlos E. Aramburú	Catalina Romero
Carmen Rosa Balbi	Patricia Ruiz Bravo
Eva Bautista	Violeta Sara Lafosse
Omar Coronel	David Sulmont Haak
Francisco Durand	Denis Sulmont
Narda Henríquez	Marcel Valcárcel
Aldo Panfichi	Pablo Vega Centeno

Segunda edición



FONDO
EDITORIAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Cambios sociales en el Perú 1968-2008

Orlando Plaza (coordinador)

© Orlando Plaza (coordinador)

De esta edición:

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012

Av. Universitaria 1801, Lima 32 - Perú

Teléfono: (51 1) 626-2650

Fax: (51 1) 626-2913

feditor@pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe/publicaciones

Cuidado de la edición, diseño de cubierta y diagramación de interiores:

Fondo Editorial PUCP

Primera edición Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas,
Políticas y Antropológicas (CISEPA), octubre de 2009

Segunda edición, marzo de 2012

Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores

ISBN: 978-9972-42-993-4

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-03819

Registro de Proyecto Editorial: 31501361200248

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

Índice

PRÓLOGO	
LA URGENCIA DE LA REFLEXIÓN SOBRE EL CAMBIO SOCIAL	9
PARTE I.	
PRESENTACIÓN GENERAL	13
INTRODUCCIÓN	15
MODERNIDAD Y CAMBIOS SOCIALES: PARADIGMAS HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES EN DEBATE	
<i>Orlando Plaza</i>	31
PARTE II.	
CAMBIOS POLÍTICOS	53
UNA POBLACIÓN DIFERENTE: CINCO DÉCADAS DE CAMBIO DEMOGRÁFICO	
<i>Carlos Eduardo Aramburú</i>	55
CAMBIOS EN LOS VÍNCULOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EN EL PERÚ: 1968-2008	
<i>Aldo Panfichi y Omar Coronel</i>	73
LÍNEAS DE FRONTERA Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PERÚ. DIFERENCIAS SOCIALES Y TENDENCIAS DEL VOTO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES PERUANAS: 1980-2006	
<i>David Sulmont Haak</i>	107
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL PERUANA DEL 2006: DESCONTENTOS Y SATANIZADORES	
<i>Rolando Ames Cobián y Diego Ponce de León</i>	135
MOVILIZACIONES SOCIALES Y PROTESTA REGIONAL: UNA MIRADA RETROSPECTIVA	
<i>Narda Henríquez Ayín</i>	165

PARTE III.

CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS 191

LA CUESTIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CAMBIOS Y RETOS ACTUALES
Denis Sulmont 193

LA GRAVITACIÓN DEL EMPRESARIADO EN LA ERA NEOLIBERAL
Francisco Durand 229

LA RECOMPOSICIÓN DE LAS CLASES MEDIAS Y EL VOTO EN EL PERÚ
Carmen Rosa Balbi Scarneo y Carlos Arámbulo Quiroz 245

PERÚ: PERFIL DE LOS CAMBIOS Y PERMANENCIAS
EN LA SOCIEDAD RURAL (1995-2008)
Marcel Valcárcel 271

NUEVAS ÉLITES URBANAS EN CIUDADES TRADICIONALES: IMPACTOS
GLOBALES EN CAJAMARCA
Pablo Vega Centeno 301

PARTE IV.

CAMBIOS SOCIOCULTURALES 323

HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA FAMILIA
Violeta Sara Lafosse 325

CAMBIO SOCIAL, RELIGIÓN Y SECULARIZACIÓN: UNA MIRADA DESDE LA
ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES
Catalina Romero 347

CULTURA ANDINA: MITOS Y MODERNIDAD
Juan Ansion 371

EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL: LAS PARADOJAS DE LA ESCUELA
Patricia Ruiz Bravo 383

DOS ROSTROS DEL MUNDO POPULAR: PAULINA Y VILMA
Gonzalo Portocarrero y Eva Bautista 409

DE LOS AUTORES 419

PRÓLOGO

LA URGENCIA DE LA REFLEXIÓN SOBRE EL CAMBIO SOCIAL

La construcción de una comunidad académica es un esfuerzo permanente de debate e intercambio de ideas que surgen de investigaciones y experiencias profesionales diversas. No basta solo el esfuerzo individual y la construcción de trayectorias académicas personales, sino que es necesario confrontar, compartir, y deliberar colectivamente para ir plasmando ideas fuerza que nos ayuden a entender mejor el Perú de nuestros días. Guiados por esta necesidad, dos años atrás, sociólogos y antropólogos del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú decidieron, bajo la convocatoria del profesor Orlando Plaza, volver a reunirse para intercambiar trabajos y debatir sobre la problemática de las clases sociales en el Perú. Una problemática crucial pero que, debido a los grandes procesos de transformación vividos por nuestro país en las últimas décadas, requieren volver a repensarse. Producto de este intercambio se publicó un libro con diferentes enfoques sobre esta temática que, además, fue entusiastamente recibido y agotado por colegas y estudiantes de ciencias sociales de todo el país.

El conjunto de trabajos que se presentan en este volumen es la continuación de ese esfuerzo. Coordinado nuevamente por el profesor Orlando Plaza, en mayo de 2008, se realizó un seminario de profesores en el que esta vez se discutió la problemática del cambio social en los últimos cuarenta años en el Perú. Al igual que las clases sociales, la temática del cambio social había sido un tema postergado, dejado de lado por enfoques menos históricos y transversales, y más coyunturales y focalizados. Es por eso que una reflexión sobre los cambios en los arreglos institucionales de orden económico, político y cultural, desde el inicio de la etapa postoligárquica hasta hoy, se hacía indispensable para comprender los problemas y progresos de nuestro tiempo.

Tanto en el primer seminario y en el libro sobre las clases sociales como en este sobre el cambio social, la metodología ha sido la misma. Orlando Plaza ha cumplido un papel clave en esta reflexión, no solo invitando y animando a que los profesores del Departamento presentaran sus trabajos o hipótesis sobre el tema, sino que también ha reunido textos actualizados que abordaron las temáticas seleccionadas desde distintas entradas. Fueron las primeras versiones de estos textos las que sirvieron como referentes teóricos en la elaboración de las ponencias que se discutieron en sesiones de dos días de trabajo colectivo. Tiempo después, con los comentarios de todos, cada profesor pudo terminar los textos que se reúnen en este libro. Se trata pues, como dijo Patricia Ruiz Bravo hace un par de años, de una reflexión colectiva.

No puede ser más pertinente que hoy una reflexión de mediana duración sobre el cambio social en el Perú. Acontece en el mundo la crisis económica más grave desde el *crack* de 1929, el consecuente desplome de la hegemonía neoliberal, la emergencia de la China como una nueva potencia, y una América Latina que, desde diversas rutas, parece buscar nuevas alternativas políticas. En el Perú se conjugan un ciclo de crecimiento económico sostenido, un altísimo número de conflictos sociales de diversos tipos y el gobierno de un partido que pasó de ser el paradigma nacional del populismo a ser el ejemplo más claro de disciplina neoliberal. Más que un tiempo de cambios, un cambio de tiempo. De ahí parte la necesidad de revisar e interpretar el camino que hemos recorrido para poder comprender dónde estamos y cómo nos situamos frente a este auténtico nuevo escenario mundial.

Este seminario fue también una oportunidad para reconocer el trabajo de Denis Sulmont. Él, en sus múltiples trabajos a lo largo de su brillante trayectoria, buscó comprender con rigurosidad y compromiso problemas tan apremiantes como las consecuencias de nuestra particular industrialización, la situación de los obreros y trabajadores, y la promesa de la sociología de las organizaciones de la cual es un impulsor convencido.

Su trabajo y denodado esfuerzo por discutir estos temas fueron fundamentales en la formación de nuestra comunidad académica. Es por eso que este volumen, que representa una nueva etapa de discusión y debate, está dedicado a él.

Nuestra comunidad agradece a todos los profesores y asistentes que participaron en la construcción de este trabajo colectivo. Agradecemos también al equipo que hizo posible el seminario, a la señora Doris Mesones que, una vez más, se encargó de la administración y logística del seminario; a Omar Manky que colaboró con el profesor Plaza a lo largo de todo el proceso que constituyó la reflexión que presentamos; y a Omar Coronel, quien es un apoyo invaluable en las

PRÓLOGO

iniciativas académicas de la Jefatura del Departamento. Por supuesto, a Orlando Plaza le agradecemos, nuevamente, por su iniciativa, dedicación y perseverancia en la construcción y, poco a poco, institucionalización de un espacio de discusión que habíamos perdido y felizmente hemos recuperado.

Aldo Panfichi
Jefe del Departamento de Ciencias Sociales
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, 2009

PARTE I
PRESENTACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

Los trabajos aquí publicados fueron presentados en su primera versión en el II Seminario Interno de Profesores de Sociología que, bajo el nombre de «Cambios Sociales en el Perú: 1968-2008», se realizó en reconocimiento a la trayectoria y aportes académicos del profesor Denis Sulmont los días 6 y 7 de mayo de 2008.

Junto con el objetivo de analizar los procesos de cambio social en el país, el seminario tenía como propósito discutir algunas de las categorías empleadas en ciencias sociales para estudiarlos, con el fin de precisar sus alcances y límites para entender y explicar las transformaciones sociales en sociedades como la nuestra¹.

En concordancia con dichos propósitos, los textos que integran este volumen —que para mayor facilidad de lectura han sido agrupados en tres rubros: cambios sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales—, desde ópticas académicas plurales, dan cuenta de algunas de las transformaciones ocurridas en las instituciones, en la vida de las personas y en la interrelación de ambas esferas en el periodo señalado. Cada artículo aborda el tema del cambio desde un objeto de estudio específico, utilizando críticamente las categorías conceptuales para interpretar los fenómenos estudiados.

La variedad y riqueza de análisis que ofrecen los trabajos —sea que se los aborde individualmente o en conjunto— los hace susceptibles de múltiples y provechosas lecturas. En esta sección, a partir de una lectura de los textos que ha buscado indagar sobre la institucionalidad y las prácticas sociales surgidas después de la caída del orden oligárquico —especialmente los procesos de construcción de comunidad política— y que ha procurado establecer interrelaciones entre los procesos específicos estudiados por cada autor, se presentarán algunas de las

¹ En el siguiente artículo, presento algunos de los aspectos conceptuales sobre el cambio social.

principales modificaciones ocurridas en nuestra sociedad en las últimas cuatro décadas, en los siguientes ámbitos: a) sistema intersocietario y globalización; b) cambios en la estructura poblacional; c) cambios en las redes de interdependencia y en las lógicas económicas; d) cambios sociopolíticos y construcción de la comunidad política; y e) cambios socioculturales: orientación de la conducta, valores e instituciones.

1. SISTEMA INTERSOCIETARIO Y GLOBALIZACIÓN

Durante el periodo que abarcan los estudios, enero de 1968 a abril de 2008, ocurrieron a nivel mundial importantes transformaciones, entre las cuales resaltan las siguientes:

- Reestructuración del capitalismo en pro del acrecentamiento de su tasa de ganancia, lo que implicó el paulatino desmantelamiento del estado de bienestar en los países desarrollados, y la hegemonía de la doctrina neoliberal en la política y práctica económica.
- El problema del pago de la deuda externa y la aplicación de políticas de ajuste estructural en los países subdesarrollados.
- Paso, en las sociedades industrializadas, del modo urbano industrial de desarrollo al modelo informacional, basado en el conocimiento como fuente principal para la producción y para la innovación tecnológica, y en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación para movilizar, en tiempo presente, conocimientos y capitales.
- Caída del muro de Berlín y desarticulación de la Unión Soviética. Redefinición de las categorías políticas y de las ideologías dominantes hasta entonces.
- Fortalecimiento de la Comunidad Económica Europea y constitución de la Unión Europea; proliferación de tratados de libre comercio entre las potencias hegemónicas y los países menos desarrollados; y configuración de tres bloques de países: Asia-Pacífico; Estados Unidos —Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés)—; y Unión Europea.
- Surgimiento de China como potencia económica a nivel mundial y de la India en menor medida.
- Acrecentamiento de la pobreza en los países del tercer mundo.
- Transformación de las pautas culturales, políticas, ideológicas y de consumo, base de intensos debates entre los modernistas y posmodernistas para analizar la etapa actual.

- Intensificación de los lazos de interdependencia asimétricos entre sociedades desiguales en los ámbitos económico, político, cultural, ideológico y tecnológico, que desde los noventa recibe el nombre de «globalización».

Estos cambios han modificado la configuración de los sistemas intersocietarios y afectado directamente las instituciones de los países y la vida cotidiana de las personas.

En el Perú, los cambios afectan los distintos órdenes de la vida social. En el campo económico, a partir de la década de los noventa, a instancia de los organismos multilaterales, se aplicó abruptamente la llamada «política de ajuste estructural», basada en la doctrina neoliberal, codificada por el Consenso de Washington, que, si bien logró equilibrios macroeconómicos, aumentó la pobreza y contribuyó a debilitar el tejido social e institucional. Denis Sulmont explica que estas políticas sirvieron de base para recortar los derechos de los trabajadores, y Durand muestra que impactaron en la desnacionalización de la propiedad empresarial y en el surgimiento de un nuevo grupo de poder económico con fuerte influencia en las políticas estatales. Panfichi y Coronel sostienen que la globalización impacta en los liderazgos políticos, posibilitando, por ejemplo, que los líderes regionales y locales se articulen a redes transnacionales con mayor facilidad que los partidos políticos.

El estudio de Pablo Vega Centeno grafica las transformaciones ocurridas en una sociedad tradicional, Cajamarca, debido a la presencia física, pero sin mayores lazos institucionales o económicos, de una compañía minera globalizada. Su estudio detalla los principales cambios ocurridos en el uso del espacio, en las percepciones y expectativas de los pobladores, y en los criterios de estratificación socioeconómica; los procesos detallados por el autor constituyen un análisis de la interrelación directa entre lo local y lo global, que en muchos estudios recibe el nombre de «glocalización».

2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POBLACIONAL

Aramburú distingue tres etapas —estrechamente relacionadas con los procesos de migración y urbanización— en los cambios demográficos ocurridos en el país en los últimos cincuenta años:

- Explosión demográfica, comprendida entre 1950-1970, caracterizada por la coexistencia de una alta tasa de natalidad con la disminución de la mortalidad.

- Notorio incremento de la población joven en la composición demográfica, desde 1970 al 2007, aproximadamente.
- Paulatino envejecimiento de la población desde el 2007 hacia adelante.

Cada una de estas fases está acompañada por un conjunto específico de demandas sociales: en la primera, se produjo una fuerte presión poblacional por escolaridad, atención a la salud materno infantil y a la nutrición infantil. En la segunda, a lo anterior se agregaron los pedidos de generación de empleo y ampliación de la cobertura de los servicios de salud, educación técnica y universitaria, vivienda, agua, desagüe, y transporte urbano. En la tercera fase se comienzan a enfrentar crecientemente demandas con respecto al aseguramiento en salud, jubilación y cuidados del adulto mayor.

Estas tres fases, explica Aramburú, están atravesadas por procesos migratorios masivos. La redistribución espacial de la población trajo como consecuencia su litoralización y urbanización, lo que implicó que esta, que a lo largo de la Colonia y gran parte de la República estuvo asentada fundamentalmente en los Andes y ostentaba un carácter mayoritariamente rural, se tornara, a partir de 1970, en predominantemente urbana, y desde 1980 se ubicara mayoritariamente en la costa, convirtiéndose Lima en el centro urbano más poblado del país, al albergar a un tercio de la población total.

A estos procesos acompañaron también la emergencia de nuevas formas de pobreza urbana, y la persistencia y profundización de la pobreza rural, acrecentada por la falta de infraestructura vial, energía y servicios. Actualmente, el 72,5% de los pobladores rurales son pobres, frente al 43% de las zonas urbanas, de acuerdo con lo que explica Valcárcel.

Este conjunto de cambios guarda estrecha relación con la creación de nuevos partidos políticos, la emergencia y difusión de ideologías diversas, y con modos diferentes de impulsar la construcción de una comunidad política. El cuadro 1, elaborado sobre la base de los aportes de varios de los artículos, muestra las múltiples relaciones existentes entre las etapas demográficas, los hitos políticos centrales y los regímenes políticos.

3. CAMBIOS EN LAS REDES DE INTERDEPENDENCIA Y EN LAS LÓGICAS ECONÓMICAS

En las últimas décadas, la economía del país ha estado marcada por los procesos de desindustrialización y reprimarización, fruto de las políticas económicas aplicadas, que han debilitado el desarrollo del mercado interno, y han descuidado la mejora de la calidad de la educación, la inversión en infraestructura energética y vial, y en innovación tecnológica.

Cuadro 1
Perú: población, migración, urbanización, regímenes y partidos
(1930-2007)

Etapas demográficas		Año	Proceso de migración Urbanización	Partido	Hitos políticos centrales	Regímenes
I.	Explosión demográfica. Demandas: escolaridad, salud materna y nutrición infantil	1930	Población rural y andina Modernización de haciendas cañeras y declive del gamonalismo	PC-APRA		Oligarquía
		1940	Población rural y andina			
		1950	Población rural y andina	AP-DC	Voto de mujeres	
		1960	Población (-) rural y (-) andina	PPC	Movimientos campesinos	
				Escisión del PC: PC Pro Chino y PC Pro Soviético	Ideologías nacionalistas revolucionarias	
Nueva Izquierda	Ideologías revolucionarias socialistas Reforma Agraria					
II.	Presencia predominante de jóvenes. Demandas de salud, formación técnica y universitaria, empleo, vivienda, transporte urbano.	1970	Población (+) urbana y (+) costeña		Voto de los analfabetos	Militarismo nacionalista 1. ^a etapa: 1968-1975 2. ^a etapa: 1975-1980
		1980	Población (+) urbana y (++) costeña	AP-APRA	Sendero Luminoso	Democracia representativa
		1990	Población (++) urbana y (+++) costeña	Fujimorismo	Derrota de Sendero Luminoso y del MRTA	Autoritarismo neoliberal Democracia neoliberal
III.	Envejecimiento de la población. Aseguramiento en salud, jubilación y cuidados del adulto mayor.	2007	Población (+++) urbana y (+++) costeña		Ideología mundial: neoliberalismo	

Fuente: Artículos de Carlos E. Aramburú, Aldo Panfichi y Omar Coronel; y David Sulmont
 Elaboración propia

Los trabajos muestran que la superación de la dualidad estructural socioeconómica en los ámbitos industrial y agropecuario, y la consolidación y fortalecimiento del mercado interno, son tareas que permanecen vigentes y requieren atención urgente para garantizar la articulación entre los distintos sectores económicos y tipo de productores, en condiciones equitativas y sostenibles.

Al respecto, la información presentada por Durand grafica la gran diferenciación y desigualdad existentes, tanto en número como en aporte al empleo y en valor de la exportación, entre los tres grandes tipos de empresa que caracterizan nuestra economía (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
Empresas en el Perú: tipo, número, empleo y valor de exportación

Tipo de empresa	Número de empresas*		Aporte al empleo*	Valor de exportación**	
	Absolutos	Porcentaje		Absolutos en millones de dólares	Porcentaje
Microempresa	622 209	94,41	53%		
Pequeña empresa	25 938	3,94	7%	221	3,19
Mediana y gran empresa	10 899	1,65	8%	6689	96,81
Total	659 046	100,00		6910	100,00

Fuente: artículo de Francisco Durand en el presente volumen

*2005

**2001

Las diferencias también se expresan en la base tecnológica, los niveles de productividad, acceso al crédito y en las posibilidades de competir en el mercado internacional. A pesar de la dualidad estructural, es importante resaltar las estrategias y luchas emprendidas por los pequeños y microempresarios —sector constituido en parte por grupos nuevos y en parte por profesionales y obreros voluntaria o forzosamente retirados de sus puestos de trabajo— por ingresar y mantenerse en el mercado como productores.

De la lectura del conjunto de textos que integran esta sección, se desprende la importancia de cuatro grandes procesos:

- La desnacionalización de la propiedad de las grandes empresas. Durand informa que ya en el año 2000, de las treinta empresas más importantes

según el volumen de ventas, diecinueve eran multinacionales, las cuales, además, ocupaban nueve de los diez primeros lugares. En la década de los noventa se vendieron —siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington— un importante número de empresas públicas, que fueron adquiridas por capital extranjero. Esto ha significado una pérdida del peso relativo del empresariado nacional —pero no del sector privado empresarial en conjunto— en la formulación de las políticas económicas y la profundización de la línea divisoria entre la producción orientada al mercado interno y la dirigida al mercado externo, acentuada por la carencia de una política económica integral. Como consecuencia, explica Durand, se ha incrementado el poder económico y político de las grandes empresas, especialmente de las multinacionales, «lo que lleva a afirmar que el hecho fundamental de nuestro tiempo es el fortalecimiento del sector privado y la gran empresa» y la configuración en el país de un nuevo poder empresarial.

- Los cambios socioeconómicos han afectado también la situación de la población económicamente activa (PEA) asalariada. De acuerdo con David Sulmont, esta ha disminuido, con respecto a la PEA total, del 46% que alcanzaba en 1981 al 38% en 2006. En concordancia con ese proceso, Denis Sulmont muestra la reducción del número de organizaciones sindicales, y la pérdida de su peso relativo en la vida económica y política del país, debido, entre otras razones, a las medidas de ajuste estructural y al conjunto de dispositivos legales aplicados por el gobierno de Fujimori, que propiciaron el desempleo por cierre y quiebra de fábricas. Como contrapartida, gran parte de las demandas populares comenzaron crecientemente a ser canalizadas por organizaciones de la sociedad civil.
- La reconfiguración de las clases medias. El trabajo de Balbi y Arámbulo explora el impacto que han tenido sobre las clases medias limeñas las políticas económicas aplicadas en las últimas décadas. Los autores sostienen la tesis de que, durante estas últimas décadas, el Estado, a través de sus políticas económicas y del uso de sus recursos, ha sido el principal impulsor de la reconfiguración de la estructura de clases. Su análisis llama la atención, entre otros, sobre dos asuntos claves: en primer lugar, sobre la recomposición de las clases medias, acelerada a partir de los últimos veinte años. En función de su trayectoria histórica, es posible distinguir dos sectores: la clase media tradicional configurada alrededor de los criterios de origen social, estudios superiores, redes de contacto

y del empleo en los sectores públicos y en el privado; y la nueva clase media, basada fundamentalmente en relaciones de mercado moderno y constituida mayoritariamente por migrantes o hijos de migrantes, andinos o costeños, que residen en los denominados conos poblacionales. En segundo lugar, encuentran que decae la situación económica de la primera, en tanto se fortalece y acrecienta la de la segunda. Como consecuencia de este proceso, parte de la clase media tradicional opta por refugiarse en una lógica de estatus, reafirmando sus orígenes sociales y la importancia de los valores aristocratizantes; en tanto que la nueva clase media acentúa la importancia del trabajo —sea manual o intelectual—, la capacidad de gestión e innovación, y el conocimiento y manejo de la lógica del mercado y la ganancia. Afirman, por último, que a pesar de estas diferencias, al momento de ejercer el voto ambos sectores comparten similares opciones políticas, las cuales giran alrededor de los partidos considerados institucionalizados y defensores del mercado moderno.

- En la actividad agraria, tal como lo muestra el cuadro 3 y lo explica Valcárcel en su artículo, también se reproduce y amplía la dualidad estructural, estimulada aún más por las políticas neoliberales aplicadas desde los años noventa, entre a) un sector moderno de productores muy pequeño en número, altamente productivo, vinculado a la tecnología de punta, a la agricultura de riego, a los mercados externos, con acceso al crédito y cercano a la infraestructura vial y; por otro lado, b) un enorme sector de productores cuyas parcelas se encuentran en el rango de menos una a cinco hectáreas, que se caracterizan por su baja productividad, tecnología rudimentaria, practicar la agricultura de secano, y por carecer de acceso al crédito formal, a infraestructura energética y vial, a mercados dinámicos, además de no contar con el apoyo de políticas económicas y sectoriales que atiendan sus demandas y necesidades. El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, elaborado en función de las características e intereses de la agricultura empresarial, corre el riesgo de ahondar aún más la dualidad estructural, de no mediar estrategias y recursos conducentes a impulsar la economía campesina y la pequeña producción agrícola.

Como indica Valcárcel, a la vez que se ha generado un proceso de modernización en la sociedad rural y en la agricultura costeñas, en las zonas de La Libertad, Lambayeque e Ica, principalmente, persiste la pobreza rural, que se concentra, en primer lugar, en la sierra, donde alcanza al 60% de sus habitantes y, en segundo lugar, en la selva, donde cubre al 48% de la población. Los procesos

Cuadro 3
Perú: productores agropecuarios 1994

Agricultura	Productores Unidades agropecuarias	Superficie promedio	Criterio básico	Otras características
Agricultura empresarial				
1. De alta inversión (agricultura intensiva)	1500	Más de 25 ha	Mano de obra asalariada permanente	Sujetos de crédito del sistema bancario Riego tecnificado
2. De mediana inversión	6500	De 20 a 25 ha	Mano de obra asalariada permanente	Acceso a riego
3. De baja inver- sión (mediana agricultura)	15 000	20 ha	Mano de obra asalariada eventual	Acceso a riego
4. Pequeña agricultura (baja inversión)	35 000	5 ha	Mano de obra asalariada permanente	Acceso a riego
Agricultura no empresarial (carácter transicional)				
1. Pequeña agricul- tura mercantil	650 000	1 a 2 ha	Mano de obra familiar más mano de obra asalariada marginal	El mercado es el principal destino de su producción Principalmente secano
Economías campesinas				
1. Campesinos medios	450 000	1 a 2 ha	Mano de obra familiar	El autoconsumo es el principal destino de su producción Principalmente secano
2. Campesinos pobres	423 000	Menos de 1 ha	Mano de obra familiar	El autoconsumo es el principal destino de su producción Principalmente secano

Fuente: Censo Nacional Agrario (CENAGRO)

Elaboración: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

de descentralización del Estado, regionalización y municipalización, están generando cambios en la vida rural y en la actividad agropecuaria, a la vez que la presencia del gran capital, sobre todo minero, es causa de múltiples conflictos medioambientales, que constituyen buena parte del total de los conflictos sociales.

La posibilidad de que estos procesos signifiquen mejoras para la mayoría de la población rural, y no como ahora, un ahondamiento de sus problemas, requiere de la voluntad política del Estado para aplicar una estrategia autocentrada de desarrollo territorial equitativa y sostenible, así como poner en práctica los estándares internacionales para el cuidado del medio ambiente, que incluye el respeto a la vida y a la cultura de las personas.

En síntesis, los estudios muestran nítidamente la persistencia de la dualidad estructural, en la industria y en la agricultura, entre los productores modernos empresariales, que constituyen un pequeño número del total de productores, y los pequeños y microproductores y empresarios que integran la gran mayoría, y que generan un alto porcentaje del empleo en el país. Debido a las políticas económicas implementadas, la dualidad estructural se mantiene y profundiza lado a lado con la desarticulación entre los sectores económicos, y con el débil alcance de los lazos de interdependencia funcional entre los distintos tipos de productores. Para obtener una visión de conjunto conviene recordar que casi tres cuartas partes de la PEA, según Gamero, está constituida por los trabajadores de microempresas, los trabajadores independientes no profesionales, y los trabajadores familiares no remunerados, que se caracterizan por su pobreza y vulnerabilidad económica.

En las últimas décadas, es ostensible la ausencia de estrategias de desarrollo y crecimiento económico sostenibles, y de políticas fundadas en la equidad y en la democracia, conducentes a modernizar el aparato productivo, generar empleo, articular los distintos tipos de unidades productivas existentes en el campo y en la ciudad, e impulsar el fortalecimiento del mercado interno y el aumento de la productividad basado en el uso del conocimiento y no en la mano de obra barata.

4. CAMBIOS SOCIOPOLÍTICOS

Los procesos analizados en los estudios muestran las diferentes estrategias y caminos emprendidos en nuestro país para enfrentar la difícil tarea de construir una comunidad política inclusiva. El problema de los clivajes étnicos raciales, aunque atenuado, continúa vigente y se reproduce en las muy desiguales condiciones socioeconómicas y de vida que caracterizan a los grupos criollo-mestizos

y campesino-indígenas², y en la posibilidad diferenciada de que se atiendan efectivamente sus demandas y se respeten e integren, en las prácticas institucionales y cotidianas, sus visiones políticas y culturales.

La división étnico racial de nuestra sociedad —originada en el orden político colonial, instaurado sobre la división legal entre la república de indios y la república de españoles—, si bien se ha transformado a lo largo del tiempo debido a las luchas, a las prácticas sociales y a los cambios estructurales, persiste aún en las categorías raciales utilizadas cotidiana e institucionalmente para clasificar jerárquicamente personas, y en la pobreza concentrada en los grupos de origen campesino-indígena y en las zonas rurales.

La comunidad política peruana, entendida como comunidad de ciudadanos jurídicamente iguales, se viene construyendo lentamente, a través de conflictos y acuerdos, desde inicios de la República, sin terminar aún de constituirse como tal. En este proceso, destacan en el siglo XX varios hitos entre los cuales se encuentran la emergencia de los primeros partidos modernos —el APRA y el Partido Socialista en los años veinte—; el voto de las mujeres en la década de los cincuenta; el voto de los analfabetos a finales de los setenta³; y la presencia política y terrorista de Sendero Luminoso, a inicios de los ochenta, que retrotrajo los avances impulsados por gremios, partidos y sindicatos, y propició la respuesta autoritaria y dictatorial del régimen fujimorista, que frenó aún más el proceso de construcción de la comunidad política y debilitó y corrompió en gran medida la tenue institucionalidad del país.

No es de extrañar que dados estos procesos, de carácter tanto afirmativo como negativo —con respecto a la construcción de una comunidad política—, cuyas tendencias no están aún totalmente decantadas, y dada la inclusión progresiva y tardía de diversos sectores, especialmente de los analfabetos después de siglos de exclusión cultural y política, se modifiquen los habituales criterios de representación y de distribución de votos en el país; como tampoco debería llamar a sorpresa que sus orientaciones para elegir candidatos expresen, desde sus trayectorias históricas y desde sus condiciones actuales, una búsqueda de inclusión en la comunidad política que no debe confundirse con posiciones antisistémicas.

Rolando Ames muestra en su trabajo que es necesario prestar cuidadosa atención a la importancia creciente de los medios de comunicación en el delineamiento de los escenarios políticos en las coyunturas electorales, distinguiendo su grado

² Según la conceptualización elaborada por Sinesio López (1997) en *Ciudadanos reales e imaginarios*. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas.

³ La mayoría de analfabetos estaba constituida por población campesino-indígena, que tenía como idioma materno el quechua o el aymara y habitaba en las zonas rurales andinas, que son las más pobres del país.

de influencia en Lima Metropolitana y en provincias; y a los factores socioculturales para explicar la orientación al voto de los sectores campesino-indígena y de las zonas rurales. Este último aspecto es central para que el sistema de partidos y la legislación política expresen no solo una lógica formalista, sino también las especificidades sociopolíticas y culturales de la población votante. En esta misma dirección, David Sulmont muestra que existe una correlación dinámica entre las condiciones estructurales —en las que ubica las identidades étnico raciales y la inserción predominante en los mercados tradicional y moderno—, y la orientación al voto de los electores, mediada por la socialización y los partidos políticos. Los votantes insertados en el mercado moderno, independientemente de sus identidades étnico raciales, tienden a votar por el APRA, el Partido Popular Cristiano y los otros partidos institucionalizados, en tanto que los ubicados en los mercados tradicionales usualmente apoyan aquellas candidaturas nuevas que parecieran sintonizar mejor con sus demandas. En definitiva, en las últimas décadas, el corte entre posiciones políticas no se puede explicar solo por razones étnico raciales, sino que es fundamental atender el tipo de mercado —tradicional o moderno— en el que están insertos los votantes.

Narda Henríquez explica que la construcción de una comunidad política inclusiva es parte de las demandas y de las luchas emprendidas por los frentes regionales desde los setenta hasta la actualidad. La búsqueda de inclusión política y el surgimiento de liderazgos no se constriñen a las capitales de las regiones, sino que también abarcan los niveles distritales y locales. Estos procesos plantean nuevos retos a los partidos políticos, pues los obligan a ser más precisos en la formulación de sus programas y propuestas, y a tomar en cuenta a los líderes locales. De su capacidad de respuesta a tales desafíos depende que se produzca la renovación de liderazgos y se fortalezca la relación con los votantes y partidarios, o que aumente la distancia entre los partidos y la población.

Las características centrales de los regímenes políticos son abordadas desde una óptica global por Panfichi y Coronel, para lo cual, utilizando un enfoque estructural, analizan las dificultades y desencuentros producidos en las relaciones entre Estado y sociedad desde los años ochenta hasta la actualidad. Los autores plantean que el distanciamiento entre ambas esferas se debe, entre otras razones, a la incapacidad de la clase política para interpretar y recoger las demandas de la población impulsadas por los procesos de cambio estructural. Concluyen que a pesar de que los vínculos entre Estado y sociedad carecen de fortaleza institucional, en los últimos años, debido a las transformaciones ocurridas, se han diversificado, por lo que actualmente coexisten espacios institucionales con prácticas clientelistas.

5. CAMBIOS SOCIOCULTURALES

Los cambios culturales no solo modifican las categorías cognitivas, los modos de interacción, las prácticas sociales y los universos valorativos y normativos, sino también los contenidos y los modos de expresión de los afectos, emociones y sensibilidades, que se encuentran a la base de las motivaciones de los seres humanos, y que restan o proveen de impulso y energía a sus proyectos de vida y otorgan o quitan significado a su estar en el mundo. En este sentido, los trabajos muestran que, en nuestro país, en las últimas cuatro décadas, las categorías de interpretación del mundo social y de orientación en la vida cotidiana han variado de modo imperceptible pero constante, entre otras, en las siguientes instancias:

a) Estructura de organización y normatividad familiar

En este periodo, dado que la debilidad institucional del país y del mercado interno, y el distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil, no otorgaban soporte efectivo a las personas, la familia ha jugado un papel fundamental en todos los estratos sociales para garantizar a sus miembros un mínimo de estabilidad emocional y para satisfacer sus necesidades básicas; pero, en tanto institución dinámica, tampoco ha resultado ajena a las transformaciones en curso. Al respecto, Violeta Sara Laffosse muestra los cambios ocurridos en las familias en las últimas cuatro décadas, a partir de la comparación entre dos tipos ideales de estructuras familiares: la patriarcal y la democrática. En función de los procesos estudiados, la autora llega a la conclusión de que las familias peruanas, a lo largo del tiempo, han tendido paulatina y crecientemente a adoptar una estructura democrática.

b) Religiosidad y secularización

Los cambios operan también en la esfera de los valores trascendentes que usualmente sirven de base para la orientación de la conducta y para la reafirmación del sentido de realidad de las personas. En este ámbito juega un papel fundamental la religión. Catalina Romero explica, desde un enfoque comparativo con países de similar o mayor grado de industrialización, que en nuestra sociedad, si bien las personas, por un lado, expresan un distanciamiento con relación a las estructuras institucionales de las iglesias, por otro, reafirman la importancia que tienen sus creencias y valores religiosos para su identidad y desenvolvimiento personales y para su entendimiento del mundo. La autora señala que, en nuestro país, la racionalidad con que las personas guían

su conducta en los diversos ámbitos de la vida social no entra en conflicto con la afirmación de los valores espirituales trascendentes; y enfatiza que es necesario tener cuidado cuando se analizan los cambios y la religiosidad de los grupos y personas, en sociedades como las nuestras, para no extrapolar las experiencias y categorías de las sociedades europeas, y para no asumir la historia propia como un caso desviado de la ruta seguida por las sociedades avanzadas.

c) Etnicidad, migraciones, trayectorias ocupacionales y autoestima

Gonzalo Portocarrero nos presenta los procesos de cambio a nivel individual a partir de los relatos de dos mujeres: Paulina, proveniente de Puno, que migró individualmente muy joven a Lima para emplearse como trabajadora del hogar; y Vilma, nacida en Huancayo, traída a Lima desde muy pequeña por sus padres, quienes se instalaron como vendedores de verduras en un mercado de Jesús María, actividad que le sirvió de experiencia para desempeñarse posteriormente como vendedora y luego como empresaria. Ambas, con esfuerzo propio y con colaboración, en el primer caso, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas amigas y, en el segundo caso, de su familia, han construido itinerarios propios, acumulado experiencia y asumido responsabilidades de distinto orden. Paulina, reafirmando su condición de trabajadora del hogar y de mujer perteneciente a los estratos pobres, se ha convertido en lideresa de su gremio, en tanto Vilma ha devenido en empresaria exitosa. Cada una de ellas ha construido un relato propio para dar cuenta de sus trayectorias de vida y tiene sus propias interpretaciones con respecto a sí misma, a sus logros y a las relaciones con los demás, y cada una ha desarrollado su autoestima, utilizando mecanismos diversos: en Paulina, a pesar de sus logros, prima una sensibilidad de la exclusión, y, en Vilma, una estética del triunfo y de la conquista; pero ambas reivindican y practican una ética del trabajo y la responsabilidad.

d) Educación, mitos y racionalidades rurales y urbanas

La educación formal, además de servir de soporte a la reproducción cultural de las sociedades, es uno de los ámbitos centrales para el entrenamiento en el manejo de los sistemas simbólicos y de los modelos y categorías para producir conocimientos, base actual del desarrollo de los países. Juan Ansión, al respecto, a través del análisis de los cambios sufridos por las versiones de los mitos sobre la educación a lo largo del tiempo, y de comparaciones de estas con versiones seculares sobre los mismos tópicos, nos muestra cómo los pueblos de origen campesino-indígena han ido redefiniendo su aproximación cultural a la escuela: si en un principio fue de rechazo en tanto se la veía como un espacio de engaño

y de muerte cultural, luego se tuvo una actitud utilitaria, hasta llegar a la actualidad, en que se reinterpreta en términos positivos su papel y se tiende a revalorarla funcionalmente, sin que ello signifique abandonar los valores culturales propios. En el mismo terreno, Patricia Ruiz Bravo constata, sin embargo, que el aparato institucional no logra generar estrategias y métodos educativos que conecten con las especificidades socioculturales del mundo rural, por lo que muchas veces los maestros, que no cuentan ni con el entrenamiento ni con los instrumentos necesarios, inhiben las habilidades intelectuales y emocionales de los estudiantes, al rechazar su universo cultural, porque no lo entienden, o porque lo consideran una traba para el conocimiento que imparten. Ruiz Bravo nos muestra la otra cara de la moneda, al presentar dos experiencias educativas exitosas, emprendidas por asociaciones civiles, basadas en la cultura, el conocimiento y valores locales.

6. SÍNTESIS

Después de haber pasado revista a los textos que conforman cada una de las dimensiones estudiadas, queda claro que nuestro país está más integrado a los sistemas intersocietarios, y que busca participar activamente en la globalización; pero también queda claro que las estrategias y políticas económicas implementadas por los distintos gobiernos responden a las necesidades e intereses de los sectores más dinámicos, educados y capitalizados del país, los que constituyen una ínfima minoría, con prescindencia de las demandas de las grandes mayorías. Los procesos estudiados evidencian que los recursos estatales y la débil institucionalidad del país no sirven ni protegen a la mayoría de la nación; que el aparato productivo es insuficiente para generar empleo adecuado, que el mercado interno está poco desarrollado, que se amplía y ahonda la dualidad estructural, que la educación es de baja calidad y que se adolece de infraestructura energética y vial, y que en el Estado falta norte político y estrategia autocentrada que marque el rumbo y dé integralidad a las acciones emprendidas.

Pero a la vez los estudios manifiestan que a pesar de todas las carencias y del costo social que producen, incluso en las relaciones interpersonales cotidianas donde las gentes se refugian al interior de sus grupos y desconfían del resto, los actores sociales y los grupos contribuyen día a día con sus propuestas y esfuerzos para ampliar la comunidad política y el mercado moderno. Estos esfuerzos son muy positivos para la sociedad, pero a la larga, si se continúa careciendo de estrategias y políticas de Estado que asuman la realidad de la inmensa mayoría del país, los esfuerzos económicos se convertirán en estrategias de sobrevivencia, y los esfuerzos políticos en desilusión y en mayor fragmentación social y política.

Gracias a las iniciativas y energías de la población, y no de las instituciones, podemos aún decir que hay tiempo para la esperanza y para la acción conjunta: siempre y cuando el Estado, las instituciones y los partidos políticos sean capaces de enmendar rumbos y proponer, a partir de nuestra diversidad, alternativas conjuntas, empezando por perfilar con nitidez la comunidad política inclusiva.

Orlando Plaza
Coordinador

MODERNIDAD Y CAMBIOS SOCIALES: PARADIGMAS HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES EN DEBATE

Orlando Plaza

1. SOBRE EL CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LAS CATEGORÍAS CONCEPTUALES

Los enfoques y conceptos son instrumentos para el análisis, no un reemplazo de la realidad social, pero sin ellos todo intento de abordar sistemática y metódicamente la fluidez de la vida social está condenado al fracaso. Por esta importante razón hay que estar advertidos de que muchos de los términos académicos, definidos con distintos matices por las diferentes escuelas teóricas como, por ejemplo, Estado-nación, mercado, comunidad política, monopolio legítimo de la violencia, ámbitos público y privado, ciudadanía, justicia, libertad, democracia, empleo, trabajo, racionalidad, ciencia, autonomía personal, subjetividad, son a la vez nociones de uso cotidiano, cargadas con diferente significación según sean las condiciones socioeconómicas, de género, edad y etnia de quienes las emplean; y son también categorías jurídico/políticas que, amparadas por la existencia fáctica y simbólica del Estado, definen relaciones intra e intersociedades y otorgan poderes sobre cosas y personas o, en términos de Giddens (1995), sobre recursos de asignación y recursos de autoridad.

Los contenidos de estos términos, además de no ser unívocos, no permanecen inmutables: cambian a lo largo del tiempo, debido a las prácticas sociales cotidianas, a la acción de los organismos institucionalmente encargados de las funciones públicas, a pugnas entre las asociaciones de actores y los organismos reguladores, o entre asociaciones de actores enfrentadas entre sí.

Los sentidos otorgados por los mundos académico, jurídico/político y cotidiano se entrecruzan de múltiples maneras: en ocasiones convergen, en otras se desencuentran y en otras combaten entre sí. En todos los campos sociales, pero especialmente en el político, se produce una lucha simbólica continua en busca de imponer los significados considerados legítimos por cada facción.

Bourdieu (1988), entre otros, llama la atención sobre el principio de incertidumbre que caracteriza a las visiones sobre el mundo social, pues se presentan tantos modos de decirlo y significarlo como posiciones sociales existen.

Las categorías jurídico/políticas, respaldadas por el Estado y el tejido institucional internacional, producen un efecto de realidad e imposición sobre las personas y las sociedades, independientemente de que sus condiciones de existencia correspondan o no a las definidas por la normatividad jurídica. Por ejemplo, las nociones jurídico/políticas de Estado-nación y mercado, que implican la vigencia de determinados arreglos institucionales, la mayoría de las veces se aplican sin mayor discernimiento tanto para caracterizar y gobernar sociedades como para regular las relaciones entre países internamente desiguales y disímiles entre sí.

Asumir como realidad fáctica y universal¹ las definiciones conceptuales y/o jurídico/políticas de Estado-nación o de mercado² —que corresponden relativamente a las características de algunas sociedades— para imponer políticas en lugar de tomar dichos términos como parámetros para establecer tipologías empíricamente fundadas y/o para medir la utilidad y legitimidad de las prácticas institucionalizadas en las sociedades individuales y en los sistemas «intersocietarios», conduce al fundamentalismo ideológico y a menudo al uso de la fuerza, al engaño y la corrupción, como lo ejemplifica dramáticamente la crisis financiera y económica actual, fruto de políticas económicas únicas impulsadas por el neoliberalismo.

En síntesis, dado que toda lucha por imponer un significado al mundo social es también una lucha por los recursos tangibles y no tangibles, cuyo acceso condiciona directamente la calidad de vida de las personas, resulta de suma importancia precisar el modo en que se emplean las categorías así como señalar su carácter instrumental.

2. CAMBIO SOCIAL: PARADIGMAS HISTÓRICO Y CONCEPTUAL

El análisis del cambio social constituye una preocupación central de la sociología desde sus orígenes en Europa, en el siglo XIX. Tanto los enfoques desarrollados

¹ Al respecto, véase Quijano (2001). El autor plantea una interesante tipología de Estados, que sin más son subsumidos por diferentes enfoques bajo la categoría genérica de Estados-nación.

² Las categorías jurídicas, y sus correspondientes estándares para medir y juzgar prácticas sociales, son fruto de pugnas y acuerdos desarrollados a lo largo de los siglos: en ese sentido, aquí no se discute su enorme importancia para la vida social, sino que se busca señalar los graves problemas y sufrimientos que acarrea sobre las personas y sus organizaciones imponer modelos económicos y estrategias políticas, ignorando las características institucionales y organizativas de cada sociedad.

para estudiarlo, como las principales categorías teóricas que empleamos en nuestra disciplina, derivan de las experiencias históricas de las sociedades europeas, en sus múltiples tránsitos de sociedades agrarias a industriales, de feudales a capitalistas, de estamentales a clasistas, de regímenes absolutistas a Estados nacionales. Estos cambios tuvieron distintos orígenes, ritmos y velocidades —varios de ellos insertos en procesos de larga duración—, y se interpenetraron y potenciaron entre sí, modificando radicalmente, a través de varios siglos, la matriz organizacional e institucional previa, la vida cotidiana de las personas y sus sistemas de orientación, valoración y comportamiento.

Los enfoques y los estudios iniciales del cambio social consideraron y entrelazaron dos grandes procesos:

- Las transformaciones seguidas por la humanidad desde su origen hasta el presente de ese entonces. Comte, Marx y Spencer, entre otros, con sus diferentes teorías sobre las etapas o tipos de sociedad, ejemplifican este propósito.
- La especificidad histórica de las transformaciones operadas en las sociedades europeas capitalistas y de la etapa que las caracterizaba —que usualmente denominamos «modernidad»—, marcando las diferencias con los periodos anteriores y con las sociedades contemporáneas.

Los científicos sociales clásicos, como señala Giddens (1994), optaron por privilegiar un elemento único para explicar los cambios y el carácter de la nueva sociedad: Marx, el desarrollo del capitalismo; Durkheim, la división social del trabajo; Weber, los procesos de racionalización, desacralización y burocratización; Tönnies, el paso de la comunidad de valores a la sociedad de intereses; Tocqueville, la ampliación de la comunidad política y la tensión entre libertad e igualdad. De este conjunto de aproximaciones disímiles, pero no lógica ni históricamente incompatibles, surgieron paulatinamente los paradigmas para el análisis del cambio en sociología, uno de cuyos ejes centrales, la dicotomía tradición/modernidad, se usará como parámetro tanto para indicar los cambios al interior de las sociedades específicas como para establecer comparaciones entre ellas.

Del complejo proceso de cambios seguido por las sociedades europeas en su camino hacia la modernidad y sus diversas interpretaciones, se originaron dos paradigmas, fuertemente interrelacionados entre sí, aunque sus respectivos seguidores no siempre fueran conscientes de ello:

- El paradigma histórico construido a partir de la estilización y sobresimplificación de las etapas de cambio —usualmente el acento se coloca en los resultados más que en los procesos— seguidas por las sociedades europeas.

Dicho brevemente, el paradigma sostiene que las fases transitadas por las sociedades industriales constituyen la hoja de ruta y el camino que deberán seguir las no industrializadas³ si quieren alcanzar la modernidad.

El paradigma histórico, la mayoría de las veces despojado de historia, de sujetos, y de antagonismos, contradicciones y conflictos sociales, sirvió y sirve de guía —positiva o negativa— para fundamentar políticas e ideologías.

- El paradigma conceptual se desarrolló a partir de la interpretación de los procesos históricos y de las categorías cognitivas generadas para significarlos, tanto en el ámbito cotidiano como en el institucional. Atraviesa distintas escuelas y posiciones ideológicas disímiles, y es parte constitutiva de la teoría sociológica clásica, cuya fuerte influencia se ha sentido hasta hace pocas décadas, en que se han producido rupturas y debates aún en curso⁴.

La fusión en dichos paradigmas de una visión unilateral de la historia de la humanidad (centrada en las trayectorias de las sociedades europeas) con el análisis —que les concede rango de superioridad sobre las demás— de las especificidades institucionales de las sociedades capitalistas, les otorga inevitablemente un sesgo evolucionista y etnocentrista —todas las sociedades deberán atravesar los mismos estadios seguidos por las más adelantadas— e incorpora en su universo categorial una noción limitada de progreso —civilización o modernidad— definida y medida por los logros de dichas sociedades.

3. MODERNIDAD Y CAMBIO: PROCESOS CENTRALES QUE ENFATIZA LA SOCIOLOGÍA

En concordancia con Giddens (1994), sostenemos el carácter multidimensional de las transformaciones que condujeron a la modernidad. Ubicamos sus inicios a fines del siglo XV, tomando como hito histórico el descubrimiento de América (Quijano, 2000), que marca el origen de lo que Wallerstein (2004) denomina «sistema mundo». Bajo esta perspectiva, la modernidad está marcada, desde sus inicios, por el dominio que sobre las sociedades originarias impusieron las sociedades europeas mediante la conquista violenta y la colonización. Esta relación asimétrica —cuyos centros de decisión económica y política se ubican desde

³ Una versión contemporánea llevada a extremos es el artículo de Francis Fukuyama en «El fin de la historia» y distintas teorías del desarrollo basadas en la corriente de la modernización, como las de Rostow (1974) o Hoselitz (1970).

⁴ Véanse Sztompka (1995); Bendix (1974); Quijano (2001) o Wallerstein (2004).

el comienzo en las metrópolis dominantes— entre sociedades con distintas culturas y formas de organización, poder y recursos, origina que el mismo proceso genere simultáneamente muy desiguales y perdurables consecuencias en cada una de las partes del naciente sistema intersocietario. Por esta razón, en el análisis de los cambios sociales conducentes a la modernidad, conviene distinguir y articular: *a)* las características y resultados que estos procesos adoptan en cada tipo de sociedad, y *b)* la lógica de los procesos globales que surge como fruto de su desigual relacionamiento.

En función a lo anterior, en forma breve y esquemática presentaremos cuatro procesos que usualmente se resaltan en el campo de la sociología para dar cuenta de las profundas transformaciones acaecidas en las sociedades de Europa occidental en su tránsito a la modernidad, y cuyos resultados institucionales y organizativos, a la vez que sirven para caracterizarla, constituyen la base de los paradigmas histórico y conceptual sobre el cambio social: *a)* desarrollo del mercado interno y del capitalismo; *b)* separación del poder público del poder privado; *c)* racionalidad y separación de los ámbitos cotidianos e institucionales del ámbito religioso; y *d)* transformación de la estructura de clases y de los modos de comportamiento individual.

a) Desarrollo del mercado interno y del capitalismo

El desarrollo del mercado interno, proceso indesligable del desarrollo del capitalismo, se refiere al conjunto de modificaciones socioeconómicas ocurridas a partir del siglo XVI que trajo como consecuencia la transformación de las economías locales y rurales en economías nacionales e industriales.

Cuatro modificaciones constituyen el núcleo de este proceso:

- La separación de los productores directos de sus medios de producción y la concentración de la propiedad de dichos medios en pocas manos.
- La conversión de la fuerza de trabajo en mercancía y su intercambio salarial bajo alguna forma de contrato.
- La generalización de la mercancía y de la monetarización en la economía, como base de la producción y el consumo generales.
- La profundización de la división social del trabajo.

Para Marx, en tanto modo de producción específico, el capitalismo se inicia en el siglo XVI, en estrecha relación con las transformaciones internas de las sociedades europeas y con el oro y la plata extraídos de la América colonizada. Para Weber, entendido como acumulación de riquezas basada en el pillaje, la rapiña, la piratería, el robo y el abuso del poder, el capitalismo existía por lo menos desde

hacía tres mil años; para este autor lo que se inicia en el siglo XVI —coincidiendo con las reformas calvinistas— es el capitalismo moderno, orientado a la obtención de ganancias y al lucro económico haciendo uso de medios racionales, metódicos y legítimos. Ambos autores coinciden, además de en la fecha de inicio, en los cuatro puntos señalados líneas arriba, pero discrepan en su valoración.

Resaltan en este proceso los siguientes hitos y etapas:

- Siglos XIV a XVI: fase de acumulación originaria, de acuerdo con Marx.
- Siglo XVI a 1780: capitalismo manufacturero.
- 1780 a 1830: Revolución Industrial, cuyo desarrollo en Inglaterra marca el inicio del capitalismo industrial
- Siglo XIX: propagación de la industrialización en los países europeos, consolidación de los mercados nacionales y de la posición de dominio del capital sobre el trabajo. Modificación de las estructuras productiva y ocupacional de estas sociedades: inicio del predominio del sector secundario, en detrimento del primario; aumento progresivo de los trabajadores fabriles.
- El desarrollo de los mercados internos convirtió a las actividades económicas de producción, distribución, circulación y consumo en un proceso societal, basado en la profundización y creación de redes de interdependencia funcional entre productores y sectores económicos, y elevó la capacidad productiva y la productividad de estas sociedades.
- Con estos procesos se fortaleció y amplió el dominio económico y político que ejercían sobre las demás sociedades, inaugurándose la fase imperialista del capitalismo, y el correspondiente sistema inter-societario que, con modificaciones, caracterizó esta etapa hasta fines de la Segunda Guerra Mundial.
- La consolidación del capitalismo dio origen a teorías —que actualmente cuentan con seguidores— que postulaban que el funcionamiento de la economía no debería ser interferido por el Estado ni por ninguna fuerza extraña al mercado. Como sostiene Polanyi (1992), se concibió, muy equivocadamente, el trabajo y la tierra como mercancías y la economía como un sistema autorregulado, con existencia propia e independiente de la sociedad y del Estado.

b) Separación del poder público del poder privado

Este proceso, cuyas características principales también se configuran a partir del siglo XVI, da inicio al surgimiento de los Estados absolutistas, cuyo posterior desarrollo constituye la base de los modernos Estados-nación.

La estilización de su trayectoria histórica ofrece las siguientes fases:

- Siglos XIII-XV: competencia abierta a falta de un poder central entre señores feudales por obtener la primacía política, y creación de cortes provinciales integradas por señores feudales que reconocían a uno de ellos como primero entre iguales.
- Siglo XVI: inicio de estrategias y luchas conducentes a fortalecer la figura del monarca reconocido por sus iguales, a disminuir el poder de los señores feudales, y a convertirlos de señores de la guerra en cortesanos dependientes del rey.
- Siglo XVII: Tratados de Paz de Westphalia (1648), sustento del llamado «modelo de Westphalia», «que cubre el periodo de la legislación y la regulación internacionales desde 1648 hasta 1945 (aun cuando algunos arguyen que todavía es válido en la actualidad). En el modelo se describe el desarrollo de un orden mundial compuesto de Estados territoriales soberanos en el cual no hay una autoridad suprema: los Estados dirimen sus diferencias en privado y, de ser necesario, por la fuerza; entablan negociaciones diplomáticas, pero hay una cooperación mínima por lo demás; tratan de colocar su propio interés (nacional) por encima de todos los demás; y aceptan la lógica del principio de eficacia, es decir, el principio que a la larga tiene sentido en el mundo internacional; la apropiación se convierte en legitimación» (Held, 2001, p. 8).
- Siglos XVII-XVIII: fortalecimiento de las monarquías absolutistas, fortalecimiento de las cortes reales como lugares de residencia del monarca y de los principales nobles y como núcleo político y administrativo del reino. Unificación y demarcación territorial para ejercer la administración sobre los bienes y el control sobre las personas, desarrollo de un aparato burocrático con personal especializado para ejercer dichas funciones, y concentración de la actividad judicial y la producción jurídica en manos del rey y de sus tribunales especializados⁵.
- 1789: Revolución Francesa, que simbólicamente marca el inicio del moderno Estado-nación, asentado en los principios de soberanía popular,

⁵ Al respecto, véanse Bourdieu (2002) y Elias (1987).

libertad, igualdad y fraternidad entre sus miembros, en el monopolio de la violencia, la legalidad y fiscalidad por parte del Estado y en su carácter territorial. El Estado-nación implica la igualdad jurídica —base de la ciudadanía— de todos sus integrantes y su inclusión en la comunidad política —anteriormente restringida a los miembros de la nobleza—, lo que supuso forjar dicha comunidad en estrecha relación con la construcción de la nación, que en último término es, según opinión de varios autores, una comunidad supraclases basada en elementos comunes reales o ficticios.

- Siglo XIX: paulatinamente, las sociedades europeas y los países de América Latina, una vez lograda su independencia, adoptan el nuevo modelo político. Durante este siglo, y casi hasta la mitad del XX, debido a la política imperialista de los países industrializados, solo existían en el mundo alrededor de cuarenta estados nacionales.

c) Racionalidad y separación de los ámbitos cotidianos e institucionales del ámbito religioso

Weber concede suma importancia al proceso de racionalización, cuyos orígenes ubica en el siglo XVI, para explicar el carácter excepcional, que a su juicio tuvieron el desarrollo del capitalismo y la modernidad europeo-occidental. Habermas (1989, p. 11) precisa que Weber «Como “racional” describió aquel proceso de desencantamiento que condujo en Europa a que del desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo resultara una cultura profana. Con las ciencias experimentales modernas, con las artes convertidas en autónomas, y con las teorías de la moral y el derecho fundadas en principios, se desarrollaron aquí esferas culturales de valor que posibilitaron procesos de aprendizaje de acuerdo en cada caso con la diferente legalidad interna de los problemas teóricos, estéticos y práctico-morales».

Weber (1961 y 2005) además aplica el concepto de racionalización a tres instancias:

- a la organización general de la sociedad, cuyos núcleos centrales de control, Estado y mercado, mediante sus aparatos burocráticos, emplearán para la consecución de sus objetivos poder y ganancia, respectivamente, la racionalidad con arreglo a fines;
- a la producción capitalista, tanto en los aspectos de gestión, administrativos, contables, como en los técnico-productivos, haciendo hincapié en la aplicación de la ciencia; la racionalización de la esfera productiva

propuesta por Weber, entronca con las interpretaciones contemporáneas que buscan dar cuenta de las transformaciones sufridas por el capitalismo en los últimos cincuenta años, especialmente con la de Bell y la sociedad postindustrial, y Castells y el modo de desarrollo informacional;

- a la conducta individual⁶, en la cual destaca el surgimiento de un tipo de conducta metódica y sistemática, guiada por el autocontrol de las emociones, la previsión de las consecuencias de las acciones, la disciplina y la austeridad en el trabajo y en la vida personal.

De modo simplificado, se enumeran a continuación los principales hitos históricos que, en la esfera de la cultura, tomada en sentido amplio, acompañaron a este proceso: Renacimiento; Reforma; Contrarreforma; Ilustración; Romanticismo; y Positivismo.

d) Transformación de la estructura de clases y de los modos de comportamiento individual

De los actores que en el siglo XVI iniciaron estos procesos, y del tipo de vínculos, de relaciones sociales e instituciones que los caracterizaban, surgieron otros muy distintos en el siglo XIX, periodo central de la reflexión sociológica clásica.

Las transformaciones señaladas implicaron también cambios en las relaciones sociales y en los usos, formas de comportamiento y de expresión de los afectos, sentimientos y emociones; en suma, modificaciones en los hábitos, en la sensibilidad y en los modos de conocer, orientarse y comunicarse de las personas. Elias (1987) insiste en señalar que dichos cambios implicaron también una modificación de la estructura psíquica de los individuos, en pro de una mayor injerencia de los mecanismos conscientes de control interno, en desmedro de los resortes impulsivos, en la regulación de la conducta individual.

Los cambios a nivel individual están directamente conectados con las modificaciones en las relaciones sociales, en las redes de interdependencia funcional económicas y políticas, ampliadas y posibilitadas por la institucionalización del Estado centralizado y por la configuración del mercado interno y por los nuevos tipos de asociación entre particulares. Los cambios sociales trajeron como consecuencia la centralización y a la vez la diferenciación y articulación económica, política y social de las modernas sociedades europeas, lo que constituye la matriz específica de la nueva estructura de clases sociales.

Las sociedades modernas dejaron de estar organizadas primordialmente por el estatus para pasar a regirse por un orden fundamentalmente clasista, originado

⁶ Para una comparación al respecto con las tesis de Elias, véase Plaza (2006).

en las relaciones económicas y de estilos de vida, impulsadas por el desarrollo del mercado interno. Como afirma Giddens (1995), la modernidad europea significó el paso de sociedades divididas en clases a sociedades de clases, lo que implica que la existencia, diferenciación, articulación y conflicto de las clases modernas industriales es fruto del relacionamiento entre productores y propietarios de los medios de producción a escala societal, tal como sostenían Marx y Weber, desde sus específicas perspectivas. La configuración de sociedades de clases sociales⁷ y sus correspondientes arreglos institucionales y organizativos, expresión de los cambios sociales, generaron a la par que la diversificación de cosmovisiones del mundo y distintas oportunidades y estilos de vida, organizaciones y asociaciones gremiales y políticas para afirmar y defender los intereses grupales.

Procesos centrales de la modernidad

4. LA INSERCIÓN COLONIAL DE NUESTRO PAÍS EN LA MODERNIDAD Y EN EL SISTEMA INTERSOCIETARIO

Uno de los propósitos, además de los ya señalados, que anima la presente publicación, es invitar a los lectores a contrastar la experiencia histórica de nuestra sociedad con la de los países industrializados tempranamente, con el fin de

⁷ Para una síntesis de las teorías de clases, véase Plaza (2007).

precisar los límites y alcances de los enfoques sobre el cambio social originados en Europa occidental. Para contribuir a ese propósito, en esta parte se dibujará a grandes rasgos las características principales que adquirieron en nuestro país los procesos —ubicación en el sistema intersocietario, mercado interno, comunidad política, racionalización y estructura de clases— que en Europa condujeron a la modernidad y al desarrollo de las teorías del cambio social.

4.1. Inserción del Perú en la modernidad y en los sistemas intersocietarios

La trayectoria histórica y los análisis sobre la posición ocupada por nuestro país dentro del sistema intersocietario mundial —hechos en diversos momentos por diferentes autores⁸—, lo ubican, primero, sujeto colonialmente a España, desde los inicios de la modernidad hasta los años veinte del siglo XIX; luego —como joven Estado-nación—, dependiente económicamente del imperialismo inglés; y desde las primeras décadas del siglo pasado hasta la actualidad, subordinado económica y políticamente a Estados Unidos de América.

Tres etapas del desarrollo del capitalismo, tres estilos de dominación y tres sistemas intersocietarios —con sus correspondientes y diversos modos internos de resistencia y de asimilación— marcan, desde el inicio y desde una posición subordinada, nuestra inserción y participación en los procesos de desarrollo de la modernidad, y la configuración de los ámbitos cotidianos e institucionales de nuestra sociedad.

4.2. Mercado interno

La corona española, a través del gobierno colonial, impuso sobre las poblaciones originarias no solo un dominio —cuyas formas fueron variando a lo largo del tiempo— económico y político directo, sino también cultural y lingüístico, pero a la vez permitió que las poblaciones indígenas mantuvieran un mínimo control sobre sus medios y condiciones de producción para atender su subsistencia; de esta forma, sin tener que enfrentar los costos de reproducción económica y social, podía extraerles mano de obra, tributos y productos, y evitaba que los españoles y criollos acumularan demasiado poder y riqueza, lo que podía inducirlos a buscar su autonomía y a separarse del mandato real.

Ni la corona, ni los grupos dominantes afincados en el territorio peruano tuvieron una estrategia conducente al desarrollo del mercado interno; parte de la producción agropecuaria estuvo orientada por la satisfacción de las necesidades

⁸ Véanse Mariátegui (1928), Prebisch (1967) y los autores de la teoría de la dependencia.

y no por la lógica del mercado; parte de la tierra permaneció en manos de las comunidades —lo que fue motivo de continuos actos de despojos violentos por parte de los españoles y criollos mestizos, y de lucha y levantamientos por parte del campesinado indígena a lo largo de siglos— y la población indígena, que era la mayoritaria, al retener los medios de producción mínimos para posibilitar su subsistencia permaneció como «reserva permanente y disponible de mano de obra», a la cual se le extraía excedente por medio de la coerción política, muchas veces aplicando métodos violentos.

De este modo, en la etapa temprana del capitalismo manufacturero, la lógica económica que se impuso en la Colonia estuvo regida por el lucro y la obtención de ganancia, empleando métodos extraeconómicos y violentos, y monopolizando las actividades mercantiles y la acumulación de oro y plata.

4.3. Comunidad política y orden institucional

La lógica institucional y normativa diseñada para el manejo de los recursos y para el gobierno de las personas nació de las necesidades económicas y de los intereses políticos de la corona española y de sus grupos dominantes, los que muchas veces no coincidían con los grupos dominantes afincados en el Perú. La distancia, la tensión permanente entre el deseo de la corona de ser obedecida, y el deseo de sus súbditos de alcanzar mayor libertad de acción y control sobre los recursos y la ignorancia de la situación sobre la que se legislaba, entre otras razones, contribuyeron para que en el Perú colonial se fueran configurando una lógica de reproducción social y un orden institucional asentados en una mezcla peculiar entre lo normado oficialmente y lo efectivamente ejecutado mediante las prácticas sociales cotidianas de los dominantes y de los dominados.

El aparato político y burocrático del virreinato peruano, organizado y dirigido desde fuera, estaba sometido a los mandatos emitidos por el centro del imperio. La comunidad política existente en la Colonia estuvo configurada por los enviados directos del poder real, y en menor medida, por los hijos de españoles nacidos en el Perú. Ningún otro grupo participaba como tal en la toma de decisiones, o tenía voz en ellas. No hubo pues lugar para la creación de instituciones y organizaciones que posibilitaran integrar a los distintos grupos en una comunidad política, más aún, ello resultaba contrario a la estrategia de la corona española, en la medida en que la práctica y la normatividad política, económica, cultural y social, coloniales, descansaban en la separación legalmente establecida y sancionada entre la república de españoles y la república de indios, que asignaba a cada grupo distintos deberes y derechos y un acceso diferenciado y desigual a los recursos tangibles e intangibles de la sociedad.

4.4. Procesos de racionalización

El proceso de racionalización que en Europa contó con el apoyo disciplinario del calvinismo, las cortes absolutistas y la producción capitalista, en el Perú colonial corrió por cauces distintos. Las instituciones políticas, económicas y educativas centrales, asentadas en ideologías señoriales y de corte religioso, estuvieron dirigidas a atender las necesidades de los grupos hispanos y criollos, y orientadas a reproducir las diferencias con los grupos indígenas y mestizos y a justificar el carácter socialmente degradante del trabajo manual. A pesar de esta exclusión institucionalizada y de las represiones impuestas al desarrollo y expresión de sus modos de vida y cultura, los grupos indígenas, merced a los lazos familiares y a las organizaciones comunales, lograron mantener una cultura local que, arraigada en el respeto a las costumbres y tradiciones, sirvió de orientación a la conducta personal en los distintos ámbitos sociales. De esta forma se fueron asentando diversos patrones orientadores de la conducta y la afectividad de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y étnicas de los grupos. Pero un proceso de racionalización a nivel societal de la producción, e individual, basado en instituciones y redes de interdependencia económicas y políticas, que involucrara al conjunto de la sociedad, no tuvo lugar ni en la Colonia ni en la República.

4.5 Estratificación social basada en el estatus y en la jerarquía señorial

En Europa, la modernidad supuso el paso de una estructura social basada en el estatus a una estructura de clases. En el Perú, la Colonia, hija de la modernidad, instauró y fortaleció una estructura social basada en el estatus y en las jerarquías señoriales, cuyas categorías de división social no fueron solo la propiedad, o la antigüedad o el apellido, sino fundamentalmente los componentes étnicos raciales de los grupos y sus correspondientes valoraciones simbólicas, que reproducían directamente las dicotomías colonizador/colonizado, superior/inferior, blanco/indio.

5. PROPUESTAS ACTUALES PARA EL ESTUDIO DE LOS CAMBIOS SOCIALES

A lo largo del tiempo, los enfoques del cambio social han sufrido transformaciones, debido a diversos cuestionamientos hechos a las teorías clásicas, tanto desde los centros europeos y norteamericanos como desde los latinoamericanos, asiáticos y africanos. La teoría de la dependencia, el enfoque del sistema mundo, los estudios de subalternidad, el enfoque sobre la colonialidad del poder, entre

otros, ejemplifican propuestas alternativas que plantean, a partir de nuestras propias realidades, realizar un doble contraste con las sociedades industriales: por un lado, con las teorías y enfoques generados en esos países y; por otro, con sus trayectorias históricas.

A continuación, se presentan tres cuestiones centrales para el estudio del cambio social que los enfoques alternativos han contribuido a renovar y precisar conceptualmente: *a)* definición de cambio social; *b)* delimitación de la unidad de análisis: aspectos a considerarse; y *c)* conceptualización de la relación individuo-sociedad y el problema de la agencia.

a) Definición de cambio social

Tómese como punto de partida la siguiente definición genérica: cambio es «una sucesión de diferencias en el tiempo en una entidad persistente» (Nisbet, 1979, p. 12). Esta definición permite plantear tres asuntos centrales y problemáticos en los estudios sociológicos del cambio social:

- La forma en que se defina el cambio social guarda estrecha conexión con la manera en que se defina la entidad persistente y viceversa. Los enfoques del equilibrio y del conflicto ilustran el resultado de esta relación desde puntos de vista diferentes.
- En sociología, a primera vista, la entidad persistente sería la sociedad, y sus transformaciones, parciales o de conjunto, constituirían el cambio social. Sin embargo, la noción de sociedad no es unívoca, pues las distintas escuelas suelen privilegiar en sus definiciones, y en ocasiones contraponer, alguno o algunos de sus componentes.
- El cambio social, en tanto sucesión de diferencias en el tiempo, implica el desarrollo de procesos y también de productos, el énfasis en uno u otro aspecto, o en ambos, es también objeto de debate entre los distintos enfoques sociológicos.

Atender estos importantes asuntos en el análisis del cambio social implica, entre otros, considerar metódicamente los siguientes aspectos:

- Es necesario diferenciar y articular las nociones de tiempo cronológico y tiempo social. Este último se refiere a la velocidad, intensidad, y tendencias de los fenómenos sociales: en ocasiones se presentan periodos de relativa calma y aparente inmutabilidad, en tanto que en otras irrumpen, de modo condensado, a gran velocidad y con gran fuerza, transformaciones que parecieran remover todos los cimientos anteriores, y que amenazan con reemplazarlos con el caos permanente. Debido a esta percepción no es de extrañar que

muchas personas tiendan a identificar el cambio con el desorden social, o a confundir los procesos de cambio con sus resultados tangibles.

- El tiempo social está relacionado también con la forma en que las personas usan, perciben y controlan el tiempo cronológico, aspectos que guardan correspondencia con el tejido social en el que están insertas y con la diversidad y número de relaciones y actividades a las que están expuestas, asuntos sobre cuya importancia Elias (1989, pp. 150-155) llama la atención.
- El señalado entrelazamiento entre las vidas individuales y la marcha institucional muestra que las prácticas sociales reproducen el orden social, y a la vez generan modificaciones —imperceptibles o muy notorias, según sea el caso— que son el origen de procesos societales inadvertidos que culminan en productos visibles posteriormente.
- El cambio no es ajeno ni a las personas ni a las sociedades. Orden y cambio son partes constitutivas de las experiencias individuales y de la marcha social: las actividades humanas y sus productos son procesos que transcurren en el tiempo combinando permanencias y rupturas.
- Los cambios no benefician a todos los grupos ni a todas las personas por igual. Este es un asunto que suscita la competencia y el conflicto entre estos, y es también objeto central de la actividad política, en tanto gestión y distribución de recursos, y de la académica, en tanto fuente de conocimientos, interpretación y propuestas.
- Por lo anterior, conviene subrayar que el cambio social en sí mismo no es sinónimo de mejora o de decadencia, de desorden o de innovación. El significado del cambio social es construido y redefinido a lo largo de la historia por grupos en competencia y articulados entre sí.
- Si bien el cambio es una cualidad permanente de la vida social no todos sus componentes se transforman a la misma velocidad ni al mismo tiempo. Por ejemplo, los elementos culturales tardan más en modificarse que los económicos, y estos más que los tecnológicos. Por ello, como precisan Sztompka (1995) y Tilly (1991), no cabe hablar de cambio en singular, sino de cambios en plural, y más aún considerando que las sociedades no son estructuras monolíticas, sino sistemas integrados por múltiples asociaciones de individuos que operan en diversos ámbitos institucionales altamente relacionados pero sin causalidad generativa entre sí.

Los distintos ritmos de cambio de los diversos componentes llevan en ciencias sociales a distinguir entre el corto, el mediano y largo plazo;

o, desde otro ángulo, a diferenciar entre fenómenos de corta, mediana y larga duración.

- Los cambios pueden afectar al conjunto de la organización social, de tal forma que impliquen una reorganización de sus objetivos y medios predominantes, lo que usualmente se define como cambios del sistema social o pueden circunscribirse a determinados ámbitos o dimensiones de la sociedad, lo que habitualmente se designa como cambios al interior del sistema social⁹.

Vistos los puntos anteriores, para fines prácticos consideraremos cambio del sistema social a los cambios que impliquen transformaciones sustanciales en los arreglos institucionales y organizativos específicos (fines y medios), que caracterizan a una sociedad a lo largo del tiempo y que implican por lo tanto una modificación de su lógica de reproducción. Dentro de esta perspectiva, nos referimos a cambios sociales dentro del sistema a las modificaciones que se operan sin alterar la lógica de reproducción general que lo caracteriza.

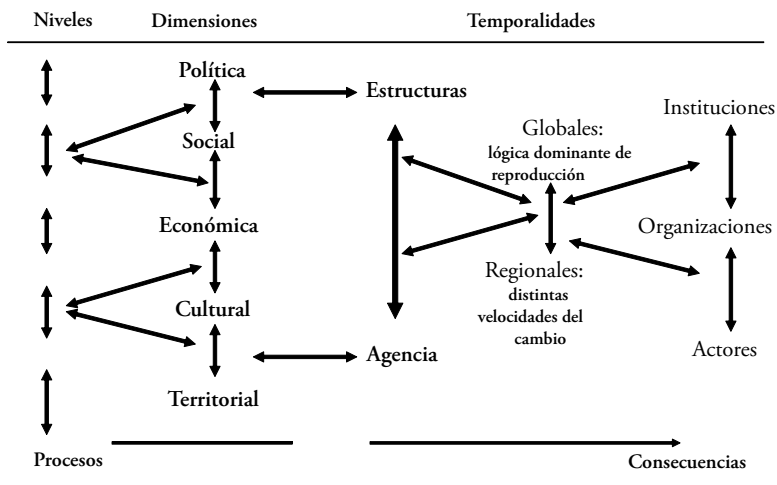
b) Delimitación de la unidad de análisis: aspectos a considerarse en el estudio del cambio social

De acuerdo con lo planteado, un estudio del cambio social requiere precisar las dimensiones de análisis (tecnología, economía, estructura social, demografía, cultura, política); la temporalidad cronológica y social; la relación entre las vidas individuales y las esferas institucionales; los ritmos y duración de los fenómenos; y delimitar conceptual y fácticamente la entidad bajo estudio.

Para fines prácticos, proponemos tomar inicialmente como entidad o unidad de análisis a la sociedad delimitada por los linderos geográficos y sociohistóricos que se asignan contemporáneamente a los Estados-nación. Si bien esta es una decisión práctica, es también problemática —y por eso la asumimos—, debido, entre otras, a dos razones: la primera es que se requiere, de acuerdo con lo expuesto, definir no solo conceptual sino sociohistóricamente la cualidad, naturaleza y funcionamiento del Estado-nación en la sociedad bajo estudio —asunto que es materia de los textos aquí presentados—; y la segunda es que la existencia, por ejemplo, de la que hoy denominamos «sociedad peruana» no se reduce solo a la temporalidad del Estado-nación, sino que abarca varios siglos atrás, dependiendo de los criterios que se apliquen para realizar los cortes en el tiempo.

⁹ Véanse Sztompka (1995); Castells (1997) y Giddens (1995). Castells (1997) llama «transformación de un modo de producción» cuando se operan cambios en fines y medios, y «reestructuración» cuando permanecen los fines y se modifican los medios.

Cuadro 1
Principales dimensiones y aspectos a considerarse
en el estudio del cambio social en sociología



Adicionalmente, las sociedades no son entidades discretas sino continuas, cuyos bordes, como dice Giddens (1995), son porosos y están interpenetradas por otras entidades que a la vez que inciden, a través de sus prácticas y recursos en su marcha, también reclaman su propia delimitación. Esto es, las sociedades no existen aisladas unas de las otras, sino que forman parte de sistemas intersocietarios, cuya amplitud, características, y densidad de vínculos varían a lo largo de la historia.

Los sistemas intersocietarios están integrados por sociedades que ocupan distintas posiciones interrelacionadas de modo asimétrico debido a su desigual acceso a los recursos tangibles y no tangibles existentes en el periodo histórico dado. Estos sistemas son campos de fuerza, pues imponen sobre sus integrantes una lógica de funcionamiento y reproducción; y son campos de lucha, en tanto sus visiones del mundo y sus prácticas no están inexorablemente determinadas por la estructura de posiciones relacionales, y se caracterizan por la competencia y el equilibrio inestable de poder (Elias, 1987b; Bourdieu 2002).

La existencia de los sistemas intersocietarios requiere que el análisis del cambio atienda las siguientes cuestiones:

- Definir el ejercicio específico del poder entre sociedades: imperialismo, colonialismo y los mecanismos empleados para ejercer distintas formas de imposición y subordinación de unas sobre otras, así como las diversas estrategias y modos de resistencia utilizados para enfrentar la dominación.

- Distinguir, en relación con el punto anterior, entre sociedades autónomas y heterónomas. Weber (2002) indica que, a diferencia de las primeras, las segundas se caracterizan porque el centro del poder y de las decisiones se encuentra fuera de ellas, lo cual, agregaríamos, depende claramente de la posición que ocupen en el sistema intersocietario.
- Considerar que la diferenciación entre aspectos endógenos y exógenos del cambio es una cuestión relativa que requiere precisión y cuidado, pues si bien se están estudiando entidades relacionadas desigualmente entre sí, no se debe olvidar que las interrelaciones no anulan las especificidades de las sociedades particulares ni las responsabilidades de los actores sociales que las integran.
- Considerar, en función del punto anterior, además de la posición que ocupan en los sistemas intersocietarios, los dos siguientes aspectos de las sociedades específicas: *a)* los arreglos organizativos e institucionales y *b)* la lógica de reproducción que las caracteriza.

Prestar atención a estos dos aspectos implica, respectivamente, analizar: *a)* en los diversos campos sociales que integran las sociedades, las redes de posiciones, la distribución y uso de los recursos y los correspondientes universos simbólicos y prácticas sociales; y *b)* el funcionamiento y organización de conjunto como resultado del modo en que se diferencian, articulan, combinan y colisionan los campos sociales.

c) Conceptualización de la relación individuo-sociedad y el problema de la agencia en el cambio social

Las distintas escuelas sociológicas se distinguen por emplear enfoques alternativos que usualmente siguen líneas divisorias dicotómicas: equilibrio/conflicto; permanencia/cambio; comunidad/sociedad; subjetividad/objetividad; determinismo/autonomía; estructura/agencia; valores compartidos/intereses particulares; cultura/base material.

Las dicotomías provienen, principalmente, de las diferentes maneras en que se postula la relación entre los individuos particulares y la organización societal que los cobija, y del modo en que se afirma o niega existencia propia y distinta a cada uno de estos aspectos.

En función de lo anterior, Giddens (1987) clasifica las escuelas sociológicas en dos corrientes principales: *a)* Las corrientes estructuralistas —bien sean tributarias del enfoque del equilibrio o del conflicto— suelen otorgar a la sociedad realidad objetiva, dinamismo propio y mecanismos de autorregulación, con independencia

de los sujetos que la integran. Bajo esta perspectiva, tanto las causas como la agencia de los cambios sociales provienen del sistema social autorregulado. *b)* Las corrientes hermenéuticas ponen el énfasis en la autonomía de los sujetos, subrayando sus cualidades de entendimiento, conciencia, afectividad y producción de significados. Aunque no desconocen la existencia de las instituciones y organizaciones, no les otorgan especial atención, en tanto enfatizan que son las personas las que mediante sus acciones producen resultados. Aquí, la agencia del cambio está concentrada en los agentes o actores sociales.

Con respecto al tema del cambio social, estas dos corrientes mantienen un largo debate en el campo de la sociología que dicho en forma simplificada gira alrededor de tres cuestiones: *a)* determinar si la economía o la cultura constituye el factor clave para explicar el funcionamiento y transformación de la sociedad; *b)* determinar si el factor seleccionado es el origen o no de las otras dimensiones de la sociedad; y *c)* precisar el papel y el grado de libertad de los actores sociales.

Para algunos autores, el cambio social tiene como origen un solo factor, bien cultural o bien económico —lo que se conoce como monocausalidad— en tanto que para otros el cambio social tiene un origen multicausal. La multicausalidad no significa necesariamente que todas las dimensiones tengan el mismo peso en el funcionamiento de las sociedades. Bell, Bourdieu y Castells, por ejemplo, sostienen que la dimensión económica tiene mayor peso o centralidad que las otras, pero no determina el comportamiento de estas ni es la fuente de su existencia.

En la actualidad, existen enfoques teóricos (Quijano, 2001; Bourdieu, 2002; Elias, 1987; Giddens, 1995) que buscan integrar, desde distintos ángulos, los aportes provenientes de ambas corrientes. A continuación, se presentan brevemente algunos aportes de estos enfoques dirigidos a la superación de la dicotomía individuo-sociedad y a lograr una mejor definición de sus estatus específicos:

- La sociedad no es una realidad dada, objetiva y externa a los sujetos. Por el contrario, es el conjunto de múltiples relaciones y redes de interdependencia que los seres humanos establecen en los distintos ámbitos de actividades o campos sociales que la integran.
- Los campos sociales, en términos de Bourdieu (1988), se organizan alrededor de los tipos de capitales que caracterizan a las sociedades contemporáneas: educacional, cultural, económico, social. Los campos corresponden en parte con los ámbitos institucionales especializados fruto de la división social del trabajo en la modernidad, y con las dimensiones de análisis que se suelen considerar en metodología sociológica (política, económica, cultural, social). Los campos están constituidos por redes

de interdependencia funcional entre personas, según Elias; o por redes de posiciones relacionadas y diferenciadas entre sí, de acuerdo con el monto de capital que se posea en cada campo. Son campos de fuerza en la medida en que, si los integrantes quieren permanecer en el campo, están obligados a seguir la normatividad vigente, pero también son campos de lucha, en la medida en que los integrantes compiten entre sí por modificar o mantener sus posiciones y monto de capital y por mantener o transformar las reglas de juego.

- Plantean superar la dicotomía individuo/sociedad, asumiendo una visión dialéctica: las acciones y prácticas sociales y las instituciones están codeterminadas. Las acciones y prácticas sociales reproducen las instituciones y a su vez estas posibilitan la realización de las primeras.

Para Giddens (1995), las estructuras existen en estado virtual, y solo adquieren consistencia real mediante las prácticas sociales, las que a su vez son posibles por las estructuras. Para Bourdieu (2002), las estructuras existen dos veces: en los componentes objetivados de las actividades humanas (propiedades, riquezas, capitales) que integran la dotación de recursos asignados diferenciadamente a cada posición social, y en los componentes subjetivados (modos de clasificación, apreciación y percepción) que conforman el *habitus* personal, que se adquiere mediante el proceso de socialización, el cual se corresponde con la posición que se ocupe en la estructura objetivada. Elias usa el término figuración para referirse a las redes de interdependencia que los sujetos construyen a lo largo de sus actividades y de sus vidas.

- Insisten en el carácter procesal e histórico de las relaciones de interdependencia y en el carácter abierto de la sociedad: ella contiene simultáneamente el pasado a través de los elementos institucionalizados y cristalizados; el presente, que actualiza y modifica el pasado, a través de las acciones sociales; y el futuro, mediante los caminos posibles que se construyen a través de las prácticas sociales y de los imaginarios. La sociedad es la combinación dialéctica de relaciones de interdependencia, procesos, prácticas sociales, con elementos objetivados, instituciones, organizaciones y visiones distintas del mundo; los seres humanos, dentro de campos sociales, que son campos de fuerza y de lucha, reproducen y modifican sus vidas y la forma en que están organizadas sus sociedades.
- En esta perspectiva, la agencia —entendida como actividad originaria y fuerza propulsora— que origina la permanencia y los cambios de la sociedad, reside en los actores, individuales y colectivos —quienes

se distinguen por poseer mayor o menor capacidad de agencia—, ubicados en arreglos institucionales y organizativos específicos. Desigualdad y poder son otras dos nociones que integran esta perspectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bendix, Reinhard (1974). *Estado nacional y ciudadanía*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bourdieu, Pierre (1988). Espacio social y génesis de las clases. En Pierre Bourdieu, *Sociología y cultura* (pp. 281-309). México: Grijalbo.
- Bourdieu, Pierre (2002). *Razones prácticas: sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- Castells, Manuel (1997). *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza.
- Elias, Norbert (1987a). *El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Elias, Norbert (1987b). *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.
- Elias, Norbert (1989). *Sobre el tiempo*. Madrid: Alianza.
- Giddens, Anthony (1987). *Las nuevas reglas del método sociológico: crítica positiva de las sociologías interpretativas*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Giddens, Anthony (1994). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza.
- Giddens, Anthony (1995). *La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Habermas, Jürgen (1989). *El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid: Taurus.
- Held, David (Ed.) (2001). *Transformaciones globales. Política, economía y cultura*. Oxford: Oxford University Press.
- Hoselitz, Bert (1970). *Aspectos sociológicos del desarrollo económico*. Barcelona: Hispano Europea.
- Mariátegui, José Carlos (1928). *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Amauta.
- Marx, Karl (1975). *El capital*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Nisbet, Robert (1979). *Cambio social*. Madrid: Alianza.
- Plaza, Orlando (2006). Modernidad y racionalización en Weber y Elías. *Debates en Sociología*, 30, 40-50.
- Plaza, Orlando (2007). El debate teórico sobre las clases sociales: una aproximación histórico analítica. En Orlando Plaza (Coord.), *Clases sociales en el Perú: visiones y trayectorias* (pp. 21-79). Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Políticas, Económicas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Polanyi, Karl (1992). *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

- Prebisch, Raúl (1967). *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*. Montevideo: Banda Oriental.
- Quijano, Aníbal (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *La colonialidad del saber, eurocentrismo y América Latina* (pp. 201-246). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Quijano, Aníbal (2001). Globalización, colonialidad del poder y democracia. *Utopías, nuestra bandera: revista de debate político*, 188, 1-23.
- Rostow, Walter Whitman (1974). *Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Sztompka, Piotr (1995). *Sociología del cambio social*. Madrid: Alianza.
- Tilly, Charles (1991). *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*. Madrid: Alianza.
- Wallerstein, Immanuel (2004). *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundos*. Madrid: AKAL.
- Weber, Max (1961). *Historia económica general*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Weber, Max (2002). *Economía y sociedad*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Weber, Max (2005). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

PARTE II.
CAMBIOS POLÍTICOS

UNA POBLACIÓN DIFERENTE: CINCO DÉCADAS DE CAMBIO DEMOGRÁFICO

Carlos Eduardo Aramburú

En este breve artículo presentamos la dinámica demográfica de la población peruana en las últimas cinco décadas. Los cambios poblacionales son claves para entender la dinámica socioeconómica en cualquier periodo de nuestra historia, pues son a la vez causa y consecuencia de esta. Sin embargo, puede afirmarse que, al igual que el siglo XVI, el siglo XX, en especial la segunda mitad, presenta cambios demográficos que por su magnitud y velocidad son particularmente relevantes para entender las transformaciones sin precedentes que ocurren en la sociedad peruana en los últimos cincuenta años (Aramburú & Bustinza, 2000). Así como el siglo XVI implicó el descalabro demográfico de la sociedad prehispánica como consecuencia de nuevas enfermedades y la desarticulación del Estado inca (Sánchez Albornoz, 1973), el siglo XX estuvo marcado por el signo opuesto: la explosión demográfica y una rápida urbanización.

1. LA EXPLOSIÓN POBLACIONAL

Aunque algunos autores sostienen que la recuperación demográfica se inicia a fines del siglo XIX y que la tasa de crecimiento era ya de 2,2% entre los censos de 1940 y 1961 (Varillas & Mostajo, 1990), es en las décadas de 1960 y 1970 cuando la población alcanza sus mayores niveles de crecimiento con tasas de 2,9% y 2,7%, respectivamente (véase el cuadro 1). En términos absolutos, recién en la década de 1980 la población peruana registra su mayor crecimiento, con un incremento de más de 420 000 personas por año. A partir de los noventa, el crecimiento absoluto disminuye, y se ubica por debajo de las 400 000 personas por año en la última década. Es de notar que la tasa de crecimiento ya venía cayendo desde los años setenta, pero por la inercia demográfica esto se refleja en los números absolutos solo unas dos décadas después.

El hecho básico es que, en tan solo 46 años (de 1961 a 2007), la población peruana casi se triplica pasando de 10,2 a 28,2 millones de peruanos. Como veremos más adelante, este crecimiento se concentra principalmente en las áreas urbanas. Este es el telón de fondo para explicar los desfases, retos y demandas insatisfechas que una población que explota impone sobre las estructuras políticas, sociales y económicas del país.

Cuadro 1
Población total, tasa de crecimiento anual e incremento anual promedio

Censo	Población total*	Tasa anual	Incremento anual
1961	10 217 500		
1972	13 954 700	2,9	339 745
1981	17 754 800	2,7	422 311
1993	22 639 400	2,0	407 050
2007	28 220 700	1,6	398 664

* Fuentes: INEI. Censos de Población y Vivienda de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

2. LA URBANIZACIÓN

Una segunda dimensión básica de la dinámica poblacional es la distribución urbano/rural. Como apreciamos en el cuadro 2, en la segunda mitad del siglo XX asistimos a un acelerado proceso de urbanización. A inicios de la década de los sesenta, el Perú era aún una sociedad predominantemente rural con casi el 53% de sus habitantes viviendo en el campo (recordemos que en 1940 casi el 70% de la población era rural); en 1972 la población urbana era casi el 60% de la población total, y según el último censo, el 76% de los peruanos reside en localidades urbanas¹. Es importante destacar que es la década de los sesenta en la que la población se urbaniza en forma más rápida con tasas por encima del 5% anual. El resultado es que la población de las ciudades se cuadruplica en poco menos de cinco décadas, cambiando el rostro rural de la sociedad peruana por primera vez en su historia milenaria hacia lo urbano como forma predominante de convivencia. Por tanto, no solo el crecimiento poblacional sino, específicamente

¹ Las definiciones censales de «urbano» consideran localidades con cien o más viviendas contiguas y todas las capitales de distrito, cualquiera que sea su tamaño. Esta definición sin duda sobrestima el peso de la población urbana; pero, en tanto se ha respetado esta definición en todos los censos analizados, la tendencia es inequívoca.

la explosión urbana, es el proceso de fondo con el cual se deben entender las transformaciones económicas, políticas y sociales de la sociedad peruana en los últimos cincuenta años.

En cuanto a la población rural, es incorrecto asumir que esta disminuyó en las décadas pasadas. En realidad, siguió creciendo solo que a tasas muy inferiores a la urbana. Es así que entre 1961 y 2007 la población rural aumentó en poco más de 1,4 millones de personas. Cabe notar, sin embargo, que, en el último periodo intercensal, la población rural parece haberse estancado pues su tasa de crecimiento fue de solo 0,02% anual.

Cuadro 2
Distribución urbana rural

Censo	Población urbana	%	Población rural	%	Tasa de crecimiento	
					Urbana	Rural
1961	4 698 178	47,4	5 208 568	52,6		
1972	8 058 495	59,5	5 479 713	40,5	5,1	0,5
1981	11 091 923	65,2	5 913 287	34,8	3,6	0,8
1993	15 458 599	70,1	6 589 757	29,9	2,8	0,9
2007	20 810 700	75,9	6 608 594	24,1	2,1	0,02

Fuente: INEI (2008a: 13-14)²

3. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

Los principales determinantes del crecimiento poblacional en estas cinco décadas han sido la mortalidad y la fecundidad. La migración ha sido un fenómeno que ha afectado solo a la redistribución interna de la población hasta fines del siglo XX. En la última década, la emigración internacional ha adquirido dimensiones crecientes y ha contribuido a hacer más lento el crecimiento demográfico reciente. El último censo (octubre de 2007) registra 704 764 hogares con miembros que residen permanentemente fuera del país, lo que equivale al 10,4% del total de hogares censados (6 755 361 hogares). Este dato, aunque aproximado, pues no recoge el periodo de referencia ni toma en cuenta hogares completos que hayan emigrado, ni hogares que tienen más de un miembro residiendo en el extranjero, puede considerarse el número mínimo de emigrantes internacionales.

² Véanse el cuadro 1.3 y el gráfico 1.2.

Como se aprecia en el cuadro 3 y en el gráfico 1, la transición demográfica peruana ya se había iniciado en 1961. La mortalidad, medida por la tasa bruta de mortalidad (TBM: defunciones por cada 1000 habitantes) desciende de 18/1000 en ese año a 6/1000 en 2007. Es decir, se reduce a la tercera parte en poco menos de cinco décadas. Nótese que el periodo de mayor descenso corresponde a la década de los sesenta. La natalidad, medida por la tasa bruta de natalidad (TBN: nacimientos por cada 1000 habitantes) cae en el mismo periodo a poco menos de la mitad: de 46,5 nacimientos por cada 1000 habitantes en 1961 a 21,4 en el 2007. Nótese asimismo que el periodo de mayor caída en la natalidad se da después de los años ochenta y, especialmente, en la última década. Por ello, los últimos cincuenta años revelan dos etapas de la transición demográfica: la primera caracterizada por el rápido descenso de la mortalidad con una natalidad constante o con descenso moderado (1960-1970), y la segunda caracterizada por un descenso menos pronunciado de la mortalidad y una aceleración en la caída de la natalidad. Ello explica el rápido crecimiento poblacional de los años sesenta y setenta, y la disminución de este crecimiento a partir de los ochenta.

Si bien es indudable que el descenso de la mortalidad se debe a políticas públicas de saneamiento y salud (Lastres, 1951), la caída de la fecundidad se inicia mucho antes que los programas oficiales de planificación familiar que datan de mediados de los ochenta. Este es un punto importante, pues la evidencia demuestra que la baja de la fecundidad responde más bien a cambios culturales y sociales, en especial a la mayor educación y oportunidades para la mujer, lo que la lleva a controlar su fecundidad y a un mayor uso de métodos anticonceptivos (Miró & Potter, 1980).

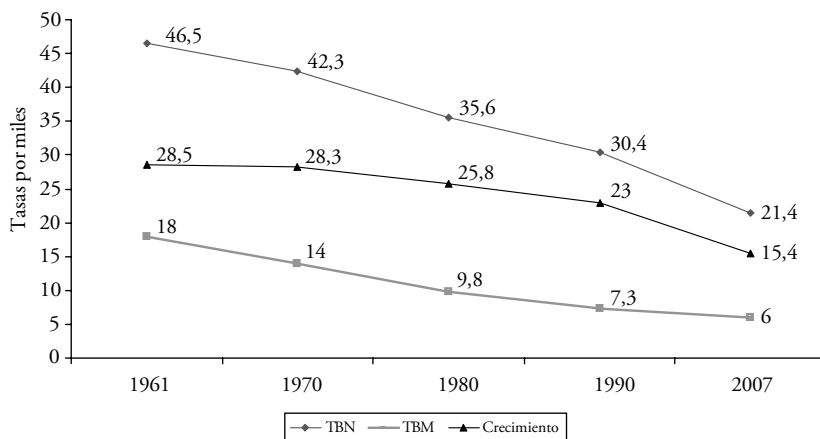
Cuadro 3
La transición demográfica peruana

	TBN	TBM	Crecimiento*
1961	46,5	18,0	28,5
1970	42,3	14,0	28,3
1980	35,6	9,8	25,8
1990	30,4	7,3	23,0
2007	21,4	6,0	15,4

Fuente: INEI (2002)

* Tasas de crecimiento vegetativo; TBN - RBM = crecimiento anual/1000 hab.

Gráfico 1
La transición demográfica peruana

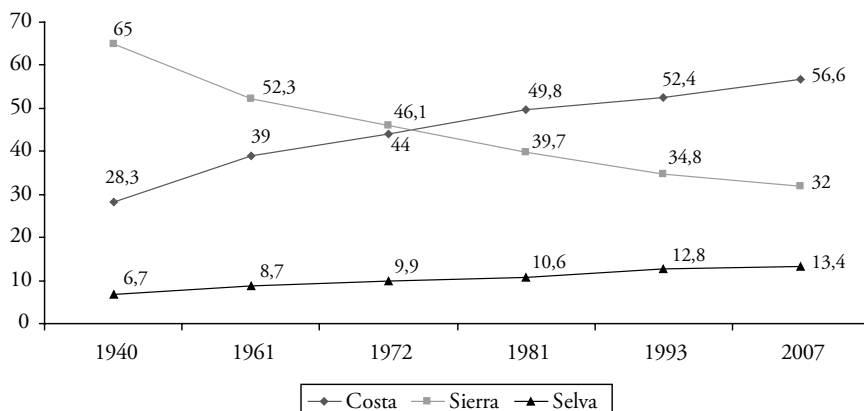


Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1949, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007
INEI (2002)
Elaboración propia

4. DE LOS ANDES A LA COSTA

Otra dimensión clave del proceso poblacional peruano es la distribución por regiones naturales, las que, de manera gruesa, representan también contextos económicos y socioculturales diferenciados. En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad peruana no solo pasó de ser rural a urbana, sino de ser andina a ser costera. En 1940, el 65% de la población vivía en la sierra, el 28% en la costa y solo el 7% en la Amazonía. En 1961 se había ya iniciado el proceso de litoralización debido fundamentalmente a las migraciones internas. La sierra bajó a albergar el 52% de la población, la costa subió al 39% y la selva incrementó ligeramente su participación en la distribución de la población total con el 9%. En el 2007, estas tendencias redistributivas se han reforzado: la costa alberga al 55% de la población total; la sierra, al 32%; y la selva, al 13% (gráfico 2). En números absolutos, la costa creció de 1,76 millones a 14,97 millones; la sierra, de 4 millones a 7,67 millones; y la selva, de 400 000 a 3,67 millones de habitantes, entre 1940 y el 2007 (INEI, 2008a).

Gráfico 2
Evolución de la población censada por región natural (1940-2007)



Fuente: INEI (2008a: 15)³

La urbanización y litoralización de la población peruana en las últimas cinco décadas se debe principalmente al crecimiento de las ciudades costeras, en especial Lima. La capital (Lima-Callao), que en 1940 apenas superaba los 600 000 habitantes, registra en el censo de 2007 un total de 8 472 935 habitantes. El peso de la zona metropolitana Lima-Callao en la población urbana total ha aumentado del 29% en 1940 al 41% en 2007. En los últimos cinco años, de cada diez migrantes internos, casi cinco eligieron la capital como su blanco o destino. Es de esperar que el reciente proceso de descentralización del Estado altere este caso de marcada primacía urbana. Sin embargo, es indudable que la concentración del poder económico y político en Lima es el factor clave para entender la fuerte concentración demográfica en esta ciudad.

Pese a la enorme primacía de la capital, en el último periodo intercensal, 12 de las 30 ciudades más importantes del país crecen a tasas superiores a la de Lima (2,1% anual). En lo que respecta a las ciudades con las mayores tasas de crecimiento anual entre 1993 y 2007 tenemos a: Puerto Maldonado (4,8%), Cajamarca (4%), Moyobamba (3,9%), Juliaca (3%), Tarapoto (2,9%), Huaraz (2,9%), Chachapoyas (2,7%) y Ayacucho (2,5%) (INEI, 2008a). Las principales ciudades costeras presentan tasas de crecimiento anual similares o por debajo de la de Lima: Piura (2,2%), Trujillo (2,1%), Ica (1,9%), Chiclayo (1,5%), Arequipa (1,3%) y Chimbote (1,2%). Ello indica que en el Perú avanza el proceso de urbanización secundaria, notorio desde la década de 1960 (Wendorff, 1983), pero que en los últimos años se refuerza en ciudades andinas y de la Amazonía.

³ Véase el gráfico 1.3.

La urbanización del interior del país es; por un lado, un reto por su velocidad, lo que afecta los recursos naturales y el medio ambiente e incrementa la demanda por servicios públicos, pero, por otro lado, también es una oportunidad generada por un mercado interno en rápido crecimiento al que hay que atender.

5. DEL CAMPO A LA CIUDAD... Y AL EXTRANJERO

Las migraciones son, sin duda, el fenómeno demográfico más dinámico y el más vinculado con las condiciones de vida y oportunidades diferenciales que brinda el territorio. Este tema ha sido objeto de innumerables estudios sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, cuando era evidente que las migraciones internas eran el proceso vertebral de los cambios que experimentaba la sociedad peruana (Martínez, 1980). Simplificando, pueden sugerirse tres grandes etapas del proceso migratorio peruano en los últimos cincuenta años:

a) Éxodo rural a Lima: 1940-1970

En los primeros años de este periodo se inician los desplazamientos del campo a la ciudad. Al referirse a los resultados del censo de 1940, el entonces director nacional de estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio (hoy Ministerio de Economía y Finanzas) comentaba: «[...] el fenómeno de la migración interna alcanza su más alta expresión en el desplazamiento de la población provinciana hacia la capital de la República» (Arca Parró, 1941). La población migrante (personas residiendo en un departamento diferente al de su nacimiento) alcanzaba solo a un 10% de la población total y el destino más importante era la capital. En 1961 el centro registra un 23% de migrantes internos. En cuanto a la migración reciente (1967-1972), el censo de 1972 muestra que el 56% de los migrantes tenían a Lima como su destino migratorio (Varillas & Mostajo, 1990).

b) Diversificación migratoria: 1970-1990

El censo de 1972 indicó que el 26,4% de la población nacional era migrante. Entre 1976 y 1981, Lima había captado un porcentaje menor de los migrantes internos que en el periodo anterior (1967-1972): 45%, mientras que la sierra y resto de la costa, principalmente las ciudades, atraían al 25% y 19% de los migrantes internos, respectivamente. El censo de 1981 reveló una menor tasa de migración interna: 21,5%, y el censo de 1993 una tasa parecida: 22,3%. Entre 1988 y 1993, el 42% de los migrantes se trasladaron hacia Lima-Callao, un 26% lo hizo hacia la sierra, un 24% al resto de la costa y un 8% hacia zonas

de colonización en la Amazonía. Este periodo se caracteriza, por tanto, por una desaceleración de la migración interna, la que habría alcanzado sus mayores tasas a fines de los sesenta y principios de los setenta, y por la diversificación de blancos migratorios, aunque Lima sigue manteniendo la primacía.

c) El éxodo al extranjero: 1990-2007

En el año 2007, la diversificación de las metas migratorias incluye otros países. Las crisis económicas de fines de los ochenta y principios de los noventa, la inseguridad provocada por el terrorismo y los escándalos políticos en los últimos años del fujimorismo, empujaron, en especial a sectores medios urbanos, a buscar una vida mejor en el extranjero. Según un estudio reciente (OIM, INEI & DIGEMIN, 2008) basado en los registros de salidas de peruanos al exterior consignados en la tarjeta de migración andina (TAM), entre 1990 y el 2007 habrían migrado al extranjero 1 940 817 peruanos de los cuales 51,3% eran mujeres y 48,7% hombres. Los emigrantes al exterior fluctuaron entre 40 000 y 70 000 por año hasta fines de los noventa, y se incrementaron significativamente a partir del 2002, alcanzando más de 290 000 personas en el 2006. Otros autores estiman que hay unos 3 millones de peruanos residiendo en el exterior, de los cuales más del 54% estarían en condición irregular (De los Ríos & Rueda, 2005). Los principales destinos de los migrantes que salieron entre 1990 y 2007, según la primera fuente, han sido los Estados Unidos (con 31% de los emigrantes), Argentina (14%), España (13%), Italia (10%) y Chile (9%).

Esto significa que si añadimos estos emigrantes que residen en el exterior, la población peruana habría superado los 30 millones en el 2007.

La migración interna alcanza sus mayores niveles al inicio de los setenta, y vuelve a crecer en el de los ochenta, debido al fenómeno de los desplazados por la violencia interna. En los últimos quince años, la migración interna siguió bajando, del 22% en 1993 al 20% en el 2007. Sin embargo, la fuerza de atracción de Lima-Callao parece haberse mantenido o aumentado ligeramente, pues captó el 47% de los migrantes internos entre 2002-2007. Los departamentos de la costa, especialmente Arequipa y los de la costa norte, captaron el 23% de los migrantes internos en ese periodo; los departamentos andinos, el 19%; y los amazónicos, el 11% restante.

Cuadro 4
La migración interna

Año	Población migrante	Porcentaje de la población total	Tasa de crecimiento
1961	2 280 000	23,0	
1972	3 577 000	26,4	4,2
1981	3 678 000	21,6	0,3
1993	4 921 000	22,3	2,8
2007	5 542 000	20,2	0,9

Fuentes: Varillas & Mostajo (1990, p. 113)
INEI (2008b, p. 76)

Resumiendo, las migraciones son el proceso poblacional más dinámico y significativo para entender los cambios de la sociedad peruana en los últimos cincuenta años. No solo es la migración el principal factor del crecimiento de Lima, sino también del proceso de urbanización secundaria observable en la costa, la sierra y la selva. Pero no se trata solo de números; la presencia provinciana en la capital y en las ciudades del interior que fueron sedes seculares del poder político y económico fuerza un proceso de reconocimiento de estos sectores por su ocupación del espacio urbano, del empleo informal, de las organizaciones de base populares y de la andinización de la cultura urbana. El éxodo internacional es aún reciente por lo que sus consecuencias económicas, sociales y culturales empiezan a estudiarse. El tema de las remesas es quizá el que mayor atención ha suscitado, pues estas llegan a más de 400 000 hogares peruanos (especialmente urbanos, costeros y de sectores medios) y el monto estimado de estas es 1 123 millones de dólares representando más del 1,6% del producto interno bruto (PIB) en 2004 (Loveday & Molina 2005). Sin embargo, es obvio que la internacionalización de parte significativa de la población peruana tiene y tendrá consecuencias sociales y culturales que aún no alcanzamos a entender a cabalidad.

6. LAS EDADES DE LA POBLACIÓN

Una de las consecuencias más importantes de los cambios en las variables demográficas es su impacto en la composición por edades de la población. En los últimos cincuenta años, se pueden distinguir dos tendencias: hasta los años setenta, el descenso de la mortalidad y una alta fecundidad determinan una población joven; los menores de 15 años se incrementan del 42% (1940) al 44% (1972).

Es la etapa que algunos autores denominan «la explosión demográfica peruana» (Wicht, 1986) por ser el periodo de mayor crecimiento poblacional. El Perú es una nación de niños y adolescentes. Por tanto, las demandas sociales se centran en la educación escolar, la atención a la maternidad y la nutrición infantil, para las cuales la repuesta pública es de mala calidad o de cobertura insuficiente.

Cuadro 5
Estructura por edades

Año		0-14 años	15-64 años	65 a +	Total
1961	Pob.	4 424 200	5 445 900	347 400	10 217 500
	%	43,3	53,3	3,4	100,0
1972	Pob.	6 140 100	7 326 200	488 400	13 954 700
	%	43,9	52,5	3,4	100,0
1981	Pob.	7 421 500	9 694 100	639 200	17 754 800
	%	41,3	52,5	6,1	100,0
1993	Pob.	8 155 400	12 866 900	1 026 100	22 048 400
	%	37,0	58,3	4,7	100,0
2007	Pob.	8 357 500	17 289 900	1 764 700	27 412 200*
	%	30,5	63,1	6,4	100,0

Fuentes: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1949, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007

* Incluye solo población nominalmente censada

A partir de la década de los setenta, y como consecuencia del descenso de la fecundidad, se aprecia la segunda etapa en la que la sociedad peruana empieza a envejecer. La edad mediana sube de 21 años en 1993 a 25 en 2007. Los menores de veinte años pasan de ser el 54,4% en 1972 al 40,5% de la población total en 2007 (INEI, 2008b, p. 50)⁴, y los mayores de 60 años crecen del 5,9% al 9,1%, respectivamente. Las tres últimas décadas del siglo XX se caracterizan por la explosión de los jóvenes y la población en edad laboral. Por ello, las demandas sociales se centran en la formación técnica y universitaria, en el empleo, la vivienda y el transporte urbano.

La expansión de la oferta educativa técnica y superior, mucha de dudosa calidad, así como la expansión de la informalidad y los procesos de violencia terrorista, tienen como telón de fondo la rápida expansión de una población de jóvenes, en su mayoría urbanos, con niveles crecientes de educación formal y con limitadas oportunidades de ingresos y empleo productivo.

⁴ Véase el cuadro 1.24.

En las próximas dos décadas, la población peruana entrará en un proceso más definido de envejecimiento. La población entre 40 y 59 años pasará del 17% al 23% (de unos 5 millones a casi 8 millones) y los mayores de 60 años del 7% al 11% (de unos 2 millones a 3,7 millones) (Aramburú & Bustinza, 2005). Por tanto, las demandas sociales se orientarán al aseguramiento en salud, jubilación y cuidados del adulto mayor. Es probable que, una vez más, los sistemas de protección social y de pensiones no puedan responder a esta creciente demanda y que el desamparo y la precariedad afecten a una buena parte de la población en la tercera edad, la que estará compuesta mayoritariamente por mujeres.

7. LA REVOLUCIÓN REPRODUCTIVA

Uno de los cambios demográficos más significativos en el proceso de transición demográfica es el descenso de la fecundidad. Su relevancia va mucho más allá de influir en la tasa de crecimiento y en la estructura por edades. Revela profundos cambios en los roles de la mujer, en el significado y ejercicio de la sexualidad y en la estructura y dinámica familiar. Se vincula asimismo con las relaciones intergeneracionales en cuanto a roles de padres e hijos y los flujos de riqueza (Caldwell, 1976) entre ambos. Caldwell sostiene que en sociedades tradicionales en las que predomina la economía familiar, los flujos de recursos van de hijos a padres. Ello supone la temprana incorporación de los hijos al trabajo, poca importancia e inversión en la educación formal de estos, dependencia en la vejez del apoyo económico de los hijos, la herencia de los activos familiares como base de la reproducción económica y una fuerte autoridad paterna. La expansión del mercado y el capitalismo, que implica la separación del productor de los medios de producción, altera este régimen. La mayoría de las personas adultas dependen de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir, la calificación de la mano de obra es entonces un factor central de la productividad y por ende del nivel de salarios. La educación formal deviene entonces en una necesidad y en un imperativo social. Este mismo autor sostiene que, en estos contextos, se altera el régimen demográfico hacia el control y la baja de la fecundidad, pues los flujos intergeneracionales de riqueza van de padres a hijos. El costo en tiempo y recursos de la crianza de una familia numerosa se eleva y compite con la disponibilidad de tiempo e ingresos de los padres. La innovación tecnológica en la anticoncepción facilita este cambio de régimen reproductivo, pero no lo determina, pues es bien conocido que el descenso de la fecundidad en países de temprana industrialización ocurrió mucho antes de que la anticoncepción moderna estuviera al alcance de las parejas en estas sociedades (Donaldson, 1991).

Cuadro 6
Preferencias reproductivas*

Indicador	1977-1978	2004
Perú: número ideal de hijos	3,8	2,4
Mujeres urbanas	3,5	2,3
Mujeres rurales	4,3	2,6
Mujeres analfabetas	4,4	2,9
Mujeres con secundaria o más	3,3	2,2
Mujeres entre 15-19 años	3,2	2,0
Mujeres entre 45-49 años	4,6	2,9

Fuentes: ENAF (1978-1979)
ENDES (2004)

* Respuestas a la pregunta: «Si usted pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían?»

Para el caso peruano, la información disponible revela cambios profundos en las preferencias reproductivas de las mujeres peruanas (cuadro 6).

Es así que, hace tan solo tres décadas, el tamaño ideal de familia era de 3,8 hijos por mujer, ideal reproductivo que desciende a 2,4 hijos por mujer en el 2004. Ya a fines de los setenta era evidente la brecha urbano/rural en cuanto a preferencias reproductivas: las mujeres rurales tenían un ideal de familia bastante mayor (4,3) al de las urbanas (3,5). Esta brecha se ha reducido significativamente en 2004: 2,3 hijos en el caso de las mujeres urbanas y 2,6 para las rurales. Las diferencias según el nivel educativo de la mujer son igualmente notorias en los datos de 1977-1978: las mujeres sin educación formal tenían un ideal reproductivo de 4,4 hijos; mientras que aquellas con educación secundaria o más prefieren 3,3 hijos al final de su vida reproductiva. En 2004, la brecha es mucho menor: 2,2 frente a 2,9 hijos por mujer. Finalmente, si comparamos cohortes, encontramos que a fines de los setenta, las mujeres más jóvenes deseaban 3,2 hijos en promedio, frente a 4,6 hijos entre las mujeres de 45 a 49 años. Para ambas cohortes, el ideal reproductivo es mucho menor en el 2004: 2 contra 2,9 hijos por mujer.

El análisis de estos datos revela dos patrones claros: las mujeres rurales, menos educadas y mayores, tienen un ideal reproductivo más alto que las urbanas, más educadas y más jóvenes. Se podría plantear que las primeras conservan el modelo reproductivo de la sociedad tradicional postulado por Caldwell. El segundo patrón es igualmente claro, en las últimas tres décadas los ideales reproductivos confluyen hacia un tamaño menor de familia ideal, comprobándose una homogenización de las intenciones reproductivas. En la teoría de Caldwell, ello se debería al

cambio en el flujo intergeneracional de recursos de padres hacia hijos, propio de sociedades modernas de mercado.

Las preferencias reproductivas son eso: preferencias. El comportamiento reproductivo difiere de estas preferencias tanto más cuanto menor sea el acceso a la información y a la anticoncepción. La variable discriminante más fuerte, sin embargo, no es la mera disponibilidad de tecnología anticonceptiva, sino la capacidad y posibilidad de la pareja, y especialmente de la mujer, de tomar e implementar sus propias decisiones en torno a la reproducción. Ello parece estar íntimamente ligado a su nivel educativo, es decir, a sus mayores capacidades para tomar esta decisión. Por ello, los diferenciales en cuanto al comportamiento reproductivo son mayores cuando los niveles educativos de las mujeres son heterogéneos. En general, los cambios en las preferencias reproductivas preceden a los cambios en las políticas de los servicios de salud pública referidas a asegurar el acceso a la información y los anticonceptivos a todas las mujeres, especialmente a las menos educadas.

Cuadro 7
Tasa global de fecundidad (TGF)

Indicador	1977-1978	2004
Perú: TGF	5,4	2,4
Mujeres urbanas	4,4	2,0
Mujeres rurales	8,1	3,6
Mujeres analfabetas	7,8*	4,3
Mujeres con secundaria o +	3,8*	1,9

Fuentes: ENAF (1977-1978)

ENDES (2004)

* Estimados nuestros

En el cuadro 7, se observa que las diferencias en el comportamiento reproductivo medido por la TGF⁵ son mucho mayores que los ideales reproductivos, especialmente, para fines de los años setenta en los que la educación de la mujer distaba de ser universal, y en los que los servicios de planificación familiar no formaban parte aún de la oferta de los servicios de salud pública. Es así que, entre las mujeres rurales, el número deseado de hijos era de 4,3 y la fecundidad real era de 8,1 hijos, casi 4 hijos mayor. Algo similar ocurría con las mujeres sin educación

⁵ La TGF es el número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su vida reproductiva (49 años), si las tasas específicas de fecundidad por edad se mantienen.

formal, la fecundidad ideal era de 4,4 hijos y la real de 7,8 hijos por mujer. En 2004, se aprecia una reducción significativa en la fecundidad real en todas las desagregaciones analizadas a menos de la mitad de las cifras registradas casi tres décadas antes. Persisten, sin embargo, brechas mayores a un hijo entre las mujeres rurales y analfabetas. La equidad reproductiva es así todavía una meta pendiente.

8. LA NUPCIALIDAD: CONTINUIDAD Y CAMBIO

Uno de los procesos sociales fundamentales de la reproducción biológica y social es la formación de la unión o familia. Los cambios en el estado conyugal son poco significativos en las últimas décadas; sin embargo, la edad de inicio de la unión sí revela cambios y diferencias culturales. Los datos de las encuestas demográficas proporcionan información pertinente sobre la nupcialidad y la unión de las mujeres entre 15 y 49 años.

Como se aprecia en el cuadro 8, el estado conyugal de las mujeres peruanas ha cambiado poco en las últimas décadas. Se aprecia una reducción de 2,8 puntos porcentuales en la proporción de casadas o unidas entre esas fechas, explicable por un incremento de las divorciadas o separadas a casi el doble. El incremento del divorcio o la separación parece afectar más a las mujeres con mayores niveles educativos, pero este tema merece un estudio aparte.

Cuadro 8
Estado conyugal en mujeres de 15-49 años

Indicador	1977-1978	2004
Porcentaje de solteras	37,2	37,0
Porcentaje de unidas (casadas + convivientes)	56,4	53,6
Porcentaje de divorciadas o separadas	4,9	8,8
Porcentaje de viudas	1,5	0,7
Total	100,0	100,0

Fuentes: ENAF (1977-1978)
ENDES (2004)

Otro dato interesante, tomado de los censos y referido a la población de ambos sexos mayor de 12 años, es que la proporción de convivientes se ha incrementado en forma notable: de 12% en 1981 (1,3 millones) a 16,3% en 1993 (2,5 millones), y a casi un 25% en el 2007 (5,1 millones) (INEI, 2008b,

p. 51)⁶. El mayor crecimiento de la convivencia entre 1993 y el 2007 se observa entre la población urbana y en departamentos de la costa como Tumbes, Callao, Ica y Lima; y en Junín, en el caso de la sierra. Podría aventurarse como hipótesis que la convivencia crece en las zonas más modernizadas y está relacionada con la proliferación de oportunidades de trabajo femenino, lo que le da mayor autonomía económica a la mujer; sin embargo, este tema amerita una investigación específica.

En cuanto a la edad de la unión, se aprecian cambios importantes en las últimas tres décadas (cuadro 9). Para todas las mujeres entre 15 y 49 años, la edad promedio de la unión se ha incrementado en 3,5 años, de 18,4 a 21,9 entre 1977-1978 y el 2004. El retraso de la unión es especialmente notorio entre las mujeres con mayores niveles educativos: de 20 a 25,5 años en este mismo periodo. También se aprecia un retraso de la unión entre las mujeres analfabetas de 17,6 a 18,7 años y entre las mujeres rurales de 18 a 19,6 años. Una hipótesis es que las mayores oportunidades de educación y trabajo para las mujeres llevan a la postergación de la unión, lo que condiciona una menor exposición al riesgo de embarazo y por tanto una menor fecundidad. En efecto, los datos del último censo revelan que, entre 1993 y el 2007, la tasa de actividad femenina ha aumentado en 8,7 puntos porcentuales de 29% a casi 38%, en tanto que la masculina ha permanecido sin cambios (71%). Es notable, además, que la tasa de actividad femenina haya crecido el doble (4,1% anual) que la masculina (2,2%) en todos los departamentos del país (INEI, 2008b, pp. 151-153).

Cuadro 9
Edad a la primera unión

Edad mediana a la primera unión	1977-1978	2004
Todas las mujeres de 25 a 49 años	18,4	21,9
Mujeres analfabetas de 25 a 49 años	17,6	18,7
Mujeres con secundaria o con mayor grado de instrucción de 25 a 49 años	20,1	25,5
Mujeres urbanas de 25 a 49 años	19,2	20,1
Mujeres rurales de 25 a 49 años	18,0	19,6

Fuentes: ENAF (1977-1978)
ENDES (2004)

⁶ Véase el cuadro 1.26.

Las diferencias en los patrones reproductivos de las mujeres según sus condiciones socioculturales tienen importantes consecuencias para el desarrollo de sus capacidades y para aprovechar las oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal. En un trabajo reciente, en el que comparamos los patrones reproductivos de mujeres según su nivel educativo, encontramos que las mujeres analfabetas «[...] inician su ciclo sexual y reproductivo mucho antes que las que cuentan con educación superior» (Aramburú & Bustinza, 2007, p. 65). Como además su fecundidad es mucho mayor (casi cinco hijos por mujer), la etapa de crianza se prolonga en el caso de las primeras de los dieciocho años a más allá de los 48 años (unos treinta años en promedio). Por el contrario, las mujeres más educadas (usando el nivel educativo como *proxy* del estrato sociocultural), inician su reproducción a los 27 años, tienen en promedio 1,5 hijos y, por tanto, pasan unos veinte años criando a sus hijos. Lo relevante de este análisis es comprobar que la diferencia central en el patrón reproductivo y de crianza ocurre en los años de juventud. Estos diez años son clave para el logro educativo, el inicio de la actividad laboral y, en general, el desarrollo personal de la joven. La prevalencia del nuevo régimen reproductivo, con edad tardía de la unión, baja fecundidad (por el acceso y uso de anticoncepción efectiva) y la concentración de los embarazos y nacimientos en un periodo de tiempo acotado (cúspide alta y tardía) implica un cambio profundo para los roles privados y públicos de las mujeres, y es factor determinante en el cambio de los roles de género que vive nuestra sociedad como muchas otras en proceso de modernización.

9. POBLACIÓN Y CAMBIO SOCIAL

En los últimos cincuenta años, la población peruana ha experimentado los cambios más importantes en su crecimiento, distribución y régimen reproductivo desde el siglo XVI. Resumiendo, los cambios más importantes han sido:

- La población casi se quintuplicó en las últimas seis décadas.
- La vida se hizo más larga, por la caída de la mortalidad a menos de la tercera parte.
- La sociedad se urbanizó velozmente, de un tercio urbano a tres cuartas partes viviendo en ciudades: de 2,5 millones a 15,5 millones de ciudadanos.
- La población se concentró en la costa (de uno de cada cuatro habitantes a dos de cada tres) y en especial en la capital (de medio millón a casi 8,5 millones).
- El éxodo rural de hace cinco décadas se transforma en éxodo al extranjero en las últimas dos.

- El régimen reproductivo de unión temprana, formal y con alta fecundidad cambia tanto en la conducta como en las preferencias, hacia una unión más tardía, con mayor peso de la convivencia y con la mitad de hijos.

La transición demográfica peruana, que en términos generales está concluyendo, constituye así el telón de fondo de los cambios en la estructura social, los mercados de trabajo, las relaciones de género y los procesos de reproducción familiar. Persisten, qué duda cabe, diferencias sociales y étnicas en los regímenes demográficos de la mortalidad, la fecundidad y la migración. Para los más pobres, los que no tienen el castellano como lengua materna, los menos educados, los andinos y amazónicos, la mortalidad entre sus mujeres e hijos es mucho más alta, el número de hijos no planeados mucho mayor y las posibilidades de migración e inserción a la gran ciudad o al extranjero mucho menores. Por ello, las políticas sociales y económicas, para lograr la inclusión, deben empezar por atender la demografía de la desigualdad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aramburú, Carlos (2000). La población peruana: un siglo de cambios. *COPE*, X(22), 20-25.
- Aramburú, Carlos (2005). La integralidad de lo poblacional. Ponencia presentada en el *V Congreso de Población y Planificación Familiar*. INPPARES, Lima.
- Aramburú, Carlos & María Bustinza (2007). La transición demográfica peruana: implicancias para la conciliación trabajo-familia. *Economía y Sociedad*, 63, 62-73.
- Arca Parró, Alberto (1944). *Censo nacional de población y ocupación 1940*. Lima: Ministerio de Hacienda y Comercio – Dirección Nacional de Estadística.
- Caldwell, John (1976). Toward a Restatement of Transition Theory. *Population and Development Review*, 3-4(2), 321-366.
- De los Ríos, Juan & Carlos Rueda (2005) ¿Por qué migran los peruanos al exterior? *Economía y Sociedad*, 58, 7-14.
- Donaldson, Loraine (1991). *Fertility Transition*. Cambridge: Basil Blackwell.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (1979). *Encuesta Nacional de Fecundidad del Perú 1977-1978 (ENAF)*. Informe General. Lima: Oficina Nacional de Estadística.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2002). *Boletín especial demográfico 15*. Lima: Oficina Nacional de Estadística.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2005). *Encuesta demográfica y de salud familiar, 2004 (ENDES)*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2008a). *Perfil sociodemográfico del Perú, julio*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2008b). *Perfil sociodemográfico del Perú, agosto*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Lastres, Juan B. (1951). *Historia de la medicina peruana*. Lima: Imprenta Santa María.
- Loveday, James & Oswaldo Molina (2005). ¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en el bienestar? *Economía y Sociedad*, 58, 15-21.
- Martínez, Héctor (1980). *Migraciones internas en el Perú: aproximación crítica y bibliográfica*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Miró, Carmen & Joseph Potter (1980). *Population Policy*. Londres: Frances Pinter.
- Organización Internacional para las Migraciones Instituto Nacional de Estadística e Informática & Dirección General de Migraciones (OIM, INEI & DIGEMIN) (2008). *Perú: estadísticas de la migración internacional de peruanos, 1990-2007*. Lima: Organización Internacional para las Migraciones – Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección General de Migraciones.
- Sánchez Albornoz, Nicolás (1973). *La población de América Latina*. Madrid: Alianza Universidad.
- Varillas, Alberto & Patricia Mostajo (1990). *La situación poblacional peruana*. Lima: Instituto Andino de Estudios en Población y Desarrollo.
- Wendorff, Carlos (1983). Población, urbanización y vivienda en el Perú. En *Población y políticas de desarrollo en el Perú. Seminario sobre Población y Políticas de Desarrollo en el Perú (5-10 de julio de 1982)* (pp. 165-216). Lima: Instituto Andino de Estudios en Población y Desarrollo,.
- Wicht, Juan Julio (1986). Realidad demográfica y crisis de la sociedad peruana. En Roger Guerra García (Ed.), *Problemas poblacionales peruanos II* (pp. 7-116). Lima: Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en el Perú.

CAMBIOS EN LOS VÍNCULOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EN EL PERÚ: 1968-2008¹

Aldo Panfichi y Omar Coronel

Entre 1968 y 2008 el Perú ha pasado por distintos regímenes políticos, modelos económicos, proyectos de sociedad, buscando resolver los históricos problemas de pobreza y exclusión de la mayoría de la población. De una dictadura militar que buscaba representar las demandas de cambio transformando la sociedad desde el Estado, se pasó en los ochenta a una democracia que consolidaba su representatividad con la aparición y reafirmación de actores como partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG). No obstante, al final de esta década, la falta de visión de la clase política para comprender que el vínculo representativo a través de los grupos de interés existentes se tornaba ineficaz, sumada a la violencia política y la crisis económica, fueron cerrando la oportunidad de institucionalizar la precaria democracia. Frente a lo anterior, en los noventa, se instala un nuevo régimen autoritario y neoliberal reemplazando el modelo Estado-céntrico por un modelo mercado-céntrico, e implementando una política del miedo que desincentivó la participación. Finalmente, con la caída del autoritarismo y la transición a la democracia, lo que hemos tenido en los dos últimos gobiernos de inicios de siglo ha sido la continuación del modelo neoliberal.

Durante todo este periodo, los vínculos entre la sociedad y el Estado no han permanecido iguales. Varios tipos de relación se han intentado imponer con diferente éxito. El vínculo patrón-cliente del orden oligárquico fue reemplazado por el corporativista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA) en los setenta; y este, a su vez, fue sustituido por el vínculo representativo en los ochenta. En los noventa, se constituye un vínculo neoclientelista y antipolítico a través de operadores políticos independientes, también denominado *brokerage*.

¹ Queremos agradecer a Guillermo Rochabrún por sus comentarios al borrador inicial de este trabajo, y a Orlando Plaza por las numerosas revisiones y sugerencias a esta versión final.

Y en la década actual, a pesar de los intentos por establecer un vínculo participativo y reconstruir la capacidad de representación de los partidos, lo que ha primado es la continuación del vínculo neoclientelista y la relación conflictiva con sectores que no tienen intermediadores. Por supuesto, ninguno de estos vínculos es exclusivo en cada etapa. Por el contrario, en cada una de ellas conviven y/o se articulan varios de estos. Sin embargo, en cada periodo siempre hay uno que logra imponerse o parece predominar frente a los demás.

En este contexto histórico, interesa explicar la cuestión central de por qué se dan estos cambios en los vínculos o mecanismos de intermediación sin que ninguno de ellos pueda consolidarse y mejorar la relación entre la sociedad y el Estado. Para absolverla, proponemos una lectura sociológica desde la perspectiva estructural. Sostenemos las hipótesis de que *a)* determinados cambios estructurales intervienen en la modificación de los intereses societales, *b)* que estos «nuevos» intereses, sumados a otros que se mantienen, producen modificaciones en los vínculos entre los actores sociales y el sistema político, y *c)* que los partidos u otras organizaciones de intermediación no han podido recoger la nueva diversidad de intereses. Siguiendo a Frances Hagopian, nos preguntamos cuándo, cómo y por qué se han reorganizado los intereses societales y cómo estos se han revinculado con las instituciones políticas (Hagopian, 2000). Pensamos que para responder a estas preguntas es necesario identificar y analizar tanto los procesos estructurales de larga duración que modifican las bases sociales del medio de intermediación, como el impacto de crisis políticas y económicas específicas.

En el desarrollo de este trabajo, ubicamos dos momentos o hitos en los cambios de intereses societales y sus revinculaciones o ausencia de ellas entre la sociedad y el Estado. El primero habría ocurrido a fines de los años sesenta con los procesos que motivan la emergencia de intereses societales que rechazan el orden oligárquico; y el segundo habría ocurrido en los años noventa con la continuación o radicalización de algunos procesos (urbanización, violencia política) y la aparición de otros (neoliberalismo) que vuelven a modificar los intereses societales que esta vez rechazan el modelo Estado-céntrico. Actualmente, como antes, continúan algunos procesos y emergen nuevos que influyen en los intereses societales. No obstante, no tenemos aún evidencias que nos permitan hablar de un tercer cambio importante de estos intereses.

Para el desarrollo de este trabajo, es importante que detallemos, en primer lugar, dentro de qué marco de investigación se ubica y qué posición tomamos frente a ese marco.

1. ¿CÓMO ABORDAMOS EL TEMA?

La mayor parte de la literatura en ciencias sociales, al analizar la relación entre la sociedad y el Estado, se concentra en la representación política. Nosotros preferimos hablar de «tipos de vínculos» o «mecanismos de intermediación» en tanto que una eficaz «representación», como se la entiende, se ha producido en la historia política peruana solo durante un periodo muy corto, la década de los ochenta. Entendemos el modelo representativo siguiendo la definición que utiliza Martín Tanaka². Estamos de acuerdo con él en que, durante la década de los ochenta, el sistema de partidos en el Perú funcionó y logró cumplir sus tareas representativas³. Siguiendo a los teóricos de la democracia liberal, para hablar de representación en las democracias latinoamericanas, los sistemas de partidos deben cumplir tres requisitos mínimos: *a)* ser capaces de expresar las preferencias electorales dentro de los márgenes establecidos por ellos, *b)* intermediar y expresar en la esfera política los intereses y las demandas de los principales grupos de interés y movimientos, y *c)* mantener vigentes los pactos, explícitos e implícitos, entre los actores relevantes que permiten la continuación del juego democrático.

Siguiendo el ensayo bibliográfico de Pedro Pablo Luna (2007) sobre la representación política en América Latina, la lectura de los cambios en los vínculos o mecanismos de intermediación se puede abordar desde tres perspectivas principales:

- *La perspectiva institucional:* se ha centrado en describir las características de las élites partidarias y sus interacciones en el marco de las instituciones electorales formales que rigen cada sistema. Las investigaciones orientadas por esta perspectiva han centrado la explicación del cambio en el nivel de institucionalización de los partidos (Mainwaring & Scully, 1995) en si los partidos están pasando de ser «de masa» a «profesionales-electorales» y si están apareciendo nuevos partidos con características organizacionales más funcionales al contexto económico de crisis y austeridad (Coppedge, 1998), o en si los partidos funcionan como instituciones o como máquinas

² Según Tanaka, el modelo representativo clásico fue posible gracias a un proceso en el que se constituyeron tres pilares básicos. En primer lugar, los sistemas de partidos (expresión de los clivajes de la sociedad). En segundo lugar, el Estado de bienestar keynesiano (cuya capacidad redistributiva permitió que los términos de competencia política no fueran un juego de suma cero sino de suma positiva). Y, en tercer lugar, la incorporación de los grupos de interés y los movimientos sociales —de trabajadores y empresarios— en la esfera política (a través de pactos corporativos o de su institucionalización). Sin embargo, con los años la sociedad se tornaba más compleja y surgieron grupos que no se sentían incorporados, los «nuevos movimientos sociales». La dinámica representativa clásica tuvo que ampliarse y dar cabida a estos nuevos grupos de interés.

³ Véase más en Tanaka (1998).

políticas (Alcántara, 2004). En el Perú, tenemos algunos seguidores de esta perspectiva. Destacan los trabajos de Tuesta (1995), Tanaka (1998, 1999, 2005) y Pease (1999, 2008). Estos trabajos han tratado de explicar el colapso del sistema de partidos y la «crisis» de representación política centrándose en la dinámica de las élites partidarias y su relación con el resto de la sociedad.

- *La perspectiva no institucional*: se ha enfocado en explicar el cambio de vínculos a partir de una recompensa delegativa al buen desempeño económico. Este tipo de explicaciones surge a partir de casos como el Perú de Fujimori o la Argentina de Menem. En esta línea estarían los trabajos de las «democracias delegativas» (O'Donnell, 1994), del «neopopulismo» (Roberts, 1995; y Weyland, 1996) y de los *policy switchers* (Stokes, 2001). Todos estos estudios concluyen que el buen desempeño económico frente a la crisis económica de finales de los ochenta habría tenido un impacto significativo en la renovación del apoyo al liderazgo presidencial mediante un vínculo delegativo clientelista, y el trabajo de Panfichi y Sanborn (1997) se enmarcan en esta línea.
- *La perspectiva estructural*: esta entrada se centró en trabajar el tema de la crisis de representación a partir de determinantes estructurales. En esta línea estarían, principalmente, los trabajos sobre el realineamiento electoral (Hagopian, 1998) y sobre la evolución de vínculos entre partidos y electores (Roberts, 2002). Roberts propone sustituir el concepto de crisis de representación por el de cambio en el tipo de vínculo entre partidos y electores. Nosotros suscribimos este cambio de concepto y consideramos que debería extenderse, como ya lo hemos mencionado, hablando de un cambio en el tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado. En el Perú, autores como López (1991 y 1997), Cameron (1992 y 1994), Roberts (1996) y Grompone (1991) ya han trabajado sobre este punto.

Nosotros nos ubicamos en esta última entrada. Además de las variables institucionales y no institucionales, las variables estructurales también deben tomarse en cuenta para explicar el cambio en el tipo de vínculo. Ahora, comprendemos que una entrada integral tendría que evaluar tanto la importancia de variables institucionales y no institucionales como los procesos estructurales pero, en tanto se ha abundado sobre las dos primeras entradas, nos parece pertinente enfocarnos en los procesos de largo plazo y su incidencia en la modificación de los intereses societales y los vínculos con las instituciones políticas.

Para abordar el tema, hemos organizado la exposición a partir del análisis de cuatro periodos (de 1968 a 1980; de 1980 a 1990; de 1990 a 2000; y de 2000 a 2008) y dos momentos centrales de reorganización de intereses societales (la transición del modelo oligárquico al modelo Estado-céntrico, en 1968; y la transición de este último al modelo neoliberal, en 1990). No podemos hablar aún de un tercer momento, pero señalamos los nuevos procesos estructurales que podrían ir modificando los intereses societales que se formaron desde inicios de los noventa.

2. PERÍODO DE 1968 A 1980

2.1 Primer momento: ¿Cuándo, por qué y cómo se reorganizan los intereses societales?

Como indica Teresa Tovar, 1968 no es el inicio del ocaso de la sociedad oligárquica, sino la última etapa del proceso que llevó a su desaparición (1985, p. 25). En efecto, desde los años veinte, Haya y Mariátegui habían encabezado y representado un fuerte sentimiento antioligárquico de los sectores populares y medios de la sociedad peruana, que incluso alcanzó a mediados de siglo a sectores vinculados a la Iglesia, las Fuerzas Armadas, y a profesionales liberales. En los años sesenta, con la profundización de los procesos de industrialización, migración y urbanización, la sociedad peruana cambió radicalmente y las grandes mayorías (los campesinos, las mujeres pobres y los jóvenes migrantes) fueron desplazadas del lugar (en el sentido ideológico y geográfico) al que el orden oligárquico los había confinado por largo tiempo (Grompone, 2005).

Junto con los procesos de migración y urbanización, y el consiguiente desplazamiento de las mayorías de sus clivajes históricos, ocurre otro cambio de enorme trascendencia en el campo de las ideas. Se trata del acceso sostenido a la educación por parte de los sectores populares movilizados que, según Alberto Flores Galindo, representó una grieta fundamental para el orden oligárquico (1999, pp. 56-58). En efecto, a fines de los años sesenta, en la mayoría de escuelas y universidades públicas se había consolidado una visión de la sociedad peruana que descalificaba la Conquista y el papel desempeñado en nuestra historia por las clases altas, a la par que exaltaba los movimientos sociales. Esto es lo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart (1989) denominaron la «idea crítica». Además de ofrecer una nueva lectura de la realidad del país, la idea crítica propone una ética igualitaria y un impulso democrático asumido por el dirigente popular, el profesor de colegio y el militante de base.

La Lima de esos años vivía un fuerte impulso industrial. Desde los años cincuenta, la industrialización apareció como la clave del desarrollo nacional⁴. En los primeros siete años de aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) —de 1959 a 1966— que siguieron a la promulgación de la Ley de Promoción Industrial, el producto bruto interno (PBI) alcanzó la tasa de crecimiento más alta (7,3%), al igual que la producción manufacturera que creció a una tasa promedio anual de 10,3% (Jiménez, 1999, p. 21). Desde 1956 se da un activo proceso de sindicalización y en 1968 se reconstituyó la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Flores Galindo señala que el tipo de relación entre los patrones y obreros reproducía la relación entre terratenientes y siervos, marcada por el paternalismo. Los jóvenes obreros, que habían sido formados en la idea crítica, respondieron a este orden formando sindicatos y produciendo enfrentamientos cada vez más frecuentes. Los patrones empresarios respondieron cambiando el paternalismo por el autoritarismo, lo cual llevó a que los obreros radicalizados adscribieran el «clasismo», descartando el diálogo como medio para conseguir sus reivindicaciones. Se pasó a las huelgas, marchas y ocupaciones de fábricas. Sinesio López (1997, p. 315) define el clasismo peruano como «la forma que asumió el movimiento obrero desde fines de los sesenta hasta comienzos de los ochenta e influyó decisivamente en otros movimientos sociales de la misma época. Sus características principales fueron las demandas igualitaristas como objetivos del sindicato, la confrontación abierta como forma de lucha, la intransigencia y la combatividad como estilo sindical, la centralización y la disciplina rígida en la organización, el cultivo de la solidaridad y la autonomía de clase como valores fundamentales de los trabajadores y la fusión sindical de lo social y lo político».

El desarrollo de la idea crítica y el clasismo contribuyó a que los sectores excluidos (principalmente campesinos y sectores urbano marginales) comiencen a demandar un vínculo representativo que no encontraban en el sistema político, una representación que defendiera sus intereses. El orden oligárquico de vinculación entre lo social y lo político excluía a los analfabetos (mayormente indígenas o población campesina pobre) y se articulaba regionalmente a través de gamonales, en una lógica de patrón-cliente. Solo la emergente clase media y los sectores oligárquicos eran representados por los partidos. Sin embargo, es importante destacar que, desde finales de los cincuenta, partidos reformistas como Acción Popular, Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista representaron

⁴ Aunque «fue el capital extranjero el que lideró la modernización urbano-industrial de la economía en alianza con algunos sectores empresariales oligárquicos y nacionales con los sectores medios» (López, 1991, p. 148).

la incursión democrática de las nuevas clases medias que buscaban la inclusión de sectores populares en el sistema político. Pero la oligarquía insistía en conservar el orden estamental, aquel que naturalizaba la idea de que los campesinos y sectores populares no podían participar políticamente, que sus intereses no podían ser representados. Ese imaginario, que ya no podía resistir los procesos de cambios socioeconómicos traducidos en la idea crítica y el clasismo, será violentamente desplazado con la revolución de las Fuerzas Armadas.

2.2 ¿Cómo es que los nuevos intereses societales se logran vincular con las instituciones políticas del GRFA?

Frente a la irrupción de los movimientos sociales (campesinos, sindicales, de barrios) y movimientos guerrilleros en los sesenta, y a la ineficacia de los gobiernos civiles para realizar las reformas que la sociedad demandaba, un grupo de militares decidió dar un golpe para transformar el Estado y la sociedad «ordenadamente», y para frenar el avance del discurso y el accionar de la izquierda radical. El GRFA se autonombró representante de la sociedad antioligárquica, tanto de los sectores populares como de las clases medias y empresariales. Esta «representación» no fue el resultado de una ampliación del sistema político, de un mandato que nace de una elección popular (representación legal) o de una revolución social (representación sociológica), sino de la irrupción violenta de las Fuerzas Armadas para realizar una «revolución» en el nombre del pueblo. Los integrantes del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, como señalan varios autores, asumían que la sociedad peruana solo se podía cambiar desde el Estado.

El GRFA finaliza el proceso de descomposición del orden oligárquico. La radical reforma agraria, las reformas laborales, la reforma institucional con la que el Estado se convertía en el organizador máximo de la sociedad, y el discurso pro campesino y popular canceló el orden oligárquico. El GRFA decide articular la sociedad en un marco corporativista, donde el Estado revolucionario represente al conjunto de la sociedad. Legaliza así los nuevos sindicatos liderados por una nueva generación de dirigentes izquierdistas que desplazan al APRA del sindicalismo, y promueve la formación de organizaciones barriales, campesinas y obreras a través del Estado (por ejemplo el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) o la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP)), y de organizaciones con mayor grado de autonomía (CGTP). Se intenta establecer, entonces, un vínculo corporativo donde los grupos de interés (sindicatos, gremios, movimientos) deberían ser controlados por el gobierno. En los términos en que lo hemos definido, el vínculo representativo no existe durante este periodo:

el GRFA es una dictadura y establece un tipo de vínculo desde el poder en busca de hacer sostenible su régimen.

Las reformas de la revolución velasquista, acompañadas por grandes tomas de tierras del movimiento campesino sobre todo en el centro y sur andino, dejan, sin embargo, vacíos en la estructura de poder en el campo. Desaparecen las haciendas y los grandes propietarios, prevalece el sector asociativo (cooperativas y Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS)) y las comunidades campesinas. Estos vacíos serán ocupados por comerciantes, maestros de escuela y profesores universitarios, muchos de ellos marxistas, que en su vinculación con los alumnos reproducirían la relación autoritaria entre el gamonal y el campesino. La superioridad ya no se sostendría en la «raza», sino en la «ciencia» del materialismo histórico (Degregori, 1993). Bajo la premisa de una naciente sociedad igualitaria, la educación se constituye como el camino principal para llegar al progreso a la vez que, como señala Portocarrero, se daba la promesa de la ciudadanía a cambio del olvido de la cultura originaria.

En los espacios urbanos, se fortalecía el clasismo. Los obreros, avalados por una legislación laboral favorable y nuevas leyes de la comunidad industrial, cuestionaron fuertemente las relaciones de poder y trabajo existentes en las fábricas. Carmen Rosa Balbi (1989, p. 49-54) resalta cómo el clasismo desarrolló un fuerte impulso igualitario entre los obreros y de dignidad con los patrones, destruyendo la estructura de relaciones paternalistas y autoritarias de la sociedad oligárquica. Ante el estallido de la crisis económica de 1974, el movimiento sindical clasista se enfrenta también al gobierno militar y demanda la radicalización de las reformas, en una dirección socialista. De esta manera, el sindicalismo desbordó los límites que buscó imponer el gobierno reformista.

El movimiento de barrios también se ve legitimado por el gobierno revolucionario. Velasco autoriza las invasiones de terrenos buscando encontrar allí bases sociales de apoyo y les cambia el nombre: de ser calificadas con el epíteto peyorativo de «barriadas» pasan a llamarse «pueblos jóvenes», dándoles así un sentido más benigno y esperanzador. El movimiento barrial, al igual que el sindicalismo, recibe también el aliento del gobierno para organizarse al mismo tiempo que desarrolla esfuerzos autónomos y, en los momentos de crisis económica, rompe los tutelajes y marcha en contra de él.

Por otro lado, el empresariado nacional abandonó rápidamente su simpatía por los partidos centristas y derechistas surgidos anteriormente, para vincularse pragmáticamente con el proceso de fortalecimiento del Estado, con el que se hacía negocios, y para aprovechar la política de fortalecimiento del mercado interno impulsada por los militares. El temor al desborde popular unía a empresarios, clases medias profesionales y militares. Sin embargo, esta alianza se resquebraja

cuando el GRFA decide estatizar los principales medios de comunicación en 1974. Este fue un hecho emblemático que mostró la pérdida de poder e influencia de estos sectores sobre el gobierno y que los llevaría al campo de la oposición activa.

De esta manera, hacia el final del periodo velasquista (1968-1975), los movimientos sociales rebasan la estrategia gubernamental de establecer un vínculo corporativo con la sociedad; se convierten en los actores sociales y políticos principales desbordando el marco propio de la revolución militar. En este momento, se termina el experimento peruano y se inicia el periodo de la contrarrevolución, dirigida por el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Por su lado, el movimiento popular sigue creciendo y articulándose a nivel nacional bajo la hegemonía ideológica del clasismo.

Los otros actores en la escena son los nuevos partidos de izquierda y la clase media alta. Los partidos estaban proscritos porque la revolución militar no aceptó principios de representación alternativos y buscó bloquear todo mecanismo de intermediación que no estuviese controlado por el gobierno. El discurso del GRFA partía de una visión simplista y polarizada cuando, por contraparte, la sociedad se tornaba mucho más compleja y diversa. A pesar de la proscripción, diversos partidos de la «nueva izquierda» marxista fueron expandiéndose organizativamente desde las escuelas y universidades hacia los barrios, industrias, minas y comunidades campesinas, al mismo tiempo que proponían discursos alternativos y utopías políticas. Es importante remarcar que, en este momento, el maoísmo tuvo una fuerte influencia en las universidades nacionales y en el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEP). Nicolás Lynch (1990, pp. 64-68) dirá que en los setenta San Marcos era un templo de Mao.

Entre 1977 y 1979 se da el primer ciclo de protesta verdaderamente nacional. Desde el histórico primer paro nacional del 19 de julio de 1977, se suceden grandes movilizaciones lideradas por el movimiento sindical reclamando el retorno a la democracia. El periodo termina en 1979 con la convocatoria a elecciones para elegir una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución política. Es un evento trascendental en la historia de los vínculos entre la sociedad y la política en el Perú. Por primera vez en la historia republicana se dará una efectiva representación política: votarán los analfabetos y la izquierda marxista no estará proscrita en las elecciones. Son elegidos representantes de todos los sectores, el APRA, el Partido Popular Cristiano, Democracia Cristiana y varios partidos de la izquierda marxista que posteriormente se acoplarán en la Izquierda Unida. Solo Acción Popular se niega a participar en estas elecciones abogando por el retorno a la Constitución de 1933, es decir, invisibilizando los grandes cambios ocurridos. Irónicamente, sería el partido ganador en las elecciones generales de 1980. En síntesis, el proyecto de vinculación corporativista es rebasado por el

movimiento popular que el Estado intentaba controlar y, con la crisis económica, se desmorona para dar paso al retorno de la democracia.

3. PERÍODO DE 1980 A 1990

En 1980, luego de doce años de dictadura militar, la sociedad peruana se había transformado debido a grandes reformas modernizadoras implementadas por el Estado y pasó a su etapa postoligárquica. Los ochenta amanecieron con una sociedad civil organizada y politizada, un Estado grande e ineficiente, pero también con el inicio de la lucha armada por parte de un grupo radicalizado de estudiantes universitarios y maestros de las regiones más pobres e indígenas del país. Al mismo tiempo, las elecciones generales de 1980 reestablecieron el régimen democrático, y la competencia electoral permitió canalizar emergentes identidades sociales y políticas que optaron por participar en el nuevo sistema político.

3.1 ¿Cómo es que los intereses societales se revinculan con las instituciones políticas del régimen democrático?

Desde los años setenta, se habían venido configurando identidades políticas que en términos generales correspondían a identidades sociales. La identidad social, mayormente de clase, podía indicar a los sociólogos la probable identidad política de los individuos (afiliación partidaria, pertenencia a movimientos). Varios científicos sociales creían que, efectivamente, se estaba pasando de una sociedad estamental a una sociedad de clases⁵. Existía una correlación entre clase y orientación y/o filiación política que se sostenía, al igual que en el resto de América Latina y el mundo. Sin embargo, a lo largo de los ochenta, esta correlación va a cambiar, se va a complejizar y va a desaparecer.

A inicios de los ochenta, funcionaban varias instituciones representativas que fortalecían la democracia: *a)* los partidos: una alianza entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (escisión de Democracia Cristiana), ubicada a la derecha del espectro político; el APRA al centro; y el frente de la Izquierda Unida, que agrupaba a distintas capillas de la izquierda marxista que decidieron integrarse a la democracia electoral⁶; *b)* grupos de interés: como los sindicatos que tenían el prestigio de haber sido protagonistas de la lucha por la democracia en la década pasada y los gremios empresariales congregados en la Confederación

⁵ Flores Galindo (1999, p. 53) señala que un síntoma de esto era el notable incremento organizacional de la sociedad civil (particularmente de clubes, cooperativas y sindicatos).

⁶ Estos cuatro partidos constituirían el sistema de partidos durante toda la década, acaparando la representación de la gran mayoría del electorado.

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) (formada en 1984); *c)* los movimientos sociales: de barrios, regionales, estudiantiles y vecinales que también se habían plegado a las demandas sindicales, siendo en un momento hegemonizados por el discurso clasista; y *d)* las ONG y la Iglesia católica que, a lo largo de los ochenta, se encargarían de representar demandas que ni los partidos, sindicatos o movimientos trataban con importancia (fundamentalmente el tema de los derechos humanos). Las grandes movilizaciones de los setenta habían quedado atrás, pero la ciudadanía participaba políticamente a través de estas instituciones, con identidades políticas relativamente estables.

Es importante resaltar que en el Perú, a diferencia de otros países de Latinoamérica, los movimientos sociales de los setenta y ochenta no eran totalmente autónomos, sino que estaban estrechamente vinculados a los partidos de izquierda, que los apoyaban desde el parlamento y los municipios, y defendían sus intereses ante el Ejecutivo. Pensamos que no nos equivocamos al señalar que en el parlamento la izquierda representaba los intereses de los sectores populares. Tanaka sostiene que la izquierda representaba «demasiado» estos intereses, siendo difícil, muchas veces, diferenciar el espacio político del espacio social⁷. Es por esto que, cuando los partidos van perdiendo espacio, los movimientos también se verán seriamente debilitados.

Al igual que en los setenta, el conflicto social en los ochenta se expresa en movimientos sociales pero, a diferencia de la década anterior, ahora también se canaliza a través de los partidos de izquierda. Tanaka le llama a esto la «lógica electoral-movimientista», donde el juego representativo se determinaría en dos dimensiones: la primera, en las elecciones generales, con opciones limitadas al sistema de partidos y; la segunda, en la intermediación constante entre la sociedad y la política a través de los grupos de interés y los movimientos sociales. No obstante, a diferencia de los setenta, el movimiento popular no vuelve a estar articulado a nivel nacional. La inadecuación del clasismo al nuevo régimen democrático lo hizo ineficaz para tramitar los intereses de los trabajadores por

⁷ Tanaka señala que los partidos de izquierda crecieron y se desarrollaron estrechamente ligados a las organizaciones sociales (la CGTP con el Partido Comunista Peruano (PCP), el SUTEP y estudiantes con Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y organizaciones barriales con el Partido Unión Mariateguista (PUM), la Confederación Nacional Agraria (CNA) con el Partido Socialista Revolucionario (PSR), etcétera). Por el lado de la derecha, la CONFIEP se relacionó estrechamente con Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) e inclusive con el APRA, hasta antes de la estatización de la banca (Tanaka, 1998, pp. 76-77). Posteriormente, los grupos de interés empresariales se vincularían con el Movimiento Libertad y, más adelante, con el Frente Democrático Moralizador (FREDEMO), pero nunca serían tan dependientes de los partidos como los grupos de interés de los trabajadores. Es por esto que sobrevivirían al colapso del sistema de partidos en los noventa.

lo que su hegemonía decae y los conflictos se vuelven más sectoriales aunque aún organizados en movimientos. De todas formas, a diferencia de los setenta, sin articulación, los movimientos no representarán amenaza para el régimen.

Por otro lado, a pesar de la voluntad nacional de comenzar una etapa democrática, respetando la constitución elaborada por los distintos partidos que representaban la posición de la mayoría del país, un grupo marxista leninista maoísta decidió iniciar la lucha armada y declararle la guerra al Estado. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), primero desde Ayacucho y luego desde distintas regiones, desató una ola de violencia terrorista sin precedentes en la historia republicana, forzando al Estado a responder, induciéndolo al genocidio. El gobierno de Fernando Belaúnde, con Acción Popular, renunció a la dirección de la lucha antisubversiva y la delegó a las Fuerzas Armadas. En estas condiciones, con el mandato de terminar el problema lo más rápido posible, las Fuerzas Armadas tuvieron carta libre para violar derechos humanos en el combate, como efectivamente lo hicieron⁸.

3.2 Segundo momento: ¿Cuándo y por qué se vuelven a reorganizar los intereses sociales?

a) La incompreensión de los cambios sociales

En 1986, como agudamente anotó Nelson Manrique (2002, p. 65), el Perú tenía en el poder al partido reformista históricamente más importante del continente —el APRA—, la izquierda legal de mayor presencia política en la región —la Izquierda Unida— y la guerrilla [sic] más fuerte de América del Sur —el PCP-SL—. Sin embargo, indica Grompone (2005), el modelo de Estado y sociedad que proponían los partidos de masas, en especial el APRA y la Izquierda Unida, estaban descontextualizados. La globalización estaba en plena expansión, y el neoliberalismo crítico del Estado sobredimensionado se hizo hegemónico en el mundo. La economía y la sociedad tienden a la desregulación. La industrialización (para nosotros) pierde sentido y es sustituida por la reprimarización y terciarización de la economía. La identidad política se diluye frente a la inestabilidad de la identidad social. Definitivamente, la sociedad de fines de los ochenta no podía ser leída y dirigida con códigos de la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se estaba entrando a una sociedad más compleja, a una modernidad reflexiva. Sin embargo, los partidos seguían apostando por representar a los actores y el mundo social de los sesenta y setenta.

⁸ Solo en 1984 se produce el 19% del total de las muertes y desapariciones durante los veinte años de violencia. Véase CVR (2004, p. 24).

Así como la élite oligárquica no percibió a cabalidad el impacto de los grandes procesos estructurales de cambio de los cincuenta y sesenta, la élite política de los ochenta tampoco percibió los de su tiempo. En esta década, el modelo Estado-céntrico entró en crisis en toda la región. En el Perú, si bien nunca se llegó a consolidar un Estado desarrollista, tuvimos en su lugar Estados protectores y populistas, como el del gobierno militar. Sin embargo, en los ochenta, las diferentes crisis económicas, externas e internas (la deuda y la inflación), hicieron que este modelo sea cada vez más ineficiente. Guillermo Rochabrún (2007, p. 419) afirma que la crisis del Estado como mecanismo de redistribución para la burguesía, y el colapso de los servicios sociales para la población económicamente más débil, sería una de las razones que explicarían el cambio en la relación entre la política y la sociedad. Paralelamente, la industrialización por sustitución de importaciones se reveló inviable frente a la economía global, incrementando el desempleo y subempleo de manera sostenida (7,9% y 73,5%, respectivamente, en 1989) (Webb, 1991). Todo esto hacía ineficaz el trabajo de presión de los sindicatos, por lo que muchos obreros abandonaron el ideal del trabajo asalariado y se volcaron al sector informal. Como señala Jorge Parodi (1986), con la recesión y la necesidad de defender el puesto de trabajo, los trabajadores ya no asistían a las asambleas, reuniones y movilizaciones. Es el momento en el que los pequeños talleres y las organizaciones vecinales de sobrevivencia expanden su membresía. La informalidad se convierte en la mayor fuente de trabajo y erosiona la identidad clasista. Son los tiempos en que Parodi escribe que «ser obrero es algo relativo».

b) Procesos estructurales

Por otro lado, los procesos estructurales de urbanización y migración a la costa se habían intensificado tanto por las dificultades de la agricultura y ganadería como por la violencia política en los Andes. La población urbana pasó de ser el 58,1% en 1970 al 68,7% de la población en 1990. El incremento de la escolaridad continúa, pero el nivel de calidad de la educación pública se reduce debido a la menor inversión en el sector a partir de 1988, a raíz de la crisis económica. Como afirman varios expertos, la educación agotó su energía utópica, aquella que a través del mito de la educación y sus promesas de igualdad de oportunidades se había enraizado fuertemente en las comunidades campesinas. Los hijos de migrantes de los años sesenta, la segunda generación, habían crecido y formaban parte de la una nueva cultura urbana popular. Matos Mar, en 1984, la describe como la «fusión interregional de culturas, tradiciones e instituciones, con fuerte componente andino y dotada de un sentido propio de la ley y la moral [...] es un mundo que desborda el molde legal y que no encuentra límites entre

la clandestinidad, ilegalidad y el delito» (1984, pp. 90-91). Este mundo popular-informal ya no se sentía representado ni por los partidos ni por los movimientos sociales. Tanaka (1998, pp. 167-189) señala que, en los ochenta, la esfera política era fiel representante de la esfera social, un espejo de esta. Sin embargo, a finales de esta misma década, la esfera política parecía más un espejismo de la esfera social en tanto los partidos seguían representando a los grupos de interés y a los dirigentes de los movimientos sociales, pero estos representaban cada vez menos a la población. En este contexto, los ciudadanos se desligarán cada vez más de este tipo de vínculo con la política. Parecía el fin de la lógica electoral-movimientista.

c) Dos nuevos procesos en la escena mundial

Además de la continuidad de los procesos estructurales mencionados, nos alcanzan dos nuevos procesos: la crisis de modelo Estado-centrista y la globalización, con la difusión mediática de una gran variedad de discursos. Los nuevos procesos vuelven a reconfigurar los intereses societales manifestándose a través del economicismo y pragmatismo. El economicismo implicaba la renuncia al compromiso ético igualitario de la idea crítica apostando por una lógica costo-beneficio como matriz de acción y análisis. Y el pragmatismo, por su parte, representaba la renuncia al compromiso, a la solidaridad con la «clase» que el clasismo había inculcado desde finales de los sesenta proponiendo coincidencias y acuerdos cambiantes y coyunturales.

En medio de las múltiples crisis, el economicismo y pragmatismo forzaban un individualismo necesario para competir por los pocos recursos. Si con la idea crítica y el clasismo se tenía una identidad política que respondía a una identidad social «estable», con el economicismo y el pragmatismo se tiene una identidad social «inestable» que no podrá prever una «identidad» política. Para Rochabrún, la disolución del carácter de clase en la población significaría un gran impedimento para su posibilidad de representación («¿cómo puedo —señala Rochabrún— buscar un representante si no sé lo que soy, ni lo que seré?»). Sin un anclaje socioeconómico definido, que perfile un presente y un futuro, la lógica de representación —como se la ha pensado y como se la sigue pensando— no sería viable (Rochabrún, 2007). Las bases ideológicas del modelo Estado-céntrico y de la representación política, como tipo particular de medio de intermediación entre sociedad y política, entraban en crisis.

d) Violencia política y crisis económica

Por otro lado, durante esta década se dieron también dos graves crisis: la violencia política y la crisis económica. Ambas crisis terminaron de derruir

las organizaciones que servían de anclaje a las distintas dimensiones identitarias. La violencia, tanto del PCP-SL como del Estado, desestructuró las diversas formas de organización popular. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que la violencia afectó las formas sociales de organización de la producción y distribución, así como el desarrollo de la familia y la comunidad. Se alteraron las formas colectivas de organizar el trabajo, se suspendieron las redes y espacios de comercialización, y se paralizó el desarrollo comunitario. El conflicto armado interno paralizó el proceso de desarrollo del mundo rural (especialmente en Ayacucho y Huancavelica) dejando graves secuelas en la estructura productiva, la organización social, las instituciones educativas y los proyectos de vida de las poblaciones afectadas. Por otro lado, el PCP-SL se había infiltrado en algunos movimientos sociales y había creado, donde pudo hacerlo, organizaciones paralelas desde donde amenazaba a los dirigentes. Frente a esto, la participación política fue disminuyendo. El activismo decreció en gran parte debido al miedo, pues la represión del Estado podía llegar a ser tan o más violenta que la de Sendero. La violencia política desarticula así al movimiento popular. En respuesta a Sendero, sin embargo, aparecen nuevos movimientos, como la Asociación Nacional de Familiares, Detenidos, Desaparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP), y los movimientos de derechos humanos, entre otros.

Con respecto a la crisis económica, esta también obligó a la población a concentrarse en la supervivencia y a abandonar las medidas de lucha ineficaces. Durante 1988, cuando comenzaba a agudizarse la crisis fiscal y la inflación, los ajustes graduales de García hacen que se den cuatro paros nacionales. Balbi y Gamero resaltan que este es el año en que se da la caída salarial más violenta que registra la historia, pero también en el que se da la mayor cantidad de huelgas de los trabajadores en los ochenta. Se luchó en defensa de los derechos conquistados, priorizando la lucha salarial. Los dos últimos paros fueron un fracaso. A medida que la situación económica empeoraba, la capacidad de presión y organización también decrecía. De esta forma, en 1989, cuando la recesión se profundiza y los salarios caen más, como en 1985, no se da ningún paro nacional. No obstante, a diferencia de la crisis durante el gobierno de Belaúnde, los trabajadores utilizaron otras formas de lucha: la negociación, a través del sindicato, de los efectos de la recesión (defendiendo fundamentalmente la estabilidad laboral). Se aprendió que en una recesión, las huelgas y los paros ya no eran eficaces. El sindicalismo pasaba así del «clasismo» a una actitud más pragmática (Balbi & Gamero, 1990). Por otro lado, las organizaciones vecinales también tuvieron que replegarse y concentrarse en la organización de la supervivencia. El gobierno aprista implementó programas de apoyo social bastante sectarios y centralistas. Se estaba abonando el terreno

que permitiría el surgimiento del vínculo clientelista que ocuparía el rol central en la década siguiente.

e) Estancamiento de los partidos, grupos de interés y movimientos.

El fin de una etapa

De esta manera, las disputas intra e interpartidarias, la corrupción, el fracaso económico, la falta de capacidad para lidiar con el problema del terrorismo y la violación sistemática de derechos humanos hacen que los partidos se vean además de poco representativos, ineficientes y corruptos. Como se ha mencionado, las estrategias de lucha de los sindicatos y movimientos se hacen también ineficientes en medio de las crisis. Tanaka menciona, como se ha señalado líneas arriba, que la lógica electoral-movimientista termina sin que los partidos ni los grupos de interés se percaten. Este autor reclama la atención sobre una arena que comenzaba a cobrar autonomía, la opinión pública. En ese sentido, la vinculación de los electores con los partidos se establecía cada vez más a través de los medios, a través de la «imagen». Se estaba constituyendo la lógica reemplazante, la lógica electoral-mediática (Tanaka, 1998).

La caída de los grandes metarrelatos (socialismo, modernidad, progreso, etcétera) produce también una inseguridad ontológica fuerte. Como bien apunta Rochabrún (2007, p. 419), al agotarse los paradigmas de desarrollo creíbles desaparece una de las bases de adhesión a los partidos. En momentos de crisis, señala Kurt Weyland (2000, p. 230), cuando la población no tiene ya nada que perder, hay más probabilidad para apostar, para aventurarse a elegir a un desconocido, a un redentor. Ese es el inicio de Fujimori.

4. PERÍODO DE 1990 A 2000

La crisis sin precedentes de finales de los ochenta desprestigió a los partidos (tanto por dejar de ser representativos como por ser ineficaces para superar las crisis que azotaban el país); pero en los noventa Fujimori hace que se pase de un antipartidismo reactivo (que criticaba privilegios, inconsistencias, corrupción) a un antipartidismo cultural que cuestiona el sentido mismo de los partidos, haciendo creer que estos introducen falsas divisiones en la población (Grompone, 2005, p. 217). Hagopian (2000, p. 296) cita a Cotler señalando que si de 1980 a 1987 se había generado la descomposición de las identidades partidarias, de 1987 a 1992 se había llegado a producir una desintegración de las identidades políticas. Fujimori buscaba así que se cuestionen los fundamentos de la representación política y, consecuentemente, de la democracia.

4.1 ¿Cómo es que los nuevos intereses societales se revinculan con las instituciones políticas del autoritarismo?

Alberto Fujimori instaló un régimen político autoritario. Así como la crisis de la sociedad oligárquica, que los partidos no supieron procesar a tiempo, facilitó el ascenso de un régimen dictatorial que implementó los cambios —el GRFA—, también la crisis de la sociedad Estado-céntrica, no identificada por los partidos, facilitó la instalación del gobierno autoritario de Fujimori. Como Velasco en los setenta, Fujimori en los noventa impondría un nuevo y diferente tipo de vínculo entre el Estado y la sociedad.

A pesar de haber prometido que no realizaría un ajuste estructural o *shock* económico, como sí lo había anunciado su principal adversario —Mario Vargas Llosa—, apenas accedió al poder, Fujimori implementó uno de los programas de estabilización más drásticos de la región con el objetivo fundamental de reducir la hiperinflación. Más adelante, en 1991, pasó a una segunda etapa en la que aplicaría las reformas estructurales basadas en el Consenso de Washington. El gobierno se encargó de cumplir todos los requisitos demandados por los organismos internacionales —Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM)— para reinsertar al Perú en la comunidad financiera internacional. Así, se propició un margen de intervención a los agentes y mecanismos de mercado a la par que se buscó que el Estado le sea funcional. Entre las principales reformas emprendidas destacan la profundización de la liberalización comercial y financiera, la flexibilización del mercado laboral, las medidas de promoción de la inversión privada, y el inicio del proceso de reforma del Estado. Por otro lado, el impacto de la recesión y de la política liberal se manifestó en el desmantelamiento de la industria, la política de privatización de las empresas públicas y la racionalización de la administración pública (Balbi, 1994). A esto se sumó una draconiana ley de huelgas.

En 1992, Fujimori, que no tenía mayoría en el Congreso, consideró que este era un obstáculo para continuar las reformas estructurales y su plan de «pacificación» contra el terrorismo; y que la consolidación del modelo neoliberal y la nueva legislación antiterrorista requerían eliminar la oposición política. Por estas razones es que el 5 de abril, mediante una alocución pública dirigida al país, Fujimori concreta el denominado autogolpe anunciando la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la instauración de un «gobierno de emergencia y reconstrucción nacional». El 80% de los peruanos apoyó estas medidas. En noviembre de 1992, ante las presiones internacionales, Fujimori convocó a elecciones para elegir a los miembros del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD). En este nuevo Congreso, Fujimori cuenta

con la mayoría que le permite redactar y aprobar una constitución ajustada a sus lineamientos de política. En octubre de 1993, esta constitución se somete a referéndum obteniendo el apoyo del 52,24% de la población. Con este nuevo marco, se eliminan los obstáculos para las reformas neoliberales y se logra establecer una nueva Ley de Defensa que otorga carta blanca a las fuerzas armadas para implementar una agresiva política contrasubversiva que derivó, en ciertos momentos y ciertos lugares, en delitos de lesa humanidad que, al contar con el apoyo del gobierno, gozaron durante un tiempo de impunidad.

El autogolpe fue ampliamente respaldado por el empresariado y los sectores populares, los dos grupos con los que el autoritarismo gobernará.

Los grupos de interés como la CGTP fracasaron en su protesta contra el ajuste económico no solo debido a la represión del gobierno, sino también, y principalmente, a la desconexión entre las bases y la dirigencia. Los trabajadores formales y la gran masa de informales se sentían cada vez menos representados por los gremios establecidos; el sindicalismo no llegó a promover propuestas globales o de carácter aglutinante que expresaran los intereses del conjunto de la clase trabajadora tradicional y sus nuevas categorías. El sindicalismo no encontró la forma de dar respuesta a los nuevos lineamientos de la política liberal (Balbi, 1994). Por otro lado, debido a los escándalos de corrupción, a sus pugnas internas y a la ineficiencia, los partidos estaban aún más desprestigiados. En síntesis, el apoyo masivo al cierre del Congreso expresó el agotamiento del vínculo representativo como había sido establecido en los ochenta. Las reformas estructurales en la economía culminan el proceso de agotamiento del modelo Estado-céntrico iniciado a fines de los ochenta. Este cambio estructural, además de quitarle al Estado el rol de productor para convertirse en administrador, terminó por minar también las bases del vínculo representativo establecido en los ochenta.

La política de Fujimori impuso un nuevo tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado. Al respecto, Balbi habla de una «delegación vigilada» y Tanaka de un «neoclientelismo». Ambos conceptos son similares. Para Balbi, la relación entre la población y Fujimori pasó de una adhesión entusiasta con el autogolpe a un apoyo más razonado con el referéndum constitucional del año siguiente. El apoyo posterior al referéndum habría sido más pragmático, en función a un análisis costo-beneficio (Balbi, 1996). Tanaka parece tener un análisis similar al indicar que el vínculo clientelar no es tradicional en tanto la adhesión al líder no es signo de entusiasmo sino de resignación. Los recursos estatales se aceptan y se usan simplemente porque se necesitan en una relación de intercambio, antes que de lealtad. No se trata aquí de una manipulación, el apoyo a Fujimori fue condicional y selectivo. Tanaka (1999) señala que se trató de un vínculo neoclientelar entre la sociedad y el Estado. Este vínculo no es puramente delegativo

o plebiscitario, sino uno donde la relación entre el gobierno y la población está en continua negociación en función de los intereses particulares de cada uno. Pero, además de esta relación, Fujimori estableció también un vínculo mediático a través de los medios de comunicación y la opinión pública que se reflejaba en las encuestas. Esto encajaría dentro del enfoque de Bernard Manin (1992), quien habla del paso de la democracia de partidos a la democracia de lo público, donde la ciudadanía se transforma en audiencia. Tanaka también advierte sobre la aparición de una nueva lógica, la lógica electoral-mediática que suplanta a la lógica electoral-movimientista.

a) El neoclientelismo

Desde los primeros programas de ayuda social luego del *shock* económico, el régimen fujimorista construyó redes de clientelas con las que consiguió el apoyo de los sectores más vulnerables al ajuste estructural.

Fujimori estableció un sistema de intermediación política basado en operadores políticos independientes o *brokers*, antiguos militantes reciclados de diversos partidos, mediante los que se hacían llegar «obras» a los sectores que habían estado más desconectados del Estado y del mercado.

Los *brokers* legitimaban su función en la inestable y cambiante red de distribución de prebendas por medio del aparato estatal que estableció el régimen fujimorista (Meléndez, 2005). El *brokerage* es un mecanismo de transacción de demandas caracterizado por la distribución de bienes y servicios por medio de una mediación individualista. Es posible gracias a la centralización y escasez de recursos, y desorganización de la sociedad. Uno de los resultados evidentes del *brokerage* es reforzar la personalización de la política. El triunfo de Fujimori en las elecciones de 1995 se debió, en gran parte, al fuerte gasto social invertido en las redes neoclientelares. A lo largo de su gobierno, Fujimori se encargó de fortalecer estas redes de operadores políticos para mantener el apoyo de los sectores populares a cambio de bienes y servicios.

Uno de los casos más representativos de *broker* es el de Absalón Vázquez, un fogueado ex militante del APRA que conocía a Fujimori desde que este fuese rector de la Universidad Nacional Agraria. Yusuke Murakami explica que Vázquez fue la conexión entre el gobierno y las provincias gracias a las amplias redes de clientelaje que había cultivado (2007, p. 525). En 1998, bajo órdenes del gobierno, Vázquez constituyó el movimiento Vamos Vecino para que el oficialismo participe en las elecciones municipales de ese año. Grompone afirma que Vázquez armó su propio aparato político creando una estructura paralela al Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), esta vez con rostro visible, que daría un sustento social

no desdeñable al fujimorismo, aunque Fujimori quedaba fuera del primer plano. Se capitalizaba así la tradición organizativa de la población para formar redes que serían más eficaces que antaño, en tanto que ahora se podía llegar a las instancias de decisión con una intención reivindicativa velada y sin plantear confrontación. Así, en las elecciones municipales de 1998, la capacidad de movilización de Vázquez produjo sus frutos, pues muchos candidatos oficialistas salieron elegidos (se ganó en 76 de las 194 provincias, y en 597 de los 1622 distritos) y de este modo el *broker* demostró que tenía una fuerza nada despreciable. Su capacidad de movilización a nivel de provincias constituyó un soporte importante para las elecciones del 2000.

b) Lógica electoral-mediática

Los medios de comunicación jugaron también un papel muy importante en la construcción del personaje político y en la representación de la opinión pública. Carlos de la Torre (2007, p. 11), siguiendo a Boas, indica que la televisión es el medio por el que los líderes neopopulistas se vinculan con las masas atomizadas y desorganizadas del sector informal. Y, en efecto, Fujimori supo utilizar tanto la televisión como la denominada prensa «amarilla» o «chicha» a lo largo de su gobierno. Transmitió sus viajes por todo el país mostrando lo «cerca» que estaba él mismo de toda la población, sin partidos, ni ministerios, ni otras organizaciones de por medio. Carlos Iván Degregori (2000, p. 145) señala que se utilizaron los medios para ofrecer la «ilusión de participación e igualdad»; se hacía ver en Fujimori «un presidente como tú», un peruano común y corriente que sabe tomar las decisiones fuertes que los peruanos quieren y que el Congreso y las demás instituciones impiden. Frente a una esfera pública debilitada y que podía sucumbir ante las presiones económicas y políticas del régimen, Vladimiro Montesinos pudo montar un aparato de propaganda del que se beneficiaron tanto los ejecutivos como los periodistas (Degregori, 2000, p. 15). Fujimori supo aprovechar las ventajas de la nueva lógica electoral-mediática para vender su imagen.

c) La política del miedo

Para terminar de explicar el tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado en tiempos de Fujimori, además del neoclientelismo y la lógica electoral-mediática, es importante mencionar también la política del miedo, como la ha llamado Jo Marie Burt (2006). Esta política consistió en criminalizar la protesta y poner la etiqueta de «terrorista» a la oposición incómoda. La captura de los líderes del PCP-SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Abimael Guzmán

y Víctor Polay, respectivamente, hizo que la gran mayoría del país apoyara la estrategia autoritaria. Fujimori aprovechó esto para sembrar el miedo en los ciudadanos, así como para deslegitimar todo intento opositor. Esta es una de las razones principales por las que el conflicto social no se manifiesta. Y si lo hace, es de forma desorganizada y fragmentaria. A esta razón se suma, por supuesto, la poca capacidad de los movimientos y sindicatos para implementar nuevas estrategias de lucha y reestablecer sus vínculos con los grupos que pretendían representar. En detrimento de estos últimos, proliferaron en cambio las organizaciones de supervivencia, apoyadas por el gobierno.

En resumen, las bases de la revinculación entre los intereses sociales y el gobierno autoritario fueron: *a)* el neoclientelismo, *b)* la lógica electoral mediática y *c)* la política del miedo. Las reformas estructurales acabaron con el modelo Estado-céntrico imponiendo un desarme del Estado que no supo ser respondido con una propuesta alternativa por parte de los grupos de interés de los trabajadores. La gran mayoría de la población aceptó con resignación el ajuste y confió en el programa de estabilización de Fujimori. El aparente éxito del modelo para 1995 (sumado al fuerte gasto social en las regiones donde menos votación había obtenido en el referéndum constitucional de 1993) hizo que la población recompensara pragmáticamente a Fujimori renovándole su apoyo en las elecciones de ese año. De la misma forma, la publicitada derrota del terrorismo adjudicada a la «mano dura» hizo que la población reafirme su apoyo al gobierno y se aleje cada vez más de la lógica movimientista, constantemente descalificada por los medios. El conflicto social se redujo y por momentos desapareció. Pero, por supuesto, esto no podría durar por siempre.

d) La caída del autoritarismo

La presión internacional, los escándalos de corrupción, las discrepancias internas y la movilización popular hacen que el régimen caiga cuando intentaba un tercer periodo presidencial. La movilización evidenció la presencia de una aún existente, pero debilitada, sociedad civil organizada.

Destacó la activa participación de los frentes provinciales, departamentales y regionales que en marzo de 1999 formaron la Coordinadora Descentralista de Frentes Regionales potenciando su poder de negociación frente al gobierno central y coordinando sus esfuerzos en el ámbito nacional (Kahatt, 2002, pp. 474-476). Esto fue un importante antecedente del proceso de descentralización que se daría más adelante. Los trabajadores con experiencia sindical, las clases medias profesionales, la gran red de ONG (particularmente de derechos humanos)

que se había ido formando en los noventa, los movimientos regionales y los jóvenes universitarios fueron actores centrales en la lucha contra la dictadura.

La sociedad civil se había transformado. Cuando se retorna a un régimen democrático en noviembre de 2000, con la toma de mando de Valentín Paniagua, el escenario era muy distinto al del retorno a la democracia de los ochenta con Belaúnde. Entonces, existía una sociedad civil organizada y politizada, con grupos de interés representativos y un sistema de partidos que agrupaba las opciones políticas de la gran mayoría. En contraste, a finales de 2000, luego de la caída de Fujimori (cuya salida era el único tema que unía a diferentes sectores de la sociedad civil), se tenía una sociedad civil fragmentada, desorganizada y antipolítica. Existían numerosas organizaciones sociales, pero la mayoría dedicada a luchar por la sobrevivencia y con poca capacidad de impactar en la política. No existía nada parecido a un sistema de partidos y la mayoría de la población mantenía una posición antipartidista. Era evidente que los vínculos establecidos por el autoritarismo serían difíciles de modificar.

5. PERÍODO DE 2000 A 2008

5.1 ¿Se vuelven a modificar los intereses societales? ¿Cómo se están revinculando con las instituciones del nuevo régimen democrático?

a) La novedad: el proceso de descentralización

En la lucha por la democracia, los intereses societales no se llegaron a modificar como sí ocurrió a finales de los sesenta y de los ochenta. En la primera década del siglo XXI, han continuado, aunque con menor intensidad, los procesos de migración y urbanización. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2007, la población urbana alcanza ya el 75,9% de la población total. Asimismo, se ha seguido incrementando el acceso a la educación; en 2006, la cobertura en primaria ha alcanzado el 93,1% y; en secundaria, el 72,6%. No obstante, el objetivo de aumentar el acceso a la educación se ha cumplido a costa de reducir los estándares de calidad⁹. Por otro lado, los procesos de globalización y de agotamiento del modelo Estado-céntrico —con la desindustrialización y consecuente informatización— de finales de los ochenta se han consolidado junto al incremento del desempleo y subempleo.

⁹ El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (PISA) corroboró, en 2001, el bajo rendimiento estudiantil de los jóvenes peruanos. De 43 países participantes en la prueba, Perú fue el único país donde más de la mitad de sus estudiantes, cerca del 54%, se ubicó en el nivel más bajo de la escala establecida. Véase <<http://www.pisa.oecd.org>>.

La novedad de esta década es el proceso de descentralización. Durante el gobierno de Toledo, en 2002 y 2006 se celebraron elecciones regionales y municipales, dejando atrás los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). La descentralización ha implicado la progresiva transferencia de funciones políticas, económicas y administrativas. En pleno crecimiento económico, esta transferencia de recursos a las regiones, provincias y diversas localidades ha llegado, en muchos casos, a sobrepasar su capacidad de gestión de la inversión. Por otro lado, si bien sería un error decir que el modelo neoliberal está agotado, sí es cierto que sectores cada vez más amplios de la población están disconformes con los resultados.

b) Los obstáculos a la reforma participativa

Durante la transición se intentó recomponer el sistema de partidos y recuperar el prestigio de la democracia como sistema de representación política. El presidente Paniagua promovió además un *boom* participativo con el que se buscaba restablecer un vínculo democrático entre la sociedad y el Estado que promueva la fiscalización y propuesta constante de la sociedad civil. Se trataba, así, de desarmar la red de clientelaje del autoritarismo. Otro de los hechos fundamentales de su gestión fue la creación de la CVR, la cual dio cuenta de la incompetencia de la clase política y de la indiferencia de buena parte de la sociedad civil frente a la guerra interna entre 1980 y 2000, y recomendó por ello la necesaria refundación del pacto social.

Alejandro Toledo llegó a la presidencia como un nuevo *outsider*, sin un verdadero partido. En un principio representó la demanda antidictatorial que se formó en las manifestaciones contra Fujimori. Toledo encabezó estas protestas, particularmente la «Marcha de los cuatro suyos», y se autodesignó el representante de «todas las sangres». La mayoría de los sectores que habían luchado contra el gobierno fujimorista se identificaron rápidamente con él. Otro gran sector también se logra identificar con Toledo pero no por su mensaje antiautoritario, sino por su «cercanía». Su perfil étnico indígena favorece su identificación con el electorado. Además, en la ya consolidada lógica electoral-mediática, los medios construyeron la imagen de «el cholo que la hizo». Se le presenta como el cholo que nació pobre, paupérrimo, que lustró zapatos pero que, al final, llegó a estudiar en Harvard y casarse con una gringa. La imagen que se vende de Toledo es una imagen grata, una imagen de éxito bastante valorada. Los medios lo presentan así y, una vez más, la población «se engancha» y vota por él.

Durante el gobierno de Toledo, se continuó con el *boom* participativo y comenzó el proceso de descentralización. Si bien Toledo no tocó el modelo económico neoliberal, intentó continuar con las reformas de institucionalidad

democrática hechas durante el gobierno de Paniagua. En este marco, se organizó el Acuerdo Nacional suscrito por diversos partidos y organizaciones de la sociedad civil, para institucionalizar el diálogo y consenso democrático; y se promulgó la Ley de Partidos Políticos, que tendría el objetivo de institucionalizar un sistema de partidos. El proyecto participativo promovía efectivamente una mayor intervención de la población en la toma de decisiones y se vinculaba bastante bien con la reciente descentralización. Se establecieron instancias como la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, las mesas de concertación, los presupuestos participativos, etcétera. Sin embargo, el partido del gobierno, Perú Posible, le pondrá obstáculos a este proceso en 2002, cayendo seducido por la aparente facilidad del vínculo neoclientelista frente al amenazante vínculo participativo¹⁰. Meléndez (2005, pp. 176-177) explica que «los mecanismos de participación se posicionan como canales de mediación entre un Estado que no puede garantizar autoridad ni satisfacción de demandas y una sociedad fragmentada cuyos intereses resultan difíciles de representar. Los partidos llegan con dificultades al nivel regional pero, en el nivel local, lo que funciona son los operadores políticos». Para este autor, con el *boom* participativo el Estado prometió mucho más de lo que podía cumplir, generando expectativas que luego fueron frustradas. Esta sería una de las explicaciones del incremento de protestas y conflictos por todo el país.

c) Una forma conflictiva de vincularse con el Estado

Con el cambio de la estructura de oportunidades políticas a raíz del cambio de régimen, diversos conflictos sociales volvieron a brotar en todo el país. Una de las razones que propició el estallido de los conflictos fue la falta de intermediarios eficaces entre la sociedad y la política. Luego del colapso del vínculo representativo, el vínculo neoclientelista o de *brokerage* instalado por Fujimori tuvo que mantenerse frente a la falta (o fracaso) de alternativas. Sin embargo, sin la red neoclientelar redistributiva que había armado Fujimori y sin la política del

¹⁰ La fractura del proceso de participación se inicia en noviembre de 2002 con el proceso electoral que pone en marcha el proceso de descentralización y continúa con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972 de mediados de 2003, donde sectores del partido del gobierno, en alianza con los partidos tradicionales presentes en el congreso, limitan el alcance y la obligatoriedad de los acuerdos tomados en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), al mismo tiempo que crean nuevos consejos de coordinación regional y municipal (Consejo de Coordinación Regional (CCR) y Consejo de Coordinación Local (CCL)) que duplicaron las funciones de las mesas respecto a la elaboración de los planes de desarrollo concertado. Panfichi sostiene que la negativa de los partidos al proceso participativo parece estar vinculada a la hegemonía en estas organizaciones de una concepción delegativa de la democracia y del liderazgo político, como también a recelos frente al surgimiento de nuevos actores y espacios que hace más compleja la problemática de la representación política. Véase Panfichi (2007, pp. 36-41).

miedo, la competencia por la redistribución de recursos se hizo más agresiva y estalló. En esta situación, el conflicto se presentó como otra forma de vincularse al Estado cuando no se tiene acceso al vínculo neoclientelar o cuando este resulta insuficiente. Las políticas participativas y la descentralización deberían haber canalizado las demandas populares, pero el fracaso de las primeras hizo que estallaran los conflictos, muchas veces, de forma violenta. Es por esto que aparecieron los movimientos de cocaleros, maestros, empleados públicos, antimineros, etcétera. Y, a pesar de que estos movimientos son desarticulados y dispersos, cada vez amenazan más a la gobernabilidad.

Quedaron entonces dos tipos de vínculos entre la sociedad y el Estado: *a)* el vínculo neoclientelar, o de *brokerage*, instalado por Fujimori; y *b)* el conflicto social, que estalla y obliga al gobierno a dialogar.

5.2 Período del 2006 al 2008: el nuevo impulso neoliberal de Alan García y la posibilidad de nuevos vínculos entre la sociedad y el Estado

Las elecciones del 2006 polarizaron a la sociedad peruana. Los intereses societales que preferían un orden alternativo al neoliberal y se vieron traicionados por Toledo optaron por un cambio, pero no por el cambio radical que proponía Ollanta Humala, quien proclamaba representar a los excluidos —en una simplificación velasquista de la sociedad—, sino por el cambio responsable de un reeditado Alan García, que apelaba al discurso de centro, donde el APRA siempre ha buscado ubicarse.

a) Nuevo impulso neoliberal

En este periodo, García, como Toledo, no buscó hacer ningún cambio en el modelo económico, traicionando a buena parte de la demanda popular que lo llevó a la presidencia. El modelo sigue siendo prácticamente el mismo que Fujimori instalara en 1990. Pero, aún más, García parece querer dar un nuevo impulso al modelo neoliberal. Para el García de 2008, el único camino para conseguir el desarrollo consiste en valorizar los recursos económicos del país para su explotación mediante la propiedad privada y las grandes inversiones. Para esto, habría que enfrentar a dos enemigos del desarrollo: los perros del hortelano y el aparato estatal. El presidente ha escrito una serie de artículos (3) conocidos hoy como la saga del «Perro del hortelano» donde explica su visión del desarrollo criticando a los intelectuales y agitadores (para él, viejos comunistas del siglo XIX que ahora se disfrazan de medio ambientalistas) que estarían truncando el avance del país al no producir y no dejar que nadie más produzca. De igual manera, critica también

a la burocracia estatal y al Congreso, que en su afán controlador, retrasaría la ejecución de las propuestas «modernizadoras» desde el Ejecutivo (García, 2008). Esta visión de García se ha materializado en la promulgación de más de cien decretos legislativos en ciento ochenta días para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Por supuesto, estos decretos no solo tienen que ver con el TLC, sino también con la profundización del modelo neoliberal. Un ejemplo es el decreto 1015 que buscaba facilitar la venta de tierras de comunidades campesinas a empresas extractivas, reduciendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes a solo la mitad de la comunidad más uno. Este decreto, denominado «la ley de la selva», provocó la movilización más grande hecha por los pueblos nativos del Perú. Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, la extendida protesta logró derogar la ley.

Pese a las reiteradas críticas por el giro cada vez más neoliberal que toma su gobierno, García parecía sentirse satisfecho con el significativo crecimiento de la economía que llegó al 8,9% en 2007 y que tuvo un ritmo de más de 10% anual entre enero y mayo de 2009. Y es que frente a la incapacidad del Congreso, las disputas al interior del APRA y el Partido Popular Cristiano, la falta de acción coordinada del nacionalismo en el sistema político, la sumisión de los ministros, y la primacía de intereses regionales particulares en la Asamblea de Gobiernos Regionales, la política —como señala Ballón— terminó reducida a la figura de Alan García.

El presidente ocupaba todo el escenario criticando y hasta descalificando a todos los demás actores (Ballón, 2008). Su actitud era peligrosamente autoritaria y buscaba que su partido, bajo su absoluto control, tuviese cada vez más control del Estado. Una de las últimas manifestaciones de esto se tradujo en el evidente intento de copar el Estado al haber nombrado a militantes apristas en cargos claves como la dirección del Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES), del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), del Programa Crecer, la dirección del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de los Suelos (PRONAMACHCS), del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

A esto se suman «compañeros» que encabezaban el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Superior de Justicia de Lima. La presencia aprista en lugares estratégicos de los principales programas de ayuda social recordaba mucho la red neocientelista que Fujimori armó en los noventa. La diferencia es que Fujimori trabajó sin un partido, con

maquinarias electorales y operadores políticos; en cambio, García tuvo detrás a la única organización que puede calificarse como partido político en el país. Con esta base organizativa, su control autoritario podría ser más sólido.

Sin embargo, la desaprobación a su gestión fue cada vez mayor. Los datos de la encuesta aplicada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en junio de 2009 señalaban que el 63% de la población desaprobaba al gobierno (y en el sur, la desaprobación llegaba al 77%). El vínculo neoclientelista resulta cada vez más insuficiente para demandar una redistribución acorde con el crecimiento que tanto se publicita y, por ello, el conflicto social se constituye como la principal forma de relación que establece la población con el Estado.

b) Nuevas formas de intermediación entre la sociedad y el Estado

El conflicto social se manifiesta ahora utilizando también otros medios de intermediación. Hagopian (2000, pp. 318-319) advertía que la naturaleza de la representación política se descentralizaría. En el Perú, el proceso de descentralización no comenzó precisamente con Toledo, sino con las protestas regionales de finales del gobierno fujimorista. Las sociedades locales demandaron y demandan una intermediación con el gobierno central para obtener recursos y protestar por diversos problemas. Es verdad que no están satisfechas con la gestión de los gobiernos locales, y el enfrentamiento frontal con estos representa un gran porcentaje de conflictos en el país. Pero, sin embargo, desde noviembre de 2006, la mayoría de los gobiernos regionales son conducidos por movimientos (más que partidos) regionales. Con esto, la población apostó por una alternativa de intermediación más cercana que los distantes y oportunistas partidos nacionales. Se trata de un cambio importante porque se desplazan los partidos nacionales que solo ganan en cuatro de las veinticinco regiones (el APRA en la Libertad y Piura, Unión por el Perú en Cusco, y el Movimiento Nueva Izquierda en Pasco). La opción del movimiento regional en el gobierno, como vínculo entre la población regional y el Estado central, es una alternativa que podría permitir una diferente canalización de los conflictos sociales.

Por otro lado, y para terminar, habría que mencionar también que muchos de los demandantes en conflictos antimineros, por el medio ambiente o por reivindicaciones indígenas, al no tener eficiente intermediación o representación en los partidos o movimientos actuales, se vinculan a organismos internacionales con capacidad de ejercer presión al gobierno (por ejemplo, OXFAM). Este fenómeno se daba desde los ochenta con las organizaciones de derechos humanos, pero es interesante ver que ahora se multiplican en diversos conflictos, como bien señala Anthony Bebbington (2007, p. 191). Con el apoyo de estos organismos,

se fortalecen también en el país redes que promueven el desarrollo alternativo y sostenible, defendiendo los intereses de los pobladores afectados, sobre todo, por las mineras. La Red Muqui es un claro ejemplo de la articulación de diversas organizaciones sociales por la promoción del desarrollo sostenible. Estas redes servirían también como mecanismos de intermediación alternativos que podrían organizar los conflictos, sirviendo como interlocutores entre los demandantes y el gobierno.

Así, *a)* los gobiernos regionales dirigidos por movimientos regionales y *b)* las redes transnacionales y nacionales a las que se apelan podrían servir como vínculos alternativos entre la sociedad y el Estado. Se podría hablar de un mecanismo de intermediación glocal en tiempos de globalización, donde los actores nacionales, como los partidos, no tienen la capacidad de establecer vínculos efectivos y eficientes con una gran diversidad de demandas.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de estos últimos cuarenta años, diversos procesos estructurales han impactado en los intereses sociales haciendo que la vinculación entre la sociedad y el Estado se modifique repetidamente. Esto ha imposibilitado la institucionalización de un eficiente vínculo representativo. El primer momento de cambio se da a finales de los sesenta, debido al impacto de los procesos de migración, urbanización e industrialización, junto al mayor acceso a la educación. Estos procesos cambiarían los intereses sociales promoviendo la idea crítica y el clasismo. Los nuevos intereses rechazarían la vinculación patrón-cliente con el Estado que sostenía en el poder a la oligarquía. El GRFA realizó una serie de reformas Estado-céntricas y buscó representar los nuevos intereses desde el Estado, estableciendo un vínculo corporativo con la población para que, de esta manera, se pueda modernizar la sociedad «ordenadamente». Sin embargo, el desborde de los movimientos sociales politizados y la aparición de la nueva izquierda sobrepasaron los límites impuestos por la revolución militar exigiendo un vínculo auténticamente representativo. Es así que en la década de los ochenta se retorna a la democracia con un sistema de partidos y grupos de interés de los distintos sectores de la sociedad. Se establece, así, un vínculo representativo.

El segundo momento de cambio se daría a finales de los ochenta e inicios de los noventa. Para entonces, los procesos de migración y urbanización continuaban; mientras que el proceso de industrialización se detenía. Por otro lado, se evidenciaban el proceso de agotamiento del modelo Estado-céntrico y el mayor impacto del proceso de globalización, tanto en el campo político como en el económico y cultural. Además, el país vivía el peor momento de violencia

política y de crisis económica. Frente a todo esto, las identidades sociales se volvían inestables y las identidades políticas se perdían. Los discursos que se basaban en las capacidades del modelo Estado-céntrico pierden vigencia, junto a la idea crítica y el clasismo que serían reemplazados por el economicismo y el pragmatismo. El cambio de intereses societales, entonces, impulsaría el rechazo al vínculo representativo de los ochenta por su ineficiencia, buscando conectarse de otra manera con el Estado. La vinculación a través de los medios de comunicación con la política sería el inicio del cambio de una lógica electoral-movimientista a una lógica electoral-mediática. Fujimori sabría aprovechar esta nueva lógica y vendería bien su imagen para llegar al poder. El nuevo gobierno instauraría una serie de reformas de ajuste estructural o neoliberales que le darían el golpe final al modelo Estado-céntrico y establecería un vínculo neocientelista con la sociedad. Los éxitos en cuanto a superación de la crisis económica y derrota del terrorismo harían que la población renueve su apoyo al líder. Fujimori mantendría así su régimen a través del vínculo neocientelista, la lógica electoral-mediática y la política del miedo.

Luego de la caída de Fujimori, lo que hemos tenido son algunos cambios y continuidades. Los procesos de migración, urbanización y acceso a la educación han continuado. El proceso de globalización, con todas sus implicancias, se ha intensificado. Y junto a estos, surge un nuevo proceso de descentralización. Los intereses societales han seguido, básicamente, el mismo camino desde inicios de los noventa. Sin embargo, la insatisfacción con el modelo neoliberal se acrecienta y manifiesta en el incremento de conflictos sociales. El gobierno de transición intentó instaurar un nuevo vínculo participativo que reemplace al neocientelismo fujimorista pero, durante el gobierno de Alejandro Toledo, esta iniciativa se vio limitada. Toledo armó sus propios vínculos neocientelistas y tuvo que afrontar una relación a través del conflicto social con los pobladores que demandaban por diversos temas. En el segundo gobierno, presidido por Alan García, el APRA retomó sus vínculos clientelares, creó nuevos (más aún con el copamiento del Estado por el partido del gobierno) y fue incapaz de superar la relación conflictiva con la población. Sin embargo, los gobiernos regionales, dirigidos por movimientos regionales, y las redes transnacionales se muestran como vínculos alternativos para moderar/organizar el conflicto en tiempos de globalización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcántara, Manuel (2004). *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos latinoamericanos*. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.
- Balbi, Carmen Rosa (1989). *Identidad clasista en el sindicalismo: su impacto en las fábricas*. Lima: DESCO.
- Balbi, Carmen Rosa (1994). Sindicalismo y flexibilización del mercado de trabajo en el Perú. *Debates en Sociología*, 19, 91-117.
- Balbi, Carmen Rosa (1996). El fujimorismo: delegación vigilada y ciudadana. *Pretextos*, 9, 187-233.
- Balbi, Carmen Rosa & Julio Gamero (1990). Los trabajadores en los 80: entre la formalidad y la informalidad. En Carmen Rosa Balbi, *Movimientos sociales: elementos para una relectura* (pp. 51-109). Lima: DESCO.
- Ballón, Eduardo (2008). El cambio responsable que nos aleja del futuro diferente. En Eduardo Toche (Comp.), *Perú hoy: por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo* (pp. 26-31). Lima: DESCO.
- Bebbington, Anthony y otros (2007). Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural. En Anthony Bebbington (Ed.), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales* (pp. 163-230). Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Burt, Joe-Marie (2006). «Quien habla es terrorista»: The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. *Latin American Research Review*, 41(3), 32-62.
- Cameron, Maxwell A. (1992). Micro and Macro Logics of Political Conflict: The Informal Sector and Institutional Change in Peru and Mexico. En Archibald Ritter, Maxwell Cameron y David Pollock (Eds.), *Latin America to the year 2000. Reactivating Growth, Improving Equity, Sustaining Democracy* (pp. 209-220). Nueva York: Praeger.
- Cameron, Maxwell A. (1994). *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change*. Nueva York: Saint Martin's.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). *Hatun Willakuy: versión abreviada del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*. Lima: CVR.
- Coppedge, Michael (1998). The Dynamic Diversity of Latin American Party. *Party Politics*, 4, 547-568.
- Cotler, Julio (1985). Democracia e integración nacional. En Cynthia McClintock y Abraham F. Lowenthal (Comps.), *El gobierno militar, una experiencia peruana, 1968-1980* (pp. 23-62). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Degregori, Carlos Iván (1991). *Demonios y redentores. Una tragedia en dos vueltas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- Degregori, Carlos Iván (1993). Qué difícil es ser dios: ideología y violencia política en Sendero Luminoso. En Miryam Jimena Santoyo (Comp.), *Conflicto social y violencia* (pp. 19-32). Bogotá: Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Degregori, Carlos Iván (2000). *La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- De la Torre, Carlos (2007). Medios y política en América Latina: hacia una agenda de investigación sobre medios, representación y calidad de la democracia. Mimeo.
- Flores Galindo, Alberto (1999). *La tradición autoritaria: violencia y democracia en el Perú*. Lima: Asociación Pro Derechos Humanos y SUR.
- García, Mariel (2008). La construcción de la realidad según Alan García. *Argumentos* 2(2). Recuperado de:
<http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=64>
- Grompone, Romeo (1991). *El velero en el viento: política y sociedad en Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Grompone, Romeo (2000). Al día siguiente: el fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y social. En Julio Cotler y Romeo Grompone, *El fujimorismo, ascenso y caída de un régimen autoritario* (pp. 77-174). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Grompone, Romeo (2005). Modernidad, identidades políticas y representación: cuatro décadas y un desenlace abierto. En Víctor Vich (Ed.), *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia* (pp. 182-237). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Hagopian, Frances (1998). Democracy and Political Representation in Latin America in the 1990s. Pause, Reorganization, or Decline? En Felipe Agüero y Jeffrey Stark (Eds.), *Fault Lines of Democracy in Post-Transitional Latin America* (pp. 99-143). Boulder: North-South Center.
- Hagopian, Frances (2000). Democracia y representación política en América Latina en los años noventa: ¿pausa, reorganización o declinación? En Ernesto López y Scott Mainwaring (Comp.), *Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones* (pp. 265-330). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Jiménez, Félix (1999). *De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal*. Lima: Consorcio de Investigación Económica.
- Kahatt, Farid (2002). Sociedad civil y gobernabilidad democrática en el Perú. En Aldo Panfichi (Coord.), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur* (pp. 449-483). México D. F.: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica,.
- Lechner, Norbert (2002). *Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política*. Santiago de Chile: LOM.
- López, Sinesio (1991). *El dios inmortal: Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto de Democracia y Socialismo.

- López, Sinesio (1997). *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: Instituto de Democracia y Socialismo.
- Luna, Pedro Pablo (2007). Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y una propuesta de agenda. *Política y Gobierno*, XIV(2), 391-435.
- Lynch, Nicolás (1990). *Los jóvenes rojos de San Marcos: el radicalismo universitario en los años setenta*. Lima: El zorro de abajo.
- Mainwaring, Scott & Timothy Scully (Eds.)(1995). *Buildign Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Standford: Standford University Press.
- Manin, Bernard (1992). La metamorfosis de la representación. En Mario R. dos Santos (Coord), *¿Qué queda de la representación?* (pp. 12-40). Caracas: Nueva Sociedad.
- Manrique, Nelson (2002). *El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Matos Mar, José (1984). *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Meléndez, Carlos (2005). Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú actual. En Víctor Vich (Ed.), *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- O'donnell, Guillermo (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55-69.
- Panfichi, Aldo (2007). *La participación ciudadana en el Perú: disputas, confluencias y tensiones*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Panfichi, Aldo & Cynthia Sanborn (1997). Fujimori y las raíces del neopopulismo. En Fernando Tuesta (Ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Parodi, Jorge (1986). La desmovilización del sindicalismo industrial peruano en el segundo belandismo. En Eduardo Ballón (Ed.), *Movimientos sociales y crisis: el caso peruano* (pp. 45-68). Lima: DESCO.
- Pease, Henry (1999). *Electores, partidos y representantes: sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno en el Perú*. Lima: Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Pease, Henry (2008). *Reforma política: para consolidar el régimen democrático*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Portocarrero, Gonzalo & Patricia Oliart (1989). La «idea crítica»: una visión del Perú desde abajo. En Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart, *El Perú desde la escuela* (pp. 103-120). Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
- Roberts, Kenneth (1995). Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case. *World Politics*, 48(1), 82-116.
- Roberts, Kenneth (1996). Economic Crisis and the Demise of The Legal Left in Peru. *Comparative Politics*, 29(1), 69-92.

- Roberts, Kenneth (2002). Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era. *Studies in Comparative Development*, 36(4), 3-33.
- Rochabrún, Guillermo (2007). *Batallas por la teoría: en torno a Marx y el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Stokes, Susan (2001). *Mandates and Democracy. Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tanaka, Martín (1998). *Los espejismos de la democracia. Colapso del sistema de partidos en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tanaka, Martín (1999). Del movimientismo a la media-política: cambios en las relaciones entre la sociedad y la política en el Perú de Fujimori. En John Crabtree y Jim Thomas (Eds.), *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (pp. 411-436). Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Tanaka, Martín (2005). *Democracia sin partidos. Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de reforma política*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tovar, Teresa (1985). *Velasquismo y movimiento popular: otra historia prohibida*. Lima: DESCO.
- Tuesta, Fernando (1995). *Sistema de partidos políticos en el Perú 1978-1995*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Webb, Richard (1991). *Perú en números 1991*. Lima: Cuánto.
- Weyland, Kurt (1996). Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities. *Studies in Comparative International Development*, 31(3), 3-31.
- Weyland, Kurt (2000). ¿La paradoja del éxito? Los determinantes del apoyo político al presidente Fujimori. *Debates en Sociología*, 25-26, 213-244.

LÍNEAS DE FRONTERA Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PERÚ.

DIFERENCIAS SOCIALES Y TENDENCIAS DEL VOTO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES PERUANAS: 1980-2006¹

David Sulmont Haak

1. INTRODUCCIÓN

Durante la década de 1990, el escenario político y electoral estuvo profundamente marcado por la figura del presidente Alberto Fujimori y la casi desaparición, en términos electorales, de los actores que habían formado parte del sistema de partidos predominante en la década de 1980: el APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y las agrupaciones de izquierda, cuyos orígenes históricos se ubican en las décadas de los treinta, cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX, respectivamente. En las elecciones presidenciales de 1995, estas agrupaciones no llegaron a obtener más del 6,5% de los votos válidos. En el año 2000, de los grupos citados, solo el APRA presentó un candidato presidencial (Abel Salinas), quien apenas alcanzó el 1,4% de los votos válidos; mientras que en las elecciones parlamentarias de ese año, las listas del APRA, Acción Popular y Unidad Nacional (alianza impulsada por el Partido Popular Cristiano) sumaron 10,5% de los votos válidos.

A inicios del siglo XXI, parecía que los partidos políticos que habían marcado gran parte de la historia política del siglo XX estaban condenados a desaparecer o, en el mejor de los casos, a jugar un rol bastante secundario en la política electoral. La crisis económica y la expansión del conflicto armado interno a finales de la década de 1980 habían minado profundamente la legitimidad de los partidos políticos llamados «tradicionales», permitiendo la entrada de los *outsiders* en la escena política peruana.

¹ Los datos y análisis discutidos en este texto forman parte de una investigación más amplia sobre «El elector peruano del siglo XXI».

Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2001, en el contexto de la transición democrática posterior a Fujimori, algunos de los partidos que formaron parte del sistema político de los años ochenta experimentaron un incremento significativo en sus preferencias electorales. En la primera vuelta presidencial, los candidatos del APRA y Unidad Nacional sumaron el 50% de los votos válidos. En las elecciones parlamentarias del mismo año, las listas de estas agrupaciones, junto con la de Acción Popular, obtuvieron cerca del 38% de los votos. En aquella ocasión, Alejandro Toledo, un personaje ajeno a los partidos políticos tradicionales, ganó la elección presidencial, en gran parte debido a su papel como líder de la oposición durante el tercer intento de reelección de Fujimori en el año anterior. A pesar de ello, partidos como el APRA, el Partido Popular Cristiano (vía Unidad Nacional) y, en menor medida, Acción Popular, parecían haber renacido de sus cenizas luego de la década fujimorista.

Ello se vio confirmado nuevamente en las elecciones presidenciales de 2006, donde los candidatos del APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular obtuvieron cerca del 54% de los votos válidos en la primera vuelta. Al igual que en 2001, estas elecciones presidenciales tuvieron su *outsider* en la figura de Ollanta Humala, quien, con el 30,6% de los votos válidos en primera vuelta, obtuvo su pase preferencial a la segunda vuelta, en la cual terminó siendo derrotado por Alan García, candidato del APRA. Luego de dieciséis años de haber traspasado el poder a Alberto Fujimori, el líder del partido político más antiguo del país, volvía a ocupar el sillón presidencial el 28 de julio de 2006.

Un actor ausente en este retorno de los partidos de los años ochenta en 2006 son las agrupaciones que formaban parte de la Izquierda Unida, la cual había llegado a convertirse hacia 1987 en la segunda fuerza política del país. Sus divisiones internas y su posterior incapacidad de construir algún tipo de organización cohesionada, llevaron a los grupos de la izquierda legal a su práctica extinción como alternativa viable en términos electorales en los años posteriores. Algunas de sus banderas o discursos políticos (en especial su crítica a la preponderancia del mercado y la inversión privada como motor del desarrollo nacional) fueron capitalizadas, despojándolas de un ropaje ideológico «izquierdista clásico», por nuevos actores políticos, como Ollanta Humala y su Partido Nacionalista Peruano.

Entre 1978 y 2006, los peruanos han votado en 28 procesos electorales, ello representaría en promedio una elección por año, de no ser por el hecho de que varias de ellas son simultáneas (presidenciales y parlamentarias; municipales y regionales). Once de esas elecciones fueron presidenciales, contando primeras y segundas vueltas. Como se ha indicado, las preferencias electorales de los peruanos han favorecido a diversos actores en diferentes momentos, desde partidos

políticos tradicionales hasta *outsiders*, con posturas programáticas e ideológicas muy variadas. Muchos analistas coinciden en que la volatilidad electoral en el Perú es una de las más altas de la región andina (Roncagliolo & Meléndez, 2007, p. 403), lo que da cuenta de la fragilidad del sistema de partidos peruano y su bajo nivel de institucionalización. Frente a esta oferta electoral volátil, ¿cuáles son los criterios que toma en cuenta el elector peruano para decidir al momento de votar? Esta es la pregunta central que queremos abordar en este documento.

2. ENFOQUES TEÓRICOS CLÁSICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

Para reflexionar sobre el comportamiento electoral peruano contemporáneo, resulta relevante identificar algunas perspectivas teóricas desarrolladas por las ciencias sociales y políticas a lo largo del siglo XX. Ello permitirá situar el estudio del caso peruano en un marco analítico más amplio y evaluar la utilidad de las herramientas conceptuales y metodológicas propias de la literatura en este campo de investigación.

Las primeras teorías sociológicas sobre el comportamiento electoral tuvieron su origen en los estudios de las elecciones en Estados Unidos y señalaban la importancia que tenía en la decisión del elector individual el peso de las orientaciones políticas de sus grupos de pertenencia primarios (comunidad, clase social, grupo religioso o étnico). La idea central que guiaba estos estudios es que los ciudadanos tenderán a votar tomando en cuenta principalmente el comportamiento electoral de los miembros de sus redes sociales más cercanas y significativas. Este enfoque fue desarrollado a fines de los años cuarenta a partir de los trabajos de Paul Lazarsfeld (Lazarsfeld y otros, 1968) en la universidad de Columbia, por lo que es conocido en la literatura sobre el comportamiento electoral como la escuela de Columbia.

Otra línea de reflexión teórico-empírica sobre el comportamiento electoral, llamada «la escuela de Michigan» o «el enfoque sociopsicológico», está asociada también con la fase inicial de los estudios sobre comportamiento electoral, desarrollados desde la década de 1940 por investigadores del Social Research Center (SRC) de la Universidad de Michigan, en particular por el equipo dirigido por Angus Campbell (Campbell y otros, 1964). A diferencia de la escuela de Columbia, que enfatizaba la influencia de los factores sociales y de los grupos de referencia, la escuela de Michigan se centra en el conjunto de las *disposiciones y actitudes hacia el sistema político* que desarrollan los individuos y que sirven de elementos de juicio para tomar decisiones al momento de votar. El supuesto básico de este enfoque es que el voto constituye un acto político

fundado por la percepción y el «mapa cognitivo» que tienen los electores respecto de los principales componentes del sistema político. Estos «mapas» o «atajos» cognitivos orientan el comportamiento electoral (la decisión de votar por tal o cual candidato) y se originan a partir de los mecanismos de *identificación partidaria*, que es definida como una adhesión afectiva duradera con alguna de las principales agrupaciones políticas que estructuran la vida política de un país. En la medida en que el ciudadano promedio no maneja la suficiente información o comprende la complejidad de las decisiones políticas que están en juego en una sociedad moderna, la identificación partidaria funciona como un filtro entre el mundo político y el electorado, proveyendo los atajos cognitivos que les permiten a las personas tomar sus decisiones al momento de votar.

Este modelo toma en cuenta también el proceso de socialización, puesto que la identificación partidaria se formaría en etapas tempranas de la vida de los individuos, la cual es a menudo heredada de los padres, y reforzada por el medio social y la adhesión ritualizada mediante la participación habitual en elecciones u otros actos políticos. A diferencia del modelo de Columbia, el modelo de Michigan no considera que las variables como el medio social o familiar, las identidades de clase, religión o grupo étnico, tengan una vinculación *directa* con el voto, pero sí con los factores que permiten desarrollar las actitudes y los *vínculos afectivos con las organizaciones políticas* que permiten el desarrollo de las identificaciones partidarias.

Varios autores (Barnes, 1997; Rose, 2000; Thomassen, 2005; Mayer, 2006) coinciden en señalar que, en los años sesenta y setenta, la creciente volatilidad del voto observada en las democracias occidentales y los procesos de desalineamiento político de diversos sectores sociales respecto de los partidos que tradicionalmente habían captado sus preferencias electorales, pusieron en cuestión la utilidad analítica de los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, especialmente el énfasis en las variables relacionadas con los procesos de socialización, el peso de los grupos y las diferencias sociales, o los mecanismos de identificación partidaria e ideológica. Entre los factores que contribuyeron a este proceso se mencionan: la entrada al universo de electores de ciudadanos que no tenían identidades partidarias o políticas preexistentes (jóvenes, mujeres, miembros de minorías étnicas o raciales), la aparición de nuevas problemáticas sociales que establecían líneas de división diferentes a las tradicionales de clase, etnia o religión. Aparecen entonces nuevos ejes de diferenciación política ligados a temas como los derechos de la mujer y de las minorías étnicas, sociales o sexuales; el movimiento pacifista; o el tema de la ecología (Mayer, 2006, pp. 20-21).

En aquellos años, surgieron nuevas perspectivas teóricas, basadas en estudios empíricos comparados, que daban cuenta de un proceso de modernización y desarrollo social (uno de cuyos indicadores es el incremento del nivel educativo

de los ciudadanos y de la movilidad social) que genera grados de autonomía individual cada vez más amplios respecto de las restricciones o determinaciones de los grupos sociales de pertenencia. Posteriormente, estos desarrollos dieron lugar a la formulación de teorías de la «modernización cultural» (Inglehart, 1997; Thomassen, 2005; Norris, 2006), que postulan que el comportamiento político estará crecientemente influenciado por las orientaciones de valores asumidos por los individuos en forma cada vez más independiente de los grupos partidarios o sociales de referencia.

El declive del peso relativo de las variables sociológicas en la decisión electoral, así como el desapego de las identidades partidarias o ideológicas que se ha venido registrando en las investigaciones empíricas sobre el comportamiento electoral en las democracias occidentales desde mediados de la década de los sesenta, han configurado la imagen de un electorado cada vez más sofisticado, cuyas decisiones dependerían con menos frecuencia de las pistas provenientes de las fuentes tradicionalmente identificadas por los modelos de Columbia y de Michigan. Estos cambios sociales acompañaron un mayor énfasis en el desarrollo y uso de paradigmas teóricos y estudios empíricos que enfatizan el peso de los factores individuales y los procesos de decisión racional del electorado. Algunos autores (Mayer, 2006) denominan a este tipo de perspectiva analítica teorías racionales o económicas del voto.

Uno de los modelos que surge de esta reflexión es el del *issue voting* o voto en función de las metas u objetivos que resultan relevantes o valorados para la sociedad o determinados grupos sociales en una coyuntura específica (como el control de la inflación, el mantenimiento del orden público, o «los valores tradicionales»). Otro modelo de este tipo es el llamado *pocketbook voting* o «voto con la billetera», perspectiva de análisis que centra su interés en la medición del impacto de las variables económicas en la popularidad del gobierno y su posible respaldo electoral, bajo el supuesto de que el electorado responsabiliza al gobierno y a los actores políticos del estado de la economía y vota en función de la evaluación que tiene de su *performance* en este campo.

El consenso general de las investigaciones contemporáneas sobre comportamiento electoral (Rose, 2000, pp. 332-339; véase también Barnes, 1997) es que el declive de la influencia de los factores identificados en los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, ha hecho que las múltiples y fragmentadas fuentes de pistas o atajos cognitivos que usan los ciudadanos a la hora de votar configuren un patrón de decisiones electorales ecléctico y egocéntrico, donde los elementos claves que son evaluados por los ciudadanos pasan a ser sus juicios sobre el desempeño en el gobierno de los actores políticos o la imagen de los candidatos. El declive del «voto sociológico», a lo largo del tiempo, ha estado acompañado de un incremento

equivalente de voto en función a metas o temas específicos (*issue voting*) o el voto económico.

A pesar de los cambios y las limitaciones de los modelos teóricos clásicos como el de Columbia y Michigan, estos siguen siendo útiles en la medida en que orientan la mirada del investigador en dimensiones complementarias e interrelacionadas con el comportamiento electoral. Siguiendo a Mayer (2006, p. 26), puede decirse que el modelo sociológico nos lleva a considerar que el ciudadano-elector no es un individuo aislado, sino que vive en un territorio o en una comunidad, que participa en redes o grupos de vínculos interpersonales que influyen en la configuración de su identidad y de alguna forma en sus intereses, creencias o valores. Por su lado, el modelo sociopsicológico apunta a la exploración de las actitudes y valores que estructuran la percepción que tienen los electores del campo político. En cuanto a los modelos más recientes como el racional o económico, estos nos invitan a tomar en cuenta los componentes indeterminados y contingentes de la acción política, el margen de libertad, de autonomía y de estrategia que está presente en el voto, así como su reacción al contexto y coyuntura específica del momento electoral.

Además de una decisión política individual, el voto puede ser una expresión simbólica de otras dimensiones de la vida social y política que van más allá de la competencia entre partidos y candidatos diferentes. Las elecciones son en muchas partes y para muchas personas un ritual cívico social de integración o de afirmación de identidades comunitarias particulares (Mayer, 2006, p. 26). Cuando los medios de comunicación califican las elecciones como «jornadas o fiestas cívicas» están aludiendo a este tipo de dimensión.

El voto también puede ser un arma de protesta, de oposición o desafío al sistema político y social o a la oferta política dominante, que expresa el descontento, la insatisfacción o la pérdida de legitimidad de los actores e instituciones del sistema democrático para determinados grupos sociales (Perrineau, 2006). En parte, las elecciones presidenciales de 1990 en las que ganó Alberto Fujimori fueron interpretadas en este sentido. En las elecciones presidenciales peruanas de 2006, varios comentaristas y líderes políticos calificaron algunas opciones electorales, especialmente el voto por Ollanta Humala, como un voto «antisistema» que expresaría este tipo de descontento.

3. VARIABLES SOCIALES Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PERÚ

Como señalan varios autores (véase, por ejemplo, Rose, 2000, p. 399), la volatilidad electoral y la individualización de la decisión del voto es un fenómeno

bastante extendido en el conjunto de las democracias contemporáneas, incluso en las más consolidadas. Ello tiene además un correlato análogo con la naturaleza cada vez más compleja, fluida e impredecible de la opinión pública que reflejan muchos sondeos de opinión.

Sin embargo, en el caso específico de los llamados «nuevos países democráticos», entre los que se encuentra el Perú, los fenómenos de volatilidad tanto electoral como partidaria se producen en un contexto donde no hay antecedentes históricos que vinculen los diferentes grupos y divisiones sociales con un sistema de partidos y un conjunto de instituciones democráticas que regulen la confrontación electoral en un marco competitivo de larga duración. El reto en estas sociedades es desarrollar una estructura básica para la elección política, precisamente el tipo de marco político que históricamente ha definido las opciones electorales en las democracias occidentales más consolidadas.

En la medida en que los procesos de individualización de la decisión electoral están relacionados con los procesos de modernización social y cultural por los que también atraviesan las nuevas democracias, la posibilidad de que en estos países se construya una «infraestructura de la decisión electoral» similar a la de las democracias occidentales resulta cada vez más complicada. Por lo tanto, uno de los problemas que deben afrontar las nuevas sociedades democráticas es la conjunción tanto de la fluidez de la racionalidad del electorado como de la volatilidad de la «oferta política». Ambos fenómenos incrementan exponencialmente los niveles de incertidumbre de la política, lo que puede tener serias consecuencias en la estabilidad política de las sociedades y, por lo tanto, en las condiciones que aseguran un desarrollo social sostenible a mediano y largo plazo.

Estas consideraciones son particularmente pertinentes en el caso peruano, donde no solo se ha experimentado un desalineamiento radical del electorado respecto de los partidos políticos que formaban parte del sistema de partidos originado en la transición democrática de 1980, sino que desde la década de los noventa, la volatilidad electoral y de los partidos políticos se ha incrementado significativamente. El índice de volatilidad electoral promedio del Perú en el periodo 1980-2001 fue de 49,1 puntos, el más alto de los cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). A manera de comparación, el índice promedio de volatilidad para la Cámara Baja de los Estados Unidos entre 1944 y 1994 fue de cuatro puntos; mientras que España, entre 1974 y 1993, tuvo un índice de volatilidad de 16,3 puntos (Roncagliolo & Meléndez, 2007, p. 403). En este contexto, ¿cuáles son las pistas que le permiten al ciudadano peruano orientarse entre las opciones que se le presentan en una elección? Julio Carrión (1996), analizando las elecciones presidenciales de 1990, y Alberto Vergara (2007), haciendo lo propio en las elecciones presidenciales de 2006,

han propuesto cada uno por su lado la importancia de determinados factores de la cultura política peruana que proporcionan pistas o atajos cognitivos al elector para orientar su decisión frente a una oferta electoral diversa y volátil. Un componente importante de esta cultura política peruana sería el «populismo», que Vergara, siguiendo a Touraine (Touraine, 1988), identifica como una promesa de inclusión a la modernidad económica y política, basada en la capacidad de los gobernantes de otorgar un conjunto de derechos o condiciones de vida a la población a través de la acción del Estado, dirigida por un líder político carismático.

El origen de esta «cultura populista» está vinculado con las limitaciones del desarrollo capitalista y del mercado como mecanismo de inclusión y movilidad social en las sociedades latinoamericanas, entre ellas, la peruana.

La modernización en estas sociedades ha sido para muchos sectores sociales producto de la capacidad del Estado de otorgar una serie de servicios sociales a su población (educación, salud, empleo en empresas públicas).

Sin embargo, las restricciones fiscales de los Estados han hecho que estos procesos de modernización sean limitados o truncos.

A pesar de ello, esta forma de modernización habría configurado lo que Vergara llama una «cultura política populista» (que Touraine llama «política nacional popular») donde los sectores sociales que se adscriben a esta forma de orientarse en el escenario político evalúan la oferta política que se les presenta en las elecciones en función de las promesas de mayor inclusión en la modernidad por medio de la acción del Estado.

Dependiendo de dónde se ubique en la escala social, así como en qué lado de las líneas de división étnicas o regionales del país esté, el elector individual será más propenso a utilizar los atajos cognitivos provistos por esta cultura populista para orientar su decisión. De ahí la importancia de tomar en cuenta, en el análisis del comportamiento electoral, las líneas de división social que separan aquellos sectores de la población mejor ubicados dentro de la modernidad capitalista y económica, y aquellos que permanecen excluidos de ella o son incorporados fragmentaria e imparcialmente. Los sectores sociales más excluidos tenderían a orientarse hacia opciones políticas que se presentan como «más populistas», mientras que los mejor integrados al mercado como espacio de movilidad social se distanciarían de ellas.

Las hipótesis de investigación que surgen a partir de estas ideas se emparentan de alguna forma con los postulados teóricos de las escuelas clásicas de Columbia y de Michigan. Los grupos de pertenencia, marcados por las diferencias sociales que existen en nuestro país, configuran una serie de creencias y valores sociales que influyen la decisión del elector. A partir de ello se van formando culturas políticas que funcionan como mapas cognitivos para calificar y orientarse

en relación con los actores de la oferta electoral (los partidos y los candidatos). Sin embargo, dada la fragilidad y el escaso nivel de institucionalización del sistema de partidos en el país, estos valores y orientaciones sociales no llegarían a configurar identificaciones partidarias estables en el largo plazo, de ahí que el voto puede estar también fuertemente influenciado por la evaluación racional del ciudadano en cada elección de qué opción política podría ser más cercana a sus intereses o sus identidades sociales.

A continuación, nos proponemos realizar un análisis descriptivo de cómo las diferenciaciones sociales en el Perú han estado relacionadas con las orientaciones políticas del electorado en las elecciones presidenciales de 1980 a la fecha. El objetivo es identificar algunos patrones sistemáticos o recurrentes entre estas variables para determinar su nivel de influencia en los resultados electorales.

4. DATOS Y VARIABLES

En este trabajo, hemos decidido adoptar un enfoque metodológico basado en el análisis de resultados electorales agregados a nivel geográfico. La variable dependiente en nuestro análisis será el resultado, en porcentaje de votos válidos, que obtuvieron las principales listas de candidatos en las primeras vueltas presidenciales de 1980 a 2006 a nivel provincial. Las fuentes de estos datos son los resultados electorales históricos registrados por el Jurado Nacional de Elecciones y (a partir de 1995) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estos datos han sido sistematizados por Fernando Tuesta Soldevilla en diferentes publicaciones (Tuesta, 2001) y actualmente están disponibles en su página web personal².

Como variables independientes, hemos considerado indicadores que dan cuenta de algunas diferenciaciones centrales en la sociedad peruana, que distinguen grupos con diversos niveles de integración a la economía de mercado y a la sociedad nacional.

En primer lugar, estamos tomando en cuenta como variable independiente el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que es obrera o empleada a nivel provincial. Denominaremos a esta variable PEA asalariada y la interpretamos como un indicador del grado de penetración de las relaciones capitalistas modernas en el mercado de trabajo. A diferencia de otras modalidades de integración al mercado (como el autoempleo informal tan difundido en el país), en principio, el ser asalariado implica una relación de producción más «moderna» en términos capitalistas y puede dar acceso a algunos derechos sociales

² Véase <<http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/node/603?q=node/488>>. Consulta realizada el 17 de octubre de 2008.

(como el seguro social). En aquellas localidades donde este porcentaje sea mayor se supone que su población estará integrada en mejores condiciones al mercado capitalista y viceversa.

De acuerdo con la información disponible³ del censo continuo de 2006, el 38% de la PEA del país era asalariada. En contraste, en el censo de 1993 ese porcentaje ascendía a 43%, mientras que el dato registrado por el censo de 1981 fue de 46%. La tendencia decreciente de este indicador muestra el proceso de informalización del mercado de trabajo en el país a raíz de la crisis económica de la década de 1980 y de las reformas neoliberales de la década de 1990 que precarizaron el empleo. Este proceso parece que todavía no ha podido ser revertido por el crecimiento económico que el país ha experimentado entre 2001 y 2006.

Otra variable independiente en nuestro análisis es el *porcentaje de la población que tiene una lengua materna indígena* (quechua, aymara o lengua amazónica). Este indicador es en realidad multidimensional, ya que existe una relación directa entre mayores niveles de pobreza y mayor incidencia de personas con lengua indígena. Sin embargo, analítica y conceptualmente, los niveles de pobreza y el idioma materno son variables muy distintas. Su alto grado de asociación en el caso peruano muestra que las poblaciones que podrían calificarse como «indígenas» sufren mayores carencias que el promedio nacional, lo cual puede atribuirse a factores de discriminación y de exclusión social por motivos culturales. Esto hace que en la práctica, estos grupos sociales no estén plenamente integrados a la nación peruana o sean tratados como ciudadanos de segunda categoría.

Como fuentes para este indicador, hemos tomado, en primer lugar, los resultados del censo continuo de 2006, que miden la variable entre la población que tiene tres o más años de edad. En este caso, el porcentaje de personas con lengua materna indígena fue de 18,3%. También hemos utilizado los datos a nivel provincial de esta variable para el censo de 1993. En aquella oportunidad, la población que sirvió de base para la medición fueron las personas que tenían cinco o más años de edad y los resultados obtenidos fueron que el 19,42% de esta población tenía el quechua, aymara o lengua nativa como idioma o dialecto materno.

En el censo continuo de 2006, se hizo una pregunta destinada a medir la autoidentificación étnica del jefe de hogar y su cónyuge. La pregunta formulada era: «Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres, ¿usted se considera de origen: quechua; aymara; de la amazonía; negro/mulato/zambo; blanco; mestizo; u otro?». El resultado arrojó que el 27% de los informantes se consideraban

³ Los datos provienen de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), <<http://www.inei.gob.pe>>, y de la base de datos de la Encuesta Nacional Continua o «censo continuo» de 2006 realizado por la misma institución.

quechuas, aymaras o de la Amazonía; mientras que un 57,6% se consideraba mestizo. Como resulta obvio, el nivel de correlación entre el idioma indígena y la autoidentificación étnica es muy alto, pero también resulta relevante que en términos porcentuales hay más personas que se autoidentifican como indígenas que las que hablan algún idioma indígena.

Por tanto, el porcentaje de personas que se *autoidentifican como indígenas* en el censo continuo de 2006 será otra de las variables tomadas en cuenta en el análisis. También resulta ser un indicador multidimensional que puede interpretarse de manera análoga al porcentaje de personas que tiene como lengua materna un idioma indígena. Sin embargo, si consideramos que más del 57% de los jefes de hogares y sus cónyuges se identifican como mestizos, la autoidentificación indígena nos sirve como un indicador de la importancia demográfica que tienen en una localidad sectores que se definen de manera distinta de la autoimagen cultural más común de los peruanos y, por lo tanto, puede servirnos como otra medida del nivel de exclusión cultural de esta localidad de la sociedad nacional.

Finalmente, para algunos análisis utilizaremos los indicadores de desarrollo humano que provienen de los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el Perú (PNUD, 2006 y 2002), en particular, el índice de desarrollo humano (IDH) y la esperanza de vida, como indicadores de los niveles de vida que pueden alcanzar los habitantes de las provincias del país.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

En primer lugar, analizaremos los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2006 y su relación con las variables independientes seleccionadas. En el cuadro 1 se muestran los resultados oficiales publicados por la ONPE para esa elección. Adicionalmente, hemos añadido tres columnas con los datos estadísticos descriptivos de los votos válidos en las 194 provincias del país para las tres primeras listas presidenciales, que fueron encabezadas por Ollanta Humala, Alan García y Lourdes Flores, respectivamente.

El dato reportado en la quinta columna del cuadro es el promedio o media no ponderada del porcentaje de votos válidos a nivel provincial, que difiere de los resultados nacionales mostrados en la tercera columna. Recordemos que nuestras unidades de análisis son las 194 provincias del país. Se trata de unidades agregadas que tienen pesos electorales distintos. Como se aprecia, la media no ponderada para el voto por Ollanta Humala, candidato de Unión por el Perú, es mayor que su resultado nacional, eso quiere decir que muchas provincias con poco peso electoral le dieron a este candidato una alta votación. Lo inverso sucede en el caso de Lourdes Flores, la candidata de Unidad Nacional. Otro dato relevante es la

variabilidad del voto entre las provincias, que en términos absolutos (fijándonos en la desviación estándar) fue mayor en el caso de Humala y menor en el caso de Lourdes Flores. Sin embargo, si nos fijamos en la variabilidad relativa (el coeficiente de variabilidad)⁴, el patrón de votación por Alan García aparece como más disperso, eso quiere decir que en muchas provincias este candidato obtuvo resultados ya sea muy por encima o por debajo de su voto promedio.

Como una primera aproximación para observar la relación entre el voto por los tres principales candidatos en la primera vuelta de 2006 y las variables independientes consideradas en este trabajo haremos uso del *índice de originalidad*. Dicha medida es un indicador de qué tanto se diferencia la votación por un determinado partido político en un grupo social o una localidad específica de su votación promedio nacional (Martin, 2000, p. 38). Por ejemplo, si un partido tuvo una votación nacional del 50% y en una localidad «A» su resultado fue de 25%, el índice de originalidad para esa localidad será de $25/50 = 0,5$. Si por el contrario, en otra localidad «B» obtuvo 75% de los votos, el índice correspondiente será de $75/50 = 1,25$. En el primer caso, significa que el resultado de ese partido estuvo un 50% por debajo de su promedio nacional, sucediendo lo contrario en el segundo caso.

En el gráfico 1, presentamos los resultados de ese índice según deciles de provincias ordenadas en función del porcentaje de la PEA asalariada medida en el censo continuo de 2006. El decil 1 del eje horizontal representa al 10% de provincias con menor porcentaje de PEA asalariada; mientras que el decil 10 representa al 10% de provincias con mayor porcentaje de PEA asalariada.

Como puede verse en el gráfico 1, encontramos dos patrones bastante diferenciados en la relación entre estas variables. La tendencia general del voto por Ollanta Humala fue que su índice de originalidad disminuye conforme nos desplazamos hacia los deciles más altos de la variable independiente. En el primer decil de provincias con menores porcentajes de PEA asalariada, el porcentaje de votos válidos promedio por Humala fue 1,6 veces mayor que su resultado nacional (30,6%); mientras que en el decil superior tan solo representó tres cuartos de su resultado nacional.

En los índices de originalidad de la votación por Lourdes Flores y Alan García, la tendencia general es opuesta a la observada en el caso de Ollanta Humala. En otras palabras, conforme se incrementa el porcentaje de PEA asalariada, la aceptación de estos candidatos tiende a incrementarse.

⁴ El coeficiente de variabilidad es el resultado de dividir la desviación estándar entre la media o promedio, multiplicado por cien. Nos da una idea de qué tanto representa la desviación estándar en relación con el tamaño de la media de cada grupo.

Cuadro 1
Resultado de elecciones 2006, primera vuelta

Organización política	Votos	% de votos válidos	% de votos emitidos	Promedio no ponderado de votos válidos a nivel provincial	Desviación estándar	Coficiente de variabilidad
Union por el Perú	3 758 280	30,62	25,69	42,3	16,3	38,5
Partido Aprista Peruano	2 985 858	24,32	20,41	21,2	12,9	60,9
Unidad Nacional	2 923 280	23,81	19,98	13,2	6,4	48,7
Alianza por el Futuro	912 420	7,43	6,24			
Frente de Centro	706 156	5,75	4,83			
Restauracion Nacional	537 564	4,38	3,67			
Concertacion Descentralista	76 106	0,62	0,52			
Partido Justicia Nacional	65 636	0,54	0,45			
Partido Socialista	60 955	0,50	0,42			
Alianza para el Progreso	49 332	0,40	0,34			
Con Fuerza Perú	38 212	0,31	0,26			
Movimiento Nueva Izquierda	33 918	0,28	0,23			
Fuerza Democratica	24 584	0,20	0,17			
Avanza País-Partido de Integracion Social	24 518	0,20	0,17			
Partido Renacimiento Andino	22 892	0,19	0,16			
Progreseemos Perú	13 965	0,11	0,10			
Partido Reconstrucción Democratica	11 925	0,10	0,08			
Resurgimiento Peruano	10 857	0,09	0,07			
Y Se Llama Perú	10 539	0,09	0,07			
Perú Ahora	8410	0,07	0,06			
Tótal de votos válidos	12 275 385	100,00	83,89			
Votos blancos	1 737 045		11,87			
Votos nulos	619 573		4,23			
Tótal de votos emitidos	14 632 003		100,00			

Total de electores hábiles de las actas computadas: 16 494 906

Fuente: ONPE, elaboración propia

Gráfico 1

Elecciones presidenciales 2006: Índice de originalidad para el voto válido a nivel provincial de los principales candidatos en primera vuelta, según deciles de % de PEA asalariada

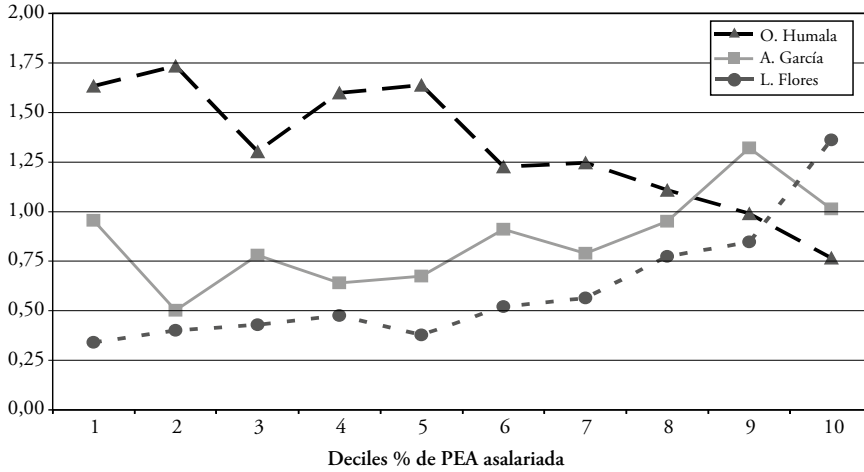
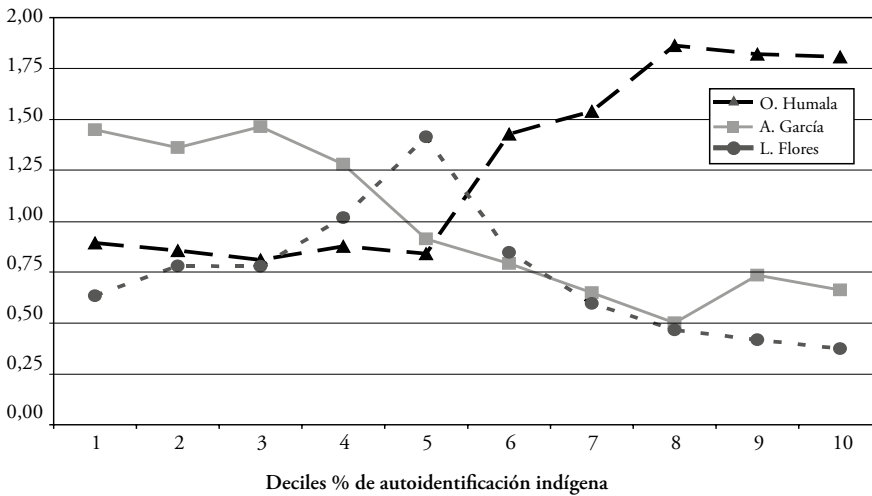


Gráfico 2

Elecciones presidenciales 2006: Índice de originalidad para el voto válido a nivel provincial de los principales candidatos en primera vuelta, según deciles de % de autoidentificación indígena



En las localidades ubicadas en los tres deciles superiores el índice de originalidad de los candidatos tiende a ser igual a 1, es decir, al promedio nacional. Eso se debe a que es en esos deciles donde se ubican las provincias con mayor peso electoral, básicamente las provincias donde están las principales ciudades del país. Recordemos que el peso electoral de cada provincia es bastante heterogéneo en nuestro país.

En el gráfico 2, presentamos la tendencia del índice de originalidad entre los deciles de provincias ordenadas por el porcentaje de población que se autoidentifica como indígena de acuerdo con el censo continuo de 2006.

El gráfico 2 es en cierta medida una imagen invertida del gráfico 1. Conforme nos movemos hacia provincias donde una mayor proporción de personas se autoidentifican como indígenas, el índice de originalidad del voto por Ollanta Humala tiende a crecer de manera sustantiva, sucediendo lo inverso en el caso de los otros dos candidatos.

Es interesante observar el punto en el decil 5 (donde se ubica la mediana del porcentaje de autoidentificación indígena a nivel provincial) que rompe claramente la tendencia del índice de originalidad del voto por Lourdes Flores. Ello se debe a que en ese decil se ubica la provincia de Lima, donde la candidata de Unidad Nacional obtuvo su mejor resultado electoral: 35,5% de los votos válidos, superando por más de diez puntos a sus dos competidores más importantes. Lima es la circunscripción electoral más grande y heterogénea del Perú, que concentra el 35% de la población electoral del país. Es además la provincia donde, en términos absolutos, se concentra la mayor cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas (21% de los jefes de hogar limeños y sus cónyuges). Si extrapolamos los datos estadísticos disponibles, podríamos decir que el 25% de las personas que se autoidentifican como indígenas en el país viven en la ciudad de Lima. Ello no significa necesariamente que estos limeños en particular votaron por Lourdes Flores en mayor proporción que por los otros candidatos.

El cuadro 2 resume las asociaciones encontradas entre las variables que estamos analizando, incluyendo dos variables adicionales que provienen de los indicadores del desarrollo humano del PNUD: el índice de desarrollo humano a nivel provincial para el año 2005 (IDH) y la esperanza de vida al nacer por provincia para el mismo año. Este cuadro muestra los coeficientes de correlación bivariadas R de Pearson entre las variables electorales y las variables sociales. Todos los coeficientes son significativos al 1%, con excepción del coeficiente marcado con un asterisco que es significativo al 5%.

Cuadro 2

Matriz de correlaciones bivariadas *R* de Pearson entre las variables de análisis

Variables	% Ollanta Humala	% Alan García	% Lourdes Flores	% PEA Asalariada	% Autorid. Indígena	Índice de Desarrollo Humano (2005)
% Alan García	-0.72					
% Lourdes Flores	-0.55	0.17*				
% PEA Asalariada	-0.49	0.45	0.51			
% Autoidentificación indígena	-0.76	-0.59	-0.42	-0.39		
Índice de Desarrollo Humano (2005)	-0.49	0.47	0.53	0.81	-0.51	
Esperanza de vida al nacer (2005)	-0.67	0.56	0.55	0.68	-0.68	0.86

Todos los coeficientes son significativos con un *alpha* de 1% con excepción del marcado con un asterisco que es significativo con un *alpha* de 5%

Si nos fijamos en los coeficientes correspondientes a la asociación entre el porcentaje de PEA asalariada y los resultados electorales, confirmamos lo visto en el gráfico 1: la asociación entre el voto por Humala y la PEA asalariada es negativa, mientras que en los otros dos candidatos la asociación resulta ser positiva. En otras palabras, las localidades que estarían mejor integradas a la economía capitalista y al mercado de trabajo moderno tienden a orientar su voto hacia candidatos como Lourdes Flores y Alan García. Por el contrario, conforme el nivel de integración al mercado de trabajo moderno disminuye, se incrementa el voto por Ollanta Humala. Es interesante anotar que la magnitud, en términos absolutos, de los valores de estos coeficientes es similar en los tres candidatos.

En cuanto a los coeficientes relativos a la asociación del voto con la variable % de autoidentificación indígena, apreciamos correlaciones negativas con el voto por Lourdes Flores y Alan García y positivas en el caso de Humala, lo que confirma los hallazgos vistos en el gráfico 2. Comparando los coeficientes de ambas variables, se aprecia que los valores para el voto por Humala y por García son más altos para la correlación con la autoidentificación indígena que con el porcentaje de la PEA asalariada, lo que indica que la primera variable representaría un factor más determinante en el voto para los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta.

Otro dato mostrado en el cuadro 2 es la asociación con las variables del IDH. En este caso, las asociaciones son positivas con el voto por García y Flores, y negativas con el voto por Humala: conforme se incrementan los niveles

de vida y de desarrollo humano, la tendencia es que el voto por García y Flores se incrementa, mientras que sucede lo contrario con el voto por Humala.

También es necesario resaltar cómo están asociadas las variables del IDH con las otras dos variables sociales: en provincias con mayores niveles de desarrollo humano, el % de PEA asalariada tiende a incrementarse y el porcentaje de autoidentificación indígena a disminuir, por lo que se deduce que una mejor integración a la economía de mercado favorecería el desarrollo humano; mientras que la mayor incidencia de población indígena en ciertas provincias está asociada con menores niveles de desarrollo humano, corroborando la discriminación y exclusión social que en la práctica sufren las poblaciones indígenas en el Perú.

Para finalizar el análisis descriptivo del cuadro 2, podemos hacer notar que si bien existe una correlación negativa entre el voto por Humala y los otros dos candidatos, entre el voto por García y el de Lourdes Flores la correlación es positiva, significativa al 5% aunque algo débil. En otras palabras, existe una ligera tendencia a que conforme aumentan los niveles de votación por García suceda lo mismo con los votos por Flores.

Para complementar este análisis y evaluar con mayor precisión el impacto de las dos principales variables sociales en el voto presidencial del año 2006, hemos calculado tres modelos de regresión múltiple que se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3
Elecciones 2006: Modelos de regresión lineal para el voto válido en primera vuelta de los tres principales candidatos

	Humala	García	Flores
Constante	36.54** (2.10)	22.39** (2.09)	10.36** (1.12)
VARIABLES INDEPENDIENTES			
% PEA asalariada	-0.27** (0.06)	0.24** (0.06)	0.19** (0.03)
% Autoidentificación indígena	0.31** (0.02)	-0.18** (0.02)	-0.05** (0.01)
R²	0.62	0.41	0.32
N	194	194	194

Los errores estándar de los coeficientes están entre paréntesis
(**) sig<0,01

La regresión múltiple nos permite calcular el efecto de cada variable independiente en el voto: por cada 1% de incremento en la PEA asalariada de una provincia,

se espera que Ollanta Humala reduzca su porcentaje de votos válidos en 0,27%; en cambio, ese incremento tendría un efecto de +0,24% de votos válidos por Alan García y +0,19% por Lourdes Flores. Por otro lado, por cada 1% de incremento en el porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas, Humala incrementaría su votación en 0,31%; mientras que García y Flores la verían reducida en 0,18% y 0,05%, respectivamente. Estos modelos nos confirman que los efectos de las variables sociales consideradas son mayores en la votación por Humala que en los otros dos casos. Interpretando el coeficiente de determinación de los modelos (R^2) encontramos que 62% de la varianza del voto por el candidato de Unión por el Perú–Partido Nacionalista Peruano resulta ser explicada por las variables independientes del modelo, en contraste con 41% para García y 32% para Flores.

Estos resultados dan cuenta de forma contundente que existe una línea de división social y cultural relacionada con las tendencias electorales de 2006: el voto por García y Flores está relacionado con localidades mejor integradas a la economía de mercado y menos excluidas, en términos culturales, en la sociedad peruana; mientras que lo contrario ocurriría respecto del voto por Ollanta Humala. Además, el voto por este último candidato resulta mucho más influenciado por indicadores de exclusión social que el de los otros dos, lo que podría interpretarse como un voto de protesta de sectores sociales del país que no se sienten representados por opciones políticas que han tenido mayor presencia en la historia política del país.

Con la finalidad de analizar cómo las dos principales variables independientes consideradas en este estudio se han relacionado con los resultados electorales, hemos calculado sus coeficientes de correlación R de Pearson con el voto válido en primera vuelta de las elecciones presidenciales de las principales agrupaciones políticas del país desde 1980 hasta 2006. Estos resultados se muestran en el cuadro 4.

Nótese que en el cuadro 4 hemos reemplazado el porcentaje de autoidentificación indígena por el porcentaje de personas cuya lengua materna es indígena. La razón es que solo disponemos de datos para la primera variable en el censo continuo de 2006. Usando esta última fuente de datos encontramos que la correlación entre la autoidentificación indígena y la lengua indígena es muy alta (su coeficiente R de Pearson es 0,93), por lo que resulta válido hacer esta sustitución para así tener indicadores más comparables a lo largo del tiempo.

Una primera constatación es que los niveles de asociación entre las variables sociales y los resultados electorales han sido históricamente más importantes en el caso del porcentaje de población con lengua indígena. Ello puede observarse tanto en las correlaciones bivariadas simples como en los promedios ponderados de los coeficientes que se muestran en las dos últimas columnas de la tabla.

El porcentaje de PEA asalariada adquiere importancia como factor asociado con los resultados electorales en las dos primeras elecciones legítimas del siglo XXI.

Para resumir un primer grupo de conclusiones que podemos extraer del análisis de la asociación entre el porcentaje de la PEA asalariada con los resultados electorales que se muestran en el cuadro 4 hemos elaborado el cuadro 5. En él mostramos dónde se ubicaría la base social del voto por las agrupaciones políticas entre 1980 y 2006, tomando como eje de división social los niveles de integración de las provincias a la economía de mercado. Para ubicar una agrupación en uno u otro lado de esta línea de división, tomamos como referencia un coeficiente de asociación que en términos absolutos sea igual o mayor a 0,2, lo que indicaría una correlación entre débil a moderada. Coeficientes con valores absolutos menores a 0,2 representan una situación donde la base social del voto es heterogénea en relación con este eje de división social; es decir, que no se presenta una tendencia marcada hacia uno u otro extremo de este y que los niveles de votación son similares en los diferentes tipos de provincias.

Como puede verse, por lo general las agrupaciones tradicionalmente vinculadas con la derecha política peruana (Partido Popular Cristiano, Frente Democrático, Unidad Nacional, Frente Independiente Moralizador) encuentran su base electoral en las localidades mejor integradas a la economía de mercado, con excepción de Unidad Nacional en el año 2001.

En el otro lado de esta línea de división, ubicamos la lista de Izquierda Unida encabezada por Henry Pease en las elecciones de 1990, y las candidaturas de Alejandro Toledo y Ollanta Humala en 2001 y 2006, respectivamente.

Otro dato interesante es que el APRA tenía una base social más heterogénea hasta 1995, luego de esa fecha, fue encontrando sus mejores resultados electorales más claramente anclados en las localidades mejor integradas a la economía de mercado.

Las preferencias por Fujimori y el fujimorismo expresadas en el voto por las diversas listas o alianzas electorales que encabezaba (Cambio 90, Cambio 90-Nueva Mayoría, Perú 2000, Alianza por el Futuro) han tenido una base social heterogénea respecto de este eje de división social.

El cuadro 6 resume las correlaciones entre el voto y el porcentaje de personas con lengua materna indígena. Como se ha indicado, históricamente este eje de división muestra una correlación promedio más importante con los resultados electorales que el basado en los niveles de integración al mercado. Las listas presidenciales que tienen mejores resultados en provincias con mayor incidencia de población indígena han sido las de la izquierda a lo largo de la década de 1980 hasta las elecciones de 1990. En las elecciones de 1980, la lista de Acción Popular encabezada por Fernando Belaúnde también se ubicaba en este lado de

Cuadro 4

Correlaciones R de Pearson entre el % de votos válidos a nivel provincial en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el % de la PEA asalariada y el % de personas cuya lengua materna es una lengua indígena

Elecciones		PEA asalariada (empleados y obreros)			% de personas cuya lengua materna es una lengua indígena		R de Pearson promedio ponderado (valores absolutos)	
Año	Agrupaciones políticas	Censo 1981	Censo 1993	Censo continuo 2006	Censo 1993	Censo continuo 2006	PEA asalariada	Lengua indígena
1980	Acción Popular	0,01			0,26*		0,04	0,34
	Partido Aprista Peruano	-0,04			-0,55*			
	Partidos de izquierda	-0,04			0,38*			
	Partido Popular Cristiano	0,38*			-0,21*			
1985	Partido Aprista Peruano	-0,00			-0,42*		0,07	0,42
	Izquierda Unida	-0,07			0,50*			
	Partidos de derecha (PPC y AP)	0,28*			-0,39*			
1990	Frente Democrático (FREDEMO)		0,21*		-0,50*		0,18	0,39
	Cambio 90		0,18*		0,23*			
	Partido Aprista Peruano		0,08		-0,45*			
	Izquierda Unida		-0,44*		0,61*			
	Izquierda Socialista		-0,07		0,08			
1995	Cambio 90 - Nueva Mayoría		-0,03		-0,02		0,07	0,05
	Unión por el Perú		0,27*		-0,09			
	Partido Aprista Peruano		0,18*		-0,44*			
2000	Perú 2000			0,07		-0,37*	0,07	0,30
	Perú Posible			0,08		0,28*		
2001	Perú Posible			-0,41*		0,61*	0,32	0,44
	Partido Aprista Peruano			0,43*		-0,50*		
	Unidad Nacional			-0,08		-0,21*		
	Frente Independiente Moralizador			0,37		-0,22*		
2006	Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano			-0,49*		0,75*	0,38	0,53
	Partido Aprista Peruano			0,45*		-0,59*		
	Unidad Nacional			0,51*		-0,43*		
	Alianza por el Futuro			-0,02		-0,22*		
	Frente de Centro			0,10		-0,24*		

Nota: Coeficientes significativos con un $\alpha < 0,05$ están acompañados de un asterisco. La ponderación para el R de Pearson promedio se hizo tomando como factor de ponderación el % voto promedio de las agrupaciones a nivel provincial.

Cuadro 5**Eje de división socioeconómica – Integración a la economía de mercado**

Base social: tipo de localidad	Elecciones: primera vuelta						
	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2006
Mejor integradas a la economía de mercado	PPC	PPC y AP	FREDEMO	UPP		APRA FIM	UN APRA
Menos integradas a la economía de mercado			IU			PP	UPP-PNP
Base heterogénea	APRA Izquierda AP	APRA IU	C90 IS APRA	C90-NM APRA	P2000 PP	UN	AF FDC

Cuadro 6**Eje de división étnica**

Base social: tipo de localidad	Elecciones: primera vuelta						
	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2006
Mayor población indígena	Izquierda AP	IU	IU C90		PP	PP	UPP-PNP
Mayor población indígena	PPC APRA	PPC y AP APRA	FREDEMO APRA	APRA	P2000	APRA UN FIM	UN APRA AF FDC
Base heterogénea			IS	C90-NM UPP			

la línea de división étnica. A partir de 2000, las agrupaciones que han tenido una mejor *performance* electoral en este tipo de provincias han sido la de Perú Posible encabezada por Alejandro Toledo en 2000 y 2001, y la de la alianza Unión por el Perú-Partido Nacionalista Peruano dirigida por Ollanta Humala.

En el otro lado de esta línea de división, conforme disminuye el porcentaje de población con lengua indígena a nivel provincial, la tendencia es que aumente el voto por el APRA y las agrupaciones políticas de derecha (Partido Popular Cristiano, Frente Democrático, Unidad Nacional, Frente Independiente Moralizador).

Las listas encabezadas por Alberto Fujimori (Cambio 90, Cambio 90-Nueva Mayoría, Perú 2000) y sus seguidores en 2006 (Alianza por el Futuro) se han ubicado en diversos lados de este eje a lo largo de distintas elecciones. En la primera vuelta de 1990, el voto por Fujimori tendía a ser mayor en las provincias con mayor población indígena; en las de 1995 las preferencias por Fujimori tenían

una base heterogénea, es decir, no mostraban una inclinación marcada hacia uno u otro lado; luego en las elecciones del siglo XXI, el voto por Fujimori y sus seguidores tendía a incrementarse conforme disminuía el porcentaje de población indígena a nivel provincial.

Es interesante observar que en las elecciones de 1995, el voto de los dos candidatos con mayores preferencias (Fujimori por Cambio 90-Nueva Mayoría y Pérez de Cuéllar por Unión por el Perú) no estaba correlacionado significativamente con este eje de división social.

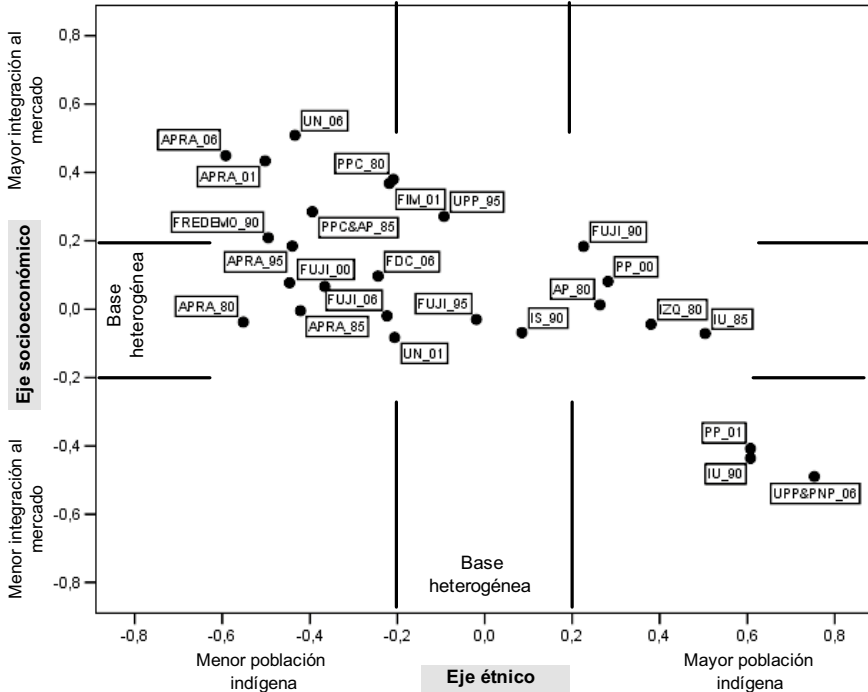
Notamos además que en las elecciones de 1990, el voto por Alfonso Barrantes de Izquierda Socialista (IS) tampoco aparecía correlacionado con esta línea de división. Recordemos que en aquella ocasión este candidato apenas obtuvo el 4,7% de los votos válidos a nivel nacional.

Para completar este análisis descriptivo, hemos elaborado el gráfico 3 donde cruzamos ambos ejes de división. Esto nos permite tener una especie de mapa de ubicación de las bases sociales del electorado de las agrupaciones políticas que compitieron en las elecciones presidenciales de 1980 hasta 2006. En el eje vertical, se ubica el coeficiente de correlación de cada lista presidencial con su posición en el eje de división socioeconómica definida por los niveles de integración al mercado de las provincias porcentaje de PEA asalariada. En el eje horizontal, se hace lo propio respecto de la línea de división étnica porcentaje de población con lengua indígena. Asimismo, en el gráfico, hacia el centro de cada eje, se marcan vallas que nos indican posiciones donde las listas presidenciales no muestran una correlación marcada o significativa con esas líneas de división social.

En el gráfico 3 observamos cómo el eje étnico es el que define con mayor claridad la diferencia en las bases sociales del electorado de los diferentes candidatos presidenciales en las elecciones de 1980 a 2006. Estas diferenciaciones son menos marcadas en el eje vertical, que representa las correlaciones respecto del nivel de integración a la economía de mercado y donde se aprecia una mayor concentración de puntos entre los coeficientes que van entre $-0,2$ y $+0,2$.

Otro elemento que se aprecia en el gráfico 3 es que en las elecciones de 2001 y sobre todo de 2006, la conjunción de ambos ejes de división social marca una distinción entre dos polos que aparecen como opuestos: los partidos y actores políticos con mayor presencia histórica en el escenario electoral (el APRA y Unidad Nacional) se ubican claramente en el polo de los sectores sociales mejor integrados al mercado y con menores niveles de población indígena. En el polo opuesto encontramos dos *outsiders*, Toledo y Humala.

Gráfico 3
Ubicación de los coeficientes de asociación en los ejes socioeconómico y étnico



Adicionalmente, se observa que la base social del electorado del APRA ha sufrido una mutación importante. Si bien ha mantenido su anclaje en el polo izquierdo de la dimensión étnica, en el siglo XXI se ha movido de manera significativa en la dimensión socioeconómica hacia el extremo de mayor integración a la economía de mercado.

La ubicación del fujimorismo en este gráfico 3 nos indica que esta opción política no ha estado tan marcada por las divisiones sociales que hemos analizado. En general, con excepción de 1990, en las otras elecciones caracterizadas por la importante presencia de este actor político en el escenario electoral (1995 y 2000), el peso de estos factores sociales ha sido menor que en el resto de procesos electorales, lo que debería llevarnos a considerar otro grupo de variables para comprender el comportamiento del electorado en esas coyunturas.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A pesar de la volatilidad tanto del comportamiento electoral como de la oferta política de candidatos en las elecciones analizadas, encontramos algunos patrones sistemáticos en la correlación entre las líneas de división social que caracterizan

a la sociedad peruana y las orientaciones electorales de la ciudadanía. En primer lugar, un patrón sistemático es el peso que tienen las divisiones que asociamos con las diferencias étnicas y los fenómenos de exclusión y discriminación sociocultural en la sociedad peruana que, como hemos visto, tienen una alta correlación con los niveles de desarrollo humano en el país. En las localidades con mayor presencia de población indígena, algunos partidos políticos (como la izquierda y la propuesta encabezada por Ollanta Humala) que se han caracterizado por una propuesta crítica del sistema político y económico, cuestionando las desigualdades sociales, tienden a encontrar mayores niveles de votación.

La asociación de este eje con algunos resultados electorales también puede interpretarse como un fenómeno de identificación del electorado con la propia imagen personal que proyectan los candidatos. En el caso de las elecciones de 2000 y 2001, el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, utilizó su imagen de «cholo» como un argumento de identificación con el electorado peruano de raíces andinas. En las elecciones de 2006, si bien el propio Humala no construyó su imagen personal en términos étnicos, su discurso político sí reivindicaba la importancia de las raíces andinas de la cultura peruana en la definición de la identidad nacional.

Este eje étnico aparece correlacionado negativamente con agrupaciones políticas que han tenido mayor influencia, directa o indirectamente, en el poder político. El APRA gobernó al país entre 1985 y 1990. Los partidos que podríamos identificar con la derecha (Acción Popular, Partido Popular Cristiano) gobernaron entre 1980 y 1985 y en los noventa apoyaron varias de las reformas y orientaciones económicas implementadas por el gobierno de Fujimori. Estas agrupaciones no solo han tenido posturas cercanas a los grupos de poder fáctico en la sociedad (empresarios, fuerzas armadas, iglesia, medios de comunicación), sino que aparecen asociadas a los grupos menos excluidos de la sociedad peruana, tanto en términos étnico-culturales como en su articulación con la economía de mercado.

El eje de división social basado en los niveles de integración a la economía de mercado adquiere mayor peso en los resultados electorales en las elecciones recientes. Es cierto que siempre ha existido una relación entre exclusión económica y étnica en la sociedad peruana. Viendo el gráfico 3, notamos que los cuadrantes «+ mercado; + población indígena» y «mercado; población indígena» están vacíos porque esa configuración es poco probable en nuestro país. Sin embargo, el peso más propio y autónomo que ha adquirido la dimensión de integración a la economía de mercado en la diferenciación del electorado puede considerarse un fenómeno más reciente. Las elecciones presidenciales de 2006 estuvieron particularmente caracterizadas por el debate en torno al rol del mercado y de la inversión privada como motor del desarrollo económico en el país.

Durante el régimen fujimorista de los noventa, el Perú experimentó un cambio radical de su modelo económico, que ha tenido influencia en la forma en cómo se presentan las opciones y programas de los principales actores políticos nacionales. En la década de los ochenta, la centralidad del rol del Estado en el desarrollo económico del país tenía mayor legitimidad como discurso en el debate político. Podría decirse, siguiendo a Vergara, que la presencia de un «discurso político populista» común a los actores políticos centrales era un hecho poco cuestionado en aquella época. Es a lo largo de los años noventa que las posturas que podemos calificar como «pro mercado» o «neoliberales» adquirieron un estatus casi hegemónico como «cultura política» en las élites políticas y económicas, así como en un sector importante de la ciudadanía. Para algunos autores, ello tiene que ver con el cambio de un modelo de desarrollo social y económico «Estado-céntrico» hacia uno centrado en el mercado (Tanaka, 1998). Estos procesos explicarían de alguna manera qué eje de división social basado en los niveles de integración de la población a la economía de mercado haya adquirido la relevancia que ahora observamos en los resultados electorales, y que se conjugue con las líneas de división social previamente existentes para complejizar el mapa de posiciones que actualmente ocupan los actores políticos en las preferencias electorales.

En la sociedad peruana contemporánea, la resolución de los problemas de exclusión social y de desigualdad ya no requiere únicamente de la capacidad del Estado (que sigue siendo limitada) de proporcionar y expandir derechos y condiciones de vida a sectores desfavorecidos de la sociedad peruana. La forma cómo la población se articula a la economía de mercado dominada por agentes privados resulta cada vez más determinante como mecanismo de integración y movilidad social. La intervención directa del Estado en la economía ha venido retrayéndose y concentrándose en funciones de regulación, promoción de las inversiones privadas y manejo de los equilibrios macroeconómicos mediante la política fiscal y monetaria. Es por ello que para los grupos menos integrados a la actual economía privada de mercado (que incluye a gran parte de las localidades del país con fuerte presencia indígena), la postura que tengan los actores de la oferta política sobre esta dimensión adquiere relevancia en el campo electoral.

Sin embargo, podemos notar una diferencia importante entre los actores políticos ubicados en ambos extremos de la línea diagonal de las divisiones sociales del electorado peruano contemporáneo que se muestran en el gráfico 3. A pesar de la debilidad institucional que caracteriza al sistema de partidos peruanos, en el polo superior izquierdo (mayor integración al mercado—menor población indígena) encontramos organizaciones políticas como el APRA y Unidad Nacional, con mayor presencia en el escenario político nacional y con mayores niveles relativos de institucionalización. En el polo inferior derecho (menor integración al mercado

y mayor población indígena), los actores políticos fueron calificados como *outsiders* en su momento y enfrentan serios problemas para construir estructuras organizativas más consolidadas y coherentes.

Si uno de los factores que permiten la institucionalización de un sistema de partidos es el nivel de articulación que estos logran construir para representar de manera algo más continua y estable las demandas e intereses sociales de distintos sectores de la sociedad, en el caso peruano encontramos que este sistema de representación política tiene una «pata coja» en el lado de los sectores sociales más vulnerables y otra algo más sólida (en términos relativos) en el lado de los grupos mejor integrados al mercado y menos excluidos en términos socioculturales. Este desequilibrio político, junto con las profundas desigualdades sociales que caracterizan a nuestro país, sesga en exceso el tipo de prioridades que desde las instituciones estatales se fijan para definir la orientación de las políticas de Estado y la manera cómo estas pueden beneficiar, excluir, perjudicar o simplemente ignorar a importantes grupos de la sociedad peruana.

7. PERSPECTIVAS PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS

Si tratamos de ubicar el análisis presentado en este trabajo con las perspectivas teóricas clásicas de estudio del comportamiento electoral, la asociación más visible es con la línea de reflexión que centra su mirada en el peso de las variables sociológicas (la llamada «escuela de Columbia») o los trabajos que analizan la vinculación entre las divisiones relevantes en la sociedad y los alineamientos electorales que estos producen⁵. Sin embargo, como se ha señalado, esta puede ser una mirada limitada.

Si bien hemos tratado el tema indirectamente, un análisis más en profundidad de las características de la cultura política del electorado y su relación con sus preferencias electorales requería observar de manera mucho más directa estas variables, por ejemplo, mediante el empleo de información proveniente de encuestas a electores individuales. Por el momento, la relación entre las diferenciaciones sociales analizadas en este texto y las «culturas políticas» del electorado peruano (sean «populistas», «nacional populares», «liberales» u otras) queda todavía a nivel de hipótesis que requieren un trabajo de comprobación empírica que excede los límites de este texto.

Adicionalmente, hemos visto cómo algunas opciones políticas, como el fujimorismo, no aparecen claramente asociadas a las líneas de división social consideradas en este trabajo. Por otro lado, los actores políticos, tanto los partidos,

⁵ Un texto clásico en esta línea es el de Lipset y Rokkan (1967) para el caso europeo.

los candidatos como los propios electores tienen márgenes de agencia autónomos que pueden ir más allá de factores estructurantes. Para abordar estos problemas, algunas otras herramientas provenientes de otras teorías y tradiciones de investigación del comportamiento electoral (las sociopsicológicas, o los enfoques «racionales» y «económicos» del voto) pueden ser de utilidad.

Finalmente, tomando en cuenta variables más cercanas a la ciencia política que a la sociología electoral, no hay que olvidar la influencia de los componentes institucionales del sistema electoral en el comportamiento de los ciudadanos a la hora de votar. Estos elementos juegan un rol importante en la forma cómo se le presenta la oferta política al electorado; se convierten votos en poder político; se representan políticamente grupos sociales (las circunscripciones electorales); entre otros.

Felizmente, desde hace algunos años, contamos en el Perú con algunas herramientas y fuentes de información que nos permiten explorar estas pistas de análisis del comportamiento electoral peruano. Desde 1996, gracias a los esfuerzos de Catalina Romero, contamos con datos quinquenales de la Encuesta Mundial de Valores que posibilitan un análisis comparado de algunos elementos de la cultura política peruana. Asimismo, desde el año 2000, se aplica en nuestro país la encuesta posterior a las elecciones del Comparative Studies of Electoral Systems⁶ que permite hacer lo propio en el campo más netamente centrado en el comportamiento electoral. Por último, la creciente cantidad y variedad de sondeos de opinión sobre temas políticos y electorales nos provee de otras fuentes de información empírica para el análisis y la comprobación de hipótesis en esta área de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnes, Samuel H. (1997). Electoral Behavior and Comparative Politics. En Mark Irving Lichbach y Alan S. Zuckerman (Eds.), *Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure* (pp. 115-141). Nueva York: Cambridge University Press.
- Campbell, Angus y otros (1964). *The American Voter: An Abridgment*. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Carrión, Julio (1996). La opinión pública bajo el primer gobierno de Fujimori: ¿de identidades a intereses? En Fernando Tuesta (Ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996* (pp. 277-302). Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Inglehart, Ronald (1997). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Nueva Jersey: Princeton University Press.

⁶ La realización de las encuestas de este proyecto en el Perú son también producto de la iniciativa de Catalina Romero.

- Lazarsfeld, Paul Felix y otros (1968). *The People's Choice: How the Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign* (3a ed). Nueva York: Columbia University Press.
- Lipset, Martin S. & Stein Rokkan (1967). *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. Nueva York: The Free Press.
- Martin, Pierre (2000). *Comprendre les évolutions électorales: la théorie des réalignements revisitée*. París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Mayer, Nonna (2006). Qui vote pour qui et pourquoi? Les modèles explicatifs du choix électoral. *Pouvoirs, Revue Française d'Études Constitutionnelles et Politiques*, 120, 17-28.
- Norris, Pippa (2006). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Perrineau, Pascal (2006). Les usages contemporains du vote. *Pouvoirs, Revue Française d'Études Constitutionnelles et Politiques*, 120, 29-42.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002). *Aprovechando las potencialidades. Informe de desarrollo humano Perú 2002*. Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006). *Informe del desarrollo humano Perú 2006*. Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Roncagliolo, Rafael & Carlos Meléndez (Eds.) (2007). *La política por dentro: cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. Lima: Idea Internacional – Transparencia.
- Rose, Richard (2000). *International Encyclopedia of Elections*. Londres: Macmillan.
- Tanaka, Martín (1998). *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980- 1995, en perspectiva comparada*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Thomassen, Jacques (2005). *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Touraine, Alain (1988). *La parole et le sang: politique et société en Amérique latine*. París: Odile Jacob.
- Tuesta, Fernando (2001). *Perú político en cifras: 1821-2001*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Vergara, Alberto (2007). *Ni amnésicos ni irracionales: las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica*. Lima: Solar.

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL PERUANA DEL 2006: DESCONTENTOS Y SATANIZADORES

Rolando Ames Cobián y Diego Ponce de León

El artículo trata en su primera parte acerca de cómo la tan diversa sociedad peruana se expresó en la votación presidencial del 2006, o, como puede decirse también, cuál fue la composición social del voto. La segunda parte analiza la campaña política como el espacio y el tiempo en el cual fueron tomando forma corrientes de opinión, candidaturas y debates que produjeron aquel resultado electoral. El artículo resalta la importancia de situar los hechos políticos en el contexto diverso y desigual de nuestra sociedad y de tomar en cuenta las percepciones políticas que se producen desde esos universos socioculturales distintos. Por otro lado, se contribuye a destacar la trascendencia que hoy tienen las campañas electorales. En ellas, los discursos en pugna por la hegemonía política se forman y entrecruzan, siendo los medios de comunicación sus principales portadores. Ellos no definen los resultados pero influyen en los términos de la competencia. En el caso que analizamos, ella se dio, en buena medida, como un conflicto entre un grupo de ideólogos y comunicadores que satanizaron a un candidato, por una parte, y, por la otra, sectores sociales diversos pero descontentos todos con su situación presente.

1. LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 2006:

RASGOS PRINCIPALES Y CONEXIONES SOCIALES

Comenzaremos destacando cuatro rasgos de esta elección presidencial peruana que tienen que ver, principalmente, con el contexto social del país. El primero, por ser el más significativo y complejo, fue la marcada diferenciación entre las opciones electorales que prefirieron los sectores altos y medios, con respecto a las que ganaron la preferencia entre las poblaciones de menores ingresos. Presentaremos conexiones entre indicadores de la ubicación en la estructura social y la opción electoral que escogieron los votantes en las dos vueltas de la elección presidencial. Este es, como dijimos, nuestro primer tema. Para mostrar brevemente las conexiones

sociales de la votación, agruparemos como una unidad a «los partidos menores» que no alcanzaron el 5% de votos, y agruparemos también la suma de votos blancos y nulos, que son por supuesto distintos entre sí, etiquetándolos juntos —en algunas ocasiones— como el «no voto».

El segundo rasgo es más genérico, va más allá del caso que analizamos, y es la importancia de la campaña como el espacio temporal de «selección natural» que incide sobre el peso diferencial que partidos y candidaturas toman en la realidad social. Aunque son instituciones legalmente homogéneas, la significación pública de cada partido se diferencia rápidamente. En nuestro caso, las encuestas adelantaron que había partidos que se habían logrado inscribir pero que tenían muy poco respaldo y en esto no se equivocaron. El sistema de partidos electoralmente importante se redujo y esta selección opera a través de filtros no jurídicos. El 60% de los votos emitidos —casi el 80% de los válidos— se concentró en solo tres candidatos y de los veinte partidos que presentaron candidaturas presidenciales, solo cinco llegaron a sobrepasar la valla del 5% requerida para obtener representación en el Congreso. Las instituciones intermediarias que actúan en la campaña son, como es conocido, los medios de comunicación, las agencias de sondeos, las candidaturas políticas mismas y los actores públicos de poder que formaron por momentos bloques sociopolíticos con aquellas. En la interacción entre esos cuatro tipos de actores en permanente dinamismo se van constituyendo las opiniones públicas en las distintas regiones y se va formando la llamada «opinión pública nacional».

En tercer lugar, se constata que el electorado en el Perú y, quizá ocurre algo parecido en varios países andinos, no premia necesariamente con su voto a los partidos que se consideran mejor institucionalizados. Ocurre, generalmente, que esta institucionalización se juzga solo con los criterios válidos para el sector más modernizado del país. Los «partidos buenos» desde el punto de vista de este diseño institucional pueden ser superados por otras candidaturas que no aprobarían un *test* de calidad, de acuerdo con esos estándares. Para los comicios del 2006, Ollanta Humala, por ejemplo, no tenía un partido inscrito, ni un programa conocido, ni bases acreditadas en el territorio, según los requisitos formalmente exigidos. Tampoco había establecido alianzas con partidos políticos constituidos y solo hizo una, en las vísperas de cerrarse la inscripción de candidatos, con el único propósito de evitar quedar fuera de competencia (se inscribió como candidato de Unión por el Perú, que era un grupo ya disperso pero que sí contaba con la autorización legal para inscribir candidaturas, y lo hizo porque no pudo concluir a tiempo los trámites para inscribir a su propio partido, ya que los comenzó tarde).

Responder a la pregunta sobre cómo fue posible que una candidatura considerada entonces institucionalmente débil, y en principio con escasa

Cuadro 1
Resultados de las elecciones presidenciales del 2006: primera vuelta

Organización política	Votos	Porcentaje de votos válidos	Porcentaje de votos emitidos
Unión por el Perú	3 758 258	30,62	25,69
Partido Aprista Peruano	2 985 858	24,32	20,41
Unidad Nacional	2 923 280	23,81	19,98
Alianza por el Futuro	912 420	7,43	6,24
Frente de Centro	706 156	5,75	4,83
Partidos chicos*	989 413	8,06	6,76
Total de votos válidos	12 275 385	100,00	83,89
Votos blancos	1 737 045		11,87
Votos nulos	619 573		4,23
Total de votos emitidos	14 632 003		100,00

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

<<http://www.onpe.gob.pe>>

* Incluye las agrupaciones que no alcanzaron el 5% de votos válidos: Restauración Nacional, Concertación Descentralista, Partido Justicia Nacional, Partido Socialista, Alianza para el Progreso, Con Fuerza Perú, Movimiento Nueva Izquierda, Fuerza Democrática, Alianza País-Partido de Integración Social, Partido Renacimiento Andino, Progresemos Perú, Partido Reconstrucción Democrática, Resurgimiento Peruano, Y se llama Perú y Perú Ahora. De ellos, solo Restauración Nacional superó el 1% de votos válidos.

organicidad social dada su novedad, llegara a obtener una cantidad de votos muy grande, implica reconocer la vigencia de un viejo tema propio del Perú: la deficiente relación entre las pautas políticas institucionalizadas y los sectores con culturas y situaciones económico-sociales distintas a las predominantes. Y desde el punto de vista analítico, la lentitud, con la que al menos en nuestro caso, se tomó en cuenta la pluralidad de experiencias sociales y por tanto de criterios de juicio que existen en nuestro electorado. Todos estos fenómenos no generan aún el volumen de estudios necesarios para ser mejor considerados en la organización institucional del Estado en general. Para reformar los procedimientos hay que atender no solo a la bondad de su lógica interna formal, sino a cómo se adecúan o no a las pautas de comportamiento de todos los que participarán, en este caso en las elecciones. Lograrlo es sin duda difícil, pero tener algo de éxito, contribuiría a un mayor grado de coherencia en el funcionamiento de nuestra sociedad. Se trata de un tema, repetimos, que va también más allá del caso de las elecciones analizadas.

Cuarta cuestión, la alta proporción de no-voto (votos nulos y blancos). Más del 15% de los votantes prefirió no elegir a ningún candidato en la primera

vuelta, pese a que las opciones eran variadas y numerosas. El porcentaje agregado de votos en blanco y nulos fue mayor que el obtenido por la suma de 15 de los partidos. Y de haber sido un candidato más, el agregado «no voto» que hemos construido, habría quedado en cuarto lugar, no lejos de los «tres grandes» de la primera vuelta. Este punto es muy significativo porque forma parte de aquella diferenciación social y cultural que creemos indispensable tomar más en cuenta en el análisis político y de comportamiento electoral de países como el Perú. Como veremos por su ubicación, en la primera vuelta donde alcanza mayor importancia, este voto se sitúa en las regiones más rurales y/o pobres y su número nos parece otro indicador de los límites de penetración del sistema de partidos más establecido. No hemos trabajado más a fondo el punto, pues ello exigiría intentar diferenciar los votos nulos por error involuntario o por tener que ver con el carácter obligatorio de la elección que forzó de seguro a una presencia sin interés mayor por parte de un sector de esta población. Sin embargo, la forma en la que este voto se unió al de Humala en la segunda vuelta muestra que esos aspectos no fueron los únicos y quizá tampoco los principales, sino más bien la pertenencia a un universo sociocultural no beneficiado por el crecimiento y distante de los partidos institucionalizados enraizados principalmente en el sector más moderno del país, como veremos.

Cuadro 2
Resultados de las elecciones presidenciales del 2006: segunda vuelta

Organización política	Votos	Porcentaje de votos válidos	Porcentaje de votos emitidos
Partido Aprista Peruano	6 965 017	52,63	48,14
Unión por el Perú	6 270 080	47,38	43,34
Total de votos válidos	13 235 097	100,00	91,48
Votos blancos	157 863		1,09
Votos nulos	1 075 318		7,43
Total de votos emitidos	14 468 003		100,00

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) <<http://www.onpe.gob.pe>>

1.1 La composición social del voto

Las elecciones de 2006 tuvieron un imprevisto rasgo de polarización política que, sobre todo desde los medios capitalinos, invitó al elector a definirse, durante la primera vuelta misma, entre dos opciones que se diferenciaron y se presentaron

como antagónicas: votar por cualquiera de los candidatos de los partidos más conocidos o hacerlo por Ollanta Humala. Nuestra hipótesis es que esta polarización electoral surgió de los términos de la campaña, principalmente ello tendría que ver con el «lugar social» sesgado que tienen los partidos más establecidos, y con los discursos públicos y su forma de comunicación, comprensión y confrontación en las distintas regiones del país. Sostendremos también que esa polarización político-electoral cobró cuerpo y alcance mayor al concordar con la forma distinta en que los sectores sociales del país viven en lo cotidiano, los efectos que trae para ellos, la modernización económica. Hay quienes se benefician de ese proceso, más o menos, y hay otros que se sienten más bien perjudicados, pese a las mejoras circunscritas que los puedan alcanzar.

Varios analistas han trabajado ya este tema desde distintos ángulos y criterios y ha sido destacada la clara relación entre grado de modernización de los territorios y la votación de sus poblaciones. Tal indagación no supone, en nuestro caso, imputar una relación de sentido único y causal, de la situación socioeconómica sobre las conductas electorales. Vamos a pasar justamente al tema de la ubicación social, físicamente sesgada si cabe, del sistema de partidos en relación con la totalidad de la sociedad peruana. Es decir, el enraizamiento social del «sistema de partidos establecido», o existente antes de la aparición de Humala, se ubicaba fundamentalmente en las áreas donde hay relaciones más directas y amplias con la economía más moderna. Su capacidad de lograr votación en los otros territorios y poblaciones resultó en contraste muy deficiente. De la cuestión de la polarización por el predominio de determinados discursos políticos confrontacionales nos ocuparemos luego.

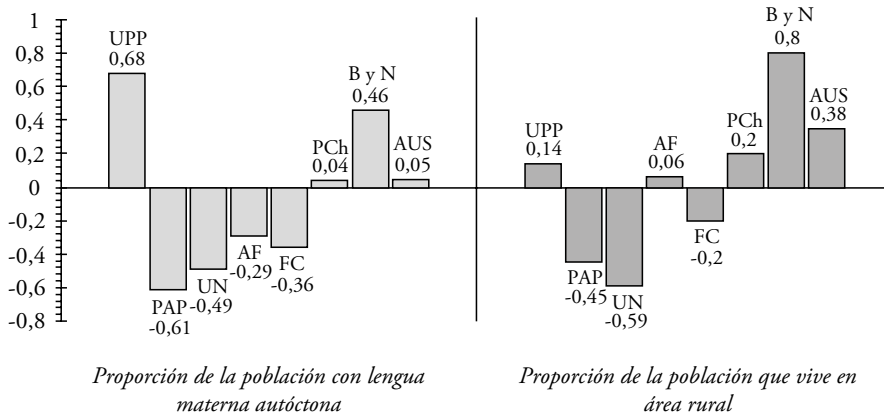
Para sustentar la hipótesis planteada, presentaremos la proporción del voto obtenido a nivel provincial en relación con cuatro rasgos variables, es decir, presentes en diferente medida en cada una de las casi 200 circunscripciones provinciales del Perú: *a)* las proporciones de la población con lengua materna autóctona (según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993); y *b)* cuyo hábitat está en el área rural (según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005); *c)* la ubicación de las poblaciones según la esperanza de vida (según los datos del *Índice de Desarrollo Humano* de 2005); y *d)* según el ingreso familiar mensual per cápita de cada provincia (según los datos del *Índice de Desarrollo Humano* de 2005). Agrupamos en un primer gráfico las dos primeras variables y, en el segundo, las dos siguientes. Y aplicamos el mismo cruce para la primera y la segunda vuelta.

En el gráfico 1, se observa que las correlaciones entre la proporción del voto obtenido a nivel provincial y la proporción de la población de la provincia que tiene por lengua materna un idioma «autóctono» (quechua, aymara u otra lengua

nativa) distinguen significativamente la candidatura de Ollanta Humala (Unión por el Perú) de las de Alan García (APRA) y Lourdes Flores (Unidad Nacional). Es decir, la candidatura de Humala tuvo más oportunidad de crecer en las provincias con una alta proporción poblacional con lengua materna autóctona. A la inversa, las candidaturas de Alan García y Lourdes Flores pudieron aumentar más sus votos en provincias donde la mayoría de personas tienen como lengua materna el castellano. Con esta variable se distinguen entonces dos territorios político sociales, uno compuesto por los partidos políticos principales y otro donde las opciones se reparten entre el voto por Ollanta Humala y los votos blancos y viciados, el «no-voto».

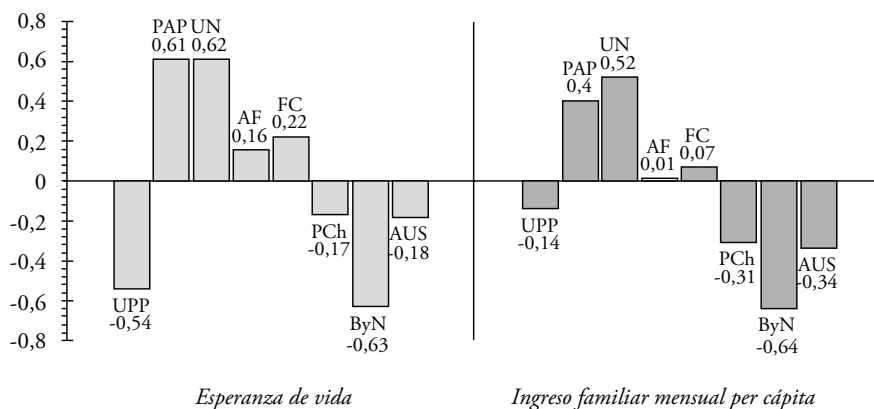
Algo similar se observa, como comprobará el lector, en las correlaciones con la proporción de población que vive en área rural. A través de esta variable se configura la oposición entre el territorio urbano formado, otra vez, por el Partido Aprista y Unidad Nacional, contra el rural, conformado básicamente por el voto en blanco o viciado. En este caso, esta variable no encontró en ese mismo espacio la probabilidad del voto por Humala en primera vuelta. Esta candidatura se diferenció menos, en este caso, de las de los otros partidos.

Gráfico 1
Correlaciones voto primera vuelta: correlaciones (R de Pearson) con «proporción de la población con lengua materna autóctona» y «proporción de la población que vive en área rural»



Elaboración propia
 UPP = Unión por el Perú, PAP = Partido Aprista Peruano, UN = Unidad Nacional, AF = Alianza para el Futuro, FC = Frente de Centro, PCh = Partidos chicos, ByN = votos blancos y nulos, AUS = ausentismo

Gráfico 2
Correlaciones voto primera vuelta: correlaciones (R de Pearson)
con «esperanza de vida» e «ingreso familiar mensual per cápita»



Elaboración propia

UPP = Unión por el Perú, PAP = Partido Aprista Peruano, UN = Unidad Nacional, AF = Alianza para el Futuro, FC = Frente de Centro, PCh = Partidos chicos, ByN = votos blancos y nulos, AUS = ausentismo

En este segundo cuadro, en las correlaciones con la variable «esperanza de vida» es posible constatar también dos territorios sociales muy diferenciados y con los mismos protagonistas. Por un lado, nuevamente aparecen el APRA y Unidad Nacional y, por el otro, Unión por el Perú (Humala) y el voto en blanco o viciado. Y con la variable «ingreso familiar» mensual per cápita sucede lo mismo que observamos para la proporción de población que vive en el área rural. Muestra también dos ámbitos sociales muy diferenciados, pero tal diferenciación se da entre el polo conformado por Unidad Nacional y el APRA y el que representa al no-voto. Humala no aparece plenamente distinto al resto de candidatos en este aspecto.

Lo que el análisis de las correlaciones de estas variables de situación social y comportamiento electoral nos muestra, entonces, en la primera vuelta, es que el electorado de los partidos más establecidos y electoralmente fuertes en esta ocasión, Unidad Nacional y el APRA, se encuentra asociado a las zonas urbanas, con mejores ingresos, con amplias proporciones poblacionales que tienen el castellano como lengua materna y donde los recién nacidos tienen estadísticamente mayores probabilidades de tener vidas más largas. Este territorio social es muy diferente al más rural, de menores ingresos, con poblaciones de lengua autóctona y con esperanza de vida menor para su población. Como hemos visto, este sector de la sociedad menos favorecido, más distante de los circuitos sociales modernizados tuvo una opción electoral políticamente menos unívoca en la primera vuelta. Sus opciones principales fueron la candidatura de Humala y la que hemos agrupado como el no-voto, es decir, votaron nulo o en blanco.

Los cuadros permiten más comentarios que no podemos desarrollar ahora, pero la constatación de que los partidos más institucionalizados y el sistema de partidos como conjunto tienen un hábitat social y cultural principal «más en un lado del país que del otro» resulta suficientemente sostenible. Los partidos más conocidos están más cerca en lo cotidiano, del mundo de la gente más incluida o cercana a los circuitos de la economía moderna, con mejores condiciones de vida y que tendrá por consiguiente menos razones para preferir cambios drásticos del orden social. Tanto las estadísticas sociales como los resultados de las elecciones mismas muestran que este sector podría ser relativamente más grande, pero también que el otro, es decir el más desfavorecido, no está por debajo del 40%. Es decir, socialmente ambos conjuntos parecen bastante consistentes. Aquí parece radicar uno de los grandes temas pendientes de la política peruana: ¿cómo sostener instituciones democráticas sobre un piso social de esta naturaleza?

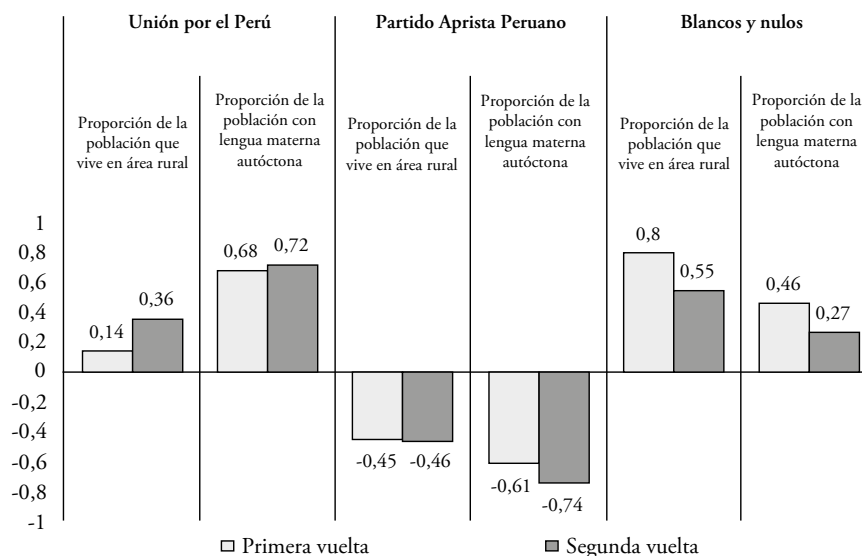
El volumen que alcanzaron los votos nulos y en blanco en la primera vuelta y su alojamiento social, más cercano a los sectores más pobres, requiere de un análisis mayor. Si no existieran las distancias o brechas sociales propias al Perú, económicas, socioculturales, étnicas, regionales, sería difícil de entender por qué por un lado se optó, en buena proporción, por no elegir candidatos, o hacerlo por el candidato más desconocido o hasta por los partidos menores y eventuales, cuando había en la oferta electoral partidos teóricamente bien estructurados. Sin esas brechas sociales resultaría paradójico que partidos institucionalmente fuertes, incluidos otros fuera de los dos principales, no hayan logrado expandir sus capacidades para representar a las poblaciones de los niveles bajos de la estructura social. Pero como en la realidad tales brechas sí existen, resulta claro que el sistema de partidos no logró superarlas y que se ha quedado principalmente en el Perú más modernizado. Por eso su mejor institucionalización no le bastó, por lo menos en 2006, para llegar al mundo social al que nunca alcanzó, o con el que tuvo contactos que perdió en la década de los noventa. Y, también por eso, la importancia que hemos dado al volumen de los votos blancos y nulos en los sectores sociales pobres en la primera vuelta nos parece gruesamente asimilable, con la distancia de esos sectores hacia la política partidaria más regular, más institucionalizada.

La relación entre la bipolarización política y esta, más bien social, se fue produciendo a lo largo de la campaña. En la segunda vuelta fue aún más amplio, el desplazamiento tendencial hacia Humala de los sectores socialmente desfavorecidos que no habían votado por él en la primera vuelta. Será así en el seguimiento del proceso político de la campaña, materia de la parte siguiente de este artículo, donde aportamos pistas de explicación de lo que ocurrió. La bipolarización se forjó en la arena de la campaña electoral mediática y no provino

del lado de Ollanta Humala solamente. Fueron las imágenes y los mensajes políticos más nacionales, que al atacarlo duramente, lo diferenciaron con nitidez, los que incidieron en la separación de las opiniones de los mundos sociales que aquí hemos dejado planteada básicamente. Sin duda pese a esas distancias sociales pudieron haber existido otros patrones electorales de comportamiento.

El carácter de toda segunda vuelta fuerza a la bipolarización. Lo interesante es seguir el sentido de las asociaciones. Como se observa en el gráfico 3, el Partido Aprista y su candidato aumentan las suyas en la misma dirección social en que se ubicaron en la primera contienda. Reciben seguramente lo principal de la votación de los sectores sociales que habían votado por Unidad Nacional y por los otros partidos. La información que presentamos aquí no permite hacer precisiones más finas. Fue también claro y muy analizado que hubo un sector minoritario pero importante de la votación de los sectores del mundo más moderno que en la segunda vuelta prefirieron el voto blanco o nulo. Ello es lo que explica que, en el gráfico, los rasgos sociales de ese voto sean menos plebeyos en la segunda vuelta de lo que lo fueron en la primera. Se trató de quienes, convencidos de la inconveniencia de votar por Humala, tampoco aceptaron votar por Alan García, dadas las orientaciones y resultados que tuvo su primer gobierno.

Gráfico 3
Comparación entre la primera y la segunda vuelta: correlaciones (R de Pearson) con «proporción de la población con lengua materna autóctona» y «proporción de población que vive en área rural»



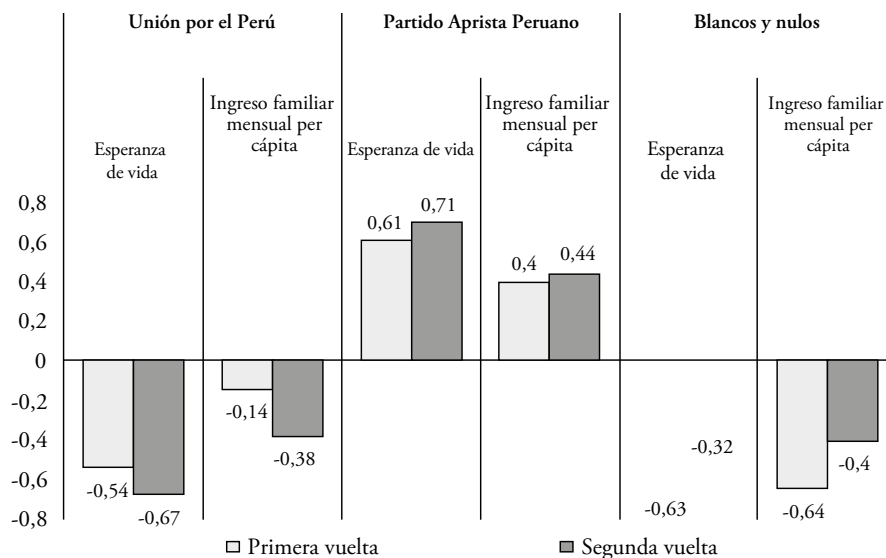
Elaboración propia

Por su parte, la candidatura de Ollanta Humala, acentuando la tendencia de la primera vuelta se convirtió en la segunda, en la representante más fuerte del sector de la población que no había encontrado representación a su gusto en los partidos ya establecidos del sistema. El voto blanco o nulo de los sectores sociales desfavorecidos se redujo fuertemente a favor de su candidatura. En la primera, el no-voto había sido socialmente distante de los otros partidos, pero también, de acuerdo con algunas variables presentadas, del candidato de Unión por el Perú. En la segunda, las asociaciones de la votación de Humala con esa población se hicieron más nítidas y se redujo en ella la probabilidad del «no-voto».

La comparación de conjunto de la primera y la segunda vuelta, tomando en cuenta a los partidos de votación intermedia que participaron en la primera y que casi no hemos podido mencionar, para subrayar el argumento principal del artículo, nos muestra también que los sectores sociales mejor establecidos se definieron por opciones políticas desde el principio. Ellos no votaron solo por el Apra o Unidad Nacional, pero tendieron a hacerlo en los otros casos, por los partidos institucionalizados, preexistentes a la campaña misma. Y hubo una pluralidad de opciones políticas bien distintas: desde el fujimorismo, los agrupamientos de centro, los pequeños partidos centroizquierdistas e izquierdistas y las candidaturas más amorfas políticamente y casi sin trascendencia posterior. Todos ellos, sin embargo, parecieron coincidir en cuanto al tipo de elector social sobre el que alcanzaron influencia. Ello confirma lo ya dicho sobre que es en la sociedad más moderna o cercana a esos circuitos que está principalmente instalado casi todo el sistema de partidos, y especialmente los más organizados desde el punto de vista legal. Por supuesto, esta incapacidad que mostraron en el 2006, para ampliar su representación social, no niega que no tengan buena capacidad de operación cotidiana en la política parlamentaria o regional, por ejemplo, o que en una próxima elección no puedan mejorar su capacidad de representación social.

Sobre la composición social del voto, haremos un breve comentario final, referido al actual espacio social de influencia del partido aprista. Quizá por el progreso social de los antiguos sectores populares que ese partido reclutó en sus primeras décadas, y por la ampliación de las clases medias que ello comporta, a este partido lo encontramos alojado principalmente en esos sectores. Su base social nos parece más débil que en la década de los ochenta, en los sectores populares o de bajos o muy bajos ingresos. Es decir, en la primera vuelta, como lo muestran los gráficos, la votación aprista la encontramos socialmente no idéntica a la de Unidad Nacional, pero más parecida a ella que al electorado de Humala o a quienes se comportaron en términos de «no-voto». Es un tema relevante para mostrar la amplitud de la falta de representación política de los sectores sociales

Gráfico 4
Comparación entre la primera y la segunda vuelta: correlaciones (R de Pearson)
con «esperanza de vida» e «ingreso familiar mensual per cápita»



Elaboración propia

más débiles, pues el APRA, por sus orígenes históricos, podría, teóricamente, haber mantenido presencia en esos medios sociales. Finalmente, solo la salvedad de que los próximos comicios presidenciales mostrarán en qué medida el propio partido de Humala, que ahora ya forma parte del sistema nacional de partidos, y algún otro, o izquierdas nuevas, inexistentes en el 2006, o autoritarismos conservadores como el fujimorista, logrará enraizarse en esos sectores.

Pasemos ahora a la cuestión quizá más importante desde el punto de vista más estricto del análisis político: ¿cómo se produjo la polarización política que a nuestro juicio facilitó y promovió esta polarización social del voto? Esta es la materia del siguiente acápite de este artículo.

2. EL PROCESO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 2006

2.1 El estudio de esta campaña electoral

El estudio sociopolítico del transcurso de las campañas nos enfrenta con fenómenos múltiples en intenso cambio. Las campañas de hoy son distintas de la imagen aún «clásica» de lo que ellas fueron hasta hace dos décadas. Esa antigua imagen puede distorsionar las percepciones de cómo ocurren las cosas en el presente. Las nuevas formas de comunicación mediática se perfeccionan cada día, también

lo hace la aplicación de las técnicas más refinadas del *marketing* a la competencia electoral. Y más sustantivamente, las nuevas actitudes de políticos y de electores corresponden con una sociedad mundial en que la relevancia de la política, o la confianza en que ella pueda ser un agente de reforma social, han declinado peligrosamente. De allí el debilitamiento de los grandes partidos aunque asistimos, desde hace poco, a indicios de nuevas formas de agrupaciones colectivas con relevancia electoral. Nos habría gustado detenernos en destacar más la importancia decisiva de este cambio del contexto social y cultural de la política contemporánea, pero en los límites de este artículo solo cabe dejarla mencionada. Con la conciencia de que operamos en un contexto muy nuevo, abordaremos en esta parte, la campaña electoral del 2006, particularmente la primera vuelta, que es la relevante para el argumento de este artículo.

Podemos distinguir cuatro grandes clases de actores principales en medio de la complejidad de los procesos electorales contemporáneos: los políticos, es decir, las candidaturas que protagonizan directamente la competencia. Los «actores estratégicos de poder» que son no solo políticos, y quienes definen las reglas del juego, los temas en debate, y las opciones alternativas factibles en torno a cada uno. Los medios de comunicación de masas con el papel de intermediación cada vez más relevante que se les conoce. Y, finalmente, el electorado mismo, el conjunto de votantes, que en el Perú pese a ser tan heterogéneos como lo hemos visto, constituyen ese día un cuerpo institucional único. Todos estos actores, vinculados en términos distintos en cada arena de acción, dentro de pautas institucionales y organizacionales, interactúan a lo largo de la campaña, ejerciendo sus relaciones de poder, tomando sus decisiones diarias y a veces hasta redefiniendo parte de sus identidades, en un tiempo cargado de intensidad afectiva y pasional, como es generalmente el periodo electoral.

Lo más frecuente es centrar el análisis de las campañas en torno a los candidatos, a los partidos o grupos que los sustentan y al resultado del voto ciudadano que es el tema obligatorio. En un enfoque en estos términos, el territorio social de la campaña puede ser asumido como vacío o neutro, hasta que, terminadas las inscripciones legales, se inicia la campaña misma. Desde esta perspectiva, las candidaturas aparecen con un gran margen de acción. Otros enfoques más sistémicos que propiamente políticos insisten al contrario en el peso de los determinantes estructurales y, también extremando un solo punto de mirada, ven a los políticos y al electorado, ubicados dentro de condicionamientos rígidos que apenas si podrían modificar levemente. Las campañas pueden ser leídas entonces como eventos rituales obligados y de limitada trascendencia.

Como dijimos, por nuestra parte, tomaremos en cuenta en la campaña peruana del 2006 tanto la incidencia de condicionamientos y actores externos

a las elecciones mismas, como los comportamientos de los actores políticos, el voto del electorado y haremos un lugar especial a los medios de comunicación que vinculan a estos dos últimos. Si queremos analizar la campaña como una unidad en términos de lucha de poder, no solo electoral, nos parece necesario considerar a todos estos actores.

El análisis de medios y la periodización de la campaña del 2006. Analizaremos información de los medios en dos aspectos: el primero para seguir la ubicación de los hechos relevantes y el segundo para percibir la forma en que ellos intervienen en la construcción de las imágenes de los candidatos y en la significación que le van dando a todos esos hechos. Esta atribución de significación nos parece central porque es a partir de esas propuestas que los grupos de ciudadanos elaboran sus propias visiones y juicios. Naturalmente, los códigos para atribuir significación política a los hechos no son producidos necesariamente por los periodistas de los medios. Se trata de fórmulas discursivas, más sencillamente de explicaciones del porqué de las cosas, que están ya en alguna forma en debate, explícito o implícito, en toda sociedad antes de las campañas mismas. En este artículo no podremos desarrollar esta cuestión de fondo sino a través del análisis de determinados medios escritos de la capital.

Escogimos como fuente primera dos diarios: *Correo* y *La República*. Ambos dan amplia información política y cada uno enfatiza posiciones y valores políticos distintos. *Correo* expresa una posición firme a favor de las políticas de libre mercado con la menor intervención estatal posible, es un neto partidario del orden social actual; mientras que *La República* es partidaria de combinar la acción del mercado con regulaciones estatales y da espacio a información y opiniones que inciden más en las desigualdades sociales y por tanto en la conveniencia de introducir reformas al orden existente. Ambos traen, además de información, evaluaciones políticas argumentadas. Metodológicamente, tomaremos las opiniones correspondientes a las líneas de cada diario como una unidad, sin distinguir editoriales o articulistas y sin tomar en cuenta los puntos de vista de invitados con posiciones distintas que marginalmente esos periódicos incluyen. Se recogieron alrededor de 600 textos periodísticos de ambos, entre julio de 2005 y mayo de 2006. Hicimos también observaciones puntuales de algunos programas de la televisión limeña y observamos medios de cuatro departamentos del interior. Hasta el momento no hemos podido, sin embargo, organizar un trabajo sistemático sobre ellos.

Nuestro análisis de la campaña sigue un orden cronológico y distingue tres periodos: *a)* julio a diciembre de 2005, *b)* enero a abril de 2006 y *c)* abril a junio de 2006. Este último corresponde con la campaña por la segunda vuelta. En este artículo abreviado haremos, sin embargo, una síntesis apretada sobre todo del primer periodo, y en parte del segundo, porque en ellos se definieron

los términos de la polarización política dicotómica, que será ahora nuestro objeto principal de análisis.

2.2 Primer periodo: julio a diciembre de 2005

La campaña comenzó formalmente el 9 de enero de 2006, con el cierre de la inscripción de candidaturas presidenciales. Sin embargo, en el circuito de comunicación política se había ya empezado a fijar las imágenes de los candidatos y la significación de los temas. Los medios difundían también opiniones del electorado y sus expectativas, atendiendo a los estudios de las agencias encuestadoras. Es conocido que las campañas, en términos mediáticos y comunicacionales, comienzan así, antes de su inicio formal. La temprana indagación por la intención de voto va creando un referente ordenador y se va intensificando hasta convertirse en un tema central, cosa que ocurrió en este caso hacia noviembre de 2005, cinco meses antes de las elecciones de primera vuelta. De esta manera, los medios van estableciendo la relevancia distinta de las candidaturas. Más allá de la igual condición legal, el hecho social mediático va registrando y/o definiendo cuáles son las candidaturas que realmente deberán tomarse en cuenta.

El protagonismo de los medios de comunicación de masa fue de importancia particular en este primer periodo. Más allá de comunicar los resultados de las encuestas de opinión, ellos son quienes cumplen la función clave de presentación de quiénes son esos candidatos. Esta función de presentación fue especialmente importante para el caso de Ollanta Humala, ya que era un personaje casi sin imagen pública previa. La manera en que se efectúa esa presentación tiene obvias implicancias políticas, más aún si ese candidato casi desconocido en agosto se consolidaba para noviembre como uno de los principales. Ya entonces era presentado como una amenaza, no solo por los medios que estudiamos, sino también por la mayor parte de los de la capital.

Es necesario distinguir la prensa de Lima, incluida la televisión, de la de provincias y allí de la televisión regional o local y sobre todo de la radio. Los contextos informativos, las opiniones y los significados que se ofrecen a los públicos de Lima y provincias son muy distintos y tienden a estar lógicamente marcados por los problemas y los rasgos sociales propios de cada territorio. Utilizaremos por eso, con frecuencia, la información que tenemos sobre los medios en general y no solo la de los dos periódicos limeños ya nombrados.

La intensidad de la información política es mucho mayor en Lima. En las provincias la atención pública tardó bastante más en concentrar su atención en las elecciones. Aún en enero las noticias de la campaña nacional no ocupaban lugar central en medios de comunicación de varias capitales de departamento. Esta débil

unidad o fragmentación del escenario político nacional es de seguimiento obligado si se quiere comprender bien la campaña como conjunto y sus resultados. El universo político limeño y los términos de significación y evaluación que ofrece están presentes en todo el país, pero fuera de Lima son solamente una de las lecturas mediáticas disponibles. Los medios locales de las ciudades en las regiones ofrecen allí otros códigos de interpretación, otros juicios de valor y son estos los que, al parecer, sus respectivos públicos encuentran más interesantes, porque parten directamente de las situaciones que ellos viven.

Este fenómeno social fundamental es muy poco reconocido en Lima, ciudad que se comporta con la lógica de una realidad regional autocentrada en sí misma. La diferencia es que, por la mayor cantidad de información disponible y su mayor accesibilidad, la opinión pública limeña, incluso la informada, tiende a pensar que sus visiones, sus términos de interés y de debate son efectivamente nacionales. Un ejemplo saltante es lo que ocurre con la manera en que se presentan en Lima las encuestas de opinión de la metrópoli, sin distinguir con frecuencia que no son nacionales. El alerta acerca de que las regiones piensan distinto ha mejorado algo, después de la campaña del 2006, pero durante ella ese autocentramiento inhibió a los propios medios limeños a comprender, por ejemplo, que la recepción del discurso de Humala podía ser distinta en el interior que en la capital. Además, por su costo, las encuestas nacionales eran escasas en 2006 y solo una agencia encuestadora hacía sondeos mensuales de cierto alcance nacional, aunque restringidos al medio urbano. Quizá este fenómeno de habitual ligereza, que tiende a ignorar la necesidad de formular al menos fotografías más realistas de nuestra profunda heterogeneidad nacional, facilitó que estrategias inteligentes de las campañas periodísticas contra Humala no percibieran los efectos contraproducentes de sus mensajes, para sus propios propósitos.

Volvemos al tema de la campaña misma, al rol central de los medios en ella y a la importancia de la función de presentación de los candidatos ante la opinión pública que siempre les corresponde. Tratándose de una función informativa, ella tiene a la vez un contenido obligada y específicamente político, se lo reconozca o no. La presentación es, como dijimos, la forma de responder a la pregunta sobre la identidad del candidato. Si los candidatos importantes son ya conocidos, como ocurría en nuestro caso con los principales, los medios deben recordar su trayectoria y volver a enfatizar los trazos de su perfil con base en hechos públicos que se seleccionan y organizan. Sobre esa síntesis, se lo interpelará y se confirmará o modificará la imagen de base que cada medio elaboró en las primeras semanas.

Como ya lo hemos dicho, la función contemporánea de los medios es dar significados y sentidos para hacer inteligible una realidad social cada vez más compleja y cambiante en todos los campos, y esta función general se

aplica naturalmente a la campaña presidencial. Así ocurrió entonces con la que analizamos. Esto exige buscar mostrar el perfil propio de los candidatos y situarlo en relación con los otros. Es decir, hay una tarea de posicionarlos en un cuadro o mapa político de conjunto sobre la campaña, entera, sobre los temas y alternativas que en ella están en juego. Los medios deben presentar entonces no solo a los candidatos sino a toda la campaña, en formatos rápidamente accesibles por mayorías ocupadas en otros temas.

Los elementos empíricos para construir el mapa son proporcionados de nuevo por las encuestas, por ejemplo: cuáles son los problemas que preocupan a la gente, qué dicen los expertos y analistas, cuál es el grado no solo de simpatía sino de «reconocimiento», de identificación del candidato por el público¹, etcétera. Sin embargo, en lo que hemos llamado el mapa general de lo que está en juego en la campaña, y en la ubicación de los candidatos en ella con su respectivo perfil, cada medio no puede elaborar la tarea sin recurrir a sus valores, ideas e intereses. Y, lo que es aún más preciso, sin tomarlos de las distintas corrientes de interpretación social, es decir, de los distintos discursos que ofrecen interpretaciones públicas de la realidad social y de la política.

En nuestro caso, elaborar los perfiles de la líder de la segunda fuerza política nacional en ese momento y candidata ya una vez a la presidencia, Lourdes Flores, y de dos ex presidentes como Alan García y Valentín Paniagua, era una tarea predecible, conociendo las orientaciones de cada medio. Al comenzar el interés mediático en julio de 2005, la curiosidad que hacía mirar la periferia de esos tres candidatos era la pregunta de quién sería el candidato del fujimorismo. El tema de un *outsider* que pudiera movilizar un voto de protesta preocupaba a los analistas, pero era poco mencionado en los medios.

En esos primeros meses se destacó que Lourdes Flores superaba a Valentín Paniagua en intención de voto y se la anticipó como «la candidata natural» del frente Unidad Nacional, puesto que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, había descartado su participación. En cuanto a Alan García, se comentaba la alta proporción «de rechazo», de los que no votarían por él, según las encuestas. Esta evaluación no implicaba su descalificación como candidato, sino que describía los fuertes límites que parecía tener para ganar las elecciones. Las razones se asumían ya conocidas por la población y se basaban en los malos resultados de su primer gobierno².

¹ En otras palabras, cuán suficiente es considerada la respuesta a la pregunta sobre la identidad de cada candidato.

² Es lugar para resaltar que la *identificación* no refiere directamente a un tipo de calificación, sino a una serie de *certidumbres* sobre las características del candidato.

El caso de Ollanta Humala era distinto. A diferencia de sus competidores que partían de una imagen pública básica ya conocida, con sus variantes favorables o adversas, él no tenía tal grado de reconocimiento sobre todo en comparación con ellos. Cuando su nombre comienza a aparecer en las encuestas, aún con importancia menor o solo en alguna región, los medios se encontrarán ante la necesidad de averiguar quién es. A la sorpresa de tener que registrar un nuevo nombre como potencialmente «importante», se sumará luego la que resulta de la revisión de sus antecedentes. Aquí empieza a producirse lo más interesante en esta primera etapa electoral: la construcción de la figura del recién llegado que se proyecta como protagonista de importancia.

2.2.1 Ollanta Humala y la construcción de su imagen electoral y política

El rol de presentación de un candidato de esta naturaleza deja un espacio mayor para la iniciativa de los medios. En esa combinación de información, síntesis y valoración política, ellos se encontrarán propensos a adelantar «cómo ven», no solo electoral sino políticamente, al candidato, sin necesariamente limitarse a repetir lo que él declara. Varios de los medios terminarán construyendo una imagen de rasgos tan fuertes como negativos de Ollanta Humala, en tanto una amenaza para el orden existente. Es decir, la lectura de sus antecedentes y sus declaraciones darán lugar a que él se vaya convirtiendo en la piedra de toque, en función de la cual la mayor parte de los medios reorganizará el mapa general de lo que, según cada uno, está en juego en la campaña.

Es necesario que recordemos, también aquí, los antecedentes públicos de este candidato. Cuando era comandante del ejército, el 29 de octubre de 2000, Humala protagonizó, junto a su hermano Antauro, entonces capitán, una revuelta militar desde un cuartel de la costa sur, más bien simbólica, para exigir la renuncia de Alberto Fujimori, aún presidente del Perú, pero que ya había decidido reducir su mandato a un año y adelantar elecciones. Tras este hecho, Humala pasa a la clandestinidad hasta que durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua se entrega, es amnistiado por el Congreso y es enviado como agregado militar, primero a París y luego a Seúl. Luego su nombre se asocia al movimiento «etnocacerista» que impulsa con su hermano Antauro. Este último publica el libro *Ejército peruano: milenarismo, nacionalismo y etnocacerismo*. Allí define el pensamiento del movimiento como reivindicador de la «raza cobriza», por tanto etnopolítico y nacionalista. Plantea una transformación radical del país, definitivamente autoritaria dada su propuesta con rasgos xenófobos. El reclutamiento original que realizan es entre jóvenes ex reclutas del ejército.

En 2002 aparece el periódico del movimiento, justamente llamado *Ollanta*, difundido por ex reclutas sobre todo en barrios populares de Lima y en muchas provincias del interior. Finalmente, se produjo una toma de la comisaría de Andahuaylas, capital de provincia de la sierra centro sur, dirigida por Antauro Humala. Durante los días que duró este hecho, al comenzar el año 2005, ocurrió un choque que costó la vida de cuatro soldados y dos insurgentes. Al final, Antauro se rindió y está en prisión desde entonces. Ollanta, entonces agregado militar en la embajada peruana en Seúl, envió grabado un mensaje de apoyo a esa acción antes que ella tuviera el costo en vidas señalado.

Regresando a la campaña, en julio de 2005, cuando en la misma Lima ella parecía todavía lejana, una encuestadora pide imaginar posibles «nuevos candidatos», y Humala aparece propuesto con un 9,7 %, aunque el número de personas que no contestó era muy alto. En ese mes es tildado de «fascista» en el diario *Correo*, mientras *La República* especula sobre su posible filiación de extrema izquierda. En agosto, la encuesta nacional de la empresa Apoyo lo sitúa ya en quinto lugar en las preferencias, con 6% de la intención de voto a nivel nacional. Está lejos todavía de los candidatos principales, pero alcanza el 15% de intención de voto en la sierra sur.

Con los antecedentes citados, el anuncio de la voluntad de inscripción de la candidatura de Humala fue suficiente para causar curiosidad y preocupación en la prensa. Con su orientación precisa aún en incógnita y con los antecedentes citados, se entiende que al presentarlo, los medios limeños fuesen críticos y que al mismo tiempo estuviesen tentados de centrarse en él, por la novedad de su rápido crecimiento en las encuestas. El discurso del candidato Humala comenzaba, sin embargo, recién entonces a precisarse y ello ocurría más a través de los mítines más que de los medios, con una capacidad de convocatoria que se tardó en reconocer.

A través de una oratoria nada brillante como tal, Humala planteaba un mensaje, sin embargo, claro, en tanto era una crítica de conjunto a la situación social en la que estaban las mayorías; y la imputaba a los grupos de poder económico y a la inconsecuencia o complicidad de los políticos. De este modo, fue colocando una nueva posición en el escenario de la campaña y verbalizando problemas cotidianos concretos que efectivamente vivía un grueso sector del electorado. De ellos no habían hablado en esos términos, ninguno de los otros candidatos. Él afirmaba que había descontento porque el crecimiento económico no se materializaba en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías, por la falta de empleo de calidad, por el bajísimo nivel de los servicios de salud y educación públicas, por la experiencia de abandono del Estado por parte de las regiones y provincias sobre todo de la sierra y el oriente amazónico, por la debilidad de las atribuciones de los gobiernos regionales, etcétera. Por todo ello, criticaba la

política de apertura de mercados, incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que entonces se negociaba y se ubicaba así más cercano a los gobiernos nacionalistas o izquierdistas que surgían en los países vecinos.

No solo la novedad de este tipo de discurso, ausente por mucho tiempo en la escena limeña, sino su cercanía a las experiencias de un gran sector de peruanos, constituyó un elemento polémico, sin duda válido en una competencia democrática. Él ofreció un nuevo componente para el perfilamiento mediático de su candidatura, que no negaba sus antecedentes autoritarios, pero que ofrecía otro ángulo de visión del candidato. Sin embargo, este componente fue muy poco tomado en cuenta, al menos en estos primeros meses de la campaña y lo que predominó fue la imagen negativa y el recuerdo de su trayectoria anterior. Lo que llamó nuestra atención es que este sesgo lo encontramos casi compartido para los meses primeros de la campaña, en los dos diarios que analizamos en Lima, pese a sus distintas orientaciones.

Se creó así un espacio para que la población pudiera ir recibiendo dos mensajes distintos sobre la misma candidatura emergente de Humala. La de los medios y probablemente sobre todo la de los medios limeños, y la que se iba transmitiendo por vía más oral, de quienes escuchaban y comentaban sus discursos en las presentaciones públicas. Además, Humala concentró sus primeros meses de campaña, precisamente, en hablar en las regiones con más problemas sociales y en los barrios populares. La mayor parte de los medios limeños incluida la televisión, insistían mientras tanto en proporcionar como perfil principal del candidato el ser una amenaza para el orden y el progreso del país.

De nuestra lectura de *Correo* y *La República* entre septiembre y noviembre, cuando Humala es aún el candidato «chico» que empieza a crecer, construimos una síntesis en la que encontramos los siguientes rasgos, en parte contradictorios: *a)* Es un partidario de la violencia y afín con las «izquierdas radicales», *b)* es autoritario y promilitar, *c)* profesionalmente torpe, no calificado e insensato, *d)* su triunfo implicaría ruptura del orden, fin del progreso en curso y «vuelta al pasado». Incluiremos aquí tres citas que encontramos representativas.

El extremista Ollanta Humala no sólo justifica la asonada de su hermano Antauro en Andahuaylas, que costó seis vidas, sino que afirma que si llega a ganar las elecciones presidenciales lo dejaría libre de polvo y paja [...] ¡Dios nos libre! (*Correo*, 5 de septiembre de 2005).

Ahora está levantando la candidatura de Ollanta Humala desde *La Razón* porque los fujimoristas apuestan a un *outsider* fuera de los partidos democráticos que permita que vuelva su líder, mientras que Ollanta cacarea mucho su supuesta «insurrección» contra Montesinos, pero no se hace problemas en declarar al órgano periodístico fujimorista. Bueno, si cobraba US\$ 8 mil mensuales de Toledo en su

incomprensible exilio dorado, ahora qué tanto lo critica. (*Correo*, 31 de octubre de 2005).

Que nadie se llame a engaño: la candidatura de Ollanta Humala va ganando cada vez más simpatizantes entre los sectores empobrecidos y excluidos del país. Su discurso es confrontacional pero revestido de un lenguaje democrático. Sin embargo, cuando se trata de propuestas concretas, sus vaguedades hablan de su vacilación sobre la posibilidad que pudieran ser resueltas sin una ruptura con el actual orden de cosas en el país, y que prefiere no decirlo [...] todavía. La defensa a ultranza de un reactivado nacionalismo en plena época de la globalización, y elevando a ideología, y hasta programa general de un eventual gobierno, nos evoca la radicalidad que tuvo el proyecto velasquista [...] (*La República*, 14 de noviembre de 2005)

El menor rechazo en el texto de *La República* es representativo del discurso general de ese medio en esos meses, que no es igual al de *Correo*, pero que comparte con él la actitud de desconfianza fundamental ante Humala. Y era frecuente además que fuera tal desconfianza la que tiñera más los titulares, que son consumidos por un número mucho mayor de lectores que los artículos que citamos.

De este modo, en el clima mediático general que rodea a ambos medios, la desconfianza coincidía de hecho con la descalificación, en nombre de la propia democracia. Ubiquemos ahora este contenido de la presentación mediática de Humala, en el contexto de estos meses en que ella es más fuerte. En tiempos de despolitización como los actuales, el público no sigue con detalle la política y esta tampoco ofrece actores fuertes con perfiles definidos fáciles de retener por millones de personas que luego decidirán la contienda con su voto individual. El poder de trasmisión simbólica de los medios es por eso tan importante. La gente requiere contar con marcos de comprensión que ordenen en un solo cuadro los referentes para entender qué está en juego en la campaña y quiénes son los contrincantes. Lo más importante en un tiempo de esta naturaleza no es siempre definir las cosas explícitamente y con detalle, sino crear el marco en el cual ellas se vuelvan entendibles por cada persona.

La condición de actores directos del proceso electoral, que a nuestro juicio hay que dar analíticamente a los medios, se da a través de cumplir la función informativa y de provisión de los instrumentos de comprensión que estamos destacando. Los medios son actores en tanto son una plataforma definida, que organiza el espacio político electoral y las imágenes de los candidatos. En parte, su función es como previa al juego político específico que cada medio realiza o puede realizar. Por supuesto, los contenidos de tipo más funcional informativo y los de corte más político vienen asociados en el mismo mensaje y, de hecho, en el

mismo circuito comunicacional. Todo ocurre dentro de la función general de dar significado al conjunto de la campaña, de construir el repertorio de conceptos y símbolos para entenderla, de ofrecer el mapa orientador que dijimos antes, pero queremos destacar la complejidad de elementos que se combinan en este proceso.

Nos encontramos, por ejemplo, con que aún en el momento en que Humala está entre tercero y cuarto en las encuestas, a fin de 2005, su imagen empieza a ser ya el criterio para ordenar el cuadro de conjunto de la campaña, para ubicar a los otros candidatos en relación con él, para estructurar aquel mapa orientador que mencionamos antes. El fenómeno se explica en parte porque Humala comienza a convertirse en quien más aumenta en las encuestas y porque los expertos saben que puede ser además más fuerte en provincias, que tienen baja representación en los sondeos nacionales de que se dispone. Lo que va siendo cada vez más central es, entonces, que la imagen de negatividad de Humala se vuelva el eje de los mensajes mediáticos limeños y que se lo diferencia e individualiza frente a todos los otros candidatos, por un juicio valorativo. La mayor parte de los medios capitalinos se van deslizando a tomar partido activo, casi como si no se dieran cuenta, o como si encontrarán que al hacerlo cumplen una función superior de educación política. El resultado es que van configurando un mapa de la campaña en el que pareciera haber un bloque en el que están todos los candidatos y otro en el que solo está Humala, porque se considera que él se sitúa en una posición opuesta al orden debido o deseado de la sociedad.

Un resultado de esta dinámica, que ya es clara al final de esta etapa, es entonces que la campaña electoral parece girar en torno a una suerte de preelección entre dos bloques. En uno primero se encontrarían los candidatos con una trayectoria política previa, finalmente confiables según la mayoría de medios, los principales, Lourdes Flores, Valentín Paniagua y Alan García. En el segundo bloque estaría Ollanta Humala. El efecto que queremos resaltar es la conformación de una dicotomía, iniciada en el ejercicio de presentación de candidatos y la creación de sus imágenes electorales. El lenguaje para comprender la campaña se torna dicotómico en tanto permite identificar únicamente una suerte de gran elección básica entre esos dos bloques a los que se les da corporeidad y que son presentados en contraposición.

2.2.2 La dicotomización del terreno electoral alcanza a los ciudadanos mismos

En la conformación de este imaginario que se le ofrece, principalmente al público limeño, pero que marca sin duda la campaña nacional, las opciones no se refieren solamente a las características individuales de los candidatos. Como se ha visto para el caso de Humala, junto a las calificaciones sobre el candidato individual

se ubican una serie de juicios sobre el modo de entender el buen orden. El análisis de este discurso de diferenciación y oposición de bloques de candidatos, va sugiriendo, más allá de las características políticas de cada uno, representaciones sobre lo que es entendido como lo que es debido para el país en su conjunto. El crecimiento en intensidad del tema electoral en los medios correspondió así a la confrontación de representaciones sobre lo bueno y lo malo para el Perú, a través de la competencia electoral.

Al final del año 2005, las encuestas de opinión son cada vez más numerosas y ello comienza a mostrar que las preferencias por los candidatos pueden variar y que hay al menos tres grandes regiones que reaccionan de manera diferente entre sí, Lima, la costa norte y la sierra centro sur, más modernas las dos primeras, con más rasgos de ruralidad y pobreza la última. Así, se abre el espacio para que los medios de comunicación vinculen las candidaturas con las poblaciones distintas de esas grandes regiones, forjando imágenes valorativas de sus electorados, que luego rebotarán sobre los candidatos.

Correo y La República dan un panorama más nacional de los sondeos al terminar el año, en vísperas del cierre de las inscripciones de candidaturas presidenciales y ubican a las poblaciones distintas en relación con la campaña electoral (para enero, Humala había subido al 23% de intención de voto al nivel nacional). Así, a la organización de los candidatos en dos bloques y a su relación con las imágenes deseadas del buen orden para el país se va sumando el que el lenguaje dicotómico no solo se refiera a los candidatos, sino también al público que representarían o que les correspondería.

El público de Humala se convirtió así en otro elemento para la definición de su imagen. Descriptivamente, primero, el público de Humala es definido como sureño o sur-andino, y económicamente pobre, y se empieza a buscar allí explicaciones a su crecimiento en las encuestas. En ambos diarios analizados, aunque de modo más central y agresivo en *Correo*, mediante las elaboraciones formadas sobre las relaciones de Humala con su público, se va forjando una imagen del electorado que lo apoya como un colectivo movido por fuerzas irracionales. Se transfiere el juicio sobre Humala hacia sus electores. Aparecen así los términos y las ideas de «electorado» y «víctima voluntaria» para describir las tendencias de los votantes de Humala.

Leyendo la última encuesta de la U. de Lima, uno no deja de pensar que Leopold von Sacher-Masoch, insigne novelista y padre del masoquismo, debió de haber nacido en el Perú y no en el Imperio Austro-Húngaro. Que Fujimori conserve todavía tantas simpatías, que García tenga aún votantes y que un cachaquito aventurero de ideas simplonas como Ollanta Humala haya logrado un fuerte crecimiento

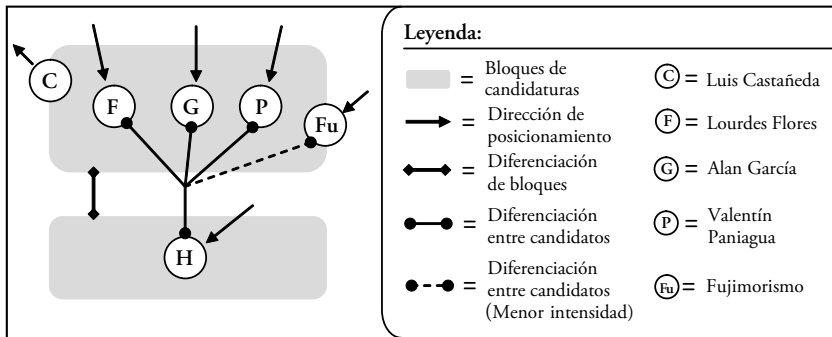
en nuestra capital, da mucho que pensar y recuerda aquel chiste del masoquista que le ruega al sádico «pégame» y éste le contesta «Noooo». Aquí se muestra la baja autoestima de un gran sector de peruanos (los futbolistas son los mejores exponentes de esta falta de amor propio), ese «electarado» que busca siempre a alguien que le patee el trasero y lo esquilme. (*Correo*, 26 de noviembre de 2005)

Y avanza un poco como el cantante español Pau Donés de Jarabe de Palo, «bonito, todo me parece bonito», y cambian los extras, niños de colegio, una señora en silla de ruedas. Y hay quien aplaude. Ya tenemos al puro, al salvador. ¿Usted se lo cree? Yo no. El mal autoritario no tiene en Perú una punta sino dos, quienes quieren volver a Fujimori, gente no muy distinta de la que congrega —no tanto como se dice pero no poco como algunos creen— el disimulo de Ollanta. Los distingue la variedad del espectáculo. Con los Humala hay desfile. Con el Chino, tecnocumbia. Los reúne la teoría del pueblo como víctima voluntaria. (*La República*, 19 de noviembre de 2005)

Con esta ampliación a los ciudadanos electores culmina la dicotomización social del terreno electoral en su conjunto. Sobre esta base muchos medios de Lima asumen un rol activo presentándose como plataforma de reflexión para la mejor orientación del voto, y como agentes que buscan un voto de mayor «calidad». Lo que queda crudamente establecido, en el lenguaje mediático dominante, es en síntesis que no solo estaría mal «votar por Humala» sino también que sería algo malo «ser alguien que vota por Humala». Ello describe el modo en que son evaluadas distintas «poblaciones», con juicios explícitos, factibles por los elementos discriminadores muy presentes aún en las pautas culturales del país, pese a su aparente reducción relativa. El supuesto es que estas poblaciones «no saben elegir» o que «no saben lo que quieren».

Para tratar de sintetizar, en otra fórmula verbal utilizada en estos medios, el juicio negativo sobre la candidatura de Humala, o en el caso de *La República* la duda entre este o la desconfianza, diremos que él crea el riesgo de «caer —de nuevo— en el caos». Este temor al caos parece persistir en la memoria colectiva de muchos peruanos. La experiencia literalmente traumática de haber vivido entre los años ochenta y comienzos de los noventa una combinación de hiperinflación y terrorismo ha marcado al parecer el inconsciente colectivo del país y, otra vez, de Lima en especial. Frente a ese recuerdo, los años posteriores, donde se ha producido un crecimiento económico alto, dan la base para este contraste entre orden y caos que hacen los dos medios estudiados, con ciertas diferencias que no tenemos espacio suficiente para registrar aquí y que aumentarán en el siguiente periodo de la campaña.

Gráfico 5

Primer periodo: polarización dicotómica y diferenciaciones entre candidatos

Elaboración propia

Lo que las élites de la mayor parte de los medios —y de grupos de interés económico o ideológico— parece que no tomaron en cuenta es que el balance que hacen de los noventa y de la actualidad de fines del 2005, y que para ellos da razonabilidad a su discurso, no es igual a la experiencia y al balance de otros amplios sectores de peruanos y peruanas. En otras regiones y en otros sectores de la población de la propia Lima, el orden actual no es asociado con la mejora de la situación propia, con la seguridad y con el acceso al progreso. La distancia entre el Perú que siente que puede acceder desde aquí a una modernidad inclusiva y la que vive casi lo contrario se iría explicitando por eso de un modo tan sorpresivo en la campaña.

La campaña entra en su recta final, con los candidatos presidenciales ya inscritos al comenzar enero de 2006, cuando la dicotomización que hemos comentado está formulada y lista a expandirse como efectivamente ocurrió. Para los medios que analizamos, la elección puede llevarse a cabo y ningún clivaje o discrepancia es demasiado grave entre los demás candidatos que son «distintos a Humala». La contraposición orden-caos no siempre se formulaba de modo preciso, pero comenzó a trazar los modos de entender la campaña en general. A partir de allí se conforman dos campos de ubicación de candidaturas que marcarán el posicionamiento de los candidatos y sus interacciones en el siguiente periodo de la campaña. Las hemos tratado de reflejar en el gráfico 5.

2.3 De la dicotomía a la polarización electoral: enero-abril de 2006

2.3.1 Los temas de campaña y el posicionamiento de los actores

El segundo periodo de la campaña, que se inicia con las inscripciones de las listas de candidatos y culmina en la votación de primera vuelta, ilustra un fenómeno

distinto al observado en el primer periodo, pero que es obviamente su continuación. Entre enero y abril de 2006, se vuelve más relevante el juego de los actores políticos en el campo electoral y también el de otros actores de poder. Si en un primer momento la diferenciación entre candidatos se efectuó marcada por la imagen de dos bloques diferenciados, en el segundo las particularidades de cada candidato cobraron forma mayor a través del modo en que cada uno respondía a los distintos temas en debate.

En enero se evidencia por ejemplo una tendencia a concretizar temáticamente la crítica a Ollanta Humala. En tanto ya la presentación del candidato ha sido realizada, las críticas recaen no tanto ahora sobre su figura, sino por su relación o por sus posiciones sobre temas específicos. Sin embargo, los temas surgen, en buena parte, como derivaciones y formalizaciones de los significantes que habían contribuido a la construcción de la figura inicial de Humala. Es decir, él aparece como la encarnación de determinados temas de debate. En otras palabras, referirse a ese candidato fue muchas veces como el atajo que reenviaba a grandes temas de debate: libre mercado, democracia, institucionalidad, nacionalizaciones, inversión privada. Por otro lado, hablar de dichos temas se convirtió en un camino para referirse a Humala. El candidato «satanizado» siguió siendo, de otro modo, un referente obligatorio para el posicionamiento de los demás candidatos frente a estas cuestiones.

En este segundo periodo, las posiciones de los demás candidatos con respecto a los temas más importantes son reconocidas y comunicadas con más claridad en su heterogeneidad. La tematización permite que el posicionamiento de candidatos no dependa exclusivamente del deslinde con Humala, sino de sus perspectivas o posiciones diferentes sobre temas concretos. En este tiempo, se hace visible la insuficiencia del deslinde con Humala como recurso de diferenciación de los candidatos. Este proceso facilita la mayor aparición en los medios de actores no políticos como los empresariales, por ejemplo, que muestran preocupación por la posibilidad de que salga elegido Humala. La aparición del empresariado como un actor de importancia depende, sobre todo en *Correo*, de la idea de que él representa la «seguridad económica nacional» y que es el actor decisivo para el progreso. En *La República* se acepta un supuesto básico sobre la importancia de la seguridad económica y al mismo tiempo se señala que ella no basta para asegurar el desarrollo. En *La República*, el libre mercado aparece como bueno en la medida que aporta al objetivo último del desarrollo. Al ampliarse el debate, donde se publicitan también puntos de vista de líderes sociales de distintos grupos e ideologías, se refuerza la tendencia a destacar la pluralidad de posiciones de los candidatos principales.

Este proceso menos centrado en destacar las fronteras de los bloques conformados durante el primer periodo, sin embargo, no los olvida ni los supera. Esas fronteras se mantienen presentes hasta el final del proceso electoral. Además en la tematización, se produce, por ejemplo, una dinámica que afecta diferenciadamente a los dos bloques. Esto ocurre porque los temas que toman prioridad son los que se asociaron en el periodo anterior a la supuestamente negativa aparición de Humala, pero que de algún modo se legitiman. Ya los hemos mencionado líneas arriba. Ellos se volvieron muy importantes en la especificación de la agenda general de las elecciones.

Por tanto, la variedad de los posicionamientos convivió con la premisa inicial de considerar a Humala un candidato inapropiado para garantizar el orden. Aunque las ideas sobre el orden social y cómo mantenerlo podían tener énfasis bastante diferentes, el modo de entender lo realmente «inadecuado» sigue encarnándose en él.

Los rasgos de este segundo momento de la campaña facilitaron también la mayor diferenciación entre los dos diarios que hemos analizado. Por ejemplo, *La República* muestra poco rechazo a las propuestas económicas de Humala, pero al calificarlas como quizá razonables pero «poco novedosas», mantiene una cierta distancia. En *Correo*, en cambio, las propuestas económicas del candidato son duramente criticadas, o se dice al mismo tiempo que no las tiene.

Los otros candidatos «conocidos» e importantes, según los sondeos, son ahora seguidos con más atención y perfilamiento específico. Por ejemplo, *La República* expresará con más fuerza una línea en contra de Lourdes Flores, que a favor o en contra de Ollanta Humala. Las figuras «de derecha» son el principal blanco de las críticas en este diario. Se critica a quienes satanizan a Humala, y también a quienes piensan que el modelo económico en vigencia representa el orden. En *Correo*, junto con la posición contraria a Humala, se apoya a otros candidatos, varios de los que *La República* suele criticar.

Las críticas a Lourdes Flores, por parte de analistas u otros candidatos, empiezan a destacarse en febrero. Es en este momento, además, en que Alan García parece ya decidido a posicionarse mejor a través de esa crítica a Flores y también a Humala, naturalmente, pero sus énfasis verbales se orientan más contra la primera. Esta diferenciación entre lo que algunos medios llaman «candidatos prosistema» se vuelve cada vez más relevante. Y a su vez tal diferenciación abre el espacio para los razonamientos de los articulistas o líderes de opinión que proponen la búsqueda de un «centro político».

La tendencia a ubicar a Lourdes Flores como «candidata de los ricos» y este mismo apelativo van haciendo camino fuerte en el lenguaje de distintos sectores de la población. Este eslogan se alimenta también de la crítica a las «ideas económicas

muy liberales» que ella representaría. Se mezclan así las imágenes más gruesas de representación de sectores sociales con el juicio de las posiciones políticas. Y le tocará ahora a Flores, tal como había sucedido con Humala antes, ser vinculada con sectores sociales específicos de la población. En su caso, las del otro extremo social, «los ricos». Si bien en el primer periodo ella fue la candidata más requerida para declarar en los medios acerca de Ollanta Humala —en relación sobre todo con la probable intervención de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en el proceso político peruano—, la escasa diferenciación posible que se hacía entre los candidatos «contra Humala», en los medios, probablemente no ayudó a cuajar una polarización específica entre ambos personajes.

La idea de que «haría falta un centro político» distanciado entonces tanto de Humala como de Lourdes Flores se alimenta, según varios estrategas, en el temor de que la candidata no logre atraer a una masa electoral mayoritaria, que es socialmente distante de ella. Y aquí es que apunta justamente su rival directo por el decisivo paso a la segunda vuelta. García se muestra como una opción intermedia (por «un cambio» —tomando de Humala— pero «responsable» —tomando un tema asociado a la imagen de Flores—). De este modo, busca así coincidir con los discursos mediáticos que no le habían sido favorables al comienzo pero que reconocían también «esa necesidad». La separación de bloques hacía de Alan García un candidato diferente a Humala, pero no lograba distinguirlo de forma suficiente de Lourdes Flores. Esta «búsqueda del centro» o posición intermedia no era, sin embargo, un centro propiamente dicho, porque se producía al interior de la separación previa, que hemos reseñado y graficado en el análisis del periodo anterior: bloque sistema contra bloque antisistema. Ahora incluimos otro gráfico para tratar de pasar mejor la nueva imagen de la polarización que estamos describiendo aquí.

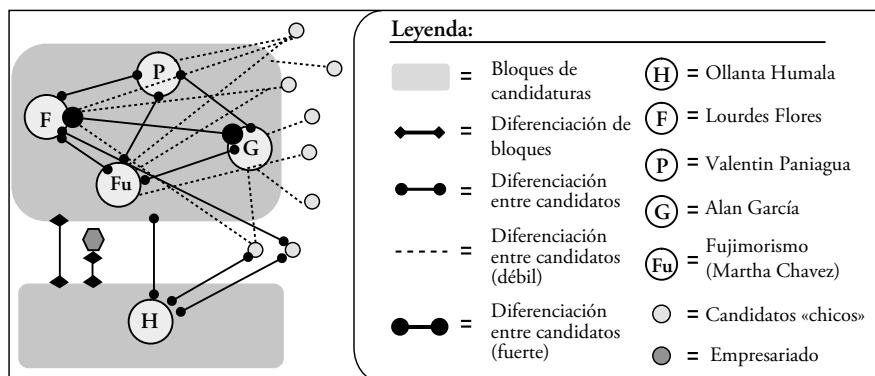
La cercanía creciente a las elecciones alienta a todos los candidatos a perfilarse del mejor modo de llegar al gran público. Eso harán tanto Valentín Paniagua como Martha Chávez, por ejemplo. Pero debemos ir concluyendo ya el análisis de este artículo, porque, con la dinámica propia de este segundo periodo de la campaña, nos parece que queda ya planteado al lector cómo tomó forma la polarización político-electoral que reforzó sin quererlo las diferenciaciones sociales que se expresarían con el resultado de primera y segunda vuelta y que fueron materia de la primera parte de este artículo.

Si, en un primer tiempo de la campaña, la sorpresa y el rechazo a Humala lo perfilaron como el único candidato «diferente», o de un bloque distinto, publicitándolo más de esta manera; en el segundo momento, la preocupación de la mayoría de los medios limeños y, seguramente de una alta proporción de los nacionales, se centró en buscar maneras de «frenarlo». Un recurso será

justamente atender a los otros candidatos que buscaban posicionarse y, al final, especular abiertamente sobre «quién sería el mejor para ganarle a Humala en la segunda vuelta».

Gráfico 6

Segundo periodo: diferenciaciones mayores dentro de la polarización



Elaboración propia

La campaña de la segunda vuelta, oficialmente dicotómica, ocurre así sobre una dicotomización política y electoral previa, forjada a lo largo del periodo julio 2005–abril 2006, que ha sido el tiempo al que nos hemos referido. Ella fue obra no solo y a veces no principalmente de los actores políticos, como el grueso seguimiento hecho, lo ha podido mostrar de alguna manera. Por eso, cerrar aquí el artículo no limita el aporte que hemos intentado hacer a la vinculación no deseada que se produjo entre las distancias económicas sociales y culturales de la población, y el planteo de la campaña mediática, generada principalmente desde Lima y que hemos llamado la «satanización de Ollanta Humala».

En esta segunda parte hemos hecho un análisis de la campaña y de la polarización política que en ella se produjo. El seguimiento de dos diarios y de alguna manera de algunos medios de ciudades del interior, nos ha permitido explorar, muy parcialmente aún, un tema de primera importancia, poco trabajado por nuestra naciente ciencia política, el análisis de los medios y de la formación y difusión de formas políticas de pensamiento y acción política y electoral. No hemos tenido ocasión de ingresar más en el tema de quiénes fueron los actores más específicos de la estrategia anti Humala, proceso del cual los medios fueron un eslabón central, pero por supuesto no único ni autónomo.

El ajustado resultado por el segundo lugar en la primera vuelta dio el triunfo, como quedó registrado al comienzo, a Alan García sobre Lourdes

Flores. En la campaña de la segunda vuelta cada bloque antes construido tuvo ya un solo candidato: Humala; por un lado, García; por el otro. El resultado fue una diferencia de solo cinco puntos (52% contra 47 %) que pudo generar un replanteamiento en la comprensión del país y en las estrategias de construcción democrática de la política que incluso pareció que podría producirse. El que el evento empresarial más importante, la llamada Conferencia Nacional de Ejecutivos (CADE), tuviera en noviembre de 2006 como tema el reto que plantea la reproducción de la exclusión social en el país, fue un signo positivo a nuestro juicio, en aquella dirección. Escribiendo desde el año 2009, es claro que ese no ha sido el rumbo dominante escogido por el gobierno. El vencedor de la elección y actual presidente ha insistido más bien explícitamente en la conveniencia de priorizar la gran inversión y continuar sin cambios con el modelo económico. Más aún, está optando también por la estrategia de la polarización dicotómica abierta, con los mismos términos de la campaña más dura contra Humala del 2006: «sistema contra antisistema». Sin duda, tiene espacio para ese curso de acción, pero también resistencias múltiples explícitas e implícitas. Desde el tema del artículo, nos queda la explicación que su opción centrista tomó fuerza en una coyuntura dominada por el cálculo táctico y desde dentro de una polarización dicotómica, en la que sigue persistiendo.

En términos de análisis y evaluación, este texto avanza resultados de un proyecto de investigación no concluido y que esperamos retomar. El cruce entre los datos recogidos para cada uno de los dos acápites del artículo da para muchas formas de continuidad y para discutir con más precisión las posibilidades de construir instituciones y relaciones democráticas, en medio de la estructura de poder y los recursos con los que cuenta el país. Ojalá que los materiales aportados sean útiles a los muchos analistas hoy interesados en estos temas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castells, Manuel (2003). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. II, 2a ed.). *El poder de la identidad* (Caps. 5-6). Madrid: Alianza.
- Grompone, Romeo (2005). *La escisión inevitable: partidos y movimientos en el Perú actual*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Lipset, S. M. (1996). Repensando los requisitos sociales de la democracia. *La Política: revista de estudios sobre el Estado y la sociedad*, 2, 51-88.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006). *Hacia una descentralización con ciudadanía: Informe de desarrollo humano Perú 2006*. Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- Sartori, Giovanni (1966). European Political Parties: The Case of Polaryzed Pluralism. En J. La Palombara y M. Weiner (Comps.), *Political Parties and Political Development* (pp. 137-176). Princeton: Princeton University Press.
- Tanaka, Martín & Sofia Vera (2009). La dinámica «neodualista» de una democracia sin sistema de partidos. La situación de la democracia en el Perú. Mimeo.
- Vergara, Alberto (2007). *Ni amnésicos ni irracionales*. Lima: Solar.

MOVILIZACIONES SOCIALES Y PROTESTA REGIONAL: UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Narda Henríquez Ayín

Durante varios años, he tenido presente algunas preguntas que han servido de contexto y motivación para el trabajo que he realizado sobre movilizaciones sociales y protesta regional. Se trata de interrogantes sobre qué país tenemos y en qué momento estamos, a las cuales intentaré responder de modo breve aludiendo a los ciclos de larga duración. Luego, me referiré de modo específico a la protesta regional, cambios y tendencias; y, finalmente, presentaré algunas precisiones conceptuales e hipótesis sobre las movilizaciones sociales en el Perú de hoy.

Por lo general, la situación del país se aprecia a través de indicadores económicos y de la evolución del empleo, no del consumo básico; de la expansión de los asalariados y de la sindicalización, no del escenario de la cotidianeidad. Del mismo modo, la situación política tiene el tiempo y la intensidad de los acontecimientos en torno a la clase política nacional cuyo escenario es la ciudad capital, y se ha puesto usualmente poca atención a los escenarios públicos regionales, excepto cuando hay protestas.

Propongo que es necesario mirar el país a partir de la conexión entre la evolución del empleo y la sindicalización, y la evolución del consumo básico y de los programas de apoyo alimentario destinados a las familias empobrecidas. Mientras que el trabajo ha sido abordado como parte de procesos macroeconómicos, la evolución de los programas alimentarios ha sido tratada como problemas y situaciones sectoriales, de menor importancia.

Veremos que la sindicalización baja sostenidamente desde los ochenta y de modo abrupto entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa; mientras que el número de organizaciones de base para la subsistencia, sube. La brecha entre los dos ejes, el de las organizaciones de base y el de la sindicalización, es una brecha que desde mediados de los ochenta se agudiza, es una brecha entre lo que ocurre en el mundo del trabajo y de la empresa, y el mundo del consumo, de las familias.

Los programas considerados de asistencia alimentaria se basaron en las movilizaciones de mujeres, estos inicialmente parecían destinados a una breve existencia cuando surgieron, sin embargo, se multiplicaron debido a la recesión, y se masificaron con las medidas clientelares de Fujimori. El discurso y los planteamientos de instituciones nacionales e internacionales especializadas¹ sostienen que los programas de apoyo alimentario están destinados a intervenciones coyunturales para enfrentar las emergencias que resultan de los programas de ajuste y recesión. En el Perú, sin embargo, se trataba de programas que surgen en los setenta, varias décadas antes del ajuste de Fujimori. Por esto, sostengo que en el Perú estamos hablando de un problema de orden estructural en sentido clásico e histórico.

Como se observa en el gráfico 1, se trata de un periodo de más de treinta años en que las tendencias no se han revertido. Los datos que presentamos se refieren a Lima Metropolitana, pero la tendencia señalada se amplía entre los ochenta y noventa a las principales ciudades del país, lo cual es una característica del mundo urbano. Si bien desde los primeros años de esta década se han producido ligeras modificaciones en esas tendencias —los niveles de sindicalización logran cierta recuperación, las organizaciones de base se estabilizan con un moderado crecimiento—, esa gran brecha se mantiene y es menester explicarla.

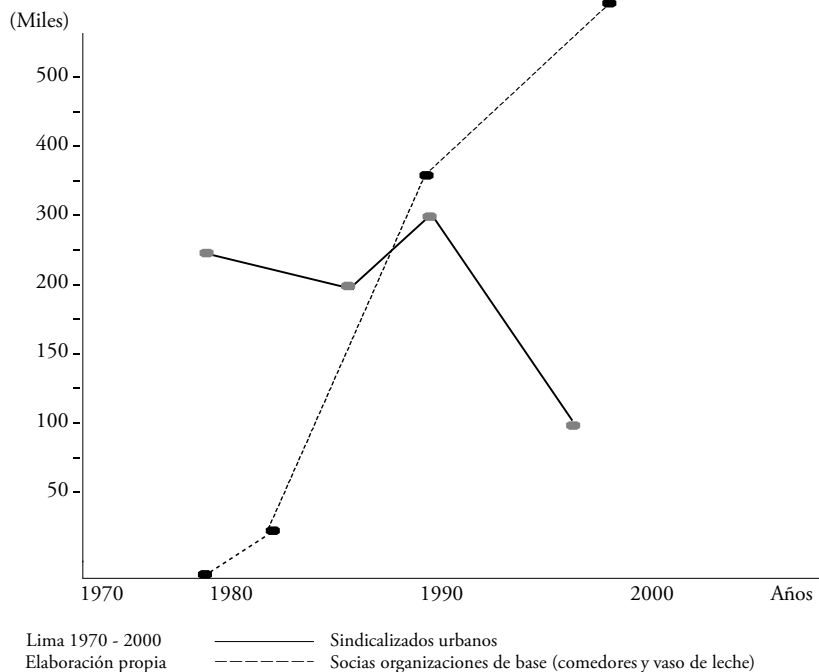
La evolución de la sindicalización y de las organizaciones de subsistencia tienen una relación inversa. A partir de ello, podemos sugerir que si los déficits en alimentación y subsistencia son el otro lado de la medalla del déficit de empleo e ingresos, requieren también de un tratamiento estructural a través de políticas de más largo aliento y no solo un abordaje como programas coyunturales.

Los gobiernos de turno han oscilado entre el reconocimiento a la solidaridad que el esfuerzo de las organizaciones de mujeres ha desplegado y el uso clientelar de estos. La tendencia en los últimos años se ha orientado a abordar los problemas de eficiencia en la gestión de los programas sociales dejando de lado las cuestiones que le dan origen.

Respecto de la evolución de la salarización en Lima y el resto del país, los datos (Gamero, 2001) refuerzan lo que hemos señalado líneas arriba, la sindicalización como la salarización disminuyen. En efecto, los asalariados en Lima eran 62% en 1983 y se redujeron a 55% en 1998, en tanto que en el resto del país oscilaron entre 44% y 36%, en el mismo periodo. Aun en momentos de expansión, a mediados del siglo XX, los asalariados solo fueron mayoría en Lima y en el resto del país nunca llegaron al 50%.

¹ Durante las políticas de ajuste, se pusieron en marcha, en muchos países de la región, programas de compensación destinadas a paliar los efectos del ajuste.

Grafico 1
Evolución de los sindicatos y de las organizaciones de base, Lima Metropolitana, 1970-2000



Fuente: Henríquez (1999)

¿Cómo se expresan entonces las demandas e intereses de los no asalariados? Postulamos que gran parte de las demandas de estos sectores, trabajadores no asalariados así como asalariados del Estado e independientes, barrios, jóvenes, encuentran formas de articulación en los ocasionales frentes o comités de defensa regionales. Estos frentes incluyen también sindicatos y, excepcionalmente, cámaras de comercio.

Para muchos, el bajo nivel de salarización como los problemas vinculados a los programas de apoyo social eran asuntos periféricos, anomalías pasajeras, o correspondían a estadios incipientes del capitalismo industrial que una vez que se otorgaran mejores condiciones a la inversión del capital serían arrastrados por la modernización.

A contracorriente de esta perspectiva, no solo continúan los programas de apoyo social en las ciudades, sino que se han multiplicado incluso en las zonas rurales. Por otro lado, el mundo del trabajo está signado tanto o más por la evolución de la pequeña empresa que por la de los gremios laborales. Así, la realidad

que se vive en la mayor parte del país corresponde a la compleja dinámica de diversas combinaciones de estos sectores que a lo largo de la recesión, la crisis económica y el conflicto armado encuentran formas de expresar sus iniciativas, sus proyectos, sus demandas. Es en este marco que me interesó estudiar las movilizaciones de mujeres y la protesta regional², aunque aquí solo me referiré a esta última.

Es necesario también tener esto presente para calibrar, adecuadamente, el papel de las clases trabajadoras. Cuando comencé a trabajar estos temas, se hablaba del fracaso de la clase obrera en América Latina y en el Perú. Así, hemos pasado de la sobrevaloración a la subvalorización tanto social como política e histórica del papel de la clase obrera. Asimismo, el balance sobre la dinámica de la protesta ponía poca atención al proceso mismo de constitución de actores, a los aspectos institucionales y culturales que ello conlleva, mirada que esconde las tensiones y contradicciones, los ciclos con sus altibajos. La mirada regional que ofrecemos permitirá mirar la diversidad que existe detrás de la protesta, el lugar que los gremios tienen en ella y las continuidades y discontinuidades de sus demandas y del papel de esta protesta en los ciclos de larga duración.

Se puede argumentar que los proyectos políticos e ideológicos de la época fracasaron y que el modelo neoliberal se impone, con ello se puede dar cuenta de los debates y de las expectativas de una época, pero resulta insuficiente para dar cuenta del conjunto de la protesta social y de la constitución de sectores sociales emergentes.

Frente a la noción de fracaso, al desaliento y descontento respecto de la derrota aludida, contrapongo la necesidad de comprender los procesos en marcha respecto de cómo los sectores sociales emergentes como fuerza social se constituyen. Me refiero a analizar los procesos de estructuración/desestructuración y construcción/deconstrucción en la formación de actores a lo largo de ciclos de larga duración.

No me refiero, por tanto, solo a las condiciones materiales para su constitución, sino a los modos en que los actores las reelaboran, así como a los modos en que los actores se piensan a sí mismos. Y cuando hablo de deconstrucción me refiero tanto a su voluntad de constitución como actores, como a las fuerzas que actúan para deconstruirlo. Por ejemplo, la modernidad neoliberal deconstruye el sentido de solidaridad que había animado todo el ciclo previo de la modernidad industrial. Podemos usar otros términos, pero sabemos que en la modernidad industrial hay un sentido común sobre el papel del trabajo, de la acción colectiva. Con la modernidad liberal, se pierde el sentido común sobre la fuerza de la solidaridad y eso es parte de la

² Los planteamientos corresponden a investigaciones realizadas en dos periodos, entre los ochenta y noventa, y forman parte de mi tesis de doctorado. Véase Henríquez (1997).

deconstrucción del sistema de creencias y valores, de producir acontecimientos, de construir discursos, etcétera.

1. GRANDES CICLOS Y MOVILIZACIONES: PROCESOS DE FORMACIÓN DE ACTORES

Los ciclos³ de larga duración nos permiten auscultar tendencias, nos anuncian lo que está en formación, las rupturas o intentos fallidos no constituyen quiebres aislados, episodios pasajeros o definitivos en sí mismos, forman parte de momentos en que se forman coaliciones, se construyen proyectos, se ahondan fracturas o se reproducen exclusiones. Así, el desenvolvimiento del acontecer social y la dinámica del sistema político en paralelo apoyan nuestras lecturas.

Hemos identificado seis periodos diferenciados de acuerdo con hitos significativos en el acontecer nacional, y dos ciclos clave en formación de actores de la sociedad moderna peruana que denominamos de la modernidad industrial y de la modernidad neoliberal. La periodización que he elaborado permite colocar preguntas e incentivar respuestas necesarias para retroalimentar los debates. Por ejemplo, frente a la creencia usual de que durante el fujimorismo y el conflicto armado hubo un vacío social, yo afirmo que no hubo ni silencio ni vacío social. Por otro lado, respecto de las élites nacionales, es dramáticamente evidente que el campesinado nunca fue parte de coaliciones ni proyecto alguno, con la excepción del velasquismo tanto por la reforma agraria como por algunas políticas que podrían considerarse indigenistas. Al respecto, hay que señalar que el discurso étnico estuvo ausente aun entre las poblaciones rurales a lo largo del siglo XX y que una suerte de discurso neoindigenista hace su reingreso en los albores del siglo XXI. Más adelante, comentamos sobre el papel de los gremios del agro y las comunidades campesinas en la protesta regional contemporánea. No estoy tan interesada en cerrar los debates como en colocar las piezas que faltan. Así, para entender ciertas coyunturas hay que poner atención al telón de fondo, a lo que ocurre en los periodos de larga duración.

En cada periodo histórico identificamos qué tipo de conflictos y relaciones sociales aparecen como hegemónicos o subordinados; qué proyectos y visiones de país están en juego; qué actores son reconocidos como centrales, marginales

³ Aquí nos referimos a ciclos para aludir a periodos en los que se constituyen campos de acción más o menos definidos cuando los actores emergentes precisan sus demandas, propuestas y estrategias, distinguimos por ello dos ciclos en la formación de actores, que no están circunscritos cronológicamente. Tilly (1995) y Tarrow (1997) usan el término con connotaciones diferentes; el primero, para referirse a ciclos de larga duración; el segundo, para marcar coyunturas en que se abren oportunidades políticas.

Cuadro 1
Perú: actores y movilizaciones sociales y políticas – Ciclos e hitos

Ciclos / periodo	Sociales / Cívicos	Políticas (gobierno / partidos) Insurrección /conflicto armado
<p>Ancien régime: 1895-1930</p> <p>República aristocrática</p> <p>Dominación oligárquica</p> <p>Sistemas de haciendas</p> <p>Élites excluyentes</p> <p>¿y los indígenas?</p> <p>Herencia colonial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Luchas obreras iniciales • Indigenismo en expansión • Luchas campesinas • Reforma universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Luchas antioligárquicas (APRA, PS) • 1930: APRA en clandestinidad
<p>Crisis social rural: 1930-1969</p> <p>Expansión industrial</p> <p>Emergencia nuevos sectores urbanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos campesinos contra hacendados • Expansión del sindicalismo • Reforma agraria (1969): afecta a 10 000 haciendas 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos insurreccionales de izquierda • 1960: «Nueva Izquierda» en clandestinidad
<p>Primer ciclo</p> <p>a) Formación de actores: 1970-1980</p> <p>Modernidad industrial (desborde / marginalidad)</p> <p>Orden social en cuestión: factor «clasista»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expansión sindicalismo (33% de total asalariados) • Reconocimiento de la CGTP (1971) • Se constituye el SUTEP (1971) • Reconocimiento de pueblos jóvenes (1970) • FEDEPJUP y Central Pueblos Jóvenes (1976/1980) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1979/1980: izquierda participa elecciones • SL en clandestinidad
<p>b) Crisis Estado de derecho: 1980-1992</p> <p>Conflicto armado</p> <p>Crisis gran empresa</p> <p>Fractura cultural, (la choledad)</p> <p>Revaloración democracia: politizando lo privado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organización de comedores y núcleos feministas • Expansión frente de defensas regionales • «Municipalización» conflicto urbano • ANFASEP, Organización de familiares de desaparecidos(1983) • Se crea la CONFIEP (1984) • Se crea la Coordinadora de Derechos Humanos (1984) • Movimientos sociales en repliegue expansión conflicto armado • Expansión pequeña empresa 	<ul style="list-style-type: none"> • 1980: inicio acciones armadas SL y MRTA • «Guerra sucia» y paramilitares • 1989/1990: surge FREDEMO • Crisis IU • 1989/1990: Gobiernos regionales • 1990: «fujishock»

Ciclos / periodo	Sociales / Cívicos	Políticas (gobierno / partidos) Insurrección /conflicto armado
Segundo ciclo a) Formación de actores: 1992-1999 Modernidad neoliberal (Utilitarismo y clientelismo) Cúpula autoritaria y corrupción/crisis institucional Colonialidad del poder	<ul style="list-style-type: none"> • Inestabilidad y reforma laboral • Expansión movimiento de mujeres • Expansión organizaciones de base de subsistencia • Lobby, concertación local • Movilización por descentralización • Se liquidan 1800 grandes y medianas empresas; se privatizan estatales • Iniciativas feministas institucionalizadas • Acciones ciudadanas, movilizaciones de jóvenes, grupos culturales, mujeres democráticas • Sindicalización en repliegue: algunas luchas (sector público 1996/1999) • Masificación programas asistenciales 	<ul style="list-style-type: none"> • 1992: autogolpe • 1992: captura dirigencia SL y MRTA • Expansión partidos independientes • MRTA toma embajada de Japón • 1999: Fujimori renuncia en Japón
b) Crisis del régimen autoritario: 1999-2002 Transición política La cuestión social y la democracia en revisión Ciudadanía y globalización	<ul style="list-style-type: none"> • Expansión de la movilización ciudadana en defensa de la democracia • Lenta y parcial reactivación sindical • Iniciativas y movilizaciones regionales • Luchas magisteriales • Núcleos neoindigenistas • Ofensiva conservadora: derechos de las mujeres • Movilización productiva de coca 	<ul style="list-style-type: none"> • Oposición política articulada • Mesa de Diálogo de la OEA • Comisión de la Verdad y Reconciliación • Restitución de gobiernos regionales

Elaboración propia

o simplemente permanecen invisibilizados. Cada periodo se presenta en tres columnas: la primera se refiere a las coaliciones predominantes, los temas presentes en el sentido común y los principales debates académicos; en la segunda, están las movilizaciones y organizaciones sociales, acciones e iniciativas ciudadanas; en la tercera, datos del proceso político, actividades partidarias y acciones públicas, hitos en el conflicto armado.

A lo largo del periodo de la modernidad industrial, hay un modelo cultural hegemónico que informa la acción colectiva basada en el factor trabajo; las prácticas culturales de la pequeña empresa y de la actividad informal están invisibilizadas y subalternizadas hasta los noventa. Durante la modernidad

liberal, no solo se cierran empresas y se flexibiliza el trabajo haciendo más difícil la agremiación y la organización de intereses de los trabajadores, sino que el sentido común a favor de las iniciativas individuales deslegitima los esfuerzos colectivos y solidarios. A pesar de esto, diversas movilizaciones de viejo y nuevo cuño van tomando forma. Entre ellas, mantiene continuidad la protesta regional, las movilizaciones de mujeres. En este periodo aparecen nuevas expresiones en torno a iniciativas ciudadanas a favor de la democracia, se produce también un resurgimiento del discurso indigenista y nacionalista en el que está presente de diversos modos el factor étnico.

En este trabajo nos interesa destacar que las movilizaciones forman parte de los procesos de formación de actores, trátense de movilizaciones de mujeres o de la protesta regional. Los ciclos de larga duración nos muestran que hay rupturas y procesos trancos, fallidos; pero los actores vuelven a intentar constituirse como tales, aunque de modo débil y fragmentado. Se trata de intentos permanentes y continuos. Lo que quiero destacar, al respecto, es esa tenaz persistencia en el intento de constituirse a sí mismos —a través de organizaciones, discursos, movilizaciones— como actores en una sociedad con fracturas y llena de exclusiones. El Perú aparece como una sociedad en movimiento con mucha acción social colectiva que tiene dificultades para cristalizar en sujetos sociales fuertes y cohesionados, a pesar de ello no renuncian a su capacidad de actuar e incidir en la vida social y política.

¿Qué está en cuestión en cada ciclo? ¿Qué coaliciones hegemónicas, qué sectores sociales emergentes? En el periodo 1970-1980, en que se produjo una pugna entre un proceso reformista desde el Estado y un régimen económico de capitalismo industrial dependiente y depredador, estuvieron en juego varios proyectos. Entre estos, el clasismo como expresión de los trabajadores del sector privado y público, representado por un gremio pujante; al lado de otros proyectos en ciernes, la corriente autogestionaria entre las organizaciones de base y otros sectores populares con menor visibilidad, las propuestas de desarrollo nacional desde los frentes de defensa regionales. En el periodo siguiente, enmarcado entre la crisis y el conflicto armado, la fractura cultural que vivía el país se puso en evidencia de modo descarnado. Las violaciones de derechos humanos y el desprecio por el «otro» entre peruanos es todavía una herida abierta. A la vez, se pone en marcha la primera experiencia de regionalización. Este proceso de regionalización fallido se ponía en práctica cuando la violencia se intensificaba en el país. En el periodo 1992-1999, mientras que una cúpula autoritaria dismantelaba las instituciones públicas, diversas iniciativas ciudadanas se desplegaban.

2. LA PROTESTA REGIONAL: LIDERAZGOS, DEMANDAS Y COALICIONES

Desde los setenta, la protesta regional es la expresión de nuevos voceros, vía frentes de defensa populares o frentes cívicos, de sectores medios y populares que plantean demandas y propuestas no solo en torno al centralismo sino a la concentración de los recursos. Excepcionalmente, participaron sectores del comercio o de las empresas locales.

A lo largo del siglo XX, el regionalismo ha sido un discurso y sentimiento de descontento, que en los setenta se expresa en plataformas regionales, mas no en movimientos federalistas. Durante las primeras décadas del siglo, en cambio, el federalismo fue una activa corriente de opinión con importantes adhesiones a nivel regional, aunque con resistencias a nivel nacional, que centraba su atención en la estructura del Estado y la forma de gobierno. El regionalismo es un discurso con muchas más ambigüedades hoy, los regionalismos que se levantan en la protesta regional entre los setenta y los noventa tienen diversas expresiones y contenidos, acompañan demandas por inversiones, regionalización, etcétera. Así, la protesta regional oscilaba entre modos de reclamación respecto de la gestión del desarrollo y la redistribución de los recursos y movilizaciones de solidaridad con los gremios laborales o agrarios asentados en sus localidades, como veremos más adelante. En todos los casos —aun cuando haya empresas privadas involucradas—, el Estado es el principal interlocutor de la protesta regional.

En los setenta, el territorio de referencia era el que correspondía al imaginario de las regiones, pero la comunidad política concreta no siempre era la sociedad regional; más bien, correspondía a las principales ciudades. Recordemos que se trata del momento en que el gobierno velasquista había minado las bases del poder agrario sin que hubieran élites regionales empresariales de recambio. Es en este contexto que los frentes de defensa se expanden en las principales ciudades del país. De este modo, el territorio constituye un escenario público discursivo en el que se elaboran agendas con prioridades regionales y/o locales, no solo de movilización social sino de disputa política.

En un país de aguda polarización social y grandes distancias geográficas y culturales, la proximidad del territorio favorece las posibilidades de articular intereses; así, frente a los intereses particulares de gremios o grupos económicos de poder, surge el escenario de articulación de intereses populares principalmente urbanos. La construcción del colectivo en frentes de defensa como organización y discurso pasará por varios periodos de activación y desactivación, de elaboración y reelaboración que se expresa en plataformas y formas organizativas que pueden cambiar de nombre, pero guardan fidelidad con la práctica de presentarse como

«frentes». Allí confluyen a veces los gremios laborales y agrarios, organizaciones y personalidades, liderazgos regionales que se visibilizan.

He mantenido la hipótesis de que los liderazgos en las regiones y los líderes locales de las zonas de barrios urbanos en Lima y en otros lugares del país tenían un papel de mediación histórica frente a las grandes brechas sociales y las distancias culturales en la segunda mitad del siglo XX. Esta mediación histórica se trunca en medio de la guerra sucia en la medida en que muchos de ellos fueron amenazados y algunos asesinados.

Se trata de dirigentes que representan a organizaciones sociales, pero que jugaban también un papel de mediación en la construcción de opinión, tanto si se trata de militantes que adhieren a partidos nacionales centralistas, como si se trata de independientes, actuando como líderes de opinión⁴.

A lo largo de los años, otra hipótesis ha surgido respecto de los liderazgos regionales, la de la mediación institucional; es decir, que frente al vacío de la institucionalidad pública y la debilidad de los partidos políticos nacionales, los liderazgos han actuado no solo como líderes sociales representando los frentes o comités, sino como líderes políticos. No me refiero a la militancia partidaria del líder, sino al espacio político que cubren frente al vacío institucional.

Debido a la relevancia que otorgamos al papel de mediación de los liderazgos regionales, tenemos que reconocer que puede haber intereses y ambiciones personales en su desempeño; por ello, en estudios de caso que aquí no podemos abordar, hemos explorado la relación entre las dimensiones personales y colectivas de la protesta social.

Considero, sin embargo, que en una sociedad profundamente desarticulada, con procesos trunco de modernización, el territorio aparece como un factor de proximidad, de cohesión, de construcción de comunidad política en donde se elabora respecto del interés común. Y que a estos procesos se ha prestado poca atención. Entonces, nuevamente el territorio, tanto a escala regional como a escala local, vuelve a cobrar, para mí, en los últimos años, renovada relevancia sin que se esté diciendo que ahí se construyen identidades cohesionadas. Lo que estoy enfatizando es que frente a las polarizaciones sociales, el territorio permitiría identificar posibles colaboraciones y alianzas, construir coaliciones desde abajo, que toman la forma de frentes populares desde los setenta. Así, el territorio es el espacio de construcción de discursos regionales, que busca presentar proyectos de desarrollo alternativos desde las ciudades. En los últimos años, lo mismo

⁴ Hemos tomado el concepto de Sartori (1991), quien alude a la formación de la opinión pública como un proceso en cascada, pero que no va en una sola dirección sino que los mensajes se reelaboran, allí los líderes de opinión tienen un papel clave.

viene ocurriendo, pero desde los pequeños centros poblados y/o comunidades campesinas.

Hoy los frentes de defensa de las principales ciudades se mantienen, pero hay nuevos escenarios y protagonistas. Los comités de defensa de pequeños centros poblados y comunidades se han multiplicado, sobretodo en torno a la defensa de los recursos naturales y en enfrentamientos con empresas mineras. A diferencia de los frentes regionales, en estos casos, los ejes de la protesta forman parte de los temas prioritarios de la agenda nacional, pero las capacidades de negociación y los canales de resolución se mantienen, por lo general, en el circuito local y no siempre logran el interés público.

2.1 Frentes de defensa y protesta regional

En los años setenta, los frentes de defensa aparecen disputando el liderazgo social a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el gremio laboral más importante que contaba con algunas federaciones departamentales. Durante las primeras movilizaciones de los frentes, se ponía en evidencia la tensión entre los dirigentes sindicales y la dirigencia del frente, tensión que luego, en la mayoría de los casos, fue reemplazada por activa colaboración. Los frentes o comités corresponden a una vasta gama de experiencias organizativas de vigencia coyuntural que pasa por diversos momentos, pero mantienen continuidad respecto de sus líneas de acción⁵.

A nivel político, sorprendió a los partidos que desde los frentes surjan nuevos liderazgos, que más allá de su voluntad, lograron influir en la vida política local; y que, en muchos casos, se volvieron cantera de nuevos candidatos al Congreso, compitiendo con los partidos. En las últimas décadas, en la medida en que el sistema de partidos se ha debilitado poniendo en evidencia su limitada presencia regional, varios dirigentes de frentes integran y/o promueven movimientos independientes en sus regiones y compiten políticamente.

En términos de la representación social y del contenido de sus demandas, se han producido cambios notables. Como hemos señalado líneas arriba, han surgido nuevos frentes en provincias y distritos de pequeña escala, sobretodo, vinculados a problemas medioambientales, que tienen como protagonistas a las comunidades campesinas. En la actualidad, los frentes de defensa corresponden a escenarios diferenciados, principalmente urbano, como en los setenta, que lograron avanzar en niveles de coordinación; y a nuevos escenarios locales en zonas rurales con poca articulación entre ellos.

⁵ Ver al respecto Henríquez (1986).

Cuadro 2
La protesta regional: demandas y paros

Temas eje	Primera etapa: años setenta	Segunda etapa: años ochenta	Tercera etapa: años noventa	Cuarta etapa: 2000
1. Desarrollo	Demanda obras (carreteras inversiones)	Exoneraciones	↑	↑
	Incentivos	Exoneraciones	↑	↑
	Plataformas reivindicativas	↑	Planes desarrollo regional Medio ambiente	↑
	Crítica político económica	↑	↑	↑
	Demanda y propuesta % recursos locales	Ejecución/ Constitución de 1979	Modificación art. Constitución de 1993	↑
3. Empresas estatales	Defensa empresas estatales	Transferencia gobierno regional	Contra privatización empresas estratégicas	↑
4. Zonas francas	-----	-----	Adecuación modelo liberal exportador	↑
5. Conflictos empresas	↑	Impuestos municipales	Contra condiciones Privatización / Concesión Contra la contaminación	↑

Elaboración propia

2.2 Principales ejes de la protesta y demandas

A continuación, presentamos los ejes de la protesta regional y los cambios que se han producido, ejes que he agrupado en cuatro grandes bloques: desarrollo, gremiales, regionales y emergencia, y que, en el cuadro 2, se presentan por periodos.

En el bloque de demandas por desarrollo, los discursos en torno a las movilizaciones por recursos continúan. En los setenta, dichas movilizaciones formaban parte de propuestas regionales de desarrollo. Algunos analistas hablaban, entonces, de que habíamos pasado del descontento provinciano al programa regional (citando a Mariategui). Es un periodo en el que la movilización está vinculada, sobretodo, a los proyectos políticos de izquierda.

Las propuestas de desarrollo, aunque vinculadas siempre a obras e inversiones, también planteaban demandas de redistribución. Entre ellas, la más notable es la demanda del canon. El canon entonces era un modo de lograr recursos a favor de las regiones, redefiniendo las relaciones con las empresas públicas y privadas. Es menester colocar adecuadamente el canon como un hito en la lucha por la redistribución de recursos, y por lograr que un porcentaje de la explotación de recursos naturales revierta en las regiones. Cabe recordar que buena parte de las utilidades de las empresas iban fuera del país o de las regiones en cuestión, sin que los gobiernos intervinieran para modificar dicha situación; asimismo, que los gobiernos tenían un manejo centralista del presupuesto con escasa vigilancia y fiscalización.

Las continuas movilizaciones por el canon del petróleo, primero, y, luego, de otros recursos minerales y energéticos, constituyó una presión que el Estado tuvo que atender y que la clase política consagra en la Constitución de 1979. Aunque hoy el canon se ha desprestigiado, sobretodo, porque solo beneficia a algunos departamentos, sigue siendo una fuente importante de ingresos y un mecanismo regulador cuyo valor simbólico no se debe descuidar. Complementariamente, los gobiernos no han puesto en práctica el fondo de compensación previsto por la Constitución para los departamentos que no se benefician de modo directo.

La protesta regional también demanda, durante algunos periodos, regionalización. Se trata de la regionalización de 1979 y la regionalización aprobada en 2002 durante el gobierno de Toledo. En este trabajo no haré una comparación de esos distintos modelos, pero me parece importante señalar que los temas que han suscitado más debate son el de la representación y el de la demarcación. El proceso de regionalización de 1979 se puso en marcha tardíamente a fines de los ochenta y tuvo una vigencia muy breve, pues Fujimori la desmontó. En ese proceso se adoptó un modelo de asamblea que combinaba la representación de organizaciones sociales, con elegidos directamente y alcaldes elegidos. El segmento de representación reflejaba el tejido social de la región, por lo que significaba una

innovación importante en términos de mecanismos de participación en decisiones. Esta experiencia ha sido duramente criticada como «corporativa», es decir, poniendo en cuestión el papel de las organizaciones de la época, asignándole connotaciones negativas como expresión de intereses parcializados.

Al respecto, considero que hay una contradicción entre observadores, políticos y analistas al estigmatizar determinadas formas de representación y organización como corporativa, cuando a la vez se reconoce que la institucionalidad, en general, y la agrupación política de intereses, en particular, es débil; asimismo, cuando se valoran las formas corporativas empresariales como útiles interlocutores de intereses particulares.

Otro bloque de cuestiones vinculadas a la protesta regional se refiere a las emergencias identificadas como «desastres naturales», sequías e inundaciones. Los gobiernos de turno, sin políticas preventivas, solo actuaban a través de medidas de emergencia una vez producidos los desastres. Se trata de decretos y políticas de emergencia para atender las penurias y calamidades de la población así como la reconstrucción. Piura y Puno son dos de los primeros departamentos que desde comienzos de los ochenta reclaman, a través de los paros regionales, atención para estos problemas.

En los departamentos de la sierra sur, son otro tipo de emergencias las que dan lugar a decretos especiales del gobierno, se trata de medidas frente al conflicto armado. Estos decretos suspenden las garantías constitucionales por periodos específicos que en casos como Ayacucho durarán más de una década.

La «guerra sucia» —como se le conocía entonces a la violencia— que se suscita a partir de las acciones de Sendero y las incursiones militares, constituye experiencias que se viven intensamente en departamentos de la sierra sur, frente a la indiferencia o desconocimiento del resto del país. En esos años podemos constatar, de modo dramático, las diferencias en el tiempo político entre las regiones y la capital del país. Por cierto que, tanto los tiempos políticos como las experiencias compartimentalizadas, no se vinculan solo a las vivencias antes mencionadas, más bien son las marcas trágicas de la falta de solidaridad y reconocimiento entre peruanos, de las distancias que ya existían entre nosotros, pero que alcanzan ribetes extremos durante dichos acontecimientos.

A pesar de estas diferencias, hay formatos comunes respecto de las movilizaciones sociales e iniciativas cívicas que corresponden a una suerte de caja de herramientas modulares, como Tilly (1985) y Tarrow (1997) señalan, luego todos recurren a las mismas modalidades de protesta, organizativas, o de comunicación. Un ejemplo de ello es la convocatoria a paro que sigue siendo un mecanismo común a lo largo de los años y que constituye un instrumento de visibilización de protesta o demanda aún durante el conflicto armado.

2.3 Paros y movilizaciones de la sociedad civil

A continuación, el gráfico 2 muestra la evolución de los paros como una muestra de la forma en que se expresa la protesta. Allí se distingue, entre paros agrarios, paros gremiales y regionales, propiamente dichos. Estos últimos corresponden a demandas específicas regionales, tales como demandas por obras, por descentralización.

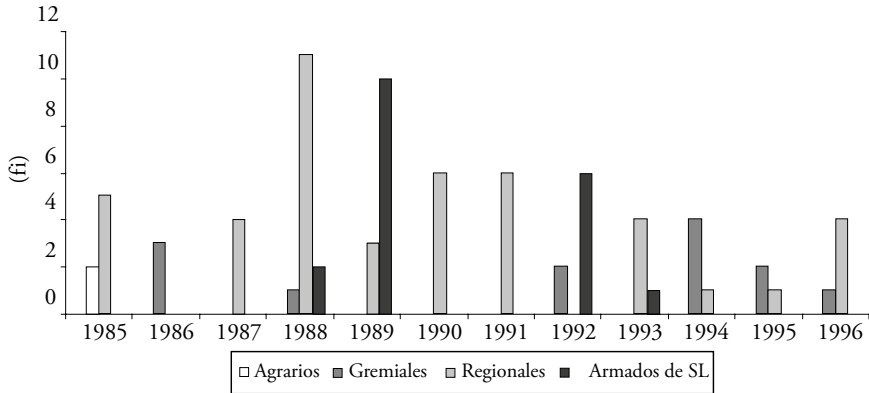
Hemos incluido los paros armados, que son los decretados por Sendero Luminoso, para mostrar cómo estos han coexistido con la movilización social. En algunas regiones con mayor presencia de Sendero, las movilizaciones se redujeron y muchas organizaciones se desactivaron, pero aun en esas regiones no podemos hablar de silencio social. Los paros armados van a disminuir y desaparecer, los paros regionales han sido una constante, en tanto que los paros laborales disminuyeron y luego se reactivaron.

También he querido contrastar la evolución de los paros armados con la dinámica de la sociedad civil (véase el gráfico 3), mostrando su capacidad de resistencia organizada que logra colocar en la agenda el tema de derechos humanos. En el gráfico 3, tenemos los paros armados y la respuesta de la sociedad civil, una sociedad civil debilitada que se manifiesta más abiertamente desde los años noventa no solo contra Sendero, sino también contra disposiciones del fujimorismo. Hemos incluido como manifestaciones ciudadanas, en el sentido amplio de la palabra, acciones tanto culturales como cívicas. Estas acciones van apareciendo frente a hechos específicos, pero luego cobran también un valor político y simbólico durante el periodo de transición política. Se trata sobre todo de eventos que logran atención en los medios de comunicación nacionales. Estos eventos corresponden a marchas por la paz en Lima y diversas regiones, pronunciamientos, acciones cívicas en parques y plazas, constitución de organizaciones de derechos humanos, etcétera.

2.4 Demandas y movilizaciones del agro

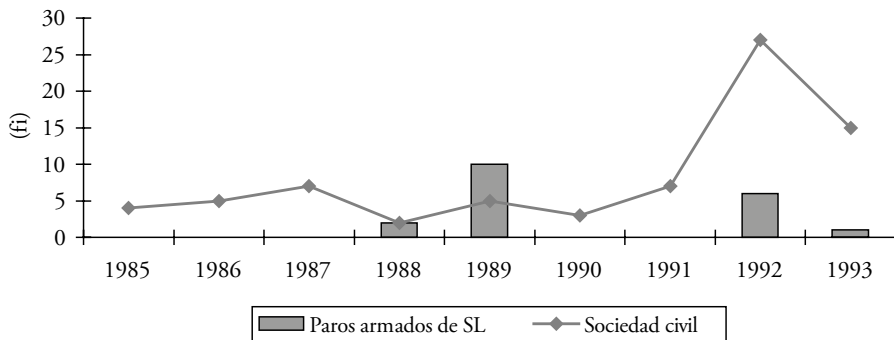
Por otro lado, la relación entre la protesta regional y el agro es poco evidente, hay paros agrarios que logran la solidaridad regional, cuando se trata de productos de impacto en la región (el café en Quillabamba, por ejemplo) y usualmente sus reclamaciones se integran a las plataformas regionales de los frentes de defensa. Por lo general, la agenda agraria y los problemas de las zonas rurales no tienen un lugar privilegiado en las agendas regionales de las autoridades ni de los frentes de defensa. Debemos decir que tampoco lo han tenido en las agendas nacionales, así el problema del precio de los productos agrarios es un asunto que usualmente solo los productores y/o intermediarios con capacidad de negociación logran atraer la atención de las autoridades en negociaciones bilaterales.

Gráfico 2
Perú: evolución de paros en general (1985-1996)



Elaboración propia

Gráfico 3
Perú: evolución de la actuación de la sociedad civil según la evolución de paros



Elaboración propia

Aquí tratamos de llamar la atención sobre el modo cíclico y recurrente en que se manifiestan las demandas del agro, no siempre vinculadas a gremios nacionales, a veces explícitas y otras latentes en la protesta regional, para ello se requiere una desagregación de los paros por producto⁶. De acuerdo con el ciclo agrícola y con la evolución de los precios, se puede anticipar el tipo de reclamos que pueden ocurrir, ello también está relacionado con las capacidades organizativas de los productores. Así, hay comités de productores de papa, a nivel provincial, con escasa capacidad de negociación de sus precios, lo cual hace que como en Junín, debido a la sobreproducción, prefirieran echarla al río antes de venderla a los

⁶ Véase el anexo que presentamos al final de este texto.

bajos precios a los que había llegado. En el caso de la coca, los productores han logrado niveles de organización que les permite una presión pública articulada a nivel nacional.

Evidentemente, que las movilizaciones del agro, esconden muchas cosas, diversos voceros de intereses particulares y fragmentados, que negocian bilateralmente con el Estado, en algunos casos productores en otros intermediarios, en torno a reducción de aranceles, precios de insumos, etcétera.

La continuidad de estas movilizaciones permite reforzar los planteamientos formulados antes, en el sentido de que no hay vacío social no solo a nivel urbano regional, de lo cual se podría dar cuenta a partir de los frentes de defensa; sino que, como se observa, tampoco hay silencio a nivel de productores agrarios. Debemos hacer notar, sin embargo, que con excepción de la papa y el maíz, los demás productos están vinculados a la exportación y/o a la agroindustria.

Esta dinámica no siempre actúa a favor de corrientes de opinión respecto de la prioridad del papel del agro en la agenda nacional, o de la necesidad de priorizar la producción de alimentos, por lo que tienen un ámbito local o regional.

2.5 Las agendas y los protagonistas hoy

En la información mostrada, se puede observar que se registran diversos contenidos en cada eje, es decir, que a lo largo de los años, se redefinen las demandas al interior de los bloques. Es así que, detrás de la etiqueta «desarrollo» o «regionalización», hay demandas, propuestas y sentidos comunes diferentes, trátese de los setenta o de los noventa. Es necesario llamar la atención sobre este hecho que repercute en las apreciaciones de quienes están interesados en mirar los procesos de larga duración.

Un ejemplo de ello se refleja en los diversos contenidos del debate sobre la regionalización. En los setenta, uno de los debates que concitaba gran interés era el de las autonomías regionales, que no ha tenido tanta importancia en los debates recientes, ni entonces ni ahora han surgido tampoco propuestas separatistas o federalistas. Aún en el caso de Puno, cuyo presidente regional ha tratado varias veces de llamar la atención hablando de la nación aymara, es más bien una estrategia discursiva con escasa viabilidad. Esto se debería en parte al hecho de que el Estado peruano tiene las arcas bien centralizadas, el tesoro en un solo lugar, y desde allí el Estado debe distribuir el canon, pero también a la inexistencia de élites económicas con poder regional a diferencia de Bolivia.

Tener presente los procesos de larga duración también nos permitirá recordar que, detrás de la aprobación de la regionalización de 1979, están las movilizaciones de los frentes regionales de esa década y; por tanto, denominar dicho proceso, como ocurre frecuentemente, la regionalización de los apristas, es ignorar el modo

en que la dinámica previa de los frentes de defensa es recogida en la reforma de Estado que se cristaliza en la Constitución de 1979.

En términos de agenda, uno de los cambios más notorios es el que se produce en torno al posicionamiento progresivo de los temas del medio ambiente y de la protección de los recursos naturales. A la vez, es dramático constatar que las movilizaciones en defensa de las empresas estatales y contra las privatizaciones, no tuvieron eco, ello se puede explicar en parte por la debilidad de las organizaciones sociales en medio del conflicto armado, pero también por el creciente sentido común a favor de las políticas neoliberales entre los ochenta y los noventa.

Desde fines de los noventa pero sobre todo a comienzos de la presente década, se ha producido un giro significativo que pone en tela de juicio las concesiones a empresas privadas, sobre todo transnacionales mineras pero también aquellas que han ingresado en el campo de los servicios públicos. La protesta por radical que parezca y violentas que sean sus movilizaciones, no pone en cuestión la privatización misma sino los términos de las concesiones. Con ello, se han puesto en el centro del debate temas como el de la regulación y las regalías. Debemos recordar que durante el periodo fujimorista hubo un gran desprecio por las medidas regulatorias a la inversión privada, sobre todo en el periodo en que se efectuaron las privatizaciones.

Finalmente, mostramos un último cuadro 3, en el que hacemos comparables nuestros datos con los que trabaja DESCO para los periodos 1985-1996, 2001-2002. En el periodo 2001-2002 es significativo el peso de la protesta contra privatizaciones y concesiones, muchísimo mayor que en casi diez años del periodo anterior. Este cuadro nos permite mostrar que estamos en una nueva etapa respecto de la protesta social, no solo por el tipo de demandas que predominan sino también porque los protagonistas y sectores involucrados difieren radicalmente de los actores de los setenta.

Hoy son los conflictos con las empresas mineras los que tienen impacto nacional, y las comunidades campesinas y los pequeños poblados los principales protagonistas⁷. Antes, eran los trabajadores sindicalizados los protagonistas de la protesta frente a las empresas mineras, privadas o estatales, por condiciones de trabajo. En estos conflictos está en juego la relación entre las empresas transnacionales y los pequeños actores locales.

La capacidad de negociación de estos últimos es relativa, pues si bien logran impacto nacional con sus continuas movilizaciones, a la vez sus demandas son

⁷ Los informes de la Defensoría del Pueblo también confirman el peso de los conflictos minero-ambientales que afectan poblaciones locales, a los que se suman los de carácter político-administrativo que giran en torno a problemas de la gestión municipal, que también se desenvuelve a escala local.

Cuadro 3
Principales movilizaciones regionales por periodos

Demandas (a)	Período por número	Período por número y lugar
	2001/2002	1985/96
Agrarias	02	28
Algodoneros		01 (b)
Comunidades nativas	02	02
Arroceros		06
Papas y arroz		01
Coca		03
Comunidades campesinas y otras (tierras, agua, precios)		15
Laborales	03	08
Privatización - Concesiones	17	07
Defensa E. Estatales/Reg. Enapu/Entur/ Petro	04	Cusco 92/95 Lima 92/96 Cusco 88/89 Amazonía y Loreto
Contra Schell (gas) y T́exas y Crude	13	91
Contra Egasa y Egesur		Arequipa ene/jun 02 y otros
Otras Contaminación	04	Región sur T́ambogrande, Lima
Hidro Mantaro, Sedapal, Petro		Huancavelica, Piura
Regionales	20	42
Específicas	07	14
Canon	(c)	08
Zona franca	02	02
Beneficios Amazonía	02	
Carretera Transoceánica	03	
Regionalización	04	
Contra anexión Áncash		Huánuco 87/88
Defensa regionalización		Cusco 89 Cusco y Región Inka set/dic 90
Generales	13	28
Obras, agro, promesas electorales, política económica	13	
Obras, carreteras, moralización		28(d)
Emergencias	13	
Desastres naturales	03	
Derechos humanos, pacificación	10	Chimbote 85/Huancavelica 88 Junín 89/Huancayo jun/nov 89 Pucallpa 89/Lima 89 Ucayali 91/Ayacucho 92
Total	42	98

Fuente: Carrasco (2003)

Cubre agosto 01 /junio 02 , y datos propios periodo 85/96.

(a) demandas laborales y agrarias en origen (b) incluye demanda por arroz (c). En el Cusco (2002) se incluyó demanda por canon en plataforma (d), algunas incluyen referencia a violencia y desastres naturales.

percibidas como demandas localizadas. Sin embargo, en los últimos años, en que ha crecido la conciencia ambiental nacional y los organismos internacionales recomiendan mecanismos de regulación, así como respaldan los derechos de los pueblos originarios, hay mayor espacio para la negociación. No hay en ninguna de esas movilizaciones ni discurso de nacionalización ni de estatización, solo entre algunos dirigentes políticos aparecen en el debate nacional ocasionales declaraciones en ese sentido.

En los últimos años hay un mayor y mejor seguimiento de la información sobre los conflictos que no está acompañada de investigación sistemática ni de la atención adecuada de parte de las autoridades gubernamentales. A pesar de que los gobiernos regionales están en pleno funcionamiento, no parece que estos hayan logrado abrir nuevos canales para el diálogo, así algunos de ellos se han enfrascado en conflictos interdepartamentales.

Estamos en un nuevo escenario luego de dos años de gobierno aprista⁸ en que se ha pasado de las vacas gordas, o más bien de los burros y arcas gordas, a las flacas, en que el descontento social, aunque no se manifiesta en movilizaciones abiertas y callejeras, constituye una tensión latente. Existen también otros ejes de tensión como el tratamiento de los derechos humanos que no aparecen como conflictos abiertos pero que son parte de un escenario alimentado por continuas tensiones no resueltas.

A pesar de ello, consideramos que en este escenario también se vuelve a colocar el debate sobre el papel del agro en la agenda nacional, no se trata solo de la confrontación entre proyectos minero/agrario, o de las repercusiones del Tratado de Libre Comercio, sino de una agenda que no podrá eludir tomar en cuenta que están en juego los modos de vida de pequeños productores del campo, comuneros campesinos, y comunidades nativas con renovadas capacidades de agencia respecto de los recursos naturales, que están ahora, mucho más alertas en la protección de su hábitat.

Aun cuando no siempre las propuestas regionales estuvieran articuladas en proyectos de desarrollo y hayan sido más bien una larga lista de reclamaciones, el tema del desarrollo fue una constante, la protesta regional logró colocar de cuando en cuando la necesidad de tomar en cuenta a la periferia en los setenta. Hoy las zonas rurales toman ese lugar, o sea la periferia de la periferia, aunque de modo parcial y fragmentado cobran voz propia, por tanto no podrán quedar fuera de las decisiones futuras.

⁸ Ver al respecto Henríquez y Manky (2008).

3. REFLEXIONES Y DEBATES: MOVILIZACIONES, ACCIÓN COLECTIVA Y LIDERAZGOS

Para terminar, algunas reflexiones y precisiones. Me refiero a movilizaciones sociales y regionales antes que a movimientos sociales, porque desde mi perspectiva, hablar de movimiento regional requeriría un análisis de caso y del desenvolvimiento de los actores en cuestión. Aquí he privilegiado una mirada de conjunto que muestre el abanico y los matices de la protesta ofreciendo evidencia empírica y algunas precisiones conceptuales.

Propongo que las movilizaciones sociales pueden analizarse en términos de procesos coyunturales y/o de largo aliento, o como instrumentos. Por ejemplo, en América Latina ha habido interés en comprender el papel de las movilizaciones sociales como parte de procesos nacionales de transición política. Al respecto, en el Perú algunos estudiosos han prestado atención a este tema, refiriéndose al periodo 1977-1979 y posteriormente al periodo 1997-2000. En los dos casos se puede ver cómo las movilizaciones sociales son parte activa de la protesta que marca hitos para la transición política, pero que no están necesariamente en las negociaciones posteriores, donde más bien cabe un papel activo de los partidos, aunque haya excepciones.

En algunos sectores de la clase política existe una tendencia a criticar el recurso usual de la protesta en movilizaciones callejeras, antes que tratar de entender el porqué de su recurrencia. En términos generales, sería deseable que las demandas tengan canales institucionalizados sin recurrir a la presión callejera, pero precisamente las movilizaciones constituyen un instrumento de presión y negociación, que han tenido una continuidad, por la inexistencia de esos canales. A lo largo del siglo XX y con mayor intensidad desde los setenta, las movilizaciones callejeras, bloqueo de carreteras, huelgas y paros son parte de los recursos de protesta de los trabajadores organizados como de los maestros sindicalizados primero, luego de los frentes de defensa. Desde fines de los ochenta, liderados por el Movimiento Libertad, los sectores políticos de la derecha también hicieron uso de la protesta callejera y de allí en adelante hemos visto sectores medios y altos en las calles por diversas razones, entre las que tenemos que destacar la Marcha por la Paz. Recientemente, son los pequeños pueblos y comunidades campesinas los que recurren a las movilizaciones. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de herramientas que quienes protestan seguirían usando; en algunos casos, de modo pacífico; en otros, con violencia. No se trata de negar lo que ocurre sino de analizar la movilización como instrumento, establecer lo que la instrumentalización logra, si se trata de visibilizar sus discursos, presionar en la negociación, si es parte de la búsqueda de reconocimiento simbólico, etcétera.

Al referirnos a las movilizaciones tenemos que diferenciar también entre las acciones o factores que suscitan las movilizaciones y aquellas que actúan como factor catalizador. Las oportunidades políticas son un catalizador, pero no explican por sí solas la protesta, por ello debemos tomar en cuenta a la vez el cómo y el porqué de las movilizaciones. A menudo el desenlace de un conflicto es una solución parcial que obliga a la redefinición de los problemas, pues las causas primarias persisten y constituyen los caldos de cultivo en latencia.

En 2007, al cumplirse el primer año de gobierno de Alan García, coincidieron la subida de precios con varios paros regionales, y una larga huelga de maestros que no había logrado mayor atención del gobierno. Se presenta así una coyuntura favorable para la protesta, la oportunidad política como factor catalizador, no solo se redefinieron las plataformas de las movilizaciones sino que se obligó al gobierno a negociar.

Quisiera referirme también al papel de la escala y los escenarios de la movilización. Me parece fundamental reiterar el modo en que las regiones como los pueblos son hoy espacios discursivos de construcción de asuntos públicos que logran atención nacional. Al respecto hablo de un público subalterno local, del escenario local, de la comunalidad; prefiero hablar de comunalidad no de comunitarismo. En estos escenarios locales están ocurriendo grandes transformaciones a nivel social e institucional. Se trata no solo de las formas de la protesta, sino de las formas de hacer política donde se combinan cuestiones corporativas con familiares, cuestiones partidarias con personales, actores locales en relación con empresas transnacionales.

Ello ha llamado a sorpresa cuando se encuentran estas combinaciones a escala local, sin embargo lo mismo podríamos decir de la política regional o nacional, donde los proyectos en juego no son solo de interés regional sino que podrían corresponder a familias o clanes, al igual que a nivel nacional donde también se pueden encontrar intereses familiares vinculados a proyectos políticos. A diferencia de los setenta, los proyectos locales —donde existen— no están articulados a nivel nacional, o lo hacen de modo utilitario, lo que por cierto también ocurre a escala regional.

La última preocupación se vincula con la poca atención que se presta a los escenarios geopolíticos, me preocupa mucho la existencia de zonas del país que se pueden considerar tierra de nadie. En este —espero que pequeño— umbral en donde pueden confluír acción social, acción política, violencia social y violencia política, con vacío institucional, hay ciertos fantasmas que recorren el imaginario: la escisión nacional, la guerra fronteriza, un nuevo conflicto armado. Una mirada geopolítica nos debería permitir desbrozar el terreno y espantar los fantasmas cuándo hablamos de problemas nacionales o de actores internacionales,

o tal vez de una agenda negra donde el narcotráfico y el militarismo pueden cosechar. En algunas regiones, estas consideraciones no están presentes, ni siquiera en el discurso, pero constituyen amenazas potenciales.

Respecto de los liderazgos he hecho afirmaciones polémicas. Al respecto debo reseñar que hay varias líneas de trabajo, la más conocida privilegia el estudio de los líderes excepcionales, en sentido positivo o negativo, los grandes líderes y caudillos. En el Perú tenemos un caudillo agresivo como Fujimori, que además fue un caudillo proveedor, y luego pasamos a un patriarca egocéntrico que se considera un seductor, como Alan García. Otra línea de estudios pone atención a la formación de líderes de grupo, sus cualidades para actuar en colectivos. En los últimos años, se ha trabajado otra perspectiva que apunta al papel de los dirigentes en tanto *brokers* u operadores sociales o políticos.

En mi caso, puse inicialmente atención a las dirigencias y organizaciones que contribuyen a reconstituir el tejido social, entre ellas las organizaciones sociales. Posteriormente, y sobre todo en relación con los liderazgos regionales y sus organizaciones en comités o frentes, podríamos decir que aportan también en la reconstitución institucional. Al respecto, los planteamientos de Novaro (2000) forman parte de una nueva línea de trabajo que señala que, ante la debilidad o ausencia de partidos, los liderazgos cubren un vacío aportando en la construcción institucional.

Esta es una reflexión sugerente respecto del papel que podrían cumplir los liderazgos intermedios. No se puede negar que entre ellos encontremos, personalidades autoritarias, pero no debemos olvidar que también puede haber experiencias solidarias, liderazgos ejemplificadores. Esto es fundamental porque es así como se está articulando la vida política local. Por lo general, circulan los ejemplos de lo perverso, lo agresivo, no de las prácticas ejemplificadoras. Desde mi punto de vista, las prácticas solidarias, como los líderes ejemplificadores, actúan como mecanismos de pedagogía política que pasan no solo por los discursos sino por el quehacer cotidiano. Así, el aprendizaje colectivo de la vida en comunidad incluye las prácticas locales, las acciones colectivas, la experiencia personal, tan poco atendidas.

*Anexo**Perú: principales movilizaciones de productores agrarios por producto por año (1985-1996)*

Lugar / Producto	Coca	Café	Arroz	Maíz	Algodón	Azúcar	Papa	Otros
Piura			1986		1986			
Sullana								1991
Piura y Tumbes					1986			1985*
Chiclayo			1998					
Panamericana Norte								1988
Cajamarca								1988
Amazonas			1985					
Bagua Grande			1986					
Iquitos			1987					
Tingo María y Aucayacu	1989							
Tingo María	1995							
Uchiza Alto Huallaga	1989							
San Martín			1988	1987				
			1989	1989				1992
Rioja								1986
Selva central		1986						
Áncash								1988
Junín							1985	
Arequipa y centro			1985				1985	
Arequipa			1990					
Majes								1986
Chicha y Selva central								1991
Nazca								1991*
Huancavelica								1989
Cusco	1986							1989
Puno								1986
								1987*
								1989
Nacional			1989					1991
FENCOCAFE		1989						
FONGALES								1989
CUNA								
ONA								
CCP								1989
								1993
Federación cooperativas							1989	
Asociación cocaleros								

Elaboración propia

* Desastres naturales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ballón, Eduardo y otros (1986). *Movimientos sociales y crisis: el Estado peruano*. Lima: DESCO.
- Carrasco, Gabriela (2003). Cronología de movilizaciones y debates en torno a las acciones del gobierno. En Eduardo Ballón y otros, *Toledo, a un año de gobierno*. Serie Perú Hoy. Lima: DESCO.
- Gamero, Julio (2001). Dimensión económica de la descentralización: tras el ajuste estructural de los noventa. *Cuadernos Descentralistas*, 1, 35-53.
- Henríquez, Narda (1986). Notas y tesis sobre los movimientos regionales. En Eduardo Ballón y otros, *Movimientos sociales y crisis: el Estado peruano* (pp. 165-224). Lima: DESCO.
- Henríquez, Narda (1997). *Acteurs et sujets dans le Pérou Contemporain, protestations regionales et mobilisations des femmes depuis 1975*. Tesis de doctorado. École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.
- Henríquez, Narda (1999). La política de las políticas sociales. Conferencia pronunciada en el *Encuentro sobre Políticas Sociales* organizado por el Colegio de Sociólogos y la Universidad de Chiclayo.
- Henríquez, Narda & Omar Manky (2008). Protesta y descontento social, dos años de gobierno aprista. *Coyuntura*, 4(18), 31-35.
- Lynch, Nicolás (1992). *La transición conservadora: movimiento social y democracia en el Perú, 1975-1978*. Lima: Zorro de Abajo.
- Marti I Puig, Salvador (2004). *Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina*. Barcelona: Centro de Estudios Internacionales de Barcelona.
- Novaro, Marcos (2000). *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*. Rosario: Homo Sapiens.
- Sartori, Giovanni (1991). *La teoría de la democracia* (Vols. I y II). Madrid: Alianza Universidad.
- Tanaka, Martín (1999). *La participación social y política de los pobladores populares urbanos ¿del movimientismo a una política de ciudadanos?: el caso de El Agustrino*. (Documento de Trabajo 1000). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tarrow, Sydney (1997). *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza.
- Tilly, Charles (1985). Models and Realities of Popular Collective Action. *Social Research*, 52(4), 717-748.
- Touraine, Alain (1993). *Crítica de la modernidad*. Madrid: Temas de Hoy.

PARTE III.
CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS

LA CUESTIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CAMBIOS Y RETOS ACTUALES

Denis Sulmont

PALABRAS PRELIMINARES

Ante todo, agradezco al Departamento en Ciencias Sociales por dedicar el II Seminario Interno de Profesores de Sociología, bajo el nombre de «Cambios Sociales en el Perú: 1968-2008», a mi trayectoria y contribución académica, así como el presente libro que recoge sus aportes y reflexiones. Esta dedicatoria sorpresiva no es un gesto protocolar. Es un modo de celebrar nuestras hazañas colectivas: la exigencia de rigor teórica y metodológica, nuestro compromiso con el país y con los de abajo, con los cambios profundos. El área de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un milagro que hicimos posible porque nos necesitamos mutuamente, valoramos nuestras diferencias y trabajamos juntos sin petulancia. Logramos construir una comunidad intelectual de alta intensidad y larga duración, tejida de profundas amistades. Este reconocimiento es ahora para mí un valioso estímulo para culminar los trabajos que tengo pendientes, aprovechando de mi entrada en esta etapa importante de la vida, bien llamada «jubilación» en mi caso.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un esfuerzo de reflexión sobre lo que propongo llamar la «nueva cuestión laboral». Mi propósito es ofrecer un análisis sintético de los problemas y retos actuales acerca de las relaciones laborales en el mundo de hoy, particularmente en el Perú. Estas reflexiones forman parte de un trabajo de actualización de la historia de la problemática laboral peruana, trabajo en el que estoy abocado en estos tiempos.

Considero el trabajo una actividad fundamental de la vida social, estrechamente ligado a la subsistencia de la población, al desarrollo de las fuerzas

productivas, y la capacidad de cada ser humano de producir una utilidad social y contribuir al desarrollo.

Utilizo la expresión «cuestión laboral» en un sentido deliberadamente amplio para incluir a los diferentes actores involucrados —trabajadores y empleadores, Estado y otros— y tomar en cuenta sus interrelaciones y retos históricos. La cuestión laboral implica el reconocimiento de problemas inherentes a las relaciones de trabajo en un ámbito nacional y, cada vez más, internacional.

La cuestión laboral actual es heredera de la «cuestión obrera» que emergió junto con la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII y que se convirtió en el eje de la «cuestión social» desde entonces. La cuestión obrera expresaba un temor ante la irrupción de los obreros en el escenario social y una preocupación por el divorcio entre el trabajo y la vida familiar, el trabajo degradante de las mujeres y de los niños, las deplorables condiciones de vida de los barrios obreros que contrastaban con la riqueza generada por la industrialización. Se manifestaba una inquietud respecto a la pérdida de cohesión de la sociedad moderna (problema en torno al cual Durkheim fundó la sociología).

La «cuestión social» corresponde a la capacidad de una colectividad de garantizar a sus integrantes la cobertura de las necesidades básicas de vida. Expresa la exigencia de una solidaridad con los sectores vulnerables, sin recursos. Lo social es una construcción humana plasmada en una serie de instituciones (Castel, 1999, p. 25). El jurista italiano M. Mazziotti define los derechos sociales desde dos perspectivas: por un lado, la del ciudadano, que apunta a participar en los beneficios de la vida asociada; por otro, la del Estado que ha de cumplir con una función equilibradora de las disparidades sociales (Mazziotti, 1964, p. 804, citado por Canessa, 2006, p. 44).

Entre las respuestas a la cuestión obrera se encuentran la legislación laboral, la organización sindical, los sistemas de seguridad social; la gestión de las relaciones industriales; las políticas de fomento del empleo. Estas diferentes respuestas contribuyen al reconocimiento de los aspectos más problemáticos de las relaciones de trabajo.

Los derechos laborales se sustentan en el reconocimiento por la sociedad y el Estado de la conveniencia de compensar una situación concreta de desventaja, de proteger a los sujetos sociales más vulnerables en la relación laboral. En este sentido, los derechos laborales tienen carácter «social», distinto del derecho civil. Ese carácter social y el principio «tuitivo» es lo que recusa el neoliberalismo. Este niega la conveniencia de compensar las diferencias de poder en las relaciones de trabajo enmarcándolas en una variante de contrato civil privado. Sin embargo, la naturaleza colectiva y desigual de dichas relaciones no permite tal reducción. Por ello, la lucha social sigue vigente.

Cuadro 1
Derechos humanos en general

Derechos cívicos Libertad de residencia, de expresión de opiniones y creencias, de asociación, de trabajo; derecho a la propiedad y la celebración de contratos de propiedad.
Derechos políticos Participación en elecciones, votar y ser elegido para un cargo público.
Derechos económicos y sociales Salud, educación, vivienda, trabajo, descanso, seguridad social, nivel de vida suficiente.
Derechos del niño
Derechos de la mujer
Derechos de los pueblos y minorías

Elaboración propia

Cuadro 2
Derechos laborales

Jornada de trabajo, horas extra, descansos obligatorios.
Protección de la seguridad y salud en el trabajo.
Remuneración mínima vital.
Asignaciones familiares, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio. Libertad sindical, negociación colectiva, huelga.
Protección social del trabajador y su familia: seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguros sociales de salud, sistemas de pensiones.
Participación en el capital social, el directorio y las utilidades de la empresa.

Elaboración propia

Cuadro 3
Derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 1998)

La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
La abolición efectiva del trabajo infantil.
La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Elaboración propia

Lo social implica el reconocimiento de derechos socioeconómicos asociados a una «afiliación nacional», mediante el acceso a un empleo y un ingreso salarial que permita a cada ciudadano subsistir y compartir los frutos del progreso. Varios derechos sociales tienen un alcance humano universal.

Las preguntas que nos planteamos ahora son: ¿qué balance hacemos de los logros y deficiencias respecto a la problemática laboral en el mundo de hoy, en el Perú en particular?, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos?, ¿qué nuevas respuestas podemos ofrecer?, ¿cuáles son los retos actuales del movimiento sindical?, ¿cómo enfrentar la flexibilidad y la precariedad del empleo?

Ordenaré mis reflexiones en torno a tres puntos. El primero se refiere a los orígenes y fundamentos de la cuestión laboral; la autonomización del trabajo de la esfera doméstica y su incursión en el ámbito social; la conformación de los mercados de trabajo y la organización de los trabajadores en los centros laborales sometidos a la racionalización capitalista. Esta parte nos permitirá sustentar que el problema laboral reside fundamentalmente en la resistencia de los trabajadores ante el intento de reducirlos a mercancías y medios instrumentales; problema que plantea la necesidad de la intervención reguladora y protectora del Estado. El segundo punto analiza sintéticamente los cambios ocurridos desde los setenta: la movilización sindical y la contraofensiva neoliberal y neoconservadora que impulsa la flexibilidad de las relaciones de trabajo y la globalización, así como la reestructuración productiva y el desmantelamiento de las bases del pacto social entre capital y trabajo (pacto fordista y keynesiano, populismo desarrollista en América Latina, entre otros). Estos cambios forman parte del proceso histórico más amplio que caracterizamos como la emergencia de la sociedad postindustrial, o sociedad del saber y de las organizaciones complejas. El tercer punto se centra en el rol del sindicalismo y de los actores sociales en un mundo dominado por el poder del capitalismo, la flexibilidad y la incertidumbre. Abordaré el tema de la heterogeneidad estructural y de las estrategias de subsistencia y desarrollo relacionadas con la informalidad y las pequeñas empresas.

2. ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE LA CUESTIÓN LABORAL

2.1 El trabajo no es simplemente una mercancía

La «cuestión laboral», hemos visto, tiene su origen en los trastornos derivados de la conformación de mercados de trabajo en los que incursionaron los trabajadores obligados a vender su fuerza de trabajo para vivir.

El problema fue tratado por Marx y Engels (1989) en los siguientes términos:

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir el capital, desarróllase también el proletariado, la clase de los obreros que no viven sino a condición de encontrar trabajo y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado.

El mismo problema es tratado enfáticamente por las encíclicas papales dedicadas a la problemática social. Cien años después de *Rerum Novarum*, publicada por León XIII en 1891, Juan Pablo II, en 1991, en *Centesimus Annus*, escribe:

En el campo económico, donde confluían los descubrimientos científicos y sus aplicaciones se había llegado progresivamente a nuevas estructuras en la producción de bienes de consumo. Había aparecido una nueva forma de propiedad, el capital, y una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado, caracterizado por gravosos ritmos de producción, sin la debida consideración por el sexo, la edad o la situación familiar, y determinada únicamente por la eficiencia con vista al incremento de los beneficios.

El trabajo se convertía de este modo en mercancía que podía comprarse y venderse libremente en el mercado y cuyo precio era regulado por la ley de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta el mínimo vital. Además el trabajador no tenía la seguridad de vender su propia mercancía, al estar continuamente amenazado por el desempleo, el cual, a falta de previsión social, significaba el espectro de la muerte por hambre.

Mencionaré también aquí el análisis de Kart Polanyi en su obra *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*¹.

El punto crucial es este: la mano de obra, la tierra y el dinero son esenciales a la industria; también deben organizarse mercados; en efecto estos mercados forman una parte absolutamente vital del sistema económico. Pero es obvio que la mano de obra, la tierra y el dinero no son mercancías [...] El trabajo es solo otro nombre para una actividad humana que va unida a la vida misma, la que a su vez no se produce para la venta sino por razones enteramente diferentes; ni puede separarse esa actividad del resto de la vida, almacenarse o movilizarse. La tierra es otro nombre de la naturaleza que no ha sido producida por el hombre; por último el dinero es solo un símbolo de poder de compra que por regla general

¹ La primera edición en inglés se publicó en 1957.

no se produce sino que surge a través del mecanismo de la banca o de las finanzas estatales. Ninguno de estos elementos se produce para la venta. La descripción de la mano de obra, la tierra y el dinero como mercancías es enteramente ficticia [...] La supuesta mercancía llamada 'fuerza de trabajo' no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esta mercancía peculiar [...] Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por efecto del desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza quedaría reducida a sus elementos, las vecindades y los paisajes se ensuciarían, los ríos se contaminarían [...] (Polanyi, 1992, pp. 81-82).

Para precisar los alcances teóricos y prácticos de la cuestión laboral es imprescindible remitirnos al estudio realizado por Bruce Kaufman: *The Global Evolution of Industrial Relations*. Elaborado a pedido de la Asociación Internacional de Relaciones Industriales, este estudio fue publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2004. Se concentra en dos tipos de respuesta: el derecho del trabajo y las «relaciones industriales» que pueden definirse como los sistemas de la gestión de recursos humanos y de las relaciones entre empresas y sindicatos en las sociedades industrializadas, especialmente, en los Estados Unidos.

Kaufman analiza con detalle los principales puntos de vista y propuestas tales como: el ensayo de Charles Morrison sobre la relación capital-trabajo; el análisis marxista, la encíclica de León XIII, las polémicas con los economistas ortodoxos sobre la teoría del trabajo como *commodity*; el papel de Sydney y Beatrice Webb en Inglaterra abogando por «la democracia industrial», basada en el reconocimiento de los sindicatos y los derechos laborales; el de John Common, pionero de la corriente institucionalista en la economía y en el derecho, en los Estados Unidos².

El siguiente extracto, citado por Kauffman, de la obra de Morrison, *An Essay on The Relation between Labour and Capital*³ ilustra el propósito central de lo que llamamos «el *management* de las relaciones laborales».

Cómo mejorar simultáneamente las condiciones y bienestar de los trabajadores, integrar la parte laboral como clase en la política y economía de modo tal que no se sientan más alienados, excluidos; reemplazar la amargura y el conflicto entre capital y trabajo por la confianza y la buena voluntad; y generar mayor

² Otro promotor inesperado de la gestión y regulación de las relaciones industriales en este campo fue John D. Rockefeller, quien contribuyó al financiamiento de departamentos de formación de profesionales expertos en este campo.

³ Publicado en 1854.

progreso económico, social; estabilidad política mediante el incremento de la cooperación y la armonía entre capital y trabajo (Morrison citado por Kaufman, 2004, p. 37)⁴.

Kaufman presta una atención especial a la creación de la OIT. Recuerda cómo los países industriales experimentaron una creciente contienda laboral y polarización de clases. Las luchas sindicales y los movimientos políticos radicales cuestionaban el sistema capitalista. Esta confrontación se intensificó durante la Primera Guerra Mundial, periodo marcado por la Revolución Bolchevique en Rusia. Varios líderes estaban convencidos de que eran necesarias importantes reformas en la relación empleador-trabajador. Esta intuición llevó a la creación de la OIT en 1919. Esta organización se propuso contribuir a la paz a través del diálogo social y la aprobación tripartita de las normas internacionales del trabajo. En el preámbulo de su fundación, la OIT afirma: «el trabajo no debe considerarse simplemente como mercancía o un artículo de comercio». En 1944, la OIT aprobó la Declaración de Filadelfia que asume la perspectiva de justicia social. En 1966, suscribe el Pacto sobre derechos sociales, económicos y culturales que incluye los derechos laborales. En 1969, recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1998, aprueba la Declaración sobre principios y derechos fundamentales que se refiere al trabajo decente en el contexto de la globalización.

2.2 El capitalismo

Fernando Braudel, uno de los historiadores más acuciosos del fenómeno capitalista, usa para caracterizarlo la imagen de un edificio de tres pisos. El primer piso corresponde a la «economía natural» o economía de mera subsistencia, en la que está inmersa la mayoría de la población del mundo. El segundo piso es el de los intercambios simples, rutinarios, de «ganancias menudas» que reproducen una división del trabajo estable. El tercer piso se refiere al capitalismo, caracterizado por la búsqueda de beneficios excepcionales, «de alto voltaje», que implican aventuras audaces y operaciones arriesgadas; es una economía inestable; accesible sobre todo a quienes manejan grandes cantidades de dinero (Braudel, 1985).

El capitalismo es un poderoso sistema de concentración de recursos. Su expansión es muy anterior a la revolución industrial. Su principal campo de acción era el comercio de larga distancia. No intervenía directamente en la organización del trabajo. Las cosas cambiaron a fines del siglo XVIII en Inglaterra cuando algunos jóvenes adinerados se empeñaron en controlar y «racionalizar»

⁴ La traducción es nuestra.

el proceso de producción, someter a los trabajadores a una división detallada del trabajo, introducir máquinas y sistemas de automatización, abriendo paso a la gran industria. Se sentaron las bases de un modo de producción muy eficiente, pero generador de grandes desigualdades.

Con estos cambios, los trabajadores llamados «obreros» que ocupaban un lugar marginal en la sociedad preindustrial, se convirtieron en protagonistas de un movimiento social de gran importancia en la sociedad industrial. Este movimiento está asociado a la conformación de la llamada «clase obrera», la cual surge en el seno de las concentraciones de trabajadores separados de los medios de producción y despojados del control del proceso de trabajo y de sus frutos. Como bien señala Alain Touraine, los integrantes de esta clase no se definen solamente por sus carencias, sino por la afirmación de su dignidad y sus capacidades frente a un poder que los niega. Por ello, los principales protagonistas de esta clase son trabajadores calificados. Por ejemplo, en el Perú, los promotores del sindicalismo en los campamentos mineros y las haciendas azucareras fueron los obreros de las maestranzas. Otra condición para la conformación de una clase obrera es el desarrollo de una conciencia de clase que combine una identidad, el reconocimiento de los adversarios y una visión global del cambio social (Touraine, Viewiorka & Dubet, 1984).

La noción de clase obrera está vinculada estrechamente al conflicto con los empresarios capitalistas; conflicto que incluye también un reto común: el desarrollo y la capacidad productiva de la sociedad, el progreso económico y social.

Una característica central del capitalismo es la gestión racional de la actividad económica orientada hacia la ganancia (Weber). El agente de esta gestión es la empresa privada lucrativa, dotada de una contabilidad que permite evaluar los costos-beneficios de sus operaciones y calcular la rentabilidad. Las condiciones de existencia del capitalismo son: la apropiación de los medios materiales de producción por empresas lucrativas privadas; la contratación de trabajadores «libres»; la organización racional del trabajo; el uso de técnicas que hagan posible el cálculo exacto; un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad y la vigencia de los contratos; y la mercantilización de los bienes y servicios.

Gorz subraya la importancia de los límites de la racionalidad económica del capitalismo:

La historia de las sociedades capitalistas desde su nacimiento puede leerse, así como la historia primero de la abolición progresiva de unos límites que obstaculizaban el despliegue de la racionalidad económica, luego de la reimposición de límites nuevos: prohibición de la esclavitud, del tráfico de mujeres, de la

venta y trabajo de los niños, etc., hasta la reglamentación de la duración y del precio del trabajo, de la densidad del hábitat, de las normas de higiene, de los residuos contaminantes, etc. Dicho de otro modo, el problema central de la sociedad capitalista, y el envite central de sus conflictos políticos, ha sido desde el inicio, el de los límites en cuyo interior debe ser aplicable la racionalidad económica (Gorz, 1995, p. 168).

Para Schumpeter (1957), la clave del capitalismo es el empresario innovador. Este no se limita a expandir la producción utilizando los mismos parámetros productivos que antes. Introduce nuevas combinaciones de recursos y tecnologías, produciendo un proceso de «destrucción creativa», que da lugar a una situación transitoria de monopolio, fuente de enormes ganancias. Este proceso implica una sucesión de crisis sociales que afectan a amplios sectores de la población.

Los liberales caracterizan al capitalismo como «economía de mercado». El mercado se convierte en mecanismo fundamental de regulación; pero no es el único. Otra forma de regular es la autoridad empresarial, la «jerarquía» que organiza y controla directamente a los trabajadores empleados. La economía de mercado es también una economía de empresa. La cuestión laboral no se refiere solamente al problema del mercado sino al problema de la disciplina y el desempeño de los trabajadores en los centros de trabajo.

El economista Hayek considera que el funcionamiento del mercado resuelve de la mejor manera posible la complejidad de las coordinaciones en la sociedad, incluyendo la cuestión de la justicia social. Sin embargo, esta hipótesis es desmentida por la realidad donde las relaciones de poder son muy asimétricas y las desigualdades muy hondas.

Polanyi distingue tres tipos de regulación: la reciprocidad entre miembros de una familia, una comunidad o un clan, la redistribución vía el Estado y los intercambios en el mercado. Polanyi muestra que la tentativa del siglo XIX de extender la regulación del mercado a toda la vida social —incluyendo el trabajo, la tierra y la moneda— es una tentativa utópica y peligrosa que desembocó en el desempleo y una crisis social que propició el estatismo fascista en Europa.

2.3 El desarrollo industrial

La industrialización es un modo de desarrollo. Se puede describir como un proceso acumulativo de innovaciones tecnológicas y organizativas, orientado a incrementar de manera exponencial las capacidades de producción a gran escala.

Esquemáticamente, podemos distinguir dos etapas en el desarrollo del capitalismo industrial. La primera (1770-1880) está marcada por la introducción de la máquina de vapor. Los principales sectores productivos son la industria textil, los ferrocarriles y la metalurgia. La fuente de energía es el carbón. La economía peruana se inserta en esta fase mediante la extracción del guano destinado a mejorar la producción agropecuaria en Europa, la exportación de algodón, azúcar y lana, el establecimiento de algunas fábricas textiles, y la construcción de los ferrocarriles y la explotación minera. La segunda etapa (1890-1960), responde a la ampliación y diversificación de la producción y el consumo. Se multiplican las innovaciones que transforman la vida. Aparecen el automóvil y los nuevos medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. El petróleo se convierte en la fuente de energía estratégica. Otro elemento fundamental es la electricidad. En esta fase, Federico Taylor sistematiza la organización científica del trabajo y Henry Ford diseña la cadena de montaje.

Esta segunda etapa se profundiza durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la guerra fría y la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); el empuje desarrollista del «tercer mundo»; el «milagro japonés»; el despegue de los «tigres asiáticos». La urgencia de contar con armamentos, medios de transporte y sistemas de comunicación cada vez más poderosos estimula las innovaciones tecnológicas. El espectacular desarrollo de la aeronáutica, la computadora electrónica, las telecomunicaciones deben mucho a las sinergias entre fines civiles y militares, entre las empresas y el Estado.

2.4 Sistemas de relaciones industriales

El desarrollo industrial plantea grandes desafíos de organización y gestión. La capacidad de gestión de las organizaciones complejas se ha convertido en una exigencia fundamental para el desempeño empresarial y la administración pública. Los institutos de formación de expertos en *management* y en gestión de personal se multiplican; por ejemplo, en el Perú tenemos: IPAE, ESAN, el Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de San Marcos, la Facultad de Relaciones Industriales de la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Piura, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, CENTRUM-Católica, entre otras instituciones. Surgen enfoques que buscan atender el problema de las relaciones humanas en el trabajo, los sistemas sociotécnicos y los procesos de toma de decisión. Se establece la obligación de las empresas de más de cien trabajadores de contratar un profesional a cargo de una oficina de relaciones industriales. En 1982,

se funda la Asociación Peruana del Trabajo bajo la dirección de Luis Aparicio Valdés, también destacado promotor de la Asociación Internacional de Relaciones Industriales, cuya creación se dio en 1966.

Estas iniciativas se enmarcan en un enfoque que considera las relaciones laborales parte de un conjunto de sistemas y subsistemas económico, cultural y psicosocial en el que se interrelacionan tres actores fundamentales: los sindicatos, el *management* y el Estado. Este campo de interacción se sitúa en un contexto conformado por tres elementos condicionantes: la tecnología, los mercados y el poder. Este esquema de interpretación fue sistematizado por John Dunlop en 1958.

2.5 El pacto fordista

La relación típica de trabajo en la sociedad industrial es la del trabajador asalariado que presta servicios a un empleador de manera continua. Como consecuencia de las luchas obreras y de la necesidad de paz social, las empresas y los gobiernos establecieron normas y procedimientos para regular el conflicto entre capital y trabajo. Un importante instrumento de regulación fue el llamado «pacto fordista»⁵, que alude al acuerdo negociado entre Henry Ford y sus obreros; según este acuerdo, el empresario accede a negociar colectivamente con los trabajadores y compartir con ellos parte de los beneficios provenientes del incremento de la productividad, aumentando regularmente los salarios. De este modo, el capital logra a la vez amenguar el descontento laboral y ampliar el mercado para los nuevos productos de consumo masivo; esta negociación tiene como condición que los trabajadores no intervengan en la gestión. El pacto fordista facilitó el crecimiento de los sindicatos, pero encausó la acción sindical hacia una orientación economista, es decir, priorizó las reivindicaciones de incremento salarial, y dejó en segundo plano las exigencias sobre las condiciones de trabajo y la participación en la toma de decisiones.

2.6 Estado protector: consenso keynesiano

En la regulación de las relaciones entre capital y trabajo intervino el Estado. Este asumió la institucionalización de los derechos laborales y las negociaciones colectivas. Los gobiernos participaron en la OIT con la finalidad de sentar la base de una normatividad laboral de amplia aceptación.

⁵ Véanse Aglieta (1984), Boyer (1986) y Lipietz (1995), investigadores de la «escuela de la regulación» en Francia.

A raíz de la crisis de 1930, el Estado desempeñó un papel más directo en la economía. Siguiendo las recomendaciones de John Keynes, varios gobiernos occidentales aplicaron políticas de inversión y gasto público destinadas a mantener el nivel de empleo y de ingresos, e incentivar la producción. A ello se sumó la expansión de los sistemas de prevención y seguridad social, así como la creación de seguros de desempleo.

2.7 Industrialización y populismo en América Latina

La producción industrial en masa y los compromisos de clase logrados en los países capitalistas desarrollados tuvieron influencia sobre los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina. Los regímenes desarrollistas y reformistas de 1950 y 1960 siguieron en parte el modelo de los países centrales en cuanto a tecnología, organización del trabajo, patrones de consumo e institucionalización de las relaciones laborales, pero lo hicieron en contextos nacionales diferentes, desde una situación de dependencia, en la periferia de la economía mundial.

En América Latina, el sindicalismo se configuró a través de tres momentos (Zapata, 1986): el primero llamado «fase heroica» corresponde a la irrupción del movimiento sindical desde fines del siglo XIX hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial; etapa en la que las luchas obreras enfrentan una situación de total carencia de derechos laborales y empujan a las clases dominantes a tomar en consideración la «cuestión social». De esta etapa, nacen las primeras leyes protectoras y los primeros mecanismos de resolución de los conflictos de trabajo⁶.

En el Perú, la ley de accidente de trabajo se remonta a 1911; la reglamentación del trabajo de la mujer y del niño a 1918 y la limitación de la jornada de

⁶ Las protestas obreras en diversos lugares del país constituyeron un motivo de preocupación de intelectuales, periodistas, juristas y políticos. Los problemas más impactantes eran la jornada laboral y los accidentes de trabajo. Varios diputados y senadores presentaron proyectos de reglamentación. La propuesta más importante fue elaborada en 1904 por José Matías Manzanilla, profesor de la Universidad de San Marcos. Comprendía diez proyectos de ley: 1) higiene y seguridad de los trabajadores; 2) trabajo de los niños y de las mujeres; 3) descanso obligatorio; 4) horas de trabajo; 5) indemnización por accidente de trabajo; 6) contrato de trabajo; 7) contrato de aprendizaje; 8) asociaciones de industriales y obreros; 9) conciliaciones y arbitraje; y 10) Junta Nacional de Trabajo. El primer proyecto discutido por el parlamento a partir de 1905 se refería a los accidentes de trabajo. Encontró la resistencia tenaz de los representantes de la burguesía. La ley, aprobada en 1911, representa una innovación jurídica en América Latina. Dicha ley fue duramente cuestionada por los dirigentes anarco sindicales, que la consideraban favorable a los intereses de los dueños capitalistas. Véase «Abajo la ley de trabajo», publicado en *El Oprimido* (1908), reproducida en Lévano y Tejada (Comps.) (2006, p. 259).

trabajo a ocho horas a 1919. Se crean los sistemas de seguridad social a partir de 1936. En 1959, el Perú ratifica el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y al derecho de sindicalización. En 1961, se dan las leyes sobre jubilación y vacaciones de los obreros. A partir de 1962, el Estado fija los sueldos y los salarios mínimos.

El segundo momento —llamado «fase institucional»— se desarrolla en el marco de regímenes populistas de alianzas políticas que promueven las estrategias de industrialización sustitutiva de importaciones hasta 1960. En este periodo prevalece la iniciativa de los partidos y del Estado en relación con la organización sindical. El otorgamiento de derechos y beneficios sociales (regímenes de seguridad social, aumentos salariales, etcétera) se convierte en un instrumento de movilización política.

El tercer momento llamado «fase excluyente» corresponde a los años 1970 y 1980. Se inicia con la crisis de los compromisos populistas. Esta fase está dominada por los efectos combinados de la política de ajuste y de liberalización económica; políticas que implican una desprotección de los trabajadores y la represión del sindicalismo. La aplicación más drástica de estas políticas estuvo a cargo de las dictaduras militares. Este proceso excluyente no significa la desaparición de los sindicatos. No debemos olvidar el papel que jugaron las movilizaciones sindicales en las luchas antidictatoriales y a favor de la democracia en países como Chile, Brasil y Perú.

2.8 La heterogeneidad estructural

La expansión capitalista en América Latina no logró consolidar las economías nacionales ni asegurar la subsistencia del conjunto de la población. No resolvió el problema de la discriminación hacia la población indígena, especialmente en las relaciones de trabajo, como lo expresa la figura del «cholo barato» y del gamonal. Centrado en la exportación de materias primas, el capitalismo no se interesó en propiciar una economía integrada y ampliar el mercado interno. La sustitución de importaciones encontró trabas para incursionar en la fase más difícil de producción de bienes de capital. La economía nacional quedó muy desigual y fragmentada, lo cual repercutió sobre el tratamiento de la cuestión laboral. Esta situación además coexiste con una fuerte movilidad social que se traduce en la migración, la educación, el acceso a empleos formales e informales, así como la combinación de varias modalidades de trabajo para subsistir y progresar.

En los países del primer mundo, el grueso de la población económicamente activa depende fundamentalmente de sus ingresos salariales, incluyendo fondos provisionales (ya sea públicos, asociativos y privados) para cubrir los periodos

de desempleo, enfermedad y jubilación. Los trabajadores y su familia cuentan con una protección social garantizada por el Estado, además de diversas formas de economía social y las iniciativas de la «economía social» (cooperativas, mutuales, asociaciones sin fines de lucro, etcétera)⁷.

En los países subdesarrollados del tercer mundo, los obreros y asalariados ocupados en empresas capitalistas y el Estado (administración pública) conforman una categoría laboral muy importante económica y socialmente, pero no constituyen la mayoría de la población activa. Los contingentes más numerosos están ligados a la economía campesina, y a la economía popular urbana, que abarcan las actividades informales, las micro y pequeña empresas, el servicio doméstico y otras modalidades de subsistencia y progreso.

Luis Aparicio Valdez resume el perfil ocupacional peruano del siguiente modo:

Si habláramos en forma muy esquemática, diríamos que un tercio de la población económicamente activa es asalariada; un tercio, campesinado, y un tercio, sector urbano marginal. [...] Esto nos da una idea de que nuestro país, como ya ha sido mencionado por Basadre y por tantas otras personas más, es un país escindido, en el que hay un grupo que tiene remuneraciones, que tiene un salario; e, independientemente que tenga las remuneraciones altas o bajas, es un sector protegido por la legislación laboral, con la posibilidad de acceder más fácilmente a la previsión y la seguridad social. Mientras que tenemos otro país, otro sector, que está conformado por los trabajadores campesinos, los trabajadores independientes no agropecuarios y los trabajadores del hogar, que tienen una protección legal bastante reducida. (Luis Aparicio Valdéz, intercampus de la Universidad del Pacífico, 1995)

Cabe mencionar aquí la tipología de «sociedades capitalistas» elaborada por Adolfo Figueroa. Esta tipología intencionalmente teórica y abstracta ofrece elementos importantes para entender cómo funciona la economía en determinados países concretos; especialmente el modelo de sociedad llamado «Sigma» que corresponde al caso del Perú, considerado el más complejo e inestable.

Para no caer en un determinismo estructural, este tipo de análisis debe tomar en cuenta los actores sociales, sus desafíos y luchas, conjugando el análisis sincrónico (la estructura y la dominación) y el análisis diacrónico (el proceso histórico y los cambios)⁸.

⁷ Sobre la «economía social» en los países del norte y del sur, véase Defourny y Develtere (1999).

⁸ En esta dirección apuntó el estudio interdisciplinario auspiciado por la OIT que realizamos Adolfo Figueroa, Teófilo Altamirano y yo sobre la exclusión y la desigualdad social (Figueroa y otros, 1990).

Resumen de las características de tres tipos de sociedad

En la *sociedad épsilon*, los individuos están dotados inicialmente con cantidades desiguales de activos económicos (capital físico, capital humano), pero los activos sociales están distribuidos equitativamente. Épsilon es una economía socialmente homogénea. Épsilon es también una sociedad que no está sobrepoblada. ¿Cómo funciona esta sociedad? El instrumento de extracción de esfuerzo es una tasa positiva de desempleo. Los trabajadores que incumplen con la disciplina laboral deben sufrir un costo económico, convirtiéndose el desempleo en el instrumento disciplinario. Por lo tanto, el desempleo es una necesidad para el funcionamiento del sistema. [...]

La *sociedad omega* se diferencia de épsilon en que es una economía sobrepoblada. No podría funcionar como una economía épsilon porque el exceso de oferta es mucho mayor que el desempleo necesario para mantener la disciplina laboral. El funcionamiento del capitalismo requerirá de la existencia de un sector de autoempleo para dicha fuerza laboral excedente —denominado sector de subsistencia— [...] En omega, el ingreso nacional tiene tres componentes: beneficios, salarios e ingresos del autoempleo. La asignación de la fuerza laboral incluye el empleo en el mercado laboral, el autoempleo y el desempleo. Esta economía opera con desigualdad en el ingreso. Existen dos niveles en la desigualdad. La primera es la desigualdad entre capitalistas y trabajadores; y la otra es la existente entre trabajadores: los asalariados tienen mayores ingresos que los autoempleados. Así la desigualdad es una necesidad para el funcionamiento del sistema. [...]

A semejanza de omega, *sigma* es una economía sobrepoblada. En la economía sigma los individuos participan en el mercado en una desigual dotación inicial en activos económicos y sociales. Sigma es entonces una economía socialmente heterogénea y jerárquica. Esta es su diferencia con la economía omega. Se trata de una sociedad mucho más compleja que las otras. Pues existen en ellas clases sociales y etnias. [...] Los individuos que están dotados con menores cantidades de activos políticos y culturales no solo son excluidos de los mercados básicos sino, también, de la provisión de bienes públicos básicos, tales como educación y salud y los sistemas de protección social y de justicia [...] La desigualdad es necesaria para el funcionamiento del sistema pero el grado de desigualdad que resulta del proceso económico es mayor que el necesario y genera desorden social. Sigma es una sociedad inestable.

Figuroa (2003, pp. 291-294).

Las cursivas son nuestras.

3. LOS NUEVOS GRANDES CAMBIOS

3.1 Emergencia de la sociedad postindustrial

Desde 1960, sociólogos como Daniel Bell en los Estados Unidos y Alain Touraine en Francia, hablan de la emergencia de una sociedad «postindustrial». Bell señala el tránsito de una economía dominada por la producción de bienes materiales hacia una economía de servicios (Bell, 1976). Touraine define la sociedad postindustrial como «sociedad programada», donde el eje del poder reside en el control de los aparatos de gestión económica, política y cultural. El conflicto central gira en torno a la relación entre la tecnocracia y los individuos —trabajadores, consumidores y ciudadanos— que reivindican el derecho a afirmarse como sujetos y actores (Touraine, 1978).

No hay que confundir «postindustrial» con «postmoderno». La postmodernidad corresponde a un desencanto respecto al progreso y la acción transformadora del hombre en la historia. El postindustrialismo, por el contrario, remite a una fase más avanzada de la modernidad.

Alvin Tófler (1970, 1980 y 1990)⁹ popularizó la metáfora de la «tercera ola», entendida como nueva revolución productiva, de importancia histórica comparable al nacimiento de la agricultura hace diez mil años, y a la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII.

Peter Drucker sugiere que estamos entrando a una sociedad «postcapitalista» (1994) donde el principal medio de producción —el saber— y la principal fuente de financiamiento —los fondos de pensiones— provienen de los propios trabajadores. «[...] el desafío *económico* de la sociedad postcapitalista, escribe Drucker, será la productividad del trabajo del saber y del trabajador del saber. No obstante, el reto *social* será la dignidad de los trabajadores de servicios» (Drucker, 1994, p. 14).

El poder de la clase dirigente en la sociedad postindustrial se sustenta en la capacidad de programar sistemas complejos. Es un poder tecnocrático que abarca el conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales (educación, salud, medios de comunicación, etcétera). El conflicto capital-trabajo no desaparece pero coexiste con otros conflictos en los que está en juego la defensa de la persona humana, la calidad de vida, el medio ambiente, los valores culturales y la libertad frente a la imposición de los aparatos controlados por las clases dominantes.

⁹ Tófler impactó el mundo de los gerentes y la opinión pública con la publicación de tres libros —*El shock del futuro* (1970), *La tercera ola* (1980) y *Cambio del poder (Powershift)* (1990)—, que se convirtieron en *best seller*.

3.2 La ofensiva neoliberal y neoconservadora

Desde fines de 1960, asistimos a una serie de acontecimientos que cuestionan el modelo de desarrollo industrial en plena expansión. Uno de los factores de cambio lo constituye el fortalecimiento de los sindicatos que se traduce en la multiplicación de las huelgas. Las reivindicaciones sindicales no se limitan a aumentos salariales; incluyen reclamos referidos a la participación de los trabajadores en la gestión empresarial, la protección social y la calidad de vida y de trabajo. Además, esta movilización sindical se articula con nuevos movimientos sociales, particularmente de estudiantes y mujeres. La efervescencia social se propaga y globaliza mediante los medios de comunicación, desbordando la capacidad de control de los gobiernos. Esta situación genera una viva inquietud por parte de los empresarios y los lleva a elaborar una estrategia destinada a socavar las bases del poder sindical: cuestionando el pacto fordista, las negociaciones populistas y el rol del Estado protector, y buscando formas de flexibilizar la mano de obra. Esta reacción sentó la base de una fuerte contraofensiva neoliberal y neoconservadora. Esta contraofensiva se consolida con la victoria de Margaret Thatcher (1979) en Gran Bretaña y Ronald Reagan (1981) en los Estados Unidos. Ambos desempeñaron un papel destacado en la política de desgaste de los sindicatos y las privatizaciones; política que se vio reforzada con la crisis del socialismo real y la caída del muro de Berlín en 1989.

En medio de estas confrontaciones ocurrieron dos hechos históricos, sin duda de enorme importancia: el despliegue de las nuevas tecnologías de información y comunicación; y la globalización.

3.3 La era de la información y la globalización

En su obra titulada *La era de la información*, Castells (1998) caracteriza el gran cambio actual a partir de la combinación de los dos procesos que acabamos de mencionar: el impacto de las tecnologías y la globalización.

Una nueva economía —escribe Castells— emerge desde hace dos décadas a escala mundial. La llamo informacional y global para indicar sus rasgos fundamentales y subrayar su interpenetración. Es informacional porque la productividad y la competitividad de las unidades o agentes de esta economía (trátense de empresas, regiones o naciones) dependen esencialmente de su capacidad de generar, tratar y aplicar una información eficaz basada en el conocimiento. Es informacional y global porque, en las condiciones históricas nuevas, la productividad nace y la competencia se expresa en una red global de interacción. Ha emergido en el último cuarto del siglo XX porque la revolución de la tecnología de la información ofrece la base material indispensable para una economía de este tipo (Castells, 1998, cap. 2).

La economía global-informacional es una economía con capacidad de funcionar como una unidad de tiempo real a escala planetaria. De este modo, el capital efectúa sus transacciones las 24 horas del día en mercados financieros integrados. Los mercados laborales, en cambio, no son globales, excepto un pequeño segmento de profesionales y científicos.

La meta fundamental de los cambios organizativos, precisa Castells, fue hacer frente a la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el entorno económico, institucional y tecnológico de la empresa, aumentando la necesidad de flexibilidad en la producción, gestión y comercialización. (Castells, 1998, p. 181)

La exigencia de flexibilidad motiva el interés por especialización flexible de la pequeña empresa (Piore & Sabel, 1990)¹⁰ y por los modelos de organización en redes. La propia gran empresa cambia su modelo de organización para adaptarse a los rápidos cambios. El principal cambio consiste en «el paso de burocracias verticales a la gran empresa horizontal».

Esta transformación se caracteriza por las siguientes tendencias: «organización en torno al proceso no a la tarea; jerarquía plana; gestión en equipo; medida de los resultados por la satisfacción del cliente; recompensas basadas en los resultados del equipo; maximización de los contactos con los proveedores y clientes; información, formación y retención de los empleados en todos los niveles» (Castells, 1998, cap. 3).

3.4 La transformación del trabajo

Los procedimientos automatizados ya ocupaban un lugar importante en la etapa anterior de industrialización, pero las nuevas tecnologías permiten desarrollarlos más extensamente. Se inventan artefactos programables capaces de realizar una serie completa de tareas complejas (por ejemplo: los tornos numéricos).

El nuevo patrón tecnológico rompe con la rigidez de la producción industrial de masa. Las máquinas polivalentes y programables hacen posible cambiar los diseños de los productos, ofrecer bienes y servicios más personalizados, adaptar cuantitativa y cualitativamente la oferta a la demanda y las fluctuaciones de los mercados.

Según Robert Reich, las categorías ocupacionales más importantes son: a) «los trabajos simbólicos-analíticos»: trabajos que requieren información y conocimientos cuya función consiste en identificar y resolver problemas, generar

¹⁰ La promoción de la pequeña empresa como agente productivo y fuente de empleo en el Perú es enfatizada por Fernando Villarán, quien siendo ministro de Trabajo cambió el nombre de esta institución, la cual pasó a denominarse Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo.

iniciativas e innovar; *b*) los servicios a personas, especialmente en salud y educación, cuidado de niños, ancianos y enfermos, seguridad, enseñanza; estos trabajos consisten en establecer una relación de persona a persona, comunicar, orientar y asistir; *c*) los servicios de producción rutinaria que a pesar de la automatización siguen necesitando una cantidad importante de operarios; por ejemplo: las cajas de supermercados. A estas tres categorías añadiré una cuarta: las actividades que exigen una destacada pericia mental y física, manual y corporal como por ejemplo: los artesanos, pescadores, mineros, artistas, deportistas, choferes.

La reconversión productiva transforma la estructura típica del empleo en la sociedad industrial. El obrero fabril parcelario y semiespecializado pierde el lugar central que ocupaba en esta sociedad. El trabajador decisivo hoy día pasa a ser el obrero calificado, el técnico o el profesional: un trabajador capaz de programar, controlar y asegurar el mantenimiento de las máquinas automatizadas, manejar los conocimientos, las informaciones y las comunicaciones necesarias para el funcionamiento de los procesos productivos complejos y flexibles. El trabajo moderno postindustrial revaloriza la calidad del oficio, de manera parecida a la requerida por la producción artesanal. Exige educación y preparación científica, así como la iniciativa y capacidad de atender emergencias y de coordinar.

El trabajo manual y rutinario, descalificado o semicalificado no desaparece; sigue vigente en sectores tradicionales de la producción y en muchos servicios. La modernización de los sistemas de producción concentra los núcleos de trabajadores más calificados en los lugares estratégicos de los procesos productivos y administrativos.

El mundo laboral tiende a diversificarse y segmentarse: por un lado, están los trabajadores de primera categoría, fuertemente implicados en los sistemas técnicos y administrativos, con responsabilidades y buena remuneración; por otro, están los trabajadores de segunda categoría, ocupados de manera precaria en tareas y servicios subalternos, y los trabajadores de tercera categoría, desocupados o subempleados crónicos. La discriminación entre los sexos coloca generalmente a las mujeres en la segunda categoría. También se encuentran en situación de desventaja los ciudadanos discriminados por ser migrantes, por su origen étnico cultural o por una discapacidad. Esta fragmentación no debe entenderse como algo rígido. Los trabajadores responden a estrategias personales de movilidad ocupacional, actuando para acceder a mejores oportunidades de empleo mediante la capacitación y experiencia apuntando a empleos de mayor calidad.

3.5 Globalización y derechos del trabajo

La cuestión laboral se plantea fundamentalmente en el ámbito nacional, pero desde sus inicios tuvo también un alcance internacional. Tanto los sindicatos como los gremios empresariales y los gobiernos asumieron esta dimensión, lo cual dio lugar, como hemos visto, a la conformación de la OIT. En el campo sindical se constituyeron centrales y federaciones a nivel mundial¹¹.

Dicha dimensión internacional se convierte en tema inevitable ante la expansión de las empresas multinacionales, la liberación del comercio internacional y el avance de la globalización, los procesos de integración económica, la mundialización de la producción, la creciente movilidad de las inversiones y de los bienes y servicios facilitados por la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones acortando las distancias, relativizando las fronteras.

Paradójicamente, esta globalización restringe la movilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que provienen de países menos desarrollados.

La globalización ofrece grandes posibilidades de desarrollo. Pero también refuerza el poder del capitalismo a nivel mundial, debilitando los mecanismos de regulación y de reconocimiento de derechos constituidos alrededor del Estado-nación.

El enorme peso de las empresas multinacionales en las economías nacionales planteó la necesidad de promover compromisos éticos y sociales por parte de estas empresas mediante la adopción de códigos de conducta y normas sobre responsabilidad social empresarial (Campana & Mujica (Comps.), 1999)¹².

La relación entre globalización y derechos laborales ha dado lugar a una controversia respecto al problema del *dumping* social o «competencia desleal, a la baja», derivado de las diferencias de los estándares laborales vigentes entre países. Como dice Renato Mejía, «dicha apuesta, más que a una estrategia de desarrollo, arriesga la trampa de un crecimiento empobrecedor, condenando a su mano de obra a continuar siendo mano de obra barata, que puede recrear una cuestión social del tipo de la que, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, hicieron surgir el derecho del trabajo, los sindicatos y la misma OIT» (Mejía, 2008, p. 161).

¹¹ Las principales centrales sindicales a nivel mundial fueron (hasta hace poco): la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de orientación social demócrata, la Confederación Mundial de Trabajo (CMT) de origen social cristiano y la Federación Sindical Mundial de Trabajadores (FSM) ligada a los regímenes comunistas. En el año 2006, la CIOSL y la CMT se fusionaron dando lugar a la nueva central denominada Confederación Sindical Internacional (CSI). Según sus dirigentes, esta nueva central representaría a 168 millones de afiliados provenientes de 154 países.

¹² Para evaluar la responsabilidad social se ha elaborado la norma SA8000 basada en los principios de la OIT referidos al trabajo decente, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de otros acuerdos internacionales.

Se trata de elegir entre dos estrategias: una centrada en el empleo de calidad que permita la mayor competitividad, y la otra que prioriza el crecimiento del empleo sin preocuparse por la calidad (De los Heros, 2008, p. 33).

Los Estados Unidos, en particular, defendieron la idea de que eran necesarias «cláusulas sociales» para protegerse frente a las prácticas que afectaban a sus sindicatos y que eran inaceptables desde un punto de vista moral. Sin embargo, la propuesta de «cláusula social» resultó de difícil aplicación, afectando a la población más pobre. Por ello, después de arduos debates, la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó que la instancia más pertinente para resolver el problema de la «competencia a la baja» era la OIT por contar con sus propios estándares laborales y tener los mecanismos para vigilar su cumplimiento.

Este debate plantea el problema de la especificación de los derechos laborales más importantes en relación con los derechos humanos fundamentales: tema que ha sido tratado en profundidad por Miguel Canessa en su tesis doctoral *Los derechos humanos laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)* (Canessa, 2006).

Asumiendo el requerimiento de la OMC, la OIT aprobó en 1998 una declaración comprometiendo a sus miembros a «respetar, promover y hacer realidad, de buena fe, los Principios y Derechos relativos a los cuatro derechos fundamentales siguientes: 1) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 2) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 3) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 4) la eliminación de la discriminación en materia de empleo» (OIT, 1997).

Estos derechos constituyen la base de lo que la OIT llama «trabajo decente». El Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y los Estados Unidos en 2008, establece una cláusula social que recoge la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, y lo amplía a condiciones aceptables de trabajo con compromisos respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud ocupacionales, acceso a los tribunales y debido proceso para exigir el cumplimiento de la legislación laboral (Mejía, 2008, p. 175).

4. PROBLEMAS Y RETOS ACTUALES

4.1 El capitalismo requiere contrapeso

La globalización significa la consolidación del poder del capital a nivel nacional y mundial. Este capital está concentrado en manos de personalidades, grupos y redes articulados alrededor de intereses financieros, tecnológicos, militares que

operan de manera autónoma respecto a los estados nacionales e internacionales. Esta autonomización significa un poder sin contrapeso; un poder fáctico difícil de identificar y regular.

Como hemos visto, el poder de las clases dirigentes no se sustenta solamente en el control de medios de producción industriales, sino también en el dominio de los conocimientos y de los medios de comunicación. Es un poder fluido, sustentado en la capacidad de manejar lo complejo y adaptarse a los cambios.

4.2 Flexibilidad y seguridad

Una cuestión que merece especial atención es la flexibilización de las relaciones laborales, la precarización del empleo y la inseguridad en la que se encuentran los trabajadores.

En el Perú se evalúa que solo alrededor del 8% de la PEA cuenta con un contrato de trabajo a tiempo indefinido; y la gran mayoría de los asalariados no tienen una relación laboral estable.

El modelo típico de relaciones laborales en la sociedad industrial era un trabajo salariado a tiempo completo relacionado de manera continua con un único empleador; un trabajo que daba acceso a beneficios sociales y era relativamente protegido frente al despido arbitrario. Este modelo se resquebraja a partir de la crisis del capitalismo en 1970.

El nuevo modelo responde a la necesidad de flexibilidad reclamado por los empresarios: propicia un tipo de empleo eventual y una amplia libertad del empleador respecto a la contratación y despido de los trabajadores y los cambios en el contenido de su labor. Fomentan la terciarización del empleo a través de los subcontratistas, los *services* y las cooperativas de trabajo¹³.

Este modelo implica la «externalización» de las relaciones laborales. Apunta a debilitar el colectivo de trabajo y socavar el poder sindical. Responde a la fase de crisis de productividad del capital y la agudización de la competencia en el escenario mundial.

La flexibilidad se ha convertido en una exigencia categórica de los empleadores; siendo una fuente de angustia para la mayoría de los trabajadores que insisten en el reconocimiento de la estabilidad en el trabajo.

¹³ La terciarización del empleo se ha extendido de manera alarmante en el sector minero en el Perú. En su n° 2, la revista *Bajo la Lupa* (2007) estima que de los 101 000 trabajadores del sector, apenas el 36% está en planilla, mientras que el 64% restante está contratado de manera indirecta a través de los *services*. Se constata, además, que la mayoría de los accidentes fatales en la minería desde 2000 tuvieron como víctimas a trabajadores de los *services*.

Hoy día, nadie cuestiona la necesidad de flexibilidad de las empresas. Sin embargo, la inestabilidad laboral sigue siendo un problema crucial.

La seguridad es un requerimiento persistente de quienes viven, fundamentalmente, de sus ingresos salariales. En el contexto laboral actual se hace imprescindible inventar nuevas formas de seguridad compatibles con la indispensable flexibilidad de las relaciones de trabajo. De ahí el interés por la experiencia de «flexi seguridad» en Dinamarca.

El sociólogo Richard Sennett centró su análisis de las relaciones laborales en torno al tema de la precariedad. El nuevo modelo de trabajo se aleja de las carreras bien definidas. Sennett habla de un capitalismo de corto plazo. La experiencia vivida del trabajo está marcada por una tensión extrema entre exigencia de competitividad y el horizonte de la precariedad. La seguridad del trabajo descansa sobre estrategias de desarrollo personal. Un joven diplomado de nivel medio debe prepararse a cambiar de empleador por lo menos doce veces en su vida profesional (Sennett, 1998, p. 41).

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) intenta promover la «flexi seguridad» en América Latina, según las características propias de cada país. Su propuesta se sostiene en tres pilares: *a)* la regulación del mercado de trabajo, *b)* los sistemas de protección contra el desempleo y *c)* las políticas activas del mercado laboral (CEPAL, 2008, p. 10).

Según el economista Peter Auer, analista de la OIT, la promoción de la «flexi seguridad» comprende los siguientes componentes: *a)* acuerdos contractuales, *b)* políticas activas de mercado laboral que ayuden a las personas a hacer frente al cambio rápido, periodos de desempleo, reintegración y transición a nuevos empleos, *c)* sistemas de aprendizaje vitalicio, garantizando la «empleabilidad» de todos los trabajadores y mantener los niveles de productividad, *d)* sistemas de seguridad social que proveen apoyo salarial adecuado, *e)* diálogo social solidario y productivo (Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo, 2008, p. 619).

4.3 Vigencia del sindicalismo

El sindicalismo es una forma de acción colectiva de trabajadores asalariados que buscan conformar una fuerza común frente a los empleadores para hacer valer sus intereses y sus derechos. El sindicalismo articula tres funciones: *a)* representar intereses, reivindicaciones y aspiraciones de un conjunto de trabajadores; *b)* contribuir a la regulación de las relaciones laborales, agrupando las demandas y participando en la negociación colectiva y en la solución de los problemas; *c)* constituir un grupo social y fomentar la cooperación y solidaridad entre sus miembros (Rosanvallón, 1988).

El fenómeno sindical expresa la existencia de un conflicto y una desigualdad inaceptable en las relaciones de trabajo. Apunta a negociar y lograr una solución. Se apoya en tres derechos fundamentales: la huelga, la asociación y la negociación colectiva. Tiene un carácter corporativo en la medida en que aglutina a determinados grupos o categoría de trabajadores, pero se convierte en portavoz del conjunto de los asalariados y del mundo del trabajo en general.

El derecho laboral se ha ido construyendo a partir de pequeños derechos ganados de manera progresiva por la lucha sindical. Estos derechos se plasman en convenios colectivos y leyes. De este modo, las conquistas fragmentadas tienden a generalizarse, convirtiéndose en derechos válidos para sectores sociales más amplios. Para que ello ocurra es necesario conjugar la acción sindical y política. Ambas son importantes para compatibilizar y defender los derechos conquistados y garantizar su aplicación.

Un aspecto central del sindicalismo es la capacidad de negociación, la que implica la existencia por lo menos temporal de una relación de mutua dependencia. El conflicto laboral no se puede definir en términos de guerra donde prevalece el objetivo de aniquilar al adversario. Empleadores y empleados, trabajadores y empresarios se necesitan mutuamente y por lo tanto se ven obligados a negociar. El objeto mismo de la negociación consiste en definir un interés común, un reto compartido y una regulación conjunta.

El sindicato constituye un «contrapoder» que contribuye a equilibrar los poderes fácticos de los empleadores. Es un contrapoder molesto, frecuentemente afectado por el caudillismo de los dirigentes, pero es un contrapoder necesario.

La organización sindical en el Perú tuvo un importante desarrollo en la primera etapa de conformación de los núcleos obreros al principio del siglo XX. Luego de un largo periodo de represión, se expandió notablemente, en los años 1950-1960, marcado por la diversificación de la economía, el empleo asalariado y la migración hacia las grandes ciudades. Los sindicatos tuvieron poca capacidad de presión económica directa sobre las empresas: la amenaza del despido y el autoritarismo patronal; por un lado, y la precariedad de las garantías legales; por otro, llevaron a los líderes sindicales a politizar su estrategia de lucha, dirigiéndola hacia el gobierno, amenazando su estabilidad mediante no tanto la interrupción del trabajo sino las protestas sociales: movilizaciones callejeras, marchas de sacrificio, huelgas de hambre, cierre de carreteras, etcétera (Payne, 1965).

El sindicalismo jugó un papel importante en los intensos procesos políticos y sociales de los años 1968-2008, que abarcan el derrumbe del Estado oligárquico que se concreta con el golpe militar de Velasco, la nacionalización del petróleo, la reforma agraria, la inesperada reforma laboral orientada hacia la cogestión y la autogestión; el proyecto de desarrollo industrial y de institucionalidad corporativo

impulsado por el gobierno de la Fuerza Armada; la temprana frustración de este proyecto ante el embate de la crisis de la deuda externa y las masivas respuestas a las medidas de ajuste; la reinstauración de la institucionalidad democrática con los gobiernos de Belaúnde y García; la ampliación del espacio político de las izquierdas a nivel nacional, local y regional; la irrupción de la violencia propiciada por Sendero Luminoso y el MRTA; y la ofensiva neoliberal.

El gobierno de Velasco tuvo una marcada incidencia respecto a la cuestión laboral. Entre sus principales iniciativas están la estatización de las empresas estratégicas, la constitución de las cooperativas agrarias de producción y las comunidades industriales, la ley de estabilidad laboral y el reconocimiento oficial de los sindicatos. Este ambicioso proyecto chocó con la oposición frontal del grueso de los empresarios. También se enfrentó a una parte importante de los dirigentes sindicales «clasistas» relacionados con los partidos de izquierda, que reivindicaban su autonomía de clase respecto a las reformas corporativas del régimen militar¹⁴.

La segunda fase del gobierno militar encabezada por Morales Bermúdez dio inicio a los paquetes de medidas de ajustes. Las manifestaciones de protesta sindical y popular se masificaron y desembocaron en el paro del 19 de julio de 1977. El gobierno militar respondió autorizando el despido de los dirigentes sindicales comprometidos con el paro; medida que afectó a más de cuatro mil dirigentes. En esta coyuntura, el gobierno militar anunció el proceso de transferencia del poder a los civiles.

En la década de los ochenta, prosiguieron las medidas de ajuste, generando una recesión con inflación que tuvo un efecto dramático sobre el empleo y los salarios reales, elevó el nivel de pobreza en el país, provocó la expansión masiva de la informalidad y desgastó el sindicalismo (Balbi, 1993; Parodi, 1986; Portocarrero & Tapia, 1992). Muchos trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público tuvieron que implementar una estrategia de subsistencia, basada en el autoempleo y el pluriempleo.

Muchos optaron por buscar trabajo en el extranjero. En esos años, asistimos al fuerte incremento de la participación de las mujeres en la PEA.

¹⁴ La denominación clasista está profundamente arraigada en la historia del movimiento laboral en el Perú. Fue acuñada en la época del anarco-sindicalismo y de la propaganda socialista de José Mariátegui en los sindicatos. Es retomada por las corrientes sindicales que desde fines de los cincuenta desplazan el liderazgo aprista y se acercan a la izquierda. «El clasismo» se consolida como orientación mayoritaria del movimiento sindical en la década de 1970, convirtiéndose en patrimonio de un campo popular más amplio. Gonzalo Portocarrero y Rafael Tapia lo enfocan como una orientación motivadora de la acción basada en la indignación producida por la conciencia de tener derechos y la vivencia de la discriminación (Portocarrero & Tapia, 1992, p. 18).

El accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) introdujo un nivel de violencia sin precedente en el país, desafiando la perspectiva de democracia. Entre las víctimas de esta violencia, se encuentran empresarios y dirigentes sindicales. A fines de los ochenta, Sendero Luminoso intentó penetrar en el movimiento sindical. El asesinato de dirigentes y el uso de medidas intimidatorias como los «paros armados» reforzaron el amplio rechazo a esta tentativa¹⁵.

Los paros nacionales se multiplicaron, pero con resultados cada vez más restringidos. Junto con las centrales sindicales, los frentes de defensa constituidos en las provincias tuvieron un protagonismo creciente.

En los años noventa, el gobierno de Alberto Fujimori promulgó un conjunto de dispositivos legales orientados a flexibilizar el empleo y restringir la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, particularmente el decreto legislativo 728, llamado «Ley de fomento del empleo» (1991) y el decreto ley 25593, referido a «las relaciones colectivas de trabajo» (1992). Este último fue objeto de numerosas observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. La contrarreforma laboral neoliberal fue drástica y se impuso sin debate político público¹⁶.

Entre 1990 y 2007, la tasa de sindicación (trabajadores afiliados/PEA asalariada urbana) se redujo de 21% a 8%¹⁷. A fines de los noventa, el total de sindicalizados detectados por la Encuesta de Hogares a nivel nacional era apenas 53 000 trabajadores en las empresas privadas y 167 000 en el sector público (Convenio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo–Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 2000). Recién a principios de este siglo, durante los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, se produce un leve repunte del movimiento sindical. Hoy día, los sindicatos más poderosos se encuentran en las empresas mineras y de hidrocarburo, el sector de construcción civil, las telecomunicaciones y los servicios básicos de agua, electricidad, transporte, salud y educación.

4.4 La concertación sociolaboral

En el 2001, el gobierno de Paniagua propició una instancia de concertación social en el país a través de la conformación del Consejo Nacional de Trabajo. Seguidamente, el gobierno de Toledo instala el Acuerdo Nacional de 2002.

¹⁵ Véase Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003 vol. 5, pp. 194 y ss. y pp. 460 ss.).

¹⁶ Sobre la reforma laboral fujimorista, véase Canessa (1999).

¹⁷ Sobre la tasa de sindicalización, véase Yépez y Bernedo (1986); Figueroa y otros (1990); Sulmont (2006, pp. 100); *Bajo la Lupa 2* (2007).

El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) está concebido como órgano consultivo del Ministerio de Trabajo, encargado de discutir y concertar políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y protección social, revisar proyectos de leyes y pronunciarse sobre propuestas en debate. Se le asignó también la función de participar en la regulación de la remuneración mínima.

El CNT constituye una instancia de concertación tripartita, en la que participan, con igual calidad de voto, representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. El consejo incluye además, con voz sin voto, a representantes de organizaciones sociales vinculadas a la problemática laboral. Los trabajadores están representados por cuatro centrales sindicales (Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Única de Trabajadores (CUT), Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CAT) y Central de Trabajadores del Perú (CTP)), y los empleadores por cinco gremios afiliados a la CONFIEP y dos gremios independientes (la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima). Poco después, se acordó incorporar a la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales (APEMIPE), la Asociación de Exportadores (ADEX) y los Conglomerados de Pequeña Empresa en el Perú.

El eje de la intervención del Consejo fue la discusión y la aprobación de propuestas consensuadas respecto a los proyectos de ley en debate, en especial el proyecto de Ley general de trabajo. Entre los resultados más destacados de esta intervención, cabe mencionar la aprobación de la Ley general de inspecciones y defensa del trabajador (2001), la ley que regula la actividad de las empresas de servicios y cooperativas de trabajadores (2002), la ley que levanta las observaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical a la Ley de relaciones colectivas de trabajo (2003), y la ley que regula las actividades de capacitación (2004).

El debate sobre la Ley general de trabajo iniciado en 2002 en el CNT se dilató. Los consejeros lograron ponerse de acuerdo sobre la gran mayoría de los puntos. Pero quedaron sin resolver algunos temas sensibles; particularmente la negociación colectiva por rama de actividad y el tratamiento del despido arbitrario. En mayo de 2005, ante el entrampamiento de la discusión, las centrales sindicales acordaron su retiro temporal del CNT, pidiendo al Ejecutivo y a la comisión de trabajo del Congreso que resuelvan los puntos controvertidos y den curso a la aprobación de la ley. En cambio, los representantes empresariales plantearon que el debate continúe en el CNT exigiendo la aprobación por unanimidad.

Los dirigentes sindicales tienen una posición ambivalente respecto a su participación en la concertación. Es importante para ellos ser reconocidos en la escena oficial como representantes e interlocutores sociales válidos; reconocen que el consejo atendió algunas de sus demandas; pero no quieren prestarse al juego de los gremios empresariales. Condicionaron su presencia en el CNT a la solución

de ciertos conflictos emblemáticos. Es así que, en julio de 2002, las cuatro centrales se retiraron ante el despido de 480 trabajadores de la empresa Telefónica. El consejo quedó paralizado durante tres meses, hasta que el Tribunal Constitucional ordenara la reposición.

Los principales líderes sindicales siguen con un discurso de confrontación. Sin embargo, vienen prestando un mayor interés a la concertación. La preocupación de la CGTP y de las demás centrales es demostrar su capacidad de convocatoria y de movilización social, con el fin de mejorar la correlación de fuerza en su favor en las negociaciones. Al respecto, la CGTP señala:

Nos reiteramos en el aspecto central de nuestra táctica que se basa en que la participación en los espacios de diálogo y la defensa de nuestra propuesta se cimientan sobre las acciones de masa y medidas de fuerza como son las marchas, movilizaciones, concentraciones, mítines, paros y huelgas cuando estas sean necesarias o la situación lo exija, desarrollando primordialmente un rol centralizador de las luchas populares. (CGTP, *Memoria 2004*)¹⁸

A esta estrategia responde la convocatoria a movilizaciones y paros nacionales. El paro nacional del 14 de julio de 2004 merece una atención especial¹⁹. Fue la primera protesta nacional organizada por las dirigencias sindicales después del paro convocado por la CGTP el 28 de abril de 1999. Se gestó en un contexto de multiplicación de luchas sectoriales, locales y regionales, con bloqueos de carreteras y actos de violencia. Remite a una plataforma muy amplia: convocatoria a una asamblea constituyente; cambio en la política económica; lucha contra la corrupción; y atención inmediata a las demandas laborales y sociales, regionales y locales.

El paro fue contundente en las principales ciudades del interior del país. Fue significativo también en Lima. Contrariamente a los pronósticos, se llevó a cabo de manera pacífica; los dirigentes demostraron su capacidad de movilizar a amplios sectores y expresar sus reclamos sin desborde de violencia.

4.5 Los trabajadores de la economía informal y las pequeñas empresas

Un importante tema en debate lo constituye la representación de los intereses de los trabajadores vinculados a la informalidad y la pequeña empresa. La categoría de empleo informal fue definida estadísticamente como la suma de cuatro rubros:

¹⁸ Citado por Vildoso (2004, 9).

¹⁹ Sobre este paro, véase la monografía realizada para el curso Sociología de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú por Ana Inés Corzo, Gianina Pastor, Sofía Vera y Rodrigo Barrenechea (2005).

los trabajadores independientes no calificados, los trabajadores familiares no remunerados, los trabajadores de las microempresas y los trabajadores del hogar. Este conglomerado representa más de la mitad del empleo total en el Perú. La dispersión en la que se encuentran sus integrantes hace prácticamente imposible su coalición sobre la base de relaciones colectivas de trabajo. A partir de los años ochenta, la pequeña y «micro» empresa se han expandido, constituyendo una gran variedad de gremios. Como hemos visto, el CNT acordó incorporar a dos representantes de este sector. En la mesa de concertación, esos representantes se colocaron al lado de los empresarios.

La problemática de la «informalidad» se precisó a principios de los setenta a raíz de un estudio auspiciado por la OIT sobre el desempleo en Kenia, en el que el antropólogo Keith Hart analiza cómo los asalariados urbanos completan sus remuneraciones recurriendo a «oportunidades informales de ingresos». Desde entonces, la OIT entiende la informalidad como el conjunto de unidades de pequeña escala que desarrollan actividades que pueden emprenderse con escasos recursos (Tokman, 2004).

La informalidad remite también a las actividades, personas y entidades que operan al margen de la estándares de organización de la normatividad legal oficial (registro, obligaciones tributarias y laborales y otras). Gran parte de las prácticas informales responden a la estrategia de grupos de escasos recursos, que intentan abrirse campo en la economía y la sociedad. Forman parte del «desborde popular» del cual habla Matos Mar (1984) y del «otro sendero» promocionado por Hernando de Soto (1987).

Como remarca la OIT, las prácticas informales no se circunscriben solo a las organizaciones de pequeña escala dedicadas a actividades de subsistencia. Ocupan un lugar importante también en empresas medianas y grandes altamente rentables. Por ejemplo, muchas de las nuevas empresas agroexportadoras incumplen con registrar en planilla a los trabajadores temporales y pagar los beneficios que les corresponden (Inspección de la Dirección Regional del Trabajo de Ica, 2005).

A principios del siglo XXI, la OIT, en el marco de su campaña respecto al «trabajo decente para el siglo XXI», abandonó el concepto de «sector», reemplazándolo por el de «economía informal», que comprende además de las cuatro categorías mencionadas, la de «los trabajadores sin protección», independientemente de si están en grandes, medianas o pequeñas empresas.

La informalidad encubre también a muchos negocios considerados ilícitos por la ley, tales como el contrabando, la venta de autopartes robadas, la piratería de libros y discos compactos, que son tolerados con la complicidad de los clientes y de las autoridades locales.

La incorporación de la micro y pequeña empresa en la concertación plantea el delicado problema de legalizar la diferencia de los derechos laborales en el país. Este problema ha sido ardorosamente debatido en el proceso de elaboración de la Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, ley MYPE, promovida por el Ministerio de Trabajo y aprobada por el Congreso en julio de 2003 (ley 28015)²⁰.

Esta ley es aplicable a un universo muy amplio de empleadores y trabajadores. Establece un régimen laboral especial de naturaleza temporal de cinco años para las microempresas, con el propósito de hacer efectivo el disfrute por parte de los trabajadores de algunos derechos mínimos esenciales: salario mínimo, vacaciones (quince días), acceso al seguro de salud y régimen pensionario. Exonera al empleador del sobrepago por trabajo nocturno, y reduce el monto de la indemnización en caso de despido. Promueve la inspección del trabajo en las pequeñas y medianas empresas (PYME).

La ley PYME suscitó polémicas. Varios analistas señalan el peligro de «pymetizar» la cuestión laboral, nivelando hacia abajo los derechos y beneficios sociales del conjunto de trabajadores. El régimen laboral especial puede inducir a las medianas y grandes empresas a subdividirse. Carmen Vildoso, viceministra de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa, involucrada en la gestación de la ley señala: «El problema de este debate es que todo el mundo opinaba, menos los trabajadores de las micro-empresas que —como se sabe— no tienen organizaciones que los representen» (Vildoso, 2004, p. 57).

A fines de 2004 y principios de 2005, voceros del Ministerio de Economía y de los gremios empresariales propusieron hacer extensivo el régimen laboral de las MYPES a los nuevos trabajadores contratados por las empresas en general. Esta propuesta suscitó el rechazo de los dirigentes sindicales y del Ministro de Trabajo de entonces, Javier Neves.

5. CONCLUSIÓN

Hemos visto que la cuestión laboral nace a partir de la afirmación de la dignidad de los trabajadores como seres humanos que se niegan a ser tratados como mercancía y como simple medio para fines ajenos.

A través de arduos conflictos, dicha cuestión se ha plasmado en un conjunto de instituciones y modalidades de regulación. Este proceso dio lugar al reconocimiento de una nueva generación de derechos —llamados «económicos y sociales»— enraizados en los derechos humanos en general. Las repuestas a los problemas

²⁰ Sobre esta discusión, véase Vildoso (2004).

laborales se han enmarcado principalmente en el ámbito del Estado-nación, adecuándose a los regímenes políticos y los niveles de desarrollo de cada país.

La cuestión laboral se ha institucionalizado también a nivel internacional. La OIT abrió un espacio de negociación tripartita y propició la aprobación por los países de un conjunto de convenios y recomendaciones en materia laboral. Sin embargo, carece de poder de coacción política sobre los estados para hacer respetar los acuerdos. Su influencia proviene del compromiso moral de sus miembros.

Hoy la dimensión internacional de las políticas laborales y particularmente las de China y los países emergentes tienen una importancia crucial debido a la globalización de la economía, la intensificación del comercio mundial y los tratados de libre comercio. Tanto las empresas como los Estados y las regiones buscan posicionarse en los mercados, mediante dos tipos de estrategias paralelas o combinadas: el incremento de eficiencia sistémica fundada en la calidad del personal, la tecnología y la organización, por un lado, y, por otro lado, la reducción de los costos laborales.

En el Perú, la nueva cuestión laboral no puede dissociarse de las luchas por reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo humano. Ello supone un cambio histórico de carácter cultural y político: acabar con el paradigma del «cholo barato» y contribuir a la vigencia de los derechos laborales básicos en el ámbito mundial.

Como conclusión, señalaré los lineamientos sindicales siguientes:

1. Reconocer que el sindicalismo, no obstante sus crisis, sigue vigente como uno de los contrapesos al capitalismo extremo que domina en el mundo globalizado.
2. Responder a la diversidad de las situaciones de trabajo, incluyendo la de los trabajadores subcontratados y PYMES. Hacer de los sindicatos escenarios de debates democráticos y constructivos.
3. Encarar el problema de la inseguridad ocupacional mediante la regulación del despido y la promoción de la formación laboral permanente, así como la generalización de sistemas de previsión social.
4. Precisar los alcances de la responsabilidad empresarial, armonizando los intereses económicos, sociales y ambientales en coordinación con los sectores implicados a nivel local y nacional.
5. Promover formas de cogestión de trabajadores, y de vigilancia de los trabajadores de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y las condiciones laborales y ambientales en las que son producidos.
6. Propiciar la negociación colectiva articulada.

7. Participar en la concertación laboral y valorar el diálogo social.
8. Culminar la aprobación de la Ley General del Trabajo.
9. Sostener ante la opinión pública la legitimidad de las luchas sindicales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aglieta, Michel & Antón Brender (1984). *Les métamorphoses de la société salariale*. París: Calmann-Lévy.
- Arce Ortiz, Elmer (2005). *Diálogo social y libertad sindical en el Perú*. Lima: Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo(2008). *Relaciones laborales en el mundo. 43 Estudios en homenaje al profesor Luis Aparicio Valdez*. Lima: Grijley.
- Balbi, Carmen Rosa (1993). Sindicalización y flexibilización en el mercado de trabajo en el Perú. Su impacto en el Perú. *Debates en Sociología*, 19, 91-117.
- Bell, Daniel (1976). *El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social*. Madrid: Alianza.
- Bernedo Alvarado, Jorge & María Bastidas (2000). *Sindicatos en el Perú. Agenda para el cambio*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Boyer, Robert (1986). *La théorie de la régulation*. París: La Découverte.
- Braudel, Fernando (1985). *La dinámica del capitalismo*. Madrid: Alianza.
- Calero, Fernando (Coord.) (1988). *Nuevos retos del sindicalismo*. Caracas: International Legume Database & Information Service – Nueva Sociedad.
- Campana Zegarra, David & Javier Mujica Petit (Comps.) (1999). *Códigos de conducta y normas sobre responsabilidad social empresarial. Un desafío para la competitividad en la economía global*. Lima: Centro de Asesoría Laboral del Perú.
- Canessa Montejo, Miguel (1999). *La flexibilización laboral en el Perú: la precarización de las relaciones de trabajo en los noventa*. Tesis de licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Canessa Montejo, Miguel (2006). *Los derechos humanos laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Programa Laboral de Desarrollo.
- Cárdenas, Gerardo (1983). *El sector de economía social en el Perú. Cooperativas y empresas autogestionarias*. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación.
- Castel, Robert (1997). Trabajo y utilidad para el mundo. *Revista Internacional del Trabajo*, 115(6), 671-678.
- Castel, Robert (1999). *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. París: Gallimard.
- Castells, Manuel (1998). *La sociedad red*. Madrid: Alianza.

- Castillo Mendoza, Carlos Alberto (Coord.) (1999). *Economía, organización y trabajo: un enfoque sociológico*. Madrid: Pirámide.
- Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) (2004). *Memoria anual*. Lima: Confederación General de Trabajadores del Perú.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). *Informe Final* (Vol. 5). Lima: CVR.
- Comisión Económica Para América Latina (2008). *Los mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía global: experiencias y perspectivas de América Latina y El Caribe*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina.
- Corzo, Ana Inés y otros (2005). *Divergencias y confluencias dentro de la CGTP: el caso del paro nacional del 14 de julio del 2004*. Monografía del curso Sociología de las Organizaciones. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- De los Heros, Alfonso (2008). Teoría General del derecho del trabajo. En Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo, *Relaciones laborales en el mundo. 43 Estudios en homenaje al profesor Luis Aparicio Valdez*. Lima: Grijley.
- Defourny, Jacques & Patrick Develtere (2000). *Origines et contours de l'économie sociale au nord et au sud*. Liège: Centre d'Économie Sociale Université de Liège.
- Dombois, Rainer & Ludger Pries (2000). *Relaciones laborales. Entre mercado y Estado. Sendas de transformación en América Latina*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Drucker, Peter F. (1994). *La sociedad poscapitalista*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Dunlop, John (1958). *Industrial Relations System*. Harvard: Harvard Business School Press Classics.
- Fernández Maldonado Mujica, Enrique (2008). *Derechos laborales y acuerdos de libre comercio. TLC con los Estados Unidos y Acuerdo de Asociación Unión Europea-Comunidad Andina*. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Ferrajoli, Luigi (2001). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.
- Ferro Delgado, Víctor (Coord.) (2001). *Balance de la reforma laboral peruana*. Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
- Figuroa, Adolfo, Teófilo Altamirano & Denis Sulmont (1990). *Exclusión social y desigualdad en el Perú*. Lima: Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo.
- Figuroa, Adolfo (2003). *La sociedad sigma. Una teoría del desarrollo económico*. Lima y México D. F.: Fondo Editorial PUCP – Fondo de Cultura Económica.
- Figuroa, Adolfo (2008). *Nuestro mundo social. Introducción a la ciencia económica*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Garavito, Cecilia (2005). Sindicatos y diálogo social. *Palestra, Portal de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú*. Recuperado de <<http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=176>>.
- Garza, Enrique De La (1999). *Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

- Gorz, André (1995). *Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. Crítica de la razón económica*. Madrid: Sistema.
- Kaufman, Bruce E. (2004). *The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas and the Lira*. Génova: International Labour Organization.
- Lévano, César & Luis Tejada (Comps.) (2006). *La utopía libertaria en el Perú. Obra completa*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Lipietz, Alain (1995). *El padre y la madre de la riqueza: trabajo y ecología*. Lima: Asociación Laboral para el Desarrollo ADEC-ATC.
- Lucerna, Héctor (2004). *Relaciones de trabajo en el nuevo siglo* (2a ed.). Caracas: Fondo Editorial Tropykos.
- Marx, Karl & Friedrich Engels (1989[1848]). *El manifiesto comunista*. México D.F.: Grijalbo
- Matos Mar, José (1984). *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Mejía Madrid, Renato (2008). El debate de la cláusula social. En Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, *Trabajo y seguridad social: 43 estudios jurídicos en homenaje a Luis Aparicio Valdez* (pp. 159-176). Lima: Grijley.
- Muñoz, Ismael (2006). La responsabilidad societal empresarial. En Vicent Commenne (Coord.), *Responsabilidad social y ambiental: el compromiso de los actores económicos*. París: Charles Léopold Mayer.
- Neves Mujica, Javier (2004). *Introducción al derecho laboral*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Organización Internacional del Trabajo (1997). *El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
- Organización Internacional del Trabajo (1999). *Trabajo decente. Memoria del director general*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
- Organización Internacional del Trabajo (2004). *Organizarse en pos de la justicia social. Informe global con arreglo al seguimiento de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
- Parodi, Jorge (1986). *Ser obrero es algo relativo: obreros, clasismo y política*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Pasco Cosmópolis, Mario (1985). Problemática de la negociación colectiva en el Perú. *Análisis Laboral, 100*.
- Pasco Cosmópolis, Mario (1996). La huelga en Perú. En Mario Pasco Cosmópolis (Coord.), *La Huelga en América Latina* (pp. 25-35). Lima: Aee.
- Payne, James (1965). *Labor and Politics in Peru. Political Bargaining*. Yale: Yale University Press.
- Piore, Michael J. & Sabel, Chales (1990). *La segunda ruptura industrial*. Madrid: Alianza.

- Polanyi, Karl (1992). *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Portella De Castro, María Silvia & Achin Wachendorfer (Coords.) (1995). *Sindicalismo latinoamericano entre la renovación y la resignación*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Portella De Castro, María Silvia & Achin Wachendorfer (Coords.) (1998). *Sindicalismo y globalización. La dolorosa inserción en un mundo incierto*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Portocarrero, Gonzalo & Rafael Tapia (1992). *Trabajadores, sindicalismo y política en el Perú de hoy*. Lima: Asociación Laboral para el Desarrollo ADEC-ATC.
- Razeto, Luis (1984). *Economía de solidaridad y mercado democrático*. Santiago de Chile: Programa de Estudio del Trabajo.
- Rosanvallon, Pierre (1988). *La question syndicale*. París: Calmann-Lévy.
- Sacco Barrios, Raúl (2008). *Crisis del sindicalismo en el Perú (1990): causas, consecuencias, desafíos y propuestas*. Tesis de maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Schumpeter, Joseph (1957). *Teoría del desenvolvimiento económico*. Lima: Fondo de Cultura Económica.
- Sennett, Richard (1998). *The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in The New Capitalism*. Nueva York: W. W Norton & Company.
- Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2008). *Trabajo y seguridad social. Estudios jurídicos en homenaje a Luis Aparicio Valdez*. Lima: Grijley.
- Soto, Hernando de (1987). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: Instituto Libertad y Democracia.
- Sulmont, Denis (1975). *El movimiento obrero en el Perú, 1900-1956*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sulmont, Denis (1977). *Historia del movimiento obrero peruano, 1890-1977*. Lima: Tarea.
- Sulmont, Denis (1980). *El movimiento obrero peruano, 1890-1980*. Reseña histórica. Lima: Tarea.
- Sulmont, Denis (1995). Sociología del trabajo y de la empresa en el Perú: un balance. *Debates en Sociología*, 19, 15-56.
- Sulmont, Denis (2000). La responsabilidad social empresarial en el Perú. En Sulmont Denis y Enrique Vásquez (Eds.), *Modernización empresarial en el Perú*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales – Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad del Pacífico – Instituto de Estudios Peruanos.
- Sulmont, Denis (2006). La concertación socio-laboral en el Perú. Trabajo presentado en la Maestría en Relaciones Laborales. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Sulmont, Denis (2008). *Introducción a Alain Touraine*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Sulmont, Denis & José Távara (1995). Economía y sociología de la empresa en el Perú. En Gonzalo Portocarrero y Marcel Valcárcel (Eds.), *El Perú frente al siglo XXI* (pp. 245-286). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Tapia, Rafael (1994). Pragmáticos y laboriosos: nuevas mentalidades de los trabajadores limeños. *Debates en Sociología*, 19, 119-138.
- Tokman, Víctor (2004). *Una voz en el camino: empleo y equidad en América Latina*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Touraine, Alain (1978). Las clases sociales en una sociedad dependiente. El caso latinoamericano. Movilidad social, relaciones de clases y nacionalismo en América Latina. Y conciencia obrera y desarrollo económico en América Latina. En Alain Touraine, *Las sociedades dependientes*. México D. F.: Siglo XXI.
- Touraine, Alain (1987). *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Santiago de Chile: Programa Regional del Empleo para América Latina y El Caribe.
- Touraine, Alain, Michel Wieviorka & Francois Dubet (1984). *Le mouvement ouvrier*. París: Fayard.
- Verdera, Francisco (2000). Cambios en el modelo de relaciones laborales en el Perú, 1970-1996. En Denis Sulmont y Enrique Vásquez (Eds.), *Modernización empresarial en el Perú*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales – Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad del Pacífico - Instituto de Estudios Peruanos.
- Vildoso, Carmen (1992). *Sindicalismo clasista: certezas e incertidumbres*. Lima: EDAPROSPO.
- Vildoso, Carmen (2004). *Dos años en el Ministerio de Trabajo. Agenda: micro y pequeña empresa*. Lima: Fundación Ford.
- Wortmann, Bjorn (2008). *La relación Estado-trabajadores y empleadores en el gobierno de Juan Velasco y el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global – Friedrich Ebert Stiftung.
- Yépez, Isabel & Jorge Bernedo (1986). *La sindicalización en el Perú*. Lima: Fundación Friedrich Ebert – Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Zapata, Francisco (1986). *El conflicto sindical en América latina*. México D. F.: El Colegio de México.
- Zavala Costa, Jaime (2002). La concertación laboral en el Perú. *Análisis Laboral*, 100, 17-18.

LA GRAVITACIÓN DEL EMPRESARIADO EN LA ERA NEOLIBERAL

Francisco Durand

A partir de 1990 han ocurrido en el Perú grandes cambios en todas las dimensiones del poder empresarial: mayor presencia en la estructura económica, desarrollo de nuevas formas de representación gremial, formas más avanzadas de acción política, y predominio de su discurso, al punto que muchas ideas pro sector privado forman hoy parte del sentido común. Todo ello lleva a afirmar que el hecho social fundamental de nuestro tiempo es el fortalecimiento del sector privado y la gran empresa. Se han constituido en un nuevo centro gravitacional en torno al cual gira todo el resto de la estructura social (militares y burócratas civiles, clase media profesional, parlamentarios y líderes partidarios, obreros y campesinos, pueblo en general). Es tan fuerte la atracción de este campo de fuerza que cada clase y grupo social, incluso los individuos, los pobres, o las comunidades nativas de las zonas más alejadas, se ven obligados a definir su posición frente a él, ya sea para apoyarlo u oponerse.

Dado el grado inusual de fortalecimiento empresarial, de predominio abrumador del sector privado y la gran corporación, del enorme poder e influencia que ostentan los gerentes y propietarios que la comandan, se cometería un error al minimizarlo o mal entenderlo como actor social. En esa tarea intentamos avanzar desde hace algún tiempo, buscando actualizar los datos y afinar las hipótesis. El autor ha publicado en varias oportunidades estudios sobre este proceso de cambio, y en esta ocasión conviene dar una versión breve y precisa del poder empresarial (Durand, 2003 y 2007).

1. GRANDES CAMBIOS A PARTIR DE 1990

Empecemos detallando cuándo, cómo y por qué ha aumentado exponencialmente el poder de la gran empresa en el Perú en todas sus dimensiones. Una primera idea clave es que los cambios ocurren en el momento en que se introduce un nuevo

paradigma económico, es decir, cuando se adopta como política permanente de Estado el neoliberalismo. Es así porque la última modificación de políticas públicas altera las reglas del juego económico, y el poder relativo de los agentes económicos, al obligar a los capitales nacionales a enfrentar la competencia extranjera en condiciones donde el Estado no brinda protecciones. Al mismo tiempo, se abre el mercado a la inversión del exterior y se abren los mercados externos a la inversión nacional. Para poder operar con mayor fuerza y libertad en el sector privado, también se dictan normas que permiten el avance de la propiedad privada sobre la estatal y la comunitaria, que entra en retroceso acelerado, y el reforzamiento del poder del capital sobre el trabajo de múltiples modos.

Este cambio drástico de políticas públicas es resultado de una decisión político-partidaria que se toma en una coyuntura crítica. A partir de 1990, en medio de una gran crisis recesiva e inflacionaria, durante el gobierno de Fujimori, que se compromete a superarla, se gestan las condiciones para una alteración permanente de la correlación de fuerzas sociales y políticas. En esa fecha fundacional, una poderosa alianza de fuerzas externas e internas logra introducir las políticas económicas neoliberales y sostenerlas en el largo plazo. La alianza neoliberal cuenta con un sólido apoyo de las empresas multinacionales (EMN), los organismos multilaterales, los países desarrollados, y las «comunidades epistémicas» de expertos, que recomiendan una «mejor política económica» (*sound policies*) a países subdesarrollados como el Perú. Al sólido y vasto apoyo externo se suman los aliados internos compuesto por neoliberales, los exportadores, el sector financiero, los grupos de poder económico (GPE) y los principales medios de comunicación de masas.

Bajo el influjo de la alianza externa-interna neoliberal, se logra imponer un nuevo paradigma cuyo principal resultado será consolidar una nueva estructura de intereses económicos. Es decir, la política y las políticas alteran los pesos relativos de las clases sociales al permitir que se fortalezcan más ciertos tipos de propiedades y de empresas, y se privilegie o facilite la acumulación de capital en determinados sectores económicos.

Anotemos que estamos hablando de varios cambios. Uno importante ocurre al surgir un nuevo poder empresarial como resultado de compras de empresas nacionales, nuevas inversiones directas (productivas) e indirectas (financieras). La fortalecida clase empresarial ahora opera con las fuerzas antes anotadas como sostenedores de esta política para que los gobiernos que se suceden sean autoritarios y democráticos, la mantengan o refuercen, y eviten que se modifique. Logran, en líneas generales, «ejercer» el poder directo sobre el Estado y aumentar exponencialmente sus niveles de influencia en la sociedad y el campo de las ideas.

Desarrollemos esta idea en mayor detalle para entender por qué es posible hablar de un centro gravitacional empresarial al punto que genera una sociedad mercado-céntrica. Una vez adquirido el poder estructural privado, ocurren acciones individuales y colectivas empresariales que se proyectan con gran eficacia operativa hacia la sociedad, los partidos, los poderes del Estado y los medios de comunicación de masas. El cambio es multidimensional y, por lo tanto, complejo. Primero, es político en tanto define quién consigue o impide hacer qué, cómo y por qué. Segundo, es ideológico en tanto se sostiene en la diseminación y aceptación de un discurso que justifica la necesidad de mantener la política económica, la primacía económica del sector privado y las protecciones legales y privilegios tributarios de las corporaciones. Finalmente, es también social debido a que se alteran las condiciones de consumo y de trabajo de toda la población y los pesos relativos de las demás clases sociales frente al empresariado.

Antes de profundizar en el análisis, y dar referencias concretas, cualitativas y cuantitativas del nuevo poder empresarial, es conveniente definir con mayor precisión qué entendemos por clase empresarial y cuáles son sus divisiones internas. Se trata de los principales accionistas y altos gerentes que comandan las grandes empresas. Al dirigir las, están en capacidad de contratar mano de obra libre y operar con tecnologías modernas para producir bienes y servicios destinados al mercado. Este grupo social decide, por tanto, los mayores niveles de inversión y empleo en una sociedad. Hasta aquí estamos identificando una cúpula de poder, pero es necesario también hacer otra distinción y entender que los grandes empresarios comparten el mercado con un amplio e individualmente menos poderoso sector de micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales, que se ubican en nichos menos competitivos y que son los principales proveedores de empleo. Dentro de ese conjunto existen otras diferencias como son la del origen del capital, el sector donde operan y los mercados a los que se proyectan. Estas empresas pueden ser de propiedad mayoritariamente extranjera o nacional y pueden establecerse como consorcios con poderes similares (*joint ventures*). Asimismo, pueden dedicarse principalmente a abastecer el mercado interno o el internacional con productos primarios (materias primas), secundarios (energía y manufacturas) o terciarios (comercio y servicios) y, en el caso de las nacionales, proyectarse directa o asociadamente hacia afuera instalando empresas en otros países¹.

¹ En ese sentido, distinguimos entre las exigencias de siempre del comercio exterior, y las nuevas de la «globalización» que implica instalarse fuera del país de origen de la empresa.

2. NUEVO MAPA DEL PODER Y PRINCIPALES ASIMETRÍAS

El Estado peruano distingue oficialmente la mediana y gran empresa de la pequeña y microempresa, según el número de trabajadores (hasta 50, más de 50) y el volumen de ventas brutas (menos de 850 UIT², 850 UIT o más)³.

Las cifras disponibles para comienzos del siglo XXI, en un momento en que se ha consolidado la nueva estructura de poder, ilustra la asimetría de tamaño con bastante claridad. Hacia el año 2005, de acuerdo con el cuadro 1, el sector de grande y mediana empresa tiene poco más de 10 000 empresas y solo representa el 1,65% del total de empresas del país. En su interior, predomina un núcleo reducido de gigantes corporativos cuyo poder y nombre vamos a identificar paso a paso en las páginas que siguen.

Otro rasgo asimétrico se revela en el aporte al empleo de la grande y mediana empresa que es de solo 8%, mientras que la pequeña y micro empresa representan el 60% (7% y 53%, respectivamente), siendo el resto público (8%), trabajadores del hogar (3%) y autoempleo (21%)⁴. Los datos de empleo muestran entonces que el trabajo bien remunerado es un privilegio del que solo gozan una minoría de trabajadores, y que mientras más pequeña sea la empresa, más empleo provee. Por lo tanto, la base de trabajadores tiene dificultades de operar como colectivo al estar disperso en miles de pequeñas unidades productivas ubicadas en distintos lugares del espacio nacional.

Cuadro 1
Empresas según el tamaño: 2005

Tipo de empresa	Número de empresas	Porcentaje
Microempresa ^{1/}	622 209	94,41
Pequeña empresa ^{2/}	25 938	3,94
Mediana y gran empresa ^{3/}	10 899	1,65
Total	659 046	100,00

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005)

Elaboración propia

1/ Ventas anuales brutas menores o iguales a 150 UIT.

2/ Aproximación. Ventas brutas anuales menores a iguales a 850 UIT.

3/ Aproximación. Ventas brutas anuales mayores a 850 UIT.

² Unidad impositiva tributaria.

³ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, indicadores usados en el informe de 2002 de Cecilia Lévano de Rossi.

⁴ Los datos de empleo son de 2002, aunque el porcentaje de grandes y medianas empresas es exactamente el mismo que se registra en 2005. Véase PROMPYME y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005, p. 8), en especial, el cuadro 1.

La gran empresa, núcleo central del poder económico, sin embargo, es un muy importante proveedor de bienes y servicios. Su relación con el conjunto, por lo tanto, se construye menos por el lado del trabajo y más por el lado del consumo. El hecho de que gran parte de la población tenga acceso a una variedad de productos a precios relativamente bajos, provenientes de distintas partes del mundo, genera progresivamente una identificación positiva del consumidor con la economía de mercado. Esta tendencia positiva entra en contradicción con la poca capacidad de generación de empleo, y por el hecho de operar con una política de bajos ingresos en la medida en que gran parte de la población tiene dificultades de acceso a estos bienes deseados por los consumidores.

Cuadro 2
Participación de las empresas en el valor de las exportaciones
según el tamaño: 2001

Tamaño	Total de empresas	Porcentaje	Valor exportado en el 2001 (US\$)	Porcentaje
Mediana y grande	2191	51,48	6698 millones	96,81
Pequeña	2065	48,52	221 millones	3,19

Fuente: Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa-PROMPYME (2004, p. 8)

Elaboración propia

^ Véase el cuadro 1.

Otros rasgos más específicos de la estructura empresarial han comenzado a delinearse con bastante claridad. A diferencia del pasado, cuando predominaba una política económica proteccionista-industrialista, que ponía el énfasis en la producción de manufacturas para el mercado interno, hoy la nueva estructura del poder económico corporativo gira en torno a intereses económicos ubicados en el sector financiero y el extractivo-exportador (principalmente minero y energético, en menor medida agrícola). En estos sectores, según lo revela el cuadro 2, existe un predominio evidente de la gran empresa, lo que sugiere una dificultad de las unidades empresariales menor para aprovechar las ventajas u oportunidades de la globalización económica. No solo son pequeñas, sino que están limitadas a operar en el ámbito nacional. Estamos entonces frente a una nueva estructura que podemos definir como corporativa financiero-exportadora.

A ello se añade otro rasgo, que la estructura empresarial está comandada por un pequeño grupo de grandes EMN y grupos de poder nacional. El *ranking* de la cúpula de empresas del cuadro 3 lo revela, e indica al mismo tiempo el empleo directo que generan.

Estas «empresas líderes» operan en un contexto que fortalece la posición del capital frente al trabajo, una de cuyas dimensiones se hace evidente al confirmar que provee escaso empleo directo. Ocurre así por dos razones: por ser intensivas en capital (aspecto muy pronunciado en el sector minero-energético, el nuevo eje productivo), y debido a que las leyes laborales permiten formas de contrato vía *services*, con lo cual el porcentaje de trabajadores ligado directamente a la empresa de modo formal es considerablemente reducido. Quien provee más empleo, según hemos visto líneas arriba, son las empresas más pequeñas, donde se pagan salarios más bajos y donde la capacidad negociadora del trabajo es más reducida por estar más dispersos y tener mayor dificultad de acción colectiva.

Cuadro 3
Ranking de las treinta primeras empresas ordenadas según el volumen de ventas al 2000. En millones de nuevos soles

Ranking	Empresa	Tipo de empresa	Ventas	Empleo
1	Telefónica	EMN	4 238 284	5325
2	Refinería La Pampilla	EMN	2 793 487	334
3	Southern Peru Copper Corporation	EMN	2 040 378	4432
4	Mínera Yanacocha	EMN/Grupo Benavides	1 639 300	n.d.
5	Occidental Petroleum Company	EMN	1 511 552	508
6	Perupetrol	EMN	1 463 540	n.d.
7	Alicorp	Grupo Romero	1 400 422	1565
8	Mobil Oil	EMN	1 146 355	176
9	Shell	EMN	1 025 615	134
10	Luz del Sur	EMN	940 446	651
11	San Ignacio de Morococha	Grupo Arias	931 065	1661
12	Cargill Perú	EMN	923 665	43
13	Backus	Grupo Bavaria Colombia	895 905	n.d.
14	Edelnor	EMN	890 361	772
15	Peruana de Combustibles	Nacional	854 594	53
16	Barrick	EMN	852 220	n.d.
17	Ferreyros	Grupo Ferreyros	682 462	1340
18	Molinos Mayo	EMN	661 333	1984
19	Gloria	Grupo Rodríguez	659 160	850
20	G y M	Grupo Graña y Montero	656 275	660
21	Química Suiza	EMN	630 731	980
22	Repsol YPF	EMN	620 923	24
23	Santa Isabel supermercados	EMN	590 187	2537
24	Nestlé	EMN	553 367	237
25	Procter & Gamble	EMN	541 768	353
26	Saga Falabella	Grupo Falabella (Chile)	535 511	n.d.
27	Refinería de Zinc-Cajamarca	EMN	524 867	544
28	Consortio Minero	EMN	513 246	85
29	Mínsur	Grupo Brescia	488 619	418
30	Cementos Lima	Familia Rizo-Patrón	485 050	345

Fuente: LaNota.com (2004)

El cuadro 3 también nos dice cuáles son las corporaciones que ocupan las posiciones de liderazgo en la economía según su nivel de ventas. Salta a la vista inmediatamente el peso de las EMN, aspecto interesante de remarcar en tanto el peso relativo del capital nacional ha tendido a disminuir en su forma estatal como privada y comunitaria. Esta tendencia puede ser ilustrada paso a paso recurriendo a diversas fuentes.

Para entender este proceso, recordemos la importancia que tienen en la conformación del nuevo poder empresarial los cambios de política pública. La concentración económica es resultado del modo tan liberal como ocurrió la privatización de empresas estatales y las normas de fusión, a lo que se añade la mayor competencia en el mercado peruano. Ese conjunto de factores explica la aparición en ciertas ramas de oligopolios y oligopsomios. La tendencia es importante económicamente en la medida en que la existencia de gigantes empresariales puede afectar los niveles de competencia al usar su poder de mercado para frenarla, y tomar decisiones que permite una generación de costos y recargos que afectan al consumidor.

Empecemos con referencias empíricas al proceso de privatización de empresas públicas. Quienes han aprovechado de diversa manera, según lo revela el cuadro 4, las políticas de privatización para comprar ventajosamente las grandes empresas estatales rematadas son mayormente los capitales extranjeros. Este resultado nos indica una debilidad o temor de las grandes empresas nacionales, principalmente los GPE, para aprovechar esta oportunidad histórica de hacerse de recursos en sectores claves de la economía a bajos precios y en condiciones oligopólicas o monopólicas⁵. En otros países latinoamericanos como Chile o México, quienes aprovecharon mejor el remate fueron los GPE locales.

Otro rasgo asimétrico que se detecta es que a medida que pasa el tiempo el número de grandes empresas que lideran los sectores o actividades en que se divide la economía disminuye en gran parte de los sectores económicos. Ocurre así porque se compran unas a otras, es decir, se fusionan, o quiebran y son adquiridas por otras más solventes, concentrándose de ese modo el poder económico⁶. En la década del fujimorismo, el Estado incentivó los procesos de fusión de empresas a partir de leyes que permitían reducir su contribución tributaria gracias a una deducción de los activos comprados. Entre 1994 y 1998, gracias a los incentivos de la ley 26283 y el decreto supremo 120-94-EF, ocurrieron 1558 casos de fusión (Chávez, 2007).

⁵ Para un análisis crítico de la privatización, véase Diez Canseco (2002).

⁶ Entendido como la capacidad de unas cuantas empresas de proveer más bienes y servicios.

Cuadro 4
Empresas estatales privatizadas a partir de 1990, en orden de importancia
y según el comprador. En millones de US dólares

	Empresa estatal	Monto pagado	por el comprador
1	Teléfono	2000,0	Teléfono de España (España)
2	Edegel	524,4	Consortio Generandes (EUA, Chile)
3	Banco Continental	255,7	Banco Bilbao Viscaya (España y Grupo Brescia)
4	Tintaya	277,1	Magma Copper/Global Magma (EUA)
5	Egenor	228,2	Dominoin Energy (EUA)
6	Petroperu-Lote X	202,0	Grupo Pérez Compaq (Argentina)
7	Petromar	200,0	Petrotech Int. (EUA)
8	Luz del Sur/Edegel	212,1	Ontario Quinta AVV (Canadá, Chile)
9	Sider Perú	186,2	Consortio Acero (EUA) y Wiese Inversiones
10	Refinería La Pampilla	180,5	Repsol (España), Exxon (EUA)
11	Edelnor	174,4	Enerisis (Chile)
12	Refinería Cajamarquilla	193,3	Cominco/Marubeni (Canadá, Japón)
13	Petroperu-Lote 8/8X	142,2	Pluspetrol (Grupo Graña Montero), Yukong (Corea)
14	Empresa Minera Mahr Tunel	127,7	Volcán Minera (R. Letts C. y Grupo Picasso, Perú)
15	Empresa Metal. La Oroya	123,0	Denco Group/Doe Run Resources (EUA)
16	Hierro Perú	120,0	Shogun (China)
17	Cementos Lima	103,2	Varios (familia Rizo-Patrón, Perú)
18	Empresa Minera Mahr Tunel	127,7	Volcán Minera (R. Letts C. y Grupo Picasso, Perú)
19	Empresa Metal. La Oroya 123	123,0	Denco Group/Doe Run Resources (EUA)
20	Cemento Yura	67,1	Grupo Rodríguez (Perú)
21	Empresa Minera Paragsha	61,8	Volcán y Glencore (Perú y Suiza)
22	Hoteles de Turistas	25,0	Varios nacionales (Grupo Picasso)
23	Interbank	51,0	International Financial Holding
24	Cahua	41,0	Grupo Galski (Perú)
25	Cementos Norte Pacasmayo	68,0	Varios (participación ciudadana)
26	Cerro Verde	35,4	Cyprus Climax (EUA)
27	Refinería de Ilo	66,6	Southern Peru Copper Corporation (EUA)
28	Cemento Sur	33,3	Grupo Rodríguez (Perú)
29	Aeroperú	25,4	Aeroméxico (México)
30	Electro Sur Medio	25,4	Consortio Hica (Argentina, Perú)
31	Antamina	20,0	Inmet Mining Co./ Río Algon (Canadá)
32	Radio Panamericana y TV	18,0	Grupo Delgado Parker (Perú)
33	Petrolube	18,0	Mobil Oil (EUA)
34	Pesca Perú (Mollendo, Chicama)	14,0	Grupo Galski (Perú)
35	Empresa de la Sal	14,4	Química del Pacífico (Perú)
36	Corpac-Playa Estacionamiento	12,0	Grupo Raffo (Perú)
37	Puerto Matarani	12,0	Grupo Romero (Perú)

Fuente: *The Peru Report* (1998, p. 1077)

Elaboración propia

Cuadro 5
Estructura de mercado
Posición de la primera y segunda empresa en tipos de actividad: 2006

Actividad	Primera empresa	Segunda empresa
Teléfono fija	Teléfono (94%)	Telmex (3%)
Transporte aéreo	Lan Peru (75%)	Tans (9%)
Grandes tiendas	Saga Falabella (48%)	Ripley (52%)
Teléfono móvil	Teléfono (54%)	América Móvil (31%)
Supermercados	Wong (61%)	Supermercados peruanos (28%)
Estaciones de servicios	PECSA (54%)	Corporación. Combustible y Derivados (13%)
Sistema provisional	Integra (29%)	Prima (28%)
Banca	BCP (35%)	BBVA Continental (20%)
Electricidad Distribución	Luz del Sur (33%)	Edelnor (32%)
Seguros	Rímac Intl. (34%)	Pacífico Peruano-Suiza (17%)
Electricidad Generación	Electroperu (29%)	Edegel (17%)
Cerveza	Backus (95%)	Ambev (5%)
Cigarrillos	BAT (94%)	
Jabón de lavar	Alicorp (84%)	
Lácteos	Gloria (68%)	Nestlé (13%)
Detergentes	Procter & Gamble (60%)	Alicorp (26%)
Gaseosas	J. R. Lindley (61%)	Ajeper (21%)
Aceites comestibles	Alicorp (60%)	
Fideos	Alicorp (46%)	Molitalia (20%)
Avícola	San Fernando (54%)	Chimú Agropecuaria (12%)
Harina de trigo	Alicorp (45%)	Molitalia (19%)
Soda cáustica	Quimpac (85%)	
Gas natural	Pluspetrol (73%)	Aguytia (12%)
Combustibles	Petroperu (51%)	Repsol (45%)
GLP	Pluspetrol (50%)	Repsol (19%)
Petróleo	Pluspetrol (37%)	Repsol (32%)
Cemento	Cementos Lima (40%)	Cemento Andino (21%)
Hierro y acero	Aceros Arequipa (38%)	Siderperú (25%)
Azúcar	Paramonga (21%)	Cartavio (19%)

Fuente: Chávez (2007)⁷
Elaboración propia

Esta concentración es más intensa en ciertas ramas o productos claves, y determina una tendencia general, tendencia que se ve matizada por lo que se observa en otros casos.

⁷ Véanse cuadros de concentración según sectores.

En la medida en que las fuerzas neoliberales y sus gobiernos alientan la inversión privada en sectores que antes estaban limitados o vedados al capital privado⁸, también ocurre la entrada de numerosas empresas (que compran empresas o inauguran plantas), encontrándose un fenómeno inicial de aumento en lugar de reducción de grandes unidades productivas. Este fenómeno se observa mejor en el agro y la minería, sectores donde las reformas nacionalistas del periodo velasquista (1968-1975) socializaron o estatizaron fuertemente el sector desplazando al capital privado, de aumento de unidades productivas, pero que no niega la tendencia general pues se trata de una situación excepcional que luego tiende a normalizarse. Una vez ocurrida la apertura de mercados, y al haberse generado una «ola de inversiones» privada atraída por los cambios de política económica y las oportunidades de ganancia, tiende a concentrarse la propiedad y la producción por compra o fusión. La tierra y las minas terminan entonces incorporándose a la tendencia hiperconcentradora que predomina en el resto de la estructura económica (Eguren, 2007).

El predominio de la gran empresa privada como agente económico reinante es otra de las características del nuevo periodo. El cambio es evidente en tanto que a partir de 1990 se termina de liquidar la «estructura de propiedad mixta» que se tenía a mediados de la década de 1970. Gracias a modificaciones legales, reflejo de la nueva correlación política de fuerzas, y la relativa aceptación del discurso neoliberal, se van comprando las empresas estatales. En paralelo se va limitando su ámbito de acción. El capítulo económico de la Constitución fujimorista y neoliberal de 1993 lo limita a un rol «subsidiario». A comienzos del siglo XXI, las pocas empresas estatales que quedan (sector eléctrico, petróleo, agua) se mantienen en situación precaria ante la negativa a potenciarlas y renovarlas por parte del Estado neoliberal, siempre a la espera de la oportunidad política para organizar otro remate empresarial.

También las comunidades campesinas y territorios de nacionalidades amazónicas se van abriendo a la inversión privada al autorizar el gobierno denuncios y explotaciones mineras y energéticas, licencias forestales y otros tipos de operaciones privadas. La privatización de cooperativas, otro aspecto de las políticas neoliberales, ha permitido también que el sector privado vuelva a controlar el sector azucarero de la costa norte. Tanto el gobierno de Fujimori como el de Toledo, y sobretodo el de García, todos de orientación neoliberal

⁸ A partir del gobierno de Velasco desciende la inversión privada, particularmente la extranjera, luego vienen las crisis recesivas e inflacionarias de 1978, 1983 y 1988-1990. Luego de este periodo de inversiones privadas muy bajas, ocurren de pronto una serie de olas de inversión a partir de 1994, con la privatización de las empresas de teléfonos, ola que continúa luego, principalmente, en la minería y la energía.

y comprometidos por la alianza neoliberal, han ido introduciendo cambios normativos para facilitar la privatización de tierras y la explotación de los recursos naturales en suelo comunitario o cooperativo. El caso de García es particularmente importante porque gracias a los decretos legislativos 1015 y 1073 emitidos en el 2008 (sin consulta, aprovechando las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (EUA)) se han flexibilizado los mecanismos de decisión para aceptar la inversión privada o vender tierras⁹.

Cabe anotar que esta «remoción de obstáculos» a la inversión privada se corresponde con el mayor interés de las corporaciones en las tierras y recursos comunitarios tradicionales. Hoy cuentan con nuevas tecnologías que les permiten operar en lugares antes alejados o poco accesibles. El interés de las grandes corporaciones ha ido también aumentando debido a la mayor demanda de nuevos productos en el mercado mundial y por la valorización de materias primas que ocurre a comienzos del siglo XXI.

A medida que se producen estas adquisiciones también va aumentando el peso relativo que tienen las EMN y los GPE de los países latinoamericanos en la estructura económica. Este desequilibrio entre lo nacional y el capital extranjero es particularmente intenso en la cúpula del poder económico. La desnacionalización se desata a partir de mediados de la década de 1990, cuando ocurre la primera gran ola de inversiones extranjeras, y continúa, según lo ilustra el cuadro 6, en el nuevo siglo, proceso visible en las cien más grandes empresas.

La desnacionalización económica y la concentración, según lo indica el cuadro 7, se hace particularmente visible en el sector financiero. Un hecho que ha acelerado la concentración financiera y el peso relativo del capital extranjero es la quiebra y debilitamiento de varios bancos nacionales durante la crisis financiera de 1998.

⁹ Sobre el debate político y las reacciones sociales frente a estos decretos privatistas, véase *La República* del 20 de agosto de 2008. En realidad, desde 1990 gran parte de la legislación neoliberal ha sido dictada «desde arriba» por el Ejecutivo, en directa conexión con las corporaciones, los gremios y los estudios de abogados especializados en asesorar a la gran empresa, sea por medio de golpes de Estado (1992-1993) o por poderes extraordinarios otorgados por el Congreso.

Cuadro 6
Las cien mayores empresas en ventas según la propiedad: Perú 1987-2001

	1987		1994		2001	
	Porcentaje en ventas		Porcentaje en ventas		Porcentaje en ventas	
Estatales	28	48,5	14	33,4	12	20,6
EMN	25	20,6	30	33,2	41	48,5
Nacionales	43	28,9	46	46,0	30	23,1
Otras	4	2,1	10	4,6	17	7,7

Fuente: Shimizu (2004, p. 26)
Elaboración propia

Cuadro 7
Ranking de bancos según porcentaje de depósitos y principales accionistas: 1995 y 2004

1995			2004		
Banco	%	Depósitos y accionistas	Banco	%	Depósitos y accionistas
Crédito	29	Grupo Romero y otros	Crédito	35	Grupo Romero y otros
Wiese	21	Grupo Wiese	Continental	24	BBVA, España, y Brescia
Continental	15	BBVA, Grupo Brescia	Wiese Sudameris	16	Banque Sudameris, Francia
Interbank	8	Rodríguez-Pastor	Interbank	9	Corp Group, Chile
Latino	5	Grupo Picasso	Citibank	3	Citicorp, EUA
Lima	4	Grupo Olaechea	Sudamericano	3	Nova Scotia, Canadá
Del Sur	3	Grupo Luksic y otros Perú	Interamericano	3	Grupo Fierro, España
Mercantil	2	Grupo Majluf y Lanata Piaggio	Financiero	2	Grupo Pichincha, Ecuador
Regional N.	2	Grupo Wiese	Boston	2	Fleet Boston, EUA
Nuevo Mundo	2	Grupo Levy	Trabajo	1	Grupo Cummins, Chile
Santander	1	España	Comercio	1	
Probank	1	Grupo Galski	Mi Banco	1	Acción Comun., Perú
Banex	1	Tizón	Standard Chart	1	Standard Chart, Reino Unido

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración propia

Aunque no hay metodologías ni datos cuantitativos que permitan una evaluación más precisa, es posible afirmar que el peso relativo de los GPE nacional en el sector privado tiende a disminuir al ser comprados o quebrados

o simplemente desplazados de la cúpula del poder¹⁰. Esta tendencia debe ser relativizada considerando que también han emergido nuevos GPE, argumento que ha esgrimido Jaime de Althaus (2007). No obstante, al considerar tanto las sumas como las restas, los casos de éxito y fracaso, la imagen que se dibuja es de debilitamiento progresivo de los GPE nacionales frente a la competencia de los GPE de países vecinos y las EMN de los países desarrollados¹¹. Veamos el detalle.

Desde 1990, a principios del siglo XXI, la suerte corrida por los GPE peruanos es la siguiente. El grupo Lanata Piaggio fue comprado por el grupo Bentín, quien a su vez fue adquirido por un grupo colombiano, Santamaría, para terminar siendo vendido en bloque a la EMN sudafricana SAB Miller. El grupo harinero Nicolini fue absorbido por el grupo Romero por deudas que tenían en su banco, el Crédito. El grupo emergente pesquero Galski fue vendido al grupo Brescia. El grupo de telecomunicaciones Delgado Parker está profundamente debilitado. El grupo emergente arequipeño Lucioni quebró junto con su banco, el Orión. Tres importante GPE financieros (Levi, Picasso y Wiese) quebraron en la crisis de 1998 y poco antes ocurrió la venta del Banco de Lima, propiedad del grupo vitivinícola Olaechea.

Existen también varios viejos GPE que han sido desplazados a posiciones menores. Es el caso del grupo importador Ferreyros, del grupo textilero Raffo, del constructor Piazza, del grupo minero Arias y del comercial importador sino-peruano Wu. Junto con estas restas o disminuciones de poder económico, hay que considerar las sumas o concentraciones. Destacan tres grandes GPE viejos, caso de Brescia (hoteles, banca y seguros, industria, minería, pesca), Romero (banca, seguros y fondos de pensiones; combustibles, puertos y agroindustria), y Benavides de la Quintana (minería e ingeniería).

A este grupo exclusivo hay que añadir otros ubicados más abajo en el *ranking*: el grupo constructor Graña y Montero, que ha logrado mantener cierta importancia; el grupo lechero y cementero de los hermanos Rodríguez; a los que se suman dos grupos emergentes, el de los hermanos Flores en textiles y confecciones y el de Añaños en bebidas gaseosas y cerveza. Probablemente, habría que incluir al grupo de origen pucallpino de los Dyer, fuerte en pesca y agroindustria. Todos estos grupos se han globalizado, abriendo empresas en el exterior, principalmente en países latinoamericanos. Sin embargo, a pesar de los buenos presagios, y las señales de éxito en la globalización que surgen de grupos

¹⁰ El gerente del principal grupo tabacalero afirmó en una entrevista realizada por el autor que las grandes EMN «o te quiebran o te compran». Al poco tiempo, el grupo fue adquirido por la transnacional BAT. Entrevista personal con el autor realizada por Francisco Durand. Enero de 2001. Lima (Perú).

¹¹ Shimuzu (2004) argumenta que se puede aprender tanto de los casos de éxito como de fracaso.

viejos y nuevos, lo cierto es que el balance de conjunto sugiere un progresivo debilitamiento de los GPE en relación con los extranjeros. Su proyección hacia los mercados mundiales es modesta y limitada al ámbito latinoamericano y el número de caídos o desplazados considerable. Un hecho reciente, ocurrido en 2008, que inclina aún más la balanza hacia el lado negativo, es la venta del grupo emergente sino-peruano Wong al grupo chileno Consucode.

3. CONCLUSIONES

El balance de lo sucedido en la clase empresarial a partir de la introducción del neoliberalismo como política de Estado, paradigma sostenido con éxito por una alianza de fuerzas internas y externas que favorecen a la gran empresa privada como principal agente del mercado, se ha logrado centrándose en el poder estructural. La manera como el gran empresariado monopólico financiero-exportador traduce en términos políticos su manejo privilegiado y concentrado de recursos económicos, y el poder discursivo que justifica el nuevo orden, se trataron rápidamente con el objeto de resaltar la importancia de un análisis tridimensional, pero sin llegar a tener la oportunidad de desarrollar las hipótesis e ilustrarlas empíricamente.

Tampoco ha habido oportunidad de estudiar las asimetrías en el espacio regional. Basta decir que es posible imaginar que son aún mayores que a nivel nacional. En las provincias, particularmente en el campo, la gran empresa se constituye más pronunciadamente en un pez gigante en una pecera chica al instalarse sus gigantescos enclaves extractivo-exportadores con sus redes de transporte y distribución que los conectan a las ciudades y los puertos.

A pesar de estas limitaciones (y algunas omisiones, como es la aparición de nuevos segmentos de clase media), el ensayo demuestra que ha ocurrido un enorme y acelerado grado de concentración del poder económico, al punto que el gran empresariado se convierte en el centro gravitacional de la sociedad peruana del siglo XXI. La conclusión más importante a que se llega al analizar el poder de esta cúpula, las asimetrías al interior de la clase empresarial amplia, y entre las clases y grupos sociales que constituyen las amplias masas trabajadoras o autoempleadas y los grandes consumidores, son principalmente tres.

Primero, existe un núcleo pequeño de corporaciones mayormente extranjero, con tendencia permanente a la concentración económica en la capacidad de provisión de bienes y servicios, que es comandado por gerentes y propietarios. Segundo, que al constituirse este nuevo poder concentrado se han generado al mismo tiempo las condiciones económico y jurídico-políticas para generar el efecto opuesto en la base, es decir, para debilitar, desorganizar y dispersar el poder de los pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores y de los consumidores.

La alianza neoliberal ha provocado la conformación de un nuevo «triángulo sin base» en la sociedad peruana actual, estructura que genera oportunidades para algunos y obstáculos al desarrollo para muchos, y una acentuación más que una atenuación de los conflictos sociales. Tercero, y para terminar, que en la medida que los niveles de conflicto social vinculados a la gran empresa han ido en aumento desde 2000, y que los grupos sociales movilizados se enfrentan al Estado y a la gran empresa (en la medida que el primero está fuertemente influido por el segundo), y que surgen críticas al modelo neoliberal privatista, y defensas de la propiedad comunitaria, es posible afirmar tentativamente que aunque ha aumentado el poder estructural y directo del gran empresariado, ocurre una disminución de su poder discursivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Althaus, Jaime de (2007). *La revolución capitalista en el Perú*. Lima: Fondo de Cultura Económica.
- Chávez, Jorge (2007). Políticas de competencia en el Perú: balance y qué podemos aprender de Estados Unidos y Europa. Conferencia pronunciada en el *Seminario Internacional Avanzado. Regulación y Defensa de la Competencia ante Cártels y Fusiones. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de Estados Unidos y Europa?* Maximixe School of Government, 22 y 23 de noviembre, Lima.
- Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa (Prompyme) (2004). *Documento de trabajo sobre los principales resultados hallados en la encuesta a los empresarios de Gamarra*. Lima: PROMPYME – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Diez Canseco, Javier (2002). *Balance de la inversión privada y la privatización*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República.
- Durand, Francisco (2003). *Riqueza económica y pobreza política*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Durand, Francisco (2007). *La mano invisible en el Estado*. Lima: DESCO – Fundación Ebert.
- Eguren, Fernando (2007). La propiedad de la tierra nuevamente se concentra. *La Revista Agraria*, 88, 10-12.
- LaNota.com (2004). Perú. *Ranking de las treinta primeras empresas ordenadas según el volumen de ventasal 2000*. Recuperado de <http://lanota.com/cifras/pe/real>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2002). *Informe de Cecilia Lévano de Rossi*. Lima: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005). *Estadísticas de la pequeña empresa*. Lima: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Shimizu, Tatsuya (2004). *Family Business in Peru: Survival and Expansion Under the Liberalization* (Discussion Paper 7 del Institute of Developing Economies). Tokio: Japan External Trade Organization.

The Peru Report (1998). *Peru: The Top 5,400 Companies*. Lima: The Peru Report – Comisión de Promoción de la Inversión Privada.

LA RECOMPOSICIÓN DE LAS CLASES MEDIAS Y EL VOTO EN EL PERÚ

Carmen Rosa Balbi Scarneo y Carlos Arámbulo Quiroz

1. INTRODUCCIÓN

El Perú se caracteriza por ser un país heterogéneo en términos sociales, culturales, políticos y económicos, en el que se presenta el paso de una sociedad de estatus (altamente estructurada) a una sociedad de clases en proceso trunco. En este sentido, las clases no solo se miden por los ingresos económicos, el poder adquisitivo y el acceso a una educación de calidad, sino también a partir de un conjunto de criterios que obedecen estrictamente a las fracturas étnico-raciales que se anclan en la historia en las que el referente lingüístico resulta determinante¹. Estos atributos son, quizá, los referentes medulares que evidencian las brechas reproducidas socialmente que se van modificando y transformando en el tiempo, y que han sido ostensibles en los últimos treinta años.

Para acercarse a este complejo proceso el presente artículo ha elegido, por razones prácticas, una definición operacional de clase media basada en los siguientes indicadores: ocupación, posición, ingresos, educación, residencia; y tendrá como tema de fondo identificar y analizar, en Lima Metropolitana, los cambios que se han producido en la composición de la clase media a lo largo de las últimas décadas, centralmente desde el gobierno velasquista.

Queremos mostrar el derrotero histórico de las clase media; cómo se produce en el lapso mencionado su recomposición, la manera en que dejará de estar anclada exclusivamente en la empleocracia pública y privada, y el modo en que será seriamente afectada por las políticas de liberalización de la economía iniciadas en el Perú desde fines de la década de los ochenta. Producto de la decadencia de la clase media tradicional, se producirá una suerte de *revival* conservador en busca de reafirmar valores aristocratizantes (vivienda, apellido, jerarquías sociales,

¹ Callirgos (1995) ha demostrado cómo la fuente de discriminación en la escuela es la mofa de un castellano «motoso» mal hablado, con dejo andino.

etcétera) como fuente de identidad y prestigio que denotan la prevalencia de determinados estilos y patrones de consumo como forma de diferenciación y a la vez de exclusión social.

Asimismo, queremos mostrar cómo a partir de las migraciones y de aquello que gruesamente se dio en llamar «informalidad»², se ha producido un proceso de movilidad social ascendente, como señalara Rochabrún³. Dicha movilidad social se expresa en la emergencia de nuevos sectores medios (comerciantes y empresarios) que paulatinamente logran la apropiación de la ciudad y la capitalización de sus recursos⁴, aunque con escaso acceso a bienes de capital social. Estos sectores están ubicados geográficamente en la zona conurbana de Lima, fruto de la expansión demográfica y territorial de la ciudad, iniciada con las invasiones de tierra para la construcción de vivienda.

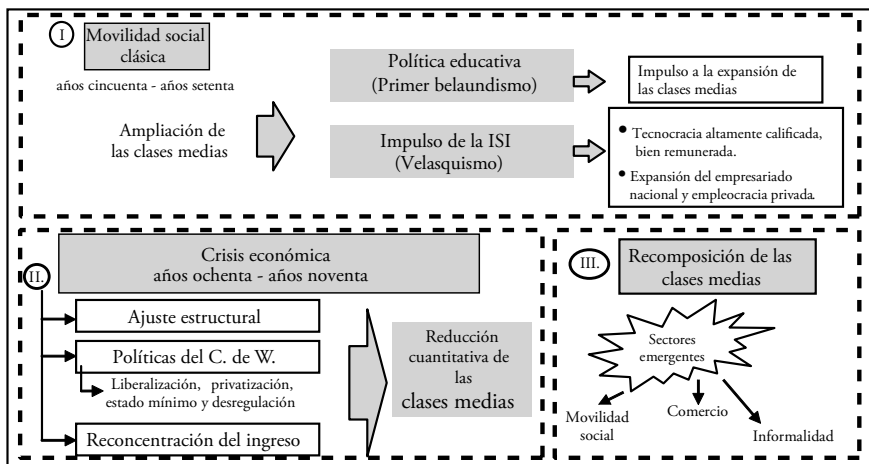
El presente estudio ha sido estructurado en tres partes. En primer lugar, se estudiarán las transformaciones, cambios y continuidades de la clase media peruana entre las décadas del cincuenta y setenta, y su relación con la movilidad social clásica entendida a partir del acceso a la educación, en tanto políticas educativas —en el primer *beaundismo*— e impulso de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), bajo el *velasquismo*. En segundo lugar, el análisis girará en torno al impacto de las políticas económicas de fines de los ochenta y noventa, al amparo de las políticas del Consenso de Washington (Stiglitz, 2003) y que afectarán seriamente a las clases medias social y económicamente. En tercer lugar, nos acercaremos a la idea de la recomposición de la clase media con la aparición de los sectores emergentes y las nuevas transformaciones que le suceden, donde quizá la más relevante sea la expansión de la informalidad. La estructura del trabajo se presenta en el flujo 1.

² Según definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no es otra cosa más que la autogeneración de empleo, ante las dificultades y/o imposibilidad de insertarse en el aparato productivo.

³ Aportes alcanzados por el profesor Guillermo Rochabrún durante el seminario interno «Cambio social y desarrollo» realizado en mayo de 2008 por el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

⁴ Pujantes nuevos sectores emergen en el contexto de una Lima «cholificada» por el proceso de urbanización y de migración. Véase Balbi (Ed.) (1997).

Flujo 1
Recomposición de las clases medias



Elaboración propia

2. LA CLASE MEDIA Y LA MOVILIDAD SOCIAL CLÁSICA (1950-1970)

El periodo de consolidación de la clase media se llevó a cabo entre los años cincuenta y setenta. Este periodo se caracteriza por un conjunto de cambios sociales, demográficos, políticos y económicos que proveen significativas pistas de interpretación para nuestro tema de análisis.

Cuadro 1
Crecimiento de la matrícula universitaria por especialidad
En porcentajes

Año	Total	Ciencias	Educación	Humanidades	Ingeniería y Arquitectura	Medicina
1961	34,93	8,70	21,90	39,40	18,80	11,60
1965	64,54	5,20	36,80	34,80	16,30	6,90
1968	93,90	5,60	34,20	36,90	17,50	6,30
1969	96,40	4,60	23,60	47,20	17,50	7,10

Fuente: Borrani (1976). Extraído del Consejo Nacional de la Universidad Peruana.

La sociedad peruana experimentó un conjunto de transformaciones y cambios importantes debido a las migraciones, la expansión del acceso a la educación y la diferenciación ocupacional en los mercados de trabajo. Los estudios que han dado cuenta de esta complejidad han hecho referencia a la emergencia de nuevos actores

sociales y a las modificaciones que han transformado el rostro social del país, reconfigurado las formas de relación social y generado nuevos espacios urbanos⁵.

2.1 La movilidad social desde y para la clase media

El complejo proceso de modernización por el que pasó el Perú a mediados del siglo XX brinda pistas para explicar la dinámica de la movilidad social⁶ y para determinar si tuvo un carácter individual o grupal, así como sus posibles impactos sobre la sociedad.

Uno de los factores concomitantes de la modernización fue el acceso masivo a la educación, el cual se convirtió en un factor decisivo en la conformación y constitución de las clases medias. Es a partir de la democratización y masificación de la educación que los sectores populares ingresan a un camino de profesionalización, y llegan a formar, aunque con débil influencia frente al conjunto de la sociedad, una clase media en el Perú. La profesionalización fue un proyecto de vida y de movilidad social que se vio reflejada en el explosivo acceso de jóvenes estudiantes a las universidades a mediados de los sesenta.

⁵ En su ensayo «Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú», Quijano (1980) descubre y analiza —a partir del fenómeno migratorio— los rasgos constitutivos de dicho proceso. Si bien la emergencia de estos nuevos actores sociales es producto del proceso migratorio, afirmarán su presencia en las siguientes décadas. Uno de los tantos resultados del proceso será el de los empresarios emergentes (Valdivia & Adams, 1991).

Asimismo, Quijano señala que la palabra «cholo» inicialmente sirvió para designar al grupo de mestizos con rasgos predominantemente indios. Durante el periodo republicano, fue el término usado para referirse a los mestizos de condición social no privilegiada, o de indios que mediante el comercio y el manejo del castellano se abrían paso en las ciudades. Él destaca que, como consecuencia de la superposición de dos culturas distintas en un sistema de dominación social, se desencadena un proceso de conflicto y de interinfluencia cultural que produce, para esos años, la aculturación de vastas capas de la población aborígen, por un lado, y la modificación paulatina de las culturas globales originales, por otro, hasta convertir a la cultura occidental en una versión criolla, ampliamente modificada por la penetración de gran cantidad de elementos de la cultura incaica, y a esta igualmente en una «cultura indígena», influida notablemente por la penetración de elementos de la cultura occidental que proveerán al migrante de elementos decisivos para su ubicación en la ciudad.

⁶ Sorokin (1961) señala que la movilidad social es toda transición de un individuo, objeto o valor social que haya sido creada o modificada por la actividad humana de una posición social a otra. Al respecto, hay dos tipos principales de movilidad social que son de carácter horizontal y vertical. Con la expresión de movilidad social horizontal o circulación se indica la transición de un individuo u objeto social, de un grupo social a otro, situado al mismo nivel. Mientras que por movilidad social vertical se entienden las relaciones comprendidas en una transición del individuo u objeto social, de una capa social a otra. De acuerdo con la dirección en que se realiza esta transición hay dos tipos de movilidad social vertical: ascendente y descendente, es decir, aquella que da cuenta del mejoramiento y empeoramiento social. Dicho concepto nos brinda la posibilidad de entender la lógica de la movilidad social, las dinámicas movilizadoras de los grupos sociales y también de las clases que conforman el entramado social.

Hasta finales de la década del cincuenta sería impropio hablar de una democratización de la educación. Sin embargo, en los siguientes veinte años se produce un incremento exponencial a nivel de oferta y demanda de los estudios superiores, en general, y de los estudios universitarios, en particular. Aumenta el número de universidades y la población estudiantil. De solo 11 existentes en 1961, en 1969 se pasa a 31 universidades. El cuadro 1 nos muestra información desagregada por universidades del sector público y privado.

Cuadro 2
Universidades en el Perú (1950-1969)

Años	Universidades públicas	Universidades privadas	Total
1961	10	1	11
1969	20	11	31

Fuente: Borrani (1976) Elaboración propia

La creación de universidades por parte del Estado, y la autorización que otorgó a entidades privadas para que pongan en funcionamiento otras, sugiere que la educación ocupaba un papel central dentro de las políticas públicas por su función de motor para un proyecto movilizador, entre otras razones, entre las que figura también el crecimiento de la población. Esta ampliación de la educación universitaria benefició a las clases medias tradicionales y se constituyó en un nuevo e importante criterio de clase y de la misma movilidad social. El incremento significativo del número de universidades evidencia, por parte del Estado, la importancia de la educación superior en tanto servicio brindado, pero a la vez se encuentra cargado de componentes simbólicos que legitimaban la educación como una inversión, más que como un costo en la canasta presupuestal de la unidad familiar.

Cuadro 3
Alumnos en universidades públicas y privadas (1940-1995)

Año	Pública	Privada	Total
1940	2324	1046	3370
1945	7861	1108	8969
1950	13 154	1515	14 669
1955	12 490	1722	14 212
1960	27 040	3207	30 247
1965	54 170	10 506	64 676
1970	81 486	27 744	109 590

Fuente: Contreras y Cueto (2004). Extraído del *Anuario estadístico del Perú*.

El cuadro 3, indica que en un lapso de veinte años (1950-1970) el acceso de los estudiantes a las universidades públicas —en las que se encuentra el mayor número de estudiantes— y privadas creció aproximadamente 7,5 veces respecto al número inicial. Al respecto, Contreras y Cueto (2004) señalan que «dicho incremento fue una respuesta al crecimiento demográfico, a las migraciones del campo a la ciudad, al deseo de progreso de muchos sectores sociales que veían a la educación como la herramienta para lograrlo y a la preocupación política por fomentar la educación en todos sus niveles» (Contreras & Cueto, 2004, p. 349). Este aumento explosivo de estudiantes en las universidades es un indicador de la importancia que la educación tiene en el proyecto de movilidad social, pues la profesionalización posibilita acceder a puestos en el aparato público y el sector privado.

En el cuadro 4, se observa la distribución de la población económicamente activa (PEA) en las categorías de empleados, obreros y trabajadores domésticos para el año 1961 por sectores público y privado. Es importante señalar que en ese año el sector privado concentra al 85,16% de la PEA, mientras que un 13,45% corresponde a los trabajadores del sector público.

Cuadro 4
Perú 1961: empleados, obreros y trabajadores domésticos,
estatales y particulares en la República

Empleados, obreros y trabajadores domésticos	Estatales		Particulares			No especificado	Total
	Empleados	Obreros	Empleados	Obreros	Trabajador doméstico	Empleados	
Hombre	86 708	69 419	147 976	815 214	31 856	9895	1 161 068
Mujer	40 048	5928	48 445	93 124	143 340	11 050	341 935
Tótal	126 756	75 347	196 421	908 338	175 196	20 945	1 503 003
Porcentaje representativo	13,45		85,16			1,39	100

Fuente: *Sexto Censo Nacional de Población*, 1961
Elaboración propia

Los datos del cuadro 4 evidencian la existencia de una diferenciación de carácter cuantitativo y cualitativo entre la PEA que integra ambos sectores. En primer lugar, hay una diferencia notoria en términos de concentración de trabajadores en el sector privado respecto al público, siendo aproximadamente la relación de seis a uno. En segundo lugar, en el sector público se observa un mayor número de personal calificado o profesionalizado en relación con el personal operativo, mientras que en el sector privado ocurre lo contrario.

A la luz del cuadro 4, podemos plantear como hipótesis que tanto las organizaciones públicas como privadas de inicios de los sesenta estaban compuestas por un número significativo de clase media que se evidencia, centralmente, por el nivel de especialización que exigía ser empleado.

2.2 Las clases medias y el primer belaundismo

Las décadas de los años cincuenta y sesenta fueron los periodos en los que la clase media se fue modificando, ampliando y diversificando a partir de las oportunidades en el mercado laboral y el acceso al aparato público. Por otro lado, empezaron a constituirse los partidos políticos que representaban los intereses de la clase media como la Democracia Cristiana, el Partido Popular Cristiano y el Social Progresismo.

Como coincide Díaz-Albertini (2001), en términos políticos, cobra fuerza la noción que el conocimiento profesional y técnico era vehículo principal de la modernización y el desarrollo. Hacia mediados de los años cincuenta se fundan entonces partidos netamente de «clases medias» (Acción Popular y Democracia Cristiana) que comparten un *ethos* de cambio y reforma basado en la educación, la industrialización y la participación activa del Estado en la sociedad y el mercado.

Sin embargo, dichos partidos políticos carecieron de la capacidad de plasmar un proyecto político consistente que rompiera con el orden oligárquico en la búsqueda del cambio social.

La indefinición política en materia de alianzas del primer belaundismo, y su débil accionar en materias que requerían soluciones radicales, condujo a desaprovechar la oportunidad de transformar el sistema político, económico y social desde la democracia representativa vía el sistema de partidos.

2.3 Las clases medias y el velasquismo

Durante el velasquismo, se le dará un nuevo impulso a la ISI⁷ al amparo de una suerte de capitalismo de Estado que, como señalara Fitzgerald, hará crecer de manera significativa al sector público y generará, por primera vez en la historia, una tecnoburocracia altamente calificada que se ubicó en el importante número de empresas públicas que el gobierno declaró de carácter estratégico (petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería, pesca).

El clima de reformas sociales liderada por el gobierno velasquista a fines de los sesenta, que puso en marcha dinámicas económicas y políticas de carácter

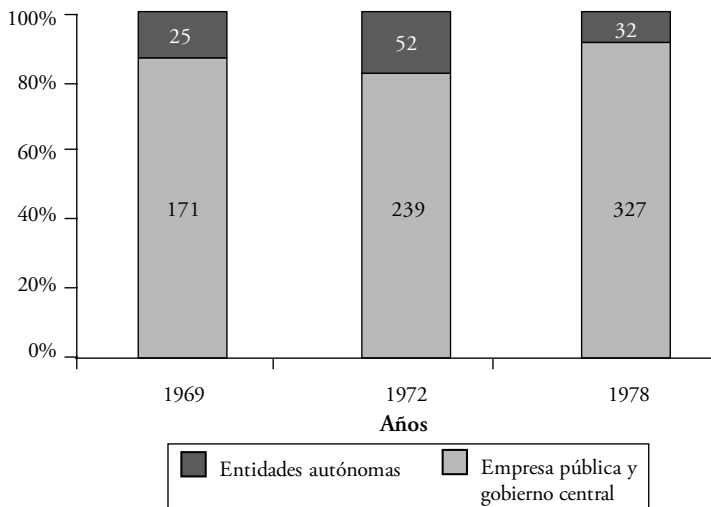
⁷ La manufactura entre 1969 y 1975 creció en 8% anual (Iguíñiz, 1986).

antioligárquico, y la influencia creciente del marxismo en las universidades será vital para que intelectuales y universitarios cuestionen las grandes desigualdades sociales, económicas y étnicas que atravesaba el país. Cueto y Contreras señalan:

[...] desde fines de los años sesenta y durante la década siguiente, nuevas generaciones de estudiantes universitarios y de intelectuales empezaron a hacerse sentir en el país. Su emergencia alteró la expectativa tradicional que se tenía sobre los universitarios [...]. Sin embargo, dos serán los factores determinantes que son el clima de reformas sociales liderados por el velasquismo y la influencia del marxismo en las universidades. Influenciados por el marxismo, impactados por las grandes desigualdades sociales y étnicas que atravesaban el país e inspirados en la revolución cubana y la protesta estudiantil de mayo del 68 en París; [...] retaron las costumbres establecidas y buscaron nuevos caminos para el desarrollo del país (Contreras & Cueto, 2004, 338).

En el gráfico 1, podemos visualizar el paulatino y lento crecimiento del sector privado y del sector público. La inserción de trabajadores en el aparato público se incrementa en casi un 90% durante todo el periodo del gobierno militar. Por otro lado, el número de trabajadores en el sector privado se duplica en la primera fase del gobierno militar hasta 1972. También hay que señalar que los ingresos de los sueldos y salarios se incrementaron de manera sustantiva, como lo muestra la información correspondiente; cabe señalar que en este periodo la informalidad era un 10% de la PEA.

Gráfico 1
Evolución del empleo público (1969-1978)
En miles de trabajadores



Hay que destacar, sin embargo, que las clases medias no se identificaron con el proyecto velasquista ni con las reformas del gobierno militar realizadas «desde arriba». Su distancia con la reforma agraria —en mucho por razones familiares—, la fuerte ingerencia del rol del Estado en el control de las divisas y aquello que se denominó el «igualamiento de los cholos», —que no era otra cosa que una revolución en el campo de la ciudadanía— harán de esta clase media un enemigo declarado del velasquismo, hostil al acelerado proceso de reformas que se vivía en el país.

El desmontaje de las reformas emprendidas por el general Morales Bermúdez (que reemplazara a Velasco) y la convocatoria a una asamblea constituyente junto con la realización de elecciones generales de 1980 no revirtió la animadversión de la clase media hacia el velasquismo.

2.4 Crisis económica (1980-1990): la debacle de la clase media

Los fines de los setenta y la década de los ochenta presenciaron el fracaso de la ISI en el contexto de una transición democrática y la llamada «política de ajuste» orientada por el Fondo Monetario Internacional, diseñadas para corregir distorsiones y recuperar el equilibrio macroeconómico (reservas, estabilización de la inflación, equilibrio de precios relativos). Así, el segundo belaundismo inició tanto el desmantelamiento del Estado en el marco de una filosofía neoliberal como una drástica apertura comercial que sumió al país en una profunda recesión, acompañada de una fuerte caída de los ingresos, pérdida de empleo y quiebras a nivel nacional. A ello se sumará entre 1985 y 1990 el fracaso del llamado «modelo heterodoxo» del primer gobierno de Alan García que terminó con una hiperinflación sostenida que fue incrementándose en los últimos dos años de su gobierno (Dornbusch, 1992). Los efectos de esta hiperinflación se traducirán en la agudización de una caída brutal de los sueldos y los salarios, al mismo tiempo que en una reconcentración de la renta como lo demuestra con claridad —a nivel macroeconómico— el cuadro 5.

Cuadro 5

Distribución del ingreso nacional (1972-1988): estructura porcentual

Dimensiones	1970	1975	1980	1985	1988
Remuneraciones	46,7	46,3	38,6	30,8	28,0
Ingreso de independientes	27,4	23,4	24,4	24,4	24,1
Utilidades, renta predial e intereses	25,9	26,3	37,0	37,0	47,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INEI (1989)
Elaboración propia

Cuadro 6
Perú: tendencia en el ingreso real laboral (1985 = 100)

Años	Salarios reales			Ingreso de autoempleo
	Privado	Público	Mínimo	
1970	178,2	nd	219,4	nd
1971	193	nd	218,7	nd
1972	207,7	nd	231	nd
1973	218,0	nd	225,8	nd
1974	212,4	nd	230	nd
1975	201,6	nd	213,6	nd
1976	185,6	nd	196,1	nd
1977	160,2	nd	173,2	nd
1978	139,4	nd	132	nd
1979	133,7	nd	147,7	nd
1980	141,8	nd	182,8	nd
1981	141,4	215,6	155,9	nd
1982	148,7	197,8	143,3	nd
1983	125,2	143,0	145,8	nd
1984	111,5	125,6	116,2	nd
1985	100	100	100	100
1986	130,5	101,8	103,0	115,3
1987	139,6	124,8	113,9	126,6
1988	91,0	117,3	84,0	116,2
1989	61,2	60,5	44,6	79,5
1990	43,8	32,9	39,5	48,7
1991	49,3	16,5	27,4	32,2
1992	49,4	20,6	29,7	25,3

Fuente: Figueroa (1996). Los datos de los salarios reales fueron tomados del INEI (1993, Vol. I, cuadro 6.48); el ingreso del autoempleo fue tomado de CUANTO (1993, p. 259, cuadros 13.19)

Elaboración: Figueroa (1996)

Vemos en el siguiente cuadro 6, desde el punto de vista de la regresión en materia de ingresos que se produjo en esta década, tanto en el sector privado como en el sector público, el impacto estructural irreversible y regresivo de los niveles de ingresos habidos en los setenta.

El lector se preguntará cómo se llegan a reducir los niveles de ingreso real laboral tanto para el sector público como privado. En primer lugar, hay que mencionar que, más allá de imposiciones externas, ello será posible por una

incapacidad endógena de realizar un balance crítico de los ejes del fracaso en la forma de la implementación de la ISI y; por ende, de introducir correctivos. Será debido a ello la relativa facilidad con la que se adoptaron las llamadas políticas del Consenso de Washington, para las que el mercado se convertirá en el mejor asignador de recursos.

Estas políticas tenían como énfasis no solo asegurar el pago de la deuda y la reducción del gasto público, sino una apertura comercial indiscriminada cuyo efecto fue una masiva desindustrialización del país, en la medida en que no era importante mantener un aparato productivo. Ello se complementó con una masiva política de privatizaciones o ventas de activos de la nación rematadas en su mayoría al capital extranjero; la reprimarización de la economía que priorizará nuevamente la exportación de materias primas. Adicionalmente, se sumó la implementación de un Estado mínimo y desregulador que dejaba todo al mercado.

En términos del proceso que analizamos, el efecto más devastador para el país será la pérdida masiva de empleos, tanto en el sector privado⁸ por la desindustrialización, como en el sector público porque fue virtualmente desmantelado o reducido a su mínima expresión⁹. Como se puede ver, la década del noventa estará marcada por la crisis de la deuda y las constricciones para su pago, derivadas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Los resultados de estas políticas fueron, además de la pérdida masiva de empleos, una extensión de la pobreza que se duplicó con el *shock* económico de agosto de 1990, el enorme peso de la deuda externa que restringía el gasto público, un incremento de la desigualdad y un progresivo crecimiento de la informalidad que parece detenerse en 2004 cuando, a partir del año 2001, se retoma el círculo virtuoso del crecimiento económico. La evolución de este proceso lo muestra con claridad el gráfico siguiente que refleja una débil estructura ocupacional con una informalidad que se torna crítica desde la década de los noventa.

En países como los nuestros, la resultante de drásticas políticas económicas de naturaleza regresiva, tendrán entonces un impacto paulatino pero directo en la estructura de clases del país.

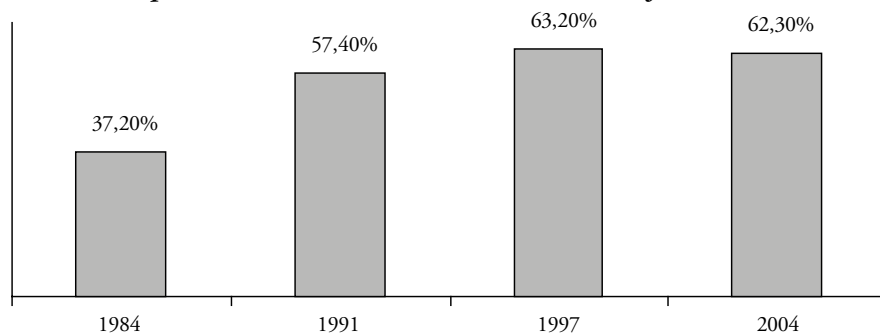
Como lamentablemente no se ha trabajado la evolución de la estratificación social en el Perú, tomaremos como referencia empírica para esta la distribución

⁸ La sociedad nacional de industrias calculó para 1992 que se habían perdido solo en el sector privado 400 000 puestos de trabajo.

⁹ Estimados diversos calculan que durante la década se produjo una pérdida de alrededor de 300 000 puestos de trabajo.

porcentual de estratos sociales para Lima Metropolitana, basada en un perfil básico de hogares por ingresos realizado por la empresa IMASEN¹⁰.

Gráfico 2
Lima Metropolitana: evolución de la PEA en el sector informal (1984-2004)



Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Elaboración: Gamero (2007)

Como podemos observar, lo que ocurre producto de las políticas descritas será un proceso de movilidad social descendente. En 1989, la clase media alta que representaba un 35% se reduce a un 20,6% en 1996, mientras que el estrato bajo inferior se engrosará de manera sustantiva en el mismo periodo de un 28,4% a 40,4%.

2.5 La clase media y el fujimorismo

Balbi y Gamero (2003) afirman que al nuevo panorama de la estratificación social en el país han contribuido dos factores resultantes de la política económica del fujimorismo. En primer lugar, el estancamiento del poder adquisitivo, que ha obligado al grueso de las capas medias a una restricción del gasto y a un progresivo deterioro de sus niveles de vida. Asistir a eventos culturales, espectáculos, viaje de vacaciones, comer fuera de casa se convirtieron en un lujo, más que en una actividad regularmente practicada. En segundo lugar, un factor gravitante fueron los despidos realizados, principalmente, en el sector público. Para 1998, Balbi y Gamero estimaban un aproximado de 100 000 personas afectadas por la política de empequeñecimiento del aparato estatal y de privatización de empresas públicas¹¹.

¹⁰ Véase el anexo 1 de este artículo.

¹¹ Para refrendar esta información, ambos autores realizaron además una aproximación cualitativa a partir de entrevistas dirigidas a profesionales de la clase media y en todas ellas aparecían narradas las estrecheces económicas y las dificultades que atravesaban para pagar los estudios de sus hijos (colegios y universidades de prestigio y calidad). A continuación, se presenta el testimonio de un médico: «Soy profesional, mi esposa también trabaja. Sin embargo, hace dos años tuve que

Cuadro 7
Distribución de estratos sociales
En porcentajes

Clase o estrato	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Baja inferior (D)	28,4	32,1	29,8	24,7	39,3	40,5	41,1	40,4
Baja superior (C)	36,6	35,9	40,0	44,6	36,6	39,9	40,7	39,0
Media alta (A/B)	35,0	32,0	30,2	30,7	24,1	19,6	18,2	20,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: IMASEN. Perfil básico de hogares, 1996

Trabajado para la investigación de las clases medias realizado entre Balbi y Gamero (2003, p. 156). Véase el anexo metodológico sobre ingresos.

En este panorama de movilidad social descendente, las identidades de clase se desdibujan; generándose aquello que la sociología ha llamado «inseguridad de estatus». Estos fuertes referentes de movilidad social descendente de la clase media dificultan consolidar una identidad de clase asentada, a la vez que generan enormes niveles de inseguridad, por lo que, para contrarrestar tal situación, los signos exteriores de estatus se convierten en decisivos.

Durante los primeros años del régimen se produjo un sostenido apoyo y apuesta, casi incondicional, de los sectores medios y populares al programa económico de Fujimori. Luego del 5 de abril de 1992, los mayores entusiasmos provienen de la clase media en cuanto a la gestión neoliberal de su ministro de economía Carlos Bologna, que representó una aprobación del 35,3% en los estratos bajos y del 47,1% en los estratos medios. Existía la expectativa de recuperar el mellado poder adquisitivo perdido durante la heterodoxia radical del primer gobierno de García, y ampliarlo a partir de las posibilidades que ofrecía la liberalización del comercio. Sin embargo, esta expectativa se irá desvaneciendo conforme avance el programa de ajuste estructural.

3. LA RECOMPOSICIÓN DE LAS CLASES MEDIAS: DE LA CLASE MEDIA TRADICIONAL A LA NUEVA CLASE MEDIA

Durante la década de los ochenta, el inexorable y progresivo proceso de desindustrialización y desproletarización del aparato productivo impulsa una verdadera eclosión de la informalidad; traducido en el marco de creciente debilidad de actores sociales que no lograron superar enfoques meramente clasistas (Balbi & Gamero, 2003). En un contexto en que el Estado deja de ser garante de la inclusión

alquilar mi casa en Surco y mudarme a un departamento para poder seguir pagando los estudios universitarios de mis dos hijas» (Balbi & Gamero, 2003).

social, y dado un acelerado proceso de difusión de los valores del individualismo utilitarista, el mercado aparece como la única vía para acceder a la ciudadanía. Quedan atrás las opciones por una acción colectiva, que aparece desgastada e ineficaz, en una situación de marcada debilidad institucional.

Los intensos procesos de individuación estarán acompañados por el despliegue de complejos sistemas de redes sociales de ayuda mutua y reciprocidad, contruidos sobre la base de la cultura de la migración interna —peculiares de los países latinoamericanos— y muy distantes de los procesos que caracterizaron las realidades sajonas¹². Diríase, como señalara Marcel Valcárcel¹³, que se pasa de una sociedad Estado-céntrica a una sociedad mercado-céntrica.

En relación con esta década, Matos Mar reflexiona sobre las características de lo que llama el «desborde popular». Expresado en el fenómeno gruesamente denominado «informalidad», develaba la existencia de una extensa Lima, distinta a la oficial, que discurría por fuera de los canales formales en cuanto a la construcción material de la vivienda pero también en términos de circuitos culturales. Entrados los años ochenta, una soterrada pero persistente marginación del aparato productivo colocaba todavía a miles de migrantes en un mundo paralelo dentro de un mismo espacio compartido llamado Lima. Se trata de la insurgencia de una nueva y amplia capa social, de estratos y grupos que estaban en condiciones de convertirse a futuro en una nueva clase social en el país.

A su vez, Hernando de Soto (1987) amplía esta constatación, que Quijano había levantado con fuerza con el tema de la marginalidad en los sesenta.

De Soto, desde una perspectiva anclada en la dimensión legal, tendrá la virtud de poner en la agenda de la reflexión sobre los actores sociales la fuerza y el vigor de la migración gestada por la llamada «economía informal», un sector relegado —en ese momento— del paisaje del mundo popular en las ciencias sociales. Su aporte precisa las características de la informalidad, su extensión y su ubicación; y en ese esfuerzo rescata con estudios específicos la capacidad de trabajo, innovación y creatividad de miles de peruanos, en un contexto de preocupante repliegue del Estado. Al mismo tiempo, plantea la urgencia de aproximarse socialmente a lo que, como Matos percibía, era la fragua de una nueva identidad cultural en el Perú.

¹² Esta individuación con redes, cuyos orígenes se remontan a la migración, fue quizá el hallazgo más significativo de la sociología y la antropología. Contribuyó de manera decisiva a comprender lo particular de estos procesos de individuación que con el impulso del mercado discurrían en las ciudades: una individuación con redes sociales. Se pudo, así, atisbar mejor los decursos de la estructuración de un tejido comunitario detrás de una aparente ley de la selva.

¹³ Aporte alcanzado por el profesor Marcel Valcárcel durante el seminario interno «Cambio social y desarrollo» realizado en mayo de 2008 por el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Estos nuevos sectores, provenientes de la migración interna, estarán definidos por una marcada ética del trabajo y por la apuesta al esfuerzo junto con el afán de logro y compromiso con el trabajo esforzado como vía central de movilidad social¹⁴. Estas cualidades, percibidas por el mundo blanco-criollo, han contribuido en forma decisiva a superar el prejuicio colonial de superioridad, y a revertir sustantivamente la percepción despreciativa que se tenía hasta entonces del cholo, del migrante invasor de tierras.

Aun en un contexto socialmente adverso se abre la posibilidad de asumirse a sí mismo como ciudadano, y definir un proyecto de progreso sin ser rechazado, generándose las bases para la remoción de sentimientos de inferioridad. El cholo emergente, del que Quijano (1980) hablara ya en su trabajo sobre el proceso de «cholificación» en el Perú, se torna afirmativo: se genera un orgullo por haber salido adelante en condiciones adversas. Esto se hace patente en el amplio mundo que generan los microempresarios migrantes de origen popular, que crean su propio espacio de progreso desde una perspectiva distrital, anclada inicialmente en dinámicas organizativas barriales y comunales. Se sientan las bases para la constitución, como se verá más adelante, de la llamada «clase media de origen popular» a partir de la consolidación de espacios de producción, consumo y recreación.

La movilidad social se logra como fruto de la articulación de varios procesos paralelos (la capitalización eficiente de las redes sociales, el comercio informal y la microempresa) que la diferenciarán de su predecesora —la clase media tradicional— que tuvo en la educación, impulsada por el Estado, el instrumento movilizador que, como viéramos, entra en un franco proceso de decadencia.

En esta nueva estructura ocupacional, fruto de las políticas económicas heterodoxas de Alan García y neoliberales de Fujimori, el sector informal creció superlativamente, lo cual contribuyó a la enorme heterogeneidad de los sectores medios en Lima. Como vemos en el cuadro 8, elaborado por Julio Gamero, en la estructura del mercado laboral peruano, los trabajadores independientes no profesionales y los trabajadores familiares no remunerados representan el 54%, es decir el grueso de la PEA.

En tanto que la microempresa involucra cerca del 19% de la PEA, el sector moderno —sector público, pequeña y mediana y gran empresa de independientes profesionales— abarca solo el 23% del total de la PEA. El reducido porcentaje de la salarización, junto con el predominio de una microempresa de menos de cuatro trabajadores, explica la permanencia de una elevada tasa de informalidad (Gamero, 2007).

¹⁴ Una encuesta de opinión aplicada por la empresa IMASEN respecto a las características atribuidas a los grupos sociales en el Perú, registró un consenso acerca de que la cualidad más importante del serrano era su vocación por el trabajo (IMASEN, 1996).

A partir de esta particular estructura ocupacional, con un Estado cuyas políticas macroeconómicas redujeron drásticamente el empleo formal, e impulsaron sin contraparte estratégica la flexibilización del mercado laboral y la privatización de las empresas públicas, se hace evidente la dificultad de pensar en una clase social. En este sentido, como sugiere Benavides (2007), una clase económica con acelerados niveles de movilidad social tiene a su vez menores probabilidades de convertirse en clase social en la medida en que sus referentes societales están en permanente cambio.

Es la compleja heterogeneidad lo que lleva a algunos estudiosos a hablar de dos clases medias, una marcada por la profesionalización y otra anclada en el comercio y la informalidad. Apuntalando esta complejidad, una reciente encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú recogió en 2007 que un 59% se autodefinía como trabajador independiente¹⁵, categoría que probablemente comprende un segmento de profesionales que no laboran en su profesión. Es decir, insertos de manera difusa en el aparato productivo (véase cuadro 9).

Cuadro 8
Estructura del mercado laboral peruano

Sectores	2001			2003-2004			2005		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
Microempresa (2 a 9 trabajadores)	22,7	15,8	20,2	22,1	13,3	18,8	21,6	14,0	18,7
Independiente no profesional	32,0	42,7	36,1	31,4	41,2	35,0	32,6	41,0	35,8
Trabajador profesional no remunerado	7,1	31,5	15,0	9,6	37,0	19,7	9,4	34,8	19,0
Sector público	10,0	3,0	7,4	8,9	2,9	6,7	9,2	3,1	6,9
Pequeña empresa	9,0	4,4	7,3	8,9	3,2	6,7	9,2	4,1	7,2
Mediana y gran empresa	10,7	1,5	7,3	11,4	1,5	7,7	11,2	1,8	7,6
Independiente profesional	2,4	0,2	1,6	2,4	0,2	1,6	1,9	0,2	1,3
Resto	5,8	0,9	1,0	5,4	0,9	3,7	5,0	1,0	3,5
Total relativo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PEA ocupada ¹	7436,4	4276,1	11 712,5	8194,3	4818,9	13 013,3	8144,5	4975,3	13 119,7

¹ En miles de personas.

Fuente: INEI-ENAH0. Condiciones de vida y pobreza. IV trimestre 2001; continúa mayo 2003-abril 2004; continúa 2005. Elaboración: MTPE-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

¹⁵ Dado que el cuadro elaborado por Gamero (2007) discrimina al independiente profesional que constituye un 1,6%, puede inferirse que el grueso de esta autodefinición es de independientes no profesionales.

Cuadro 9
Afirmaciones que describen mejor la situación laboral del encuestado en Lima Metropolitana

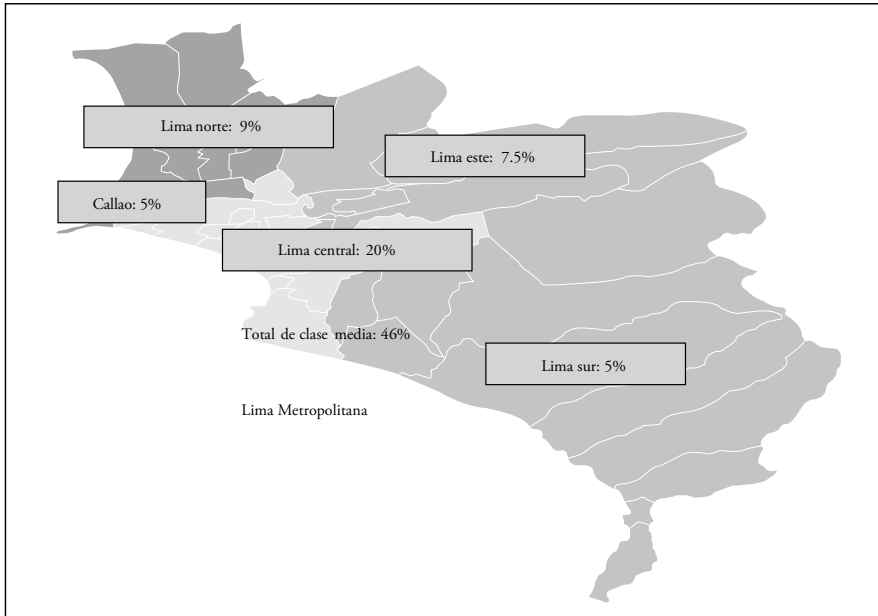
Respuestas	Total	Grupo de edad			Nivel socioeconómico		
		18 a 29	30 a 44	45 omás	A/B	C	D/E
Está en planilla como estable	12	14	13	9	21	12	5
Está en planilla como plazo fijo	6	7	8	3	11	5	5
Está en planilla por horas	3	5	3	-	2	4	3
Está por horarios profesionales	12	19	10	5	19	13	4
Está en un <i>service</i> , cooperativa o contrata (<i>outsourcing</i> , terciarización)	2	5	-	-	-	1	4
Es trabajador independiente	59	39	62	81	40	60	72
Es propietario de una empresa	2	2	2	3	5	1	1
Está como informal	4	9	3	-	1	4	6
Total (en porcentajes)	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	254	81	116	57	60	127	67

* En el 2008, la categoría «trabajador independiente» desciende ligeramente al 49%
Fuente: Instituto de opinión pública de la PUCP, 2007
Elaboración propia

En el marco de este estudio y considerando los criterios operacionales planteados al inicio (ingreso, ocupación —tipo y posición—, educación y residencia) sostenemos que algunos de estos criterios —centralmente los indicadores sobre educación— no se aplican a esta nueva clase media, ubicada mayoritariamente en la Lima conurbana. Como podemos observar en el gráfico 3, existe aproximadamente un 46,5% de clase media en Lima Metropolitana que se distribuye de manera heterogénea en Lima central (20%), Lima norte (9%), Lima este (7,5%), Lima sur (5%) y el Callao (5%).

Si se analizan los estratos B y B/C se observa que Lima conurbana concentra un 51% de clase media frente al 49% de los distritos de clase media tradicional ubicados en Lima central, siendo relevante en este mismo cuadro que un 26% de Lima conurbana se ubique en el sector B, es decir, en la clase media alta.

Gráfico 3
Porcentaje de clase media en Lima Metropolitana



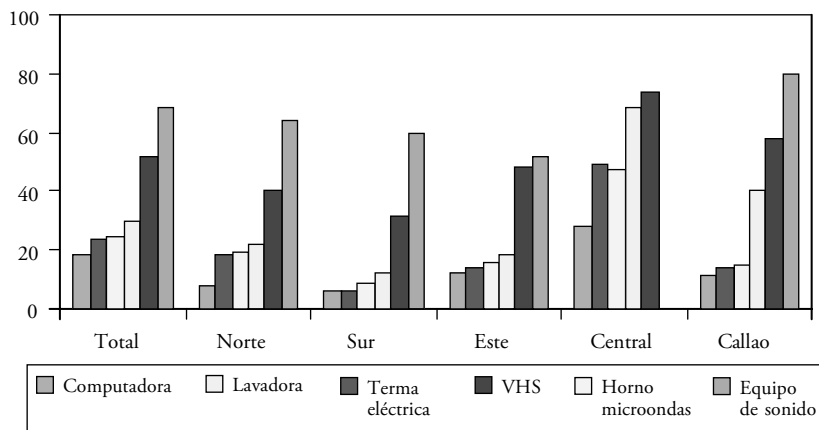
Fuente: Arellano (2004)
 Elaboración propia

Es probable que el incremento de la demanda producido entre 2004 y 2007, producto del crecimiento económico en el que el ingreso familiar promedio se habría incrementado en 20%, introducirá pequeñas variaciones en esta distribución.

Al respecto, Nugent apunta que es importante considerar a estas clases medias más que como mundos geográficamente separados, como realidades sociales cuyas fronteras o límites son bastante difusos. Por su lado, Arellano afirma que, aunque las clases emergentes son cosmopolitas, es decir que están insertadas en los circuitos de la globalización, para su formación asisten a circuitos educativos diferenciados en relación con las clases medias tradicionales. A ello se suma que habitan y usan espacios territoriales y públicos diferenciados geográficamente y que existen dificultades de interacción entre estos distintos sectores medios, debido, entre otros aspectos, a la aún vigente fractura étnico racial¹⁶.

¹⁶ El episodio ocurrido en julio de 2008 en Larcomar de apresamiento de jóvenes ciclistas que provenían de San Juan de Lurigancho y que fue presentado por los medios de comunicación como un éxito policial de la captura de la banda llamada «Los malditos de Larcomar», respaldada por el alcalde, quien hizo extensiva su felicitación al cuerpo policial sin que él en ningún momento se retractara, denota, pues, claramente, la segregación de espacios.

Gráfico 4
Posesión de bienes del hogar
Lima Metropolitana



Fuente: Arellano (2004)

La búsqueda de igualdad y acceso al respeto ciudadano en la urbe, más que por la vía del acceso a la educación y la cultura, se da prioritariamente por la vía del consumo, en una ciudad que todavía le es hostil, y en la cual se propicia la renovación incesante de los productos impulsada por su gran despliegue y de un bombardeo publicitario. Los estudios de mercado realizados por Arellano muestran que en los últimos años esta nueva clase media ha accedido a patrones de consumo bastante similares a los de la clase media tradicional, vinculados al confort del hogar, como lo muestra el gráfico 4.

Cuadro 10
Porcentaje de clase media en Lima Metropolitana

Lima Metropolitana	Niveles socioeconómicos	
	B/C	B
Lima central	49	74
Lima conurbana	51	26
Total	100	100

Fuente: Estratificación homogeneizada de la Asociación Peruana de Encuestadoras (2005). Este cuadro fue construido de manera consensuada.

Elaboración propia

Nota: el sector A o clase alta se concentra íntegramente en los distritos de Lima central.

Estos patrones de consumo de bienes que la economía define como bienes suntuarios, revelan que el incremento del poder adquisitivo alcanzado permite realizar un gasto que excede ampliamente la satisfacción de las necesidades básicas.

Por otro lado, Arellano (2004, p. 156) demuestra que la distribución del gasto es bastante similar en los sectores medios de Lima conurbana y de Lima central, cuyos valores oscilan entre 5,8% y el 11%. El autor destaca que la relación existente entre gasto y ahorro en las familias de Lima conurbana y Lima central, contra lo que se podría suponer debido a la heterogeneidad, es muy similar en ambos grupos.

El consumo aparece así como una forma de apuntalar una igualdad de derechos y de respeto ciudadanos antes negada; pautada ahora por la moda, el *marketing*, los medios y el rol simbólico que cumplen. Queremos insistir en la importante función simbólica del consumo en la medida en que posibilita dar sentido a la forma de ser del individuo, quien a través de los bienes que utiliza, establece códigos de comunicación con el entorno. Las actividades de consumo son actividades sociales:

Nosotros nos encontramos no en el reino de los objetos, sino en el reino de los símbolos: los consumidores consumen no tanto objetos específicos para complacer finalidades completas, sino símbolos en general para satisfacer finalidades sociales (Corrigan citado por Lanegra, 2005, p. 36).

A su vez esta búsqueda de igualdad por la vía del consumo tiende a hacer los bordes de estratificación social cada vez más borrosos. En una sociedad que, como señala Cotler, tiene aún al interior de las clases sociales rezagos estamentales y una tradición de exclusión por características físicas y raciales, el vestir bien resulta una manera de ser aceptado socialmente (Lanegra, 2005).

Sin embargo, esta suerte de apuesta por el consumo para consolidar un estatus de clase media ha puesto de lado la búsqueda de acceso a bienes culturales por lo que —para estos sectores— la educación superior y la profesionalización en centros de reconocida calidad educativa, y el emprendimiento individual y la consolidación en el mercado adquieren un carácter prioritario. Hay una clara inclinación por los institutos de enseñanza superior y técnica que han proliferado en la Lima conurbana, que van desde academias preuniversitarias hasta institutos técnicos, de idioma y universidades recientemente fundadas.

Sostenemos, finalmente, que por ello se ha producido, entonces, una suerte de *revival* conservador, que tiene como objetivo a través de determinados patrones de consumo (empleada doméstica, casa de playa, viajes al extranjero), enfatizar y transmitir diferencias de clase frente a los sectores emergentes. De esta manera se produce una restringida afirmación de identidad, basada en parte en asociaciones excluyentes, de los sectores medios tradicionales que comparten un determinado

estilo de vida; familia, apellidos, educación, consumo de bienes, símbolos de estatus con el afán de demostrar mayores niveles de diferenciación¹⁷. Estos sectores medios tradicionales construyen visiones y lecturas de la realidad, en las que anida un racismo no explícito, permeadas por la exclusión, por la diferencia frente a la desigualdad y a la pobreza. Antes de construir visiones de país, son formas de perseguir el prestigio y el estatus.

Visto ahora desde la política, esta diversificación de lo que podemos llamar «clases medias» presenta distintos caracteres respecto a su comportamiento y elección política, expuesta en las últimas elecciones, dados en el marco de un crecimiento económico sostenido y sobre la base de una ampliación de la democracia en la sociedad peruana. Si bien la clase media tradicional apoyó la candidatura de Fujimori durante su primer gobierno, apoyando incluso el golpe de Estado y pensando en la posibilidad de transformación del aparato productivo y el empleo que beneficie a los estratos medios y excluidos, las últimas elecciones revelarán la confluencia de los diversos sectores de clases medias que, distintas en su formación y trayectoria, presentarán semejanzas en cuanto a su elección política.

Su voto mayoritario por una opción de carácter neoliberal que ofrecía garantizar la continuidad del crecimiento y por tanto la estabilidad económica para la reproducción en las clases consolidadas como emergentes es encarnada por Unidad Nacional. Por un lado, estará la clase media tradicional cuya elección política, a juzgar por su derrotero histórico, muestra una preferencia al mantenimiento del *status quo* y revela una tendencia conservadora en el sentido de mantener el capital social construido históricamente. Siguiendo esta tendencia de la elección política, pero con motivaciones e intereses disímiles a sus predecesores, sostenemos que la clase media emergente requiere de una estabilidad centralmente económica, que le genere las condiciones necesarias para reproducirse como clase.

Se trata, a pesar de los matices y motivaciones diversos, de una decisión basada en la idea del «voto políticamente correcto», —en la medida en que era la candidatura oficialista de los casi monocordes medios de comunicación—: temerosos e indiferentes de cambiar el orden social vigente y generar mayores condiciones de equidad entre clases y al interior de ellas.

Producto de este conjunto de transformaciones a todo nivel, centralmente desde la década de los noventa, se ha producido entonces una suerte de desolidarización de las clases medias, como señalara Plaza (2007, pp. 21-79), que parece incapaz de reflexionar articuladamente el país desde una posición crítica

¹⁷ Se reproduce el viejo adagio de las élites criollas en la época colonial: «Pobre pero eructando pavo».

y propositiva, como ocurría normalmente con la clase media tradicional gestada durante el velasquismo.

4. CONCLUSIONES

El estudio de las clases medias realizado en el presente trabajo se inserta en la discusión del proceso de cambios ocurridos en las últimas décadas, desde la perspectiva de la constitución y devenir histórico de las clases medias apoyado en la mayor información empírica disponible.

Como conclusión, el estudio permite reflexionar respecto a los límites y posibilidades de constitución y reproducción de las clases sociales, que se han visto enfrentadas a una constante dinámica de cambios producidos a partir de la década de los noventa, en las que se adopta un modelo de crecimiento hacia fuera. Paradójicamente, bajo intensos procesos de movilización, Lima evidencia también las transformaciones de una ciudad que, producto de las políticas neoliberales, delata las brechas de equidad y las profundas desigualdades que han surgido en todo este proceso.

La discusión sobre lo que podríamos llamar «clase(s) media(s)» tiene que ver con una cuestión más de fondo y referida a la situación de las clases sociales en el Perú de hoy. Como apuntara Benavides (2007, pp. 121-137), ¿es posible hablar de clases sociales en un contexto en el que los cambios y la movilidad social han generado una eclosión en la estratificación social? Esta pregunta nos lleva a un análisis más de fondo, que tiene que ver con la idea de entender las relaciones entre clases sociales y con las lógicas existentes que posibilitan su reproducción social, tomando como referencia el marco histórico, económico y político en que estos procesos se han desarrollado.

ANEXO 1

CRITERIOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN EN LIMA METROPOLITANA

IMASEN elaboró una estratificación de los hogares de Lima Metropolitana sobre la base de las siguientes ocho variables:

1. Clasificación de la vivienda
2. Ocupación de la cabeza de familia
3. Ingresos familiares totales
4. Grados de instrucción de la cabeza de familia
5. Posesión de automóvil
6. Servicio doméstico
7. Posesión de artefactos electrodomésticos
8. Tamaño de familia

Según la escala de sondeos, la escala de estratificación sería:

- Estrato bajo inferior: se caracteriza significativamente por vivienda precaria, ocupación no calificada, secundaria completa. Ingreso familiar de 150 dólares.
- Estrato bajo superior: vivienda de material noble, obrero calificado, técnico, independiente. Ingreso familiar promedio de 330 dólares.
- Clase media inferior: vivienda de acabados simples, profesional dependiente o técnico, grado universitario, con un ingreso familiar promedio de 1000 dólares.
- Clase media típica: jefe de familia profesional independiente. Grado de instrucción: universitaria completa. Más de un automóvil. Ingreso promedio alrededor de 1600 dólares.
- Clase media superior: jefe de familia en cargos gerenciales o profesionales independiente. Ingreso promedio alrededor de 2500 dólares.
- Clase media alta: residencias lujosas. Empresarios por encima de los 3500 dólares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adams, Norma (1991). *Los otros empresarios*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Arellano, Rolando (2004). *Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispes...* Lima: Empresa Periodística Nacional.
- Asamblea Nacional de Rectores, Comisión de Coordinación Interuniversitaria. Secretaría ejecutiva (1988). *Perú: estadísticas universitarias, 1960-1986*. Lima: Departamento de Informática y Documentación.
- Asociación Peruana de Encuestadoras (2005). *Estratificación por niveles socioeconómicos. Bases de datos*. Lima: Asociación Peruana de Encuestadoras.
- Balbi, Carmen Rosa & Julio Gamero (2003). El otro divorcio de Fujimori. En Guillermo Nugent (Ed.), *La clase media ¿existe?* (pp. 151-170). Serie Perú Hoy 4. Lima: DESCO.
- Balbi, Carmen Rosa (Ed.) (1997). *Lima: aspiraciones, reconocimiento y ciudadanía en los noventa*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Balbi, Carmen Rosa (1996). El fujimorismo: delegación vigilada y ciudadanía. *Pretextos*, 9, 187-223.
- Balbi, Carmen Rosa (1990). *Movimientos sociales: elementos para una relectura*. Lima: DESCO.
- Balbi, Carmen Rosa (2005). *Historia de la República del Perú (1822-1933)*. Lima: El Comercio.
- Benavides, Martín (2007). Estructura ocupacional y formación de clases sociales en el Perú: ¿qué nos dice la evidencia disponible sobre el Perú reciente? En Orlando Plaza (Ed.), *Clases sociales en el Perú: Visiones y trayectorias* (pp. 121-137). Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Bernales, Enrique (1974). *Movimientos sociales y movimientos universitarios*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Borrani, Carlos (1976). *Políticas educativas entre 1950 y 1969 en el Perú*. Tesis de licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Bourricaud, Francois (1967). *Poder y sociedad en el Perú contemporáneo*. Buenos Aires: Sur.
- Callirgos, Juan (1995). *La discriminación en la socialización escolar*. Lima: Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Contreras, Carlos & Marcos Cueto (2004). *Historia del Perú contemporáneo*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad del Pacífico – Instituto de Estudios Peruanos.
- Cotler, Julio (2005). *Clases, Estado y nación en el Perú* (3a ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- De Soto, Hernando (1987). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: Instituto de Defensa Legal.

- Díaz-Albertini, Javier (2001). La participación política de las clases medias y las ONGD en el Perú de los noventa. *América Latina Hoy*, 28, 115-147.
- Dirección Nacional de Estadística y Censos (1966). *Sexto censo nacional de población 2 de julio de 1960: centros poblados*. Lima: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos.
- Dornbusch, Rudiger (1992). *Macroeconomía del populismo*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Fajnzylber, Fernando (1992). *Industrialización en América Latina de la «Caja Negra» al «Casillero Vacío». Comparación de patrones contemporáneos de industrialización*. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas.
- Figueroa, Aldo y otros (1996). *Exclusión social y desigualdad en el Perú*. Lima: Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo.
- Fitzgerald, E. (1985). Capitalismo de Estado en el Perú. Limitaciones de un modelo de desarrollo económico. En Cinthya McClintock (Ed.), *El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Flores Galindo, Alberto (1991). *Apogeo y crisis de la República Aristocrática: oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú, 1895-1932*. Lima: Rikchay Perú.
- Franco, Carlos (1991). *La otra modernidad: imágenes de la sociedad peruana*. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación.
- Gamero, Julio (2007). Precarización y empleo informal: ¿punto de inflexión? *Coyuntura*, 14, 12-16.
- Hildebrant, César (2008). «Izquierdas y derechas». *La Primera*. Lima, 1 de agosto.
- Iguíñiz, Javier (1989). La crisis peruana actual: esquema para una interpretación. En Heraclio Bonilla (Ed.), *Las crisis económicas en la historia del Perú* (pp. 299-364). Lima: Centro de Historia Económica y Social.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (1981). *Censo nacional de población 1981*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (1989). *Cuentas nacionales del Perú: oferta y demanda global 1988*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Lanegra, Armando (2005). *Dime cómo te vistes y te diré quién eres: la construcción de la identidad juvenil a través del consumo de las prendas de vestir. Un estudio de caso: los alumnos de cuarto ciclo de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre el periodo 1998-2000*. Tesis de licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Parker, David (1997). Los pobres de la clase media: estilo de vida, consumo e identidad en una ciudad tradicional. En Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero (Eds.), *Mundos interiores: Lima 1850-1950* (pp. 161-183). Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Plaza, Orlando (Ed.) (2007). *Clases sociales en el Perú: Visiones y Trayectorias*. Lima: PUCP – CISEPA.

- Portocarrero, Gonzalo (Ed.) (1998). *Las clases medias: entre la pretensión y la incertidumbre*. Lima: SUR.
- Quijano, Aníbal (1980). *Dominación y cultura: lo cholo y el conflicto cultural en el Perú*. Lima: Mosca Azul.
- Sorokin, Pitirim (1961). *Estratificación y movilidad social*. México D. F.: Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional.
- Stiglitz, Joseph (2003). *Los felices 90: la semilla de la destrucción*. Buenos Aires: Aguilar.

PERÚ: PERFIL DE LOS CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LA SOCIEDAD RURAL (1995-2008)

Marcel Valcárcel

En 1994 elaboramos un pequeño ensayo titulado «Cambios en la sociedad rural peruana 1950-1994» con ocasión del vigésimo aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como balance, dábamos cuenta de que la hacienda, institución dominante del mundo rural durante varios siglos, por efecto de los movimientos campesinos y las reformas agrarias, había quedado ya abolida definitivamente en los años setenta, siendo reemplazada por empresas asociativas en el marco de un proyecto modernizador liderado desde el Estado por militares desarrollistas.

Describíamos el origen, quiebra y desaparición de la mayoría de las cooperativas y las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) en el lapso de doce años, entrampadas en serios problemas de gestión y pérdida progresiva de apoyo político. En efecto, en el marco del pensamiento liberal del segundo belaundismo, se fomentó su disolución y el reparto individual de las tierras y bienes, dando como resultado un incremento exponencial de pequeñas parcelas en todo el territorio nacional.

Destacamos la violencia político-militar en el ámbito rural con sus enormes secuelas negativas, y el rol central jugado por las rondas campesinas en la derrota de Sendero Luminoso. Se caracterizó a los noventa como la década de los caminos del mercado y la pacificación. Sostuvimos cómo, a pesar de las dificultades y adversidades, se iba construyendo lentamente una sociedad civil en el mundo rural de manera casi paralela a la expansión de las relaciones mercantiles.

Nos detuvimos a indicar las causas de la pobreza campesina y del secular abandono del agro serrano, señalando posibles escenarios para el campesinado, como su claro descenso en cifras relativas y, en menor medida, en cifras absolutas.

Catorce años después de culminado aquel ensayo, algunas tendencias ahí expresadas se acentuaron, así como emergieron nuevas. El presente ensayo busca precisar aquello que en términos relativos se mantuvo inmóvil, pero sobre todo

escudriñar las tendencias del cambio social, ambas tareas a partir de los trabajos efectuados por la comunidad de científicos sociales, la información cuantitativa disponible y el conocimiento directo del autor de algunas de las transformaciones en curso. Cabe señalar la complejidad de esta tarea por la diversidad de agros y sociedades rurales existentes en nuestro país y la ausencia de un censo agropecuario actualizado¹. Resulta pertinente advertir que, dado el corto periodo entre un ensayo y otro, era previsible que no hubiesen ocurrido transformaciones radicales en el campo peruano.

1. TIERRAS, SUELOS Y AGUA

a) Tenencia de la tierra

En 1994, el censo agropecuario indicaba que había en todo el país 1 745 733 unidades agropecuarias, siendo el 55,4% menores de 3 hectáreas, abarcando el 3,2% de la superficie total equivalente a 35 381 808 hectáreas.

El minifundio y la pequeña propiedad, mayormente fragmentados en muchas parcelas, caracterizaban al agro después de la reforma agraria.

Desde comienzos de la década de los noventa, como resultado de la aplicación de las leyes agrarias dadas por el gobierno de Fujimori², se vienen constituyendo nuevas grandes propiedades empresariales, en particular en la región costera, aumentando la producción de exportación y la desigualdad en la distribución de la tierra. Las facilidades otorgadas a la producción de biocombustibles, como el etanol en la costa³, o la palma aceitera en la selva, favorecen el proceso de concentración de la tierra, vía concesiones, desgravámenes, subsidios, etcétera.

Paralelamente a ello, la titulación de tierras se planteó como uno de los requisitos funcionales para que opere el modelo de mercado, siendo impulsada por el Estado a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) creado a fines de 1992.

Apreciamos que en el último lustro han sido titulados más de cien mil agricultores por año, como lo demuestra el cuadro 1. Esto equivale a más de medio millón de agricultores titulados.

¹ Como sabemos, el último fue realizado en 1994.

² En particular, la ley de tierras 26505 promulgada en 1995, considerada sumamente liberal.

³ Alcohol derivado del azúcar.

Cuadro 1
Perú: resumen anual de titulaciones de tierras (1999-2006)

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Total	471 511	277 925	102 848	121 961	169 766	184 854	130 604	115 567

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2007

Según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la costa, con 84%, es la región con mayor número de predios con título, seguida por la sierra, con 54%, y en último lugar la selva, con 37% de predios titulados.

b) Bosques y deforestación

Nuestro país presenta una heterogeneidad de ecosistemas y una diversidad de recursos naturales. A continuación haremos una aproximación a lo que viene ocurriendo con los bosques, suelos y agua, pues no existe un organismo estatal que efectúe un seguimiento pormenorizado de la situación de nuestros recursos naturales. Tarea que estuvo anteriormente a cargo de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), pero que el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) lamentablemente no continuó.

El Perú se ubica entre los diez países del mundo con mayores recursos forestales. Sin embargo, a lo largo de los últimos cincuenta años, sus bosques han disminuido habiéndose ya perdido 15 millones de hectáreas de estos, de las cuales 10 millones están localizadas en la Amazonía. En los Andes, de tres millones de hectáreas, ahora quedan unas 50 000; en los valles costeros, los bosques secos han reducido sus áreas a una fracción de lo que eran antes; mientras que en la Amazonía se tala cada año alrededor de 250 000 hectáreas adicionales (*Revista Agraria*, 76, 2006).

La deforestación se ha convertido en una de las principales causas de los desastres naturales que vive actualmente Sudamérica, contribuyendo a la escasez de agua en el mundo. Los expertos peruanos Antonio Brack Egg y Luis Palomino Rodríguez señalan que la tala indiscriminada de árboles genera graves impactos ambientales y sociales en los países que sufren los embates de la naturaleza. En Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, por ejemplo, afrontan problemas por las torrenciales lluvias que son acompañadas por aludes, desborde de ríos e inundaciones. Los deslizamientos, además, bloquean carreteras y vías que dejan aislados a muchos pueblos y ocasionan mortandad a los lugareños.

La tala irracional pone en riesgo los recursos naturales, pues una selva no depredada puede retener entre 60 y 70 litros de agua por metro cuadrado y un terreno deforestado apenas un litro por metro cuadrado, según los expertos. Este fenómeno antrópico viene siendo parcialmente contrarrestado a través de programas de reforestación. Aunque de los departamentos, los más reforestados fueron los de la sierra y en mucho menor medida los de la selva. Sin embargo, la reforestación es aún incipiente con respecto a lo depredado y al potencial de los departamentos.

Perú cuenta hoy con 12 millones de hectáreas de bosques en parques nacionales y hay otros 13 millones de hectáreas en propiedad de las comunidades nativas de la selva, que abarcan el 60% del territorio nacional. Es claro que en la medida en que se evite esta deforestación indiscriminada estaremos protegiéndonos nosotros y, sobre todo, evitando que el daño ecológico sea mayor para las siguientes generaciones.

c) Suelos

El nuestro es un país con una escasa extensión de suelos agrícolas.

Solo el 3,8% de las tierras son aptas para la agricultura intensiva, una parte de las cuales está seriamente afectada por problemas de tala de árboles, apertura de carreteras, erosión hídrica, mal manejo del riego, erosión eólica, sobrepastoreo, cultivo intenso, mal drenaje y salinización. También se consumen los suelos agrícolas por expansión del cemento, por la producción de ladrillos y adobes en diversos valles cercanos a las ciudades. Resulta muy claro que intereses de empresas urbanizadoras y traficantes de tierras están detrás de estas malas prácticas.

El desafío radica en optimizar el uso del suelo deteniendo la degradación de la escasa extensión del territorio con vocación agrícola⁴. En suma, usar las tierras sin tomar en consideración su vocación conduce a serios problemas: huaycos, erosión, derrumbes, destrucción de carreteras, casas, puentes, pérdida de tierras

⁴ Para CEPES Rural, las tierras de cultivo se clasifican en: *a)* Tierras aptas para cultivos en limpio. Se dispone de 4 902 000 hectáreas para cultivos en limpio (3,8% del territorio) distribuidas en las tres regiones naturales. *b)* Tierras aptas para cultivos permanentes: cubren una reducida superficie del país, aproximadamente, 2 707 000 hectáreas (2,1% del territorio). *c)* Tierras aptas para pastoreo: abarcan 17 916 000 hectáreas, es decir 13,9% de la superficie territorial del país. *d)* Tierras aptas para producción forestal: son las más representativas del país y alcanzan 48 696 000 hectáreas, es decir, alrededor de 37% de la superficie territorial del país. *e)* Tierras de protección: aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos intensivos, permanentes, pastoreo y producción forestal. La superficie que abarca este grupo es de 54 300 560 hectáreas, es decir, 42% del territorio nacional.

agrícolas y muertas. En los últimos lustros, la degradación de los pocos suelos de calidad resulta alarmante.

d) Agua: reducción de los volúmenes y pérdida de calidad

La agricultura bajo riego en nuestro país involucra a más de 1,6 millones de agricultores que riegan 1,8 millones de hectáreas con agua superficial proveniente de tres vertientes de agua: Atlántico, Pacífico y Titicaca.

No obstante estas cifras, el recurso hídrico es escaso y mal distribuido, habiéndose acrecentado en los últimos años el conflicto intersectorial de intereses por su uso, sea este agrícola, industrial, minero, energético, o para consumo directo de la población. El dilema parece plantearse en favorecer el espacio urbano en detrimento del rural; ilustran lo dicho los casos de los valles Chillón y Lurín, donde los agricultores entran en conflicto con SEDAPAL por la construcción de pozos en áreas agrícolas para abastecer a las poblaciones citadinas limeñas. Pero también, como ya se dijo, son cada vez más visibles y regulares los conflictos entre departamentos por garantizarse el acceso al agua con fines de riego.

Por otro lado, todos los ríos de la costa están contaminados con desechos industriales, mineros, petroleros, así como por residuos caseros de las poblaciones aledañas, lo mismo ocurre con el lago Titicaca y centenares de cochas, pantanos, ríos y manantiales a lo largo y ancho del macizo andino y la Amazonía. Afectando la flora, fauna y el consumo hídrico de la población, y de paso confrontándose a la misma estrategia de cultivos para la exportación de alta calidad.

Por último, no por ello menos preocupante, en las dos últimas décadas se ha acelerado el deshielo de los nevados andinos fruto del cambio climático y el calentamiento de la Tierra, lo cual está reduciendo nuestras reservas de agua. Al respecto, el reciente informe del Consejo Andino de Naciones (CAN) titulado *El cambio climático no tiene fronteras* sustenta que: «El cambio climático viene evidenciándose en la subregión andina por más de tres décadas. Mientras que desde 1990, a nivel mundial, se registraron cambios en la temperatura global de 0,2°C por década, ya desde 1974 a 1998 este incremento en la región de los Andes centrales fue de 0,4°C; es decir, 70% más que el promedio global» (2008, pp. 14-15).

Resumiendo este acápite, sobresale la pérdida cuantitativa y cualitativa de recursos naturales afectando con ello la biodiversidad, lo que nuevamente llama a establecer y supervisar estrategias de desarrollo rural desde un enfoque sostenible.

2. DOS GRANDES PROBLEMAS Y DESAFÍOS

Intentaremos ahora subrayar dos permanencias por sus resaltantes implicancias en la vida de las poblaciones que habitan en el mundo rural. La primera es la persistencia de la pobreza que alcanza al 65% de la población rural. La segunda es el mantenimiento del analfabetismo, el cual afecta a un quinto de dicha población. Veamos más de cerca cada una de ellas.

a) La pobreza

En líneas generales, la pobreza, término comparativo utilizado para describir la situación en la que se encuentra parte de una sociedad, producto de la ausencia o escasez de alimentos, vivienda, educación, asistencia sanitaria y agua potable, bienes elementales para vivir, así como del empleo y los ingresos adecuados para obtenerlos.

La pobreza también suele ser consecuencia de procesos de segregación social por razones étnicas, de clase, género o edad. Mayormente, la pobreza es hija de la desigualdad y no a la inversa. Constituye un problema multidimensional, lo mismo que su solución. Se puede salir de la pobreza como también regresar a ella. Para Amartya Sen, la pobreza resulta una de las principales fuentes de privación de la libertad de las personas.

Por pobreza endémica se entiende el tipo de pobreza que afecta a las personas con niveles muy bajos de vida con una alta proporción de necesidades básicas insatisfechas y que además carecen de acceso a los mercados de trabajo, a los servicios sociales básicos y tienen muy pocas posibilidades de hacer oír su voz en el ámbito nacional. En el Perú, se trata de habitantes de las zonas rurales de la sierra y selva, para quienes la pobreza tiene una dimensión histórica y cultural que se remonta a decenios y aun a siglos (Sagasti, 1997).

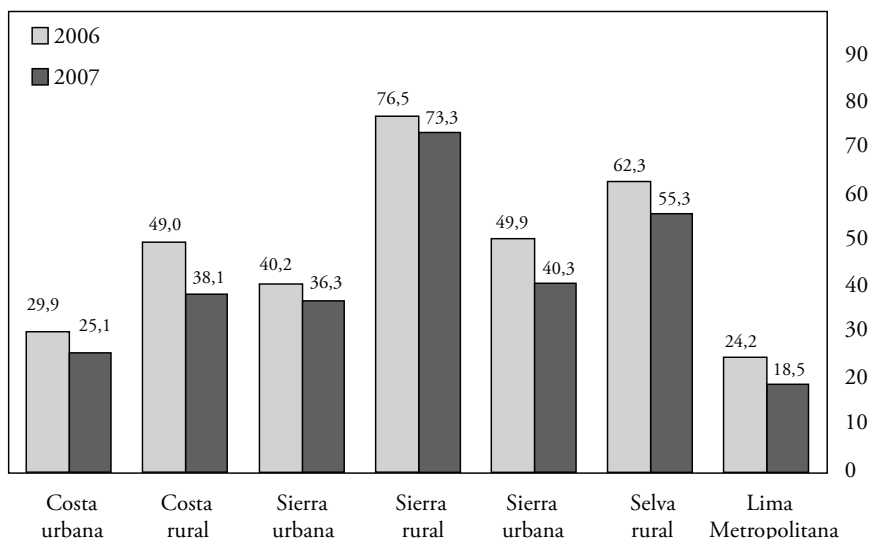
La pobreza en el país se ha ido reduciendo de manera progresiva en los últimos siete años. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que la pobreza total y la pobreza extrema a nivel nacional han disminuido; la primera, de 54,3% en 2001 a 51,6% en 2004 y; la segunda, de 24,1% en 2001 a 19,2% en 2005.

La pobreza urbana en 2004, pese a su gradual descenso se encontraba en torno al 43,3%, mientras que la pobreza rural continuaba en niveles extremadamente altos, del 72,5%. Por regiones, las disminuciones experimentadas en la costa y selva (8% y 10%), destacaron más que en la sierra, donde en promedio la reducción alcanzó aquel año el 3%.

Entre 2006 y 2007, la pobreza en todo el Perú cayó en 5%, pasando de 44,5% a 39,3%. Empero, la desigualdad entre el ámbito urbano y el rural aumentó, puesto que la pobreza descendió más en las zonas urbanas que en las rurales.

Considerando las regiones naturales, la pobreza total fluctúa entre el 22,6% en la costa y 60,1% en la sierra, y la pobreza extrema oscila entre 2% en la costa y 29,3% en la sierra. Los mayores niveles de pobreza se encuentran en la sierra rural donde la pobreza total afecta al 73,3% y la extrema al 40,8% de la población.

Gráfico 1
Perú: incidencia de la pobreza (2006-2007)
Porcentaje de la población



Fuente: INEI
Elaboración: Instituto Peruano de Economía

Por otro lado, como señala De los Ríos (2008):

Los hogares de la Sierra rural no solamente son pobres, sino que están dispersos en el territorio: en los distritos rurales, la mayoría de la población vive en centros poblados aislados (aproximadamente 79%). Ello influye en su limitado acceso a bienes y servicios tanto públicos (caminos rurales, electrificación rural, educación, etc.) como privados (asistencia técnica, crédito, aseguramiento, etc.) que reducen aún más sus posibilidades de desarrollo [...] es importante resaltar que los hogares más pobres de la Sierra rural, son justamente los que dependen exclusivamente de la actividad agropecuaria.

En 2007, según el Informe del INEI de 2008, los cinco departamentos de mayor pobreza total en el Perú fueron: Huancavelica (85,7%), Apurímac (69,5%), Puno (67,2%), Huánuco (64,9%) y Cajamarca (64,5%); coincidentemente los de mayor población rural situados en forma predominante en el macizo andino.

b) El analfabetismo

Según el Informe 2006-2007 de la organización Oxfam, la elevada tasa de analfabetismo, la concentración de pobres en el ámbito rural y el aumento de la emigración al exterior constituyen los principales problemas que acechan el país. El informe denominado «Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú» revela la existencia de dos millones de analfabetos en el país, la mayoría de los cuales tienen origen indígena, campesino y femenino.

En el 2006, la Encuesta Nacional Continua (ENCO) indicaba que la tasa de analfabetismo en el sector rural fue de 21,4%, 16,7% más elevada que en el sector urbano.

El recientemente publicado censo del 2007 establece que el analfabetismo pasó de 12,8% a 7,1%. Y que el 19,6% de la población rural censada no presenta ningún nivel de educación. Esto es: uno de cada cinco pobladores es analfabeto en el campo.

Ambas permanencias, pobreza y analfabetismo, se influyen de manera recíproca, generando sinergias altamente negativas. Un verdadero círculo perverso para los pobladores rurales. El gobierno actual viene manejando un programa para reducir el número de analfabetos.

3. POBLACIÓN

La tasa nacional de crecimiento de la población entre los años 1995-2000 fue de 2,9%. Para el periodo 2000-2005 se redujo al 1,6%, siendo inferior en el ámbito rural con 1%. Los resultados del Censo Nacional de 2007 indican que la tasa anual de crecimiento intercensal 1993-2007 fue de 1,6%, llevando a que la población total se sitúe en 28 220 764 habitantes.

Ya en 2006, la población rural según la ENCO representaba solo el 25,8 % del total, vale decir, uno de cada cuatro peruanos vivía en ámbitos rurales. Tales cifras no hacen más que corroborar la ampliación de la brecha demográfica urbana rural, tendencia que para los próximos veinticinco años apunta a su profundización, en beneficio de la urbe como apreciamos en el gráfico 2.

Gráfico 2
Población urbana y rural: 1940-2008
En miles de habitantes

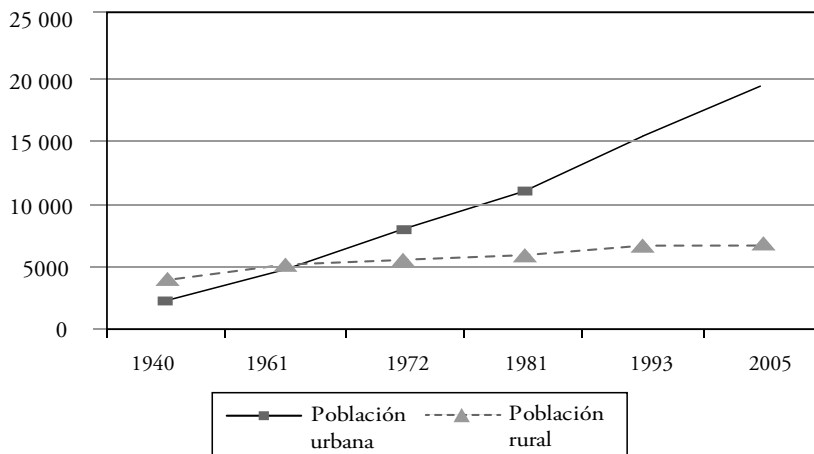
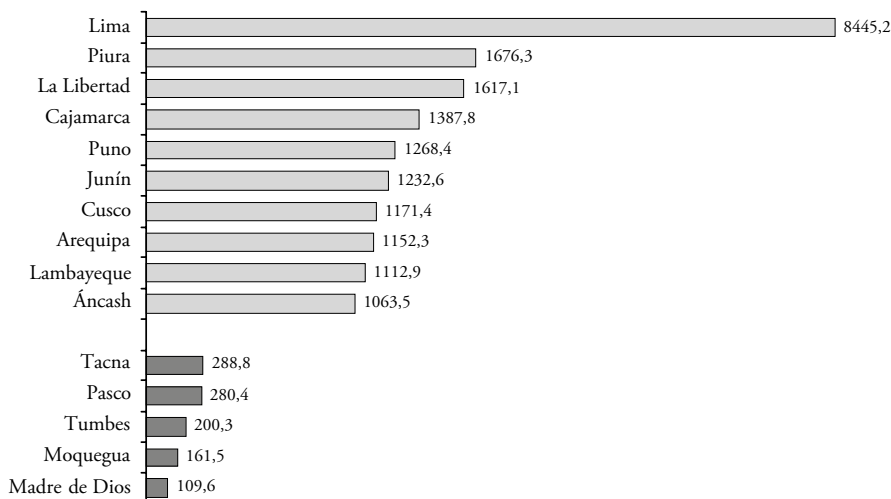


Gráfico 3
Perú: departamentos más y menos poblados (2007)
En miles de habitantes



a) Migración

Este fenómeno demográfico a escala planetaria cobra fuerza durante los últimos veinte años en el marco de la globalización. Se vincula; por un lado, con la concentración de riquezas y empleo en determinadas regiones y países del planeta

y, por otro lado, con la pobreza y exclusión que no ofrecen a sus habitantes oportunidades de mejora en sus condiciones de vida tanto en el campo como en la ciudad.

Con relación a la migración interna, la ENCO señala que el 16,7% de los hogares en el Perú tuvieron en el año 2006 al menos una persona que emigró permanentemente a otra provincia, en el área rural el porcentaje sube al 25,6%, el doble del registrado en el área urbana (13,7%). Vale decir, existe una mayor movilidad geográfica de los pobladores rurales en relación con los urbanos. La migración temporal o definitiva deviene en una suerte de válvula de escape a la pobreza secular de importantes franjas de pobladores rurales.

En un reciente artículo sobre la migración internacional en el Perú, Óscar Sandoval afirma que, entre 1990 y 2005, 1 655 850 peruanos migraron. El quinquenio 2001-2005 fue más intenso que los anteriores con un promedio de salidas anuales de 201 576 peruanos (2007, p. 117).

Entre los lugares de destino de los migrantes a nivel nacional destacan: Lima, Arequipa, Huancayo, Tacna, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y diversas ciudades intermedias. En el extranjero, sobresalen como lugares de destino Estados Unidos de América, España, Argentina, Chile, Italia, Japón, entre otros países. Aunque merece resaltarse que la migración a Europa parece crecer más que a los Estados Unidos.

Respecto de las remesas de los peruanos en el extranjero, constituyen un fenómeno relativamente nuevo que asume rasgos sorprendentes tanto por la cantidad de personas y familias involucradas como por los ingentes montos comprometidos. El volumen monetario de remesas de peruanos en el extranjero en 2006 fue de 1500 millones de dólares, habiendo crecido casi el doble en tan solo cinco años. Por otro lado, cabe indicar que el 63,2% de hogares receptores pertenecen a los estratos C y D, de manera simplificada, a las clases medias y bajas. El 5,4% de los hogares receptores de remesas o con migración internacional se ubicaba en el área rural. Por otro lado, Lima y La Libertad destacan sobre el conjunto de departamentos con hogares receptores. Con la reciente caída del valor del dólar, las familias receptoras del campo y la ciudad están siendo afectadas en su capacidad adquisitiva y de inversión.

4. LO ECONÓMICO: MERCADO, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Al comenzar la década de los ochenta y más nítidamente durante los años noventa del siglo pasado, en medio de una aguda crisis económica —bajo el paraguas de las denominadas reformas estructurales estipuladas por el Consenso de Washington y con el patrocinio de los organismos internacionales— cobró

impulso un nuevo modelo de crecimiento capitalista en el país: el exportador que reemplaza al agotado y no culminado modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

De esta forma, se liberalizan los mercados y el Estado reduce al mínimo su participación directa en la esfera productiva, restringiéndose a lo normativo y a tareas de promoción de la inversión privada nacional y extranjera. Este modelo se expande rápidamente en algunos sectores económicos como la minería, agricultura, comercio y comunicaciones, incentivados por el alza de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y por las atractivas exoneraciones tributarias gubernamentales a las inversiones.

En el presente, estamos frente a una definida política de Estado donde la consigna es exportar para crecer y desarrollarse. En efecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) tiene como meta para el 2011 que el Perú sea un país exportador con más del 36% del producto bruto interno (PBI) orientado a los mercados internacionales. Por su parte, el Acuerdo Nacional en su vigésimo segunda y tercera política de Estado menciona la modernización del agro, el apoyo a la agroindustria y el desarrollo de una política de comercio exterior.

Con el correr de los años, el modelo neoliberal en lo económico se ha instalado de manera dominante en la agricultura de la costa. Aunque solo cubre el 10% de sus tierras; no obstante, en ellas se concentra lo más avanzado de las agroindustrias y la tecnología agraria actual. De unos pocos productos agrarios en los años ochenta, hoy la oferta agroexportadora se ha ampliado significativamente a más de treinta productos y a otras regiones.

Esto por los incentivos del sistema generalizado de preferencias andino (SGPA) de la Unión Europea, las iniciativas de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) y la promesa de puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos; por las facilidades gubernamentales a nivel legal y económico otorgadas a los empresarios para concentrar e invertir en tierras con fines agrícolas. La expansión de las economías China, India y de otros países asiáticos ha contribuido al incremento de la demanda internacional de frutas y hortalizas nacionales.

a) Crecimiento de los mercados agrarios

Durante el periodo 2001-2006, se expanden los cuatro tipos de mercados existentes para los productores agrarios, destacando a todas luces el mercado externo con una tasa de crecimiento encima de 12,1, a diferencia de los mercados restringido e industrial que crecen a una magra tasa de 1,4 tal como apreciamos en el cuadro 2.

En 2006, la balanza comercial del país fue de 7958 millones de dólares, tres veces más que la de 2004; productos manufacturados, mineros y agrarios vendidos en el extranjero están detrás de ello. Asimismo, la balanza comercial agraria ha pasado a ser favorable en un tiempo relativamente corto debido al incremento de nuestras agroexportaciones, en particular las no tradicionales que desde comienzos de la década del noventa hasta el presente aumentaron a tasas por encima del 7% anual.

La balanza comercial agraria en el periodo 2000-2006 tuvo dos fases, una negativa entre los años 2000-2002 y otra positiva entre los años 2003-2006. Esta última fase se caracterizó por su tendencia ascendente, superando en 2006 la barrera de los 1500 millones de dólares debido al mayor dinamismo de las exportaciones de café, frutas, hortalizas y colorantes.

En cuanto a la balanza agrícola, el periodo 2000-2006 muestra un comportamiento positivo por el incremento sostenido de las exportaciones, las cuales experimentaron una variación de 190% al pasar de 408 a 1185 millones de dólares.

Las importaciones agrícolas en el mencionado periodo también se incrementaron en 30% pasando de 335 a 507 millones de dólares, estando compuestas principalmente por cereales, trigo, maíz amarillo duro y arroz.

Cuadro 2
Tasas de crecimiento del valor bruto de la producción agraria (VBP)

Años	Mercados			Externo
	Urbano	Restringido	Industrial	
1950-1959	4,0	0,5		3,2
1970-1976	4,5	-1,1		-1,3
1977-1981	1,7	1,1		6,3
1982-1985	3,5	-2,8		8,2
1986-1990	1,2	-6,1		-2,8
1991-1995	6,3	3,2	3,8	7,2
1996-2000	7,2	5,8	1,4	8,3
2001-2006	4,7	1,4	1,4	12,1

Fuente: Datos del Minag-DGIA

Elaboración: AgroData-CEPES utilizando las categorías de análisis Hopkins y Figueroa

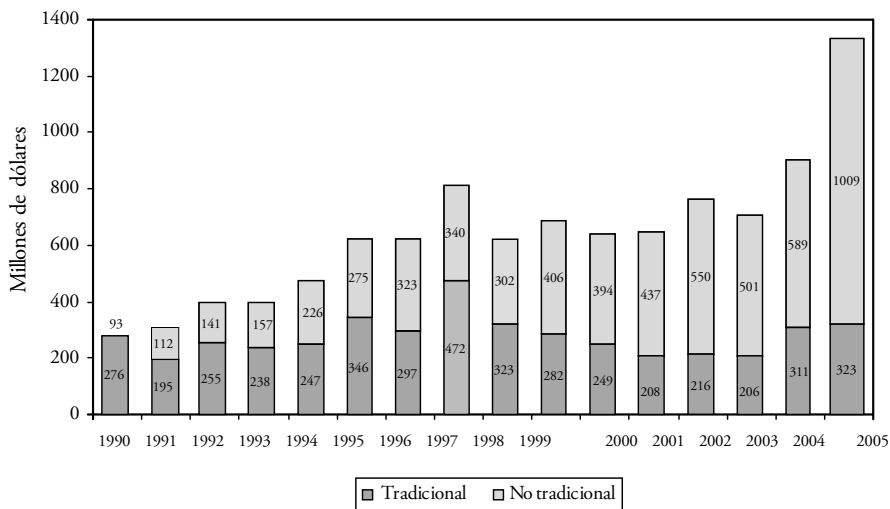
A contracorriente de estos crecimientos, la participación de la agricultura en el PBI ha seguido declinando porcentualmente por el mayor peso de la minería y la manufactura. En 2007, el incremento del PBI agropecuario estuvo por debajo del promedio nacional. Empero, la agricultura persiste como la mayor fuente de empleo. Así, en el año 2006, la población económicamente activa agrícola representaba el 32% del total nacional, aunque en forma progresiva van ganando presencia otras actividades productivas.

b) Empresas agroindustriales

Alrededor de las nuevas grandes propiedades viene configurándose una agroindustria muy diferente a la tradicional, integrada por molinos de arroz, fábricas de productos lácteos y de alimentos balanceados, cuyos productos se destinaban básicamente al mercado interno, con excepción parcial de aquellos salidos de las desmotadoras de algodón y los ingenios azucareros y dirigidos a los mercados externos.

En 2006, había registradas en el Estado más de 4000 empresas exportadoras, de las cuales aproximadamente 500 eran agrarias, representando al 13% del total de empresas que realizan sus colocaciones en el mercado internacional. En julio de 2008, 6000 empresas exportan productos peruanos al extranjero.

Gráfico 4
Exportaciones agrarias
En millones de dólares



Fuente: MINAG, PROMPEX

El cuadro 3 ilustra quiénes son las principales empresas agrarias que trabajan con productos tradicionales y no tradicionales.

Dentro del agro tradicional destacan; por un lado, las empresas azucareras que fueron adquiridas por inversionistas privados nacionales y extranjeros, luego de la liquidación de las cooperativas de producción; por otro lado, sobresalen empresas privadas y cooperativas exportadoras de café y cacao.

Cuadro 3
Las veinte principales empresas agrarias por sectores y valores de producción en \$FOB año 2003

Enero-febrero			25 481 692	Enero-febrero			94 061 206
2003	%	Empresa	fob	2003	%	Empresa	fob
1	18,84	Louis Dreyfus Perú S. A.	4 801 913	1	4,76	El Pedregal S. A.	4 479 300
2	6,42	Complejo Agroindustrial Cartavio S. A. A.	1 637 162	2	4,73	Trillium Agros del Perú S. A.	4 447 096
3	5,17	Perales Huanacruna S. A. C.	1 316 943	3	4,05	Sunshine Export S. A. C.	3 813 997
4	4,45	Cía. Internacional del Café S. A. C.	1 134 994	4	3,71	Camposol S. A.	3 489 674
5	4,42	Cent de Coop Agrar Cafet Cocla Ltda. 281	1 127 484	5	3,62	Agrowest S. A.	3 406 656
6	4,41	Agro Industrial Paramonga S. A. A.	1 123 301	6	3,55	Bounty Fresh Peru S. R. L.	3 340 623
7	4,31	Empresa Agroindustrial Tuman S. A.	1 099 258	7	3,09	Agrícola Tereza S. A. C.	2 908 548
8	4,21	Empresa Agroindustrial Casa Grande S. A.	1 071 848	8	2,76	Kraft Foods Perú S. A.	2 592 633
9	3,94	Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A.	1 002 832	9	2,35	Alicorp S. A.	2 215 081
10	3,68	Cafetalera Amazónica S. A. C.	936 734	10	2,20	Agro Industrias Backus S. A.	2 071 479
11	3,00	Compañía Peruana del Azúcar S. A. C.	763 723	11	2,06	Damper Trujillo S. A. C.	1 936 828
12	2,89	Gonzales Quintanilla Jorge	735 158	12	1,87	Tabacalera Nacional S. A. A.	1 756 941
13	2,85	Inversiones y Servicios S. A.	725 550	13	1,67	IQF del Perú S. A.	1 572 724
14	2,82	Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S. A. A.	718 782	14	1,55	Sociedad Agrícola Drokasa S. A.	1 458 410
15	2,35	Empresa Agroindustrial Pomalca S. A.	598 582	15	1,47	FLP del Perú S. A. C.	1 386 214
16	2,24	Industria Peletar Artesanal S. A. C.	570 147	16	1,43	Athos S. A.	1 348 294
17	2,09	Mesias Inga Dimas Claudio	532 824	17	1,43	Complejo Agroindustrial Beta S. A.	1 340 660
18	2,04	Valdivia Canal Hugo	520 163	18	1,36	Empacadora de Frutos Tropicales S. A. C.	1 283 652
19	1,84	Comercio & Cía. S. A.	468 015	19	1,31	Tal S. A.	1 229 559
20	1,75	Industrial Pucala S. A. C.	445 475	20	1,17	Gloria S. A.	1 099 144

Fuente: Aduanas
Elaboración: Adex (2003, p. 66)

En el denominado «agro no tradicional» sobresalen empresas pertenecientes a grandes grupos empresariales como el Grupo Gloria, Alicorp S. A., Drokasa, Agroindustrias Backus S. A. que exportan *commodities* exitosos como el espárrago, la paprika, el mango, la palta, la alcachofa, la uva, entre otras frutas y legumbres de alta cotizacion en el mercado internacional. Se trata de las exportaciones no tradicionales, cuyo valor para 2005 superaba los mil millones de dolares.

Merece destacarse que la division de empresas de agro tradicional y agro no tradicional esta volviendose obsoleta en tanto varias de las empresas consideradas agro tradicional han sido reestructuradas y vienen destinando una proporcion de sus tierras para cultivos de exportacion. Se estima que en la nueva agroindustria exportadora trabajaran entre 80 000 y 100 000 obreros, permanentes y sobre todo estacionales. Quienes son?

De acuerdo al estudio de la Universidad del Pacifico realizado el 2005 en Ica, el perfil del obrero agroindustrial se caracterizaba por su juventud (84% fluctua entre 17 y 35 anos) en su mayora con escolaridad completa. A ello le debemos agregar su rostro femenino en medida importante. (Valcarcel, 2007, p. 6)

Los asalariados agrcolas estacionales en La Libertad e Ica —los departamentos que mas han destacado en la agroexportacion— provienen en buena medida de las provincias andinas vecinas. Con relacion al origen, numero y experiencia de estos trabajadores, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, en mayo de 2008, declaraba:

En solo tres anos, la demanda de trabajadores en Ica, por ejemplo, ha pasado de 10 a 40 mil y esta esta cubierta con campesinos de Huancavelica y Ayacucho, pero que su experiencia en el manejo de productos de exportacion no es buena.

En cuanto a las condiciones laborales en que se desenvuelven estos trabajadores, diversos estudios (Arias & Mejia, 2000; Fernandez Maldonado, 2006; Miro Quesada & Moreno, 2006; Calisaya & Flores, 2006) llaman la atencion sobre jornadas laborales prolongadas, la falta de seguridad en el trabajo, la carencia de algunos derechos (seguro social, vacaciones, compensacion por tiempo de servicio (CTS)), en particular, sobre las mujeres en estado de gestion y los trabajadores eventuales.

c) Produccion agropecuaria

En lo que va del presente milenio, se observa la recuperacion de la produccion de cafe y azucar, tradicionales productos de exportacion, aunque una parte menor es destinada al mercado interno.

La producción vacuna de carnes y leche también ha ido incrementándose en los últimos años como consecuencia del aumento de la demanda interna. Por otro lado, en relación con las transformaciones tecnológicas agrícolas en regiones y áreas determinadas del país, observamos que en la costa, como hemos señalado, destacan los valles de Ica y La Libertad con mejoras en los sistemas de riego, fertilización, almacenamiento, refrigeración, control de calidad, certificación y transporte. Apreciamos un dualismo tecnológico, que amplía las brechas de productividad entre productores regionales. La sierra, con excepción de algunos valles interandinos, permanece sin claras innovaciones.

d) Sistema financiero

Es bajo el nivel de presencia bancaria en la actividad agropecuaria (el financiamiento solo representa el 5,6% del PBI del sector). Según el Ministerio de Agricultura, se requieren cerca de 4000 millones de dólares para financiar las actividades agrícolas a nivel nacional. De este total, el sistema bancario financia solo el 38%. El resto se cubre con préstamos de las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa (EDPYMES), cajas rurales, cajas municipales, cooperativas de crédito, transportistas, comerciantes, usureros, etcétera.

Cabe recordar que el Banco Agrario fue clausurado en 1992 junto con toda la banca de fomento del Estado dentro del marco del ajuste y reformas estructurales. En 2002, durante el mandato de Alejandro Toledo, el Banco Agropecuario comenzó a operar, lo cual generó gran expectativa en el sector respecto a sus alcances y beneficiarios.

Cuadro 4
Créditos al sector agropecuario

Institución	2006	Octubre de 2007	Porcentaje
Banca comercial	1 206 273	1 523 803	26,3
Cajas municipales	115 391	143 343	24,2
Cajas rurales	138 125	148 562	7,6
EDPYME	34 733	51 979	49,7
Agrobanco	120 694	146 629	21,5
Total	1 615 216	2 014 316	24,7

Fuente: *Agro Noticias*, 327, 2008

Hoy funciona con el nombre de Agro Banco. La filosofía de este banco renovado se resume en dar al agricultor un primer impulso como capital de trabajo para que después se convierta en sujeto de crédito del sector financiero privado.

Fue creado como un banco de segundo piso, para trabajar con instituciones de intermediación financiera; utilizando las ventanillas del Banco de la Nación, con toda su infraestructura física y de servicios. Dispone de oficinas regionales en Piura, Tarapoto, Trujillo, Huancayo, Cañete, Arequipa y Cusco.

Asiste a productores agropecuarios organizados en cadenas productivas que agrupan a pequeños agricultores y comercializadores. Los créditos que otorga están sujetos a supervisión para saber adónde van los recursos, cómo se usan y asegurar su retorno; además incluyen financiamiento de asistencia técnica para fomentar la productividad de los cultivos.

Para 2008, el Ministerio de Agricultura previó destinar cerca de mil millones de nuevos soles en créditos, resultado del apalancamiento financiero de los diversos fondos de la alianza entre el gobierno central y regional, el Fondo de Reactivación Agraria y el Fondo Crediagro.

e) Urbanización y servicios: agua, electricidad y comunicaciones

Cabe acotar que el campo se está urbanizando en términos de equipamiento, aunque de manera más bien lenta y desigual por regiones; lo inverso también ocurre, la ruralización de las ciudades, aunque este fenómeno resulta menos visible. Organismos puntales de este proceso de urbanización del campo son los municipios (Caballero, 1992; Remy, 2007).

Es destacable en el último tiempo el incremento de la población de origen rural asentada en pequeñas localidades y ciudades intermedias, lo que facilita el acceso a diversos servicios. De esta manera, si bien se ha avanzado en la instalación de la red pública de agua a domicilio, solo el 27% de las viviendas rurales tiene acceso a este recurso, por lo que es urgente ampliar más la cobertura dadas sus múltiples implicancias en la alimentación y salud de los pobladores rurales.

Cuadro 5
Evolución del estado de la red vial nacional

Red Vial	Total km		Bueno		Regular		Malo	
	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995
Asfaltadas	5740	6096	1394	4077	1985	1232	2361	787
Afirmadas	6958	6843	489	925	3928	4687	2541	1231
Sin afirmar	2994	3574	0	0	992	1785	2002	1789
Total	15 692	16 513	1833	5002	6905	7704	6904	3807
%	100	100	12	30	44	47	44	23

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 1995. Tomado de Remy (2007)

En relación con la electrificación de los pueblos hay progresos; no obstante, en el presente, siete millones de peruanos habitantes del campo y la ciudad carecen de electricidad.

Según Juan Valdivia, ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Alan García, se completó el abastecimiento de energía a 1437 poblados entre 2006 y 2008. Siendo objetivo de su portafolio superar los 6000 centros poblados al finalizar los cinco años de gobierno aprista, para incorporar de esta manera a dos millones de peruanos al servicio eléctrico (*El Comercio*, B5, 27 de mayo de 2008).

Como consecuencia de las inversiones estatales en el primer lustro de la década del noventa, la red vial nacional tuvo una mejoría en su estado de conservación, tal como apreciamos a continuación.

Algunos impactos cualitativos con respecto a la infraestructura vial en las zonas rurales por efecto de la expansión vial son señalados por María Isabel Remy (2007, p. 2) cuando escribe:

El Programa de Caminos Rurales (PCR) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se inserta en estos nuevos procesos demográficos, sociales, económicos y culturales; en esta nueva construcción de los espacios en el país, dinamizándolos al viabilizar nuevas relaciones y nuevas vivencias campo-ciudad, acortando distancias físicas y culturales entre estos ámbitos renovados y los actores que en ellos se desenvuelven. Efectivamente, una evaluación detallada del Programa Caminos Rurales realizada en 2005 permitió ilustrar el mejoramiento de las condiciones de transporte (una reducción del 68% del tiempo de viaje) pero también el impacto en términos de acceso a escuelas (un 8% en registro de alumnos) y a centros de salud (un aumento de 55% en el número de visitas), así como mejoras en las condiciones de producción (la superficie de los terrenos para la agricultura aumentó un 16%) y sobre los ingresos de los hogares rurales (los ingresos de actividad agrícola aumentaron un 20%).

Actualmente hay dos megaproyectos viales en marcha: la Interoceánica Sur y la Interoceánica Norte que unirán por tierra la cuenca del Atlántico con la del Pacífico y cuyos efectos se percibirán con claridad en los próximos años.

La ampliación de caminos y carreteras rurales ha contribuido a la urbanización del campo, sin desconocer la precariedad de este proceso en múltiples distritos y aspectos como servicios de agua y luz eléctrica restringidos por horas del día. Pero también los caminos, al favorecer la emigración, propiciaron la ruralización de las ciudades, en particular en lo cultural al trasladar fiestas, música, comidas, hábitos, etcétera.

Cabe agregar a lo señalado que hoy existen más vínculos entre los espacios rurales y urbanos por lo que algunos analistas denominan a estos puntos de contacto y transacción «espacios rururbanos».

5. EN LO POLÍTICO

En relación con los cambios políticos, destacamos tres procesos: regionalización, municipalización y pacificación incompleta.

Las políticas agrarias han estado mayormente supeditadas, por un lado, a la hegemónica política macroeconómica acorde con el modelo neoliberal y, por otro, al apoyo a la reconstrucción de una clase empresarial que dirija la modernización del agro peruano como afirma el sociólogo Fernando Eguren (2004, p. 28), relegando en esta estrategia a la pequeña producción agropecuaria a un segundo plano.

La orientación de las políticas gubernamentales, señalamos en la introducción de este ensayo, va atada al modelo económico exportador. Nuevos programas estatales como Sierra Exportadora⁵, y acuerdos como el TLC con los Estados Unidos⁶, Canadá, Singapur y otros, se inscriben en la línea que ve hacia fuera la solución a los problemas de crecimiento de nuestra economía. Mientras los gremios agrarios aglutinados alrededor de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) plantean más bien un «TLC hacia adentro».

El actual gobierno aprista persigue aún más la privatización de tierras, agua y otros recursos comunales e indígenas, y su expresión legal, el decreto legislativo 994 —que desconoce la propiedad de las comunidades campesinas al imponer la inscripción en los registros públicos de sus títulos, lo cual no es obligatorio según nuestra legislación— y el decreto legislativo de mayo de 2008 por el cual se reduce el número de votos requeridos para que las comunidades campesinas y nativas decidan vender o alquilar sus tierras.

a) Regionalización

En 2002, durante el gobierno de Toledo, fue promulgada la Ley de bases de la descentralización 27783 y la Ley orgánica de gobiernos regionales, que norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Con esta medida se promueve la expansión de prácticas democráticas a través de la participación popular en las elecciones regionales. Empero:

[...] la participación enfrenta también problemas relativos a la desigualdad. Sabemos que van a estar en desventaja: las mujeres, especialmente si son pobres, los campesinos de las comunidades más excluidas. (Grompone, 2004)

La construcción de ciudadanía avanza a pasos lentos y de manera heterogénea en el campo. Las zonas de mayor pobreza y exclusión son proclives a la reproducción de relaciones de peonaje y servidumbre, antítesis de las prácticas

⁵ Anteriormente hubo el Plan Sierra.

⁶ Su puesta en marcha comenzó en el 2009.

ciudadanas, como ocurre en la selva entre algunos grupos nativos y extractores de madera (Bedoya y otros, 2007).

b) Municipalización

Se constatan mayores responsabilidades otorgadas por el gobierno central a los municipios en los sectores de salud, educación, transporte, impuestos y, en general, en tareas vinculadas al desarrollo.

Varios concejos ediles rurales cuentan con apreciables recursos económicos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras así como recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)⁷. Así los distritos de la sierra rural pasaron de recibir algo más de 1200 millones de soles en 2004, a alrededor de 1900 millones en 2006. Los municipios rurales enfrentan un problema de escala y escasa infraestructura. Estas entidades abarcan en promedio 5700 habitantes que se encuentran dispersos y poco conectados; por ejemplo, tan solo el 21% de los distritos de la sierra rural llegan a más de 8000 habitantes. Si bien los municipios rurales tienen cinco computadoras en promedio, tan solo el 18% de estos se encuentra conectado a internet. Estas cifras ponen en evidencia las carencias tanto de capital humano, como en el acceso a la infraestructura necesaria para la gestión municipal (De los Ríos, p. 2008).

Coincidimos con este autor cuando escribe a continuación que:

Un elemento característico de estos gobiernos municipales es su escasa articulación con instancias superiores de gobierno que permita que se generen energías y visiones comunes de desarrollo. La ausencia de un plan de desarrollo nacional limita las posibilidades de articular esfuerzos en las distintas instancias de gobierno, al no tener un referente común con prioridades establecidas.

En suma, los gobiernos locales enfrentan la paradoja de disponer de recursos financieros pero de poca capacidad de gasto y coordinación con entidades externas.

c) Pacificación incompleta

La paz interna era ya una realidad a mediados de los noventa que contribuía a la reactivación económica y social de los pueblos rurales, favoreciendo el retorno de centenares de desplazados, salvo en determinadas zonas de la Amazonía y los

⁷ Cabe mencionar que el FONCOMUN es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, que tiene la finalidad de asegurar el funcionamiento de las municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales. Los recursos que se distribuyen por el FONCOMUN están determinados principalmente por la recaudación del impuesto de promoción municipal.

Andes centrales donde se mantuvieron y continúan actuando hasta ahora pequeños remanentes de grupos subversivos senderistas vinculados al narcotráfico como ocurre en el valle del río Apurímac Ene (VRAE) y en el valle del Huallaga. En este último operaría la columna armada del denominado «camarada Artemio».

El diario *El Comercio* señalaba el 2 de mayo de 2008 la existencia de ocho provincias del país en las que se prorrogó el estado de emergencia y, con ello, la suspensión de las garantías constitucionales por existir focos subversivos operativos o latentes.

6. EN LO SOCIAL

a) Organizaciones

El último Censo Agropecuario de 1994 mostraba varios tipos de organizaciones con presencia en el campo peruano que aglutinaban en conjunto a más de 600 000 productores agropecuarios.

En el presente, observamos un moderado cambio en el mapa institucional expresado en la desaparición o debilitamiento de algunos grupos e instituciones como la Organización Nacional Agraria (ONA), en contraposición con la emergencia y/o consolidación de formas de organización social ya existentes.

Entre estas últimas destaca, por un lado, el liderazgo de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), foro pluralista de análisis, evaluación técnica y concertación democrática, que no tiene funciones gremiales ni político-partidarias, en ella participan 58 organizaciones de productores agrarios y de profesionales agrarios, así como entidades técnico-científicas, de investigación rural, prensa agraria y otras organizaciones afines interesadas en el debate y esclarecimiento de la situación agraria nacional. Por otro lado, sobresale el rol relevante de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) como instancia de presión política de los pequeños y medianos agricultores⁸. Asimismo, el surgimiento de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) que demanda el empadronamiento nacional de cocaleros, el cese de las erradicaciones de los cultivos de hoja de coca, una política responsable ante el incremento del precio de la canasta básica, y una ley sobre la hoja de coca.

Continúan perfilándose en el campo las organizaciones de mujeres aglutinadas en clubes de madres, comedores populares, en las asociaciones de padres

⁸ La JNUDRP representa a 1 600 000 productores agrarios de las tres regiones del país, agrupados en 1488 comisiones de regantes que, a su vez, están representados en 110 juntas de usuarios. A decir de sus directivos, es el gremio de gremios.

de familia (APAFA), en comités pro determinados servicios en beneficio de sus comunidades, en municipios, proyectos de desarrollo pero aún a bastante distancia de la participación y representación masculina (Diez, 1997).

En los últimos años, ha predominado que las organizaciones no gubernamentales (ONG) ruralistas apoyen la creación de unidades empresariales y/o fomenten asociaciones entre los pequeños productores, dentro de la lógica de lograr rentabilidad y acumular para dejar atrás las condiciones de pobreza. En el campo, ello ha significado asumir el discurso optimista de las posibilidades que tienen los productores agrarios —a través de las cadenas agroindustriales y de los nuevos productos de exportación no tradicional— de integrarse exitosamente al mercado internacional.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en 2003, registró 955 ONG aunque no precisaba cuántas actuaban en el campo. Asimismo, dio cuenta de 81 entidades e instituciones de cooperación técnica internacional constituidas en el extranjero (ENIEX). Para 2008, se estima que 150 ONG trabajan en proyectos agropecuarios⁹.

Igualmente, se aprecia la creación de nuevas asociaciones como la Asociación de Productores Ecológicos, la Asociación de Productores de Café Orgánico, la Asociación de Productores de Azúcar y Biocombustibles (APPAB), etcétera. Por parte del Estado, con el apoyo de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), da un fuerte impulso a las cadenas productivas, preferentemente por línea de productos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Se piensa romper de esta manera el aislamiento individual de los pequeños agricultores y lograr coordinadamente reducir los costos de transacción para alcanzar economías de escala. Algunas de las múltiples cadenas productivas que hoy operan en el país son la cadena de maíz amarillo duro, en el valle de Huaura; la cadena productiva de algodón orgánico en el valle de Cañete; la cadena productiva de menestras en Ucayali; la cadena productiva de alcachofa en el valle del Mantaro; la cadena productiva de mango en Piura y la cadena productiva de café orgánico en la selva central.

Igualmente, los organismos estatales validan programas sociales como JUNTOS y CRECER antes que programas de desarrollo en las zonas rurales, con algunas excepciones como el Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) y el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales y Productivas de la Sierra (ALIADOS), creado el 17 de julio de 2008, y que se ejecutará con la cooperación financiera del Banco Mundial.

⁹ Carlos Pando, Director Ejecutivo de APCI, comunicación personal.

b) Conflictos

Asistimos en el campo peruano a la emergencia de conflictos y movimientos sociales con características territoriales y ambientales, entre nativos amazónicos (ashuareños) enfrentados a empresas madereras y petroleras (PLUSPETROL); entre localidades y pueblos rurales de la costa y sierra con empresas mineras transnacionales, como fue el caso del pueblo de Tambogrande en Piura con la empresa canadiense Manhattan, la británica BHP Billiton S. A. con el pueblo de la provincia de Espinar en Cusco. Las comunidades campesinas Yanta y Segundo y Cajas con Río Blanco Copper (antes Majaz), empresa minera hoy de propiedad china.

En el agro de la costa, los conflictos sociales han estado enmarcados sobre todo en las luchas de los trabajadores agrícolas de las nuevas agroindustrias por el derecho a la sindicalización, mejores salarios y condiciones laborales y de salud (ISAT, 2005; Fernández Maldonado, 2006; Calisaya & Flores, 2006; Flores Mego & Vásquez, 2008).

c) Coca, movimiento cocalero y narcotráfico

En nuestro anterior ensayo, «Sociedad rural 1950-1994», escribimos que a lo largo de los años ochenta en la selva del valle del Huallaga, por acción de los campesinos migrantes andinos, el cultivo de la coca iba superando en hectáreas al café, arroz y maíz amarillo duro.

A comienzos del primer lustro de la década de 2000, asistimos a un peligroso desborde territorial de producción de coca con fines ilícitos y, consiguientemente, de bandas organizadas de narcotraficantes con control de gentes y espacios en diversas localidades de la Amazonía. Al respecto, Pien Metaal (2005, p. 12) ha señalado que:

Según datos de la ONU, los cultivos de uso ilícito se incrementaron en el Perú, en un 14% en 2004. En el Alto Huallaga el incremento llegó a ser de 24%. Pero más preocupante que este aumento en sí mismo es que la mitad de los nuevos cultivos —52%— se encuentran en ‘otros lugares’ fuera de las zonas tradicionalmente conocidas como de cultivo, lo que implica que se ha producido una intensa dispersión y más desplazamientos, muchas veces hacia zonas ambientalmente vulnerables.

Por su parte, el economista Hugo Cabieses y otros (2005, p. 35), expertos en el tema de la coca, sostienen:

En el 2002 existirían 18 mil cultivadores de coca cuya producción la destinan a fines legales: 8 mil registrados en ENACO y 10 mil no registrados; los cultivadores de coca cuya producción tiene destinos ilegales serían 37 mil según las cifras de la CNC, 52 mil si usamos la información de la UNOODC y 72 mil con la

información de los estudiosos y la ENACO. Habría pues entre un mínimo de 55 mil y un máximo de 90 mil productores de coca en el país; se estima que la región de la selva alta tiene 300 mil productores agropecuarios, lo que quiere decir que los cocaleros propiamente serían entre el 20 y 30% del total.

Los principales valles cocaleros en la selva central son: Alto Huallaga, Huallaga central y Bajo Huallaga, Aguaitía, Monzón, Pachitea-Apurímac-Ene. La Convención y Lares en el Cusco, Sandía y San Juan del Oro en Puno. Los productores cocaleros se hallan hoy organizados local y regionalmente, así han conformado, como ya señalamos, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). En 2006, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONNUD) calculó la existencia de 51 400 hectáreas de hoja de coca en el país, un incremento del 7% en relación con el año anterior. Para 2007 habría aumentado aproximadamente otro 7%.

En nuestro territorio, se producen 52 700 toneladas de coca por año, de las cuales alrededor de 7500 son de uso lícito para el consumo básicamente de campesinos de las comunidades andinas y las restantes toneladas para la elaboración de cocaína, cuya venta genera alrededor de 2000 millones de dólares anuales, de los cuales el 5% se queda en los países productores y el 95% se lo distribuyen los intermediarios y las mafias de narcotraficantes establecidas en los países ricos, consumidores de esta droga.

Resulta pertinente agregar que en los últimos años el narcotráfico adquirió otras características, por un lado, el reemplazo de los carteles colombianos por los carteles peruanos y mexicanos en algunas zonas, o nuevas alianzas entre ellos. Asimismo, que el consumo de drogas se ha incrementado en la mayoría de las ciudades de América Latina agravando la seguridad interna y la salud pública.

En suma, constatamos la inoperancia de la política antidroga diseñada en los Estados Unidos de América e implementada en nuestro país por diversos gobiernos durante los últimos treinta años. Esta se ha mostrado incapaz de reducir, menos acabar, con el flagelo del narcotráfico. Donde el peso de la estrategia no se concentra por el lado de la demanda, es decir, los consumidores, los intermediarios y el crimen organizado en los países ricos altamente consumidores de cocaína, sino en los pequeños productores de coca de la Amazonía peruana, colombiana y boliviana.

7. EN LO CULTURAL

Aquí solo pretendemos mostrar el peso creciente que tienen los medios de comunicación, el turismo y el avance de iglesias cristianas entre los pobladores del campo, propiciando cambios importantes en las identidades e ideologías.

a) Medios de comunicación

Es notoria la expansión de los sistemas de comunicación en las zonas rurales en los últimos años: radio, televisión, cine, locutorio, teléfonos fijos y celulares, cabinas de internet, prensa escrita (periódicos y revistas). La radio continúa siendo el medio más usado entre los moradores del campo, en parte por su menor costo, menor dificultad de transporte, y por su facilidad de uso empleando electricidad, baterías o pilas.

En cuanto a la telefonía móvil, esta cubre al 72,5% de los 1833 distritos del Perú. Existen 16,9 millones de líneas en servicio y, según Osiptel, a fines de 2008 habrían llegado a 20 millones. Incluso ciudades con baja penetración como Huancavelica, Madre de Dios, Apurímac y Pasco registran tasas elevadas de crecimiento de nuevas líneas de telefonía: 17%, 15%, 18% y 14%, respectivamente. Y se espera que sigan creciendo a esas tasas (*El Comercio*, 16 de mayo de 2008).

Esta expansión mediática contribuye a las transacciones comerciales y a transformar mentalidades, representaciones e imaginarios de las poblaciones rurales y sus tradicionales estilos de vida; el sistema educativo, los turistas y los emigrantes de retorno y las nuevas iglesias aportan su cuota en tales transformaciones culturales. Las tecnologías de información y comunicación (TIC), por un lado, empoderan a la población, pero, por otro, pueden fortalecer las diferencias sociales (Bossio, 2002).

b) Religiosidad

Se aprecia en el campo la expansión de las iglesias cristianas no católicas tales como adventistas, evangélicas, pentecostales, entre otras, con impactos en lo político, ético y normativo sobre las poblaciones feligreses.

A este fenómeno, el antropólogo y religioso Dominique Motte (2001) lo denomina la revolución invisible. Y el historiador Wilfredo Kapsoli (1994), en referencia a los pentecostales, los llama guerreros de la oración, quienes operan en áreas rurales, urbanas y, sobre todo, urbano-marginales.

Los grupos religiosos «cristianos no católicos» representaban el 4,5% de la población del Perú, según el Censo Nacional de 1981; doce años después, según el Censo Nacional de Población de 1993, subieron al 7%. En el último censo la cifra se duplicó, llegando al 12,5%. En 2006, la ENCO presentó un gráfico sobre esta realidad, el cual indica un crecimiento significativo de los peruanos cristianos no católicos, quienes aquel año llegaban al 19% de la población creyente en el área rural.

¿Qué implicancias específicas tienen en la vida cotidiana y trabajo de las familias campesinas estos cambios en la religiosidad? Por ejemplo, las ventajas y oportunidades logradas por medio de la membresía de ciertas Iglesias. Un tema que los antropólogos vienen estudiando.

c) El turismo

El Perú, según el INRENA, posee 7,2 millones de hectáreas con potencial para el desarrollo turístico, distribuidas en más de 25 áreas naturales protegidas.

Recientemente, el turismo internacional hacia nuestro país creció en visitantes, zonas y actividades conexas. En 2006, hubo 1 634 573 llegadas de turistas extranjeros, lo cual equivale a un crecimiento del 10% respecto a 2005. La proyección estimada del Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR) para 2007 fue de 10% de incremento, es decir, alrededor de 1 800 000 llegadas por fronteras y aeropuertos. Turismo ecológico, vivencial, cultural, de aventura, entre otras modalidades, vienen aumentando su presencia en las localidades rurales generando nuevos empleos, ocupaciones e ingresos a sus pobladores, así han proliferado hoteles, albergues, hostales, restaurantes, circuitos de transporte, centros artesanales, con efectos diversos en lo económico, cultural y ambiental que es necesario conocer y apoyar.

8. SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

En los últimos quince años, la población peruana ha continuado aumentando aunque a ritmos menores, habiendo superado la barrera de los 28 millones de habitantes. El peso urbano sigue marcando la pauta del crecimiento demográfico en nuestro país y en general en el mundo. No pocas provincias rurales se han vaciado de pobladores, otras crecen lentamente, el saldo se inclina a favor de las ciudades; sin embargo, estas tendencias generales hay que verlas por regiones, dada la diversidad de matices que presentan.

Uno de cada cuatro peruanos vive actualmente en ámbitos rurales. La cifra corrobora la ampliación de la brecha demográfica entre el mundo urbano y el rural, siendo una tendencia que para los próximos veinticinco años apunta a su profundización en beneficio de las ciudades intermedias y las futuras megalópolis.

Hoy la migración interna es mayor en las áreas rurales y está asociada a legítimas aspiraciones de movilidad social de los pobladores del campo. Por su parte, la migración internacional, que ha alcanzado proporciones elevadas, se da sobre todo en los residentes en las áreas urbanas.

El crecimiento de la gente implica siempre una mayor presión sobre los recursos naturales, los que han ido reduciéndose y disminuyendo su calidad.

Algo se ha hecho desde el Estado para contrarrestar este fenómeno, pero el balance continúa siendo adverso. La deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación de las aguas terminaron imponiéndose.

El medio ambiente, el piso material sobre el cual se construye la sociedad y se sientan las bases de los procesos productivos en el campo ha sufrido cambios en cuanto a la magnitud y calidad de los recursos. Preocupa sobremanera el cambio climático y los problemas de escasez de agua y sus secuelas que ya se están presentando y amenazan con agravarse en el mediano plazo. Emerge como la punta de un *iceberg* el deshielo de los glaciales y con ello la pérdida de la fuente de energía hidroeléctrica.

Por otro lado, dentro de los cambios sustantivos en el panorama agrario a partir de los años noventa destaca la ampliación y profundización del modelo económico neoliberal que cristaliza con nitidez relaciones capitalistas en el campo costeño y expande el mercado interno, emergiendo de estos procesos nuevos grupos sociales, como los asalariados y ejecutivos de las agroindustrias exportadoras en expansión.

La política agraria de los tres últimos gobiernos ha estado subordinada al modelo exportador y fomenta la consolidación de las élites empresariales tradicionales y emergentes. La tenencia de la tierra viene modificándose con el aval e impulso del Estado, consolidando nuevas propiedades de gran tamaño hoy en franco proceso de modernización en medio de un archipiélago de minifundios. Simultáneamente, avanzó la titulación de las propiedades de pequeños y medianos agricultores.

Es notorio el crecimiento espectacular de la agroindustria y las exportaciones no tradicionales, ampliándose el número de empresas en particular en la costa. En la sierra, la minería viene generando riqueza pero una parte menor queda en las localidades de esta región, paralelamente esta actividad constituye una de las mayores fuentes de contaminación ambiental y una de las principales causas de los conflictos sociales actuales en el campo. En la selva, el cultivo de la coca sigue siendo un tema central. Dentro de las permanencias en el agro, sin duda la producción de coca para la elaboración de cocaína y el narcotráfico son de las más visibles y conflictivas por sus secuelas negativas. Se ha comprobado el fracaso de las políticas de erradicación de los cultivos ilícitos de coca y del narcotráfico. Vinculados a estos fenómenos sobreviven sin ninguna brújula política pequeños grupos armados en la selva central.

Por otro lado, el tejido institucional ha cambiado moderadamente y se amplía con nuevas organizaciones sociales. La Junta Nacional de Usuarios de Riego y la Convención del Agro han devenido los organismos más relevantes de los agricultores en sus mediaciones con otras instancias privadas y estatales.

Los municipios rurales a pesar de sus limitaciones en infraestructura van adquiriendo un peso significativo en lo político y en el desarrollo local, contando como en ningún momento de su historia con apreciables recursos económicos. Era esperable que se presentaran serios problemas por la mayor asignación de funciones y recursos a los gobiernos locales, así como por las dificultades en la gestión e inversión dada la inexperiencia y ausencia de cuadros técnicos calificados. La regionalización en lenta marcha está generando cambios político-administrativos, a través de diversos mecanismos como el presupuesto participativo, proceso que es necesario conocer a cabalidad.

A nivel cultural, hemos destacado cómo en lo religioso prosigue el lento crecimiento de los cristianos no católicos en el campo, no exento de tensiones en su disputa por ganar feligreses y espacios sociales. Asimismo, destaca la sorprendente expansión de los medios de comunicación como la radio, la televisión, las cabinas de internet, con efectos diversos a nivel de mentalidades, valores y consumo tanto en el campo como en la ciudad. Se avanza en la integración económica, física y en una cierta homogeneidad cultural en el país. Sin mucho ruido, por otro lado, el turismo se está convirtiendo en una actividad que brinda ocupación e ingresos complementarios a centenares de familias del campo. Fenómeno poco trascendente en décadas pasadas y que hoy muestra realidades y enormes potenciales, dada la riqueza arqueológica, natural y cultural de las diversas regiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Peruana de Cooperación Internacional (2004). *Situación y tendencias de la cooperación internacional en el Perú*. Lima: Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
- Arias, Custodio & Julio Mejía (2000). *Globalización, agroindustria y trabajo femenino. La producción de espárrago en el valle de Ica*. Federación Provincial de Mujeres de Ica. Manuscrito inédito.
- Bedoya, Eduardo y otros (2007). El peonaje por deudas en la tala ilegal de madera en la amazonía peruana. *Debate Agrario*, 42, 1-30.
- Bossio, Fernando (2002). Flujos de información en áreas rurales: el caso de Combayo Cajamarca. En Manuel Pulgar-Vidal, Eduardo Zegarra, Jaime Urrutia (Eds.), *Perú: el problema agrario en debate/ SEPIA IX* (pp. 662-688). Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria.
- Caballero, Víctor (1992). Urbanización de la sociedad puneña, crecimiento y cambios en las comunidades campesinas. *Debate Agrario*, 14, 107-120.
- Cabieses, Hugo y otros (2005). *Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú, escritos urgentes. Hablan los diablos*. Quito: Abya-Yala.

- Calisaya, Miguel & Karim Flores (2006). *La agroexportación en el país de las maravillas*. Lima: Asociación Aurora Vivar.
- Chacaltana, Juan (2007). El boom del empleo en Ica. En Juan Chacaltana (Ed.), *Desafíos al desierto: realidad y perspectivas del empleo en Ica*. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación.
- Consejo Andino de Naciones (2008). *El cambio climático no tiene fronteras*. Lima: Consejo Andino de Naciones.
- Diez, Alejandro (1997). Diversidades, alternativas y ambigüedades: instituciones, comportamientos y mentalidades en la sociedad rural. En Víctor Ágreda, Alejandro Diez y Manuel Glave (Eds.), *Perú: el problema agrario en debate / SEPIA VII* (pp. 247-326). Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria – ITDAG.
- Eguren, Fernando (2004). Las políticas agrarias en la última década: una evaluación. En Fernando Eguren López, María Isabel Remy, Patricia Oliart (Eds.), *Perú: el problema agrario en debate / SEPIA X* (pp. 19-78). Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria – Oxfam.
- Encuesta Nacional Continua & Instituto de Estadística e Informática (2007). *Resultados de la Encuesta Nacional Continua 2006*. Lima: Encuesta Nacional Continua – Instituto de Estadística e Informática.
- Fernández Maldonado, Enrique (2004). La agroindustria en el país de las maravillas. *Quehacer*, 163, 14-20.
- Grompone, Romeo (2004). *Posibilidades y límites de experiencias de promoción de la participación ciudadana en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008). *Censo XI de Población y VI de Vivienda. Primeros resultados. Perú: crecimiento y distribución de la población, 2007*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática & Organización Internacional para las Migraciones (2008). *Perú: características de los migrantes internacionales, hogares de origen y receptores de remesas*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Organización Internacional para las Migraciones.
- Instituto Salud y Trabajo (2005). *Condiciones de trabajo y salud de las mujeres trabajadoras de la agroindustria del espárrago. Región Ica*. Lima: Instituto Salud y Trabajo.
- Kapsoli, Wilfredo (1994). *Guerreros de la oración. Las nuevas iglesias en el Perú*. Lima: Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación.
- Llontop, Luis (2006). La coca en el Perú. *Signos*, 3.
- Metaal, Pien (2005). *Presentación. Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú, escritos urgentes. Hablan Los Diablos*. Quito: Abya-Yala.
- Ministerio de Agricultura (2007). *Proyecto especial de titulación de tierras y catastro*. Lima: Ministerio de Agricultura.

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1995). *Plan de desarrollo de la infraestructura vial*. Lima: Ministerio de Transportes y comunicaciones.
- Miró Quesada José & Juan Carlos Moreno (2006). *Condiciones laborales en los fundos de agro exportación costeña*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Motte, Dominique (2001). *¿Una revolución silenciosa?: El impacto social de las nuevas iglesias no católicas del Perú*. Cusco: Centro Bartolomé de Las Casas.
- Remy, María Isabel (2007). *Impacto del Programa Caminos Rurales sobre la democracia y la ciudadanía en el ámbito rural*. Estudio realizado a pedido del Banco Mundial. Lima: Banco Mundial.
- Ríos, Carlos de los (2008). ¿De qué crecimiento hablamos? La persistente pobreza rural. *Argumentos*, 2(1), recuperado de <<http://www.revistaArgumentos.org.pe>>.
- Sagasti, Francisco (1997). *Pobreza, exclusión y política social: algunas ideas para el diseño de estrategias de desarrollo*. Lima: Agenda Perú.
- Salmón, Emilio (1998). Estudio económico financiero del mantenimiento de caminos rurales en el ámbito municipal. Documento preliminar. Lima: Organización Internacional del Trabajo.
- Sandoval, Óscar (2007). El estado de las migraciones internacionales en el Perú. En Oxfam, *Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe anual 2006-2007*. Lima: Oxfam.
- Tapia, Mario (1997). Desarrollo rural en el Perú: Los diferentes caminos a la sostenibilidad. En Efraín Gonzales de Olarte, Bruno Revez y Mario Tapia (Eds.), *Perú: el problema agrario en debate / SEPIA VI* (pp. 425-464). Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria.
- Valcárcel, Marcel (1995). *Sociedad rural y agricultura en el Perú (1950-1994)*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Valcárcel, Marcel (2007). Perú: nuevos ejes económicos. El caso de la agroindustria exportadora no tradicional. En *Sociedad, Cultura y Poder en el Perú de Hoy*. Seminario organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Vassilaqui, Alejandro (2008, 21 de mayo). «Más hoja de coca para el narcotráfico». *El Comercio*, p. A5.

Revistas

- Agua & Juntas*. Revista institucional de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, 9(33), 2000.
- Agro Noticias*, XXX(327), 2008.
- Revista Agraria*, 78, 2006.
- Revista Perú Exporta*, 301, 2003.

NUEVAS ÉLITES URBANAS EN CIUDADES TRADICIONALES: IMPACTOS GLOBALES EN CAJAMARCA

Pablo Vega Centeno

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, la estructura urbana de las sociedades ha experimentado importantes transformaciones. Los espacios compactos alrededor de actividades industriales han dejado de ser el principal símbolo urbano de prosperidad. Las grandes empresas del nuevo espacio industrial, como lo define Castells (1997), aprovechan las enormes posibilidades de conectividad en tiempo real que ofrecen los actuales medios de comunicación para descomponerse en diferentes unidades, donde cada una de ellas busca localizarse atendiendo las posibles ventajas adicionales, esto es fuera del proceso productivo mismo, que pueda obtener. Este tipo de racionalidad alienta la generación de concentraciones espaciales que funcionan a manera de nodos interconectados entre sí, relativamente independientes del continuo urbano, produciendo un nuevo tipo de lectura de la ciudad, donde el paradigma es la ciudad global (Sassen, 1991) y que Castells define como el espacio de los flujos (1997) y Ascher define como metápolis (1995).

Las nuevas dinámicas de localización de las grandes empresas se convierten en un extraordinario motor para el crecimiento del mercado inmobiliario, en el que el precio del terreno se multiplica de manera espectacular en los potenciales nodos de la ciudad. Del mismo modo, ocurren nuevos conflictos sociales, cuando el capital inmobiliario presiona por la expulsión de poblaciones de bajos recursos que habitan espacios urbanos con potencial promisorio para las inversiones de este tipo.

Los cambios que se operan en las urbes latinoamericanas por efecto de la globalización se experimentan principalmente en grandes metrópolis, como son los casos de Sao Paulo, Buenos Aires o Santiago. En el caso peruano, el escenario urbano donde se han producido mayores transformaciones es Lima y esto ha ocurrido recientemente, a partir de la última década del siglo XX (Chion, 2002; y Ludeña, 2003).

En una economía globalizada, la interconexión entre ciudades también se teje como red de nodos donde las jerarquías son diferentes y donde incluso muchas de ellas no son visibles a determinadas escalas. Por ejemplo, en 1999 Lima no figuraba como visible en la red de ciudades importantes de la panregión de América, a diferencia de Caracas o Santiago de acuerdo con información recogida por Deler (2004, p. 290).

Los impactos de la globalización pueden tener características específicas en los centros urbanos de menor jerarquía. En el caso peruano, la visibilidad internacional está construida sobre la base de las grandes empresas mineras que operan en nuestro territorio y no sobre sus ciudades. Estos grandes capitales operan en un espacio de flujos de escala global, por lo que su interés por tener presencia física en el entorno urbano de sus operaciones es mínimo.

La nueva minería transnacional no tiende a producir una relación con el territorio como aquella que generaron empresas como la Cerro de Pasco Corporation en la primera mitad del siglo XX. En aquel entonces, se buscaba un control espacial que permitiera asegurar una población asalariada que no tuviese mentalidad campesina, así como evitar que las ganancias se perdieron por no tener el control de la comercialización, como ocurría con la minería en tiempos de la Colonia (Contreras, p. 1988).

Hoy en día, las grandes empresas mineras ya no cuentan con miles de asalariados directamente contratados, sino que construyen una importante red de empresas proveedoras de bienes, servicios y contratos en general. La tendencia actual es más bien a evitar o reducir el control territorial.

Un caso importante de estudio es el de la manera de operar de Minera Yanacocha, que no utiliza campamentos laborales como es el caso de numerosas empresas en la región central y sur del país, y el impacto que genera sobre una ciudad intermedia como Cajamarca. Lo que interesa conocer es cómo los efectos indirectos de las actividades productivas de una empresa global pueden afectar y transformar la estructura y dinámicas sociales de una ciudad intermedia de pobre industrialización.

Con este objetivo, el presente ensayo realizará un examen de las principales características que presenta la ciudad de Cajamarca, para luego reflexionar sobre los cambios sociales que han ocurrido a nivel de sus élites urbanas. El objetivo es sentar las bases para un estudio más profundo sobre los impactos urbanos que tienen las actividades de la gran minería globalizada sobre una ciudad de dimensiones intermedias como esta¹.

La hipótesis inicial es que las transformaciones urbanas de la ciudad de Cajamarca se relacionan más con las dinámicas urbanas propias del proceso de metropolización

¹ El interés por el estudio de esta ciudad nació del acompañamiento que hice al muy buen trabajo de investigación desarrollado como tesis por Juan Luis Ossio (2006) en la especialidad de Sociología.

que experimenta Lima que con el desarrollo de las élites tradicionales de la ciudad. Por ende, estamos ante el surgimiento de nuevas élites urbanas, con poca historia regional².

2. CAJAMARCA: LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CIUDAD TRADICIONAL

La ciudad de Cajamarca es fruto de una rica y larga historia, en la que destaca el hecho de ser un espacio urbano de origen prehispánico; si bien no fue objeto de fundación española, en la Colonia su poblamiento fue reorganizado en el marco de la política de ordenamiento territorial puesta en práctica por el virrey Toledo, conocida como política de «reducciones».

Su crecimiento urbano fue lento; era un pequeño pueblo que ganó en importancia por ser sede del corregimiento de Cajamarca y por la presencia de obrajes textiles a partir de fines del siglo XVI (Sarmiento & Ravines, 2004). A mediados del siglo XVI, varias órdenes religiosas se establecieron en la entonces villa, y edificaron importantes templos como los de Santa Catalina, San Francisco, Belén y Recoleta, cuyas construcciones demoraron aproximadamente entre cuarenta y ochenta años.

Cajamarca vivió un primer florecimiento importante con el descubrimiento de las riquezas mineras de Hualgayoc en 1771, asentamiento minero situado a unas doce leguas de la ciudad (Contreras, 1995). En esa oportunidad, varios cajamarquinos se enriquecieron no solo por la explotación de plata, sino sobre todo por constituirse como proveedores de bienes para los mineros de Hualgayoc, en la función conocida como «habilitadores». Inclusive uno de ellos, don Miguel Espinach, fue alcalde de Cajamarca. Sobre el particular, Contreras recoge una interesante afirmación de Ignacio Lequanda en 1794: «Hoy es crecido el comercio de aquella villa [...], porque la gente que reside en el minera, con su cuantioso consumo robustece tanto el activo como el pasivo» (1995, p. 25). Como consecuencia de esta bonanza se edificaron importantes casonas en el centro urbano, las cuales aún sobreviven al tiempo y permiten señalar a Cajamarca como una de las ciudades del país con mayor patrimonio de arquitectura civil. Paralelamente, entre el siglo XVIII y XIX, el departamento experimentó la expansión de las haciendas, fortaleciendo el poder de los terratenientes como élite social (Zorrilla, 2005).

Cuando la explotación minera de Hualgayoc entró en crisis, entre 1812 y 1824, varias familias ya habían consolidado su posición y mantuvieron un estilo de vida señorial de carácter estamental, dependiendo de las rentas que sus latifundios

² Los primeros hallazgos encontrados son fruto de la experiencia de investigación que desarrollo en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) con los arquitectos Adriana Scaletti y Jorge Solano. Asimismo, se recogen los valiosos trabajos empíricos desarrollados por alumnos de la especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú del curso Práctica de Campo 1 en 2007.

les ofrecían. Este sector social dominará la vida de la sociedad cajamarquina hasta mediados del siglo XX, pero sin impulsar una transformación de tipo industrial, fenómeno que sí ocurrirá en la costa norte alrededor de la industria azucarera.

De acuerdo con los relatos de viajeros como el de Wiener para el año 1876, y otros testimonios, como los que recoge Buse (1999), o análisis, como el de Zorrilla, para 1920 y 1940 (2005), la ciudad, en los siglos XIX y XX, ofrece una imagen de estancamiento. En 1940, la población llegaba a los 14 290 habitantes y el espacio urbano ocupado era relativamente pequeño, por lo que los ritmos cotidianos se organizaban por desplazamientos a pie, es decir, dentro de los patrones de una ciudad tradicional. Por ciudad tradicional nos referimos a una urbe cuyas actividades económicas y sociales se tejen sobre la base indispensable de la proximidad física, situación que ha dominado la estructura urbana durante la mayor parte de la historia de las ciudades (Remy & Voyé, 2006).

Las comunicaciones con otros centros regionales eran débiles pues, como señala Zorrilla (2005, pp. 324-325), los mercados de la costa se hallaban a cinco días de viaje a lomo de mula, situación que se mantendrá hasta 1945, cuando a partir de 1940 la construcción de la carretera hace que esta vía se consolide como una infraestructura de comunicación importante.

Por otra parte, entre 1940 y 1961, a la par que se produce una reducción espectacular de la tasa de mortalidad del país, que pasa de 27,4 a 15,9 por efecto de la difusión de vacunas contra enfermedades endémicas, la tasa de natalidad permanece estable, lo que llevará a un crecimiento demográfico explosivo.

En el departamento de Cajamarca, cuya población era mayoritariamente rural, la sobrepoblación del campo originó los procesos migratorios hacia las zonas urbanas, lo que contribuyó al incremento demográfico de la ciudad, que para 1972 alcanzará los 38 400 habitantes. Este acelerado proceso de crecimiento poblacional se vio alentado por la consolidación de vías carrozables al interior de Cajamarca, que facilitaron los desplazamientos de la población rural hacia la capital del departamento.

Las actividades económicas productivas, en cambio, no experimentaron un crecimiento importante. Salvo la presencia de la empresa transnacional alimentaria Perulac a partir de 1947, que construyó un centro de abastecimiento lechero en el distrito de Baños del Inca, no se constituyeron empresas de mayor importancia. Por otra parte, la propia Perulac no invirtió en una planta productiva de gran envergadura, que generara numerosos empleos, sino más bien optó por implementar un sistema de acopio de leche ofrecida por los pequeños productores, práctica que aún continúa la compañía Nestlé.

Durante la década de los sesenta, el escenario regional estaba dominado por los latifundios, que detentaban el 60% de la propiedad rural. El desarrollo de las actividades agropecuarias mantuvo un sistema de relaciones sociales que se

sostenía en las lógicas de servidumbre de las haciendas coloniales. La existencia de procesos de acumulación de tipo capitalista en el sistema agropecuario fue por lo tanto de menor importancia.

La eliminación del latifundio con la reforma agraria del gobierno militar en 1969 tuvo un impacto social significativo, en la medida en que la élite ganadera que vivía en la ciudad migró hacia ciudades costeras como Trujillo y Lima. En términos económicos, consolidó una suerte de estancamiento del agro, pues no existieron mayores inversiones productivas en el campo. Durante la década de 1970, lo que se observará es un incremento de la presencia del Estado a través de dependencias del gobierno, instituciones educativas, de salud, municipio, policía, etcétera, que estimularán el crecimiento de la ciudad por procesos migratorios ocurridos dentro de la región.

La reforma agraria significó la introducción de cambios sociales importantes en la medida en que la élite ganadera perdió su poder económico, pero estas transformaciones no eliminaron su influencia cultural ni cambiaron la estructura productiva de la región. A pesar de que muchas relaciones de servidumbre fueron puestas en cuestión, y que la estructura social se amplió, permitiendo el ascenso social a quienes estaban vinculados a la burocracia estatal o al comercio, la élite ganadera no perdió su poder simbólico, y se mantuvo como el modelo social dominante por lo que persistirán relaciones sociales de tipo estamental durante el siglo XX.

En la ciudad continuó el crecimiento poblacional, a lo que contribuyó el terrorismo que también motivó procesos de migración campesina entre 1980 y 1992; para el censo de 1993 ya contaba con 92 400 habitantes. Sin embargo, no se registra un desarrollo productivo importante. Más bien, se consolida como centro administrativo y de servicios gracias al crecimiento de organismos del aparato estatal. Cajamarca se convierte así, en las últimas cuatro décadas, en una ciudad de mediana envergadura, que mantiene aún la lógica económica de un centro urbano vinculado estrechamente con su entorno rural, entorno que concentra aún en 2005 el 75,58% de la población de la región según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Como señalan Aramburú y Bustinza, la región de Cajamarca experimenta un proceso lento pero constante de urbanización a la vez que sigue siendo predominantemente rural, a diferencia de otras regiones del país (2006, p. 12).

Al decir de algunos estudiosos locales, «Cajamarca era, hasta antes de la llegada de la Minera Yanacocha, una apacible ciudad que bordeaba los 100 000 habitantes, en su mayoría vinculados a actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, a pequeños servicios privados o dedicados al sector público» (Cacho, 2005, p. 18). La ciudad mantuvo una dinámica de «pueblo grande», donde su centro articulaba un conjunto de barrios tradicionales. Los ritmos rurales, a través de sus ferias agropecuarias seguían marcando los ciclos de la vida cotidiana. En términos culturales, si bien ya no existían las élites ganaderas, ellas siguieron marcando la

pauta de las relaciones sociales dentro de la ciudad, donde el mundo campesino continuaba siendo un referente permanente del paisaje cotidiano.

Sin embargo, es importante advertir que esta figura de «ciudad apacible» debe relacionarse con los ritmos urbanos cotidianos, pero no a una situación de equilibrio o justicia social. Por ello, otros autores cajamarquinos, señalan que se trataba de «una sociedad injusta y excluyente, cuyas bases estructurales se hallaban en crisis» (Merino, 2005). Es en este escenario, de pocos cambios en términos de actividades productivas y donde la sociedad recién está experimentando la cancelación de las relaciones señoriales y serviles que la dominaban, en el que se insertará una nueva dinámica económica en la región: la gran minería a través de las inversiones de Minera Yanacocha S. R. L.

3. LA PRESENCIA DE MINERA YANACOCOA S. R. L.

El inicio de la explotación de yacimientos auríferos emprendida por la empresa Minera Yanacocha, en 1993, marca un hito en la región por el enorme impacto que tendrá sobre la ciudad de Cajamarca: prontamente la dinámica económica impulsada directa e indirectamente por la gran minería superará en importancia a la tradicional economía agropecuaria de la región. La gran inversión productiva que desarrolla este consorcio minero no tiene precedentes en la región, como tampoco la particularidad de que esta gran empresa no genera una economía urbana controlada directamente por ella, al contrario del modelo implementado por la gran minería de la primera mitad del siglo XX en Cerro de Pasco y La Oroya (Vega Centeno y otros, 2007). Esta nueva minería opera con perfiles que expresan claramente la presencia de nuevas relaciones con el espacio urbano colindante.

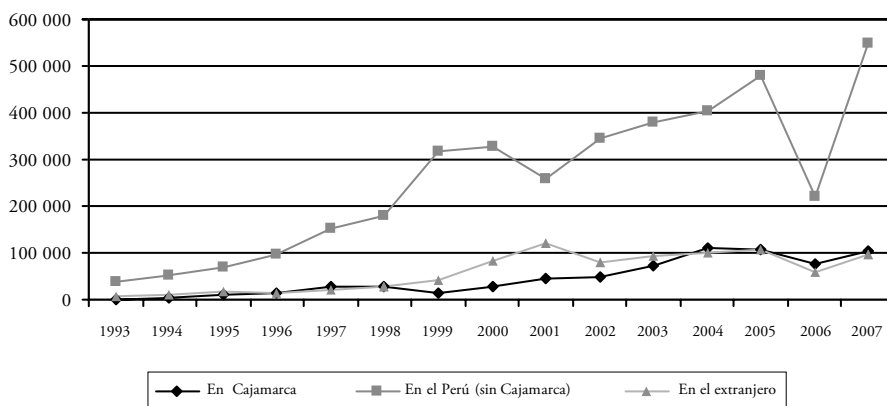
La empresa Minera Yanacocha S. R. L. está conformada por un consorcio en el que participan la Compañía Minera Buenaventura (con capital nacional) con 43,6% de las acciones, la empresa transnacional Newmont, que detenta el 51,4% de las acciones y el Banco Mundial con el 5% restante. Desde los inicios de sus operaciones en 1993, el volumen de la producción de oro se ha incrementado notablemente. Las 81 497 onzas extraídas el año del inicio de sus operaciones no tienen punto de comparación con los 3 017 303 de onzas producidas en 2004. La magnitud de esta producción ha llevado a que se considere a Yanacocha la segunda mina de oro más importante en el mundo³, lo que otorga gran visibilidad a nivel global.

³ La producción de oro se ha reducido en los últimos años y en 2007 se produjeron 1 564 000 onzas, que representan cerca de la mitad de lo que se obtuvo en el 2004. Sin embargo, la empresa aún mantiene altos niveles de rentabilidad.

La magnitud de esta escala productiva está en directa relación con la magnitud de los capitales que requiere y con la escala territorial que necesitan sus actividades productivas dado el tipo de concentración del metal. No se trata de tradicionales minerías de socavón, sino de una explotación a tajo abierto en la que de cada tonelada de material removido se extrae poco menos de un gramo de oro. Pese a ello, se calcula que el costo de producción por cada onza que se obtiene es de 100 dólares, mientras que el precio de venta supera los 400 dólares (Cacho, 2005). Se hace evidente entonces que este tipo de explotación requiere de importantes capitales que permitan incorporar tecnología de punta para hacer rentable semejante escala productiva.

Sin embargo, como se indicara anteriormente, esta empresa opera de acuerdo con las lógicas del nuevo escenario industrial. La Compañía Minera Yanacocha S. R. L. no concentra sus unidades en espacios próximos, sino que están dispersas geográficamente. Además de ello, a diferencia de lógicas mineras de ciudades industriales, la empresa no se preocupa por controlar todo el proceso productivo, sino que acude a numerosas empresas proveedoras que poseen razón social independiente. Así, la conexión de sus unidades a través de un espacio de flujos le permite elegir los servicios y bienes que precisa de parte de los proveedores más competentes y rentables, independientemente de si se hallan lejos o cerca de la unidad productiva.

Gráfico 1
Adquisiciones de minera Yanacocha
En miles de dólares



Fuente: Yanacocha (2007)

Esta manera de operar, racional dentro del espacio económico global, lleva a consolidar los lazos de Yanacocha con las empresas proveedoras más competitivas, las cuales se encuentran en Lima o fuera del país. De esta manera, en una economía que opera en el espacio de los flujos, el nodo urbano más beneficiado con el crecimiento económico será el constituido por los centros urbanos más

competitivos, entre los que sobresale la propia capital del país. El gráfico 2 nos permite apreciar cómo el volumen de adquisiciones que la empresa ejecuta en Cajamarca no representa sino alrededor de la quinta parte de lo que Yanacocha compra en el conjunto del país.

Sin embargo, la empresa está situada en uno de los territorios con menores índices de desarrollo humano del país⁴, lo que incrementa más aún el enorme contraste entre el nivel de inversiones y movimiento de capitales de la minería y la economía urbana de la ciudad. Debido a lo cual, por ejemplo, los ingresos de los operarios de mando bajo que trabajan en la empresa o con sus proveedores resultan siendo mucho más importantes que los salarios de la clase media cajamarquina⁵.

Por otra parte, según el testimonio de profesionales cajamarquinos, los funcionarios de alto rango mostraron en su comportamiento con la región poco respeto al medio, sustentando su indiferencia en el cumplimiento de todas las normas y estudios de impacto que habían sido exigidos por el gobierno nacional. Minera Yanacocha demostró coherencia en su actuar como empresa global, eficiente en la consolidación de su red nodal, pero durante sus primeros años se mostró poco atenta al territorio donde se insertó, limitándose a cumplir las condiciones jurídicas que regían para operar legalmente.

A finales de la última década del siglo XX, se denunció la contaminación de las nacientes del río Mashcón, lo que indicaba posibles daños ambientales debido a la explotación minera. Pero uno de los hechos más graves ocurrió en el año 2000, cuando accidentalmente se produjo un derrame de mercurio de uno de los transportes de la empresa en las proximidades del pueblo de Choropampa, lo que ocasionó que varias personas sufrieran niveles graves de contaminación, pues recogieron el mineral y lo llevaron a sus domicilios. Más adelante, ese mismo año, la empresa buscó explorar nuevas fuentes en el cerro Quilish, pero el temor de la contaminación y la poca popularidad de la empresa llevó a que la población tanto campesina como urbana expresara abiertamente su oposición, lo que tuvo como consecuencia la ordenanza municipal que declaró al cerro Quilish zona de protección municipal.

Como consecuencia de esta situación, la empresa cambia su política con la región y busca tender puentes con la población para mitigar las consecuencias negativas que el descontento social podría tener para sus intereses. En atención a su nueva estrategia, en 2002 promueve la formación de un organismo para

⁴ En el *ranking* regional del índice de desarrollo humano 2006, Cajamarca figura en el puesto 19 de 24 regiones según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es la última en escolaridad y logro educativo. Véase <<http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx>>.

⁵ Por ejemplo, un conductor de «jolpack» gana el doble que un profesor universitario (Merino, 2005).

canalizar los programas sociales dirigidos al desarrollo de Cajamarca, iniciativa que culminará en 2004 con la creación de la Asociación Corporativa Los Andes de Cajamarca, dependiente de la empresa.

Por otra parte, a partir del año 2003 aumentarán las adquisiciones que la empresa realiza en Cajamarca, al igual que la inversión social. En este caso, la rentabilidad deja de ser evaluada únicamente como el criterio económico de productividad, para considerar también los costos económicos derivados del impacto social negativo que las acciones y la política de la empresa pudieran tener sobre la población.

Además del incremento de las adquisiciones en la región, la relación económica con empresas situadas en Lima lleva, en varios casos, a que estas instalen subse-des en Cajamarca. La ciudad experimentará entonces en sus dinámicas cotidianas la presencia de nuevos actores económicos. Todos estos procesos y circunstancias junto con los propios requerimientos laborales de la empresa han contribuido a cambiar parte del rostro de la ciudad.

En términos urbanos, llama la atención que el núcleo del discurso «antimina», difundido entre buena parte de la población, gira alrededor del tema de la contaminación ambiental que pueda generar la explotación del oro, a pesar de que existe poca conciencia de prácticas ambientales en la ciudad (Massey, 2007). El discurso parece más bien manifestar la disconformidad de buena parte de la población con los impactos sociales y económicos negativos que se han desencadenado como consecuencia de la presencia de la gran minería en Yanacocha.

4. DINÁMICAS DE LA NUEVA MINERÍA Y CAMBIOS URBANOS

Entre las principales transformaciones experimentadas por la ciudad, no podemos dejar de mencionar los encadenamientos directos generados por la presencia de la explotación minera. Si bien la empresa Yanacocha S. R. L. no cuenta con propiedades dentro de la ciudad y solo alquila una casona para que funcione su Centro de Documentación, su presencia se puede percibir a través de otros equipamientos urbanos.

Por ejemplo, en la vía de evitamiento llama la atención el inmenso paradero de buses de la empresa. En dicho lugar, son recogidos muy temprano y luego devueltos por la tarde cientos de obreros que van a cumplir sus labores en la mina. En ese mismo eje vial, próximo al paradero, se han generado otros encadenamientos como casas de juego, casinos, o centros de diversión para adultos, que están claramente relacionados con los trabajadores de la mina. Del mismo modo, una urbanización reciente, situada en las proximidades, tiene a numerosos obreros entre sus residentes.



Paradero de autobuses de Yanacocha, hito visible en la vía de evitamiento (Archivo CIAC)

Simultáneamente, se generan otros impactos urbanos cuya relación con la explotación minera no es tan explícita, pero si se observa con cuidado, se verá que están estrechamente relacionados con esta actividad, pues son inducidos por actores sociales que reciben recursos derivados de la explotación minera que invierten en la ciudad: unos quieren obtener mayores ganancias por sus propiedades, y los otros, los foráneos, desean reproducir estilos de vida y de urbanización metropolitanos.

Estos actores han producido un nuevo crecimiento y patrón urbano en el distrito de Baños del Inca, donde se han habilitado varios condominios, cuyos compradores o inquilinos son personal calificado de la empresa o de empresas proveedoras de Yanacocha S. R. L. En este caso, el impacto es generado por la aspiración de estas personas a reproducir un modelo de vida urbano que sobredimensiona la importancia de la vivienda mientras que subvalora la del espacio público, visto como sinónimo de peligro (Sennett, 1975). Este modelo urbano traslada tipos de vivienda de distritos limeños y se introduce en el territorio sin generar vínculos con el tejido urbano existente, acentuando así las diferencias sociales con el habitante tradicional de la ciudad. No es extraño entonces que el área que ocupa la ciudad crezca de manera significativa.



Condominios en Baños del Inca, introducción de la urbanización exclusiva (Archivo CIAC)

Se comienza entonces a edificar una suerte de nueva ciudad que ignora o tiende puentes frágiles con la preexistente. En otros términos, podríamos señalar que Cajamarca se convierte en un extraño experimento, donde un tejido de nodos comienza a desarrollarse sobre la base de una ciudad compacta de tipo tradicional.

Este nuevo proceso de urbanización residencial va de la mano con el surgimiento de otros equipamientos, como colegios exclusivos (Ossio, 2006) o clínicas privadas (Madueño, 2007). Asimismo, surgen nuevos equipamientos comerciales, donde destaca el Centro Comercial El Quinde, inaugurado en 2006, que además de tiendas incluye los únicos cinemas de la ciudad. Estos equipamientos, antes que satisfacer cambios en el estilo de consumo de los cajamarquinos, están orientados sobre todo a cubrir las demandas generadas por las nuevas poblaciones urbanas llegadas a la ciudad.

En esta misma perspectiva, la pista del aeropuerto fue ampliada en el año 2002, posibilitando el arribo de aviones tipo Boeing 737, aunque el flujo todavía es pequeño⁶. También es pertinente señalar que hasta 2007, los pasajes aéreos a esta ciudad eran los de mayor costo en todo el país, lo que indica que se trata

⁶ Para el 2003, el promedio de arribo diario de pasajeros era de 85, y 52 en 2002. Véase Guerra García y otros (2006).

de un medio de transporte poco masivo, pero también que existe un segmento de población que sí está en capacidad de solventar los altos precios.

Asimismo, el flujo de personal calificado de alto rango que reside en Lima o en el extranjero crea la necesidad de un hotel que cubra los más altos estándares de confort, por lo que se construye el Hotel Costa del Sol al costado de la Catedral. Vale la pena detenerse en los impactos generados por este último equipamiento. El proyecto fue rechazado en primera instancia por la sede local del Instituto Nacional de Cultura (INC), pues la envergadura del hotel opacaba la Catedral de la ciudad. Sin embargo, los inversionistas consiguieron la aprobación en segunda instancia por la sede central del INC en Lima, con lo que impusieron este edificio en el paisaje de la ciudad.

Esta construcción expresa el advenimiento de un nuevo poder dentro de la ciudad que impone nuevas lógicas constructivas urbanas que expresan las aspiraciones y necesidades de nuevas élites urbanas e inciden también en los comportamientos de otros sectores sociales, que han iniciado la destrucción de casonas deterioradas del centro histórico para habilitar edificios nuevos, de ladrillo y concreto, pero de muy poco o nulo valor arquitectónico. Del mismo modo, existen indicios de que los servicios de restaurantes buscan transformarse para atender a un nuevo público que exige mayores niveles de refinamiento. Inclusive, universidades privadas como



Hotel Costa del Sol opacando a la Catedral (Archivo CIAC)

la Antenor Orrego de Trujillo o la Universidad Alas Peruanas han inaugurado subsedes en la ciudad, con el objetivo de formar profesionales calificados que respondan a las nuevas demandas laborales generadas alrededor de la gran minería.

La ciudad comienza su transformación edilicia y también existen cambios en el mercado inmobiliario, que ha crecido notablemente en estos últimos diez años tanto en sus lógicas formales como en modalidades ilegales. En efecto, la demanda de personal de baja calificación para el conjunto de empresas vinculadas a la provisión de bienes y servicios de Yanacocha, así como el crecimiento de la industria de la construcción también ha llevado a que se produzca una expansión urbana del lado del cerro Santa Apolonia, y hacia Mollepampa. En ambos casos, se experimenta un crecimiento sin control del proceso de urbanización, que lleva a algunos a denunciar una suerte de «chimbotización» de Cajamarca (Cacho, 2005, p. 19).

5. CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LOS RITMOS DE LA CIUDAD

En los ritmos urbanos hay algunos cambios importantes donde destaca el notable crecimiento del parque automotor, que en diez años se ha duplicado. Parte del paisaje urbano lo forman las largas colas de camionetas *station wagon* haciendo el servicio de taxi o las camionetas 4 x 4, que en casi su totalidad se desplazan entre la ciudad y la zona de explotación de la mina.

La presencia del turismo, resorte «mágico» del desarrollo al que apelan todos los organismos públicos como justificación para determinadas inversiones urbanas, no está asociada a un incremento de visitantes extranjeros a la región. Según fuentes recogidas por Beatriz Boza (2006), solo el 5% de los turistas que visitaron la región eran extranjeros. El crecimiento del turismo durante los últimos diez años se explica entonces por el incremento de visitantes nacionales. Ahora bien, es importante anotar, que los viajes de estos visitantes internos motivados por la visita a familiares y amigos estarían influenciados en parte por la presencia de fuerza laboral proveniente de otras regiones a raíz de la actividad minera, al igual que el incremento de viajes por negocios (2006, p. 63). En el caso de Cajamarca, el turismo resultaría ser un indicador de la existencia de nuevos habitantes o usuarios en la ciudad.

Sin embargo, otras cadencias indican la permanencia de una vida cotidiana que obedece aún a patrones de comportamiento propios de una ciudad tradicional. Por ejemplo, los mercadillos hebdomadarios o ferias agropecuarias siguen siendo eventos importantes que marcan los lazos intensos de esta urbe con su entorno rural⁷. Del mismo modo, los campesinos que vienen a la ciudad a ofrecer los

⁷ Sobre estos mercadillos, se puede ver el trabajo monográfico de Catherine Picardo (2007).

productos de sus parcelas, como leche, mantequilla, queso o chocolate, son también numerosos y forman parte de su paisaje cotidiano.

6. PRESENCIA DE CAMPESINOS EN LA CIUDAD

La ciudad, administrativamente se organiza dentro de un solo distrito, pero a su interior la estructura organizativa de tipo barrial todavía mantiene regular vigencia, la cual se expresa ritualmente durante las fiestas de carnaval. En la ciudad, ciertas prácticas religiosas como los cortejos fúnebres continúan llevándose a cabo a manera de peregrinación: los deudos y acompañantes se trasladan caminando desde la iglesia hasta el cementerio de la ciudad.



Campesinos en la ciudad (Fotografía de Caterine Picardo)

Otro fenómeno que llama la atención es la manera como se enfrenta la delincuencia en la ciudad. La presencia de la gran minería a través del conjunto de encadenamientos que conlleva atrajo también a la delincuencia, hecho que se expresa en el incremento en más de diez veces que experimentó la criminalidad en la ciudad. Sin embargo, a partir del año 2000, se ha logrado incidir positivamente en la reducción de hechos delictivos. ¿Cuál ha sido la explicación? En realidad, tenemos que ante la ola delincencial existieron varias respuestas: *a)* Por una parte, aquellas poblaciones con mayores niveles de ingreso optaron por la contratación de servicios privados. *b)* El serenazgo y la policía desarrollan patrullajes por la ciudad, aunque no siempre de manera perfectamente coordinada. *c)* Un tipo de respuesta original que ha tenido enorme relevancia para las dinámicas barriales de la ciudad ha sido la aparición de rondas urbanas, estrechamente vinculadas a las rondas campesinas de Cajamarca, conocidas en el país como una de las instituciones populares más sólidas y eficientes en la prevención del delito. Las rondas urbanas, cuando capturan «con las manos en la masa» a un sospechoso, lo detienen y lo llevan al campo, donde se le aplica un castigo físico y lo hacen firmar un compromiso de no volver a delinquir. Esta práctica, si bien no es aceptada por el Ministerio Público y se sanciona a los ronderos por usurpación de funciones y secuestro, es tácitamente tolerada en la actual estrategia policial para combatir la delincuencia, siempre y cuando cumpla con establecer ciertos acuerdos mínimos, como evitar actos contra la integridad del ladrón (Calderón, 2007). Estas rondas evidencian la presencia importante de prácticas rurales para enfrentar nuevos problemas urbanos.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que la mayor parte de recorridos o trayectos urbanos tienden a concentrarse hacia el centro histórico y suelen hacerse a pie. El paisaje cotidiano está marcado por ritmos peatonales, a pesar de que la infraestructura de circulación prioriza claramente al automóvil. Por ello, es usual ver personas no solo en las aceras, que además son estrechas, sino en las calzadas, entre los vehículos; ellos expresan la necesidad de una ciudad que desarrolle patrones urbanos de organización para atender la movilidad peatonal que es muy importante para gran parte de la población.

7. ¿A INICIATIVA DE QUIÉN CAMBIA LA CIUDAD?

Es indudable que la ciudad ha experimentado numerosas transformaciones en los últimos diez años. No obstante, no se trata de cambios que eliminen los ritmos urbanos preexistentes, sino que parecen convivir o por lo menos coexistir, aunque de manera poco articulada.

La ciudad tradicional, de tejido compacto, se enfrenta a nuevas situaciones, en las que residencias, zonas comerciales y espacios de recreación se instauran a manera de nodos, con poca articulación con el continuo urbano preexistente. Estas transformaciones están asociadas al nuevo movimiento de capitales generado por la gran minería. De esta manera, no es necesaria la participación directa de una gran empresa minera para que se produzcan enormes impactos tanto en el mercado inmobiliario como en la introducción de nuevos equipamientos urbanos.

La composición del actual equipo de autoridades municipales es un buen testimonio de ello, porque su objetivo es brindar equipamientos que sean sinónimo de modernidad, los cuales deben permitir mayor visibilidad nodal a la ciudad, tanto para el turismo como para el desarrollo inmobiliario. Un indicador de este objetivo es el gran proyecto del complejo Qhapac Ñan, asumido por el alcalde provincial, que implica construir un espacio que incluya un terrapuerto, hoteles, un coliseo múltiple, edificios de oficinas, un parque ecológico, un centro de atención al ciudadano, lagunas deportivas y un jardín botánico, entre otros.

Este nuevo centro de desarrollo urbano está proyectado en la periferia de la ciudad, al frente de la actual sede de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que al ubicarse al pie de la avenida que une la ciudad con el distrito de Baños, fortalecerá la conurbación, poniendo en riesgo el valle actual. Esta posibilidad es considerada una amenaza por el Colegio de Arquitectos de la Región, pues atentaría contra el equilibrio ecológico de la región; sin embargo, es vista como una tendencia inevitable por las actuales autoridades municipales que esperan reservar algunos espacios como áreas públicas.

8. TENDENCIAS DE LA EXPANSIÓN URBANA: ¿DESAPARECERÁ EL VALLE?

Cajamarca crece, el mercado inmobiliario florece y estos cambios parecen expresar la consolidación de una nueva élite urbana que ha desplazado a las viejas oligarquías ganaderas, así como a las burocracias estatales. Se trata de actores económicos ligados de manera directa o indirecta con el movimiento de capitales más importante de la región: la gran minería. Ello genera inclusive nuevos impactos a nivel perceptivo en la población, que comienza a asociar al «minero» con las insatisfacciones urbanas que pueda experimentar. Cajamarca parece progresar pero sin los cajamarquinos.

9. LOS CAMBIOS SEGÚN LAS PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN

Las importantes transformaciones que se han venido experimentando no son ajenas a la sensibilidad del conjunto de la población, que puede debatir su



Proyección del crecimiento urbano de Cajamarca. Esquema elaborado por Jorge Solano (CIAC)



Tablero de ajedrez con mineros contra campesinos como fichas, dualidad de base en el imaginario actual (fotografía: Alexandra Arca)

simpatía o antipatía con los cambios que vienen ocurriendo, pero que en conjunto consideran que los cambios son responsabilidad de Yanacocha S. R. L.

Existe una polarización en la población entre los que apoyan la presencia de la mina y aquellos que la responsabilizan de los problemas actuales que enfrenta la ciudad. La oposición que se construye suele reducirse a las imágenes del cajamarquino tradicional y el minero foráneo.

Al respecto, a título indicativo, resultan muy sugerentes los niveles de percepción construidos por un conjunto de escolares, donde sobre el marco comparativo de estos dos grandes grupos, son capaces de distinguir una estratificación social (Arca, 2007). Según este análisis, existen mineros de clase baja, media y alta, al igual que cajamarquinos de esos sectores. Es interesante observar que bajo el concepto de minero se reúnen un conjunto de competencias y actores que no necesariamente forman parte de la empresa. La observación de los niños es, no obstante, pertinente para indicar que al habitante cajamarquino no se le escapa el hecho de que el conjunto de nuevas actividades y actores urbanos tienen alguna relación con el movimiento de capitales de la gran minería. Del mismo modo, entre los numerosos hallazgos producidos por la investigación de Ossio (2006) llama la atención que, entre los niños del colegio exclusivo Davy College, las imágenes de Cajamarca se limitan a su paisaje, pero la población y la urbe están ausentes, lo que indica la pobre relación que tienen con la ciudad y sus habitantes.

Este es un proceso reciente, por el que los nuevos habitantes de la ciudad no son aceptados aún como cajamarquinos, sino que siguen siendo antes que nada mineros. Por otra parte, las lógicas de comportamiento de estos nuevos habitantes, más proclives a vivir dentro de redes nodales al estilo metropolitano, que a incorporarse en un tejido social y urbano que desconoce, permite consolidar esta imagen de habitantes que aún siguen siendo extraños a la ciudad, más allá de que tengan propiedades y trabajo dentro de ella.

Por último, llama la atención cómo la oposición minero/cajamarquino (campesino) es una diferencia más importante que la propia estratificación social en las representaciones de los escolares. En efecto, el hecho de ser rico o pobre se subordina a la relación que pueda o no establecerse con la minería. Se construye de esta manera la imagen de dos sociedades, que expresaría un nivel de fractura social preocupante.

10. NUEVAS ÉLITES, ¿NUEVA CIUDAD?

La ciudad de Cajamarca ha vivido, los últimos cuarenta años, la liquidación de una clase dominante que provenía de los grandes propietarios ganaderos de la

región. Luego de que este sector social fuera fracturado por la reforma agraria, no emergió una nueva élite en su reemplazo, salvo la presencia importante de funcionarios estatales. El crecimiento del aparato estatal generó nuevos procesos migratorios del campo a la ciudad dentro de la región. Ello vino de la mano de cierta dotación de infraestructura y equipamiento para la ciudad, aunque no significó grandes cambios en cuanto a los ritmos dominantes de la ciudad. De esta manera, la sombra de las élites ganaderas siguió siendo el modelo a seguirse dentro de una estructura social relativamente estable pero enmarcada en un contexto de pobreza.

El advenimiento de la gran minería a partir de 1993 marcó un hito nuevo, donde paradójicamente el gran consorcio Yanacocha S. R. L. evita participar o ser un actor urbano. Si bien formalmente no lo es, las características de una economía global llevan a que su presencia sí sea decisiva en los cambios sociales en curso.

En efecto, el conjunto de actores sociales y urbanos que llegan a la ciudad son consecuencia de las demandas de la gran minería. En el escalafón más alto se sitúan profesionales de alta calificación que forman parte de empresas cuyas sedes centrales se encuentran en Lima o si no fuera del país. Estos actores son los que generan nuevas necesidades y legitiman la presencia de capitales en el sector inmobiliario, dispuestos a invertir en modelos de urbanización, salud, educación, equipamientos comerciales y de diversión adecuados a los gustos de esta nueva élite, que busca acomodar, en el nuevo territorio que le toca ocupar, necesidades que eran satisfechas en Lima o en otras metrópolis del mundo.

Sin embargo, los equipamientos que se vienen habilitando demuestran que la nueva élite dominante está adoptando patrones similares a los que se observan en las urbanizaciones exclusivas de élites en Lima. Estamos frente al incipiente desarrollo de lo que los teóricos del urbanismo suelen definir como ciudad difusa (Capel, 2003). Es decir, un crecimiento que se desarrolla sobre la base de espacios cerrados conectados entre ellos a manera de red, pero que tiende a abstraer el resto de la ciudad.

Este fenómeno, que ya vive una ciudad como Lima, ocurre en un proceso donde existen grandes conflictos y tensiones, pues también está presente un modelo de vida cosmopolita, que es también producto de la modernidad y que resiste el embate dominante de la ciudad difusa. Del mismo modo, en Lima se produce el fenómeno de la ciudad popular que también defiende su apropiación del centro urbano.

Cajamarca, ciudad donde aún persisten lógicas urbanas tradicionales también vive una situación de conflicto de tendencias urbanas, pero donde las capacidades de afirmación de modelos alternativos son frágiles frente al embate de la modernidad global. Si no existen capacidades de afirmar positivamente

los valores de una dinámica urbana tradicional, con fuerte anclaje en la relación urbano-rural, es posible que la actual trama de la ciudad termine desapareciendo, desarticulando completamente un espacio que hasta la actualidad permite la afirmación identitaria de una de las ciudades con mayor historia del país.

La actual tendencia de expansión se orienta hacia la eliminación del valle, el cual resulta mucho más rentable en el corto plazo para el mercado inmobiliario que para la producción agropecuaria. La gran minería por su parte, ante la pérdida de popularidad que ha generado su influencia indirecta, parece optar por prácticas de la gran minería tradicional, como la de buscar afirmar su presencia como gran actor benefactor. Este tipo de política no termina por aclarar, sino que confunde aún más el panorama urbano actual, donde lo que resulta más clamoroso es la ausencia de un actor político, independiente de las actuales dinámicas económicas, que sea capaz de jugar como un ente regulador del crecimiento, sobre la base de un proyecto urbano colectivo.

De esta manera, la ciudad se torna un escenario capital para debatir los derechos ciudadanos del conjunto de los habitantes que dan vida a una ciudad intermedia como Cajamarca. Los habitantes de una ciudad tradicional no son completamente conscientes de los caballos de Troya de la nueva modernidad urbana y, sin embargo, es fundamental que ellos participen activamente del proyecto urbano, si aspiramos a tejidos urbanos sostenibles tanto ambiental como socialmente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aramburú, Carlos & María Bustinza (2006). *Cajamarca: el proceso demográfico. Contribuciones para una visión del desarrollo de Cajamarca* (Vol. 1). Francisco Guerra García (Ed.). Cajamarca: Asociación Los Andes.
- Arca, Alexandra (2007). *Definiendo al otro: percepciones de estudiantes cajamarquinos sobre los mineros*. Monografía del curso Práctica de Campo 1. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Ascher, François (1995). *Métapolis ou l'avenir des villes*. París: Odile Jacob.
- Boza, Beatriz (2006). *Cajamarca: lineamientos para una política de desarrollo turístico. Contribuciones para una visión del desarrollo de Cajamarca* (Vol. 6). Francisco Guerra García (Ed.). Cajamarca: Asociación Los Andes.
- Buse, Mónica (1999). *De oropeles y abandonos. Cajamarca 1900-1950*. Cajamarca: Martínez Compañón.
- Cacho, Emilio (2005). *Quince años de la presencia de Yanacocha en Cajamarca*. Manuscrito de circulación restringida.

- Calderón, Fernando (2007). *Informe final del curso Práctica de Campo 1*. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Capel, Horacio (2003). Redes, chabolas y rascacielos: las transformaciones físicas y la planificación en las áreas metropolitanas. En Actas del Seminario Internacional *El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado* (pp. 17-55). Barcelona: Institut d'Estudis Territorials.
- Castells, Manuel (1997). *La sociedad red* (Vol. 1). *La era de la información*. Madrid: Alianza.
- Chion, Miriam (2002). Dimensión metropolitana de la globalización. *Eure*, 28(85), 71-87.
- Contreras, Carlos (1988). *Mineros y campesinos en los Andes*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Contreras, Carlos (1995). *Los mineros y el rey*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Deler, Jean-Paul (2004). De Lima al archipiélago megalopolitano mundial. En Jean-Paul Deler y Évelyne Mesclier (Eds.), *Los Andes y el reto del espacio mundo* (pp. 271-293). Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos – Instituto de Estudios Peruanos – Embajada de Francia.
- Delgado, Sol (2007). *La (in)seguridad en la ciudad de Cajamarca*. Monografía del curso Práctica de Campo 1. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Etesse, Manuel (2007). *Informe final del curso Práctica de Campo 1*. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Guerra García, Gustavo y otros (2006). *Cajamarca: lineamientos de política de infraestructura económica. Contribuciones para una visión del desarrollo de Cajamarca* (Vol. 2). Francisco Guerra García (Ed.). Cajamarca: Asociación Los Andes.
- Ludeña, Wiley (2003). Lima, ciudad y globalización. Paisajes encontrados de fin de siglo. En Actas del Seminario Internacional *El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado* (pp. 163-192). Barcelona: Institut d'Estudis Territorials.
- Madueño, Diego (2007). *La gestión de la salud en la ciudad de Cajamarca*. Monografía del curso Práctica de Campo 1. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Massey, Ximena (2007). *Imaginario cajamarquino sobre medio ambiente y Yanacocha*. Monografía del curso Práctica de Campo 1. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Merino, Germán (2005). *Testimonio de parte*. Manuscrito de circulación restringida.
- Ossio, Juan Luis (2006). *El impacto de la industria minera transnacional en la producción del espacio urbano en Cajamarca*. Tesis de licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Pasco, Mario (2006). *Dinámica minera y vida ciudadana: el caso de Cajamarca*. Monografía para el curso Planificación y Gestión de la Ciudad. Maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

- Picardo, Caterine (2007). *Un paseo por Cajamarca*. Monografía del curso Práctica de Campo 1. Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Remy, Jean & Liliane Voye (2006). *La ciudad ¿hacia una nueva definición?* Zaragoza: Bassarai.
- Sarmiento, Julio & Tristán Ravines (2004). *Cajamarca. Historia y cultura*. Cajamarca: Municipalidad Provincial.
- Sassen, Saskia (2001). *Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press.
- Sennett, Richard (1975). *Vida urbana e identidad personal*. Barcelona: Península.
- Silva Santisteban Bernal, Fernando (Comp.) (1985). *Historia de Cajamarca*. Cajamarca: Instituto Nacional de Cultura – Corporación de Desarrollo de Cajamarca.
- Vega Centeno, Pablo (2007). El ocaso de un modelo de ciudad minera: una mirada a Cerro de Pasco y La Oroya. *Cuadernos Arquitectura y Ciudad*, 6 (Edición Digital 2), 3-75. Recuperado de http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/images/documentos/Cuadernos_06.pdf
- Vega Centeno, Pablo y otros (2007). Ciudades, territorio y ecosistemas en el Perú. Cajamarca. En Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, *Ciudades, territorio y ecosistemas en el Perú* (pp. 78-106). Documento de circulación restringida. Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Wiener, Charles (1993). *Perú y Bolivia*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos – Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Yanacocha S. R. L. (2004). *Informe de responsabilidad social y ambiental*. Cajamarca: Yanacocha S. R. L.
- Yanacocha S. R. L. (2007). *Balance social y ambiental*. Cajamarca: Yanacocha S. R. L.
- Zorrilla, Gaspar (2005). *Los circuitos de intercambio mercantil en Cajamarca 1860-1930*. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú.

PARTE IV.
CAMBIOS SOCIOCULTURALES

HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA FAMILIA

Violeta Sara Lafosse

1. INTRODUCCIÓN

Mi trayectoria académica incluye la especialización que elegí cuando estudiaba Sociología en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. En esa ocasión, T. De Bie, el profesor más importante de la especialidad de Sociología, era especialista en familia y codirigió con un profesor visitante norteamericano el Seminario de Sociología que, durante el año, consistió en tomar parte en una investigación comparativa de las familias en Bélgica, en Detroit y en Tokio. Con esa base me puse a trabajar la estructura familiar en el Perú.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley General de Educación de 1972, al señalar que «la educación será orientada hacia la revaloración de la mujer, ofreciéndole las máximas oportunidades para un desarrollo personal libre y pleno, única base auténtica de su decisiva función familiar y de su participación creadora en el proceso de transformación y perfeccionamiento de la sociedad peruana», movilizó a toda la sociedad, en especial a los planteles educativos que convocaron masivamente a los padres de familia para debatir con la ayuda de especialistas el significado motivador de la expresión «revaloración de la mujer». Es así como se hizo necesario conocer cuál era el grado de desvaloración de la mujer en el país.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS

La clasificación común de las familias es según su composición, es decir de naturaleza censal, cuántas familias nucleares, extensas o compuestas se encuentran en un territorio determinado. La composición no permite conocer la relación entre los miembros, en especial la de la pareja, que será el modelo para los hijos. La estructura de la familia expresa esa relación en la pareja a partir de tres dimensiones básicas: el trabajo cotidiano, la toma de decisiones y la vivencia

de la sexualidad, ello permite elaborar una tipología polar siguiendo el sistema clasificatorio de Weber (1964), con el cual es posible construir dos tipos ideales y polares de familia, uno patriarcal y otro democrático. El término ideal no tiene el significado moral de algo deseable, sino el de tipo conceptual, hecho de ideas.

2.1 La división sexual del trabajo

La división sexual del trabajo es la institución social más antigua. Originalmente, estaba basada en la diferencia biológica; sin embargo, a lo largo de la historia y también dada la diversidad de las culturas, es posible encontrar poblaciones que no tienen esa institución o que la aplican solo parcialmente. Dentro de la institución familiar que nosotros hemos estudiado en el Perú, la división sexual del trabajo es muy flexible.

En el estudio que hicimos en Lima, cuando buscábamos conocer la estructura familiar según la clase social y encontramos que, a diferencia del agro y, en concordancia con los datos variantes de la población económicamente activa (PEA) femenina, la división sexual del trabajo era referida tanto a la obtención de bienes para satisfacer las necesidades básicas del grupo como al trabajo doméstico que se realiza al interior del hogar. Este comprende una amplia gama de tareas: unas materiales, de producción y mantenimiento de bienes; otras que suponen capacidad de gestión y, finalmente, las exigidas por la relación con los hijos, tales como cuidado de los pequeños y educación y supervisión de los mayores. Al lado de estas tareas continuas hay otras eventuales, como el cuidado de los enfermos y los ancianos.

Según el censo del Perú de 1940, la división sexual del trabajo cuantificable era la relativa a la población económicamente activa. La participación femenina en la PEA era de 34,5%. Tasa bastante alta, comparada con la de 1961, la cual se redujo a 20%. Este hecho demográfico ya había sucedido originalmente en Europa cien años atrás, cuando en las sociedades urbano industriales a mediados del siglo XIX se inició al interior de la familia una especialización del trabajo sexual que asignaba al marido el papel de proveedor de lo necesario al grupo familiar, y, a la mujer, el de realizar las tareas domésticas. Este hecho tiene sus raíces en el proceso de desarrollo europeo y en su secuela de crecimiento demográfico, el cual se concretó en la brusca reducción de la mortalidad infantil y la sobrecarga de la familia numerosa. Esta especialización es cuestionada y paulatinamente revertida durante el siglo XX, cuando el crecimiento demográfico disminuyó gracias a otra etapa del mismo desarrollo.

En 1970 se afirma que en las familias londinenses «ahora no hay algún trabajo en el hogar reservado para 'las esposas' [...] Ellos comparten su trabajo y comparten su tiempo» (Young & Willmott, 1973, p. 94).

El proceso de cambio, que ha avanzado notablemente en los países industriales, está en una primera etapa en países como el nuestro. El avance en los países industriales ha causado no pocas crisis. Entre las jóvenes, la opción por la familia alternativa de parejas que cohabitan es «una manera de educar al *futuro esposo* a hacer su parte en las tareas domésticas y asegurarse que él ha adquirido *buenos hábitos*»¹. (Michel, 1984, p. 254)

Otros estudios tratan acerca de los efectos que la división del trabajo tiene sobre las relaciones de pareja y sobre la salud mental de la esposa. Se encuentra que «cuando los dos esposos comparten las tareas domésticas de manera igual, la comunicación se mantiene a un nivel elevado. Cuando la mujer realiza la mayor parte de las tareas domésticas, la comunicación entre los esposos es más débil» (Piel, 1968, p. 74). El análisis de los estudios que tratan el tema, producidos durante una década, precisa que «las amas de casa presentan niveles de salud mental más bajo que las mujeres que trabajan fuera de casa» (Scanzoni, 1980, p. 137).

Los efectos nocivos de la división del trabajo por género dentro de la familia pueden explicarse por el aislamiento en el que el ama de casa realiza su trabajo, cuando el marido labora fuera y los hijos están en la escuela, la universidad o el trabajo. La presencia de niños en edad preescolar exige su dedicación, pero no le permiten mantener una comunicación horizontal con el padre que contribuya a su desarrollo personal. Este papel exclusivo de ama de casa, causa efectos más negativos en la mujer, con repercusión en los hijos, cuando ella tiene otros intereses debido a poseer aptitudes, y muchas veces, estudios que la inclinan, por vocación, a actividades profesionales.

El examen de los diversos trabajos que realizan los miembros de la familia, tales como el sostenimiento económico del grupo y las tareas domésticas para el bienestar cotidiano, muestra una gran diversidad. Dentro de esta diversidad, se pueden elegir las situaciones extremas o polares. Así, en un extremo hay una máxima división del trabajo, en la que solo el varón se ocupa del sostenimiento del hogar y la mujer exclusivamente del trabajo doméstico. En el otro extremo, se observa una ausencia de división sexual del trabajo, el sostenimiento del hogar se presenta como un trabajo compartido, a marido y mujer se les ve trabajando por ingresos y aportando ambos, estos ingresos, para el sostenimiento común. También se observa que el trabajo doméstico es realizado en forma compartida

¹ Las cursivas son nuestras.

por marido y mujer, contando con la colaboración de los hijos según la edad de estos. La nueva norma es compartir.

Las situaciones extremas que hemos descrito ponen en evidencia una situación de cambio social, en la que el cambio consiste en ir abandonando una situación de división sexual del trabajo hacia una de trabajo compartido. Este cambio no se está produciendo en forma equitativa entre marido y mujer. El cambio se inicia con la incorporación de la mujer en el mundo laboral, donde obtiene unos ingresos económicos determinados que le permiten proveer a su familia de lo que esta necesita, compartiendo así esta responsabilidad que hasta poco recaía solo sobre el marido. Sin embargo, cuando este esfuerzo de la mujer no va acompañado de la ayuda del marido en el trabajo doméstico, ella se encuentra con una sobrecarga de trabajo por realizar una doble jornada: desempeñarse en el mundo laboral y ser ama de casa. Esta situación suscita malestar en la mujer y es una fuente de conflictos en el hogar.

2.2 El ejercicio de la autoridad

La autoridad, como una dimensión de la estructura familiar, se puede expresar en la toma de decisiones o mediante la influencia que un miembro puede tener sobre los otros. Es importante dilucidar el concepto de autoridad, de los conceptos de dominación y jefatura del hogar. La autoridad es la capacidad para influir en la conducta de otros, basada en la experiencia, la preparación y la conducta moral. Esta capacidad es básica en la relación entre padres e hijos. La situación entre los cónyuges es diferente, ya que se trata de dos iguales que llegan a una relación de convivencia con una supuesta madurez personal y emocional. La autoridad en la familia es la ejercida por padre y/o madre sobre sus hijos.

Los problemas más importantes que están sujetos a la toma de decisiones son: la ocupación de cada uno de los miembros de la familia; la elección de la residencia común; y, la distribución del ingreso familiar en relación con la satisfacción de las necesidades de todos y de cada uno de los integrantes del grupo. El asunto de los hijos supone varias fases que van desde la oportunidad de tenerlos hasta la de su educación final, pasando por la etapa de la crianza. La decisión de tener los hijos depende de la información que tiene la pareja acerca de los medios necesarios para mantenerlos.

La forma democrática de toma de decisiones supone varios momentos: el planteamiento del problema, el debate entre los cónyuges respecto a este —presentándose alternativas de solución— y la elección final de una de las alternativas de solución. En la forma autoritaria, la decisión es tomada por uno de los cónyuges, la cual es una situación de abuso de autoridad.

Hay padres que actúan como los jefes natos de su familia, consideran a la esposa como una menor de edad. En cuanto a la mujer, ella puede dar su opinión, aunque sabe que la última palabra es del marido; no cree que sus opiniones pesen igual que las de él. Logra tener alguna autonomía en asuntos como trabajo doméstico, con lo cual compensa en algo su baja autoestima. En la forma opuesta, la toma de decisiones democrática o por consenso es uno de los factores que influye en la estabilidad familiar.

Es importante considerar que la toma de decisiones autoritaria corresponde a una sociedad con rasgos autoritarios. En las sociedades donde existe una tradición autoritaria, esta ha penetrado en las distintas instituciones sociales como la escuela, el centro laboral, los órganos de gobierno local, regional y nacional.

2.3 La vivencia de la sexualidad

La literatura sociológica trata el tema de las relaciones sexuales y afectivas de la pareja dentro del concepto más amplio de satisfacción conyugal en el cual se incluye: «recompensas afectivas, disfrute sexual y compañerismo». Sin embargo, refiriéndose a la sociedad moderna, Linton dice: «hemos fomentado una intensidad del interés sexual que no tiene paralelo en ninguna otra sociedad» (1970, p. 26). La explicación del porqué, la encontramos en Fromm, quien asegura que «con el crecimiento de una sociedad de consumo el sexo mismo se ha convertido en un artículo de consumo [...] los reprimidos son otros impulsos: el de estar vivo, el de ser libre y el de amar» (1970, p. 46). La disociación entre sexo y amor que puede deducirse de las afirmaciones de Fromm han afectado profundamente la vida familiar en los países industrializados. Esto ha sido analizado por otros autores, con una visión menos pesimista para el futuro.

Sin embargo, aún es difícil hablar abiertamente de sexualidad en la mayor parte de sociedades. Esto merece una explicación, la cual trataremos de dar. Durante milenios, las diversas culturas de la humanidad consideraban que la relación sexual solo tenía un fin biológico: reproducir nuevos seres para la supervivencia de la especie. En estas culturas se reconocía que el acto sexual estaba acompañado de placer físico. Dentro de esta perspectiva casi universal, la cultura occidental y cristiana consideraba que todo disfrute sexual no encaminado a la procreación era pecaminoso. Esta antigua creencia había teñido la sexualidad de un tinte de prohibido, de aquello que no se habla. Esto se basaba en el supuesto de que la mujer era fértil siempre, por eso, cuando a principios del siglo XX dos fisiólogos, el japonés Ogino y el austríaco Knaus, descubrieron que la mujer solo era fértil un día cada veintiocho, en promedio, se convocó a psicólogos, filósofos y teólogos a debatir sobre cuál era la finalidad de esas múltiples relaciones

sexuales que eran objetivamente infecundas. Se llegó a la conclusión de que ellas tenían como finalidad unir afectivamente a la pareja. Por eso hasta la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, afirma que el matrimonio tiene dos fines, el amor de los cónyuges y la reproducción (Congar, 1967, p. 55).

Las relaciones sexuales también pueden ser examinadas en sus expresiones más opuestas. Ellas pueden ser vividas como el ejercicio de deberes y derechos entre los cónyuges, donde el marido ejerce un derecho y la mujer cumple un deber. En el extremo opuesto, la relación sexual es la expresión de un encuentro amoroso de la pareja, en el que, en forma libre y voluntaria se entregan mutuamente.

Luego de haberse examinado cada una de las dimensiones que constituyen la estructura familiar: división del trabajo, ejercicio de la autoridad y vivencia de la sexualidad, se está en condiciones de clasificar a la familia según su estructura. La clasificación permite identificar en forma integrada los comportamientos en la pareja, porque supone considerar en forma simultánea los tres aspectos básicos de su estructura. Esta empresa exige la construcción de tipos ideales siguiendo la metodología de Weber (1964).

3. TIPOLOGÍA DE LAS FAMILIAS

El primer sociólogo en emplear el método del tipo ideal en el análisis de la estructura familiar fue Ernest Burgess (1963, p. 347) advirtiendo que este análisis «implica la identificación, el aislamiento y la acentuación hasta el extremo de un atributo seleccionado» (1963, p. IX). Este método permite clasificar a las familias de acuerdo con las características elegidas. Tres tipologías, entre las que hemos revisado, responden al interés de clasificar a las familias según su estructura. Ellas son las de Ernest Burgess, Reuben Hill y Elizabeth Bott. Los tres presentan tipologías polares que, pese a una formulación diferente, muestran, con un análisis detenido, importantes semejanzas.

Burgess opone, como concepciones polares, la familia como una institución por una parte y como compañerismo por otra. En el pensamiento de este autor, «la más extrema formulación conceptual de la familia institucional sería una en la cual su unidad estaría determinada enteramente por normas y regulaciones tradicionales, derechos y deberes específicos, y otras presiones sociales actuando sobre los miembros de la familia. La construcción ideal de la familia como compañerismo se enfocaría sobre la unidad que se desarrolla por el afecto mutuo e íntima asociación de marido y mujer y de padres e hijos» (Burgess & Locke, 1963, pp. 22-23). Hill se refiere por su parte a dos tipos de familia como opuestos, esto es, la familia patriarcal centrada en ella misma y la familia democrática centrada en la persona. La primera es «autocrática, interesada en la producción de cosas

y preocupada por su propio manejo doméstico. Su polo opuesto puede concebirse como una familia igualitaria, democrática en la toma de decisiones, interesada primeramente en el desarrollo de las personalidades y en su orientación, y más interesada en la constitución del hogar que en el manejo doméstico» (Becker & Hill, 1955, pp. 787-788). Bott, dentro de la corriente europea, opone una familia con relaciones segregadas en los roles conyugales a otra con relaciones comunes. En la primera, «marido y mujer tienen una división del trabajo claramente definida en tareas masculinas y tareas femeninas [...]». En la segunda, «marido y mujer esperan tener muchas actividades juntos con un mínimo de diferenciación de tareas y separación de intereses. Ellos no solamente planean los asuntos de la familia juntos, sino también pasan juntos sus ratos libres [...], ponen gran énfasis en las decisiones conjuntas» (Bott, 1971, pp. 53-54).

El análisis simultáneo de las tres tipologías presentadas nos permite comparar los tipos polares que son definidos. La familia «institución», delineada en términos de normas y regulaciones tradicionales, se asimila a la familia «patriarcal» y a la de «roles conyugales segregados». Mientras que la familia «compañerismo» corresponde a la «democrática» y a la de «roles conyugales conjuntos». Los tres autores están delineando una misma tipología, dado que están estudiando variaciones dentro de un mismo sistema social: el de sociedades industriales, con ideología y prácticas políticas democráticas donde persisten formas familiares como rezago de sociedades industriales con ideologías y prácticas patriarcales. Es conocido el hecho de que los cambios culturales experimentan siempre un retardo en relación con los cambios técnicos que los suscitan (retardo cultural).

La elaboración de una clasificación de las familias utilizando la metodología de los tipos polares y tomando los aspectos básicos de la estructura permite acceder a la comprensión del cambio estructural de la familia en la presente época, iniciado en los países industrializados con sistemas políticos democráticos, y continuado en aquellos que están en proceso de industrialización y de democratización. La clasificación en tipos polares permite visualizar de dónde procede y hacia dónde se encamina el cambio familiar. Al mismo tiempo, reconociendo que la realidad se encuentra en el continuo que va de un polo a otro, se comprende la heterogeneidad de las familias concretas en materia de estructura y se las clasifica de acuerdo con su mayor cercanía a uno u otro de los tipos polares, habiendo muchas que están aún en una situación de transición y crisis.

4. LA ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS PERUANAS

La literatura sociológica peruana muestra una carencia casi total de estudios sobre la estructura de las familias peruanas. Solo nuestro trabajo, que fue editado en

forma resumida (Sara Lafosse, 1977, pp. 40-45), presenta los dos tipos polares de familia, denominados «patriarcal e igualitario». En este primer trabajo, encontramos que sobre un total de 285 familias, un tercio era patriarcal y un 21,7 % era igualitaria, mientras que casi la mitad de las familias estaba en una situación de transición. La ambigüedad de esta situación es indudablemente de crisis, pero no de cuestionamiento de la familia, sino de transformación de esta. Es innegable que las tensiones y conflictos que supone el abandono de los patrones tradicionales conducirán al fracaso a cierto número de familias; pero la posibilidad de afrontar los conflictos y superarlos abre, a la mayor parte de ellas, nuevas perspectivas de realización personal y social.

Las 285 familias entrevistadas incluyen 150 del sector popular y 135 del sector medio. El cruce de los tipos de familia con el sector social fue más alentador porque, en el sector medio, las familias igualitarias alcanzaba el 30,4% y las patriarcales bajaban al 20,7%. La situación aún incipiente de la familia «igualitaria» se explica, en parte, porque la reducida participación de la mujer en la PEA la colocaba en situación de dependencia económica respecto al marido. En 1972, los datos censales señalaban que la participación de la mujer en la PEA era de un 20%. Este dato que estaba estancado desde 1960, se presenta en un proceso de cambio acelerado durante las décadas siguientes. Así, en 1981 esa participación ascendió a 25% y en 1993 ha llegado al 30%. En la medida en que la tasa de mortalidad infantil ha continuado descendiendo en la década del noventa, se espera que el porcentaje de mujeres en la PEA haya aumentado aún más, sobre todo en el siglo XXI. Sin embargo, la independencia económica de la mujer, que se presenta como una condición necesaria, no llega a ser suficiente. Para que llegara a ser suficiente sería necesario que el marido retorne al hogar no solo a «ayudar», sino a compartir plenamente los trabajos hogareños.

La proporción de mujeres que participan en la PEA podría ser mucho mayor, pero la presencia de rezagos del sistema patriarcal lo impide. «El 72% del universo de mujeres de Villa El Salvador trabajaba antes de formar familia, y sólo el 40% prosiguió haciéndolo luego, las que dejaron de trabajar fue porque el esposo no quiso» (Chueca, 1982, pp. 15-16). Aquí se hace presente no solo el aspecto de la división del trabajo en relación con el sostenimiento del hogar; sino también el del ejercicio de la autoridad, al mostrar cómo el marido toma la decisión aún sobre un asunto que concierne a la mujer.

Dentro de los estudios de psiquiatría social de la década de los setenta, Castro de la Mata (1972, p. 60) ya encuentra los tipos de familia patriarcal y compañera aunque manifiesta un desconocimiento del método de los tipos polares, dado que incluye una forma familiar despótica que no cumple con las funciones esenciales y en la que uno de sus integrantes exhibe conductas delictivas respecto

al propio grupo, destruyéndolo. Más adelante, presentamos la explicación de la existencia de esa forma familiar desintegrada, cuya presencia solo se observa en América Latina. Asimismo, es conveniente destacar el hallazgo de Castro de la Mata respecto a la buena relación del grupo compañero con el mundo exterior a la familia, en contraste con la familia patriarcal que no se relaciona en grupo: «Los amigos, la asistencia a la Iglesia, la pertenencia a grupos comunitarios son asuntos de la familia» (1972, p. 62).

Es importante señalar que hoy en día, en países industrializados, la alta valoración que los integrantes de la familia de tipo «compañero» tienen de ella misma está obligando a los empresarios que necesitan de sus empleados a concederles condiciones de vida más humanas porque reconocen que: «Lo que la gente quiere, hoy día, es un equilibrio entre su vida familiar y su vida profesional» (Kauffmann, 1990, p. 12).

4.1 La legislación y la estructura familiar

La legalidad de la familia igualitaria en el Perú es una expresión casi redundante porque desde 1991 es legal en todas sus dimensiones. Al mismo tiempo, podemos afirmar que la familia patriarcal fue legal hasta la primera mitad del siglo XX. La legalidad provenía del Código civil de 1936, en el cual se delineaba claramente las dimensiones de la división sexual del trabajo y del ejercicio de la autoridad, atribuyendo al marido el rol de proveedor y la jefatura del hogar. La dimensión relativa a la vivencia de la sexualidad ya había sido indirectamente señalada en el Código penal de 1924 que, al precisar el acto que constituye el delito de violación, se excluye que dicho acto sea considerado delito en el matrimonio.

En diciembre de 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo el Perú uno de los países integrantes, firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se afirmó la igualdad entre las personas sin discriminación por sexo. Así quedaron sin fundamento los antiguos códigos de 1936 y de 1924 que discriminaban a la mujer. Esta primera declaración fue incorporada, no sin acalorado debate, en la Constitución peruana de 1979, donde se nombró una comisión para que elabore un nuevo capítulo sobre la familia en el nuevo Código civil. En 1984 tuvimos el nuevo Código civil, el cual sienta las bases para la familia «compañera» o «democrática» con responsabilidades plenamente compartidas por el varón y la mujer. Este código fue complementado, siete años más tarde, por el Código penal de 1991 que incluye la figura del delito de violación en el matrimonio, dejando así de considerarse que el acto sexual sea vivido como un derecho masculino y un deber femenino. La democratización de la familia es un hecho tanto en la Constitución como en el Código civil y el Código penal.

Lamentablemente, muy poco se ha hecho para difundir esta democratización de la familia peruana. Aún los estudiantes de Derecho las desconocen y con mayor razón los de Educación y los de Ciencias Sociales. El poco interés de las autoridades, tanto políticas como judiciales y académicas, en la difusión del conocimiento de la familia democrática, se explica porque muchos de ellos experimentan en su vida cotidiana la vivencia de la familia patriarcal y están casi identificados con ella. Esto es explicable en los que comparten ideologías conservadoras, poco inclinadas a los cambios sociales, pero es incomprensible en aquellos que defienden la no discriminación de las personas y dicen ser demócratas. No se dan cuenta de que la democracia debe aprenderse desde la cuna, y que, quien ha vivido desde su niñez en un ambiente autoritario, tiene tendencia a actuar autoritariamente. Por otro lado, la escuela es también un ambiente autoritario y por eso resulta difícil tener un país democrático.

En últimos estudios, traducidos al español, en los que «ambos cónyuges tienen una carrera» (Albino Gilbert, 1987, p. 104), encontramos que un 60% «comparten papeles», es decir, las responsabilidades del hogar; mientras que el 40% restante se distribuye en partes iguales entre los «participantes», es decir, maridos que ayudan a la mujer en la tarea de ocuparse de los hijos, y, la otra mitad, los maridos que son tradicionales.

4.2 La transición demográfica y la estructura familiar

Al iniciar el estudio de la estructura familiar, hemos adelantado en algo el estudio sobre la demografía, al relacionar la mortalidad infantil con la participación de la mujer en la PEA. El crecimiento demográfico ha tenido y tiene una importancia fundamental en la situación de la mujer y de la familia. La población humana ha estado constantemente amenazada de extinción. En un principio, la lucha fue en búsqueda de medios de subsistencia y de defensa contra la naturaleza y animales peligrosos. Más adelante, se multiplican las enfermedades endémicas y epidémicas, y aparecen las guerras como amenazas a la supervivencia humana.

Es en esta lucha por la supervivencia, que se valora como el mayor don, el nacimiento de nuevos seres humanos que reemplacen a los que desaparecen prematuramente. La esterilidad es considerada el peor mal y la primera consecuencia son las altas tasas de natalidad. Esta necesidad de reproducirse tiene múltiples consecuencias. Una de ellas es la división sexual del trabajo y la valoración funcional de la mujer. Solo la mujer puede dar a luz nuevos seres y ella ve restringida su significación personal a una función social: la reproducción. Igualmente, se reduce la significación del acto sexual a un medio que permite la reproducción y otorga placer. Las exigencias de procreación llevan a que la mujer

vea su existencia, desde la edad núbil, convertida en una sucesión de embarazos hasta sucumbir en un parto o envejecer prematuramente por el desgaste que causa la preñez. La situación de casi permanente embarazo, alternado con periodos de lactancia materna, impone a la mujer un tipo de vida sedentaria siempre productiva.

La tasa de mortalidad elevada afecta sobre todo al recién nacido. Por tanto, si bien el estado de embarazo dificulta la movilidad de la mujer, tiene pocos hijos que criar y atender. Esto le permite dedicarse a muchas tareas productivas: la agricultura y las artesanías, en especial la cerámica, los textiles y la cestería. El hogar es al mismo tiempo un centro agropecuario y artesanal. El trabajo comporta un esfuerzo creador, las tareas de mantenimiento son secundarias. Comparte con el marido y con los pocos hijos que le sobreviven, las tareas productivas.

La historia de la humanidad en constante progreso nos muestra en el siglo XIX una etapa crucial de desarrollo científico y técnico que provoca tanto la revolución industrial como el adelanto de las ciencias biológicas y médicas. La lucha por la supervivencia humana parece ganada al reducirse progresivamente la mortalidad debido a enfermedades o carencias alimenticias. El combate contra la mortalidad infantil se debe, fundamentalmente, al invento de las vacunas. La reducción de la mortalidad no acompañada automáticamente de una reducción de la natalidad provoca un fuerte crecimiento de la población. Este crecimiento se produce; en primer lugar, en los países cuyo adelanto científico y técnico ha permitido la reducción de la mortalidad y, luego, en los países en los cuales se han introducido las técnicas sanitarias y médicas que permiten combatir las enfermedades y prolongar la vida humana.

Esta diferencia es muy importante, porque en los primeros países el adelanto científico y técnico es fruto del desarrollo de una cultura particular, y provoca cambios de valores y de mentalidad en forma espontánea. Por el contrario, en los países donde la reducción de la mortalidad se debe a técnicas importadas que no corresponden a la evolución de sus propias culturas ni al desarrollo de su economía, se produce un gran desequilibrio. A la reducción de la mortalidad no le sigue en forma espontánea la reducción de la natalidad, produciéndose así un crecimiento acelerado de la población.

Nos interesa examinar de qué manera estas tendencias del crecimiento demográfico han afectado la condición de la mujer y de la familia. El primero y el más saltante de los cambios es el de la significación del ser humano como vencedor en la lucha contra la muerte prematura y contra el embarazo no deseado. Esta última lucha duró casi un siglo, pero culminó con la planificación familiar. Este dominio del ser humano sobre la naturaleza se da junto con el crecimiento económico y algunas formas de progreso social. Los más altos valores no son

ya los de la reproducción, sino los del desarrollo humano y social. La vida humana tendrá un valor más cualitativo que cuantitativo. La reducción de la natalidad, produce paulatinamente el cambio hacia una no división del trabajo por sexo. Efectivamente, la reducción del número de hijos y la posibilidad de reemplazar la lactancia materna hacen que la tarea reproductiva ocupe una mínima parte de las energías de la mujer. La mujer tiene así disponibilidad para realizar múltiples tareas y se cuestiona otorgar significación exclusivamente reproductiva a la relación sexual. Se concibe la unión sexual de varón y mujer como una relación interpersonal, un encuentro psicosomático que asegura la estabilidad emocional de la pareja.

Por primera vez, la mujer, genéricamente y no en forma excepcional, ve la posibilidad de tener una significación personal y no funcional, de tener un valor en sí misma y no en la utilidad que presta en función de otros y con exclusión o negación de sí misma, de poder desarrollar plenamente todas sus capacidades y potencialidades. Esta posibilidad de valoración personal de la mujer es la que, unida a la valoración también personal del varón, permiten la democratización de la familia, la cual, a su vez, es la condición necesaria para la construcción de una sociedad democrática, dado que en ella se produce el aprendizaje de los comportamientos humanos que la sociedad necesita.

4.3 La familia desestructurada en América Latina

En la sección relativa a la estructura de las familias peruanas, mencionamos el hallazgo de una forma familiar desintegrada presentado por el psiquiatra Castro de la Mata en su tesis doctoral respecto a la clasificación de las familias. Este comportamiento desintegrador lo muestra también Rotondo (1971) en su estudio sobre familias marginadas en Lima, y tanto él como Castro de la Mata mencionan la presencia de estas formas familiares en otros países latinoamericanos como México. Por otro lado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, el 37% de las familias más pobres de Lima y Callao estaban encabezadas por mujeres (Delpino, 1990, p. 62); mientras que para el total de familias, esa proporción era mucho menor (22%). Según los estudios sobre el tema, el problema de la jefatura femenina de familia es bastante extendido en América Latina y está ligado, generalmente, a la pobreza.

Las familias que experimentan gran inestabilidad y que están en el origen de las monoparentales con jefatura femenina, debida esta al abandono del padre, son las despóticas. El padre gasta la mayor parte de sus ingresos bebiendo con amigos o comprando ropa para él. No necesitan que la familia se rebele contra su autoridad para abandonarla. Generalmente otra mujer atrae su atención

y se va con ella, dejando a la familia detrás. En la mayor parte de familias en las que la «jefe» es la mujer, esta figura como madre soltera acompañada por sus hijos. Revisando los daños, encontramos una situación de pobreza extrema en los hogares que sufren el abandono.

El abandono paterno se presenta como una conducta desviada en las más diversas sociedades, es de carácter marginal y provoca la desaprobación y la sanción de los diferentes grupos e instituciones de cada sociedad; aún más, se mantiene como marginal al igual que las otras desviaciones sociales. Sin embargo, la presencia masiva de este fenómeno en las sociedades peruana y latinoamericana es posible por haberse convertido en una subcultura, denominada, con toda propiedad, «machismo», para diferenciarla de la cultura dominante de naturaleza patriarcal en la que, por oposición, la identidad masculina es de padre. Ambas, pues, son distintas en lo que toca a la relación con los hijos; pero comparten el estereotipo de la superioridad del varón sobre la mujer.

El comportamiento desviado de irresponsabilidad paterna existe y se mantiene porque la norma social que valora la paternidad ha perdido significado en algunos sectores de la población tanto a nivel individual, al no estar internalizado por los sujetos sociales, como a nivel colectivo, al no ser exigido por las instituciones que mantienen la norma.

La explicación de la irresponsabilidad paterna en Latinoamérica es analizada por Goode (1964) utilizando, como uno de los indicadores, el de las tasas de ilegitimidad de los hijos. El Anuario Demográfico de las Naciones Unidas presenta en 1965 tasas de ilegitimidad de 1% en China, y, en países africanos, del 3,4% y el 0,8%. Para estas bajas tasas de ilegitimidad, Goode repara en las de América Latina, donde la más baja es de 16% en Chile, y la más alta es de 71% en Panamá, y luego examina las de los pueblos nativos y encuentra que no existió esa tolerancia de la ilegitimidad. La explicación difícilmente refutable se encuentra en los efectos causados por el tipo de conquista europea del Nuevo Mundo que afectó a América Latina y El Caribe.

La mezcla de razas en América, como en cualquier otro lugar bajo los efectos de la conquista, era inevitable. Al principio era alentada, ya en el siglo XVI los españoles contraían matrimonio con las hijas de la nobleza amerindia, para facilitar la pacificación (Stein & Stein, 1979, p. 61). La situación de los mestizos fue variada e incierta. Los descendientes de los matrimonios fueron incorporados al estamento español, mientras que la inmensa mayoría eran tenidos a menos. Más adelante, indios y españoles estuvieron prohibidos de casarse (Cotler, 1978, p. 38). Al mismo tiempo, el hispano no disponía de suficientes mujeres de su raza, lo que lo empujaba a la aleación racial. Por otro lado, las mujeres amerindias pronto aprendieron que sus hijos de padres europeos podrían no ser considerados

indios y que, por ende, no estaban sujetos a las levas, al tributo indio ni a las muchas prohibiciones que les habían impuesto (Stein & Stein, 1979, p. 62). Esto debilitó el control interno de las mujeres.

Los hijos mestizos eran criados por sus madres; sin embargo, muchos de ellos conocieron a sus padres antes del abandono y esa experiencia les dejó una marca indeleble. La sujeción en que el padre tenía a la madre india hizo que el mestizo sintiera recelo y odio hacia él, pero, al mismo tiempo, provocó el deseo de ser como él.

Frente a la descripción de los hechos señalados y de la impunidad que los acompaña, concluimos con Goode que era un interés de los conquistadores prevenir el desarrollo de sistemas nativos de control social, sea familiar o comunitario, porque en ellos había una amenaza potencial a su dominación (1964, p. 46). Sin embargo, debido a la amplia variedad geográfica y cultural en la historia del Nuevo Mundo, algunas comunidades continuaron internamente integradas tanto social como culturalmente. Ellas pudieron y quisieron asegurar la conformidad a las normas de legitimidad. «Esas comunidades pueden ser encontradas en las tierras altas de los Andes del Perú» (Goode, 1964, p. 52).

Esta explicación del porqué de la presencia de familias desestructuradas en América Latina es muy útil; pero hoy en día los países ya no registran la información de la ilegitimidad de los hijos por países. La ausencia de datos generalizables no nos permite afirmar si estas familias han aumentado o disminuido desde la década de los ochenta. Lo único que podemos afirmar es que siguen presentes, aunque no podamos precisar dónde ni cuántas son. El único avance al respecto es que se va reconociendo que los comportamientos irresponsables de los padres respecto a los hijos y de los «machos» respecto a las mujeres no es connatural al ser masculino y se van detectando algunas instituciones que los mantienen, y van surgiendo otras que los cuestionan.

5. LA REVALORACIÓN DE LA MUJER Y LA COEDUCACIÓN

En la introducción al presente trabajo hicimos referencia a la Ley General de Educación que planteó la necesidad de que la educación peruana dedicara todos sus esfuerzos a la revaloración de la mujer. Nosotros consideramos que una de las acciones más relevantes respecto a esta revaloración ha sido la implementación de la coeducación en todas las escuelas del Perú. Con ella también se ha revalorado al varón y se ha favorecido la democratización de la familia. Esto podemos afirmarlo basándonos en la investigación que hicimos en Lima Metropolitana y que fue publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con el título *Escuela mixta: alumnos y maestros la prefieren*.

La educación mixta o coeducación comenzó a aplicarse en forma obligatoria en el Perú en 1972; sin embargo, en 1983 se dio marcha atrás. La explicación ofrecida para el cambio de política fue la queja de los padres de familia por los embarazos de las alumnas. Se dejó traslucir, asimismo, el temor a un desarrollo feminoide de los varones.

El problema así planteado y lo discutible de las conclusiones desprendidas exigía una investigación, la cual pudimos realizar entre 1985 y 1986 tomando como universo los alumnos de quinto año de secundaria de colegios estatales de la ciudad de Lima. El universo de colegios fue de 297 con un total de 342 690 alumnos. La clasificación de estos colegios era de 60 colegios de mujeres, 42 colegios de varones y 195 colegios mixtos. Parecía un predominio neto de los colegios mixtos, pero pronto descubrimos que, en varios de ellos, solo era mixto el local. Había turnos de medio día, ya sea de solo mujeres, solo varones o combinados con mixtos. El recorrido de certificación fue el que nos permitió llegar a 295 en total, 174 colegios separados y 121 mixtos. La misma certificación nos permitió calcular la muestra con 11 colegios de mujeres, 9 de varones y 35 mixtos.

La segunda etapa de la muestra consistió en hacer un cálculo aproximado del total de alumnos de quinto año de secundaria que estudiaban en los 55 colegios seleccionados, así como del total de docentes que enseñaban a esos alumnos. Llegamos, finalmente, a calcular en 9222 los estudiantes y en 893 los docentes. Con estas cifras se calculó la muestra de 324 alumnos y de 276 docentes entre profesores y auxiliares. Los 337 estudiantes y 304 docentes entrevistados superan la muestra por el incremento natural de los escolares entre la fecha de cálculo (1983) y la de recolección de datos (1985). Los 326 padres de familia fueron el padre o la madre, alternadamente, de los alumnos previamente visitados.

La preferencia de los alumnos y docentes por la coeducación se presenta claramente definida, no así en el caso de los padres, en los que el rechazo supera ligeramente la aceptación. Los problemas de enamoramiento y el riesgo de embarazo de las alumnas figuran como los argumentos más importantes que dan los padres para rechazar la coeducación. Sin embargo, los datos encontrados nos indican que los alumnos de colegios de varones y de mujeres están más dispuestos a entablar relaciones de enamorados que los alumnos de colegios coeducativos, y que los casos de embarazos de alumnas corresponden en mayor proporción a alumnas de colegios de mujeres.

La hipótesis central de la cual partió este trabajo fue que la aplicación del sistema coeducativo en las escuelas estatales se habría convertido en un «problema» porque cuestiona los roles sexuales diferenciados, basados en la división del trabajo por sexo. Las diferencias en la percepción que de ellos mismos tienen los alumnos de colegios separados y de colegios coeducativos, así como las diferencias en la

percepción que de ellos tienen los padres y docentes, nos permiten afirmar que la coeducación provoca un cambio en los roles sexuales socialmente aprobados. Podemos afirmar que nuestra hipótesis se ha validado no solo porque la mayoría de los entrevistados está a favor del cambio, sino que la escuela coeducativa es promotora de cambios al fomentar una relación diferente entre los sexos basada en igualdad, respeto y solidaridad.

En el campo teórico, hemos hecho una contribución al conocimiento del fenómeno latinoamericano del machismo. Los estudios hechos por otros conocedores del tema situaban su origen histórico, su reproducción en el seno de la familia y en el grupo de amigos, así como sus efectos en la alienación de la esposa (Goode, 1964).

Nosotros hemos descubierto el papel que cumple la escuela exclusiva de varones en el mantenimiento y reforzamiento del machismo en el medio urbano peruano. Otro aporte teórico importante está relacionado con el problema de la prostitución en nuestro país, desde un punto de vista poco tratado: el de la demanda. El porcentaje creciente de padres de familia que la consideran necesaria para el inicio sexual de los jóvenes y el hecho que hasta la cuarta parte de los docentes comparta este criterio explicaría la extensión del problema, con las consecuencias negativas en el desarrollo emocional de los adolescentes y en las familias que ellos formen.

6. LA REVALORACIÓN DE LA MUJER Y LA COLECTIVIZACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO

La crisis económica que afectó al Perú en la década de los ochenta, con su secuela de inflación y desempleo, llevó a inventar colusiones colectivas para sobrevivir. Una de estas experiencias de búsqueda de supervivencia es la de los comedores comunales en Lima Metropolitana. Las mujeres, en especial madres de familia, para enfrentar el hambre y la desnutrición se organizan en «comedores» o cocinas comunales para preparar solidariamente, a manera de olla común permanente, la comida para toda la familia. Estas cocinas comunes reciben el apoyo de organizaciones asistenciales que donan víveres. Los comedores no solo satisfacen la necesidad de alimentarse; también cuestionan los roles familiares y promueven el desarrollo personal femenino.

La olla común es el recurso habitual, que encuentran para sobrevivir, los obreros que están en situación de huelga prolongada; mientras que la cocina comunal es la forma de atender la alimentación de los participantes en una obra comunal para beneficio de la localidad. Es presumible que estas experiencias hayan coadyuvado a la aparición de los «comedores» urbanos, aunque estos últimos significan un salto cualitativo muy importante. Ya no se trata de aportar al

desayuno de los niños, ni de facilitar una huelga obrera o una obra comunal, ambos recursos importantísimos, pero coyunturales, se trata de atender la alimentación diaria y permanente de toda la familia.

Una de las primeras precisiones que es importante hacer es que, en los llamados «comedores» comunales, las amas de casa cocinan en común, pero llevan los alimentos preparados a sus respectivos domicilios para ser consumidos en la mesa familiar. En segundo lugar, nosotros los denominamos «comunales» por tratarse de una acción común, pero las participantes les dan diversos calificativos: un buen número lo llama comedor familiar, otras, comedor popular, algunas se refieren a su comedor comunitario, etcétera.

Es importante anotar que, pese a la aspiración de autonomía de estos comedores, expresada en el deseo de tener capacidad de comprar todos los víveres que necesitan y no depender de las instituciones donantes, solo hemos encontrado dos autónomos. Los víveres que reciben son básicamente cereales en grano, harina y aceite. Los comedores adquieren los víveres como carnes y hortalizas, además de tubérculos, arroz y fideos. No solamente la gratuidad de una parte de los víveres les permite abaratar el precio de los menús, sino que la racionalización que se introduce con el paso de la elaboración de los alimentos de una escala «artesanal» a una «industrial» permite una reducción de costos por realizar las compras en mayor escala. Esta racionalización produce un efecto adicional no buscado, pero de significación importante: el ahorro en el tiempo de dedicación a la tarea de la cocina. La introducción de turnos para el trabajo de cocina permite al ama de casa una liberación de tiempo, el cual lo dedica a otras actividades, sean estas laborales remuneradas, educativas, comunitarias, recreativas, etcétera. Si analizamos los efectos de la cocina en común sobre la vida familiar, encontramos un cambio cultural profundo. En una sociedad patriarcal como la peruana, donde, en el área rural, el hecho de que una mujer trabaje con un hombre es signo público de que ambos llevan vida conyugal; y donde aún en sectores medios del área urbana, el marido exige que su esposa le prepare personalmente los alimentos, la aceptación de comer lo que otros cocinan implica un cambio de mentalidad exigido por la necesidad. La cocina en común no modifica la división del trabajo por sexo que asigna a la mujer la preparación de la comida, pero sí trastoca sustancialmente la valoración de la propia casa como lugar para la elaboración de los alimentos. Además, esta tarea doméstica impostergable —incluyendo la compra diaria de alimentos— que realiza el ama de casa en forma aislada y aislante, se transforma, mediante el comedor, en un trabajo de alcance social, tanto por la forma de su ejecución como por su finalidad.

Finalmente, en la medida en que la puesta en marcha del comedor es obra de las propias interesadas, implica para ellas el aprendizaje de la organización, la

racionalización y la administración. En suma, es una capacitación para el gobierno de sus propias vidas e instituciones comunitarias. Esto también puede ser considerado como un cambio cualitativo importante. El ama de casa del medio urbano rompe el aislamiento al que su actividad doméstica la constreñía y entabla, en primer lugar, lazos de amistad con sus vecinas. Se ve obligada, luego, a realizar el aprendizaje de la vida democrática, eligiendo y siendo elegida. Descubre la importancia de la unión y adquiere confianza en sí misma y en sus compañeras para afrontar, en forma común, los problemas que se le presentan en el vecindario. En resumen, los comedores juegan un papel muy importante en la promoción de la mujer de los sectores populares urbanos. Los comedores comunales tienen un efecto múltiple: en primer lugar, mejoran la alimentación de las personas beneficiadas, así como modifican algunos aspectos estructurales y culturales de la división sexual del trabajo al interior del grupo familiar. Por último, promueven a la mujer en cuanto rompen su aislamiento y la hacen más solidaria y autónoma. Recogen la experiencia comunitaria ancestral, que trae la población de los barrios populares, la cual en gran mayoría es emigrante de la sierra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albino Gilbert, Lucía (1987). *La familia en la que ambos cónyuges tienen una carrera*. México D. F.: Norma.
- Becker, Howard Paul & Reuben Hill (1955). *Family, Marriage and Parenthood*. Boston: Heath and Co.
- Bie, Pierrec de (1968) *La dyade conjugale*. Bruselas: Les éditions vie ouvrière.
- Bott, Elizabeth (1971). *Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families*. Nueva York: Free Press.
- Burgess, Ernest Watson (1942). The Effect of War on The American Family. *The American Journal of Sociology*, 48(3), 343-352.
- Burgess, Ernest Watson & Harvey loCke (1963). *The Family, From Institution to Companionship*. Nueva York: American Book.
- Castro de la Mata Caamaño, Renato (1972). *Un intento de clasificación de la familia peruana: el impacto de la incapacitación del padre sobre la dinámica familiar*. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Chueca, María Marcela (1982). *Sexualidad, fecundidad y familia en Villa El Salvador*. Lima: Consejo Nacional de Población.
- Congar, Yves Marie-Joseph, O. P. (Dir.) (1967). *La Iglesia en el mundo de hoy: constitución pastoral*. Madrid: Taurus.
- Cotler, Julio (2005). *Clases, Estado y nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- Delpino, Nena (1990). *Saliendo a flote la jefa de familia popular*. Lima: Fundación Friedrich Naumann – Taller de Capacitación e Investigación Familiar.
- Fromm, Erich (1970). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una sociedad sana*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Goode, William (1964). *The Family*. Nueva Jersey: Prentice-Hall.
- Kauffmann, Silvye (1990, octubre). «Les entreprises américaines tentent par tous les moyens de retenir leurs salariés». *Le Monde* 2656.
- Linton, Ralph (1970). *Estudio del hombre*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Michel, Príncipe de Grecia (1984). *La femme sacrée*. París: Olivier Orban.
- Piel, Jacques (1968). La comunicación entre époux et la satisfaction conjugale. En Pierre De Bie y otros, *La dyade conjugale* (pp. 71-75). Bruselas: Les editions vie ouvrière.
- Rotondo, Humberto (1971). *Sistemas de orientación con respecto a la familia de procreación en un grupo de mestizos serranos migrados a la ciudad de Lima*. Lima: Programa Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sara Lafosse, Violeta (1977). Familia y estructura social. En Ministerio de Salud y OPS, *II Seminario Nacional de Rehabilitación* (pp. 40-45). Lima: Ministerio de Salud – OPS. Publicación resumida de la investigación hecha en 1971 y publicada en 1983 como separata de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sara Lafosse, Violeta (1989). *Escuela mixta: alumnos y maestros la prefieren*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Scanzoni, John (1980). Contemporary Marriage Types. *Journal of Family Issues*, 1(1), 125-140.
- Stein, Stanley & Barbara Stein (1979). *La herencia colonial de América Latina*. México D. F.: Siglo XXI.
- Weber, Marx (1964). *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Young, Michael & Peter Willmott (1973). *The Symmetrical Family: A Study of Work and Leisure in the London*. Londres: Routledge.

ANEXO

FAMILIA PATRIARCAL	FAMILIA DEMOCRÁTICA
CÓDIGO CIVIL DE 1936 (derogado)	CÓDIGO CIVIL DE 1984 (vigente)
Artículo 5° Los varones y las mujeres gozan de los mismos derechos civiles, salvo las restricciones establecidas respecto de las mujeres casadas.	Artículo 4° El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles.
Artículo 164° El marido está obligado a suministrar a la mujer, y en general a la familia, todo lo necesario para la vida, según sus facultades y situación.	<p>Artículo 234° (2do. párrafo) El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, derechos, consideraciones, deberes y responsabilidades iguales.</p> <p>Artículo 287° Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos.</p> <p>Artículo 291° Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo.</p>
Artículo 161° El marido dirige la sociedad conyugal. La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber de atender personalmente al hogar.	Artículo 290° Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.
Artículo 162° Al marido compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su economía.	A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar.
Artículo 171° La mujer lleva el apellido del marido, agregado al suyo, y lo conserva mientras no contraiga nuevo matrimonio.	Artículo 24° La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio

<p>Artículo 168° El marido es el representante de la sociedad conyugal.</p>	<p>Artículo 292° La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial.</p>
<p>Artículo 169° Para las necesidades ordinarias del hogar, la sociedad conyugal será representada indistintamente por el marido o por la mujer.</p>	<p>Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges.</p>
<p>Artículo 170° Cuando la mujer abuse de este derecho, o sea incapaz de ejercerlo, el juez podrá privarla de él o limitárselo a instancia del marido.</p>	<p>Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o parte.</p>
<p>Artículo 173° La mujer puede ejercer cualquier profesión o industria, así como efectuar cualquier trabajo fuera de la casa común, con el consentimiento expreso o tácito del marido. Si el marido negare su consentimiento la mujer podrá ser autorizada por el juez, siempre que pruebe que esta medida la justifica el interés manifiesto de la sociedad conyugal o de la familia.</p>	<p>Artículo 293° Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia.</p>
<p>Artículo 391° La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, durante el matrimonio. En caso de disenso prevalecerá la opinión del padre.</p>	<p>Artículo 419° La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de disenso, resuelve el Juez del Niño y del Adolescente, conforme al proceso sumarísimo.</p>
<p>CÓDIGO PENAL DE 1924 (derogado)</p>	<p>CÓDIGO PENAL DE 1991 (vigente)</p>
<p>Artículo 196° Será reprimido con penitencia o prisión no menor de 2 años, el que por violencia o grave amenaza, obligara a una mujer a sufrir el acto sexual fuera del matrimonio</p>	<p>Artículo 170° El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.</p>

CAMBIO SOCIAL, RELIGIÓN Y SECULARIZACIÓN: UNA MIRADA DESDE LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES

Catalina Romero

Este artículo busca un acercamiento a la pregunta que nos propone Orlando Plaza, el editor de este libro, sobre cómo vemos y entendemos el cambio social desde la experiencia de investigación que tenemos los sociólogos del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta pregunta me lleva a situar la aproximación que he tomado para este artículo en mi trayectoria de investigación, a manera de introducción para entrar al tema de los cambios en la religión y en los valores medidos a través de la Encuesta Mundial de Valores en América Latina.

El tema que he venido siguiendo con más continuidad a lo largo de mi carrera es el del cambio religioso. Me ha interesado comprender cómo una institución religiosa como la iglesia católica cambia, a pesar de que es considerada «tradicional» por los sociólogos clásicos y contemporáneos, y continúa existiendo durante veintiún siglos y sigue siendo una institución relevante en la sociedad. En el camino de mi investigación empecé a comprender que las religiones no son simples instituciones, son sociedades organizadas social y políticamente, en el sentido de que tienen una forma de organización social de la vida cotidiana y de su gobierno, y también económicamente, aunque esta dimensión está menos estudiada. No son entidades abstractas o ideales que se relacionan desde un mundo sobrenatural o sagrado con las sociedades históricas o temporales y con los sistemas políticos. Son entidades reales, históricas, que viven entrelazando sus acciones con las de muchas otras instituciones y sociedades.

Según las ciencias sociales europeas, la religión fue muy importante en la historia hasta que fue siendo desplazada por la organización burocrática y racional de la política, y el desarrollo de la ciencia como saber racional opuesto al conocimiento religioso basado en la autoridad y en creencias no demostrables. Y para otros, la religión no era más que «el opio del pueblo», un fenómeno producido y mantenido para defender los intereses de unos pocos, sin consistencia propia.

No debemos olvidar a los que ven las religiones como los ejes principales de las más grandes civilizaciones, cuya influencia en la formación de valores y creencias, así como de las relaciones interpersonales de autoridad, género, económicas va constituyendo los hábitos y costumbres de las sociedades que las conforman, a veces limitando las posibilidades de cambio sin posibilidad de cambiar, y a veces como factor de cambio, con una presencia muy activa.

1. ENFOCANDO EL PROBLEMA

En este ensayo, me interesa plantear la manera cómo la religión se transforma y continúa teniendo actualidad y sentido en la sociedad latinoamericana e influye de distintas maneras en las normas y valores de las personas en el siglo XXI. Para enmarcar el problema que trataremos, lo voy a relacionar con algunas de las visiones contemporáneas de los grandes cambios que se están produciendo en la sociedad actual. El primero es la globalización de las relaciones económicas a través de los mercados financieros, productivos y comerciales principalmente, y laboral, a través de las migraciones ilegales y masivas de las últimas décadas. El segundo es el de la llamada «tercera ola democratizadora» que se inicia en la década de 1980 con los países europeos que seguían bajo regímenes dictatoriales (España y Portugal), los de América Latina, seguidos por los de Europa del este después de la caída del muro de Berlín en 1989. El tercero, relacionado con los dos anteriores, es la creciente independencia de la cultura y del conocimiento de los actores que la producen, como resultado del desarrollo de las industrias culturales, de la revolución tecnológica de fines del siglo XX que se acelera en el siglo XXI y que permite la comunicación simultánea e instantánea a nivel global de los fenómenos que ocurren en casi cualquier parte del mundo. La experiencia de copresencia y de interacción virtual desterritorializada se hace posible, y facilita la formación de sinnúmero de comunidades imaginadas de carácter voluntario y transitorio. Finalmente, no sin cierta contradicción, se encuentra la afirmación del individuo como referente principal de la acción social para organizar la vida de las nuevas colectividades informadas e ilustradas, dar sentido duradero a sus vidas y movilizar compromisos sostenidos con causas colectivas. Es a partir de la afirmación de la libertad individual y de los derechos de los individuos que los mercados capitalistas, las democracias poliárquicas, las industrias culturales y el sentido de la vida humana, se sostienen en medio de grandes procesos de cambio que no terminamos de percibir ni entender pero que son el escenario de grandes luchas por ganar poder en estos distintos mundos que están muy interconectados.

El capitalismo sigue siendo capitalista pero está transformándose y debe transformarse más a partir de sus propias crisis y de los efectos que está

produciendo en la naturaleza. La democracia puede ser hoy más democrática teniendo en cuenta las posibilidades de contar con ciudadanos competentes e informados, pero está desafiada por el peso de la desterritorialización de la economía, el creciente individualismo de los ciudadanos y el fin de las identidades únicas que afecta a los partidos y a las formas de representación, así como por la redefinición de lo público y lo privado gracias a los medios de comunicación, entre otras cosas. Finalmente, la cultura se transforma a una rapidez no vista antes, por la densidad de las interacciones con personas de muy diversas procedencias sociales, económicas, culturales y las posibilidades de creación y recreación de significados y su difusión por los nuevos medios de comunicación. Los procesos de resistencia que se producen son grandes frente a estas posibilidades de cambios tan grandes, y los de cambio se multiplican sin saber hacia dónde se orientan o dirigen en el corto y mediano plazo.

Y en medio de este gran y complejo escenario, la religión o las religiones, ¿han desaparecido? No solo no lo han hecho, sino que están peleando activamente por colocarse en el lugar que han tenido históricamente de dar sentido a la vida de las personas y de las sociedades. El hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo son religiones masivas que tienen mucha presencia hoy día a nivel global tanto en la vida de las personas como en la vida pública. La presencia pública de religiones que no solo se diferencian en creencias sino en las formas en que se organizan social y políticamente ha tomado a muchos por sorpresa, impulsando rápidamente la investigación en este campo. Los cambios en las relaciones de poder internacional, el debilitamiento de la política a nivel de los Estados han propiciado la recuperación del espacio religioso tanto en su dimensión privada como pública, dando lugar a visiones de la vida sustentadas en tradiciones y dogmas, a organizaciones de corte autoritarios y caudillista, a ritos que cumplen su función de integración y convocatoria sin recrear significados colectivos, pero también dan lugar a espacios innovadores de organización participativa, de formación de nuevos liderazgos, de reflexión y diálogo intercultural.

La sociología contemporánea viene explicando los cambios desde hace varias décadas recurriendo al término *post*, para indicar el fin de la industrialización y de la modernidad y el tránsito a otros tiempos. Autores como Touraine, expresan la necesidad de «un *nuevo paradigma*, pues no podemos regresar al paradigma político, sobre todo porque los problemas *culturales* han cobrado tal importancia que el pensamiento social debe organizarse a su alrededor. Es en este nuevo paradigma que debemos ubicarnos para ser capaces de nombrar a los nuevos actores y conflictos, las representaciones del yo y las colectividades que descubren una nueva mirada, que hace aparecer ante nuestros ojos un nuevo panorama» (Touraine, 2005). Hablando de los desafíos latinoamericanos, autores como Sorj

y Martuccelli (2008) trabajan las transformaciones en la cohesión social, partiendo de una visión de los cambios que «están dando lugar a un mundo fragmentado y de individualización auto concentrada —asociados con la pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad nacional y falta de sensibilidad para el bien común, a la erosión de referencias tradicionales y a la expansión de sistemas de información y de deseos de acceso a una gama cada vez mayor de bienes de consumo» (2008, p. XIV), analizando la transformación del «lazo social» que se construyó según los autores en América Latina a partir de la tensión entre «jerarquía e igualdad», tensión que recorre los espacios institucionales donde esta tiene lugar: la religión y la religiosidad, las relaciones interétnicas, los espacios urbanos, los medios de comunicación y la industria cultural y las emigraciones, para concluir que «los reductos del orden jerárquico se han desvanecido en el aire» (2008, p. 69). «El resultado es la generalización de un sentimiento de fragilidad interactivo, como si los individuos no supieran más a qué atenerse los unos de los otros». «Para regular los intercambios que resultan, la “jerarquía” es sin duda insuficiente y esto requerirá de un incremento de los pactos contractuales y un respeto creciente de las reglas y de las normas» (2008, p. 69).

Finalmente, quiero referirme al análisis de Ronald Inglehart, planteado en sus libros sobre el cambio cultural (*Cultural Shift*, 1977) y *Modernización y Posmodernización* (1997-1998) donde plantea el giro cultural que se produce en los países ricos como consecuencia de la seguridad económica alcanzada, permitiendo la afirmación de los individuos, y la expansión de valores de autonomía personal y autoexpresión que no existían antes, y que no se encuentran igualmente extendidos en sociedades donde las necesidades económicas y de supervivencia mantienen vigentes lo que él llama «valores materialistas», que enfatizan la autoridad, la religión, el orden. Este trabajo que continúa los estudios sobre los cambios de valores de investigadores europeos (European Values Survey, EVS), preocupados por los cambios de valores en sus sociedades, ha dado lugar a la Encuesta Mundial de Valores que se viene realizando en América Latina desde 1980 en algunos países, y desde 1996 en otros, proporcionándonos una base de datos que permite acercarnos a través de estudios de opinión a los valores y actitudes de los públicos latinoamericanos y medir cada cinco años los cambios en los valores religiosos, económicos, políticos y familiares y cómo se relacionan entre ellos.

La Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey, WVS) incluye más de 250 variables que nos pueden servir para dar contenido empírico a las preocupaciones enunciadas en esta introducción¹, pero me concentraré en el

¹ Estas son materia del libro que estoy escribiendo como resultado del análisis de las tres encuestas hechas en el Perú, comparando con los datos a nivel mundial.

tema referido al cambio religioso en relación con los grandes temas que marcan el cambio de época y a la manera de entender la relación entre la religión y el cambio social.

2. ¿CÓMO VEMOS LOS CAMBIOS CONTEMPORÁNEOS LOS LATINOAMERICANOS?

Los hallazgos preliminares que surgen del análisis latinoamericano que reviso brevemente, nos muestran idas y vueltas, cambios de opinión e incoherencias que aparecen como contradictorias, propias del mundo de las opiniones que recogen tanto el sentido común como la información fragmentada que reciben los individuos en sus sociedades.

Esta información, sin embargo, puede servir para interrogarnos sobre la manera cómo las personas ven su mundo y los problemas que enfrentan, y en qué proporción y quiénes comparten sentimientos y actitudes en sociedades específicas. De hecho, nos permite confirmar la visión compartida sobre el creciente peso del individualismo como referencia crítica para la acción y sus consecuencias en la sociedad y la política.

Después de realizar tres encuestas nacionales en el Perú², en 1996, en 2001 y en 2006, y contando con las de América Latina, entre 1980 y 2006, podemos plantear de manera muy inicial una reflexión sobre algunos cambios que se han producido en el campo de los valores, tomando en cuenta cambios que van de relaciones jerárquicas a igualitarias, de corporativas a individualistas, entre otras. No voy a realizar sin embargo un análisis directo de las bases de datos, sino que voy a mirar los análisis hechos por los investigadores de cada país que nos dan una visión más completa de sus sociedades.

Los artículos y libros que he revisado con este objetivo son los de Alejandro Moreno (2005) de México, el de Marita Carballo (2005) de Argentina, los tres tomos publicados por Camilo Herrera (2006) en Colombia y los artículos sobre capital social de John Sudarsky (2001, 2004a y 2004b), también de Colombia, los artículos de José Enrique Molina de Venezuela (2006), quien compara ya los datos latinoamericanos, y los reportes de resultados de las encuestas de MORI-Chile por Martha Lagos y de Montevideo por Ignacio Zuasnábar de Equipos-Mori, así como los datos propios de Perú recogidos por Catalina Romero. Los análisis de

² El trabajo de campo de la encuesta de 1996 lo realizó Apoyo, Opinión y Mercado con el apoyo financiero de Bilance y el Instituto Bartolomé de Las Casas. El de 2001, lo realizó Datum Internacional, con el apoyo académico y financiero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de CONCYTEC; y el de 2006, el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, con apoyo financiero de la Maestría de Ciencia Política y de Oxfam, Inglaterra.

Inglehart, Christian Welzel, Juan Diez-Nicolás, Thorleif Peterson, entre otros, también han sido considerados³.

Estas publicaciones toman en cuenta entre tres y cinco olas de encuestas, siendo los casos de México y Argentina los primeros países que se incorporaron a esta encuesta. En los reportes resulta claro que se producen cambios importantes en distintas dimensiones de la vida cultural de los países latinoamericanos, pero la pregunta que me hago en este artículo se centra básicamente en el papel de la religión como productora de sentido en relación con el proceso de modernización que estaba en curso en las sociedades latinoamericanas y que se ve cortado por las dinámicas de globalización y transformación a las que he hecho referencia en la introducción que refuerzan otras corrientes en curso en las sociedades latinoamericanas.

En la revisión de estos autores, he encontrado tres temas comunes que son analizados por todos los colegas latinoamericanos, de los cuales desarrollaré el primero en este artículo incluyendo los otros dos en referencia al primero, sin desarrollarlos en sí mismos.

El primero es la persistencia de la religión en América Latina, su dinamismo histórico y su posibilidad de convertirse en factor de cambio, a la vez que se da un proceso de secularización. El segundo es la persistencia de la pobreza y de la desigualdad en todos los países latinoamericanos, pese al crecimiento económico que se ha dado en la región en la última década. El tercero es la relación entre la valoración de la democracia y el profundo descontento con las instituciones democráticas. Estos tres puntos son presentados como paradojas por los autores que los plantean, lo que me lleva a plantear una discusión teórica porque, en el terreno de las ciencias sociales, no es la realidad la que está mal cuando nos encontramos frente a un problema que no podemos explicar, sino las teorías que no están equipadas para comprender lo que sucede.

2.1 ¿Paradojas o problemas en las teorías?

En boca de distintos autores y en países diferentes se encuentra el concepto de «paradoja» para referirse a situaciones contradictorias que surgen de los datos que observamos y que recogemos empíricamente. La primera es la religiosa, encontrada por Alejandro Moreno en México, país laico donde se dio un enfrentamiento a comienzos del siglo XX entre los revolucionarios mexicanos y la Iglesia que tuvo

³ No he tenido acceso al libro que ha publicado Enrique de Castro de la Universidad de Brasilia y no estoy incluyendo los debates que se están dando con otras perspectivas, desde el enfoque de desarrollo humano y capacidades, desde la psicología social y los estudios de bienestar subjetivo, que incluyen el tema de la felicidad, y otras teorías culturales.

como resultado la secularización del poder político, pero no de la sociedad. La paradoja que encuentra el autor es que la creencia en Dios ha aumentado en México, la espiritualidad es mayor entre los mexicanos, pero también lo son los valores de autoexpresión y la afirmación de la autonomía que acompañan el desarrollo del individualismo.

De acuerdo con los clásicos de la sociología y con las tesis que hemos expuesto a manera de introducción de este ensayo, el desarrollo del individualismo sería el resultado de una mayor racionalidad y autonomía de los sujetos que romperían con relaciones de autoridad tradicionales, entre las cuales las religiosas ocupan un lugar principal, para dar lugar a una mayor autonomía y libertad expresiva del yo. ¿Cómo es que la religiosidad aumenta junto con valores de autoexpresión y autonomía? Moreno afirma que «el cambio de valores que ha tenido lugar en México durante las dos últimas décadas nos lleva a replantear lo que antes se veía simplemente como el paso de lo tradicional a lo moderno. La mexicana es, comparativamente hablando, una sociedad tradicional y esta caracterización se ha reforzado en los últimos años a través de un mayor nacionalismo y una mayor religiosidad que, no obstante, no encuentra sus mayores expresiones en las instituciones religiosas sino en el individuo. La trayectoria de México ha cambiado en el plano de la modernización, mostrando un viraje que, sin duda, hay que entender sin la ayuda de los teóricos de la modernización clásica, quienes no lo hubieran previsto así. También la sociedad mexicana se mueve hacia los valores de la auto expresión y la libertad, con todo lo que ello implica» (2005, 27).

Hay en México una cultura de autoexpresión que se está formando, y que valora la libertad, la que no se explica como en los países ricos por una situación de bienestar generalizado y de abundancia. «Las desigualdades sociales persisten, los niveles de pobreza son escandalosos, la inseguridad provoca constantes miedos. A pesar de todo, nuestros valores han seguido una trayectoria que nos aleja de la cultura de escasez y supervivencia, a la vez que nos acerca a una cultura de expresión propia y de gran estima por la libertad» (Moreno, 2005, p. 26). Esta es la segunda paradoja que aparece.

José Enrique Molina de Venezuela habla también de una «paradoja» en el terreno de la democracia. Nos dice que si bien no está empíricamente demostrado que el desarrollo económico genera procesos de democratización, este sí influye en la estabilidad de la democracia y en el desarrollo de valores propicios a la democratización (Molina, 2006, p. 20).

El apoyo difuso a la democracia medido por la Encuesta Mundial de Valores en América Latina se encuentra en más de 80% entre 1995 y el año 2000. Pero de estos demócratas, alrededor del 38% también apoyaría a un líder fuerte que

no tuviera que escuchar al congreso, y esta proporción va en aumento donde se repite la encuesta⁴.

Esta incongruencia se explica por la búsqueda desesperada de soluciones efectivas por la mayoría de los públicos de América Latina, lo que los llevaría en algunos países a renunciar a vivir en democracia, buscando los resultados de la política más que la igualdad en los procedimientos. Esta línea de estudio ha sido seguida por el *Informe sobre la Democracia en América Latina* (PNUD, 2004) y por otros estudios hechos por investigadores norteamericanos que se preguntan por el fracaso de la democracia en América Latina. Ante estas interrogantes, Molina argumenta que no se puede generalizar a nivel del continente los problemas que atraviesa cada país, sin ponerlos en su contexto y analizar la calidad de la democracia en cada uno de ellos.

Estas tres paradojas merecen un tratamiento detallado y especializado que no desarrollaré en este ensayo, pero que constituyen el marco en el que sitúo mi reflexión y análisis que se extenderá sobre el primer problema: el del cambio religioso en América Latina, su persistencia y vigencia en el mundo de la religión, la cultura y el poder, coexistiendo con un creciente desarrollo de la autonomía personal y del individualismo.

2.2 De valores religiosos a valores racionales y secularizados, y de ahí a individuos creyentes con valores

¿La persistencia de la religión es un error de los pueblos o un error de la teoría? La convicción de que la secularización, entendida como desaparición de la religión, como disminución de la creencia y práctica religiosa, o como la diferenciación de esferas de acción profana y sagrada, es una consecuencia inevitable de la Modernidad, es parte consustancial de la mentalidad moderna y científica y se convirtió en una profecía autocumplida en Europa, impulsada inclusive por las iglesias, convencidas de tener que enfrentar un problema irreversible.

Pero, las religiones no han desaparecido y las prácticas religiosas han persistido, se han diversificado, multiplicado, independizado de las religiones, vuelto eclécticas, y creativas produciendo nuevos espacios públicos y maneras de operar en ellos, contribuyendo a su redefinición a través de procesos que vale la pena estudiar (Levine, 1992; Casanova, 1994; Berger, 2001; Romero, 2009). El problema, entonces, podría estar en la teoría, en este caso de la modernización, que parte desde Max Weber y su sociología de la religión, fenómeno que él ve destinado a desaparecer con el avance de la racionalidad científica y de la

⁴ Molina recuerda que en España esta proporción llega solo a 15%.

racionalidad burocrática que llevarían inevitablemente al desarrollo tecnológico del capitalismo, y al desarrollo burocrático de la política con el surgimiento del Estado moderno. Inglehart y Welzel (2004) todavía sostienen la vigencia de esta perspectiva en su análisis de los datos que recogen de las encuestas hechas a nivel mundial y que resumen en el cuadro de resultados que presentamos en el gráfico 1.

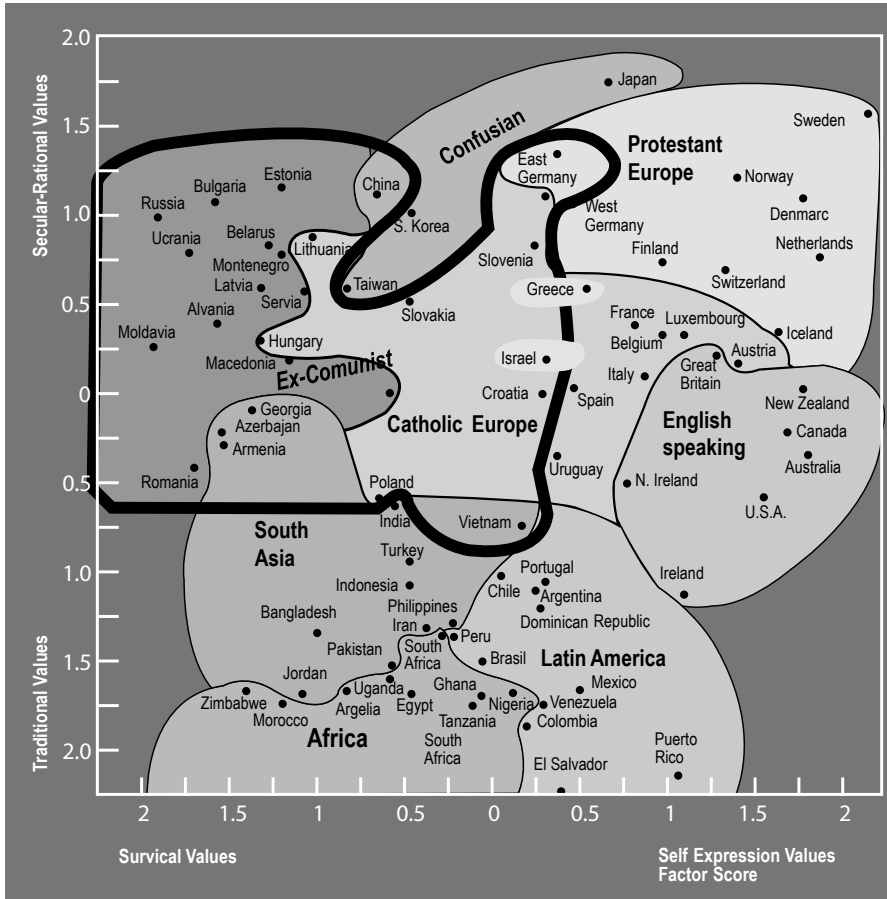
Como podemos apreciar en el gráfico 1 que resume los resultados de la Encuesta Mundial de Valores en los países que aparecen en el mapa, los autores ubican a estos en el cruce de dos ejes: en el vertical hay una línea continua entre valores tradicionales y los seculares-rationales (cuyos principales indicadores son la importancia de Dios en la vida de la persona, la obediencia y la religión como valores a enseñar a los hijos, la postura de justificación o no del aborto, el orgullo nacional y la postura hacia un mayor respeto a la autoridad). En el eje horizontal, la línea abarca valores que van de la supervivencia a la autoexpresión (los principales indicadores son el índice de materialismo-posmaterialismo de Inglehart, el nivel de felicidad declarado, participación política declarada, justificación de la homosexualidad y confianza interpersonal).

En el gráfico 1, si imaginamos una división en los cruces de los puntos cero de cada coordenada, el cuadrante formado por el cruce entre valores racionales-seculares y los valores auto-expresivos está ocupado por las sociedades europeas y Gran Bretaña, con Estados Unidos y los países del Reino Unido en el límite hacia abajo del eje vertical, por la importancia de las creencias en la sociedad norteamericana, que la convertiría en tradicional según la hipótesis, de allí su llamada «excepcionalidad»⁵. Este mapa se ha repetido con los datos de varias olas de la encuesta dando resultados similares, lo que demuestra para los autores la solidez de las dos dimensiones culturales que se ponen a prueba (Inglehart, Basañez y otros, 2004, p. 15).

Si seguimos con el análisis, vemos que el modelo funciona perfectamente de acuerdo con la teoría de la modernidad y de la tendencia que predice Inglehart en el caso de los países africanos y del sur de Asia, que caen en el cuadrante de valores tradicionales y de supervivencia, por un lado, y los europeos, por el otro, con valores racionales-seculares y de autoexpresión. Pero escapan a ese modelo los países ex socialistas, que siendo seculares y racionales, tienen valores de supervivencia, y los países latinoamericanos cuyos valores son posmodernos o auto-expresivos, aunque sigan siendo tradicionales y religiosos, y como se ha dicho al mencionar las paradojas, pobres y viviendo con altos niveles de inseguridad.

⁵ Siendo Estados Unidos un país desarrollado, continúa siendo muy religioso, por lo que la hipótesis de la secularización no se cumple.

Gráfico 1
Mapa cultural del mundo de Inglehart y Welzel



Fuente: Inglehart y Welzel (2005, p. 64); basado en la Encuesta Mundial de Valores. Véase www.worldvaluessurvey.org

Los límites del enfoque teórico de la modernidad se hacen evidentes en este punto: en los términos más clásicos, se espera que la modernidad vaya acompañada de un proceso de secularización, y esto deberíamos encontrarlo en los valores y creencias de los individuos. Pero en América Latina esto no está ocurriendo, como tampoco ha ocurrido en los Estados Unidos. Es más, la religiosidad está aumentando en todos los países de la región en el nivel de las creencias aunque no de las prácticas, si se miden como la asistencia a misa o al culto dominical.

Esta aparente paradoja ocurre porque hay diferentes maneras de entender la secularización y de medirla. Si tomamos como indicador de secularización las prácticas religiosas culturales se verifica la hipótesis, si tomamos la desaparición de la religión o la creencia en Dios, no se cumple.

En el estudio de John Sudarsky (2004a, p. 208) sobre capital social en Colombia, se presenta otro modelo para seguir las trayectorias o rutas al desarrollo en América Latina tomando en cuenta a Inglehart, pero también a Putnam⁶. En lo que él llama «modelos de cuadrantes» presenta un eje vertical donde considera la efectividad comunitaria o el capital social, y en el horizontal, las visiones del individuo dividiendo cada uno en negativo y positivo.

Cuadro 1
Análisis por cuadrantes: comparabilidad y rango de formaciones sociales

		Visiones del individuo	
		Negativa	Positiva
Efectividad comunitaria	Negativa	Familistas amorales Deterioro comunal, individuación remitente	Alto <i>n</i> logro «Modernización»
	Positiva	Comunal o <i>Gemeinschaft</i>	Asociación «Sociedad cívica moderna»

Fuente: Sudarsky (2004a, p. 208)

Sudarsky propone un análisis por cuadrantes para la «comparabilidad y rango de formaciones sociales». En su análisis de Colombia piensa que esta sigue la trayectoria que va del cuadrante de «Comunal o *Gemeinschaft*» al de «Alto *n* logro o Modernización» para luego pasar al de «sociedad cívica moderna».

La religión para este autor influye negativamente en la visión positiva de la efectividad comunitaria, debido a la influencia de un «jacobinismo católico hispano» que lleva a una cultura política que continúa teniendo vigencia en Colombia. El catolicismo en este país no parece estar contribuyendo al desarrollo de la individualización ni a una visión positiva de los logros individuales conducentes al fortalecimiento de una sociedad cívica moderna. Como señala Molina al referirse al tipo de análisis que hay que hacer para entender la calidad de la democracia, es necesario ver cómo se desarrolla en cada país y no generalizar para toda América Latina, y una propuesta similar es válida para analizar la calidad de la religiosidad en cada país y relacionarla con el desarrollo de la autonomía subjetiva y de la democracia. En algunos países, como en Colombia según Sudarsky, la religión en general puede estar siendo vista como un factor de retraso en la formación de la autonomía individual, de motivación de logro y de formación de capital social positivo, ya sea por la orientación como por la influencia pública que ha

⁶ Los conceptos utilizados evidencian las referencias que el autor hace en su trabajo a Tönnies (1957), *Gemeinschaft y Gessellschaft*; MacLelland (1967), *Motivación de logro*; Banfield (1958), *Facilismo amoral*.

tenido y continúa teniendo la iglesia en ese país, pero también por cuestiones de tipo metodológico que tienen que ver con lo que se define como religiosidad⁷.

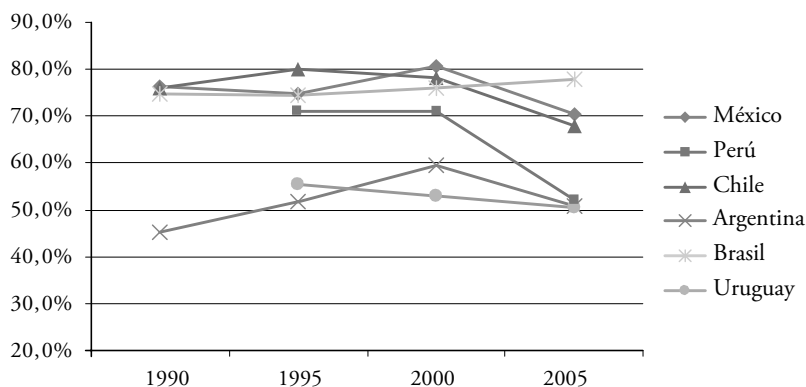
Otro acercamiento al análisis de la secularización lo hace Alejandro Moreno, en su análisis de los datos de México. De acuerdo con este autor, los mexicanos «reforzaron su espiritualidad, entendida como la importancia que le dan a Dios en sus vidas, pero disminuyó la importancia de la iglesia» (2005, p. 55). «El cambio de valores que ha tenido lugar en México durante las dos últimas décadas nos lleva a replantear lo que antes se veía simplemente como el paso de lo tradicional a lo moderno. La mexicana es, comparativamente hablando, una sociedad tradicional y esta caracterización se ha reforzado en los últimos años a través de un mayor nacionalismo y una mayor religiosidad que, no obstante, no encuentra sus mayores expresiones en las instituciones religiosas sino en el individuo» (2005, p. 27).

El peso de la devoción a la Virgen de Guadalupe (88% cree en ella) es un ejemplo de esta creciente religiosidad. Pero esta devoción puede ser parte de la vida cotidiana del creyente y cultivada con autonomía de la Iglesia. Algo similar ocurriría en el Perú con la devoción al Señor de los Milagros, que genera su propia organización y que siendo reconocida y apoyada por la iglesia católica da lugar a una religiosidad autónoma, «orientada» por el propio creyente.

El informe de Chile señala que hay una notable estabilidad en la importancia de Dios en la vida de los chilenos, desde 1990 hasta 2006 a la vez que disminuyen la práctica religiosa y la confianza en la Iglesia, produciéndose un proceso de secularización (véase el gráfico 2). Los católicos en Chile disminuyen de 71% a 61% según los datos de la WVS, un poco más que en los otros países donde también se nota este fenómeno dando lugar a un mayor pluralismo religioso. En Chile se le da menos importancia a la religión en general, pero esto no significa, según el informe, que esté aumentando una mentalidad racional en comparación con la búsqueda de autoridades tradicionales. Este fenómeno es visto como «un modelo excepcional de secularización», que habría que explorar más.

⁷ Puede tratarse de una definición unidimensional o multidimensional, que permita diferenciar tipos de religiosidad.

Gráfico 2⁸
Confianza en la iglesia en América Latina



Elaboración propia

En Argentina, Carballo (2005, p. 228) dice que:

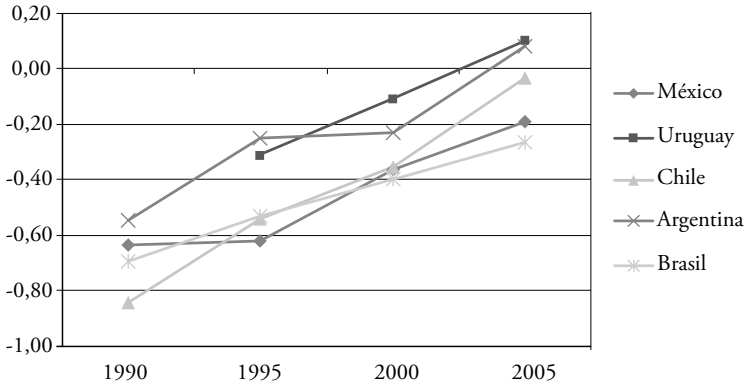
En la actualidad, las convicciones religiosas de las personas están más basadas en intereses y consideraciones privadas, y cada vez menos en aquellos provistos por autoridades colectivas. De esto se desprende que se esté dando un incremento en la diversidad de convicciones y creencias. Cada vez más los individuos siguen su propia guía moral. Estas creencias religiosas y morales están abiertas a ser reformuladas y cambiadas.

También se señala el crecimiento en el porcentaje que se declara creyente, los que se consideran personas religiosas crecieron cerca del 20% yendo de 62% a 81% entre 1980 y 1999, al mismo tiempo que el relativismo moral o tolerancia hacia prácticas como el control de natalidad, el aborto y la homosexualidad también crecían y no se encuentra una clara línea entre lo que se considera bueno o malo (véanse los gráficos 3 y 4). En la encuesta de 2003, solo 71% se declaraba católico habiendo disminuido en 18%, en un país considerado muy católico como la Argentina. Es decir, la creencia no va junto con la adhesión a una institución religiosa o la pertenencia a ella, y este es un nuevo fenómeno que también se encuentra en la Europa contemporánea⁹.

⁸ A partir de este cuadro, los datos corresponden a nuestra propia elaboración. En ella ha participado Omar Awapara, sociólogo asistente de investigación en el proyecto de la Encuesta Mundial de Valores.

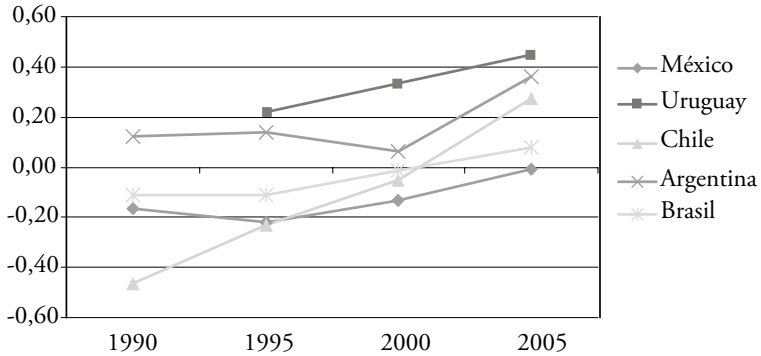
⁹ Grace Davie (1994) habla de «creer sin pertenecer», para referirse a un nuevo tipo de creyente europeo.

Gráfico 3
Considera justificable la homosexualidad



Elaboración propia

Gráfico 4
Considera justificable el divorcio



Elaboración propia

Cuadro 2
¿Cuán importante es Dios en su vida?
(Respuestas de 7 a 10 en la escala de mayor importancia)

Países/Años	1990/1991	1995/1996	2000/2001	2005/2006
Argentina	74,3	81,1	82,3	82,8
Chile	84,1	84,3	83,9	86,4
Colombia	---	96,9	---	97,6
México	81,8	75,4	93,1	94,5
Perú	---	90,3	92,3	90,2
Uruguay	---	56,7	---	68,0
Venezuela	---	92,9	---	95,6
Promedio		82,5		87,9

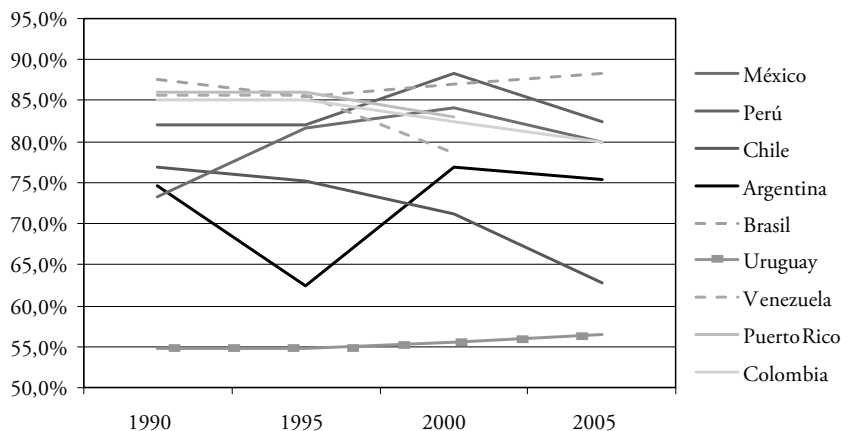
Fuente: Base de datos de WVS
 Elaboración propia

En el caso de Uruguay, Ignacio Zuasnábar (2006) reporta el crecimiento de la importancia de Dios en la vida de los uruguayos, lo que es notable en un país que se define como laico desde su independencia nacional. Acá se ha establecido una relación entre creencias religiosas y valores de seguridad vinculados a la supervivencia, que podrían ser más autoritarios. Pero este autoritarismo podría estar más relacionado con otras variables que con la religiosa, ya que el mismo analista nos dice que ha aumentado la tolerancia a comportamientos no aprobados por la Iglesia, lo que es propio del modelo auto-expresivo. Esto se puede ver en la mayor justificación de la homosexualidad que ha pasado de un rechazo de 45% a 18% y el aumento de la confianza, indicador de una cultura marcada por la autonomía, que ha subido de 24% a 38%. Por otro lado, indicadores que pueden ser considerados tradicionales como el objetivo nacional de mantener el orden subió de 25% a 33%, y los que dicen que el principal valor a enseñar a los hijos es la obediencia subió en 10%.

En Perú, encontramos en la Encuesta Mundial de Valores (EMV) que la importancia de Dios en la vida de las personas se mantiene alta para un promedio de 90% con una variación de 2%, aproximadamente, entre cada encuesta; mientras que los que se consideran muy religiosos han pasado de 82% en 1996 a 88% en 2001 para bajar nuevamente en 2006.

Gráfico 5

Tendencias por países en la autopercepción como «persona religiosa»



Elaboración propia

En el eje de valores materialistas o de supervivencia y los auto-expresivos, también hay un aumento de los valores auto-expresivos, pero muy poco relevante comparado con el peso numérico de los valores de supervivencia entre la ciudadanía peruana. El Perú estaba ubicado en el cuadrante inferior izquierdo del mapa cultural del mundo que presentaron Inglehart y Welzel (Inglehart, Basañez y otros, 2004) con los países de Asia y África, moviéndose hacia la derecha con algunos de ellos en la última encuesta que se grafica en el cuadro de Alejandro Moreno (2005).

2.3 ¿Cómo está cambiando la religión en América Latina?

De acuerdo con la información presentada por los investigadores principales de la Encuesta Mundial de Valores de América Latina, está aumentando la creencia en Dios, pero la práctica religiosa está disminuyendo, así como el número de los que pertenecen a la Iglesia católica. Aumenta la movilidad entre religiones y la indiferencia religiosa, fenómeno que es diferente al ateísmo que implica una oposición reflexiva a la creencia en Dios. Hay menos católicos, y han crecido los evangélicos, pentecostales y neopentecostales y, aunque estos últimos sigan siendo minoría, ya no se puede hablar de América Latina como «el continente católico», aunque sigue siendo un continente creyente. Hay menos respeto por la autoridad religiosa, y más tolerancia a comportamientos diferentes (referido a la justificación del aborto, al control de natalidad, la homosexualidad, el divorcio), lo que lleva a hablar de un cierto relativismo

moral, que sería consistente con el cambio en algunos países hacia valores individuales y auto-expresivos que conviven con una fe que se hace también más individualista.

Hace falta estudiar la religión con otros enfoques, tomando en cuenta hechos como la separación de la Iglesia del Estado que se viene dando desde hace varias décadas en los países latinoamericanos, a la vez que se institucionaliza la democracia, afectando la forma en que la iglesia católica y otras religiones ejercen su poder en la sociedad¹⁰. La liberalización de la legislación en varios países respecto al divorcio, y las políticas de población que favorecen o aceptan el control de la natalidad consiguen un amplio apoyo popular, y estos son indicadores de cambios en la relación entre la Iglesia y la ciudadanía, que mantiene su identidad religiosa, pero también crece en su capacidad de raciocinio autónomo y de ejercicio de la libertad.

También es importante estudiar la relación entre catolicismo y cultura política, como lo hace John Sudarsky en su análisis de Colombia al referirse a la tradición «jacobina hispana católica», analizándola como un elemento que da continuidad a la cultura en América Latina. Si bien hay tradiciones culturales que es importante estudiar, estas encierran en sí mismas sus propios mecanismos de cambio que construyen en trayectorias particulares.

Los estudios sobre religión en América Latina muestran que la secularización está creciendo sin que disminuya la creencia en Dios, las prácticas no disminuyen sino que se diversifican. Muchos autores latinoamericanos dan cuenta en sus investigaciones de estos fenómenos y de la forma como cada creyente vive la fe «a su manera» (Parker, 2009; Romero, 2008; Mallimacci, 2008).

El fenómeno de la secularización es uno de los temas centrales para el estudio del cambio social en lo que respecta a la relación entre religión y modernidad, desarrollo económico y democracia, tema a revisarse no solo en América Latina sino en los distintos continentes. Desde Peter Berger hasta Habermas, pasando por los sociólogos contemporáneos que han trabajado la religión desde una perspectiva sociológica, se viene redefiniendo la visión de la secularización y de la religión. Berger (2001, p. 445) dice:

[...] mi principal cambio intelectual ha sido precisamente el abandono de la vieja teoría de la secularización, [...] porque la teoría parecía cada vez menos capaz

¹⁰ Según el análisis de Sudarsky sobre el catolicismo hispano, una de sus consecuencias es que no se separa el Estado de la sociedad civil, y que la religión representada por la Iglesia católica se mantiene subordinada a la corona. Los cambios que se dan en la relación Iglesia y Estado después de Vaticano II (1965) parecen abrir la posibilidad de otra trayectoria, allí donde las iglesias lograron transformarse e insertarse en la sociedad civil.

de darle algún sentido a la evidencia empírica que venía de diferentes partes del mundo [no solo los Estados Unidos]. Por la evidencia que veo, el mundo, con algunas notables excepciones, es tan religioso como siempre, y en algunos lugares, más religioso que nunca. Esto no quiere decir que no exista la secularización: solo significa que este fenómeno de ninguna manera es el resultado directo e inevitable de la modernidad.

José Casanova (1994, p. 61), refiriéndose al carácter normativo que ha adquirido la teoría de la secularización, señala que la teoría no debería comenzar con la premisa del conflicto entre la cosmovisión religiosa y secular, refiriéndose a la realidad en América donde:

[...] tanto los ‘fundamentalistas’ religiosos como los ‘humanistas seculares’ fundamentalistas son minorías cognoscitivas, mientras que la mayoría de los americanos tienden a ser humanistas, que son simultáneamente religiosos y seculares. Señalando que la teoría de la secularización debe reformularse de forma que «esta realidad empírica deje de ser una paradoja».

Como hemos dicho anteriormente, es a partir de problemas nuevos y realidades que no se pueden entender a la luz de una teoría que pierde su poder explicativo, que surge la exigencia de repensar teorías como la de la secularización en este caso.

La problemática que surge entonces se puede dibujar mejor: se está produciendo el encuentro entre distintos tipos de creencias, lo que se considera una forma de pluralismo religioso, que se puede dar entre religiones pero también dentro de ellas. Pero también se dan conflictos que se presentan al interior de religiones que no se entienden si estas se ven como realidades homogéneas sin dinamismo. Las distintas posiciones y grupos que pueden existir al interior de las religiones pueden dar lugar a convergencias culturales y políticas, también económicas, con otros actores sociales, así como a conflictos.

Como ejemplo de investigaciones recientes que reconocen la religión como fenómeno importante en relación con la política o con la constitución de actores sociales en el espacio público, está la de Steigenga (2001) que investiga los casos de Guatemala y Costa Rica encontrando más fuerza explicativa en la variable que mide el grado de la ortodoxia en la creencia, que en la que mide pertenencia religiosa. De acuerdo con los resultados que él encuentra, el ortodoxo católico o el ortodoxo protestante —evangélico o pentecostal— tienden a ser también ortodoxos en la política. El creyente abierto y tolerante con los demás, sea cual sea su religión, tenderá a serlo en la política.

En relación con la diversidad interna que da lugar a pluralismo religioso e intrarreligioso, en las tres encuestas del WVS que se han hecho en el Perú

(EPV), hemos incluido dos preguntas para medir diferentes creencias religiosas comunes a la fe cristiana. La primera busca diferenciar entre creencias religiosas extramundanas y las dirigidas a este mundo (Weber)¹¹ para ver si estas explican otro tipo de valores, en particular la relación con los valores auto-expresivos. Y la segunda pregunta busca diferenciar la valoración del comportamiento religioso con prioridad dada al respeto a la autoridad, o a la práctica de la solidaridad, es decir, como una adhesión formal o como un estilo de vida. Los gráficos 2 y 4 presentan los resultados de estas dos preguntas para el Perú.

En las tres encuestas, los resultados han sido muy similares, por lo que presento solo los datos de la última, cruzando la información de cada una de las preguntas religiosas con la escala de materialismo —posmaterialismo de Inglehart, que corresponden a valores de seguridad— auto-expresión.

La pregunta sobre la orientación a este mundo o hacia fuera del mundo se ha hecho como sigue:

Por lo que sabe o ha oído acerca del sentido de la misión de Jesucristo en el mundo, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

A. Cristo se hizo hombre para salvarnos enseñándonos que todos somos hijos de Dios.

Porcentaje de respuesta: 65%

B. Cristo se hizo hombre para sufrir y morir en la cruz y así cargar con nuestros pecados.

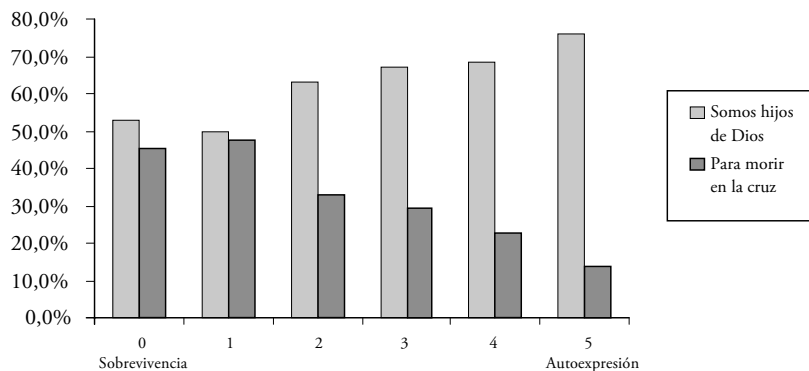
Porcentaje de respuesta: 35%

¹¹ Partiendo de la distinción de Weber entre religiones orientadas a este mundo que enfatizan un estilo de vida ascético y las orientadas hacia fuera del mundo acentuando el lado místico. También John Sudarsky define uno de los rasgos del jacobinismo hispano católico como la «orientación a la salvación en el “otro mundo” en lugar de en este y con ello, la carencia de responsabilidad de la transformación del mundo terrenal a través de las acciones propias» (2001, cap. 2, p. 37).

Cuadro 3
Orientación a estelotro mundo y sobrevivencia/autoexpresión

Valores	Somos hijos de Dios	Para morir en la cruz
Sobrevivencia 0	52,8	45,3
1	49,7	47,6
2	63,2	32,9
3	67,2	29,4
4	68,4	22,6
Autoexpresión 5	75,9	13,8

Fuente: EMV, 2006 (pregunta hecha solo en el Perú). Elaboración propia.



Hay una fuerte asociación entre los que responden la fórmula A y los valores de autoexpresión, así como entre los que responden la fórmula B y los valores de sobre vivencia.

También es significativa la asociación entre las respuestas a la siguiente pregunta:

Algunos dicen que para ser buenos cristianos lo más importante es:

A. Cumplir con todos los mandatos de la Iglesia.

Y otros que lo más importante es:

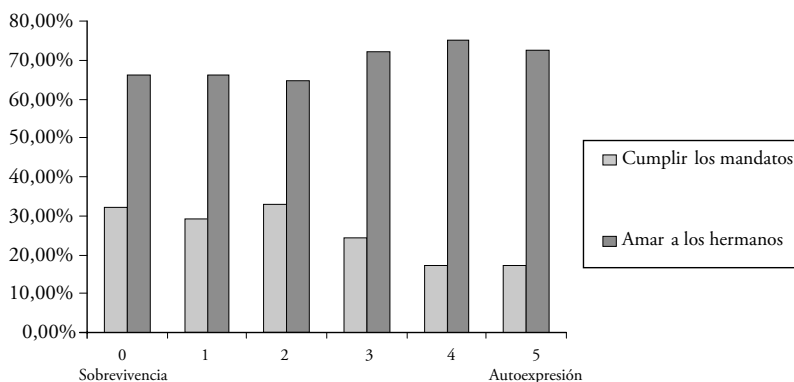
B. Amar a los hermanos y vivir de acuerdo con ello.

¿Con cuál de las dos afirmaciones está usted más de acuerdo? La respuesta a la alternativa A ha sido de 33% y a la B ha sido de 67%.

Cuadro 4
Pertenencia formal/estilo de vida y sobrevivencial/autoexpresión

Valores	Cumplir los mandatos	Amar a los hermanos
Sobrevivencia	32,5	66,0
1	29,3	66,0
2	32,8	63,8
3	24,4	72,2
4	17,3	75,2
Autoexpresión	17,2	72,4

Fuente: EMV, 2006 (pregunta hecha solo en el Perú) Elaboración propia.



A partir de estas pruebas piloto, planteamos la hipótesis de que si se tomara en cuenta la complejidad de la variable religiosa en la Encuesta Mundial de Valores, la definición operativa de los valores tradicionales debería tomar en cuenta el tipo de creencia a la que se adhiere y la manera como se definen los valores del creyente, y no las variables sobre la importancia de Dios en la vida o el considerarse una persona religiosa. Estas dos preguntas son un ejemplo que permite entender por qué puede darse una relación entre religiosidad y valores auto-expresivos, y también entre religiosidad y valores de seguridad, porque los tipos de religiosidad pueden ser diferentes.

De esta manera, los creyentes que priorizan el amor a los hermanos frente a la sujeción a la ley por un lado, y entienden la enseñanza de Cristo, acentuando el amor al prójimo para seguirlo en la vida, frente al sufrimiento y a la muerte que se produce como consecuencia de la misión, por otro, tienden a tener valores de autonomía y autoexpresión que son coherentes con sus creencias religiosas. No se trataría de una paradoja, ni habría contradicción.

Se trata de comprender que así como se puede hablar de cambios culturales, también se puede hablar entonces de cambios religiosos, que introducen la diversidad y la racionalidad en el ámbito religioso, tema en el que coincido con John Sudarsky.

En relación con las otras variables que operacionalizan los valores tradicionales como son el respeto a la autoridad y las demandas por más orden, que están creciendo en algunos países, pueden tener una dimensión secular vinculada a otros factores que no sean religiosos como lo analizan los estudios de Colombia, México y Perú.

A partir de esta breve aproximación al análisis de los datos de la Encuesta Mundial de Valores en América Latina, hemos podido explorar la complejidad del fenómeno religioso y las diversas maneras que puede tener de relacionarse con la cultura, la política y la economía, así como con los individuos en cada sociedad. Lejos de desaparecer, la religiosidad está aumentando en los países que hemos considerado, en términos de la importancia dada a Dios y en el de la identidad religiosa autodefinida. Pero esta religiosidad ya no parece ser un indicador de valores tradicionales y autoritarios como lo era en otros tiempos y puede seguirlo siendo en algunos países y localidades, sino que puede relacionarse con valores de autoexpresión y autonomía.

Respecto al fenómeno del cambio social acompañado por la secularización, debe ser analizado empíricamente en cada sociedad y comparativamente, ya que no se trata de un *thelos* inevitable, sino de una relación social que se establece históricamente. Allí donde las religiones sean capaces de aportar desde su propia reflexión teológica a la comprensión del mundo y a darle sentido a realidades en cambio, pueden mantener su vigencia e importancia social, fortaleciendo sentimientos de identidad nacional, cultural, actitudes autoritarias o democráticas. En cada caso habrá que analizar el tipo de influencia que ejerzan en sus sociedades, y los objetivos políticos que tengan como religiones, y de alianzas que establezcan con los actores sociales en las instituciones de la sociedad.

Y en todos los casos, la relación no será homogénea ni monolítica, sino plural y compleja. Es esta complejidad nueva la que buscamos entender.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Berger, Peter L. (2001). Reflections on the Sociology of Religion Today. *Sociology of Religion*, 62(4), 443-454.
- Caballero, César A. (2006). La soledad de los colombianos. Una lectura del Estudio Colombiano de Valores. En Camilo Herrera Mora (Dir.), *Nuestra identidad. Estudio colombiano de valores* (Vol. 2, pp. 201-221). Bogotá: Raddar – Centro de Estudios Culturales.
- Carballo, Marita (2005). *Valores culturales al cambio del milenio*. Buenos Aires: Nueva Mayoría.

- Casanova, José (1994). *Religiones públicas en el mundo moderno*. Madrid: Promoción Popular Cristiana.
- Davie, Grace (1994). *Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*. Oxford: Blackwell.
- Degregori, Carlos Iván y otros (1986). *Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Hagopian, Frances (Ed.) (2009). *Religious Pluralism, Democracy and the Catholic Church in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (2000). *Culture Matters. How Values Shape Human Progress*. Nueva York: Basic Books.
- Herrera Mora, Camilo (Dir.) (2006). *Nuestra identidad. Estudio colombiano de valores* (Vols. 1-3). Bogotá: Raddar – Centro de Estudios Culturales.
- Inglehart, Ronald (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald (1997). *Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald (1998). *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
- Inglehart, Ronald, Miguel Basañez y otros (Eds.) (2004). *Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook Based on the 1999-2002 Values Surveys*. México D. F.: Siglo XXI.
- Inglehart, Ronald & Christian Welzel (2005). *Modernization, Cultural Change and Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Levine, Daniel H. (1996). *Voces populares en el catolicismo latinoamericano*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.
- Mallimaci, Fortunato (2008). *Encuesta sobre religión en Argentina*. México D. F.: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Medellín Torres, Pedro (2006). Los colombianos frente a las reglas de juego: entre la invocación a la formalidad y el ejercicio de la informalidad. En Camilo Herrera Mora (Dir.), *Nuestra identidad. Estudio colombiano de valores* (Vol. 3, pp. 143-180). Bogotá: Raddar – Centro de Estudios Culturales.
- Molina, José Enrique & Valia Pereira Almao (2006). La democracia en América Latina: ¿éxito o fracaso? *Cuestiones Políticas*, 22(37), 11-35.
- Moreno, Alejandro (2005). *Los valores de los mexicanos* (Vol. 6) México: Banamex.
- MORI (2006). *Informe de prensa. World Value Survey: Chile*. Recuperado de <www.worldvaluessurvey.org>.
- Parker Gumucio, Christian (2009). Education and Increasing Religious Pluralism in Latin America: The Case of Chile. En Francis Hagopian (Ed.), *Religious Pluralism, Democracy and the Catholic Church in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Buenos Aires: Aguilar.
- Gómez de Souza, Luis Alberto (s.f.). Iglesia en Brasil. En Frances Hagopian (Ed.), *Contemporary Catholicism, Religious Pluralism, and Democracy in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press. En vías de publicación.
- Romero, Catalina & David Sulmont H. (2001). El estudio de los valores en el Perú. *Debates en Sociología*, 25-26, 245-281.
- Romero, Catalina (Organizadora) (2008). *Religión y espacio público*. Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Romero, Catalina (2009). Religion and Public Spaces: Catholicism and Civil Society in Peru. En Frances Hagopian (Ed.), *Contemporary Catholicism, Religious Pluralism, and Democracy in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Ros, María (2002). Los valores culturales y el desarrollo socioeconómico. Una comparación entre teorías culturales. *Reis*, 99, 9-33.
- Sorj, Bernardo & Danilo Martuccelli (2008). *El desafío latinoamericano. Cohesión social y democracia*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sudarsky, John (2001). *El capital social de Colombia*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Sudarsky, John (2004a). Logro y capital social: las llaves del desarrollo. *Anales de la Universidad Metropolitana*, 4(1) (Nueva Serie), 203-217.
- Sudarsky, John (2004b). La medición del capital social de Colombia con el BARCAS. Recuperado de <<http://johnsudarsky.com/?q=academia>>.
- Steigenga, Timothy J. (2001). *The Politics of the Spirit. The Political Implications of Pentecostalized Religion in Costa Rica and Guatemala*. Nueva York: Lexington Books.
- Touraine, Alain (2005). *Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d'aujourd'hui*. París: Fayard.
- Valencia, León (2006). La huella de la guerra en el campesinado. En Camilo Herrera Mora (Dir.), *Nuestra identidad. Estudio colombiano de valores* (Vol. 3, pp. 143-180). Bogotá: Raddar S. A. – Centro de Estudios Culturales.
- Zuasnábar, Ignacio de, MORI (2006). Informe de prensa. *World Value Survey: Uruguay* (primera de cuatro partes).

CULTURA ANDINA: MITOS Y MODERNIDAD

Juan Ansion

1. EL CAMBIO CULTURAL EN LA LARGA DURACIÓN

El presente texto se apoya en trabajos anteriores del autor (Ansion, 1982, 1987, 1989a, 1989b, 1992, 1994, 1995, 2007; y Ansión y otros, 1992) para reflexionar sobre un tema recurrente en la antropología: desde el punto de vista de la larga duración, ¿qué es lo que cambia en la cultura? Y, ¿en qué se producen rupturas que no sean simples ajustes, adaptaciones y reacomodos generados por nuevas circunstancias históricas? Hacemos aquí estas preguntas acerca de la cultura andina y su evolución en relación con la modernidad. Como base empírica de la discusión, examinaremos diversas versiones del discurso andino sobre la escuela que es, por lo demás, un símbolo particularmente pertinente de la modernidad.

a) Una triple apuesta metodológica

Para examinar el tema, proponemos tres presupuestos metodológicos fundamentales de base.

a) La cultura andina ha ido cambiando desde su propia lógica (o sus propios patrones culturales)

Las culturas son complejas y polifacéticas y se van transformando según las circunstancias históricas, pero no lo hacen de cualquier manera, sino de acuerdo con una lógica propia de cambio o, si se prefiere, de acuerdo con patrones culturales que se han ido forjando a lo largo de la historia de un grupo humano determinado. Los actores sociales, al crear y recrear expresiones culturales, no lo vuelven a inventar todo, sino que parten —consciente o inconscientemente— de las maneras de hacer las cosas que han ido incorporando (es decir «convirtiendo en su propio cuerpo») mediante su proceso de socialización y su experiencia vital en la sociedad en la que se han desarrollado. Esa lógica cultural es muy dinámica:

no solo sirve para reproducir hábitos adquiridos, sino también para modificarlos y producir otros nuevos.

b) Es posible conocer los principios básicos que rigen esa lógica

Un segundo presupuesto fundamental es que se puede llegar a conocer los principios básicos que rigen una determinada lógica cultural. Quienes comparten una cultura los conocen, aunque muchas veces los tienen tan incorporados, los consideran tan «naturales», que no los explicitan para alguien externo a su cultura, no necesariamente porque no quieran hacerlo o porque no los tengan claros, sino porque no se les ocurre que tengan que explicitar aquello que les parece evidente. Uno de los papeles del antropólogo sería, entonces, lograr explicitar algunos de estos principios que rigen una lógica cultural y que son evidentes para los actores.

c) Buscar primero el cambio como producto de una lógica propia de la cultura

Los cambios culturales se dan muchas veces en contextos de relaciones entre grupos humanos diferentes por lo que las influencias mutuas son frecuentes. Ello no significa, sin embargo, que los cambios produzcan mezclas de cualquier tipo. Antes de hablar de simbiosis, de mestizaje cultural, de sincretismo o de hibridación, cabe preguntarse si, más allá de las primeras apariencias, los cambios no se han producido dentro de una lógica cultural propia de la cultura que tiene su manera peculiar de apropiarse de elementos culturales ajenos. Esto es particularmente importante en relación con las influencias del mundo «occidental» o de la sociedad «moderna» sobre sociedades que han sido sometidas a procesos de subordinación violenta como los que se dan en el contexto de la colonización. Por ejemplo, la apropiación andina de los santos de la iglesia católica no significó necesariamente una hispanización u occidentalización, sino abrió más bien nuevas oportunidades para desarrollos culturales originales sobre la base de antiguos principios. Del mismo modo, la introducción de zapatillas en la danza de tijeras puede dar nuevos brillos a una expresión cultural antigua.

b) Las relaciones interculturales son posibles por los elementos comunes a las diferentes culturas

Las diferencias culturales no deben hacer perder de vista que compartimos todos una misma condición humana. Las diferencias deben verse entonces más como énfasis que contraposiciones totales. Los intercambios interculturales no podrían darse sin elementos básicos en común. Las culturas encierran muchas potencialidades y contienen muchas vías posibles de desarrollo. Las diferencias entre ellas no representan diferencias de esencia, sino énfasis diversos puestos en las maneras de enfrentar la vida.

c) El cambio cultural en situación de subalternidad

Si bien apostamos a que las culturas se transforman desde su propia lógica, en situaciones extremas, sin embargo, se pueden producir importantes resquebrajamiento, como en el caso de las sociedades que han sido convertidas en subalternas y han sufrido la destrucción de bases importantes de su reproducción. Aun en esos casos, sin embargo, tenemos que estar atentos a transformaciones culturales inesperadas de la antigua cultura, desde su confrontación con la cultura hegemónica. La cultura andina colonial, por ejemplo, puede ser analizada en ese sentido, como el desarrollo de muchas expresiones culturales nuevas —en especial en los campos de los rituales y de las expresiones religiosas— que siguen respondiendo a una antigua lógica cultural en su apropiación de la cultura impuesta. Dicho esto, pareciera que las transformaciones contemporáneas son tan importantes y presentan rupturas de tal magnitud que es difícil prever su evolución.

¿Está la cultura andina condenada a desaparecer o encontrará nuevas formas de desarrollo en la modernidad? El debate es a la vez histórico y teórico y no queremos aquí ir más allá de plantear el problema.

2. UN PRINCIPIO CENTRAL

a) La noción de tinkuy

Muchos estudios sobre la cultura andina desarrollados en una perspectiva estructuralista han insistido en la dualidad andina y también en la cuatripartición como nueva subdivisión de las dos partes. A ello, se añade la parte central o del medio (*chawpi*) que permite la unión de las dos o de las cuatro partes, lo que conduce a una división en tres o en cinco, según el caso. El estructuralismo puso de relieve esta manera cultural de ordenar el mundo, pero lo hizo dejando de lado la historia y la experiencia vital y concreta de la gente. La crítica a estas deficiencias, correcta como tal, condujo también lamentablemente al abandono de hallazgos útiles logrados bajo esa corriente. Sin embargo, la constatación de las subdivisiones mencionadas, si se ubica en perspectiva histórica, nos da una pista importante para entender la lógica cultural desarrollada en los Andes.

La noción de *tinkuy* permite ilustrar la idea y nos servirá de base para desarrollar nuestro argumento en relación con ciertos cambios producidos en la cultura andina. El término significa «encontrarse», pero conlleva una connotación de tensión y conflicto en el encuentro, de pelea entre opuestos para conformar una sola unidad, como es el caso en la confluencia de dos ríos.

b) Oposición y unidad en tejidos aymaras tradicionales

La antropóloga Verónica Cereceda (1987) ilustra este principio al mostrarnos cómo las franjas de tejidos aymaras tradicionales se construyen sobre la base de buscar la unidad de los opuestos. El término *k'isa* señala la franja muy pequeña de hilos delgados que une dos colores contrapuestos: color de luz con color de sombra. El arte de la tejedora consiste en lograr una impresión visual de continuidad con hilos claramente diferenciados. De ahí nace la belleza del tejido. Así, el espacio de intermediación, en todos los aspectos de la cultura, es un lugar de construcción de la unidad de las partes que permite que cada una de ellas mantenga su identidad, tal como se da en el tejido. Es a la vez un lugar de construcción de la belleza y es un lugar de peligro: la construcción de la belleza de ese modo supone arte y creatividad, para unir sin confundir, sin mezclar, y a la vez puede fallar el procedimiento y, por tanto, fallar la búsqueda de unidad. El *tinkuy*, como ritual, es precisamente una pelea que significa —y simultáneamente construye— la unidad tensa entre dos grupos (dos barrios, dos familias, por ejemplo) que buscan simultáneamente establecer relaciones de buena vecindad y mantener identidades fuertes y diferenciadas.

3. PREFERENCIA CULTURAL DE MANEJO DE LA DIVERSIDAD: COMPLEMENTAR LOS OPUESTOS SIN MEZCLARLOS

Cuando se observan las manifestaciones culturales andinas, llama la atención la facilidad para manejar la diversidad incorporando elementos nuevos, dándoles su lugar en un juego complejo de oposiciones complementarias. No se trata, desde luego, de una característica exclusiva de la cultura andina, sino más bien de una preferencia, un hábito, una inclinación que parece natural a quienes participan de esa cultura.

a) Subdivisiones antes que fusión o mezcla

A diferencia de lo que sucede en las culturas que tienden a la fusión y síntesis de todos los elementos que van incorporando, la cultura andina ha tendido más bien a mantener la separación entre los diversos elementos y, para ello, a dividirlo todo en dos partes (dualidad), las cuales pueden a su vez volver a dividirse en dos (cuatripartición). El centro, espacio de unidad de las partes, constituye así la tercera o la quinta parte según sea el caso. De ese modo, parece que el ideal andino tiende a juntar a la manera de un mosaico antes que mezclar. La iconografía andina está llena de figuras que dan cuenta de esa manera de construir un conjunto.

b) Preferencia aplicada en todos los campos

Esta preferencia no se aplica solamente a las representaciones gráficas, sino a todos los campos de la vida. Se puede observar, por ejemplo, en la organización de los rituales, en la construcción de las aldeas, en la arquitectura o en la manera de construir los relatos. También se ve en la manera de ordenar los cultivos, en la relación con lo sagrado (los santos de la iglesia católica tienen su lugar al lado de las divinidades antiguas de la tierra) y, en general, en la organización de las relaciones sociales, en especial en las relaciones con «los otros».

4. VISIÓN ANDINA DE LA ESCUELA: PRIMERA VERSIÓN

a) Versión mítica: la escuela alberga un monstruo que devora a los niños

Encontramos una primera versión de la relación con la escuela en un relato recogido de un anciano quechuahablante por el antropólogo Alejandro Ortiz Rescaniere (1973).

En la escuela se esconde un monstruo (el *ñawpa machu*), cómplice del la muerte del Inca por acción de Jesús, su hermano menor, y que quiere devorar a los hijos del Inca. Del «monte llamado escuela» sale este personaje (también llamado en otras versiones *ñawpa runa* o gentil) quien encuentra a los hijos del Inca buscando a su padre luego de que este haya muerto por acción de una alianza de Jesús con la luna y los pumas. El *ñawpa machu*, dice el relato, quiere comerlos y les dice: «La Tierra, Mama Pacha, ya no quiere al Inca. El Inca ha amistado con Jesús, y ahora están juntos como dos hermanitos; miren el papel escrito aquí». Pero los niños se asustan y se escapan. Hoy en día, no se sabe dónde están, pero cuando el hijo mayor esté ya crecido va a volver, siempre que los niños lo busquen y lo encuentren. Si no, se morirá de hambre como su padre el Inca.

Esta primera versión es, como queda claro al final, una versión original del mito de Inkarrí, de esperanza de la vuelta del Inca (o, en este caso, de su hijo), quien volverá cuando esté plenamente reconstituido (en esta versión, que haya crecido; en otras se dice que se están volviendo a juntar sus miembros dispersos o que está creciendo a partir de la cabeza). Al igual que en las demás versiones del mito de Inkarrí, la ruptura entre indios y españoles es radical. La escuela y la escritura aparecen entonces como instrumentos del nuevo poder, que es un poder que a la vez asusta y engaña al hacer creer que existe amistad y buena voluntad ahí donde hay voluntad de destrucción.

Se encuentran antecedentes antiguos de esta versión en el movimiento del *Taki unquy* en el siglo XVI, movimiento que atribuía las desgracias del momento al

haber abandonado a los antiguos dioses y mantener el contacto con los españoles, por lo que había que producir una separación radical, en especial religiosa y lingüística. Posteriormente, la actitud de desconfianza radical se perpetuó entre otras cosas en el miedo a los *nakaq* o pishtacos, aquellos asaltantes nocturnos que, según cuentan, extraen la grasa de las personas para enriquecer a hacendados o gente de la ciudad, personajes poderosos en el mundo actual. Con el *pishtaco*, no hay negociación posible, es la encarnación del enemigo radical.

b) Versión secularizada

Esta visión simplificadora y dicotómica del Perú se expresa también en una forma no mítica, que llamaremos aquí «secularizada». Por ejemplo, en los años ochenta, Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart (1989) encuentran una visión muy radical del país desarrollada por los maestros y compartida por muchos estudiantes. Es lo que ellos llaman la «idea crítica del Perú».

Sendero Luminosos llevó, sin duda, esa «idea crítica» al extremo más radical, y si pudo hacerlo es porque estaba presente ya en diversos sectores de la sociedad. Así, por ejemplo, en su arenga de inicio de la lucha armada, Abimael Guzmán, al oponer lo negro de la reacción con la luz del partido, señala a las escuelas, al lado de las cárceles, las fábricas y los campos, como lugares donde se produce la «vieja y sangrienta violencia», la «paz de bayonetas», la «guerra maldita» contra el pueblo (citado en Anson y otros, 1992).

5. VISIÓN ANDINA DE LA ESCUELA: SEGUNDA VERSIÓN

a) Versión mítica: el «mito contemporáneo de la escuela»

El «mito contemporáneo de la escuela», en su versión presentada por Rodrigo Montoya (1980), expresa una actitud opuesta a la anterior. La escuela, según sus observaciones en Puquio, permite pasar del mundo de la noche (*tuta*) al mundo del día (*punchaw*), permite dejar de ser ciego (*ñawsa*) para pasar a tener ojos (*ñawiyuq*) y lograr así, gracias a la escuela, el acceso al mundo urbano y al progreso. Aunque Montoya no presente propiamente un relato sobre el asunto, sino expresiones y relaciones entre ellas, aceptaremos que se trata de una versión de orden mítico aun cuando este punto sea discutible, pues las nociones utilizadas (día y noche, ceguera y ojos abiertos) podrían ser simples metáforas más propias de una versión secularizada.

Esta vez, la gente sí cree en el valor benéfico de la escuela. Esta versión parece así responder a la actitud de la población campesina, y luego urbana popular, de buscar en la escuela un canal de movilidad social. Aquí parece haber desaparecido

la desconfianza. La luz del Inca —luz de la antigua cultura— se ha transformado en oscuridad y viceversa. En los términos de la primera versión, podríamos decir que los hijos del Inca han terminado por creer al *Ñawpa Machu*, que se han dejado engañar por él y que el deseo ahora es de integración sin discusión al orden del mundo actual.

Pero el hecho de que la actitud haya cambiado no significa que se haya modificado la manera de construir las relaciones. Parece más bien que simplemente se han invertido los términos, lo cual indica un debate dentro de la cultura, debate que evoluciona junto con las nuevas necesidades y perspectivas históricas. De hecho es muy interesante constatar la aparición en los años ochenta de un nuevo tipo de rumor, similar al de los pishtacos, pero en el que la amenaza no se dirige a la extracción de grasa de las personas, sino a la extracción de los ojos de los niños (Ansion, 1989b; y Portocarrero y otros, 1991). La grasa humana representa la energía vital extraída por los pishtacos (Ansion, 1987; Ansion, 1989b) y los ojos de los niños son su posibilidad de acceder a la cultura urbana, cultura del *punchaw*, del día y de la luz.

b) Versión secularizada

La escuela aparece a menudo como el camino hacia el progreso. Ha acompañado, durante el siglo XX, los grandes procesos migratorios. El afán de que los niños aprendan el castellano y la lectoescritura sigue constituyendo para muchos una fuente central de movilización. En el extremo, esto significa el intento de abandonar la cultura propia y el rechazo a enseñar el quechua a los hijos. Esta actitud ha acompañado importantes procesos de cambio y de modernización, pero, a la vez, encierra un grave problema: la cultura y la lengua en las que uno se ha socializado no desaparecen por simple voluntad de las personas y, más bien, al inhibirse en el nivel consciente, lo reprimido tiende a volver de formas inesperadas. Esta situación puede entonces desencadenar explosiones de violencia en cualquier momento: reaparece entonces la primera actitud, la de la ruptura radical. He aquí una posible explicación de lo que pudo suceder con muchos jóvenes seguidores de Sendero Luminoso: ilusionados por el progreso a través de la escuela y de la universidad, pero con muchas dificultades para acceder plenamente a una cultura científica abierta, terminan atraídos por la oposición de confrontación radical. Es decir, en los términos del presente análisis, pasan de la segunda visión sobre la escuela a la primera.

Así, si bien, en un primer momento, estas dos versiones se presentan como opuestas, vemos que son dos aspectos de una misma realidad compleja o, si se quiere, que expresan una enorme tensión dentro de una misma perspectiva cultural.

6. VISIÓN ANDINA DE LA ESCUELA: TERCERA VERSIÓN

a) *Versión mítica*

La siguiente versión, recogida por Abilio Vergara (1990), nos muestra cómo la aspiración al progreso puede darse manteniéndose la desconfianza en los personajes vinculados a la escuela.

Aquí, se presenta el caso de un niño campesino que ha ido a la escuela y va en busca de trabajo. En el camino se encuentra con un personaje llamado Juan Sabio, dueño de unas fieras devoradoras de personas, que nos recuerda a los pumas y al propio *Nawpa Machu* de la primera versión. Juan Sabio le propone trabajo, pero él necesita a alguien que no sepa leer y por ello pone al niño a prueba. Los dos hermanos mayores pasaron antes por eso y, al demostrar que leían, fueron devorados por las fieras. Este escolar, sin embargo, es más vivo y, haciendo caso a la advertencia de una señora que le habló en su sueño, finge que no sabe leer. Se pone entonces a trabajar en la casa de Juan Sabio, hombre rico y poseedor de libros de magia que el escolar tiene que desplazar de un lugar a otro. Instalado en la casa, el escolar seguirá respetando sus propias costumbres en la forma de dormir o de comer. En ese proceso, va leyendo los libros y aprendiendo a hacer magia, de modo que, cuando Juan Sabio se dé cuenta, el niño podrá vencerlo recurriendo a la magia aprendida. El cuento da a entender que la clave del éxito ha sido haberse apropiado del conocimiento del poderoso sin olvidar su propia cultura.

b) *Versión secularizada*

La visión que aparece en este relato es también una visión de progreso, pero, a diferencia de la segunda versión, se asume que la apropiación del saber dominante no implica el olvido de la cultura propia, sino todo lo contrario. Se mantiene la visión de una separación radical con respecto al mundo dominante que sigue siendo el mundo de los hacendados que no quieren que los indígenas vayan a la escuela, pero no estamos frente a la lógica del *taki unquy*, ya que la lucha es por apropiarse del saber de los poderosos. Se trata, entonces, de engañar a quien nos engaña, de «sacarle la vuelta» al monstruo para ganarle en su propio terreno. El relato fue contado por un comerciante de Huanta, vinculado a sectores más modernos, pero esto no significa que esta lógica sea enteramente nueva. Parece más bien que responde a la lógica colonial de convivencia obligada con el opresor, en un juego complejo y ambiguo de adulación y desconfianza. En la actualidad, pareciera que los movimientos neindigenistas tienen una actitud bastante cercana a esta.

7. VISIÓN ANDINA DE LA ESCUELA: CUARTA VERSIÓN

a) La escuela como posible espacio de desarrollo intercultural

La última versión sobre la escuela es distinta de las anteriores en tanto corresponde más bien a una visión en construcción o por construir. Es una versión que empieza a romper con la antigua actitud bipolar y confrontacional para entenderla como un espacio de intercambios interculturales. Es una versión por construir en tanto las culturas subordinadas en el Perú siguen teniendo muy poco espacio en el bagaje escolar. Sin embargo, existen esfuerzos muy interesantes, especialmente en la educación rural para desarrollar una educación intercultural de búsqueda de diálogo entre visiones del mundo diferentes.

En los relatos andinos, generalmente prevalece la oposición dual entre mundos irreconciliables, como se da por ejemplo en muchas versiones sobre «Juan el oso» o «El hijo del oso». Sin embargo, se dan casos en los que se produce un esfuerzo para pensar la posibilidad del aprovechamiento de las dos partes para construir algo más fuerte y rico (Ansió, 1992). El cuento narra la historia de una mujer raptada por un oso y que tiene un hijo de él. Ella, luego de dar a luz a un varón, se escapa con su hijo, quien mata al padre, y se refugia en su pueblo. El hijo del oso va entonces a la escuela, pero, dada su fuerza de bestia, termina por matar a sus compañeros de juego, por lo que el cura —su padrino— decide que es un monstruo que tiene que morir y le tiende una trampa. Lo hace subir a la cima de una torre, donde lo esperan para tirarlo al vacío. En un conjunto de variantes, el relato termina aquí: el hijo del oso cae y muere, como una muestra de que la unión de una mujer con una bestia no puede dar fruto ya que pertenecen a dos mundos incompatibles¹. Pero existen versiones en las que el Hijo del Oso, quien también tiene la astucia de los humanos, se percata de la trampa y logra escapar a ella². Entonces el joven oso es botado del pueblo y va de pueblo en pueblo sin lograr integrarse en ninguno por su fuerza descomunal que lo aparta de los humanos. Finalmente, llega a un lugar donde le prometen aceptarlo si vence a un condenado que azota al pueblo. La lucha es dura, y el relato se prolonga en torno a ella, hasta que el hijo del oso logra vencer al condenado y, en el momento de lograrlo, pierde su carácter monstruoso para convertirse en un joven fuerte. Así, como en el caso del cuento de Juan Sabio, el hijo del oso vence porque ha sido capaz de utilizar los instrumentos de poder de los dos mundos contrapuestos (en este caso, la fuerza de su naturaleza animal y la astucia y valentía de su humanidad). Pero, a diferencia de la tercera versión, el engaño no es necesario para vencer

¹ Véanse versiones de este tipo en Weber (1987).

² Véase una extraordinaria versión de ese cuento recogida en quechua por Arguedas (1961).

(es más el engaño venía de los habitantes del pueblo de su madre, quienes lo querían matar).

Este relato muestra que la cultura andina es capaz de reelaborar sus relatos en función a nuevas necesidades. En este caso, se trata de enfrentar la necesidad de unir dos mundos que parecen incompatibles, y este es un buen punto de partida para un trabajo intercultural.

b) Las diversas interpretaciones de la interculturalidad

Dado que estas diferentes versiones se construyen sobre bases culturales comunes y corresponden a un debate de interpretaciones, las personas pueden pasar de una a otra según las circunstancias y, también, como es el caso aquí, utilizar un término en diferentes sentidos. Así, encontramos actualmente que, por interculturalidad se entiende no solamente lo que acabamos de exponer, sino también:

- La búsqueda de identidad cerrada, que corresponde a la primera versión.
- El proceso de pérdida cultural en la escuela con la paulatina castellanización propia de la segunda versión.
- La apropiación desconfiada de la cultura dominante tal como aparece en la tercera versión, visión compartida muchas veces por perspectivas neoindigenistas.

8. RESUMEN DE LAS DIFERENTES VERSIONES

Se podría resumir el conjunto de versiones sobre la escuela diciendo que representan actitudes diversas sobre cómo vencer el miedo al poderoso identificado con la escuela y la escritura.

Ante ese desafío, como lo hemos visto, se puede responder «buscando al Inca»³, desconfiando radicalmente del poderoso de hoy con la esperanza de que algún día el mundo se volteará; intentando olvidar la cultura y lengua propias para incorporarse con entusiasmo a la cultura y a la lengua dominantes; buscando apropiarse desconfiadamente y con engaños de los conocimientos del poderoso; o asumiendo plenamente las diferentes formas culturales y de conocimiento en busca de una nueva forma de modernidad.

Este recorrido por las diversas versiones nos ha permitido asomarnos a uno de los probables debates internos de la cultura andina, en su proceso complejo de intento de dar respuesta a los retos de su historia desde sus propias construcciones

³ Para retomar el título de la obra de Alberto Flores Galindo (1987).

culturales. Nos permite asomarnos a la complejidad de la dinámica cultural que, trabajando desde preferencias socialmente heredadas, reconstruye las cosas y procesa incesantemente debates. Se contraponen nuevas versiones a las antiguas, pero estas pueden resurgir —aunque bajo nuevas formas— si las circunstancias y las necesidades de interpretación se ofrecen. El discurso mítico tanto como el discurso más secularizado se entrecruzan en este incesante proceso de creación sobre antiguos patrones conocidos, ellos mismos sometidos a la prueba del tiempo y de las nuevas necesidades históricas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ansion, Juan (1982a). Verdad y engaño en mitos ayacuchanos. *Allpanchis*, 20, 237-252.
- Ansion, Juan (1982b). *Desde el rincón de los muertos. El pensamiento mítico en Ayacucho*. Lima: Grupo de Estudios Socio-Demográficos.
- Ansion, Juan (1989a). *La escuela en la comunidad campesina. Proyecto Escuela, Ecología y Comunidad Campesina*. Lima: Ministerio de Educación – Ministerio de Agricultura – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – Cooperación Técnica del Gobierno Suizo.
- Ansion, Juan (1992). Ensayo sobre las nociones de ruptura y de mezcla en la tradición oral andina. *Anthropologica*, 10, 41-53.
- Ansion, Juan (1994). Transformaciones culturales en la sociedad rural: el paradigma indigenista en cuestión. En Óscar Dancourt y otros, *Perú: el problema agrario en debate/SEPIA V* (pp. 69-101). Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria – Universidad Nacional de San Agustín.
- Ansion, Juan (1995). Del mito de la educación al proyecto educativo. En Gonzalo Portocarrero y Marcel Valcárcel (Eds.), *El Perú frente al siglo XXI* (pp. 507-525). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Ansion, Juan (1995). La interculturalidad y los desafíos de una nueva forma de ciudadanía. En Juan Ansion y Fidel Tubino (Eds.), *Educación en ciudadanía intercultural. Experiencias y retos en la formación de estudiantes universitarios indígenas* (pp. 37-62). Lima y Temuco: Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad de la Frontera.
- Ansion, Juan (Ed.) (1989b). *Pishtacos. De verdugos a sacaojos*. Lima: Tarea.
- Ansion, Juan y otros (1992). *La escuela en tiempos de guerra*. Lima: Tarea.
- Arguedas, José María (1961). Cuentos religioso-mágicos quechuas de Lucanamarca. *Folklore Americano*, 8-9, 142-216.
- Cereceda, Verónica (1987). Aproximaciones a una estética andina: de la belleza al tinku. En Thérèse Bouysse-Cassagne y otros, *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino* (pp. 133-231). La Paz: Instituto de Historia Social Boliviana.

- Degregori, Carlos Iván (1986). Del mito de Inkarrí al mito del progreso: poblaciones andinas, cultura e identidad nacional. *Socialismo y Participación*, 36, 49-56.
- Degregori, Carlos Iván (1990). 1969, la lucha por la gratuidad de la enseñanza. En *El surgimiento de Sendero Luminoso. Del movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada* (pp. 49-90). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Flores Galindo, Alberto (1987). *Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
- Montoya, Rodrigo (1980). *Capitalismo y no capitalismo en el Perú*. Lima: Mosca Azul.
- Ortiz Rescaniere, Alejandro (1973). *De Adaneva a Inkarrí*. Lima: Retablo de Papel.
- Portocarrero, Gonzalo & Patricia Oliart (1989). *El Perú desde la escuela*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
- Portocarrero, Gonzalo y otros (1991). *Sacaos: crisis social y fantasmas coloniales*. Lima: Tarea.
- Stern, Steve (1986). *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española*. Madrid: Alianza.
- Vergara Figueroa, Abilio (1990). La educación, el trabajo y lo lícito en un relato oral. *Anthropologica*, 8, 227-245.
- Weber, David J. (1987). *Juan del Oso*. Yarinacocha: Ministerio de Educación – Instituto Lingüístico de Verano.

EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL: LAS PARADOJAS DE LA ESCUELA¹

Patricia Ruiz Bravo

Apelando a nuestra indignación y al espíritu crítico que aún mora entre nosotros, quisiera iniciar esta reflexión preguntando/preguntándonos: ¿qué hacer para no abandonar la lucha por una escuela nueva que construya y enseñe en democracia?, ¿cuál es la reserva moral con la que podemos contar?, ¿cómo convocar a los diferentes actores para participar de manera efectiva?

Reconociendo que la educación en nuestro país atraviesa una de sus crisis más profundas y que existen serias trabas para el logro de cambios sustantivos en la orientación y en la calidad de la educación, ¿es posible diseñar reformas de manera realista?, ¿cabe pensar en una escuela nueva si persisten las brechas, la discriminación y la desigualdad?, ¿cómo hacerlo sin caer en la retórica?, ¿cómo trascender el pesimismo que nos suscitan las distintas evidencias de exclusión e injusticia que la escuela reproduce a lo largo y ancho del país?; pero también, ¿cuáles son experiencias exitosas a partir de las cuales podemos pensar en lo posible?, ¿cuáles las resistencias?, ¿qué rol nos cabe como intelectuales? Recordando a Constantino Carvallo, y también en su nombre, preguntémosnos, ¿qué hacer con la educación?

Nuestra mirada intenta no ser pesimista. Pensamos, siguiendo a Alberto Flores Galindo, que «si se quiere tener futuro, ahora más que antes, es necesario desprenderse del temor a la creatividad. Reencontremos la dimensión utópica» (1989, p. 4). Ello supone apaciguar la urgencia que impide crear y pensar en el largo plazo, imaginando la sociedad que queremos y la escuela que necesitamos. La dura realidad que enfrenta la educación en el país no debe velar las posibilidades de cambio que existen ni acabar con nuestros sueños y apuestas por una sociedad justa, amigable con las diferencias e intolerante con el abuso y la discriminación.

¹ Este artículo se sustenta en varias investigaciones realizadas con Eloy Neira y José Luis Rosales. Quiero agradecerles por las ideas y debates que me enriquecen cotidianamente.

Para ello, hay que abrir nuestro ánimo, ubicando los problemas y los desafíos de la escuela rural en una perspectiva más amplia, una que articule escuela y país.

El *Informe* que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó al país en agosto de 2003 es un punto de quiebre, un hito del cual podemos partir. Además de narrar los hechos de violencia ocurridos en el periodo 1980-2000, es una lectura del Perú y de sus fracturas. El análisis trasciende los veinte años de violencia y nos muestra las injusticias, las desigualdades, las heridas y los sentimientos que nuestra forma de organización social generan. En este escenario, el sistema educativo ha sido un espacio fundamental en la reproducción de las discordias históricas que atraviesan nuestro país. Por ello, las reformas institucionales planteadas en las recomendaciones del *Informe*, deben verse en el camino de un nuevo pacto social, uno que reconozca la otredad y la ciudadanía de las y los peruanos. Las discordias históricas, aquellas que enfrentaron y enfrentan a los distintos grupos sociales deben ser asumidas y trabajadas para que la barbarie «no se repita».

Carvallo (2007), reflexionando sobre el futuro de la educación, llama la atención sobre el compromiso que debe existir con un cambio social más general, uno que modifique la manera en que nos comunicamos y aprendemos. Por ello es escéptico frente a posibles reformas curriculares que inciden en contenidos sin mirar la institución educativa y la manera en que se reproducen. Estas reformas, señala, no son conducentes y no promueven cambios significativos pues «se pone vino nuevo en odres viejos, nuevos contenidos que son asimilados y desvirtuados por el carácter mismo de la institución [educativa]» (Carvallo, 2007).

Desde este enfoque, la educación y la escuela rural son expresión y resultado de la sociedad que ellas contribuyen a perpetuar. Se trata pues de mirar al país en su conjunto deteniéndonos a observar las maneras en que las instituciones —entre ellas la escuela— socavan las bases de una sociedad incluyente, democrática y respetuosa de la diversidad. La educación, lejos de ser un medio que permita a las personas florecer, desarrollar capacidades, ampliar sus fronteras y ejercer su libertad (Sen, 2000), se ha convertido en un espacio de violencia, frustración, desconfianza y corrupción.

Por lo dicho, pensamos que es preciso plantear la reforma de la educación desde una posición política y —no solo técnica— que permita construir una propuesta de cambio social en beneficio de las mayorías hoy excluidas. De hecho, la técnica y la pedagogía no son neutrales y tanto lo que se enseña como la manera en que se hace expresa un proyecto político sociocultural² que es necesario deconstruir y transformar. La tarea la ubicamos así desde una dimensión política

² Para Gramsci, la crisis educativa debe vincularse al problema más amplio de la reforma cultural, estrechamente ligada a la transformación sociopolítica y económica (Palacios, 1998).

y ética cuyo objetivo es imaginar nuevos escenarios recogiendo lo que existe sin renunciar a la creatividad ni dejarse ganar por el pesimismo o la complacencia. Es esta la perspectiva desde la que en este artículo se pretende analizar la relación entre escuela y cambio social. Para ello retomamos las propuestas elaboradas desde la sociología crítica de la educación que, a diferencia de los enfoques tradicionales, plantea desde el inicio la relación entre conocimiento y poder. Se llama la atención sobre la manera en que las instituciones como la escuela construyen subjetividades y significados contribuyendo así con la reproducción de un orden social. Pero, no se trata de ver la escuela, y a los actores, solamente desde el lado de la opresión o de la queja. Lo que interesa es verla como un espacio en conflicto en donde es posible encontrar comportamientos contrahegemónicos que están en tensión con los modelos dominantes:

Tomando los conceptos de conflicto y resistencia como puntos de partida para sus análisis, estos estudios han buscado redefinir la importancia de poder, ideología y cultura como construcciones centrales para comprender las complejas relaciones entre la escolarización y la sociedad dominante. Consecuentemente, el trabajo de Willis (1977), Hebdige (1979) y Corrigan (1979) ha sido instrumental al ofrecer un rico cuerpo de literatura detallada que integra teoría neomarxista con estudios etnográficos con la finalidad de aclarar las dinámicas de acomodación y resistencia y cómo ellas trabajan a través de culturas de oposición de jóvenes tanto dentro como fuera de las escuelas (Giroux, 1997, p. 27).

Para estos enfoques interesa la crítica pero también el descubrimiento de las agencias y las posibilidades de los actores. La dominación no supone procesos de una sola vía, sino conflictos y resistencias que no siempre son visibles ni comprensibles. Discutiendo precisamente la manera en que los académicos e intelectuales podemos hacer ciencias sociales desde el sur, De Sousa (2006) plantea la urgencia de nuevos marcos de interpretación que permitan descubrir aquello que los enfoques previos han velado o dejado de lado. Él llama a este trabajo «la sociología de las ausencias», que es parte de las tareas de la nueva teoría crítica:

Por teoría crítica entiendo aquella que no reduce la realidad a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe. El malestar, la indignación y el inconformismo frente a lo que existe sirven de fuente de inspiración para teorizar sobre el modo de superar tal estado de cosas (De Sousa, 2006, p. 18).

Se trata así de plantear un análisis que vaya más allá de la denuncia y que, al deconstruir los mecanismos a través de los cuales nombramos a los otros desde la carencia y la subalternidad, avizore la posibilidad de lo nuevo. Es una propuesta que nos exige pensar formas sociales distintas recogiendo así los conceptos de imaginario e imaginación elaborados por Castoriadis:

Desde el origen de la historia, se constata el surgimiento de lo radicalmente nuevo, y si no se quiere recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de esto, entonces hay que postular una fuerza de creación, una *vis formandi*, inmanente tanto a las colectividades humanas como a los seres humanos singulares. De este modo resulta completamente natural denominar imaginario e imaginación a esta facultad de innovación radical, de creación, de formación (Castoriadis, 1999, p. 93).

Ahora bien, y regresando al caso peruano, observamos que, desde inicios del siglo XX, propuestas de distinto signo han sido implementadas sin obtener los cambios esperados. Nos interesa, por tanto, a partir de una breve reseña de estos proyectos educativos, ubicarnos en el momento actual, evaluando los problemas que enfrenta la escuela rural teniendo como telón de fondo la pregunta por el cambio social. Se trata de interrogarnos por la manera en que desde la institución educativa se fomentan o retardan las bases necesarias para un cambio que reclama la democratización de la sociedad peruana, el ejercicio de una ciudadanía sustantiva y el desarrollo entendido como la expansión de las libertades. En este recuento nos interesa vislumbrar —en tanto sea posible— lo que podríamos llamar experiencias de resistencia. Hemos organizado este artículo en cuatro partes. En la primera, se presenta una breve reseña de los cambios ocurridos en las propuestas educativas elaboradas desde el Estado a partir de inicios del siglo pasado hasta fines de los años setenta. Luego pasamos a ver qué pasa con la escuela hoy, señalando los efectos de las reformas de los noventa inspiradas en el modelo neoliberal y el *Informe* de la CVR. En la tercera parte, identificamos los problemas y desafíos de la educación rural y finalmente analizamos algunas propuestas exitosas que pueden ser huellas del camino que es posible recorrer.

1. DE LA INTEGRACIÓN MODERNIZADORA A LA IDEA CRÍTICA

Varios autores³ coinciden en señalar que el impulso a la educación en el Perú se dio a inicios del siglo XX y bajo el empuje de las élites modernizadoras liberales, quienes vieron en la educación el camino para la integración nacional. La educación de los indígenas es vista como el elemento central para el desarrollo del país

³ Entre otros, Contreras (1996); Portocarrero (1992) y Ames (2005).

y la castellanización la primera tarea a enfrentarse. Sacar al indio de la ignorancia implicaba un cambio que incluía una ruptura radical con sus tradiciones y cultura, pues eran la causa del atraso y de la falta de ímpetu del indio. De hecho, estereotipos como la ociosidad, la indolencia, el alcoholismo, la sumisión eran vistos como resultado de su ser «serranos». El consenso era educar en el modelo criollo costeño que se asumía como el único valioso y posible. La nación requería homogeneizar a su población bajo la hegemonía de la propuesta occidental y moderna que el Perú asumía como propia. Dejar atrás lo propio para obtener el progreso y la integración. «Un olvido a cambio de una promesa», en palabras de Portocarrero (1992). Esta propuesta se va agotando hacia los años cuarenta, fecha en la cual surge «una nueva ofensiva educativa desde sectores identificados con el indigenismo, que llegó a ejercer su hegemonía por otro lapso de aproximadamente dos décadas» (Contreras, 1996, p. 1). Esta propuesta, a pesar de las diferencias, es similar a la liberal en sus objetivos de alfabetizar a la población indígena serrana e integrarla a la nación peruana⁴.

Frente a la propuesta, las poblaciones campesinas rurales reaccionan inicialmente con un rechazo alejándose de la escuela. Los estudios de Ortiz (1973) y Ansión (1989), a través de un análisis de mitos andinos, identifican las concepciones asociadas a la escuela, evidenciando los sentimientos de temor y rechazo que provocan⁵. La escuela se siente extraña y amenazante. Se asocia con la conquista, el engaño y la pérdida de autonomía. Con el tiempo, se encuentran otros relatos que parecen sugerir un cambio en la mirada de las poblaciones indígenas. La lucha por la escuela se convierte en una importante reivindicación de los grupos campesinos para quienes aparece como un canal de movilidad y ascenso. De hecho, en muchas zonas del país, la lucha por la escuela antecedió a las luchas por la tierra y, a pesar de los problemas, la educación desestabilizó el sistema de servidumbre y la opresión gamonal. En este contexto, la apuesta por la educación se convierte en central: es lo que Degregori (1986) ha conceptualizado como el mito del progreso. Por su parte, Contreras (1996) señala que, a pesar de que los proyectos educativos liberal e indigenista no lograron su promesa de integración, sí provocaron efectos importantes en la organización campesina y removieron los cimientos del orden gamonal basado en la oposición entre indios y señores.

Un segundo hito, en lo que concierne a las propuestas elaboradas desde el Estado, es la reforma educativa del gobierno de Velasco Alvarado. A diferencia de los proyectos formulados a inicios de siglo por las élites modernizantes y liberales, la reforma impulsada por Velasco tenía un enfoque popular. Los cambios

⁴ Al respecto, véase Contreras (1996).

⁵ Véase al respecto Ortiz (1973); Ansión (1989) y Degregori (1986).

que se plantean en la educación son parte de un proceso de cambio social estructural cuyo objetivo era transformar las estructuras de poder en el país. La reforma agraria impulsada por el gobierno fue uno de los ejes fundamentales para el quiebre de la oligarquía y para la instauración del nuevo orden social. En este contexto, la reforma de la educación fue parte de un plan mayor y —a diferencia de los proyectos modernizadores previos— esta no estuvo centrada en el modelo criollo y en el rechazo a la cultura andina. Por el contrario, uno de los elementos centrales fue la reivindicación del quechua y su reconocimiento como lengua oficial. Adicionalmente, vale la pena recordar el reconocimiento y encumbramiento de Túpac Amaru y Micaela Bastidas como héroes y símbolos nacionales. Es la primera vez que desde el Estado se da un reconocimiento de tal magnitud a luchadores vinculados con la sierra, el mundo andino, afirmándose la lucha contra el orden colonial. Se trataba de formar al hombre nuevo, aquel que iba a ser capaz de llevar adelante el cambio que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, desde un enfoque nacionalista, había iniciado.

Hasta el día de hoy, muchos padres y madres de familia de zonas rurales, socializados en la escuela de esos tiempos, mencionan a Túpac Amaru y Micaela Bastidas como modelos a seguir. La figura de Micaela Bastidas ha dejado una impronta en las mujeres campesinas, quienes encontraron por fin una mujer con la cual identificarse positivamente reconociéndose en el poder de su identidad campesina.

Derrocado el gobierno militar, se inicia un desmantelamiento del conjunto de reformas, incluida la educativa. Los gobiernos sucesivos no se ocuparon especialmente de la educación y el abandono en el que dejaron a la escuela pública permite explicar la crisis profunda que esta atraviesa hoy. La escasa calidad educativa que tanto se denuncia es pues resultado de un proceso de deterioro que se inicia en los años ochenta y que aún no ha logrado remontarse.

Las razones son diversas y son muchos los actores involucrados. En concreto, el *Informe* de la CVR⁶ identifica que «durante los años del conflicto armado interno, el sistema educativo se convirtió en un importante terreno de disputa ideológica y simbólica donde el estado perdió su hegemonía al no poder asentar la producción de “sentimientos de comunidad nacional” prevaleciendo pedagogías autoritarias y propuestas de cambio radical sólo alcanzables por la vía de la confrontación y la violencia [...]» (Sandoval, 2004, p. 6). En la conclusión 139, «la CVR responsabiliza al Estado por el descuido de la educación pública en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo como importante terreno de disputa ideológica y simbólica así como por el deterioro de la infraestructura,

⁶ El *Informe* de la CVR se refiere al periodo 1980-2000.

la estigmatización de los docentes y las violaciones de Derechos Humanos en universidades, institutos de formación docente y escuelas» (Sandoval, 2004, p. 7).

Nos encontramos así en un escenario en el cual Sendero Luminoso va copando universidades, institutos de formación docente y escuelas, al mismo tiempo que el Estado disminuye fuertemente su presencia en la escena rural, espacio central en el surgimiento y desarrollo de la violencia política. Otro elemento, importante en el proceso, es la presencia y el desarrollo —entre maestros y estudiantes escolares— de la idea crítica. Portocarrero encontró que:

[...] en el sistema educativo ha germinado un discurso radical que significa una transformación muy profunda en las mentalidades colectivas [...] La idea crítica sintetiza un discurso sobre la realidad nacional, un conjunto de percepciones sobre la situación peruana en la que el relato está marcado por las experiencias de fracaso. Es esta experiencia de fracasos reiterados la que constituye el trasfondo emocional de la idea crítica. (1989, p. 105)

Pero al lado de este trasfondo emocional, la idea crítica se ancla además en una sociología espontánea basada en el marxismo, en la cual dos ideas claves se afianzan en el imaginario popular. La primera se refiere a la motivación económica como eje del comportamiento humano. Desde esta mirada, la búsqueda de una mayor explotación y el incremento de la ganancia es lo que está detrás de las propuestas del Estado o de los grupos dominantes. Estos siempre tratarán de mentir y engañar con palabras y propuestas, pero en realidad solo piensan en su interés particular y no en el del país. La segunda idea es la que ve en la lucha de clases la salida a esta situación de injusticia (Portocarrero, 1989, pp. 106-108).

Frente a la radicalización ideológica de los docentes y la creciente presencia de Sendero Luminoso, el Estado no tiene una respuesta clara. Adicionalmente, y a pesar del incremento de la matrícula escolar y universitaria, que exige una atención especial visto el entorno señalado, el espacio educativo se queda sin dirección ni apoyo estatal. La clamorosa disminución de la inversión pública en educación es clara expresión de este proceso:

La matrícula universitaria pasó de 30 mil estudiantes en 1960, a más de 500 mil en el año 2000. Asimismo, la inversión estatal por alumno de universidades públicas pasó de aproximadamente 400 dólares en 1960 a menos de 100 dólares en el 2000. Al mismo tiempo, la remuneración total de los maestros se redujo a la tercera parte entre 1965 y 1999 y su poder adquisitivo a la sexta parte; mientras la inversión por alumno se redujo de 385 a 230 dólares entre 1970 y el 2000 (Sandoval, 2004, p. 10).

La suerte estaba echada. Este espacio fue aprovechado por las opciones violentistas que se insertaron en las escuelas rurales usándolas como medio para su trabajo de concientización, cooptación y sujeción. Al respecto, el *Informe* de la CVR señala en su conclusión 136:

En aquellos espacios que el estado fue dejando en su repliegue, germinaron unas propuestas, ellas propugnaban un cambio radical anti sistémico solo alcanzable por la vía de la confrontación y sustentado en un marxismo y manual dogmático y simplificado que se expandió ampliamente en las universidades durante la década del 70, y acá lo subrayado, esos nuevos contenidos se transmitieron utilizando los viejos marcos pedagógicos autoritarios que no fueron cuestionados (CVR, 2003 VIII, p. 339).

Finalmente, un elemento adicional que permite explicar por qué Sendero Luminoso encuentra en la escuela un terreno fértil es su carácter autoritario y la ausencia de un pensamiento crítico, pues, paradójicamente, la «idea crítica» que informa el discurso docente implica la asunción de esquemas de interpretación de la realidad social peruana marcados por el dogmatismo y la simplificación. Se encuentran así dos tradiciones que se complementan y potencian: la violencia y el discurso autoritario de Sendero Luminoso y los marcos pedagógicos autoritarios de la escuela.

Como resumen y para cerrar este acápite, encontramos que a lo largo del siglo XX hemos sido testigos de tres propuestas que vinculan educación y sociedad. La primera, que liga la educación con el proyecto modernizador y cuyo objetivo fue la integración de la población indígena en la sociedad bajo los marcos del modelo criollo occidental. Al renunciar a sus raíces se les ofrecía un reconocimiento como peruanos. No obstante, como señala Portocarrero (1992, p. 14), ese «olvido a cambio de una promesa» no se cumplió. Un segundo proyecto, que intenta distanciarse del modelo modernizador es el enarbolado por el gobierno de Velasco Alvarado. En este caso, la propuesta nacionalista implica a la educación como parte del cambio social promovido por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo era una transformación en las relaciones de poder. La salida de los grupos tradicionales vinculados a la oligarquía fue el resultado más importante. En este caso, la educación fue un campo privilegiado para la formación del hombre nuevo que llevaría adelante al país hacia un destino diferente, uno en el que los sectores populares aparecían como agentes centrales. No obstante, este esfuerzo fue desmantelado. Lo que acontece luego es el paulatino abandono del sector educativo por parte del Estado y el crecimiento de la influencia de Sendero Luminoso en la educación superior y en las escuelas rurales. La expansión de la «idea crítica» en el magisterio es parte

importante de este proceso de radicalización, en el cual la lucha de clases y el cambio estructural fueron los ejes del pensamiento social. Aquí, se abren caminos distintos, pues mientras un grupo de docentes apoya el proyecto violentista de Sendero Luminoso, otro grupo se distancia y es víctima de los atentados tanto de Sendero Luminoso como de representantes del Estado que los persiguen y estigmatizan (Sandoval, 2004). En este proceso, el Estado se desentiende de la escuela pública material y simbólicamente re-produciendo la crisis de siempre que hoy seguimos viviendo.

El neoliberalismo y las propuestas de reforma curricular inspiradas en el Banco Mundial toman la posta en 1993 abriendo una nueva etapa en el proceso. Los institutos de educación superior se multiplican sin asegurar la calidad de la educación docente y nuevos discursos, inspirados en las propuestas del Consenso de Washington, ingresan en el sector. No obstante, y a pesar de las cifras que muestra la universalización de la educación primaria, la situación de la educación en el Perú, lejos de mejorar, ha empeorado. Los últimos puestos que ocupa el Perú en las evaluaciones internacionales ponen sobre el tapete los problemas de calidad, pertinencia y sentido de la educación en el país.

2. LA ESCUELA HOY⁷:

LA INCLUSIÓN QUE EXCLUYE Y LA PROMESA QUE SE VA

Entre fines de los ochenta e inicios de los noventa, varios intelectuales publicaron estudios en los que se planteaba una reflexión general sobre la educación en el Perú. A pesar de las dificultades encontradas, los autores transmitían un cierto optimismo respecto a la posibilidad de una mayor participación de las poblaciones campesinas y andinas en los contenidos y proyectos educativos. Se avizoraba un posible cambio que incluía una revaloración de lo andino y una mayor apropiación crítica de los y las campesinas de la escuela. Así, Portocarrero (1992, p. 22) señala:

Entre ambas posiciones⁸ se encuentra una mayoría creciente de la población. Para ellos pasó ya el tiempo de aceptación indiscriminada de lo occidental y de rechazo automático de lo andino. La apuesta implícita es por una modernidad

⁷ Para la redacción de este acápite nos basamos en tres investigaciones realizadas desde 2003, debido a lo cual muchas de las ideas son parte de un trabajo colectivo. Véase al respecto Ruiz-Bravo, Muñoz y Rosales (2006); Ruiz-Bravo, Neira y Rosales (2006) y Ruiz-Bravo, Rosales y Corzo (2007). Estas investigaciones se realizaron en escuelas rurales de Canas (Cusco), Nauta (Iquitos), Sechura y La Unión (Piura), y Jesús y La Encañada (Cajamarca) entre el 2004 y el 2007.

⁸ Las otras dos opciones son, por un lado, la propuesta modernizadora etnocida que desconoce el valor de lo indígena y busca asimilarlos a la cultura criolla y, por otro lado, la indigenista romántica que plantea un retorno al pasado y una defensa de la tradición que se opone a la modernidad.

que no destruya lo tradicional, de la cual sean protagonistas los propios sectores populares. No obstante se trata de una posición que alberga perspectivas muy diferentes. Desde los que están a favor de retocar la propuesta etnocéntrica hasta aquéllos que están muy cerca del indigenismo fundamentalista. Es un punto de partida, un consenso genérico desde el cual se puede definir la identidad nacional. Los signos de reavivamiento cultural son múltiples y variados en el sistema educativo y fuera de él [...] El mismo surgimiento de la palabra «andino» es un hecho muy significativo.

Por su parte, Ansión (1989) encuentra que frente a la imagen de la escuela devoradora de niños, una nueva mirada —la escuela como instrumento de progreso— parecía sedimentarse. Los campesinos dejan de rechazar la escuela y ven en ella los conocimientos necesarios para «estar de otra manera» en el mundo. No obstante, bajo este enfoque, si bien se veía la educación como un trampolín para salir de la condición campesina, vinculada a la pobreza y vivida como sufrimiento, se podía albergar un rechazo o una desvalorización de la propia cultura. Según el autor, la situación era compleja y ambigua y habría que considerar que la salida no era individual, se trataba de un proyecto en el que las dimensiones individual y colectiva se hacían presentes. El que se educaba podía viajar, ir a la ciudad, ser profesional y apoyar a su comunidad a partir del propio ascenso individual. En palabras de Ansión (1989, p. 186):

[...] Frente a esta actitud de rechazo y de desconfianza radical, se ha desarrollado también desde la cultura andina un movimiento pujante que busca la apropiación de los conocimientos de la escuela para poder enfrentar el mundo moderno en nuevas condiciones [...] Con la modernización del campo y los mayores niveles de escolaridad y de contactos urbanos alcanzados por muchos dirigentes, empieza a surgir una actitud nueva que puede ser una buena base para una transformación de la escuela desde los intereses de las comunidades.

Degregori (1991, p. 7), en un artículo que se basa en el prólogo que le hizo al texto de Ansión, ve también la posibilidad de una educación distinta:

Una pregunta clave es si luego de un deterioro sostenido del sistema educativo de por lo menos 15 años, y en medio de la actual crisis que expulsa a los niños de la escuela y empobrece aún más la educación que reciben los que quedan, persiste el «mito» de la escuela o, en todo caso, qué lo reemplaza. Testimonios recogidos en Ayacucho en 1987 permiten advertir la capacidad de resistencia del «mito», aún luego de siete largos años de violencia. Así por ejemplo, un comunero de Acos Vinchos le dice a Celina Salcedo: «Educación es pues progreso, por ejemplo ustedes están en progreso, trabajan tienen su platita, aquí todo está atrasado, todos analfabetos, no podemos progresar». Permítasenos arriesgar como hipótesis que

la corrosión del sistema educativo no llevará a la resurrección del ñawpa machu y el repliegue a los tiempos de la escuela asusta niños, sino, entre otras varias estrategias, a redoblar la lucha por la escuela y la calidad educativa.

En los tres casos, los cambios posibles serían resultado de las transformaciones en el propio mundo campesino y andino (migraciones, procesos de urbanización, dinámicas de revitalización cultural, etcétera). No se trata de una política desde el Estado sino más bien de una propuesta en ciernes, una que responde a un mayor protagonismo de los migrantes en la escena nacional. A más de diez años de publicados estos artículos, ¿se ha producido el cambio que, tímida pero optimistamente, anunciaban los intelectuales citados? ¿Cuál es hoy la situación de la escuela rural y cuáles los beneficios que de ella obtienen los y las pobladoras del campo? ¿Qué podemos decir de las expectativas que los y las campesinas tienen frente a la escuela?

Lamentablemente, y a pesar de las reformas curriculares y la implementación de la educación intercultural bilingüe, los proyectos educativos impulsados desde el Estado no han logrado incluir a las poblaciones rurales y campesinas. Las acciones de reforma, que se iniciaron a mediados de los noventa, bajo las presiones de los organismos internacionales y a la luz de las necesidades de educación como base de la competitividad y la transformación productiva, no tuvieron mucha acogida en muchos sectores del Ministerio quienes, por el contrario, señalaban que estas eran el resultado de una imposición. Muñoz (2006) señala la poca articulación entre las distintas direcciones encargadas de las reformas poniendo de manifiesto la falta de una institucionalidad y legitimidad de la propuesta⁹. Tal vez sea este uno de los factores que nos permita entender, después de más de quince años de iniciadas las acciones de reforma, las razones del deterioro de la educación y la falta de legitimidad del Ministerio entre los docentes. Hemos encontrado que los y las docentes no se han apropiado del llamado nuevo enfoque pedagógico, en el cual el constructivismo, la diversificación curricular y la interculturalidad eran parte del paquete.

Lo más grave es que los y las docentes señalan que, a pesar de las varias capacitaciones que tuvieron, nunca han asistido a sesiones prácticas de aprendizaje «constructivista». Ven con desconfianza al Ministerio que modifica varias veces el currículo cuando aún no se ha terminado de implementar el anterior, obligándolos a aprender «nueva jerga que no nos ayuda en nada». En ese contexto, muchos de ellos abandonan el enfoque previo —basado en la enseñanza de contenidos— sin saber bien lo que supone el enfoque basado en el aprendizaje y en los logros.

⁹ Al respecto, cabe señalar que en un diagnóstico previo se había señalado que el cambio curricular (central en las acciones de reforma) no era el principal problema que se tenía que abordar.

Adicionalmente, el énfasis puesto en los procesos de gestión y descentralización educativa dejaron de lado el debate sobre los contenidos y los contextos en los que se aprende priorizando los problemas asociados a las nuevas estructuras organizativas.

Del lado de los padres y madres de familia, la posición frente a la escuela es ambigua y diversa. Ames (2002, p. 33) encontró que mientras que en la zona de Ayacucho se seguía apostando por la educación, en el Cusco las expectativas frente a la escuela eran modestas:

Aun cuando la escuela forma ya parte del paisaje cultural y social de las comunidades andinas, los límites de su promesa empiezan a ser más claros entre sus pobladores, que constatan los magros resultados de su tenaz apuesta. La educación escolar sigue siendo valorada y necesaria, pero el horizonte de expectativas posibles se reduce a un horizonte más modesto.

Por el contrario, en la Amazonía, las comunidades sí han elaborado proyectos educativos que buscan apropiarse de la escuela a partir de una reivindicación de su cultura. En este proceso de cambio ha jugado un papel central el Programa de Formación de Maestros Bilingües en la Amazonía Peruana (FORMABIAP), centro de formación docente promovido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP), cuyo trabajo crítico y permanente es crucial en el desarrollo de los cambios señalados¹⁰.

En los estudios que hemos llevado a cabo encontramos las tendencias planteadas por Ames. No obstante, la opción más presente en los padres y madres de familia entrevistados es la que establece una distancia frente a la escuela, reconoce los límites de la propuesta y se sitúa hoy de una manera más pragmática frente a lo que puede esperarse de la educación en el campo. A todos ellos les parece importante aprender a leer y a escribir, pero no están dispuestos a sacrificar mucho tiempo ni recursos económicos en la educación secundaria si es posible encontrar otros caminos para el progreso. En algunos casos, esta ruta se da por fuera de la escuela y se vincula más al desarrollo de los negocios, el comercio y la pequeña empresa. Esta opción no niega la existencia de otros grupos, quienes mantienen la apuesta por la escuela como camino al progreso.

Estas actitudes de distancia pero también de reconocimiento de la utilidad de la escuela son resultado de un proceso concreto en el que la escuela rural está atravesada por una serie de contradicciones que minan su legitimidad en el entorno rural. Pasaremos a detallar estos dilemas, pues es en ellos donde es posible encontrar no solo los problemas sino también las alternativas.

¹⁰ Al respecto, véase Trapnell y Neira (2004).

3. LAS PARADOJAS DE LA ESCUELA

3.1 De la construcción social del conocimiento

a la construcción social de la carencia

El nuevo enfoque pedagógico asumido por el Ministerio de Educación, a partir de mediados de los noventa, es el constructivismo. Se trata de fomentar que el y la estudiante sean personas activas y capaces de ir construyendo su conocimiento a partir de trabajos de exploración e investigación. A diferencia del enfoque anterior en que el docente transmitía contenidos que los estudiantes memorizaban y aprendían de manera pasiva, en este deja la cátedra y se convierte en un facilitador de los aprendizajes alentando el espíritu crítico, la elaboración siempre provisoria de conocimientos, el debate, y la sistematización e inclusión de los distintos tipos de saber y conocer.

Esta propuesta, que se encuentra en los documentos oficiales del sector, si bien es discursivamente apropiada por los docentes, no es llevada a la práctica en el aula. Por el contrario, lo que se ha encontrado como norma es la «construcción social de la carencia». A contrapelo de lo que dicen los documentos oficiales, los docentes (pero no solo ellos) elaboran un discurso sobre niños y niñas y también sobre padres y madres de familia que enfatiza lo que les falta, lo que no tienen, lo que no pueden. Esta imagen contrasta con la del sujeto activo que es capaz de producir su aprendizaje. El otro carente requiere ser «llenado» con los saberes que el profesor trae y la escuela difunde.

La construcción social de la carencia opera como matriz discursiva en las comunidades rurales visitadas. Es un principio de inteligibilidad del otro en el sistema educativo: el otro rural, beneficiario de la educación que provee el Estado. Este otro se caracterizará por su incapacidad para lograr los objetivos que el sistema educativo —entendido como lo real, como aquello que está fuera del discurso— propone, o en el peor de los casos, por sus atentados contra los logros del sistema educativo. Así, no solo es un incapaz sino que sus costumbres «manchan» a los niños y niñas que el sistema educativo está en proceso de limpiar o blanquear. En palabras de Virginia Zavala, «se sitúa el problema de la escolarización en la cultura campesina y no en el estado educador, y entrapa a los campesinos en un discurso letrado que los posiciona dentro de una situación de desventaja permanente» (Zavala, 2004, p. 241 citado por Ruiz-Bravo, Neira & Rosales, 2006, p. 100).

No obstante el deseo por acceder al sistema educativo, las poblaciones rurales tendrían que superar sus incompetencias estructurales para tener éxito en él. Los bajos niveles de logro educativo de estas poblaciones son explicados por docentes y directores, en primer lugar, a partir de la desnutrición crónica de niños y niñas:

[...] porque acá en Toccoocori, lo que yo veo es muy retrasada es la enseñanza o sea no captan rápido son medio lentos, no captan, o sea tratan de captar en largo plazo. Eso hemos constatado hace años que tienen desnutrición crónica los alumnos. Y a pesar que producen bastantes productos de la zona esos son para vender no es para consumir, unos cuantos consumirán. Pero allá en Chumbivilcas son bien alimentados porque comen carne, queso, huevo, todo tienen y la enseñanza es más [...], o sea, la captación es más rápida que acá. Y a pesar de que tengo pocos alumnos no captan. (Profesora de Toccoocori)

Los docentes responsabilizan a padres y madres de familia por los escasos logros obtenidos, pues ellos no se preocupan por la educación, los hacen trabajar y no les dan suficiente apoyo ni cariño. Además, no los alimentan bien, lo que provoca desnutrición y bajo rendimiento. Se establece así un estereotipo que impide una reflexión del docente con respecto a los procesos educativos que él lleva adelante. Lejos de analizar las dificultades que pueden existir para que niños y niñas construyan un conocimiento nuevo —que se vincule con los otros saberes que ellos tienen—, se opta por descalificarlos sin cuestionar su rol ni sus capacidades como docente facilitador de aprendizajes.

3.2 La escuela contra la comunidad o «en zonas rurales no se puede»

La relación entre escuela y comunidad no es cercana. En la mayoría de las comunidades rurales visitadas existe una distancia muy marcada entre lo que se enseña en la escuela y lo que las comunidades perciben como útil.

«La escuela no enseña para la vida» es una frase común entre los padres y madres entrevistados.

La escuela está de espaldas a los problemas, expectativas y necesidades de las sociedades rurales y no se observa mucha preocupación por lo que sucede fuera del entorno escolar. De hecho, la obsesión de directores y docentes por construir un «cerco perimétrico» que delimite el espacio que pertenece a la escuela y lo distinga de la comunidad que lo rodea puede analizarse simbólicamente como la proyección de un sentimiento de distancia, así como la necesidad de una marca visible que separe el espacio letrado de «lo otro», aquello asociado con la pobreza, la ignorancia, lo sucio, lo que puede contaminar.

La inclusión de los llamados «saberes previos» es parte del currículo nacional y se basa en el reconocimiento de la diversidad en la construcción del conocimiento. Se espera que los docentes diversifiquen el currículo escolar incluyendo la realidad socioeconómica y los conocimientos (técnicos, culturales, políticos, económicos, etcétera) que la población local tiene. No obstante, la actitud de los docentes frente a la inclusión de estos saberes no es muy positiva. En la mayoría de los casos,

no solo no los incluyen sino que los desconocen. Hemos encontrado tres actitudes típicas frente a los saberes previos por parte de los docentes: tolerancia, negación y reconocimiento, siendo el reconocimiento el menos extendido entre los docentes entrevistados. De parte de los docentes, persiste la idea de que fuera de la escuela no hay conocimientos o que estos no son valiosos ni relevantes para la escuela.

Otro elemento que incide en esta distancia entre escuela y comunidad es el pesimismo de los docentes respecto a las posibilidades de la educación en zonas rurales. Los argumentos a los que se apela para justificar que «en zonas rurales no se puede» son variados y, entre otros, están los siguientes:

- Los niños y niñas rurales tienen menos capacidades: «el niño de campo es más respetuoso, es más sumiso, es más pasivo, en cambio un niño de ciudad es [...] más rápido en todo, en su pensamiento, en sus juegos, en todo es más rápido. En cambio, el de campo es más lento» Docente mujer (44 años). Las expectativas frente al aprendizaje de niños y niñas son mínimas y ello incide en la calidad de la educación y en la autoexigencia de capacitación por parte de los docentes. En algunos casos, los profesores hacen las sesiones más fáciles en el entendido de que si enseñan lo que el grado les exige, nadie los va a entender. De esta manera, él mismo se encarga de bajar el nivel, pues los estudiantes «no pueden». Frente a esta situación, es difícil no pensar en la idea de «la profecía autocumplida».
- La escasa infraestructura, en el aula y en el hogar: «[...] los estudiantes no tienen material porque están subvencionados a la campaña que hacen sus padres; el docente está subvencionado al material que traiga el alumnado porque sin material no se puede hacer [...] la famosa educación en constructivismo y eso, digamos, no se da al cien por [...] ni al 30 por ciento, se da en una zona rural debido al material que no tienen los niños. Y tú sabes que para tener [...] para hacer este tipo de método del constructivismo tenemos que tener material, fotocopia, papelógrafo, todo ese tipo. No tenemos, no brindan» Docente varón (37 años).
- La falta de apoyo o la mala influencia de los padres y madres de familia. «Aquí los padres son poco puntuales en cuanto a reuniones y el niño se da cuenta. A veces los padres tienen un vocabulario no tan sofisticado y los chicos aprenden, y aquí se les dice que no, que está mal. Son conductas nomás, son conductas de valores. Eso es lo que más influye negativamente en la escuela, lo que está afuera» Docente varón (31 años). De acuerdo con los docentes, a los padres y madres de familia no les interesa la educación de sus hijos y por ello no son exigentes con ellos pues solo les interesa «salgan sabiendo leer, escribir, sumar, restar, lo básico» Docente varón (37 años).

Existe una imagen negativa de los padres y madres de familia. Ellos «compiten o dificultan» el trabajo de la escuela, sea porque no tienen tiempo (y por lo tanto no apoyan a sus hijos e hijas en la casa), porque son iletrados, porque son portadores de malas costumbres o porque no valoran la educación de sus hijos e hijas. En el caso de esta última razón, la variable de género es importante. Para muchos docentes, padres y madres de familia valoran menos la educación de sus hijas mujeres y son los responsables de la deserción escolar. Para concluir con este acápite, señalemos que, en general, los padres de familia son vistos de manera funcional a la escuela, valorándose sobre todo su apoyo como mano de obra para diversas tareas de la institución educativa. Del lado de los padres y madres, se percibe también una distancia y una cierta resignación, pues si bien señalan que la educación que sus hijos reciben no es buena, no ven posibilidades de que esto cambie.

3.3 La formación de ciudadanos y el militarismo

Una de las contradicciones que llaman más la atención en la escuela es la enseñanza de valores cívicos a partir de prácticas y discursos con una clara impronta militar. Desde la formación escolar diaria en la que se aprende a ser peruano cantando el himno nacional e izando la bandera bajo un modelo que emula las formas de las instituciones militares hasta la celebración de nuestra fiesta nacional de la independencia con marchas y desfiles en los que se privilegia la presentación de escoltas, brigadieres y batallones —copia fiel de los desfiles militares—, lo que encontramos es la superposición entre elementos que aluden a nuestra condición de personas libres y ciudadanas (la bandera, la independencia) con otros que más bien simbolizan la jerarquía y la sujeción (el orden militar).

Si bien es cierto que en los últimos años algunas instituciones e intelectuales han criticado la impronta militar en las celebraciones de las fiestas patrias, su presencia en la escuela es aún preponderante. El amor a la patria se equipara a su «defensa» y en este deslizamiento se produce un distanciamiento, pues es obvio que para los pequeños que cursan la primaria esta es una abstracción que no comprenden y a la que no encuentran sentido. Es así que en la escuela nos encontramos con un ritualismo patriótico que, lejos de formar ciudadanos, se convierte en una escena que se repite sin ningún sentimiento o compromiso, pues los estudiantes no entienden lo que sucede, es parte de una rutina que les resulta ajena y no los interpela ni los forma como ciudadanos. Muy diferente es el ánimo que tenían los jóvenes que «lavaban la bandera» como forma de protesta por la corrupción del gobierno de Fujimori. Este movimiento cívico usó el símbolo de la bandera pero con un significado propio, tenía un sentido.

Esta situación que se repite en la mayoría de escuelas rurales representa una ocasión y un espacio perdido en la formación de una conciencia ciudadana y patriótica. Carvalho, reflexionando sobre el tema distingue entre el patriotismo y el amor a la patria señalando que en la educación es muy importante que los y las niñas aprendan a querer a su patria, pues supone sentimientos de afecto y pertenencia: «un sentimiento enraizador que se ha instalado en la carne y que nos lleva a amar al país en que se vive» (2006). Por tanto, la manera en que este sentimiento se puede generar y potenciar implica una relativización del militarismo, pues supone un enraizamiento que se sustenta en el amor a la tierra que nos alimenta, ampara y nos da afecto y no en las armas que amenazan y amedrentan. Citando a Rilke, Carvalho dice que «la única patria del hombre es su infancia. Esos primeros olores, las emociones tempranas ligadas a unos lugares gratos y al cuidado tierno de los seres que nos rodearon, que nos ampararon. La patria es un vínculo con la tierra entendida en sentido amplio como naturaleza y sociedad, como paisaje y como vecindad» (2006).

Si son el afecto y la comunicación los sentimientos a través de los cuales uno aprende el amor a la patria, en el sentido que venimos de explicar, es evidente que la asociación de la patria con las armas está en las antípodas de esta propuesta. Por el contrario:

El amor de los escolares por la patria tendría que manifestarse en su afán cumplidor, en su alegría y su motivación. Marchar con fusiles en el hombro bajo el ritmo de un redoble de guerra y con las trompetas que amenazan al enemigo no sólo no fomenta ni exhibe el amor a la patria sino que muchas veces lo desalienta y malogra. ¿Es el desfile, como quiere la educación peruana, un acto inclusivo? ¿Pueden marchar los discapacitados, los «chatos», los obesos? Hay una selección en las escuelas del mejor biotipo para ganar un ridículo oropel. Y luego están esos «brigadieres» abusando con su palo blanco del momentáneo poder. (Carvalho, 2006)

El punto es nuevamente la necesidad de un cambio en la manera en que la escuela opera. Ella sí puede contribuir en este terreno construyendo un espacio amigable, uno en el que sea posible el desarrollo de este vínculo. Y es allí donde la escuela tiene más problemas. La inclusión es formal y lo que cotidianamente se da es la reproducción de la desigualdad y la injusticia. Los y las estudiantes no solo no encuentran en la escuela rural un espacio amigable, sino que en muchos casos es hostil y amenazante. Es muy difícil pues que en este tipo de espacios se aprendan prácticas democráticas y se interiorice la noción de tener derechos, es decir, la conciencia ciudadana. Ello nos remite otra vez a la falta de un proyecto político que en los hechos, y no solo en la retórica, apueste por una educación en democracia que forme personas con conciencia ciudadana. Al respecto, Soares de Almeida es muy clara al señalar:

Hablar de ciudadanía remite a un proyecto político específico, realizado o proyectado utópicamente como guía para la construcción de un tipo determinado de sociedad. Implica a su vez la definición de un concepto, implícito o explícito, de hombre y de cultura. En este marco, la educación y la tarea docente adquieren también un contenido específico (Soares de Almeida, s.f., p. 6).

Es esta ausencia, más sustantiva, la que nos permite entender las fallas, la falta de coherencia y la vigencia de modelos que, lejos de fomentar espacios de debate, argumentación y toma de decisión razonada, reproducen un orden basado en la obediencia y la jerarquía.

3.4 La convivencia social y la lucha por la autoridad

Otra paradoja recurrente en la escuela es la oposición entre la aparente disposición de los docentes a ser un «facilitador de aprendizajes» y la recurrencia a amenazas y formas autoritarias de ejercicio del poder más cercanas a la imagen tradicional del docente. La violencia contra los niños y niñas no ha desaparecido y la presencia de instrumentos de castigo como palos y palmetas no es extraña. Nos encontramos entonces con aulas en las cuales, a la par que se habla de reglas de convivencia y la importancia de que los niños participen activamente en su aprendizaje, se desarrollan sesiones en las que la inmovilidad de los cuerpos, la obediencia y la ausencia de diálogo son moneda corriente.

Si uno analiza «las normas de convivencia», recuadro que se cuelga en las paredes de las aulas, lo que se encuentra es una lista de deberes de los niños y niñas para con la escuela y no de acuerdos para llevar adelante una convivencia democrática. Así, por ejemplo, se señala: venir bien uniformado, llegar temprano, saludar respetuosamente al profesor al ingresar al aula, limpiar los muebles que se utilizan, etcétera. No se encontró en ningún caso que estas normas hayan sido elaboradas en un debate en la clase ni que incluyan efectivamente acuerdos para la vida en común. Cada año se repiten —se copian— las mismas normas y se vuelven a colgar sin que ello implique ninguna reflexión y participación activa de los estudiantes.

Será tal vez por esta falta de acuerdo y debate que las aulas escolares son testigos de una serie de conductas discriminatorias que afectan la sociabilidad y que tienen un efecto negativo en la manera en que niños y niñas aprenden las reglas del juego social. Las personas tímidas, las que no hablan bien el castellano, las que no van bien vestidas y las que no entienden las sesiones van siendo dejadas de lado bajo el supuesto —ya explicado líneas arriba— de que «ellos no pueden». Adicionalmente, vale la pena señalar que, la ausencia de diálogo no se circunscribe a las normas de convivencia. En general, las sesiones de aprendizaje

están marcadas por el memorismo, la repetición y la «adivinanza de la respuesta correcta» —aquella que el profesor considera la única válida—. De este modo, los y las niñas se acostumbran a no preguntar ni cuestionar lo que el profesor les enseña, no desarrollan un espíritu crítico ni reflexivo y ello afecta su formación académica, pero también su identidad personal y social. No obstante, y a pesar de las dificultades, niños y niñas apelan a diversos mecanismos para transgredir esa autoridad. Desde la indisciplina hasta las ausencias o deserciones escolares, las prácticas dejan ver que la subordinación no es total y que existen resquicios que ellos y ellas buscan y aprovechan.

Analizando la situación, cabe preguntarse sobre las razones que están detrás de este impulso autoritario de los docentes. Es posible pensar —en el contexto actual de cambios— que este tipo de ejercicio de la autoridad esconde o pone de manifiesto situaciones diversas. La explicación más conocida es aquella que señala que los docentes están formados en una mentalidad tradicional en la que la distancia maestro/alumno debe ser clara y marcada. Esta distancia, marca de autoridad es también marca de respeto, deferencia y prestigio. Hay otras posibles explicaciones que planteamos a manera de hipótesis. Una primera nos remite a la falta de formación del docente que en ocasiones apela a su rol de autoridad para esconder su falta de preparación o su incapacidad para dar una respuesta o conducir un debate. Esta «evidencia de la incompetencia» se hace más patente en el contexto del llamado «nuevo enfoque pedagógico» que recoge el constructivismo como enfoque educativo. Muchos docentes entrevistados y a quienes hemos acompañado en sus sesiones de clase señalan las dificultades que tienen con la implementación de este nuevo enfoque reclamando que siempre se han capacitado en la teoría, pero que nunca han observado sesiones de aprendizaje basadas en el constructivismo¹¹.

Vale la pena preguntarse si las dificultades de los docentes por mantener un orden sin apelar a formas autoritarias no tiene que ver —de manera más general— con las dificultades que existen en nuestra sociedad para respetar las reglas de juego. La transgresión de las normas es creciente y al parecer esta actitud ya se encuentra en la escuela. Según testimonios de regidoras rurales, el municipio escolar —espacio pensado como un aprendizaje de la ciudadanía— es por el contrario un espacio de aprendizaje del fraude y de la corrupción. Algunos padres de familia que quieren que sus hijos o hijas sean elegidos ofrecen golosinas y regalos a los y las estudiantes a cambio de sus votos. Ello sucede sin que los

¹¹ En los hechos es difícil para los docentes dejar su rol de transmisor de conocimientos y promover que los estudiantes generen nuevos conocimientos a partir de la exploración, la investigación y el debate, pues ello supone un cambio en la manera en que ellos han aprendido. Una sesión de este tipo implica que el profesor prepare material motivador, identifique lugares de búsqueda y prepare a los alumnos en herramientas de investigación.

docentes o directores tomen cartas en el asunto y sancionen a los responsables. Por el contrario, en ocasiones son ellos los que avalan estos comportamientos señalando que es por el bien de la escuela, pues de esa manera tendrán mayor apoyo del padre de familia.

3.5 Un modelo que homogeneiza contra una propuesta que reconoce y valora la diversidad

Finalmente, nos interesa enfatizar la contradicción permanente entre un discurso aparentemente inclusivo y democrático y una práctica que al homogeneizar e invisibilizar las diferencias desconoce a estudiantes y padres de familia en su otredad. Se trata de uno de los problemas más graves pues, como hemos señalado, en otra ocasión (Ruiz Bravo, Neira & Rosales, 2008), la escuela parece reproducir un orden patronal, uno que perpetúa las distancias, las discordias, el orden social injusto. La homogeneización atraviesa diversos campos y permea toda la escuela. Las diferencias énicas, culturales y de género no son trabajadas ni en los contenidos y aprendizajes, ni en la convivencia cotidiana, reproduciéndose así en los hechos la discriminación y la falta de reconocimiento. Como señala De Sousa Santos (2006), se trata de la imposición de una monocultura que hegemoniza las diferencias haciendo pasar a las otras formas culturales como «restos», aquello que sale del orden social. Esta homogenización se aplica también al conocimiento y a las formas de aprendizaje, pues se impone un currículo en el que no es posible encontrar significados positivos a su experiencia cotidiana.

Si esto es así, ¿qué podemos esperar de los y las estudiantes que hoy están en primaria? Como se colige de lo expuesto, podemos concluir que la escuela no está formando ciudadanos ni personas con libertad y espíritu crítico. Varios son los posibles desenlaces. Uno es el recrudecimiento de opciones violentistas que recojan esta frustración y descontento, el otro es la resistencia pasiva, la desertión y la búsqueda de nuevos caminos, unos que no supongan la dominación y la subalternidad. Aquí se encuentran grupos de música y baile, micro y pequeños productores con microemprendimientos, talleres de producción con mujeres, etcétera. Finalmente, están quienes sufren el sistema, continúan años bajo una dinámica que no es conducente, van perdiendo la confianza en sí mismos, se van convirtiendo en personas sumisas, sin capacidad de decisión y en la búsqueda de un líder autoritario que les ofrezca una solución a sus problemas. Están también las opciones y por ello es importante —más allá de las críticas— pensar en propuestas que partiendo de una mirada política y ética puedan imaginar una escuela diferente, una que sea diversa, flexible y respetuosa de las diferencias.

4. OTRA ESCUELA ES POSIBLE

Queremos concluir este artículo reiterando nuestra apuesta por un cambio que implica una transformación no solo de la escuela, sino de la sociedad que la alberga. Ello es por supuesto una tarea política y ética de largo aliento, pero en la que podemos colaborar de distintas maneras y de acuerdo con nuestras posibilidades. De hecho, la presentación de algunas de las paradojas de la escuela tiene como objetivo tratar de comprender las contradicciones, las resistencias, los conflictos, pero también los caminos de cambio. Reflexionando sobre lo presentado, quisiéramos lanzar como hipótesis la existencia de un «pacto de mediocridad» que parece haberse instalado en la escuela y en la que contribuyen docentes, padres de familia y, por supuesto, los funcionarios del Ministerio de Educación. Todos saben que la educación es de mala calidad, pero no se hace nada para cambiarla. El Ministerio establece normas y cambios que los docentes, en la práctica, no asumen, pues no se sienten involucrados ni identificados con el sector. Ellos siguen con lo que saben y tratan de terminar sus sesiones a medio día para ir a su otro trabajo, pues lo que ganan no les alcanza. Los padres y madres quieren que sus hijos concluyan la primaria, adquieran habilidades básicas y desarrollen fuera de la escuela actividades y aprendizajes para la vida.

Ahora bien, ¿como hacer para cambiar la situación y romper con este pacto de mediocridad?

Un primer punto es que la educación se reintegre con la comunidad y para ello las aulas deben abrirse y el modelo de escuela repensarse en función del nuevo entorno internacional y local. Hay muchos aprendizajes que suceden fuera del espacio escolar que deben ser incorporados en la formación académica que la escuela acredita. La deserción escolar en secundaria rural puede ser entendida como resultado de una pérdida de legitimidad de la escuela como vía para el progreso y el reconocimiento social. Sin abandonar el interés por la escuela, pareciera instalarse una mirada menos expectante y más pragmática en las poblaciones rurales. Aprender lo básico para estar en el mundo urbano ensayando a la vez nuevos caminos para el progreso y el desarrollo. En este contexto, la escuela podría, en lugar de competir con el trabajo, integrar ambas esferas y atender las demandas de «enseñar para la vida». Siguiendo a Quijano (2001) y a De Sousa Santos (2006) nos preguntamos como hipótesis si esta decisión no es una forma de resistencia, una manera de hablar y de expresar descontento y malestar. Si bien no contamos con una información sistemática que confirme nuestra intuición, sí nos parece importante entender estos comportamientos desde otro punto de vista, uno que recupere la alteridad que no logramos comprender. Se trata, creo, de cuestionar las explicaciones que señalan la falta de interés, la incapacidad,

la despreocupación o la ausencia de expectativas de los y las jóvenes para comprender la deserción, intentando una mirada que nos permita descubrir aquello que nuestro enfoque deja fuera. Interesa pues analizar y descubrir las razones de esta decisión preguntándonos si esta no es una manera de expresar una protesta, un descontento, en resumen, una crítica a la escuela. Este sistema —como ha sido descrito— los constriñe, los desvaloriza y en ese sentido los priva de la libertad para «elegir la vida que tienen razones para valorar» (Sen, 2000). Regresando a la propuesta de Giroux (1997) y De Sousa Santos (2006) pensamos que desde una sociología de las ausencias (aquella que se pregunta por lo que todavía no existe pero que puede ser) podemos explorar los posibles aprendizajes académicos, sociales y emocionales que estos jóvenes pueden estar desarrollando fuera de la escuela bajo esquemas no formales pero no por ello menos importantes. Una experiencia interesante en este sentido es PRORURAL¹².

La incorporación del arte —en su sentido amplio y sustantivo— en la educación ha mostrado resultados importantes en términos de desarrollo de agencia y logros de aprendizaje. Neira y Burga han evaluado la experiencia de Warmayllu encontrando que la inclusión del nuevo currículo de educación por el arte ha producido impactos positivos en la autoestima, en la identidad cultural, en la integración con la comunidad y en el proceso de conocimiento que se genera en dinámicas en las cuales los y las estudiantes están motivados, asisten a la escuela y construyen sus aprendizajes logrando una mirada integral entre las artes y las otras materias curriculares¹³. La literatura, el teatro y el arte en general son medios muy potentes para el desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes, pues permiten, a través de los personajes y sus vivencias, que se produzca una apertura hacia lo nuevo, lo otro, lo desconocido. Ello permite pasar del extrañamiento al reconocimiento, base del respeto y la ciudadanía (Pereira & Modzelewski, 2006). Aquí es importante enfatizar que la formación en valores y el aprendizaje de la ciudadanía debe hacerse desde experiencias prácticas y cotidianas, y no a través de cursos y lecturas teóricas que no son interiorizadas.

La educación en ciudadanía, el amor a la patria y la formación de un espíritu crítico deben encararse desde propuestas que como señala Carvalho (2007) se sustentan en el desarrollo del afecto, la empatía y el reconocimiento. Asimismo y, como señala Cole, es muy importante que la educación histórica se desmarque de los grandes héroes y las hazañas universales para incluir las múltiples voces de los actores dando espacio a los vencidos y a todos aquellos que fueron marginados

¹² Véase el anexo 1.

¹³ Véase el anexo 2.

por la historia oficial. Es importante también que se incluyan las narrativas de los subalternos y que se dé espacio para discutir y analizar las experiencias traumáticas:

[...] las memorias (recuerdos) colectivos de sufrimiento se han convertido en una parte importante de la identidad de los grupos y los grupos políticos así como la presión popular y política crecientemente tratan de asegurarse que las narrativas históricas nacionales no excluyan los actos que han causado sufrimiento a los grupos no victoriosos y a las minorías étnicas, a las mujeres y a los sectores económicos menos favorecidos (Cole, 2007, p. 121).

En nuestro país, marcado por la violencia política, esta tarea es aún más urgente. Parece mentira que en zonas que fueron asoladas por la violencia, la escuela siga sin trabajar este tema en el aula, a pesar de que muchos de los y las estudiantes han sido afectados por el conflicto. Al negar el pasado se cierran las puertas a la elaboración, al duelo, a la reconciliación.

En la construcción de una sociedad diferente, la escuela debe incluir el manejo de las emociones y sentimientos como parte de su trabajo cotidiano. La socialización en el aula debe ser trabajada de manera sistemática haciendo que las relaciones personales pasen al centro de la escena. Ello permitirá conocer las diferencias y acercarse al otro con un ánimo más abierto. Dará lugar también a un diálogo con nuestras propias emociones y la manera de hacerlas conducentes y favorables a la convivencia y el aprendizaje común.

En una escuela de Cajamarca, la docente tenía un trato muy afectuoso y cercano con los niños y las niñas, y este buen ambiente en el aula favorecía mucho los aprendizajes. Existía una preocupación porque se sintieran bien y compartieran entre ellos un espacio de afecto y soporte emocional. Conversando con el director, encontramos que esa aula tenía, en promedio, una mayor asistencia que las otras y un mayor rendimiento académico. Los niños y niñas hicieron dibujos que, según un análisis que se hizo con la asesoría de una psicóloga, mostraban una buena disposición para el estudio, alegría y confianza. Al respecto, la cita de Constantino Carvallo es bastante elocuente:

El afecto como el odio es resultado de una reciprocidad. Las escuelas tienen que querer a sus alumnos. Está en manos de los maestros la salud emocional de los peruanos. Por eso las escuelas deben plantearse el ser amigables, espacios gratos, que se preocupan verdaderamente por el otro. Esto cambiaría mucho la suerte de los peruanos (2007, p. 7).

Finalmente, y tratando de responder a las preguntas planteadas al inicio, creo que una escuela distinta es posible, pero ello requiere un proyecto político y ético comprometido con el cambio.

Hay que salir del «pacto de mediocridad» para pasar a una escuela de calidad que promueva personas con un espíritu abierto, crítico y responsable. La escuela pública rural tiene que responder a las necesidades y retos de niños y niñas promoviendo espacios de diálogo que a partir de la reivindicación de lo local puedan establecer puentes con lo global y universal. Al impedirles el acceso a esta educación de calidad, los estamos privando de una serie de capacidades y potencialidades para su futuro. Es pues importante que esas escuelas se transformen en espacios de desarrollo humano.

Las experiencias innovadoras muestran que es posible una escuela diferente. No obstante, en la mayoría de los casos estas parten de iniciativas y de instituciones que están fuera del ámbito educativo oficial. Se trata de organizaciones no gubernamentales, grupos parroquiales, asociaciones de arte, movimientos de la sociedad civil concernidos por la educación en el país. Sus propuestas, llenas de ánimo, interés y compromiso significan un aire nuevo en las escuelas y comunidades. Rompen con la inercia y levantan las barreras de las comunidades educativas gracias a su empuje. Es así que logran consensos y legitimidad, lo que las hace factibles e innovadoras.

Con un Proyecto Educativo Nacional que fue aprobado y suscrito por el gobierno, ¿cómo es posible que no se haga nada y que, por el contrario, una congresista denuncie por terrorismo a un grupo de docentes que elaboraron un material educativo sobre los años del conflicto y el *Informe* de la CVR, a pesar de que fue el propio congreso el que aprobó la norma de incluir estos contenidos en el nuevo currículo? ¿Cómo puede entenderse, en medio de la crisis, que se venda el local del Ministerio de Educación a un precio irrisorio y se desarticulen todas las oficinas en distintas entidades en las que funcionarios y encargados son reubicados en espacios marginales? Esta es, sin duda, la imagen más triste, pero también la más nítida de la falta de voluntad política del segundo gobierno de Alan García por una educación para todos. Por el contrario, al dejar caer aún más la escuela pública, se amplían las brechas y se reproducen las discordias que provocaron el conflicto que nos costó la mayor pérdida de vidas en la historia republicana del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ames, Patricia (2002). *Para ser iguales, para ser distintos. Educación, escritura y poder en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Ames, Patricia (2005). Educación y sociedad en el Instituto de Estudios Peruanos: una reflexión constante, un problema pendiente. En Víctor Vich (Ed.), *El estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia* (pp. 239-263). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- Ansión, Juan (1989). *La escuela en la comunidad campesina. Proyecto Escuela, Ecología y Comunidad Campesina*. Lima: Ministerio de Agricultura – Ministerio de Educación – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – Cooperación Técnica del Gobierno Suizo.
- Callirgos, Juan Carlos (1995). *La discriminación en la socialización escolar*. Separata. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Carvalho, Constantino (2006, 30 de junio). «Adiós a las armas». *La República*.
- Carvalho, Constantino (2007, 26 de enero) «Informe Final de la CVR y currículum». *La República*.
- Castoriadis, Cornelius (1999). *Figuras de lo pensable*. Valencia: Frónesis Cátedra Universitat de Valencia.
- Cole, Elizabeth (2007). Justicia transicional y educación histórica. *The International Journal of Transitional Justice*, 1, 115-137.
- Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003). *Informe Final*. Lima: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
- Contreras, Carlos (1996). *Maestros, mistis y campesinos en el Perú rural del siglo XX*. Documento de Trabajo 80. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Degregori, Carlos Iván (1986). Del mito de Inkarrí al mito del progreso: poblaciones andinas, cultura e identidad nacional. *Socialismo y Participación*, 36, 49-56.
- Degregori, Carlos Iván (1991). Educación y mundo andino. En Madeleine Zúñiga y otros, *Educación bilingüe intercultural. Reflexiones y desafíos* (pp. 13-26). Lima: Fomciencias.
- Flores Galindo, Alberto (1989). *Reencontremos la dimensión utópica. Carta a los amigos*. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo.
- Giroux, Henry (1997). *Teoría y resistencia en educación*. México D. F.: Siglo XXI. Disponible en <www.cholonautas.org.pe>.
- Morillo Miranda, Emilio (s. f.). Reformas educativas en el Perú del siglo XX. *Revista Iberoamericana de Educación*, Recuperado de www.rieoei.org/deloslectores/233Morillo.PDF
- Mujica, Rosa María & José María García (2006). *Las niñas somos importantes. Experiencias de promoción de equidad de género en las escuelas rurales de Quispicanchis*. Lima: Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz.
- Muñoz, Fanni (2006). ¿De qué políticas educativas hablamos en el Perú? La incorporación del género en la educación. En Nelly Stromquist (Ed.), *La construcción del género en las políticas públicas. Perspectivas comparadas desde América Latina* (pp. 63-113). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Ortiz, Alejandro (1973). *De adaneva a Inkarrí*. Lima: Retablo de Papel – Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

- Palacios, María Amelia (1998). Paradojas de la educación democrática en el Perú. En Patricia Arregui y Santiago Cueto (Eds), *Educación ciudadana, democracia y participación* (pp. 125-130). Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- Pereira, Gustavo & Helena Modzelewski (2006). Ética, literatura y educación ciudadana para un mundo global. *Isegoría*, 34, 111-128.
- Portocarrero, Gonzalo & Patricia Oliart (1989). *El Perú desde la escuela*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
- Portocarrero, Gonzalo & Patricia Oliart (1992). Educación e identidad nacional: de la propuesta etnocida al nacionalismo andino. *Debates en Sociología*, 17, 9-29.
- Quijano, Aníbal (2001). Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. *Perú Contemporáneo*, 2, 7-19.
- Ruiz-Bravo, Patricia, José Luis Rosales & Ana Inés Corzo (2007). *Género e interculturalidad. Construyendo las bases para políticas públicas respetuosas de la diversidad. Informe de investigación*. Texto no publicado, Lima.
- Ruiz-Bravo, Patricia, Fanny Muñoz & José Luis Rosales (2006). Género, educación y equidad en el Perú. En Patricia Prevoste (Ed.), *Equidad de género y reformas educativas. Argentina, Chile, Colombia y Perú* (pp. 205-253). Santiago de Chile y Buenos Aires: Hexagrama Consultoras – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos – Universidad Central de Bogotá.
- Ruiz-Bravo, Patricia, Eloy Neira & José Luis Rosales (2006). Educación y cultura. La importancia de los saberes previos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En Martín Benavides (Ed.), *Los desafíos de la escolaridad en el Perú* (pp. 79-148). Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo,
- Ruiz-Bravo, Patricia, Eloy Neira & José Luis Rosales (2008). El orden patronal y su subversión. En Orlando Plaza (Coord.), *Clases sociales y estratificación en el Perú. Visiones y trayectorias* (pp. 259-282). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Salazar Bondy, Augusto (1999). La educación peruana en el mundo contemporáneo. En Emilio Barrantes (Comp.), *Ensayos sobre la educación peruana* (pp. 171-192). Lima: Universidad Ricardo Palma,.
- Sandoval, Pablo (2004). *Educación, ciudadanía y violencia en el Perú. Una lectura del Informe de la CVR*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Tarea.
- Sen, Amartya (2000). *El desarrollo como libertad*. Barcelona: Planeta.
- Sousa Santos, Boaventura de (2006). *Conocer desde el sur. Para una política emancipatoria*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Trapnell, Lucy & Eloy Neira (2004). *Situación de la educación intercultural bilingüe en el Perú*. Texto no publicado. Consultoría solicitada por el Banco Mundial y PROEIB-Andes, Lima.

DOS ROSTROS DEL MUNDO POPULAR: PAULINA Y VILMA

Gonzalo Portocarrero y Eva Bautista

1. PAULINA LUZA: ANHELO DE CIUDADANÍA Y BÚSQUEDA DE PROTECCIÓN ESTATAL

Paulina Luza tiene 47 años y es la presidenta de un sindicato de trabajadoras del hogar. Nace en Puno y vive la primera etapa de su infancia con su madre, que es quechuahablante y analfabeta. Paulina también fue quechuahablante, pero con el tiempo pierde esta lengua. Ahora «ya casi no se acuerda». Es la única mujer de seis hermanos.

Hasta los 6 años vive en casa de sus tíos, apoyándolos; también hace lo propio con su abuelo. En algún momento hacia los 7 años es entregada a una familia para atender las labores de la casa. Ella siente esta «entrega» como un «rpto». Pasa por varias familias, que la llevan a Arequipa, a Puno, y finalmente a Lima, donde termina con una familia en la residencial San Felipe, a los ocho años.

Trabaja de lunes a domingo atendiendo a una pareja de esposos y sus seis hijos. No recibe sueldo. Se le explica que ella es parte de la familia y por lo tanto no corresponde pagarle nada. Tanto el señor como la señora, y hasta los hijos, le pegan constantemente. Se le hace especialmente pesado lavar la ropa y hacer la cocina.

Ella quiere estudiar. Pero sus empleadores le dicen que aprenda viendo un programa educativo de televisión. Paulina cuenta que aprende «a través de la figura», pues no sabe ni leer ni escribir.

Hacia los trece, catorce años, tras mucho insistir, logra el permiso de sus patronos para estudiar en un colegio ubicado en la propia residencial San Felipe, en el turno de noche. A los pocos días de iniciadas las clases, una religiosa trata de identificar a las empleadas del hogar. Entonces pide a las estudiantes que lo sean que levanten la mano. Casi todas sus compañeras lo hacen pero Paulina permanece quieta. No obstante, la religiosa se acerca para conversar con ella. Paulina le dice que ella no se considera empleada doméstica sino «parte de la familia». Ello a pesar

de la situación de práctica esclavitud en la que vive. Paulina refiere que la religiosa le hizo «abrir los ojos» (fue como un choque). De allí en adelante, su proceso de concientización fue muy rápido. En muy poco tiempo se percató de que su situación era totalmente injusta: trabajaba todo el día, no tenía salidas, no recibía sueldo y era constantemente golpeada. «Era normal que me pegaran» —señala. Comenzó a protestar y sus empleadores la amenazaron con regresarla a Puno.

Recuerda cómo era su aspecto: vestía como el «Chavo del ocho». Le cortaban regularmente el cabello lo que sentía como una humillación. Ni siquiera podía decir algo sobre su aspecto personal. Ella no era dueña de nada. En aquel entonces veía por la televisión al presidente Velasco, a quien admiraba por haber incorporado a las empleadas domésticas a la seguridad social.

En este momento de su relato, Paulina comienza a sollozar y el público queda totalmente capturado por su narración.

Un día se le ocurre decir que tiene que realizar un trabajo para la escuela. Sus empleadores le recuerdan: «tú eres parte de la familia» y ella responde: «yo de todas maneras voy a salir». En esos momentos, tiene en mente las palabras de la hermana que le ha abierto los ojos y le ha asegurado que ella tiene la decisión de seguir en la casa o irse.

Opta por fugar del departamento de sus patrones. En una oportunidad, la puerta de servicio está abierta; entonces no lo piensa dos veces. Desde el décimo piso, baja velozmente las escaleras. En cada piso se detiene para presionar el botón de llamado al ascensor. Trata de dificultar la persecución que cree inminente. Tiene miedo, está aterrorizada, puesto que ella se siente pequeña y calcula que los seis hijos de los patrones la van a cazar. No obstante, logra ganar la calle y con todas las fuerzas de las que es capaz, se dirige al colegio, a buscar a la religiosa. Ese mismo día, es llevada a un albergue de menores. Sus patrones consiguen unos abogados quienes pretenden sacarla del albergue. Paulina cuenta que esos abogados se presentan de forma altanera. No quieren identificarse con algún documento. Simplemente reclaman que Paulina regrese de inmediato al departamento de sus patrones. Pero esa gestión fracasa.

En los días siguientes, Paulina regresa al colegio. Los miembros de la familia le gritan desde fuera, la hostilizan. A veces no puede asistir al colegio. A través de la religiosa, consigue un nuevo empleo. Esta vez, va a ayudar en la casa de una joven estudiante de sociología de la Universidad Católica. Allí el trato es totalmente distinto. Tiene sueldo y día de descanso. Comienza a ahorrar tenazmente y cuando consigue suficiente lo primero que hace es irse a Puno, a ver a su mamá. Entonces tiene 18 años.

Paulina no cuenta los siguientes pasos de su itinerario biográfico. No obstante, resulta que va convirtiéndose en una lideresa en el mundo de las trabajadoras

del hogar. Asiste a charlas y seminarios. Va capacitándose. Pronto llegan las invitaciones para ir a diversas partes del mundo. Viaja por Europa, Estados Unidos y América Latina. Recibe distintos premios y distinciones, como la Orden al Mérito de la Mujer, otorgada por el Ministerio de la Mujer.

No obstante, estos constantes viajes también tienen sus problemas. Paulina dice que estar más de un mes fuera del Perú le cuesta demasiado. Extraña la comida, el calor de la gente, porque «el Perú es el mejor país del mundo». Actualmente hay 700 000 empleadas del hogar en el Perú, son el contingente laboral más numeroso. Sin embargo, tienen muy pocos derechos y estos no son, la mayor parte de las veces, reconocidos. A Paulina le impactó mucho el gobierno de Juan Velasco pues concedió a las empleadas domésticas la posibilidad de afiliarse a los servicios de salud y a la previsión social. Según ella, algo se ha avanzado pero queda aún mucho por recorrer. Todo se conquista con lucha.

Paulina ocupa el cargo de secretaria general de un sindicato de trabajadoras del hogar. Reconoce las deudas que tiene su organización: «nosotras nos hemos nutrido de conferencias como esta». Pero, lo importante, «lo que nos apoya es las vivencias de las mujeres». En todo caso para conseguir los logros conquistados: «nadie nos asesora», «somos autónomas». El trabajo del sindicato implica un estar realmente comprometido: «debemos dedicar al menos una hora a cada trabajadora del hogar que acude donde nosotras, para conocer su caso y poder ayudarla».

Recuerda las movilizaciones de las trabajadoras del hogar frente al Ministerio de Trabajo. Su organización pudo reunir hasta 2000 personas. Pero no fueron atendidas en el Ministerio. Se instaló un cerco policial y se les dijo que su lugar era la cocina y que no tenían por qué protestar. Otro gran evento al que acudieron tuvo lugar en el auditorio del Campo de Marte en 2005.

Como logros menciona, a nivel nacional, la consecución, el 3 de junio de 2003, de la ley 27986 de trabajadoras del hogar y, a nivel internacional, la propuesta, efectuada en Bogotá en 1998, de que el 30 de marzo sea instituido como el día de las trabajadoras del hogar.

A Paulina no le cabe duda de que si las 700 000 empleadas del país dejaran de trabajar un día, digamos un lunes, se generaría un tremendo caos. Entonces, «ahí sí se preocuparía el gobierno, el Estado». Si bien el trabajo de las empleadas es crucial, no está reconocido. Uno de los aspectos más graves son los casos de agresión sexual. Paulina critica que en el Congreso de la República no sé de la importancia debida a esta situación. Se habla simplemente de relaciones sexuales y no de violaciones que son delitos punibles con la cárcel.

Paulina se considera una luchadora por los derechos de los pobres, alguien que se mueve por amor al prójimo. Le hubiera gustado ser religiosa o abogada, que son dos formas distintas de poder ayudar a los demás. No obstante, ella se considera

muy lejos del comunismo. El comunismo sí es amor puro por el prójimo. Ella no ha podido ir tan lejos.

Según Paulina, los países del tercer mundo son explotados despiadadamente por las grandes empresas. El saqueo es permanente. «Nos roban el aire». Hay que luchar contra estas empresas para que los países pobres puedan progresar. Un buen ejemplo de lucha es Venezuela, país que visita con cierta frecuencia. Ahí el presidente Chávez está creando una situación de mayor justicia, apoyando a los pobres. La expresión «nos roban el aire», usada para tipificar la acción de las grandes empresas sobre los países del tercer mundo, es reveladora. Remite a una concepción antagonista de las relaciones sociales. Se puede vivir semanas sin alimento y días sin agua. Pero sin aire solo unos pocos minutos. Además, el aire que falta es el que las empresas roban. Finalmente, o las empresas o nosotros. No pareciera haber posibilidades de coexistencia.

Por otro lado, Paulina señala que en el mundo se escenifica un «combate entre la gran empresa y la cocina». Ocurre que las grandes empresas pueden obtener enormes ganancias gracias a que las mujeres cocinan sin sueldo para sus familias. «Las mujeres somos la cocina del mundo». Esta vez la contradicción es entre las grandes empresas y las mujeres que cocinan. Las mujeres son la base de las grandes ganancias, pues abaratan los salarios que pagan las empresas gracias a su esfuerzo no recompensado. En estas condiciones lo que se debería hacer es que el Estado otorgue un sueldo a las mujeres. Así ya no dependerían de sus maridos y se fortalecería la economía del hogar. Respecto a las trabajadoras del hogar, el Estado debería proveerlas de una casa puesto que, por trabajar cama adentro, nunca llegan a tener una propiedad. También el Estado debería impulsar el perfeccionamiento de las empleadas a través de cursos de limpieza y cocina.

Paulina viste de manera sencilla. Su cabello es ensortijado y está teñido de color rojo vino. Tiene una gran fluidez en el uso de la palabra.

Es visible que le gusta hablar y que está acostumbrada a hacerlo. Su testimonio desborda largamente los veinte minutos que le han sido asignados.

Posteriormente, en la rueda de preguntas y respuestas, sus intervenciones son siempre prolongadas y no necesariamente responden a las preguntas que se le formulan. Tiende a reiterar lo ya dicho. En especial, se refiere favorablemente a la situación de Venezuela.

Análisis

Es muy probable que Paulina haya contado su historia muchísimas veces. En realidad, su testimonio también puede ser visto como una *performance*. No obstante, los asomos de llanto parecen sinceros y, en todo caso, resultan conmovedores.

Alguien podría sospechar de la espontaneidad de su narrativa. El relato está bastante elaborado y los gestos de tristeza serían ya una representación. Todo sería una manipulación. Pero de ninguna manera puede descartarse la espontaneidad de Paulina. Es muy posible que los traumas hayan sido tan intensos que, aunque cuente la misma historia, una y otra vez, emerja —poderosamente— un trasfondo de dolor; se estaría mostrando y compartiendo una herida en carne viva, sin cicatrizar. En cierto sentido, Paulina sigue viviendo en la casas de sus patronos, allá en la residencial San Felipe. Lo más probable es que nunca haya dejado de estar allí. Su pasado domina pues su presente. Su liberación es relativa. Sigue siendo prisionera, el mismo trasfondo anímico se repite encerrándola en una tristeza que por momentos abrumba. En realidad, su humanidad dolida nos convoca por mayor que sea la distancia que queramos interponer.

Pese a los sufrimientos, no se percibe odio en su enunciación. Lo que sí es constante es el sentimiento de ser víctima que se extiende desde su infancia temprana, cuando fue abandonada por su familia, hasta la actualidad, cuando considera que las grandes empresas «roban el aire» de los países pobres.

Su testimonio gira entre las desventuras de su infancia, su juventud temprana, y su empoderamiento actual. De alguna manera, ella ha logrado una capacidad retórica y un capital social que le permite ser una «figura» de importancia en el mundo del sindicalismo. No obstante, este empoderamiento no es vivido como un logro del cual ella se ufane. Menciona sus conquistas personales, como son sus numerosos viajes, pero lo hace de una manera aparentemente casual, sin que se trasluzca una sensación de triunfo u orgullo. Su impronta de persona agraviada continúa en esta parte del relato. Quizá es esta impostación la que permite que ella se sienta representante legítima de sus bases. En realidad, una actitud triunfalista sería poco congruente con su posición de líder de un sector social tan postergado.

En términos ideológicos, Paulina se inscribe dentro de lo que podría llamarse un paternalismo socialista donde el hecho clave es la reivindicación, frente al Estado, de todas las necesidades básicas de los grupos excluidos o postergados. De ahí su admiración por Chávez. También destacan las ideas de antagonismo y lucha que atraviesan su discurso. Los poderosos explotan a los pobres y el único remedio es la unidad y lucha. De otra manera, no se consigue nada.

Llama la atención que, en su testimonio, Paulina no se refiera a su formación y consolidación como líder. Esa parte más afirmativa de su vida queda pues silenciada. Quizá porque, como ya se dijo, su vigencia o legitimidad como líder radica en esa infancia de horror que ella logra narrar con tanta contundencia. ¿Hasta qué punto el ascetismo y la humildad que ella quiere transmitir son realmente auténticos? Si se plantean nuevamente la pregunta y la duda es por el gusto por la palabra que tiene Paulina. Es visible que le encanta hablar, hacerse oír.

Hasta prolonga en demasía sus intervenciones, produciendo este exceso una cierta fatiga en sus oyentes, especialmente porque tiende a reiterar demasiado. Digamos que Paulina es el caso de una persona que ha logrado éxitos significativos en su vida a través del apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), de instituciones vinculadas a la iglesia católica y a la cooperación internacional y del movimiento sindicalista internacional. No obstante, paradójicamente, una condición de este éxito es el no disfrutarlo, el mantener ese semblante de humildad dolida que la inscribe como miembro representativo de un colectivo tan maltratado como es el de las empleadas domésticas. También desconcierta un poco la falta de referencias a su vida familiar en el presente.

2. VILMA PARRA: BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO Y ÉXITO ECONÓMICO

Vilma Parra es una empresaria dueña de una cadena de zapaterías que justamente lleva su nombre. Nació en Jauja pero emigró a Lima a muy temprana edad. Ha logrado una fortuna considerable gracias a su empresa. Su apariencia evoca la figura de Gisela Valcárcel: su cabello está teñido de rubio y muy bien cuidado. Se viste de manera elegante. Tanto en su arreglo como en su discurso, hay una pretensión «fundante»: considerarse una persona atractiva, poderosa. Cuando va a una reunión, siempre está viendo los vestidos de las demás mujeres, tratando de identificar las prendas y joyas que le podrían quedar mejor, también descartando a las señoras que no tienen una apariencia «correcta». Está siempre pendiente de cómo la miran. Asegura que «las mujeres se visten para las mujeres» pues «los hombres, cuando las mujeres se cambian y se arreglan, ni cuenta se dan».

Parte del público susurra tras estas afirmaciones, demostrando cierto rechazo, antipatía o al menos, desconcierto. Si bien puede admirarse la sinceridad de Vilma, muchos no esperan que en una conferencia sobre la mujer popular ella muestre una actitud tan competitiva respecto a sus semejantes.

Vilma se expresa con énfasis y facilidad. Habla desde una posición de triunfo. No obstante, considera que en la vida la mitad depende de uno y la otra mitad de Dios.

Sin el apoyo de Dios nada es posible.

Vilma pertenece a una familia de vendedores ambulantes de verduras y legumbres que vivía en un asentamiento humano muy pobre. Su exposición es acompañada por la proyección de un video donde se observan las precarias viviendas de esteras del barrio donde vivía en su niñez. Sus padres trabajaban en el mercado de Jesús María y ella los ayudaba. Gracias a su experiencia conoce bien el negocio. Entonces logra aprender lo que sería la clave de su triunfo.

Vilma cuenta que en el mercado es muy frecuente que el comerciante tenga que engañar a su cliente. Al comerciante, por ejemplo, le han quedado limones sin vender que ya están pasados. Entonces, dentro de la bolsa de limones que vende a sus clientes, introduce varios que ya no están frescos. Estas son las reglas del «negocio criollo». Precios baratos por productos de baja calidad vendidos sin garantía. Lo mismo ocurre en todas partes.

Ella comenzó vendiendo diversos productos. No obstante, rápidamente se dio cuenta de que la venta de zapatos era lo más rentable. Un señor cojito le dejó los primeros seis pares de zapatos que Vilma vendió en su vida. Cuando regresó, Vilma le devolvió toda la plata obtenida de las ventas porque ahora quería vender ya no seis, sino doce pares. Poco a poco, fue vendiendo más y más zapatos. Vilma manifiesta que la fórmula de su éxito estuvo en romper con el «arreglo criollo». Entonces ella vende barato pero productos garantizados, se responsabiliza por la calidad de lo que vende. A partir de ese momento, el camino hacia el éxito no tardó en llegar: «todo fue bien rápido». Si el producto era defectuoso y el cliente lo devolvía, ella lo cambiaba.

Entre los ambulantes, esta no era una práctica habitual. Tampoco era costumbre que los pequeños artesanos se responsabilizaran por la calidad de la fabricación de sus productos. Lo único importante era la pinta y el precio barato. La fórmula a la que llega Vilma es un precio módico para un producto de calidad que tiene además garantía. Entonces, gana mucho menos por unidad pero se compensa porque las ventas son cada vez mayores. Así comienza a abrir una tienda tras otra. También logra redefinir su relación con los proveedores. Conforme tiene más capacidad de vender aumenta también su poder para exigir. Y lo que demanda es calidad y garantía. Cambia de proveedores hasta encontrar los más idóneos a su propuesta. Generalmente, se trata de pequeños productores, todos de Trujillo, pero que han seguido cursos especializados, promovidos por la cooperación española en las universidades San Marcos e Ingeniería. En todo caso, la combinación buena calidad-bajo precio-garantía es imbatible. Esta misma fórmula la aplica en otros negocios. Una panadería que establece con su tío, un salón de belleza que promueve con su podóloga.

La idea que guía su vida es: «quien quiere, puede». Hacer empresa no es difícil. Lo que se requiere es trabajo y visión. Señala que a ella le gusta fomentar las capacidades empresariales de su familia. Todos los parientes que han trabajado con ella tienen ahora sus propios negocios gracias a su ayuda. Hace ya algún tiempo que tiene éxito económico. Ello le ha permitido comprarse un carro de 100 000 dólares. Vilma dice identificarse con sus trabajadoras que son como sus hijas. Por ejemplo, si es que alguna cae enferma, la acompaña al Seguro Social.

El empresariado popular tiene una filosofía equivocada, dice Vilma. Busca vender barato productos de pésima calidad. Menosprecia a su público, no se da cuenta de que la gente está dispuesta a pagar un poco más si es que la calidad del producto así lo justifica. Vilma manifiesta tener ética y celo profesional: «Yo siempre tengo que conocer bien mi producto, tengo que saber bien qué es lo que vendo». «Se puede hacer empresa pero hay que ser transparente con nosotros mismos y con nuestros clientes». «Yo miro siempre bien a los ojos, pongo mucha atención a las personas cuando converso».

La infancia de Vilma estuvo marcada por el trabajo y la pobreza. Cuando era niña, su mayor sueño era comerse «un cuarto de pollo», todo para ella, y comérselo sola. Pero este deseo era algo lejano, pues en la familia siempre faltaba dinero. En general, los acontecimientos penosos son referidos de una manera que le permite a Vilma realzar la importancia de sus triunfos. No busca inspirar lástima por lo que pasó, sino admiración por lo que es. En su narrativa, la posibilidad del fracaso, las experiencias de sufrimiento aparecen como negadas, o en todo caso relativizadas. La imagen de persona voluntariosa, decidida, empoderada refuleza en su discurso.

Para Vilma la gente hace su destino. Si uno se esfuerza puede lograr lo que quiera. El Estado no sirve para mucho. En todo caso, los empresarios populares deberían formalizarse pues es la única manera de crecer. La transferencia de tecnología es, sin embargo, muy importante. La calidad de la fuerza de trabajo en el Perú es muy alta. Actualmente, muchos operarios especializados del rubro de calzados son absorbidos por el Brasil. Un trabajador experto tiene grandes posibilidades.

Mucho de su éxito se explica por su apuesta al trabajo independiente. En realidad, la escuela —dice Vilma— no sirve tanto como se dice, pues ahí lo que aprende la gente es a ser dependiente, a tener la expectativa de ser profesionales que serán contratados por empresas. En cambio, en la misma práctica de los negocios se aprende mucho más. Es la universidad de la vida. En palabras de Vilma: «En este país nos enseñan a ser dependientes [...] Lo que he tenido yo: perseverancia, estar un paso adelante».

Análisis

Vilma tiene el aspecto de un maniquí, quiere encarnar un modelo de elegancia, de desenvoltura. Es como si dejara entrever que el éxito le es consustancial, que no podría sino haber triunfado en la vida. Hace gala de una seguridad y una autoestima rotundas e inapelables. El sufrimiento no ha hecho más que lanzarla hacia delante. Se habrá caído muchas veces, pero se ha levantado muchas más. Hay pues

una pretensión de fuerza y seguridad en su enunciación. Ella ha sacado adelante a toda su familia. Son gente de negocios, exitosos. Con sus departamentos, carros y computadoras. Ella difunde la calidad y los precios económicos. Genera riqueza.

La voluntad de progreso significa negar la carencia al punto que la pobreza se vive como una limitación temporal, como una condición que habrá de ser rápidamente superada. En su relato, todo lo traumático y desempoderante de la vida queda invisibilizado. Vilma se construye una visión heroica de sí misma que se fundamenta justamente en la negación de la debilidad y en la afirmación dogmática de la voluntad. El famoso «tú sí puedes». Su hablar es enfático y potente, como si necesitara demostrar sus logros, como si quisiera recoger la cosecha de sus triunfos bajo la forma de una admiración del público que la escucha.

Vilma apenas habla de su vida familiar. Solo menciona que cuando se casó, su esposo no quería que ella trabajara y le puso un departamento. Pero con el gobierno de Alan García llegó la recesión y su marido quedó sin trabajo. Entonces ella retomó sus negocios. No hay atisbo de crítica hacia la actitud de su marido, Vilma no expresa en ningún momento un afán de liberación como mujer. Su éxito se debe a su empeño por salir de la pobreza, pero no parece encontrar obstáculos en el camino por el hecho de ser mujer. También menciona que su hija está finalizando estudios de administración y comercio exterior para continuar los negocios familiares, cuyo próximo desafío es la exportación.

En su narrativa, Vilma vende una imagen de sí que resulta bastante simple pero que pretende ser contundente. La historia de alguien que se ha hecho a sí mismo y que ahora disfruta mercedamente de sus logros. Una triunfadora. Una de esas personas que el Perú necesita.

3. APUNTES FINALES

En una «tertulia sociológica» sobre la pobreza, convocada por el Colegio de Sociólogos, se hizo manifiesto, entre los asistentes, un compromiso tan exacerbado con el progreso que la pobreza fue definida como un periodo provisional de la vida que podría ser rápidamente superado. Era evidente en el grupo una resistencia a discutir situaciones de pobreza con poca esperanza, como sería el caso de los campesinos en los poblados andinos, o de los adultos mayores en las ciudades. Antes que analítica, la tertulia fue testimonial. Los estudiantes de la Universidad Federico Villarreal contaban la historia de sus familias y en estas narrativas el elemento aglutinante era precisamente el deseo de progreso que se estaba ya realizando y que habría de continuar. Esta denegación de la realidad, de la pobreza «sin esperanza», es sintomática de la mentalidad de un grupo emergente que cifra en el esfuerzo y la voluntad las claves para producir el futuro. A diferencia de Vilma,

en este grupo el éxito se obtendría a través de la profesionalización. La mayoría de los estudiantes eran los primeros universitarios de sus familias.

Es claro que el mundo popular emergente niega todo lo que tiene que ver con debilidad y fracaso. La voluntad del progreso asemeja un estado casi maniaco de exaltación y esfuerzo permanentes. Pero esta negación implica también la invisibilización de personas como las que Paulina representa, esos pobres que por su escaso capital cultural o social tienen pocas perspectivas de progreso. La emergencia social en el mundo popular parece implicar pues una fractura muy profunda. Una suerte de fenómeno darwiniano. Los presuntos triunfadores consideran su éxito muy legítimo, sus comodidades muy bien ganadas, no parece haber mayor preocupación por los que se quedan atrás. En todo caso, en el respeto a sus trabajadores hay una actitud maternalista/paternalista donde se combina una proximidad afectiva con el desconocimiento de derechos o el pago de bajas remuneraciones.

¿Qué pensará Paulina de Vilma? Y, ¿qué pensará Vilma de Paulina? Lo que pueden tener en común Paulina y Vilma es la creencia en la acción. Es decir, en conductas deliberadas e inteligentes que suponen aprendizajes que llevan a romper inercias y círculos viciosos. Pero para Paulina, la acción fundamental es la lucha, es la presión por construir un Estado benefactor que compense las carencias e injusticias que son lo característico de la realidad peruana agobiada por la expropiación de las empresas. Para Vilma, la acción es la empresa económica, la reorganización permanente de la producción para hacerla más eficiente y rentable. Vilma aspira a encarnar una figura de triunfo que suscite admiración. Paulina se presenta como la víctima dispuesta a luchar por sus derechos inculcados. ¿Quién es más representativa del Perú de hoy? Quizá podría decirse que Paulina tiene una Vilma negada dentro de sí y que Vilma niega a la Paulina que lleva a su interior. Es decir, que hasta cierto punto, Vilma y Paulina son como los dos rostros de una misma subjetividad. Vilma mira hacia el futuro y trata de dejar atrás su pasado. El costo de su éxito es una cierta «artificialidad», patente en su arreglo personal y en su seguridad un poco arrolladora. Paulina está tan detenida en los recuerdos de su sufrida infancia que parece no percatarse de su poder y éxito actuales. No obstante, las diferencias son también evidentes. Paulina nace en una familia muy pobre, es abandonada, y es casi una esclava. Vilma tiene el apoyo de su familia de la que hereda su capacidad para hacer negocios. Nunca fue una «sirvienta».

DE LOS AUTORES

Orlando Plaza Jibaja – Coordinador

Magíster en Sociología (1973) por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Licenciado en Sociología (1978) y Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología (1971) por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Ex jefe del Departamento de Ciencias Sociales (1976-1979; 1985-1987) y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales (1996-1999; 1999-2002).

Principales áreas de investigación: teoría sociológica, desarrollo rural, diagnóstico y estrategias de acción micro-regional, comunidades campesinas, economía campesina.

Rolando Ames Cobián

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Trabaja temas vinculados con las perspectivas democráticas en Perú y países andinos, así como temas sobre violencia y derechos humanos. Ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. Actualmente es coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios.

Juan Ansion Mallet

Doctor en Sociología por la Université Catholique de Louvain (Bélgica). Es profesor principal de Antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha sido jefe del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador del pregrado y de la maestría en Antropología. Ha investigado temas relacionados con cultura andina, interculturalidad, educación, antropología política y dicta cursos relacionados con estos temas. Como integrante del grupo de Desarrollo Humano de la PUCP, participa también en el Diploma de posgrado del mismo nombre. Es actualmente coordinador académico de un proyecto de colaboración con los Programas Hatun Ñan de las universidades de Cusco y Ayacucho y es presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP).

Carlos Arámbulo Quiroz

Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Carlos Eduardo Aramburú López de Romaña

Antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (1974) y demógrafo por la London School of Economics (1976). Especializado en análisis demográfico coordinador del proyecto Almacén de Datos Censales BID-INEI, 2008), formulación y evaluación de políticas de población (presidente del CONAPO 1985-1986) y en diseño y evaluación de políticas sociales (consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), etcétera; es miembro del Comité Técnico de Evaluación de Programas Sociales del Comisión Interministerial de Asuntos Públicos-Ministerio de Economía y Finanzas (CIAS-MEF) 2009). Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, dicta cursos de Sociología rural (especialidad de Sociología), Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales (especialidad de Antropología) e Incidencia en políticas públicas (Facultad de Gestión).

Carmen Rosa Balbi Scarneo

Magíster en Sociología, licenciada en Sociología con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Eva Bautista

Doctora en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid (España).

Omar Coronel Cuadros

Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología (2007) por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales y docente en las facultades de Gestión y Alta Dirección, Arquitectura y Urbanismo, y Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios. Investiga en temas de sociología política como movimientos y conflictos sociales.

Francisco Durand Arp Nisen

Sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Ph.D. en la Universidad de California en Berkeley. Ha estudiado las relaciones entre el empresariado y el poder político, sobre lo cual ha escrito numerosos libros y artículos. Actualmente enseña en la Universidad de Texas en San Antonio.

Narda Henríquez Ayín

Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Paris, Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex Decana Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú (2004-2006). Profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex coordinadora de la especialidad de Sociología y del diploma de Estudios de Género. Profesora visitante: Universidad de Yale (octubre 2008), Universidad de Southern California (febrero 2006). Temas de investigación: protesta regional y movilizaciones de mujeres, políticas sociales y ciudadanía.

Aldo Panfichi Huamán

Profesor principal y jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y ha sido coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Escuela de posgrado de la misma universidad. Es doctor en Sociología por The New School for Social Research, Nueva York (Estados Unidos) y magíster en Sociología por la PUCP. Ha sido investigador visitante en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard (2001-2003) y profesor visitante en el Latin American Institute en la Universidad de Texas. Entre las publicaciones en las que ha participado o coordinado se encuentran: *Sociedad civil esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur* (2003); *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, con Evelina Dagnino y Alberto Olvera (2006); *Participación ciudadana* (2007); *Aula Magna: migraciones internacionales* (2007); *Ese gol existe. Una mirada al Perú a través del fútbol* (2008); *Innovación democrática en el Sur*, con Ciska Raventós (compiladora) (2009); *La Ciencia Política en el Perú de hoy* (2009), entre otras.

Diego Ponce de León Franco

Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como profesor de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios y como asistente de docencia en otros cursos de dicha facultad. Trabaja temas de cultura política y sociología de la música.

Gonzalo Portocarrero Maish

Doctor en Sociología (1985) por la Universidad de Essex, Reino Unido. Magíster en Sociología (1974) por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chile. Bachiller en Sociología (1972) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Catalina Romero Cevallos

Socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesora principal Ph.D. en Sociología en The New School for Social Research (Nueva York, Estados Unidos). Se especializa en temas de religión y política. Participa en los equipos de investigación del World Value Survey, del Comparative Study on Electoral Systems y de la red de investigación Calidad de Democracia en América Latina. Profesora visitante de la Universidad de Notre Dame y *fellow* del Kellogg Institute. Es miembro del comité editor de la *Revista de Ciencia Política* de la Universidad de Chile, y de la revista *Elecciones* de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Patricia Ruiz Bravo López

Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora académica de responsabilidad social de esta casa de estudios. Otruvo el doctorado en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo, Población y Medio ambiente por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) (2003). Sus áreas de especialización son: desarrollo rural, género y cultura.

Violeta Sara Lafosse Valderrama

Profesora emérita del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), distinción que le fue otorgada por el Consejo Universitario de esa casa de estudios. Licenciada y candidata a doctora por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Experta en temas de sociología de la familia, ha realizado importantes investigaciones en esa área. Ha publicado los libros *¿Formando maestros discriminadores?* (1994) y *Escuela mixta: alumnos y maestros la prefieren* (1989), además de diversos artículos especializados.

David Sulmont Haak

Magíster en Sociología, coordinador de la Maestría en Sociología y profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Especializado en temas de sociología política, opinión pública y métodos de investigación cuantitativos. En 2004 inició la organización del Instituto de Opinión Pública de la PUCP y fue su Director de Proyectos hasta 2009. Entre 2001 y 2003 fue coordinador del área de análisis de información de la Comisión de la Verdad y Reconciliación e integró el comité editorial de su informe final.

Denis Sulmont

Profesor emérito por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Estudió Sociología en La Sorbonne y en Nanterre de la Universidad de París. Realizó su tesis de doctorado en Chimbote, con Alain Touraine. Comenzó a enseñar en la PUCP desde 1969, relacionando su labor docente con la investigación y la proyección social. Impulsó estudios y programas de formación en el ámbito sindical y empresarial. Participó en la fundación y la dirección de la Asociación Laboral para el Desarrollo, y la revista *Cuadernos Laborales*. Entre sus principales publicaciones, se encuentra *La historia del movimiento obrero en el Perú*, y *La sociología del trabajo y de la empresa en el Perú*. Fue condecorado por el Gobierno del Perú con la Orden del Trabajo.

Marcel Valcárcel Carnero

Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Ciencias Sociales por esa misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Sociología rural y Sociología del desarrollo son los cursos y temas que más trabaja el autor.

Pablo Vega Centeno

Sociólogo. Obtuvo su doctorado en Arquitectura en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es profesor del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de especialización son el estudio de los procesos de producción de la ciudad y los procesos de apropiación de la población, como son el uso de los espacios públicos y de la movilidad espacial.

Se terminó de imprimir en
los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Psje. María Auxiliadora 156, Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
Teléfono: 332-3229 Fax: 424-1582
Se utilizaron caracteres
Adobe Garamond Pro en 11 puntos
para el cuerpo del texto
marzo 2012, Lima - Perú

Cambios sociales en el Perú 1968-2008 contiene los trabajos presentados en el II Seminario de Profesores de Sociología, realizado en reconocimiento a la trayectoria y aportes académicos del profesor Denis Sulmont.

Los textos reunidos en el presente volumen ofrecen, desde ópticas académicas plurales, importantes reflexiones sobre los cambios de orden económico, político y cultural ocurridos en el Perú desde el inicio de la etapa post oligárquica. Asimismo, ponen en evidencia el deseo de encontrar alternativas de desarrollo equitativo y de formar una comunidad política más inclusiva.

Esta segunda edición constituye una herramienta fundamental para comprender las transformaciones que se han producido en la sociedad peruana en los últimos cuarenta años.

